RV: Generación de Tutela en línea No 514643

Juzgado 14 Pequeñas Causas Competencia Multiple - Bogotá - Bogotá D.C.
<j14pqccmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mié 15/09/2021 10:00

Para: Nidia Yineth Arevalo Melo <narevalm@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juan Pablo Gomez Aguilar <jgomezag@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Diana Patricia Moreno Alvarez <dmorenoa@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivos adjuntos (357 KB)

SECUENCIA TUTELA 57745.pdf;

Logo CSJ RGB_01

JUZGADO 14 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE BOGOTÁ,
CARRERA 10 No. 14-30 EDIFICIO JARAMILLO MONTOYA PISO 9º TEL (031) 342 03 77
CORREO : j14pqccmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co
Whatsapp: +573106251007

Cordial saludo.

Atentamente,

CAMILO CORCHUELO RODRÍGUEZ
Secretario

Favor acusar de recibido el presente mensaje

De: Lina Marcela Puentes Cardenas <lpuentec@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: miércoles, 15 de septiembre de 2021 9:59
Para: Juzgado 14 Pequeñas Causas Competencia Multiple - Bogotá - Bogotá D.C. <j14pqccmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: victoriasandino.paz@gmail.com <victoriasandino.paz@gmail.com>
Asunto: RV: Generación de Tutela en línea No 514643

Cordial saludo, SECUENCIA TUTELA 57745

Con la presente dejamos constancia de la radicación, según consta en acta de reparto que debe venir adjunta.

Al **Sr(a). Juez(a):** De manera atenta nos permitimos remitir para su respectivo tramite el presente asunto, el cual se sometió a reparto aleatorio y le correspondió a su despacho de acuerdo con la Secuencia relacionada en el Acta de Reparto adjunta.

Al **Sr(a). tutelante / accionante / usuario(a)**: Informamos que su trámite ya está en conocimiento de un juez y en adelante cualquier asunto relacionado deberá ser tratado directamente con el Juzgado al que le correspondió su acción constitucional.

EL LINK DE ACCESO A LOS ARCHIVOS DE LA DEMANDA ESTÁN EN EL CUERPO DEL MENSAJE AL FINAL DE LA TRAZABILIDAD DE ESTE CORREO.

INFORMAMOS LOS CORREOS DISPUESTOS PARA:

Inquietudes y requerimientos	www.ramajudicial.gov.co
Soporte Técnico demandas	demandaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co
Soporte Técnico tutelas	soportetutelaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co
Impugnaciones, desacatos, apelaciones y competencias	impugnacionescshmoralesbta@cendoj.ramajudicial.gov.co

IMPORTANTE:
Tenga en cuenta que el correo del cual se está enviando esta notificación es solo informativo, por lo mismo cualquier inquietud o inconveniente en apertura de los archivos o contenido de los mismos debe gestionarlo con el área encargada para soporte en línea y/o el usuario directamente.
Para **asuntos diferentes** está habilitada la página de la rama judicial: www.ramajudicial.gov.co

Agradecemos de antemano su valiosa atención y diligencia,

Atentamente,

Centro de Servicios Administrativos Jurisdiccionales
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración de Justicia -DESAJ- Bogotá-Cundinamarca-Amazonas

LMPC

De: Recepcion Tutelas Habeas Corpus - Bogotá <apptutelasbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: miércoles, 15 de septiembre de 2021 7:10
Para: Lina Marcela Puentes Cardenas <lpuentec@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RV: Generación de Tutela en línea No 514643

De: Tutela En Linea 01 <tutelaenlinea1@deaj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: martes, 14 de septiembre de 2021 21:36
Para: Recepcion Tutelas Habeas Corpus - Bogotá <apptutelasbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; victoriasandino.paz@gmail.com <victoriasandino.paz@gmail.com>
Asunto: Generación de Tutela en línea No 514643

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Buen día,
Oficina Judicial / Oficina de Reparto

Se ha registrado la Tutela en Línea con número 514643

Departamento: BOGOTA.
Ciudad: BOGOTA, D.C.

Accionante: VICTORIA SANDINO SIMANCA HERRERA Identificado con documento: 26212730
Correo Electrónico Accionante : victoriasandino.paz@gmail.com
Teléfono del accionante : 3223959598

Accionado/s:
Persona Jurídico: PARTIDO FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMUN- Nit: 9011372867,
Correo Electrónico: gestiondocumentalfarc@gmail.com
Dirección:
Teléfono:

Medida Provisional: NO

Derechos:
DERECHO DE PETICIÓN, PARTICIPACIÓN POLÍTICA, DIGNIDAD HUMANA, DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, DERECHO A LA PAZ,

Descargue los archivos de este tramite de tutela aqui:

Archivo

Cordialmente,

Consejo Superior de la Judicatura - Rama Judicial Nota Importante:
Enviado desde una dirección de correo electrónico utilizado exclusivamente para notificación el cual no acepta respuestas.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

Bogotá D.C., 10 de agosto de 2021

Señores
CONSEJO NACIONAL DE LOS COMUNES -CNC-
PARTIDO COMUNES
E.S.D.

ASUNTO: SOLICITUD DE ESCISIÓN DEL PARTIDO DE LA TRANSICIÓN POLÍTICA DEL ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA. ART. 23 CN

LOS ABAJO FIRMANTES, mayores de edad, representantes públicos del partido político de la transición política de la Guerra a la Paz, en calidad de Senadores de la República, suscriptores del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, en proceso de reincorporación conforme lo dispone el subpunto 3.2., por medio de la presente y de la forma más respetuosa que nos es posible solicitamos lo siguiente:

PETICIÓN:

1- Convocar para el presente año a la Asamblea General Extraordinaria para que discuta y apruebe la escisión del partido político conforme al artículo 39 de los Estatutos del partido, conforme las reglas establecidas en el mismo estatuto, es decir, convocando a los fundadores del partido de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 21.

Lo anterior, lo sustentamos con base en las siguientes circunstancias fácticas y jurídicas:

PRIMERO. Asumimos desde La Habana como plenipotenciarios negociadores y firmantes del comúnmente llamado Acuerdo Final de Paz.

SEGUNDO. Nos encontramos en proceso de reincorporación política, económica y social de acuerdo al punto 3 y los subpuntos 3.2. y 3.2.1., como militantes elegidos en el congreso fundacional para ocupar las curules del Acuerdo en su primer periodo, ratificados por nuestra participación en el certamen electoral en el año 2018, como lo estableció el Acto Legislativo 03/2017.

TERCERO. Desde 2020 una Comisión Nacional de Ética no registrada ante las autoridades electorales inició múltiples procesos de investigación y sanción contra diversos militantes de dirección nacional, redundando en estigmatización interna y externa. Entre los casos que vinculaban incluso al exintegrante del Secretariado del Estado Mayor Central, Bertulfo Alvarez (Q.E.P.D) brilló la ausencia de garantías que ha obligado a varios a los procesados a acudir a autoridades judiciales y electorales. En febrero de 2021 para sorpresa nuestra se aperturó a los por parte de la Comisión Nacional Ética Disciplinaria del partido sendos procesos disciplinarios a los senadores Simanca y Zúñiga, presuntamente por hacer declaraciones públicas que perjudican a la colectividad. Únicamente por mostrar la divergencia respecto de las decisiones adoptadas por el partido de citar a asamblea desconociendo los estatutos y siendo que, lo refrendamos a través de acción de Revocación Directa interpuesta el 18 de enero de 2021 contra la decisión adoptada en el VII Pleno de la colectividad.

Además de que desatendiendo el estatuto se excluyó a un gran sector de copartidarios que corresponde a los fundadores del partido quienes asistían con derecho propio.
Paralelamente el representante legal del partido interpuso recursos ante la Procuraduria y la Comisión de Ética del Senado, contra los respectivos congresistas, por asuntos que él mismo denomina problemas internos.

CUARTO. El partido político en el congreso fundacional aprobó los estatutos, mediante artículo 4 numeral 3 garantizó el pluralismo conforme a lo estipulado en el artículo 1 de la Ley 1475 estatutaria de partidos y movimientos políticos, y con ello, el deber de garantizar la expresión de las tendencias existentes en su interior, en particular de la minorías, como nosotros que somos expresión de afrodescendientes, mujeres, excombatientes de base, militantes no excombatientes y territorios.

QUINTO. El derecho a la reincorporación y sus garantías políticas aplica para todos los firmantes del Acuerdo Final, 13.589 personas, y no solo para quienes son reconocidos como militantes por Consejo Político Nacional y la "oficialidad" del partido el partido que hoy solo cuenta con menos de la mitad de los reincorporados; conforme el censo establecido por la actual dirección en la última asamblea extraordinaria, que corresponde a no más de 6700 militantes. La voz de las y los firmantes en las diversas instancias del Acuerdo de Paz está hoy privatizada por la oficialidad del partido.

En tal virtud, se ha pronunciado la Corte Constitucional en los siguientes términos:

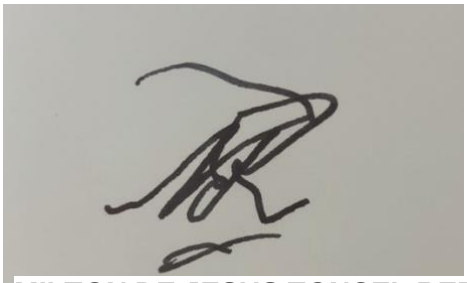
La finalidad principal del Acto Legislativo 03 de 2017 consistió en "ofrecer garantías de reincorporación a la vida política regular, no armada, ***de aquellos que habiendo dejado las armas*** *(…) quieren expresar sus ideas de manera libre y espontánea, así como pertenecer a agrupaciones o a un partido o movimiento político que represente su ideología y convicciones". Para lograr este cometido se sostuvo la necesidad de contar con "medios y mecanismo idóneos y expeditos, que permitan ampliar el espectro democrático a nuevas fuerzas políticas nacientes", para lo cual se expuso deben disponer de las "suficientes garantías para el ejercicio adecuado de la oposición, y de constituir como verdaderos partidos políticos, asimismo (…) realizar un fortalecimiento de las garantías de participación política"*

Siendo así, se puede concluir, dado el estado actual, donde las instancias partidarias no ofrecen garantías y son controladas por una sola tendencia política de las y los reincorporados y militantes, que para dar cumplimiento a los principios de organizción y funcionamiento consagrados en el artículo 1 de la Ley 1475 de 2011 la ruta adecuada en el marco democrático y de los fines del Acuerdo de Paz, sea la escisión del partido político, permitida por la misma norma en su artículo 14, contemplada también en nuestros estatutos y recientemente reconocida por el CNE en la Resolución 1291 de 2021.

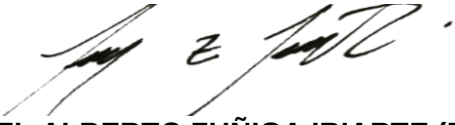
Consideramos adicionalmente dado que, el carácter especial de Derecho Internacional del Acuerdo Final de Paz, el reconocimiento de la escisión se constituye en necesaria garantía y salvaguarda de la vida y la seguridad personal de las y los firmantes, que venimos siendo víctimas de estigmatización y persecución política por nuestras opiniones críticas.

Visto lo anterior, consideramos que no contamos con garantías al interior del partido para que se lleve a cabo un proceso con respeto al debido proceso y al principio de legalidad, razón de más para pedir su intervención especial. En síntesis, hoy el partido surgido del proceso de paz está muy lejos del umbral democratico exigible a cualquier partido que actúe en la vida política nacional según el marco legal y constitucional. Excluir del proceso de reincorporación a las y los firmantes del Acuerdo de Paz, es también incumplir lo pactado en La Habana.

Del Honorable Consejo Nacional de los Comunes y fundadores del partido surgido del tránsito de las FARC-EP a la vida legal, con el mayor comedimiento y respeto;



MILTON DE JESUS TONCEL REDONDO (JOAQUIN GÓMEZ)
EX INTEGRANTE DEL SECRETARIADO DEL ESTADO MAYOR CENTRAL FARC-EP



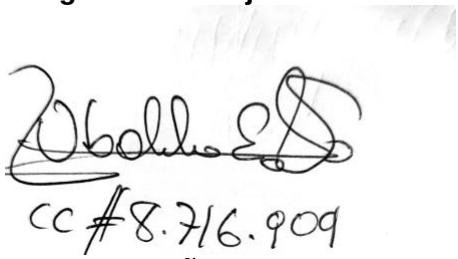
ISRAEL ALBERTO ZUÑIGA IRIARTE (BENKOS BIOHÓ)
SENADOR DE LA REPÚBLICA



VICTORIA SANDINO SIMANCA HERRERA
SENADORA DE LA REPÚBLICA



BENEDICTO DE JESÚS GONZÁLEZ MONTENEGRO (ALIRIO CORDOBA)
Integrante Consejo Nacional de los Comunes



UBALDO ZUÑIGA IRIARTE (PABLO ATRATO)
Presidente ECOMÚN
Integrante Consejo Nacional de los Comunes



WILFRAN MARTÍNEZ (ELIO DURAN)
CC 11514720003
Integrante Consejo Nacional de los Comunes



LIDA ROSA ORTIZ (AMANDA RÍOS)
CC 63517725 de Bucaramanga
Integrante Consejo Nacional de los Comunes



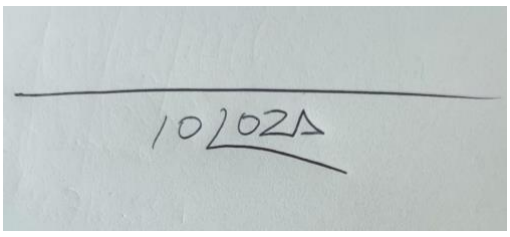
MARCOS MARTÍNEZ (SILFREDO MENDOZA)
CC 77039813
Integrante Consejo Nacional de los Comunes



JOSÉ MARBEL ZAMORA (CHUCHO NARIÑO)



MARINELLY HERNÁNDEZ OROZCO (RUBIELA)
CC 4315431
Integrante Consejo Nacional de los Comunes



FRANCISCO JAVIER TOLOZA
CC 88234955
Integrante Voces de Paz

Con copia:

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Excelentísimo CARLOS RUIZ MASSIEU. JEFE DE LA MISIÓN DE VERIFICACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS DE COLOMBIA.

PAÍSES GARANTES DEL ACUERDO DE PAZ Excelentísimos embajadores de la República de Cuba y el Reino de Noruega.

Excelentísimo Eamon Gilmore eviado especial de la Unión Europea para el Proceso de Paz
Francisco De Roux (s.j.) presidente de la Comisión de la Verdad

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS -OEA-

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL
Sala Plena
Auto 584 de 2021

Ref: Expedientes acumulados números:
T-7.987.084, T-7.987.142, T-8.009.306 y
T-8.143.584 AC

Accionantes: Nubia Amparo Ortega Arcos, Henry Paul Rosero López**,** Dora Marcela Pepinosa Calderón**,** José Alfonso Rodríguez Muñoz, Tomás Ignacio Erira Erira**,** Ricardo Palomino Ducuará, Francisco Gamboa Hurtado y Emiro del Carmen Ropero Suárez

Accionados[1]**:** Presidencia de la República, Ministerio del Interior, Unidad Nacional de Protección, Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Tribunal Administrativo de Cundinamarca

Magistrada Ponente:
CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Bogotá D. C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, procede a dictar el siguiente auto con base en los siguientes antecedentes y consideraciones.

[1] Es importante anotar que en el expediente con el número T-7.987.084 el Tribunal Superior de Distrito Judicial de San Juan de Pasto, mediante auto de fecha 1º de abril de 2020, a través del cual admitió la tutela de la referencia, resolvió vincular "en calidad de terceros con interés directo en las resultas del trámite" al Senado de la República, a la Cámara de Representantes, a las Presidencias de la Jurisdicción Especial para la Paz y de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y al Partido FARC. Cfr. expediente digital T-7.987.084, consecutivo número 7. Lo mismo aconteció en el expediente con el número T-7.987.142 en el que, por auto fechado el 3 de junio de 2020, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de San Juan de Pasto admitió la tutela y ordenó vincular a las mismas autoridades. Así aparece registrado en el expediente digital T-7.987.142 con número consecutivo 71 fl. 3 y ss. En el expediente T-8.009.306, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante auto proferido el 26 de mayo de 2020 admitió la tutela con el número de la referencia y ordenó notificar "por el medio más expedito y eficaz" … a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, quienes podrán contestar la presente tutela y allegar los documentos que pretendan hacer valer como pruebas, dentro de los tres (3) días siguientes al recibo del respectivo oficio". Adicionalmente, ordenó comunicar lo resuelto a los presidentes del Senado de la República, de la Cámara de Representantes, a las presidencias de la Jurisdicción Especial para la Paz, de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, a las entidades que componen el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición (SIVJRNR), al Defensor del Pueblo, al Contralor General de la República, al director del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común –hoy partido Comunes–, "para que dentro del término de tres (3) días contados a partir del recibo de la correspondiente comunicación manifestaran lo que consideraran pertinente". Cfr. expediente digital T-8.009.306, consecutivo número 34.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

Expediente T-7.987.084[2]

1.1. Las accionantes Nubia Amparo Ortega Arcos y Dora Pepinosa Calderón y los accionantes Henry Paul Rosero López, José Alfonso Rodríguez Muñoz, Tomás Ignacio Erira Erira, Ricardo Palomino Ducuará y Francisco Gamboa Hurtado coincidieron en sostener en sus escritos de tutela que suscribieron el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera y que en la actualidad se hallan en proceso de reincorporación.

1.2. Así mismo, indicaron que son miembros y líderes del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común –hoy partido Comunes– y que residían en la Nueva Área de Reincorporación (NAR) de Tallambí, municipio de Cumbal (Nariño), espacio colectivo en el que convivían con personas en proceso de reincorporación.

1.3. De igual forma, afirmaron que son integrantes de la Cooperativa Multiactiva Frontera Sur (COMFROSUR) de Tallambí, la cual surgió a raíz de los esfuerzos realizados conjuntamente por excombatientes.

1.4. También advirtieron que por intermedio de la mencionada Cooperativa pusieron en marcha proyectos productivos como la cría, reproducción y comercialización de ganado porcino, clases de costura para habitantes de la zona, el relleno de recebo de las vías que comunican al territorio aledaño con otras zonas, cultivo de caña y maíz, entre otras actividades.

1.5. Por otro lado, pusieron de presente que, desde hace más de dos años, se ha corroborado la existencia de riesgos colectivos para los excombatientes en proceso de reincorporación asentados en el territorio de Tallambí. La amenaza que se cierne sobre los excombatientes obedece a que en zonas aledañas a la vereda pudo constatarse la presencia del grupo armado autodenominado "Oliver Sinisterra" y del ELN. Esa circunstancia constituye una amenaza a la integridad personal y a la vida de los excombatientes asentados en la zona, pues para movilizarse hasta la capital del departamento de Nariño, se han visto obligados a transitar por tales territorios en los que se han registrado confrontaciones armadas.

1.6. A continuación, señalaron que a finales de 2017 el excombatiente Alberto López Palomino, "alias William Santamaría", presentó una petición escrita ante la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que les fuera concedido un

[2] Los escritos de tutela se encuentran visibles en el expediente digital T-7.987.084, consecutivos 5, Nubia Amparo Ortega Arcos, 18, Henry Paul Rosero, 19, Dora Marcela Pepinosa, 20 José Alfonso Rodríguez y 21, Tomás Ignacio Erira Erira.

esquema de seguridad. La respuesta a la solicitud fue allegada el dieciséis (16) de noviembre de dos mil dieciocho (2018) y en ella se informó que el estudio dio como resultado un riesgo "extraordinario". Por ese motivo, el día 30 de agosto de 2019 fueron aprobabas las medidas de seguridad colectivas para la Nueva Área de Reincorporación de Tallambí. Sin embargo, precisaron que, a la fecha de presentación de las tutelas, las aludidas medidas de seguridad todavía no habían sido implementadas, perpetuando y profundizando sus riesgos de seguridad.

1.7. Con fundamento en los motivos expuestos, acudieron al juez de tutela a efectos de solicitar la protección de sus derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, a la seguridad e integridad personal y a la paz y, como consecuencia de ello, pidieron que se ordenara de manera urgente a la Unidad Nacional de Protección hacer efectivas las medidas de protección solicitadas y aprobadas para la Nueva Área de Reincorporación de Tallambí en el municipio de Cumbal (Nariño).

Expediente T-7.987.142[3]

1.8. El señor Ricardo Palomino Ducuará puso de presente en su escrito de tutela que suscribió el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera y que, en la actualidad, se desempeña como presidente de la Junta de Acción Comunal del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR), ubicado en Tumaco (Nariño) en el que se encuentran alrededor de noventa (90) excombatientes de la Columna Móvil Daniel Aldana y del Frente 29 de las antiguas FARC-EP.

1.9. A lo anterior, agregó que el mencionado Espacio Territorial surgió gracias a los esfuerzos de los excombatientes, quienes se han unido al trabajo de realizar proyectos productivos como la cría, reproducción y comercialización de ganado porcino, cultivo de yuca, piña y plátano.

1.10. Además, manifestó que la situación de orden público ha afectado de manera considerable al puerto de Tumaco (Nariño) en el que se encuentran activos y se disputan el poder territorial diferentes grupos al margen de la ley, entre otros aspectos, para consolidar su dominio en relación con las rutas del narcotráfico.

1.11. Acto seguido sostuvo que, por causa de la circunstancia descrita, acudió a la Unidad Nacional de Protección (UNP), autoridad que por Resolución MT – 220 de 2018[4] dispuso la concesión de un esquema de seguridad colectivo, el cual consistió en:

> "un vehículo blindado nivel 3; 2) dos vehículos convencionales; 3) seis agentes escoltas; 4) un fusil; 5) un arma de apoyo".

[3] Visible en el expediente digital T-7.987.142, consecutivo 4.
[4] Del 5 de enero de 2018.

1.12. No obstante, advirtió que, desde la implementación del esquema de protección en el año 2018, la protección brindada por la UNP viene funcionando de manera irregular, toda vez que de los seis (6) agentes dispuestos para la protección en la aludida Resolución, solo se encuentran al servicio del esquema de seguridad cuatro (4). En criterio del accionante, ello resulta a toda luz insuficiente si se considera que en manos de estos agentes se encuentra de por medio la salvaguarda de noventa (90) excombatientes, más aún cuando la situación de orden público que aqueja al municipio de Tumaco (Nariño) es crítica lo que pone en riesgo la vida y seguridad de los desmovilizados.

1.13. De otra parte, informó que el 21 de abril de 2020 presentó mediante correo electrónico un oficio ante la UNP[5], con el fin de solicitar que se corrigiera la situación irregular en su esquema de protección. No obstante, el 7 de mayo de 2020, recibió una comunicación en la que se le expresó que la solicitud enviada por correo electrónico debía ser tramitada por la dependencia que la UNP tiene dispuesta para ese propósito.

1.14. En tal virtud, consideró que la UNP estaba desconociendo su deber legal y constitucional de brindar la protección al grupo desmovilizado de las FARC-EP que se encuentra asentado en el ETCR – La Variante – de Tumaco (Nariño). Por el motivo antes expuesto, solicitó que se conminara a la Unidad Nacional de Protección, con el fin de que asegure el funcionamiento completo del esquema de seguridad que fuera dispuesto mediante Resolución MT – 220 de 2018[6], es decir, que disponga de modo continuo e interrumpido el servicio de los seis (6) escoltas.

Expediente T-8.009.306[7]

1.15. El señor Francisco Gamboa Hurtado sostuvo en el escrito de tutela[8], que es líder del antiguo ETCR Aureliano Buendía, situado en Charras (Guaviare) e integra el Consejo Político Departamental del partido FARC en el mencionado departamento. Allí, precisó, ocupa el cargo de consejero de finanzas y consejero político del Local Oscar Larrahondo del mismo partido.

1.16. Adicional a lo anterior, manifestó que hace parte del Consejo Departamental de Paz, como representante de las organizaciones que surgieron de los de Acuerdos de Paz con el Estado colombiano. También, mencionó que

---

[5] atencionalusuario@unp.gov.co
[6] Del 5 de enero de 2018.
[7] Visible en el expediente digital T-8.009.306, consecutivo 12.
[8] Es importante advertir que el accionante ya había interpuesto una acción de tutela ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En este sentido, el pasado 19 de febrero, el actor presentó un escrito ante el despacho sustanciador en el que aclaró que el 13 marzo de 2020, interpuso una primera acción de tutela ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca solicitándole la protección de sus derechos fundamentales a la vida, seguridad e integridad personal. No obstante, refirió que en razón a la declaratoria de emergencia sanitaria originada a raíz de la Covid-19 y que luego se declaró como pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS), no hubo mayores actuaciones procesales. En tal virtud, decidió instaurar una segunda solicitud de amparo y agregó un nuevo supuesto fáctico en relación con la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, la cual le correspondió conocer al Consejo de Estado, Sección Quinta. Indicó que en la primera tutela se profirió fallo amparando sus garantías superiores el 18 de junio de 2020, y que ha tenido que promover dos incidentes de desacato para su cumplimiento efectivo.

es enlace de la Instancia Tripartita de Seguridad y Protección (ITPS) a nivel regional del Guaviare y Vichada y que forma parte de la Fundación DHOC, como defensor de derechos humanos del Oriente Colombiano.

1.17. Así mismo, refirió que es el representante de los antiguos ETCR del Guaviare en el espacio autónomo de las Organizaciones sociales del Guaviare y del Meta. Igualmente, es coordinador de la conformación de la Red de Jóvenes ambientalistas por la paz del Guaviare, Arauca, Meta y Vichada, como también es miembro de la coordinación Afrodescendiente del Guaviare y del comité de veeduría del Programa Ambientes por la Paz, Vida Digna y Reconciliación.

1.18. De igual forma, resaltó, que es padre de un niño y una niña menores de dos años de edad, y que tanto ellos como su madre y actual pareja dependen económicamente de él.

1.19. En seguida relató que, en la actualidad y hace más de dos años, presenta una situación de seguridad compleja, pues ha sufrido amenazas y hostigamiento por su liderazgo social en la implementación del Acuerdo Final de Paz y de reincorporación, así como por su trabajo político ligado al partido político FARC –hoy Comunes–.

1.20. Por lo anterior, solicitó medidas de seguridad y protección a la Unidad Nacional de Protección, sin que a la fecha cuente con una solución efectiva, razón por la cual, teme por su vida e integridad personal.

1.21. Con apoyo en lo expuesto, puso en conocimiento de estos hechos a la Fiscalía General de la Nación el 17 de julio de 2018, a través de la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el DIH del oriente y centro de Colombia (DHOC). De la misma forma, acudió a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio del Interior y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos el 9 de Julio de 2018.

1.22. Incluso, el 14 de junio de 2019, el Defensor del Pueblo Regional Guaviare le solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que adoptara medidas de protección urgentes a su favor.

1.23. El 2 de marzo de 2020, el actor le comunicó a la UNP acerca de algunas situaciones que ponen en riesgo su seguridad y le solicitó, de nuevo, la implementación de un esquema de seguridad, el cual había sido aprobado con anterioridad. Sin embargo, puso de presente que este aún no se ha materializado por dificultades en su implementación por parte de la UNP.

1.24. Por las razones señaladas, acudió al juez de tutela con el fin de solicitar la protección de sus derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, a la seguridad e integridad personal, a la paz, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. Como consecuencia de ello, pidió que se ordenara de manera urgente a la UNP hacer efectivas las medidas de protección solicitadas por la Defensoría del Pueblo, las cuales ya fueron aprobadas.

Expediente 8.143.584

1.25. El señor Emiro del Carmen Ropero Suárez solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal, a la seguridad y a la paz que se han visto amenazados por la situación de riesgo y la falta de concreción de las medidas efectivas de protección y reincorporación por parte de las entidades accionadas.

1.26. Sustentó sus solicitud en la situación de conflictividad social que se presenta en Colombia ligada a la sistematicidad de los ataques y consecuente falta de garantías de seguridad a las y a los firmantes del Acuerdo Final de Paz e integrantes del nuevo partido político Comunes.

1.27. Para el accionante la situación de Derechos Humanos de las y los firmantes del Acuerdo Final de Paz "puede ser caracterizada desde el año 2017 por diversos tipos de agresiones y tipologías, que configuran una pauta sistemática de exterminio en contra de este grupo nacional o colectivo". Por una parte, puede constatarse la presencia del siguiente tipo de agresiones que afectan particularmente los derechos políticos de la población firmante del AFP: "estigmatización, desplazamientos individuales y colectivos, homicidios, desapariciones forzadas, amenazas entre otras clases de agresiones".

1.28. Aunado a lo anterior, resaltó que desde la firma del Acuerdo Final de Paz, hasta abril de 2020 habían "sido documentados 197 casos de muertes violentas de Firmantes del Acuerdo en proceso de reincorporación. En paralelo se han documentado 39 casos de tentativa de homicidio y 14 casos de desaparición forzada contra Firmantes del Acuerdo en proceso de reincorporación".

1.29. Manifestó que era sobreviviente de la Unión Patriótica, excombatiente de la antigua insurgencia de las FARC-EP, firmante del Acuerdo Final de Paz y que actualmente se encuentra en proceso de reincorporación social y política.

1.30. Puso de presente que durante los Diálogos de Paz con el gobierno de Colombia fue integrante negociador de las FARC-EP en La Habana y que luego regresó al país para realizar tareas de pedagogía de paz hasta la dejación de armas. Añadió que fue asesor del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso ilícito durante un año y medio en el Departamento del Meta e igualmente fue candidato a la Asamblea Departamental del Norte de Santander en las elecciones regionales.

1.31. Informó que en la actualidad trabajaba en condición de promotor de Derechos Humanos en Norte de Santander en un convenido del nuevo partido Comunes con la Organización de Naciones Unidas.

1.32. Señaló que trece integrantes de su familia habían sido asesinados por la Fuerza Pública en el departamento de Norte de Santander. Indicó que de todas las víctimas de su familia, su hermano sufrió desaparición forzosa por el Ejército y una hermana fue asesinada por paramilitares. Precisó que tanto él como su familia han sido víctimas del conflicto armado por desplazamiento forzado, homicidios, amenazas, despojo e intimidaciones.

1.33. Puntualizó que en atención a su actividad política presenta una situación de seguridad compleja, que ha recibido amenazas y hostigamiento por su liderazgo social en la implementación del Acuerdo Final de Paz, así como por su trabajo ligado al nuevo partido político Comunes. Por este motivo, solicitó a la Unidad Nacional de Protección que le realizara un estudio de nivel de riesgo y le ratificaron la misma cantidad de escoltas: cuatro en total. Le asignaron una camioneta nivel cuatro y otra nivel tres. El esquema es colectivo en razón a que incluye a su familia en primero y segundo nivel de consanguinidad.

1.34. Enfatizó que en los últimos meses se ha incrementado su nivel de riesgo, en medio de una situación de sistematicidad de los crímenes contra militantes del partido Comunes y manifestó que ha sido víctima de seguimiento por parte del GAULA, lo que da cuenta de los "hostigamientos y del plan criminal contra [su] vida".

1.35. Sostuvo que pidió un nuevo estudio de nivel de riesgo que se hizo efectivo un mes después por parte de un funcionario de la Subdirección Especializada de la Unidad Nacional de Protección. Relató que la Procuraduría General de la Nación también envió a un funcionario de la Procuraduría Delegada para la Paz a conocer del caso. Relató que el estudio de nivel de riesgo no ha pasado a "estudio de analista", porque "la subdirección especializada de la UNP se encuentra sin suficiente personal administrativo y sin suficientes escoltas".

1.36. Trajo a colación que en el mes de febrero de 2019 la Unidad Nacional de Protección mediante resolución ordenó recoger el arma de apoyo de su esquema de seguridad y después de ello renunció uno de los hombres a cargo de su protección.

1.37. Aseguró que el 7 de junio de 2019 remitió una comunicación al director y al subdirector de la Unidad Nacional de Protección solicitando un nuevo estudio de nivel de riesgo, para ajustar su esquema de seguridad, conforme a su nuevo registro de seguridad, en virtud de que el nivel de riesgo es más alto en Norte de Santander que en el departamento del Meta.

1.38. Afirmó que pese al incremento de la violencia en la región del Catatumbo la Unidad Nacional de Protección no le proporcionó la protección solicitada, por lo que nuevamente insistió que se le designara personal, armamento y

garantías logísticas adecuadas conforme al nivel de riesgo para garantizar la suficiente protección a su integridad física.

1.39. Expuso, que no obstante la urgencia de que le reforzaran las medidas de protección, la Unidad Nacional de Protección no ha adoptado ninguna decisión al respecto. Es más, las medidas extraordinarias anunciadas no se hicieron efectivas y desde entonces viene solicitando que se atienda el nivel de riesgo extremo que enfrenta sin obtener respuesta.

2. Solicitud a la Corte Constitucional para que declare el estado de cosas inconstitucional (ECI)

2.1. Las y los accionantes en los expedientes acumulados en el proceso de la referencia solicitaron al juez constitucional que en el marco de la garantía colectiva del derecho a la paz sostenible y duradera se dispusieran las siguientes determinaciones dirigidas a un conjunto de autoridades estatales así:

> "Tercero. DECLARAR la existencia de un ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL frente a la situación de derechos y seguridad de la población firmante del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y duradera, así como consecuencia de su precaria implementación.
>
> Cuarto. COMUNICAR dicho Estado de cosas inconstitucional a la Presidencia de la República y a las demás entidades accionadas, para que dentro de la órbita de su competencia y en cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales ligados a la implementación efectiva de los compromisos adquiridos en el Acuerdo Final, verifiquen la magnitud de esta discordancia y diseñen, ejecuten e implementen planes de acción coordinados para superarla, dando especial prioridad las personas amenazadas y/o en riesgo sobre su vida e integridad personal.
>
> Quinto. COMUNICAR a los presidentes del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, a las presidencias de la Jurisdicción Especial para la Paz, la Sala Penal de la Corte Suprema Justicia y la Corte Constitucional, al Fiscal General de la Nación, a las direcciones de las entidades que componen el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo de Paz (CSIVI), a la Defensoría del Pueblo, a la Contraloría General de la República, y a las demás que el juez considere pertinente.
>
> Sexto. ORDENAR a las entidades demandadas a respetar y garantizar el Acto Legislativo 02 de 2017. Es decir que GARANTIZEN (sic.) el cumplimiento de buena fe de lo establecido en el Acuerdo Final de Paz de La Habana. En tutela de los derechos fundamentales a la vida y seguridad personal, frente a la situación de seguridad de excombatientes y sus familiares.
>
> Séptimo. ORDENAR a la Presidencia de la República, al Ministerio del Interior, a la Unidad Nacional de Protección, a la Consejería presidencial para la Estabilización y la Consolidación, y a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz que tomen las medidas necesarias para solucionar las carencias

presupuestales para la implementación del Acuerdo Final, en los ámbitos de su competencia.

Octavo. ORDENAR al Ministerio del Interior, a la Unidad Nacional de Protección y la Fiscalía General de la Nación a crear un registro completo de todas las agresiones en contra de signatarios del Acuerdo Final, en el que participen las organizaciones de la sociedad civil. En él se deberán desagregar variables como, presunto victimario, lugar, fecha, actividad política del afectado, antecedentes y las demás que resulten necesarias para un conocimiento completo, exhaustivo y detallado del fenómeno.

Noveno. ORDENAR a la Presidencia de la República, al Ministerio del Interior y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz adoptar planes para prevenir y combatir la estigmatización contra las personas que ejercen la defensa de los derechos humanos o liderazgo social y/o comunal, y/o son signatarios del Acuerdo Final, dentro de las entidades del Estado y en la sociedad.

Décimo. ORDENAR a las autoridades y entidades accionadas subsanar los hechos que motivan la presente acción de tutela y así evitar su expansión, agravamiento y repetición.

Undécimo. ORDENAR al Ministerio del Interior a construir una política pública integral de prevención y protección de signatarios del Acuerdo Final que respete, se acompase y garantice los compromisos asumidos por el Estado colombiano en el Acuerdo Final de Paz y su respectivo desarrollo legal y constitucional. En todo caso, para su adopción deberá asegurarse el goce efectivo e inmediato de los mínimos de los cuales depende el ejercicio del derecho a la vida en condiciones de dignidad.

Duodécimo. ORDENAR al Ministerio del Interior, a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, a la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación y la Unidad Nacional de Protección, profundizar los análisis de contexto para la evaluación del riesgo y para la adopción de las medidas de protección, bajo un enfoque diferenciado que tenga en cuenta las situaciones particulares de la población que requiere protección y el lugar en el que ejercen su labor. Lo anterior, siguiendo formal y materialmente lo pactado en el Acuerdo Final.

Decimotercero. ORDENAR a las entidades accionadas que, dentro de la órbita de sus competencias, ofrezcan respuesta efectiva, acorde con lo pactado en La Habana, a las necesidades de la población firmante del Acuerdo Final de Paz. Es decir, que cada una diseñe, implemente y aplique prontamente una estrategia de promoción y de coordinación de esfuerzos nacionales y territoriales que conduzca efectivamente al goce pleno y material de derechos fundamentales tutelados, para lo cual deberían realizar las siguientes acciones, dentro de los plazos que el juez constitucional estime pertinentes.

Decimocuarto. ORDENAR a la Presidencia de la República y al Ministerio del Interior que, en coordinación con el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación, diseñen e implementen una “política pública para el desmantelamiento de los grupos armados ilegales y organizaciones criminales y sus redes de apoyo, como se estipula en el Acuerdo de Paz, es esencial para frenar la violencia que estos grupos infligen a las comunidades vulnerables”, como lo expresa la Misión de verificación de Naciones Unidas en Colombia,

en su Informe del Secretario General que comprende el periodo entre el 27 de septiembre y el 26 de diciembre de 2019 (párrafo 97).

Decimoquinto. ORDENAR a la Presidencia de la República, a la Consejería presidencial para la Estabilización y la Consolidación a que vuelva a convocar a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para avanzar en la finalización e implementación de esta política. Se debe considerar la posibilidad de seguir avanzando en la implementación del Decreto núm. 660 de 2018, relativo al Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios, que es otro vehículo importante para mejorar la seguridad de las comunidades en las antiguas zonas de conflicto", como lo expresa la Misión de verificación de Naciones Unidas en Colombia, en su Informe del Secretario General que comprende el periodo entre el 27 de septiembre y el 26 de diciembre de 2019 (párrafo 97). Frente al seguimiento de las órdenes del juez constitucional para la solución estructural que garantice el goce efectivo de derechos fundamentales.

Decimosexto. ORDENAR a las entidades accionadas enviar informes trimestrales al juez constitucional que conoce la tutela, a la Corte Constitucional, a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo, al partido político FARC y la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo de Paz (CSIVI), sobre el avance de este proceso. La Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, dentro de la órbita de sus competencias, informarán a la Corte Constitucional sus conclusiones sobre la forma como se ha dado cumplimiento a lo ordenado en el presente auto.

Decimoséptimo. CONMINAR a las entidades y autoridades accionadas a aumentar el nivel de coordinación entre el nivel nacional y territorial para que las medidas de protección sean adecuadas para resguardar los derechos fundamentales de las personas en proceso de reincorporación. O, alternativamente, DELIMITAR las competencias atinentes a lo nacional y lo territorial en materia de acciones de implementación efectiva del Acuerdo y las respectivas disposiciones legales y constitucionales.

Decimoctavo. PONER EN CONOCIMIENTO de la Contraloría General de la República los hechos expuestos en la acción de tutela, con el fin de que esta entidad, en arreglo a sus competencias, coadyuve en la vigilancia de la gestión fiscal de los recursos destinados a la implementación del Acuerdo Final, así como de los recursos destinados para la protección de sus signatarios y líderes sociales.

Decimonoveno. PONER EN CONOCIMIENTO de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo todos los sucesos a los que hace referencia la acción de tutela, para que tomen acciones dentro de la órbita de sus funciones y competencias. Frente la necesidad de adopción de un conjunto complejo y coordinado de acciones que solventen la situación descrita:

Vigésimo. EXHORTAR a la Fiscalía General de la Nación, en particular la Unidad de Investigación y Desmantelamiento de las Organizaciones Criminales, a adoptar medidas para investigar con debida diligencia y hacer frente a la situación de impunidad respecto de los crímenes cometidos contra personas defensoras de derechos humanos, líderes sociales y signatarios del Acuerdo Final, determinando autores materiales e intelectuales, al tiempo que

la existencia o no fenómenos de macro criminalidad, sistematicidad y de patrones de repetición.

Vigésimo primero. EXHORTAR al Senado de la República y la Cámara de Representantes a dar trámite a las leyes contenidas y/o propuestas en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

Vigésimo segundo. PREVENIR a todas las autoridades nacionales y territoriales responsables de la ejecución de acciones, planes, programas o proyectos relacionados directa o indirectamente con la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, que en lo sucesivo se abstengan de actuar en contravía de lo pactado y respeten los contenidos del mismo".

3. Contestación de la demanda

3.1. Presidencia de la República[9]

3.1.1. En respuesta a las acciones de tutela de la referencia, la Presidencia de la República –Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación– puso de presente que no había "dado lugar a la vulneración de ningún derecho fundamental", motivo por el cual no se cumplía con la exigencia de legitimidad por pasiva.

3.1.2. Consideró la Presidencia de la República que en el caso que se examina no resultaba factible evaluar judicialmente y acoger la solicitud planteada por los accionantes, en el sentido de que se declare el estado de cosas inconstitucional, puesto que tal decisión solo puede ser adoptada por "el órgano de cierre de la jurisdicción constitucional, esto es, la Corte Constitucional".

3.1.3. En consonancia con lo señalado, resulta evidente para la Presidencia de la República que los asuntos relacionados con las garantías de seguridad no son del resorte directo de esa oficina, pues "existe una Entidad encargada específicamente de dicha función y radica en la Unidad Nacional de Protección. De ahí la improcedencia del amparo constitucional respecto de la Presidencia de la República.

3.2. Unidad Nacional de Protección (UNP)[10]

[9] La respuesta de la Presidencia se presentó de manera separada en los casos de los señores Nubia Amparo Ortega, Tomás Ignacio Erira y Álvaro Andrés Vargas. Se allegó de manera conjunta al expediente acumulado en los casos de los señores Henry Paul Rosero, Dora Marcela Pepinosa y José Alfonso Rodríguez. Acá se toma esta última que en los aspectos generales coincide con las demás contestaciones, visible en el expediente digital T-7.987.084, consecutivo 88.

[10] Las respuestas de la Unidad Nacional de Protección se presentaron de manera separada en los expedientes de la señora Nubia Amparo Ortega Argos, (expediente digital T-987.084, consecutivo 81); del señor Tomás Ignacio Erira Erira (expediente digital T-987.084, consecutivo 82) y Álvaro Andrés Vargas (expediente digital T-987.084, consecutivo 108). En el caso de los señores Henry Paul Rosero, Dora Marcela Pepinosa y José Alfonso Rodríguez Muchos se presentó de manera conjunta (expediente digital T-987.084, consecutivo 121). En este lugar se presentan los argumentos generales que se reiteran en todas las contestaciones, extraídos del expediente de la señora Nubia Amparo Ortega Argos, expediente digital T-987.084, consecutivo 81.

3.2.1. La Unidad Nacional de Protección, por conducto del Jefe (E) de la Oficina Asesora Jurídica, respondió a la acción constitucional exponiendo, primero, el alcance de su competencia. Sobre este aspecto, resaltó que el Gobierno Nacional en coordinación con la UNP e instituciones del Estado pusieron en marcha un programa de protección integral para salvaguardar a los integrantes del nuevo partido que surgió a raíz de la desmovilización de las FARC-EP y crearon un cuerpo de seguridad y protección de naturaleza mixta que incluye personal de la Policía Nacional, el personal adscrito a la UNP y antiguos miembros de las FARC-EP, para brindar seguridad a los exintegrantes del grupo guerrillero, de conformidad con el nivel de riesgo.

3.2.2. De acuerdo con lo expuesto, destacó que la UNP no se encontraba facultada para desempeñar funciones que institucionalmente corresponden a otra entidad o persona jurídica, pues ello significaría contradecir lo dispuesto en el artículo 123 de la Constitución Política. Ni en el Decreto Ley 4065 de 2011 y tampoco en el Decreto 1066 de 2015 se prevén atribuciones frente a toda suerte de pretensiones, de modo que responder por todos los hechos alegados en la demanda podría significar una extralimitación de funciones por parte de la UNP.

3.2.3. En relación con la solicitud de declaratoria del estado de cosas inconstitucional, propuso declarar improcedente tal solicitud, pues, en su criterio, ello desconoce el principio de subsidiariedad de la tutela.

3.3. Ministerio del Interior[11]

3.3.1. La jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio del Interior solicitó denegar la acción de tutela respecto de esta entidad.

3.3.2. Para ello, manifestó que existe falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto, a partir del 1° de noviembre de 2011 el Ministerio del Interior procedió a trasladar a la Unidad Nacional de Protección el programa de Protección, que actualmente se encuentra reglamentado por el Decreto 1066 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior"[12]. De igual manera, afirmó que dio cumplimiento a lo que establece el artículo 23 del Decreto 4065 de 2011 sobre la entrega de archivos.

3.3.3. Concluyó que no vulneró derecho fundamental alguno de los accionantes y agregó que la acción de tutela era improcedente para solicitar la declaratoria del estado de cosas inconstitucional, más aún, cuando no se allegaron las pruebas para respaldar esa petición.

[11] Visible en el expediente digital T-7.987.084, consecutivo 52.
[12] Parte 4 DERECHOS HUMANOS, Título 1 Programa de Protección.

3.4. Respuesta del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC –hoy partido Comunes–[13]

3.4.1. El señor Pablo Catatumbo Torres Victoria, en su condición de representante legal del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común –hoy Comunes–, respondió a las tutelas de la referencia y puso de presente los hechos de violencia ocurridos en los últimos tiempos contra los integrantes de su partido y contra quienes suscribieron el Acuerdo Final y se encuentran en proceso de reincorporación[14], tras lo cual indicó que compartía y secundaba las peticiones de las tutelas que obran en el expediente de la referencia. Al respecto, manifestó su preocupación sobre la existencia de un estado de cosas inconstitucional "contra la población de signatarios y signatarias del Acuerdo de Paz y contra la implementación misma de lo pactado".

3.5. Jurisdicción Especial para la Paz[15]

3.5.1. El asesor de la presidencia de la Jurisdicción Especial para la Paz puntualizó que, de las peticiones consignadas en las demandas de los accionantes, a saber, que **i)** "se ordene a la UNP la ejecución de las medidas de protección que se derivan de la evaluación de riesgo que, de acuerdo con lo afirmado por los accionantes, se hizo respecto del Área de Reincorporación en la que residen"; **ii)** se declare el estado de cosas inconstitucional respecto de varios aspectos de cumplimiento del Acuerdo Final de Paz entre la ex guerrilla de las FARC y el Gobierno Nacional y **iii)** se exhorte a las autoridades correspondientes al cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado en el marco de la suscripción del Acuerdo Final de Paz, ninguna ha sido agenciada por la JEP.

3.5.2. En relación con las pretensiones relativas al cumplimiento de lo pactado en el Acuerdo Final de Paz, explicó que tales solicitudes escapaban de la órbita de competencia de la JEP, cuyas funciones son "eminentemente jurisdiccionales respecto de las conductas cometidas por los combatientes por causa y con ocasión del conflicto armado, careciendo de prerrogativas de vigilancia al cumplimiento de lo acordado en otras materias".

3.6. Fiscalía General de la Nación[16]

---

[13] La respuesta del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC –hoy partido Comunes– se presentó de manera separada en los casos de los señores Nubia Amparo Ortega, Tomás Ignacio Erira y Álvaro Andrés Vargas. Se allegó de manera conjunta al expediente acumulado en los casos de los señores Henry Paul Rosero, Dora Marcela Pepinosa y José Alfonso Rodríguez. Acá se toma esta última que en los aspectos generales coincide con las demás contestaciones, visible en el expediente digital T-7.987.084, consecutivo 109.
[14] A propósito de tal situación, solicitó tener en cuenta el Informe de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia en concordancia con las resoluciones 2487 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
[15] La respuesta de la Presidencia de la Jurisdicción Especial para la Paz se presentó de manera separada en los casos de los señores Nubia Amparo Ortega, Tomás Ignacio Erira y Álvaro Andrés Vargas. Se allegó de manera conjunta al expediente acumulado en los casos de los señores Henry Paul Rosero, Dora Marcela Pepinosa y José Alfonso Rodríguez. Acá se toma la contestación en el expediente de la señora Nubia Amparo Ortega que en los aspectos generales coincide con las demás contestaciones, visible en el expediente digital T-7.987.084, consecutivo 92.
[16] La respuesta de la Fiscalía General de la Nación se presentó de manera separada en los casos de los señores Nubia Amparo Ortega, Tomás Ignacio Erira y Álvaro Andrés Vargas. Se allegó de manera conjunta al

3.6.1. La señora Vice Fiscal General de la Nación respondió a las demandas de tutela de la referencia precisando que las pretensiones de los accionantes se encontraban encaminadas a que el juez de tutela ordenara a la Fiscalía General de la Nación que adopte "medidas para investigar con debida diligencia y hacer frente a la situación de impunidad respecto de los crímenes cometidos contra personas defensoras de derechos humanos, líderes sociales y signatarios del Acuerdo Final, determinando autores materiales e intelectuales".

3.6.2. Al respecto, puntualizó que la Fiscalía avanzó de manera diligente "con las investigaciones penales contra afectaciones cometidas en contra de defensores de derechos humanos, líderes sociales y personas en proceso de reincorporación de las FARC – EP", según lo prescribe el artículo 250 de la Constitución Política y lo dispuso el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

3.6.3. Solicitó declarar improcedente la acción de tutela respecto de la Fiscalía General de la Nación, toda vez que, en su criterio, no se cumple con la exigencia de subsidiariedad en relación con las pretensiones dirigidas contra la entidad. Advirtió la señora Vice fiscal que los hechos alegados formaban parte de investigaciones penales en curso y las pretensiones aducidas "cuentan con instancias y mecanismos procesales establecidos para ser desarrollados".

3.7. Procuraduría General de la Nación[17]

3.7.1. En relación con **i)** la tutela de los derechos fundamentales a la vida y seguridad personal, frente a la situación de seguridad de excombatientes y sus familiares, la Procuraduría General de la Nación respondió las pretensiones contempladas en los numerales cinco (5)[18] y ocho (8)[19]. En ese orden, indicó que, de acuerdo con lo dispuesto por la Directiva 002 de 2017, recomendó al Gobierno Nacional crear un "registro único, integrado, consolidado y actualizado de los defensores y defensoras de los derechos humanos, y sus organizaciones, integrantes de los movimientos sociales, movimientos

---

expediente acumulado en los casos de los señores Henry Paul Rosero, Dora Marcela Pepinosa y José Alfonso Rodríguez. Acá se toma la contestación presentada en el asunto del señor Tomás Ignacio Erira que en los aspectos generales coincide con las demás respuestas, visible en el expediente digital T-7.987.084, consecutivo 153.

[17] La respuesta de la Procuraduría General de la Nación se presentó de manera separada en los casos de los señores Nubia Amparo Ortega, Tomás Ignacio Erira y Álvaro Andrés Vargas. Se allegó de manera conjunta al expediente acumulado en los casos de los señores Henry Paul Rosero, Dora Marcela Pepinosa y José Alfonso Rodríguez. Acá se toma esta última que en los aspectos generales coincide con las demás contestaciones, visible en el expediente digital T-7.987.084, consecutivo 159.

[18] "COMUNICAR a los presidentes del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, a las presidencias de la Jurisdicción Especial para la Paz, la Sala Penal de la Corte Suprema Justicia y la Corte Constitucional, al Fiscal General de la Nación, a las direcciones de las entidades que componen el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo de Paz (CSIVI), a la Defensoría del Pueblo, a la Contraloría General de la República, y a las demás que el juez considere pertinente".

[19] Octavo. ORDENAR al Ministerio del Interior, a la Unidad Nacional de Protección y la Fiscalía General de la Nación a crear un registro completo de todas las agresiones en contra de signatarios del Acuerdo Final, en el que participen las organizaciones de la sociedad civil. En él se deberán desagregar variables como, presunto victimario, lugar, fecha, actividad política del afectado, antecedentes y las demás que resulten necesarias para un conocimiento completo, exhaustivo y detallado del fenómeno".

políticos, y lideresas y líderes políticos y sociales, y sus organizaciones y a los que en esta condición participen activamente en la implementación del Acuerdo de Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera".

3.7.2. Acerca de la pretensión contemplada en el numeral decimocuarto (14)[20], informó que expidió la Directiva 001 del 2020, "en la que se establecen los lineamientos para la protección y el respeto de los derechos a la vida, la integridad y la seguridad de los ex combatientes de las FARC-EP en proceso de reincorporación política, social y/o económica en cumplimiento del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (Acuerdo de Paz)".

3.7.3. En lo que respecta al **ii)** seguimiento de las órdenes del juez constitucional para la solución estructural que garantice el goce efectivo de derechos fundamentales, se refirió a las pretensiones contempladas en el numeral decimosexto (16)[21], puntualizando que por medio de la expedición de la Directiva 001 de 2020 –ya aludida– solicitó a la Unidad Nacional de Protección allegar ante la Procuraduría Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz "un informe trimestral en el que se incluya: a) número de solicitudes recibidas; b) número de solicitudes tramitadas; c) número de medidas de protección aprobadas; y, d) número de medidas de protección implementadas". Adicionalmente, informó que pidió a la UNP que la información solicitada discriminara por departamentos y municipios, así como especificara si se trataba de excombatientes, integrantes del partido político o de un familiar".

3.7.4. En lo relativo a las pretensiones contempladas en el numeral decimoséptimo (17)[22], sostuvo el Ministerio Público que la Procuraduría General de la Nación "recomendó al Ministerio de Defensa Nacional en coordinación con la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación y la Agencia para la Reincorporación y Normalización, adoptar una estrategia de seguridad especial para la protección y control de riesgos de las zonas en donde se encuentren grupos representativos de los excombatientes de las FARC–EP acreditados, que están en proceso de reincorporación política,

[20]"ORDENAR a la Presidencia de la República y al Ministerio del Interior que, en coordinación con el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación, diseñen e implementen una "política pública para el desmantelamiento de los grupos armados ilegales y organizaciones criminales y sus redes de apoyo, como se estipula en el Acuerdo de Paz, es esencial para frenar la violencia que estos grupos infligen a las comunidades vulnerables", como lo expresa la Misión de verificación de Naciones Unidas en Colombia, en su Informe del Secretario General que comprende el periodo entre el 27 de septiembre y el 26 de diciembre de 2019 (párrafo 97)".

[21] ORDENAR a las entidades accionadas enviar informes trimestrales al juez constitucional que conoce la tutela, a la Corte Constitucional, a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo, al partido político FARC y la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo de Paz (CSIVI), sobre el avance de este proceso. La Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, dentro de la órbita de sus competencias, informarán a la Corte Constitucional sus conclusiones sobre la forma como se ha dado cumplimiento a lo ordenado en el presente auto".

[22] "Decimoséptimo. CONMINAR a las entidades y autoridades accionadas a aumentar el nivel de coordinación entre el nivel nacional y territorial para que las medidas de protección sean adecuadas para resguardar los derechos fundamentales de las personas en proceso de reincorporación. O, alternativamente, DELIMITAR las competencias atinentes a lo nacional y lo territorial en materia de acciones de implementación efectiva del Acuerdo y las respectivas disposiciones legales y constitucionales".

social y/o económica, y fortalecer la estrategia de seguridad para los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación".

3.7.5. Acerca de la pretensión contemplada en el numeral decimoctavo (18)[23], indicó que la Procuraduría Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz no tenía competencia al respecto.

3.7.6. Sobre la pretensión prevista en el numeral decimonoveno (19)[24] precisó que, como podía comprobarse en el documento de respuesta a las acciones de tutela de la referencia, la Procuraduría General de la Nación expuso las acciones adelantadas en relación con cada una de las pretensiones, de conformidad con las competencias que son de su resorte.

3.7.7. En lo atinente a la pretensión consignada en el numeral vigésimo (20)[25], recordó que la "Procuraduría Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz no tiene competencia para adelantar acciones de investigación".

3.7.8. Frente a la pretensión establecida en el numeral vigesimoprimero (21)[26], trajo a colación que en "el Informe sobre el Estado de Avance de la Implementación del Acuerdo de Paz, 2016 – 2019 presentado al Congreso de la República en agosto del 2019, la Procuraduría General de la Nación recomendó al Gobierno Nacional promover el debate legislativo sobre los temas pendientes del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera".

3.7.9. Ahora, con relación a **iv)** las garantías para la participación política informó que "en el marco del seguimiento adelantado por la Procuraduría General de la Nación al componente de reincorporación política, de conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 1909 de 2018, se presentó al Congreso de la República el informe sobre el cumplimiento de los derechos establecidos en el Estatuto de la Oposición"[27].

---

[23] "Decimoctavo. PONER EN CONOCIMIENTO de la Contraloría General de la República los hechos expuestos en la acción de tutela, con el fin de que esta entidad, en arreglo a sus competencias, coadyuve en la vigilancia de la gestión fiscal de los recursos destinados a la implementación del Acuerdo Final, así como de los recursos destinados para la protección de sus signatarios y líderes sociales".

[24] "Decimonoveno. PONER EN CONOCIMIENTO de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo todos los sucesos a los que hace referencia la acción de tutela, para que tomen acciones dentro de la órbita de sus funciones y competencias".

[25] "Vigésimo. EXHORTAR a la Fiscalía General de la Nación, en particular la Unidad de Investigación y Desmantelamiento de las Organizaciones Criminales, a adoptar medidas para investigar con debida diligencia y hacer frente a la situación de impunidad respecto de los crímenes cometidos contra personas defensoras de derechos humanos, líderes sociales y signatarios del Acuerdo Final, determinando autores materiales e intelectuales, al tiempo que la existencia o no fenómenos de macrocriminalidad, sistematicidad y de patrones de repetición".

[26] "Vigésimo primero. EXHORTAR al Senado de la República y la Cámara de Representantes a dar trámite a las leyes contenidas y/o propuestas en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera".

[27] "Para el desarrollo del informe en mención, se visitaron las sedes de las organizaciones políticas declaradas en oposición (Partido Alianza Verde, Partido Polo Democrático Alternativo, Movimiento Alternativo Indígena y Social, Partido FARC y Partido Unión Patriótica), así como a las sedes de las organizaciones políticas declaradas en independencia (Partidos Liberal, Cambio Radical y Alianza Social Independiente)".

3.7.10. Finalmente, acerca de la seguridad personal de los accionantes, manifestó que no existía solicitud alguna en dicha delegada, por lo cual, no se podían pronunciar de manera particular sobre este aspecto.

3.8. Defensoría del Pueblo Regional Nariño[28]

3.8.1. La Defensoría del Pueblo –Regional Nariño– consideró en su contestación que se debía declarar la desvinculación de esa autoridad del asunto de la referencia, toda vez que no se configuró la exigencia de legitimidad en la causa por pasiva en cuanto no se desconoció derecho fundamental alguno de los accionantes a la vida, a la seguridad, a la integridad personal y a la paz.

3.8.2. Así las cosas, pidió la desvinculación de la Defensoría del Pueblo del trámite de la presente acción de tutela porque ha cumplido con sus deberes legales y constitucionales.

3.9. Senado de la República[29]

3.9.1. El secretario general del Senado de la República manifestó, en cuanto al exhorto para que dicha Corporación tramite los proyectos de ley relacionados con la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y Construcción de una Paz Estable y Duradera, que todos los proyectos radicados en dicha célula legislativa iniciaron el correspondiente proceso legislativo.

3.9.2. Por lo tanto, afirmó que la Rama Ejecutiva y los entes de control eran los competentes para conocer de las demás pretensiones de los accionantes y que el Senado de la República no tenía dentro de sus funciones conocer de esos asuntos.

3.9.3. En consecuencia, solicitó que el Senado de la República fuera desvinculado de la presente acción de tutela, porque no había vulnerado derecho fundamental alguno.

3.9.4. En este proceso específico, el secretario general agregó que el 18 de mayo de 2020, el Senado de la República citó a los ministros del Interior y Defensa para realizar un debate de control político sobre el incumplimiento por parte de las FARC de las obligaciones derivadas del Acuerdo Final en materia de bienes y reincidencia, en el cual se dio a conocer el estado actual de dicha implementación.

3.10. Cámara de Representantes[30]

---

[28] La respuesta de la Defensoría del Pueblo se presentó de manera separada en los casos de los señores Nubia Amparo Ortega, Tomás Ignacio Erira y Álvaro Andrés Vargas. Se allegó de manera conjunta al expediente acumulado en los casos de los señores Henry Paul Rosero, Dora Marcela Pepinosa y José Alfonso Rodríguez. Acá se toma esta última que en los aspectos generales coincide con las demás contestaciones, visible en el expediente digital T-7.987.084, consecutivo 163.
[29] Visible en el expediente digital T-8.009.306, consecutivo 79.
[30] Visible en el expediente digital T-8.009.306, consecutivo 63.

3.10.1. La jefe de la División Jurídica de la Cámara de Representantes aclaró que aunque la pretensión vigesimoprimera era la única que se dirigía contra el Congreso de la República, de todas maneras existía falta de competencia para satisfacer las pretensiones de los accionantes porque, de acceder a ellas, vulneraría el principio de legalidad o las prohibiciones expresas en la Constitución, respecto a que no le corresponde inmiscuirse en asuntos privativos de otras autoridades.

3.10.2. De otro lado, acerca de que se exhorte "(…) al Senado de la República y la Cámara de Representantes a dar trámite a las leyes contenidas y/o propuestas en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera", expresó que el accionante parecía referirse a la configuración de una omisión legislativa derivada de la falta de trámite de las normas contenidas o propuestas en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

3.10.3. Sin embargo, indicó que ese medio de defensa judicial, esto es, la acción de tutela, no sería procedente en contra de omisiones legislativas. Además, recordó que se refería a una norma de carácter general, impersonal y abstracto y, en esta medida, el accionante contaría con otros medios para que su solicitud fuera tramitada dentro del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, la solicitud planteada a través de esta acción constitucional resultaba improcedente.

3.10.4. En este orden, solicitó la desvinculación del Congreso de la República –Cámara de Representantes– y de su presidente del trámite de la presente acción constitucional.

3.11. Corte Suprema de Justicia- Sala de Casación Penal[31]

3.11.1. La oficial mayor de la Secretaría de la Sala de Casación Penal manifestó que dicha Corporación judicial no es un órgano de consulta y solo tiene competencia en los asuntos que la Constitución y la Ley le asignan. Por lo tanto, indicó que no podía intervenir ante otras autoridades, pues sólo a través de sus decisiones puede pronunciarse sobre los hechos específicos que llegan a su conocimiento en aplicación e interpretación de la ley y la jurisprudencia.

3.11.2. Por lo anterior, solicitó su desvinculación del presente proceso de tutela ante la evidencia de que no ha vulnerado derecho fundamental alguno de los accionantes.

3.12. Contraloría General de la República[32]

3.12.1. La representación de la Contraloría General de la República desarrolló, por un lado, lo atinente a la competencia de dicha entidad y su papel en la implementación del Acuerdo Final. De otro lado, hizo referencia a los

[31] Visible en el expediente digital T-8.009.306, consecutivo 5
[32] Visible en el expediente digital T-8.009.306, consecutivo 58.

informes que ha publicado en el marco de esa competencia y precisó que a este órgano de control no le corresponde determinar las afectaciones puntuales del demandante, menos aún, lo relativo al estado de cosas inconstitucional.

3.13. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección "A" [33]

3.13.1. La magistrada Amparo Navarro López manifestó que, para el caso en concreto y en lo que respecta a dicho Tribunal, en efecto, el proceso de tutela fue presentado por el accionante Francisco Gamboa Hurtado el viernes 13 de marzo de 2020 ante esa Corporación. Sin embargo, por intermedio del Auto del 16 de marzo de 2020 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Sub-Sección "A", procedió a remitir por competencia territorial el trámite a los Juzgados del Circuito de San José del Guaviare, toda vez que la acción constitucional involucraba una serie de presuntas vulneraciones a sujetos que se encontraban en dicho municipio.

3.13.2. Así las cosas, no puede atribuírsele una presunta violación de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, toda vez que es claro que el Tribunal recibió la acción de tutela a la que hace referencia el señor Gamboa Hurtado el viernes 13 de marzo de 2020 y, el lunes 16 de marzo de 2020, procedió a proferir un auto que disponía la remisión del proceso a los Juzgados del Circuito de San José del Guaviare.

3.13.3. En consecuencia, pidió la denegación de la presente acción constitucional por no existir la vulneración de derechos fundamentales alegada en lo que respecta al Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

4. Decisiones judiciales

Expediente T-7.987.084

4.1. Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Pasto[34]

4.1.1. La Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto, mediante sentencia del veintiuno (21) de abril de dos mil veinte (2020) resolvió tutelar los derechos fundamentales a la vida e integridad personal de los accionantes. En su criterio, la Unidad Nacional de Protección ha sido negligente en el cumplimiento de sus obligaciones, tanto más cuanto –como esa autoridad lo ha puesto de presente públicamente–, ha funcionado de manera normal durante la pandemia.

4.1.2. Por ese motivo, ordenó a la Unidad Nacional de Protección que dentro del término máximo de las setenta y dos (72) horas siguientes a la notificación de la sentencia, implementara las medidas colectivas estudiadas y decretadas a favor del Nuevo Punto de Reincorporación Tallambí en el municipio de Cumbal (Nariño).

---

[33] Visible en el expediente digital T-8.009.306, consecutivo 38.
[34] Visible en el expediente digital T-7.987.084, consecutivo 174.

4.1.3. Ahora bien, acerca de la pretensión relacionada con el cumplimiento del Acuerdo de Paz, sostuvo que la acción de tutela resultaba improcedente, toda vez que, tratándose de "un derecho programático", la acción popular y la acción de cumplimiento constituían la vía jurídica adecuada para alcanzar ese objetivo.

4.1.4. Sobre la pretensión de que se declare el estado de cosas inconstitucional por el cumplimiento del Acuerdo de Paz puso de presente que carecía de competencia para analizar y establecer si en el asunto de la referencia se configura un estado de cosas inconstitucional en lo relativo a "la situación de derechos y seguridad de la población firmante del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y duradera, así como consecuencia de su precaria implementación", que reclaman los actores. Tal suerte de determinación corresponde adoptarla de manera exclusiva y excluyente a la Corte Constitucional, autoridad de la cual, por su misma funcionalidad o cobertura nacional, se colige esa facultad que concuerda además con lo dispuesto por el artículo 241 de la Constitución Política.

Expediente T- 7.987.142

4.2. Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Pasto[35]

4.2.1. La Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto, mediante sentencia del 16 de junio de 2020, tuteló los derechos fundamentales a la vida e integridad personal del señor Ricardo Palomino Ducuará y de todos los demás que integran el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) –Tumaco– Nariño.

4.2.2. En ese orden, afirmó que la Unidad Nacional de Protección (UNP) vulneró las garantías del actor, por cuanto no hizo efectiva la medida de protección relacionada con el número de agentes de protección excusándose en el hecho de no contar con personal disponible en esa zona y el estado de emergencia sanitaria a raíz de la Covid-19.

4.2.3. No obstante, en criterio del Tribunal estas razones solo denotan su falta de voluntad política para concretar los deberes frente a esta población específica que debe ser protegida por el Estado.

4.2.4. Más aún, cuando el actor y el colectivo al que pertenece se encuentra en riesgo extraordinario y real por la probable acción de grupos armados organizados al margen de la ley de guerrilla activa (ELN), disidencias subversivas de las FARC (grupo Oliver Sinisterra), de grupos residuales (GAOR) y/o de bandas delincuenciales dedicadas al narcotráfico que se disputan la zona para sus actividades delincuenciales y hasta para la cooptación forzada de fichas humanas a efecto de engrosar sus filas.

[35] Visible en el expediente digital T- 7.987.142, consecutivo 90.

4.2.5. Enfatizó el juez de instancia que estas personas y grupos no cesan en sus actividades delictivas durante las épocas de pandemia, ni se someten a las medidas restrictivas de confinamiento dispuestas por el Estado; de suerte que sus derechos a la seguridad y vida se encuentran en vilo.

4.2.6. Por lo anterior, ordenó a la UNP que dentro del término máximo de las setenta y dos (72) horas siguientes a la notificación de la sentencia, en coordinación con las entidades administrativas competentes, materializara en su totalidad las medidas de protección colectivas estudiadas y decretadas a favor del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) – Tumaco – Nariño.

4.2.7. Ahora, en lo que se refiere a las pretensiones relacionadas con la protección de los derechos a la paz y la declaratoria de existencia de un estado de cosas inconstitucionales, frente a la implementación del Acuerdo Final, explicó que esa misma Sala había estudiado un caso que presenta analogía fáctica con el presente asunto y en el que había declarado la improcedencia de la acción de tutela respecto a estas pretensiones en particular. Por lo cual, en este caso tomaría el mismo camino jurídico.

4.2.8. Respecto a la protección del derecho a la paz, recordó que se trataba de una garantía de cumplimiento programático y para su materialización es necesaria la confluencia de múltiples acciones de pedagogía e inversión social, de entendimiento y ejecutorias políticas, afirmaciones económicas por parte del ejecutivo y hasta de transformaciones ideológicas multilaterales que de manera solidaria concurran hacia el mismo fin institucional.

4.2.9. Acerca de la solicitud de la declaratoria del estado de cosas inconstitucional, reiteró que, por competencia, le correspondía analizarla al órgano de cierre de la jurisdicción constitucional.

Expediente T-8.009.306

4.3. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta[36]

4.3.1. La sección Quinta del Consejo de Estado, declaró la carencia actual de objeto por hecho superado. Lo anterior, por cuanto en el caso concreto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, mediante sentencia del 18 de junio de 2020, resolvió de fondo la solicitud de amparo presentada por el señor Francisco Gamboa Hurtado.

4.3.2. Específicamente, explicó que el Tribunal accionado decidió amparar los derechos fundamentales a la vida, a la seguridad e integridad personal del señor Francisco Gamboa Hurtado y, en consecuencia, ordenó a la Unidad Nacional de Protección que en el término de cuarenta y ocho (48) horas implementara las

[36] Visible en el expediente digital T-8.009.306, consecutivo 94.

medidas de seguridad a las que tenía derecho el actor de acuerdo con la valoración de su situación particular.

4.3.3. Por lo anterior, indicó que era claro que el presente trámite procesal carecía actualmente de objeto, pues el hecho que motivó la presentación de la acción de tutela fue superado.

4.3.4. Sin embargo, expuso que en atención a que la autoridad judicial ya había dictado sentencia dentro de dicho proceso, cualquier orden que se impartiera por parte de dicha Sala sería en vano, puesto que la posible vulneración cesó debido a la actuación de la parte demandada.

4.4. Sección Cuarta –Subsección "A"– del Tribunal Administrativo de Cundinamarca

4.4.1. Teniendo en cuenta que la decisión adoptada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado referida en párrafos anteriores fue la de declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, dado el pronunciamiento de la Sección Cuarta –Subsección "A" del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional solicitó mediante el auto 132 proferido el 23 de marzo de 2021 copia del expediente.

4.4.2. A partir de la lectura de los documentos remitidos a la Corte Constitucional pudo constatarse, efectivamente, que la Sección Cuarta –Subsección "A"– del Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió, mediante sentencia proferida el 18 de junio de 2020, lo siguiente:

> **PRIMERO: TUTELAR** los derechos fundamentales a la vida, seguridad e integridad personal del señor Francisco Gamboa Hurtado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta Sentencia.
>
> **SEGUNDO: ORDENAR** a la Unidad Nacional de Protección que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de presente fallo, si aún no lo ha hecho, proceda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.4.1.2.40 del Decreto 1066 de 2015, a implementar y poner en conocimiento del actor las medidas que, con ocasión de la valoración de la situación puntual, determinó en la Resolución 0032 del 30 de abril de 2020.
>
> **TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE** la acción de tute presentada por el señor Francisco Gamboa Hurtado con respecto a la salvaguarda de su derecho a la Paz, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente fallo.
> **CUARTO: DECLARAR IMPROCEDENTE** la acción de tutela en aquello que refiere a la vulneración de los derechos fundamentales a la seguridad e integridad personal, vida y el derecho a la paz de los signatarios y signatarias del Acuerdo Final de Paz, según lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
>
> **QUINTO: DECLARAR PROBADA** la falta de legitimación por pasiva**,** y en consecuencia **DESVINCULAR** del presente trámite al Presidente de la Republica, al Alto Comisionado para la Paz, a la Consejería Presidencial para

> la Estabilización y la Consolidación, al Ministerio del Interior, al Senado de la República a la Cámara de Representantes, al Fiscal General de la Nación, a las direcciones de las entidades que componen el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, al Defensor del Pueblo y al Partido Político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, de conformidad con lo expuesto en los considerando de esta Sentencia.
>
> **SEXTO: COMUNICAR** la presente decisión al Doctor Carlos Enrique Moreno Rubio, Magistrado de la Sección Quinta del Consejo de Estado, por intermedio del correo electrónico secgeneral@consejoestado.ramajudicial.gov.co.

4.4.3. En las consideraciones de la sentencia, la Sección Cuarta –Subsección "A"– del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se refirió a una cuestión previa relacionada con la duplicidad de acciones y la actuación temeraria, apoyándose para el efecto en lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia T-298 de 2018[37].

4.4.4. Consideró que en el caso del señor Francisco Gamboa Hurtado se presentaba una circunstancia singular en cuanto se ponía en evidencia "una particularidad generada con ocasión de una primera acción de tutela que fue presentada por el actor y se abordó en la providencia a la que se está haciendo referencia en el caso con número de radicado 25000-23-15-000-2020-00209-00) que se podría contraponer con una segunda acción que también estaba cursando ante la Sección Quinta del Consejo de Estado (11001-03-15-000-2020-02072-00).

4.4.5. Si bien la Sección Cuarta –Subsección "A"– del Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió que se trataba de una situación singular, consideró asimismo que de ello no seguía una conducta que pudiera calificarse como dolosa o malintencionada por parte del demandante, toda vez que él "presentó la acción de tutela el 13 de marzo de 2020 y esta fue remitida por la Sección Cuarta, Sub- Sección A, a los Juzgados del Circuito de San José del Guaviare por considerarse aquel circuito el competente para resolver el debate del demandante".

4.4.6. Puso de presente que el señor Gamboa Hurtado justamente le reprochó a la Subsección "A", de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca lo que en su criterio debía calificarse como una demora injustificada –aspecto este respecto del cual la autoridad antes nombrada destacó que no se pronunciaría "por ser aquella actuación objeto de valoración dentro del trámite constitucional 11001-03-15-000-2020-02072-00 que se surte en al interior de la Sección Quinta del Consejo de Estado". Sin embargo, destacó que fue ello precisamente lo que condujo al accionante a presentar una nueva acción de tutela.

---

[37] MP. Alberto Rojas Ríos. En aquella ocasión sostuvo la Corte Constitucional que "la institución de la temeridad busca evitar los comportamientos dolosos o malintencionados encaminados a la presentación sucesiva y múltiple de acciones de tutela entre las mismas partes, fundamentadas en unos mismos hechos y en búsqueda de la protección o amparo del mismo derecho fundamental, mientras que la duplicidad de acciones si bien asemeja con la institución antes referida, su diferencia radica en la medida que en esta no se predica un actuar doloso o malintencionado del tutelante".

4.4.7. En ese sentido observó que, contrario a lo sostenido por la Unidad Nacional de Protección, no se trataba de una actuación temeraria, "toda vez que los hechos del caso permiten apreciar que el señor Francisco Gamboa Hurtado no encausó su actuación bajo un elemento volitivo negativo o malintencionado que derivara en una múltiple presentación de acciones constitucionales análogas pues el relato fáctico del caso, sin duda alguna, arroja una conclusión distinta".

4.4.8. Por las razones expuestas, consideró que en el asunto examinado no se advertía la configuración de la temeridad y, más bien, lo que se presentaba era una duplicidad de acciones que, para el caso concreto, se encontraba justificada. Concluyó lo siguiente:

> Luego, como quiera que para la situación del tutelante está demostrado que a la fecha la Sección Quinta del Consejo de Estado, dentro del proceso 11001-03-15-000-2020-02072-00[28] aún no se ha pronunciado de fondo sobre lo pretendido, lo conducente es que, en aras de propender por una justicia célere de cara a los usuarios, y atendiendo que se trata de una situación excepcional, esta Sala de Decisión, siempre caracterizada por su compromiso con a los ciudadanos que por intermedio de sus acciones activan al Juez constitucional, proceda a hacer el análisis respectivo que en derecho corresponda.
>
> En todo caso resulta oportuno manifestar que la decisión que llegue a tomarse en el presente trámite será puesta en conocimiento inmediatamente al Despacho del Doctor Carlos Enrique Moreno Rubio, Magistrado de la Sección Quinta del Consejo de Estado, con el fin de precaver la producción de dos decisiones en el mismo asunto.

Expediente T-8.143.584

4.5. Sala Civil –Familia– del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta[38]

4.5.1. .La Sala Civil –Familia– del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, mediante sentencia proferida el 3 de junio de 2020 resolvió conceder la protección solicitada por el señor Emiro del Carmen Ropero Suárez y ordenar a la Unidad Nacional de Protección que, dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la providencia, emitiera el acto administrativo que resolviera la solicitud presentada por el accionante en relación con un nuevo estudio de nivel de riesgo e implementación de un esquema de seguridad completo, "sin que esto implique incidencia alguna en la decisión de mantener o mejorar la las medidas de protección y se lo notifique en debida forma".

4.5.2. La Corte Constitucional, mediante auto del 15 de diciembre de 2020 proferido por la Sala de Selección Número 7 del mismo año, seleccionó para su revisión los expedientes T-7.987.084, T-7.987.142 y T-8.009.306 y ordenó su acumulación. Los referidos expedientes fueron repartidos a la magistrada Cristina Pardo Schlesinger.

---

[38] Visible en el expediente digital 8.143.584, consecutivo número 11.

5. Trámite en sede de revisión

5.1. Medidas provisionales

5.1.1. Mediante autos 010 y 011 del 27 y del 28 de enero se dictaron medidas provisionales en los expedientes de la referencia.

5.2. Impedimento

5.2.1. El día 10 de marzo de 2021, el Magistrado Alberto Rojas Ríos presentó impedimento para resolver en los expedientes de la referencia. Mediante auto del 18 de marzo siguiente se resolvió no aceptar el impedimento.

5.3. La Sala plena asume conocimiento del caso

5.3.1. El 15 de abril de 2021 la Sala Plena de la Corte Constitucional resolvió asumir el conocimiento del presente asunto.

5.4. Auto de suspensión de términos

5.4.1. Mediante auto del 16 de abril de 2021 se suspendieron términos en el proceso de la referencia.

5.5. Auto de pruebas proferido por la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional el 23 de marzo de 2021

5.5.1. Mediante el referido auto de pruebas se efectuaron un conjunto de preguntas a las autoridades vinculadas, así como se invitó a intervenir a instituciones, universidades, organizaciones no gubernamentales y a organizaciones de la sociedad civil. A partir de las respuestas recibidas y examinadas por la Sala se encuentra necesario profundizar algunos aspectos técnicos importantes para la decisión del presente caso, por su complejidad así como por el interés nacional y la trascendencia que reviste.

5.6. La citación a sesión técnica

5.6.1. El artículo 64 del Acuerdo 02 de 2015[39] faculta a esta Corporación para decretar pruebas en sede de revisión cuando las estime pertinentes y conducentes para obtener mayor claridad como los elementos de juicio

[39] "Artículo 64. Pruebas en revisión de tutelas. Con miras a la protección inmediata y efectiva del derecho fundamental vulnerado y para allegar al proceso de revisión de tutela elementos de juicio relevantes, el Magistrado sustanciador, si lo considera pertinente, decretará pruebas. Una vez se hayan recepcionado, se pondrán a disposición de las partes o terceros con interés por un término no mayor a tres días para que se pronuncien sobre las mismas, plazo durante el cual el expediente quedará en la Secretaría General.// En el evento de decretar pruebas, la Sala respectiva podrá excepcionalmente ordenar que se suspendan los términos del proceso, cuando ello fuere necesario. En todo caso, la suspensión no se extenderá más allá de tres meses contados a partir del momento en que se alleguen las pruebas, salvo que por la complejidad del asunto, el interés nacional o la trascendencia del caso, sea conveniente un término mayor, que no podrá exceder de seis (6) meses, el cual deberá ser aprobado por la Sala de Revisión, previa presentación de un informe por el magistrado ponente".

suficientes para adoptar la decisión y de esta manera lograr la efectiva protección de los derechos fundamentales.

5.6.2. A partir de las respuestas recibidas con ocasión del auto 132 del 23 de marzo de 2021 proferido por la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, y en vista de que la Sala Plena de la Corte Constitucional encuentra que, previo a adoptar la decisión de fondo en el presente asunto, es necesario escuchar a las autoridades públicas, a la Misión de Verificación de Naciones Unidas, y a organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil se realizará una sesión técnica con el fin de profundizar algunos aspectos de ese orden, de modo que la Sala Plena pueda profundizar aún con mayor detalle el análisis de los elementos de juicio que ya reposan en el expediente para resolver en el asunto de la referencia.

5.6.3. En ese orden, la Sala Plena de la Corte Constitucional invita a la accionante Nubia Amparo Ortega Arcos (en representación de los demandantes en el expediente T-7.987.084); al accionante Ricardo Palomino Ducuará (expediente T-7.987.142), al accionante Francisco Gamboa Hurtado (expediente T-8.009.306) y al accionante Emiro del Carmen Ropero Suárez (expediente 8.143.584), con el fin de que asistan a la sesión técnica virtual que se llevará a cabo el día lunes trece (13) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) a partir de las 8:00 a. m. y presenten un breve resumen de los hechos relacionados con sus casos, para efecto de lo cual a cada uno se le concederá un tiempo de diez (10) minutos y se les ruega ser muy estrictos en su cumplimiento.

5.6.4. Así mismo, la Sala Plena convoca al Ministro de Hacienda y Crédito Público, al Alto Comisionado para la Paz, al Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, al director de la Agencia Nacional para la Reincorporación y la Normalización, al director de la Unidad Nacional de Protección, al Presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, al Representante Especial del Secretario General y Jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, a la representación de la Misión de Apoyo al Acuerdo de Paz de la OEA, a la representación de las personas delegadas del componente Comunes ante la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI) y a la representación del Instituto Kroc.

5.6.5. La Corte invita a las autoridades y a las instituciones mencionadas a presentar un documento de respaldo a su intervención. Para el efecto se ha formulado un grupo de preguntas que se estiman relevantes con base en la revisión de las pruebas para profundizar de manera más técnica aquellas que constan ya en el expediente. **A la derecha de cada pregunta se señala cuáles son las autoridades e instituciones invitadas a responderla**. Así mismo, **en la agenda de la sesión se indican los números de las preguntas sobre las que esta Corporación solicita que cada una de las entidades convocadas se pronuncie**. Estas preguntas han sido planteadas según las funciones y competencias de cada entidad, pero son bienvenidas las anotaciones adicionales que consideren necesario realizar.

Número de la pregunta	**Preguntas sobre recursos invertidos y previstos para materializar el componente de garantía de seguridad de la población signataria del AFP en proceso de reincorporación**	**Respuesta de autoridades o intervinientes**
(1)	Especifique de manera concreta lo que le conste –en el ámbito de sus competencias o en relación con aspectos sobre los que realiza trabajos de seguimiento y verificación– acerca: **a)** Del porcentaje de recursos del Presupuesto General de la Nación que para materializar las garantías de seguridad de la población signataria del Acuerdo de Paz en proceso de reincorporación a la vida civil ha proporcionado el **Estado** y los recursos provenientes de la **Cooperación Internacional** en términos tanto porcentuales como absolutos, antes y después de la orden proferida por la Sección de primera instancia con Ausencia de Responsabilidad del Tribunal para la Paz de la JEP (SAR) en el auto SAR AT-057-2020 del 29 de abril, mediante el cual avocó "el trámite de medidas cautelares colectivas de tipo integral preventivo con el fin de proteger, entre otros, los derechos fundamentales del grupo de excombatientes de las FARC-EP comparecientes ante la JEP, en situación de riesgo por las violencias que los afectan, y que para el día de la expedición del Auto ascendían a 193 personas suscriptoras del Acuerdo Final y sujetos de especial protección constitucional dada su vulnerabilidad" y, entre otros aspectos, dispuso que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público debía definir los rubros presupuestarios y los planes aprobados a las instituciones encargadas de implementar el Sistema Integral de Seguridad para la vigencia 2020, así como las disposiciones legales que lo vinculan con la implementación del Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz (PMI) y los respectivos CONPES, lo cual permitió que la UNP obtuviera para la vigencia 2020, más de ($13.500.000) con destino al cuerpo de seguridad faltante para cubrir necesidades". **b)** Qué rubros ejecutó del Plan Plurianual de Inversiones para la Paz en el periodo comprendido entre 2018-2020, año a año y los que proyecta ejecutar para los años 2021 y 2022 precisando de esos rubros y en los mismos periodos, los que ejecutó y proyecta ejecutar en relación con la reincorporación política, social y/o económica en cumplimiento del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.	**-Gobierno Nacional** ***Ministerio de Hacienda y Crédito Público** ***Agencia Nacional para la Reincorporación y Normalización –ARN–** **-Representación de las personas delegadas del componente Comunes ante la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI)** **-Representación de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia** **-Representación de la Misión de Apoyo al Acuerdo de Paz de la OEA** **-Representación del Instituto Kroc**

	c) Qué logros se han alcanzado respecto de las metas del Plan de Inversiones para la Paz, puntualizando los resultados relacionados con la reincorporación política, social y/o económica en cumplimiento del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera y con la implementación del componente de garantía de seguridad de las y los firmantes del AFP que se encuentran en ese proceso de reincorporación.	
Número de pregunta	**Preguntas sobre garantías de seguridad para las y los comparecientes a la Jurisdicción Especial para la Paz**	**Respuesta de autoridades o intervinientes**
(2)	Precise de manera concreta las dificultades que en materia de seguridad enfrentan las y los comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y las dificultades que han encontrado tanto el Tribunal para la Paz como las Salas de Justicia para adelantar su labor, dadas por los riesgos de seguridad o por otras circunstancias.	**-Presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz**
Número de pregunta	**Preguntas sobre articulación de autoridades para garantizar la seguridad, la prevención y la protección de la población firmante del AFP en proceso de reincorporación**	**Respuesta de autoridades o intervinientes**
(3)	Manifieste de manera concreta: **a)** Qué actividades específicas se han realizado y qué medidas se han adoptado con el objeto de articular distintas autoridades a las que corresponde adelantar "acciones para la seguridad, prevención y protección de los excombatientes". **b)** Qué actividades específicas se han realizado y qué medidas se han adoptado para fortalecer la implementación de la gestión preventiva del riesgo de violaciones a los derechos humanos de las personas en reincorporación y en qué sentido a mejorado el nivel de respuesta de los actores institucionales y comunitarios y se ha articulado las acciones emprendidas entre los diferentes niveles de gobierno. **c)** Qué acciones específicas y que medidas ha adoptado la Oficina del Alto Comisionado para la Paz como instancia de coordinación con el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política.	**-Gobierno Nacional** ***Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación** ***Oficina del Alto Comisionado para la Paz** ***Unidad Nacional de Protección**
Número de pregunta	**Preguntas sobre los avances del Plan Estratégico de Seguridad; acerca del Pacto Político Nacional intersectorial para erradicar la violencia; en relación con la Mesa Técnica de Seguridad y Protección, así como en lo relativo a otros mecanismos**	**Respuesta de autoridades o intervinientes**

(4)	Manifieste de manera concreta –en el ámbito de sus competencias o en relación con aspectos sobre los que realiza trabajos de seguimiento y verificación– lo que le conste acerca de: **a)** El estado actual en el que se encuentra la implementación del Plan Estratégico de Seguridad y Protección que menciona el artículo 2.4.1.4.6 del Decreto 299 de 2017, en particular, **las medidas materiales de prevención y contra la estigmatización adoptadas, y los avances en su implementación.** Adicional a lo anterior especifique cuál ha sido la dinámica adelantada por el Gobierno Nacional para el desarrollo y puesta en marcha del Plan y cuál ha sido el papel de los y las exintegrantes de las FARC-EP en la mesa bipartita e identifique los recursos necesarios para la implementación del Plan Estratégico de Seguridad y Protección. **b)** La promoción del Pacto Político Nacional intersectorial para erradicar la violencia de la praxis política colombiana. **c)** Los avances de la Mesa Técnica de Seguridad y Protección considerando que se trata de una institución cuya finalidad consiste en desarrollar y coordinar las medidas para lograr materializar la seguridad y la protección de quienes suscribieron el AFP y se encuentran en proceso de reincorporación a la vida civil. **d)** La creación del Sistema de Planeación, Información y Monitoreo Interinstitucional. **e)** La creación de la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Desempeño del Sistema Integral de Protección. **f)** La provisión de herramientas de atención psicosocial para personas víctimas de conductas desplegadas en su contra con ocasión de la firma del AFP.	**-Gobierno Nacional** ***Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación** **-Representación de las personas delegadas del componente Comunes ante la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI)** **-Representación de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia** **-Representación de la Misión de Apoyo al Acuerdo de Paz de la OEA** **-Instituto Kroc**

5.6.6. A cada de una de las autoridades e instituciones convocadas a la sesión técnica se le otorgará un tiempo máximo de quince (15) minutos para que responda las preguntas que le han sido asignadas dentro de cada eje temático y se les ruega ser muy estrictos en su cumplimiento.

5.6.7. La sesión técnica virtual se desarrollará en una reunión de conformidad con la siguiente agenda[40]:

[40] El enlace de acceso a la plataforma será previamente enviado por la Corte Constitucional a las entidades invitadas.

AGENDA	
8:00 - 8:10 a. m.	Instalación
	Intervención de la accionante y de los accionantes invitados
8:10 -8:20 a.m.	Señora Nubia Amparo Ortega Arcos (en representación de los demandantes en el expediente T-7.987.084)
8:20-8:30 a.m.	Señor Ricardo Palomino Ducuará (expediente T-987.142)
8:30-8:40	Señor Francisco Gamboa Hurtado (expediente T-8.009.306)
8:40-8:50	Señor Emiro del Carmen Ropero Suárez (Expediente 8.143.584)
(1)	**Preguntas sobre recursos invertidos y previstos para materializar el componente de garantía de seguridad de la población signataria del AFP en proceso de reincorporación**
8:50 - 9:05 a. m.	Ministerio de Hacienda y Crédito Público [preguntas a)-c)]
9:05 - 9:20 a. m.	Agencia Nacional para la Reincorporación y Normalización –ARN– [preguntas a)-c)]
9:20 - 9:35 a. m.	Misión de Verificación de Naciones Unidas [preguntas a)-c)]
9:35 - 9:50 a. m.	Representación de las y los firmantes del Acuerdo de Paz en la CSIVI [preguntas a)-c)]
9:50 -10:05	Representación del Instituto Kroc [preguntas a)-c)]
10:05-10:20	Representación de la Misión de Apoyo al Acuerdo de Paz de la OEA [preguntas a)-c)]
(2)	**Preguntas sobre garantías de seguridad para las y los comparecientes a la Jurisdicción Especial para la Paz**
10:20-10:35 a.m.	Presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz
10:35 - 10:50 a.m.	Preguntas magistrados
10:50-11-20	**Receso**
(3)	**Preguntas sobre articulación de autoridades para garantizar la seguridad, la prevención y la protección de la población firmante del AFP en proceso de reincorporación**
11:20 -11:35 a.m.	Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación [preguntas a)-b))]
11:35 - 11:50 a. m.	Unidad Nacional de Protección [preguntas a)-b)]
11:50 a.m. - 12:05 p. m.	Alto Comisionado para la Paz [preguntas a)-c)]
(4)	**Preguntas sobre los avances del Plan Estratégico de Seguridad; acerca del Pacto Político Nacional intersectorial para erradicar la violencia; en relación con la Mesa Técnica de Seguridad y Protección, así como en lo relativo a otros mecanismos**
12:05 - 12:20 p. m.	Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación [preguntas (a) a (f)]
12:20 - 12:35 p. m.	Representación de la Misión de Verificación de Naciones Unidas [preguntas (a) a (f)]
12:35 - 12:50 p. m.	Representación de la Misión de Apoyo al Acuerdo de Paz de la OEA [preguntas (a) a (f)]
12:50 - 1:05 p. m.	Representación de las personas delegadas del componente Comunes ante la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI) [preguntas (a) a (f)]
1:20 - 1:35 p. m.	Representación del Instituto Kroc [preguntas (a) a (f)]
1:35 - 1-50 p.m.	Preguntas magistrados

Cierre	
1:50 - 2:00 p. m.	Cierre de la Corte Constitucional

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

RESUELVE

Primero. Por intermedio de la Secretaría General, **INVITAR** a la accionante Nubia Amparo Ortega Arcos (en representación de los demandantes en el expediente T-7.987.084); al accionante Ricardo Palomino Ducuará (expediente T-7.987.142), al accionante Francisco Gamboa Hurtado (expediente T-8.009.306) y al accionante Emiro del Carmen Ropero Suárez (Expediente 8.143.584) así como **CONVOCAR** y **CITAR** al Ministro de Hacienda y Crédito Público, al Alto Comisionado para la Paz, al Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, al director de la Agencia Nacional para la Reincorporación y la Normalización, al director de la Unidad Nacional de Protección, al Presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), al Representante Especial del Secretario General y Jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, a la representación de la Misión de Apoyo al Acuerdo de Paz de la OEA, a la representación de las personas delegadas del componente Comunes ante la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI) y a la representación del Instituto Kroc a la sesión técnica virtual que se llevará a cabo el día lunes trece (13) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) a partir de las 8:00 a. m. Para asistir e intervenir en la sesión técnica solo será admisible la delegación a los Viceministros. La accionante y los accionantes invitada/os así como las autoridades convocadas deben permanecer hasta el final de la diligencia judicial en mención.

Segundo. SOLICITAR a los participantes citados a la sesión técnica que remitan a la Secretaría General de la Corte Constitucional las respuestas a las preguntas formuladas, sus aportes y los estudios que consideren pertinentes, a más tardar dentro de los 10 días siguientes a la notificación del presente proveído, los cuales se dejarán en la Secretaría General de la Corte Constitucional a disposición de los interesados, durante los 3 días siguientes al vencimiento del plazo.

Tercero. ORDENAR al Jefe de Sistemas y al Jefe de Comunicaciones de la Corte Constitucional que dispongan lo necesario para la realización virtual de la sesión técnica convocada en esta providencia a través de la plataforma adecuada para el efecto.

Cuarto. DISPONER que la moderación de la sesión técnica estará a cargo de la Secretaría General de la Corte Constitucional.

Quinto. Proceda la Secretaría General de esta Corporación a librar las comunicaciones correspondientes, para lo cual deberá adjuntar copia de este proveído.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Presidente

DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR
Magistrado

ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA
Magistrada

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada

CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada

JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado

ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General

ACLARACIÓN DE VOTO

MAGISTRADO LUIS GUILLERMO PÉREZ CASAS

REFERENCIA: RESOLUCIÓN N° 1291 del 21 de abril de 2021

RADICADO N° 11861-20

MAGISTRADO PONENTE: DR. CÉSAR AUGUSTO ABREO MÉNDEZ

Respetuosamente presento las razones por las cuales ACLARO VOTO frente a la Resolución 1291 del 21 de abril de 2021 *"Por medio de la cual se DECIDE sobre el reconocimiento de personería jurídica solicitado por el partido político DIGNIDAD dentro del expediente con radicación número 11861-20".*

Dado que esta decisión del Consejo Nacional Electoral al otorgar personería jurídica al PARTIDO DIGNIDAD resulta relevante para nuestro sistema de partidos y la democracia colombiana, quiero señalar algunos elementos jurídicos que permitirán comprender que estamos ante un acto administrativo que sustenta una interpretación evolutiva y sistemática del artículo 108 constitucional, donde la aplicación análogica de normas que reconocen la escisión como un acto de autonomia partidista a partir de lo consignado en la ley 1475 de 2011, habilitaron la posibilidad jurídica del reconocimiento de este derecho, desde una perpectiva que se ajusta al respeto del principio democrático, así como la protección jurídica de las minorías y de la oposición política.

Esto último es relevante frente al deber constitucional a cargo del Consejo Nacional Electoral, que debe velar por el cumplimiento de las normas sobre partidos y movimientos políticos, por los derechos de la oposición y de las minorías (art. 265 de la C.N.) , todo ello desde una visión comprensiva del cambio de paradigma jurídico que representa la vigencia del Estatuto de la Oposición y el deber de armonizar las decisiones de la corporación desde su interpretación de la manera más amplia posible en orden a garantizar los derechos políticos de aquellos partidos con personería jurídica que se han declarado en oposición al Gobierno Nacional.

Por lo anterior, me permito realizar algunas consideraciones para mayor claridad sobre el alcance de mi aclaración de voto:

I. EL DEBER DEL ESTADO DE GARANTIZAR EL EFECTIVO GOCE DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

El artículo 2º de la Constitución establece que "son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución […]", así el alcance jurídico de la obligación impuesta al Estado de garantizar la efectividad de los derechos implica, la verdadera y efectiva proyección de la fuerza normativa de los mismos en la realidad que pretende regular. Al respecto dice Aláez Corral[1], señala:

> "La eficacia de los derechos fundamentales, como la de cualquier otra norma constitucional, sólo puede ser medida en términos jurídicos a partir de la aptitud de su contenido normativo para la consecución de su objeto"

En esa medida, la Constitución Política reclama de los operadores jurídicos que hagan efectivos los derechos; esto significa entre otras cosas, que deben remover los obstáculos presentes para alcanzar tal fin.

Así según la jurisprudencia constitucional, esta disposición significa también que dichos principios hacen presencia en todo el ámbito del derecho constitucional, ya sea integrándolo o interpretándolo, pues sus disposiciones deben ser leídas de acuerdo con esos principios, y de tal manera se cumple con el principio de supremacía de la Constitución[2].

Sobre los derechos fundamentales, la consagración de esta disposición implica que deben ser respetados, aplicados y protegidos por las autoridades en todo momento y lugar, sin necesidad de ley intermedia que así lo disponga ni de acto distinto al de su invocación, pues su eficacia proviene de la misma Constitución.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que el ejercicio efectivo de los derechos políticos constituye un fin en sí mismo y, a la vez, un medio fundamental que las sociedades democráticas tienen para garantizar los demás derechos humanos previstos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En este sentido, es preciso señalar que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, identifica al ciudadano como sujeto de tres aspectos que revisten los derechos políticos, a saber: (i) la participación en la gestión de los asuntos públicos, (ii) la participación en elecciones-votos y candidatura y (iii) el acceso a funciones públicas, como lo indica su artículo 23.

---

[1] Teoría general de los derechos fundamentales en la Constitución Española de 1978, Tecnos, Madrid, 2004
[2] Corte Constitucional, Sentencia T-079 de 1995

> "ARTÍCULO 23. Derechos Políticos
>
> "1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:
>
> a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. 2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal."

Además, sostiene la Corte IDH en el *caso Ricardo Canese vs Paraguay* que las restricciones de las que trata el inciso 2 del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no deben ser discriminatorias, deben basarse en criterios razonables, atender a un propósito útil y oportuno que se torne necesario para satisfacer un interés público imperativo, y ser proporcional a ese objetivo. Cuando hay varias opciones para alcanzar ese fin, debe escogerse la que restrinja menos el derecho protegido, y que, además, guarde mayor proporcionalidad con el propósito que se persigue.

En relación con esos deberes del Estado, la Sentencia C-150 de 2015, indica:

> "La Corte entiende que la participación como derecho de los ciudadanos y eje medular del ordenamiento constitucional vigente implica (i) el deber del Estado de abstenerse de adoptar medidas de cualquier tipo que impidan el libre ejercicio de la participación por parte de ciudadanos y organizaciones sociales, (ii) el deber de adoptar medidas de todo tipo que eviten que las autoridades públicas o los particulares interfieran o afecten el libre ejercicio de las facultades en cuyo ejercicio se manifiesta la participación y (iii) el deber de implementar medidas que procuren optimizar el desarrollo de las diversas formas de participación y que, al mismo tiempo, eviten retroceder injustificadamente en los niveles de protección alcanzados"

Estos deberes del Estado se concretan en obligaciones específicas a los que a continuación la Corte se refiere:

(i) El deber de abstenerse de estatizar la democracia y, en consecuencia, la obligación de proteger el pluralismo.

(ii) Deber de promover formas de participación democrática que comprendan no sólo la intervención de partidos o movimientos políticos sino también de organizaciones sociales de diferente naturaleza.

(iii) Deber de promover estructuras democráticas en las diferentes formas de organización social.

(iv) Prohibición, que vincula a todos los órganos públicos, funcionarios y particulares, de eliminar alguna de las dimensiones de la democracia.

(v) Mandato de no sustituir a las autoridades estatales competentes en el desarrollo de actividades de control.

Así las cosas, cabe sostener que el sistema de los derechos fundamentales presentes hoy en Colombia demanda una actuación del Estado que implica, entre otras cosas, dar un margen de interpretación amplio. En ese sentido, el artículo 40 contempla los derechos políticos de los ciudadanos en el conjunto de los derechos fundamentales, como presupuesto para la real participación en la organización del Estado a través de competencias ciudadanas para conformar, ejercer y controlar el poder político:

> "Artículo 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:
> 1. Elegir y ser elegido.
> 2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática.
> 3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas.
> 4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley.
> 5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas.
> 6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley.
> 7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse.
> Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la Administración Pública"

Sumado a lo anterior, el artículo 107 constitucional, señala:

> "Artículo 107. Se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos, y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse. En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento políticos con personería jurídica. Los partidos y movimientos políticos se organizarán democráticamente. Para la toma de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos podrán celebrar consultas populares o internas que coincidan o no con las elecciones a corporaciones públicas, de acuerdo con lo previsto en sus estatutos. En el caso de las consultas populares se aplicarán las normas sobre financiación y publicidad de campañas y acceso a los medios de comunicación del Estado, que rigen para las elecciones ordinarias. Quien participe en las consultas de un partido o movimiento político no podrá inscribirse por otro en el mismo proceso electoral. También se garantiza a las organizaciones sociales el derecho a manifestarse y participar en eventos políticos"

Sobre el particular, el texto constitucional además de reiterar la garantía ciudadana de fundar y organizar partidos políticos establece el derecho a organizar y desarrollar las instituciones partidistas sobre los principios de transparencia, objetividad, moralidad, equidad de género y democratización interna. En el mismo articulado se garantiza a las organizaciones sociales el derecho a manifestarse y a participar en eventos políticos, premisa que de primera mano desdibuja un escenario de monopolio de la actividad política por parte de los partidos políticos y en su lugar, crea escenarios de pluralismo social, donde los ciudadanos cuentan con la posibilidad de ejercitar sus derechos políticos a partir de una variedad de opciones, sin estar sometidos a una estructura formal partidista.

II. REGLAS DE DISOLUCIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN O LIQUIDACIÓN DE LOS PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS.

Si bien la escisión de los partidos y movimientos políticos no ha sido reglamentada, ello no es óbice para hacer respetar la voluntad autónoma de los partidos y la garantía del ejercicio de sus derechos políticos. En concordancia el artículo 84 de la Constitución Política expone:

> "ARTICULO 84: Cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera general, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio"

Con lo anterior se evidencia cómo el texto constitucional, da una garantía para que los derechos fundamentales que hayan sido reglamentados de manera general o no hayan sido reglamentados, como es el caso de las escisiones, no se vean menoscabados por una interpretación restrictiva.

En ese sentido la ley 1475 de 2011, por la cual se adoptaron reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos y de los procesos electorales, señala que los estatutos de los partidos y movimientos políticos deben contener como mínimo:

> "(…) 1.Denominación y símbolos.
> 2. Régimen de pertenencia al partido o movimiento políticos en el que se señalen reglas de afiliación y retiro, así como los derechos, deberes y prohibiciones de sus miembros.
> 3. Autoridades, órganos de dirección, gobierno y administración, y reglas para su designación y remoción.
> 4. Convocatoria, fecha y demás aspectos relacionados con la reunión de la convención del partido o movimiento político, o de su máximo órgano de dirección, la cual deberá realizarse por

lo menos cada dos (2) años, y garantizar a sus miembros influir en la toma de las decisiones más importantes de la organización política.

5. Autoridades, órganos de control, entre estos el Consejo de Control Ético y el Veedor de la respectiva organización, junto con las reglas para su designación y remoción.

6. Deberes de los directivos, entre ellos el de propiciar procesos de democratización interna y el fortalecimiento del régimen de bancadas.

7. Regulación interna del régimen de bancadas en las corporaciones de elección popular.

8. Mecanismos de impugnación de las decisiones adoptadas por los órganos de dirección, gobierno, administración y control, así como por las respectivas bancadas.

9. Código de Ética, en el que se desarrollen los principios de moralidad y el debido proceso, y en el que se fijen, además, los procedimientos para la aplicación de las sanciones por infracción al mismo, mínimos bajo los cuales deben actuar los afiliados a la organización política, en especial sus directivos.

10. Postulación, selección e inscripción de candidatos a cargos y corporaciones de elección popular mediante mecanismos democráticos teniendo en cuenta el deber de garantizar la equidad de género.

11. Consultas internas, populares o el proceso de consenso para la selección de candidatos a cargos o corporaciones de elección popular y para la toma de decisiones con respecto a su organización o la reforma de los estatutos.

12. Régimen disciplinario interno, en el que se adopten mecanismos para sancionar la doble militancia, así como para separar del cargo a sus directivos cuandoquiera que no desempeñen sus funciones conforme a la Constitución, la ley y los estatutos.

13. Financiación de los partidos o movimientos políticos, de las campañas y, en particular, la forma de recaudo de contribuciones y donaciones, control al origen y cuantía de las mismas, distribución de la financiación estatal, apoyo financiero a sus candidatos, y publicidad de todo ingreso y gasto.

14. Procedimiento de formulación, aprobación y ejecución de su programa y de su presupuesto.

15. Sistema de auditoría interna y reglas para la designación del auditor, señalando los mecanismos y procedimientos para el adecuado manejo de la financiación estatal del funcionamiento y de las campañas.

16. Utilización de los espacios institucionales en televisión y en los medios de comunicación para efectos de la divulgación política y la propaganda electoral.

17. Reglas que desarrollen los deberes a cargo de los partidos o movimientos políticos, y

18. Reglas de disolución, fusión con otros partidos o movimientos políticos, o escisión y liquidación.

PARÁGRAFO. Los partidos o movimientos políticos adecuarán sus estatutos a lo dispuesto en la presente ley en la siguiente reunión del órgano que tenga la competencia para reformarlos”.(Subrayado es nuestro)

En armonía con lo anterior el artículo 14 de la misma norma, establece de nuevo la posibilidad de la escisión voluntaria de los partidos, señalando lo siguiente:

> "Articulo 14 (…) La disolución, liquidación, fusión y escisión de los partidos y movimientos políticos se regirá por lo dispuesto en **la ley y/o en sus estatutos**. La disolución y liquidación de los partidos y movimientos políticos, adoptada por decisión administrativa del Consejo Nacional Electoral no tendrá recurso alguno. No podrá acordarse la disolución, liquidación, fusión y **escisión voluntaria** de un partido o movimiento político cuando se haya iniciado proceso sancionatorio.(…)" (subrayado propio)

Adicionalmente, en el análisis que hace la Corte Constitucional[3] sobre estos mandatos se menciona que la disolución, liquidación, fusión y escisión cuando son de carácter voluntario, implican el reconocimiento del legislador de la potestad de los partidos de tomar sus decisiones de acuerdo con la ley y los estatutos internos, señalando que:

> "(…) esta opción es compatible con la Constitución, puesto que desarrolla la dimensión negativa de la libertad de conformar agrupaciones políticas sin limitación alguna (Art. 40-3 C.P.). Es claro que si la Carta confiere ese derecho, en él se encuentra contenida la posibilidad que sus integrantes decidan disolver y liquidar el partido o movimiento político correspondiente, pues de lo contrario la constitución del mismo no sería libre, en los términos de la citada norma superior".

Adicionalmente se destaca:

> "La exequibilidad del primer contenido normativo no ofrece mayor resistencia, habida consideración que indicar que la ley y los estatutos de los partidos y movimientos definirán las reglas para su disolución, liquidación, fusión y escisión, se explica tanto en la cláusula general de competencia legislativa sobre la materia, como por el grado de autonomía que la Carta reconoce a las agrupaciones políticas. Este margen se expresa, por antonomasia, a través de la fijación de regulaciones estatutarias a través de mecanismos democráticos internos".

En el marco de esa autonomía, los partidos y movimientos políticos que reglamenten dentro de sus estatutos la posibilidad de la escisión voluntaria y su reglamentación, tienen el derecho al reconocimiento de su personería jurídica derivada de la que ya tiene el partido de la cual se escinde, entendiendo esta cómo una reorganización de las fuerzas políticas de la colectividad que permite al electorado votar por aquellos que representan realmente sus ideologías políticas y el desarrollo de las libertades individuales de los representantes de los partidos y su militancia.

En esa medida se debe considerar que la interpretación de las normas en materia electoral tiene que congregar unos presupuestos y principios encaminados a proteger el derecho fundamental de participación, el pluralismo y el derecho a la oposición política como expresión garantista y efectiva de los derechos humanos ligados a los derechos políticos de los

[3] Sentencia C-490-11 de 23 de junio de 2011, Magistrado Ponente Dr. Luis Ernesto Vargas Silva

ciudadanos, en este caso la participación en el ejercicio de poder, el derecho de representación, derechos democráticos y derechos de oposición política.

En ese escenario, la normatividad electoral tiene que fijar sus criterios basados en los principios universales e interpretarse conceptualmente desde una lógica encaminada a garantizar la efectividad de los derechos humanos, el derecho de participación política y el derecho de oposición como derechos fundamentales universales.

En ese orden, la obtención de personería jurídica de una agrupación que voluntariamente se escinde de su partido en concordancia con las reglas establecidas en los estatutos, no implica la participación en el certamen electoral en el que se elige al Congreso de la República, pues la norma no está exigiendo dicho requisito, presupuesto bajo el cual el estudio debe versar sobre la existencia de la figura de escisión en los estatutos de la colectividad que lo solicita y el cumplimiento de los requisitos que allí se manifiestan, de manera que la nueva colectividad consolide una verdadera alternativa de poder, como el fin democrático y que a los representantes que fueron avalados en el momento por el partido escindido no se les aplique la inhabilidad por doble militancia.

III. DE LOS ESTATUTOS DEL POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO- PDA:

De conformidad con lo expuesto con anterioridad, se observa que dentro de los estatutos del partido en mención existe la figura de la escisión cuya competencia recae en el Congreso Nacional como máximo organismo de decisión a nivel nacional, así, según las funciones de este, consignadas en el artículo 23 de los estatutos:

> "Artículo 23.- Funciones. Son funciones del Congreso Nacional:
>
> (…) 10. Disolver o escindir el Partido con la aprobación mínima de las tres quintas (60%) partes de sus delegados elegidos."

De conformidad con lo anterior, en caso de que se cumpla el porcentaje de aprobación consignado en los estatutos, y cómo parte de la democracia interna del partido, debe respetarse la decisión sin menoscabar los derechos del sector que tomó la decisión, otorgando la personería jurídica al sector escindido.

IV. LA DECISIÓN DE LA COLECTIVIDAD

Tal y cómo está consignado en la petición de atención prioritaria del sector político escindido del Polo Democrático Alternativo, denominado, DIGNIDAD el Comité Ejecutivo Nacional, adoptó por unanimidad la Resolución 075 de 2020 mediante la cual decidió:

"(…) ARTICULO SEGUNDO: Este Congreso Extraordinario tratará únicamente de la aprobación de la declaratoria de escisión, con el lleno del requisito señalado en los Estatutos del Polo Democrático Alternativo en el Artículo 23 numeral 10, del sector del partido representado por el senador Jorge Enrique Robledo Castillo, el representante a la cámara Jorge Gómez Gallego, el secretario general del Polo Gustavo Rubén Triana Suárez y los siguientes miembros del Comité Ejecutivo Nacional: Clara Cecilia Giraldo Puerta, Carlos Eduardo Naranjo Ossa, Francisco José Valderrama Mutis, José Fernando Ocampo Trujillo, Enrique Alfredo Daza Gamba, Elías Fonseca Cortina, Yasmin Romero Epiayu y Carlos Mario Acero Castellanos, miembros principales y Alba Luz Pinilla Pedraza, Angelica Giovanna Riaño Lozano, Sara Sofía Abril G, Laura Catalina Nava Farfan, Jaime Moreno García y Aurelio Suárez Montoya, miembros suplentes del Comité Ejecutivo Nacional.

ARTICULO TERCERO. La escisión de que trata el artículo anterior se tramita conforme a la Ley 1475/11 y los Estatutos del Polo Democrático Alternativo, está referida a la escisión política y legal de dicho sector de compañeros y en tal sentido no tiene pretensiones de carácter civil, comercial, administrativo o económico que afecten la Personería Jurídica, los símbolos, patrimonios y funcionamiento del Polo Democrático Alternativo, sin detrimento de las garantías que para su ejercicio político los escindidos soliciten al Consejo Nacional Electoral."

Así, en el "ACTA DE ESCRUTINIO SOBRE LOS VOTOS EMITIDOS EN EL CONGRESO EXTRAORDINARIO DEL POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO, PARA LA ESCISIÓN DE UN SECTOR DEL PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO. RESOLUCIÓN 075 DE 05 DE OCTUBRE DE 2020", se observa que el Congreso Nacional del Polo Democrático Alternativo aprobó con más de tres quintas (60%) partes de sus delegadas y delegados elegidos, la solicitud de escisión, cumpliendo con el requisito señalado en los artículos 23 y 93 de los estatutos del Polo Democrático Alternativo, la votación fue la siguiente:

OPCION DE VOTO	VOTOS SALA No. 1	VOTOS SALA No. 2	VOTOS SALA No. 3	TOTAL, VOTOS
A FAVOR	163	132	110	**405**
EN CONTRA	4	0	1	**5**
EN BLANCO	0	0	0	**0**
TOTAL, VOTOS VALIDOS	167	132	111	**410**
TOTAL, VOTOS NO MARCADOS	0	0	0	**0**
TOTAL, VOTANTES	167	132	111	**410**

En conclusión, la decisión de la convención no es más que el resultado de un mecanismo interno democrático del partido que permite a sus representantes y militantes tomar decisiones como parte de un proceso de democratización de la política, y la materialización del papel de canalizar la voluntad pública y la pluralidad de intenciones dentro de la colectividad, función en la que se sustenta el vínculo necesario entre el fortalecimiento de los partidos y

movimientos políticos y la vigencia del principio democrático participativo al respecto la Corte Constitucional ha señalado:

> "La democracia interna beneficia a la organización política y a la sociedad en general, pues, fortalece su función mediadora y mantiene su apertura hacia las pretensiones, intereses y demandas genuinas de sus bases que apelan a ella como instancia de ascenso de la sociedad hacia el Estado. El proyecto conserva esta premisa de respeto a la libertad interna de los partidos y movimientos, ya que, de acuerdo con sus disposiciones, la consulta sólo se realiza si ella es solicitada por sus respectivas autoridades."[4]

V. LA AUSCENCIA DE LA DOBLE MILITANCIA DERIVADA DE LA CONSTITUCIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN POLÍTICA POR PARTE DE MILITANTES ESCINDIDOS DE UN PARTIDO POLÍTICO

La doble militancia constituye una limitación al ejercicio de los derechos políticos, en particular, a las garantías establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 40 de la Constitución Política, esto es, los derechos a elegir y ser elegido, y de constituir agrupaciones políticas, formar parte de ellos y difundir sus ideas y sus programas.

Esta restricción encuentra justificación en la necesidad de contar con un marco normativo adecuado para lograr el fortalecimiento de las organizaciones políticas, como instrumentos vertebrales para asegurar la realización del principio democrático representativo y la vigencia plena de los principios de la soberanía popular y la democracia participativa.

Como lo señaló la Corte Constitucional en sentencia C-490 de 2011, la prohibición de la doble militancia pretende contrarrestar "las prácticas personalistas, la atomización de los partidos y movimientos, y la incursión de actores ilegales que terminan por afectar la vigencia del principio democrático representativo".

Adicionalmente dicha disposición busca proteger la confianza del elector en el plan de acción política que se le ofrece. Todo a fin de garantizar la disciplina de las organizaciones políticas, mediante el establecimiento de unas reglas claras para sus militantes, directivos y para quienes ejercen cargos de elección popular.

El artículo 107 de la Constitución Política, modificado por el artículo 1º del Acto Legislativo 1 de 2009, y el artículo 2º de la Ley 1475 de 2011, que desarrolla aquel, establecen las siguientes situaciones constitutivas de doble militancia, atendiendo a sus distintos destinatarios:

[4] Corte Constitucional, Sentencia C-089 de 1994

Ciudadanos: Estar inscritos como militantes de forma simultánea en más de una organización política.

Militantes, directivos o administrativos de organizaciones políticas, candidatos a cargos de elección popular, o elegidos en los mismos: Apoyar candidatos de organizaciones políticas diferentes a las que pertenecen.

Elegidos: Cambiarse de la organización política que inscribió su candidatura mientras tengan la investidura u ocupen el cargo para el que fueron elegidos, salvo que renuncien a la curul o al cargo al menos 12 meses antes del primer día de inscripciones de candidaturas de la próxima elección.

Directivos de organizaciones políticas: Postularse como directivo o candidato de otra organización política, salvo que renuncien mínimo 12 meses antes de la postulación, la aceptación del cargo directivo o la inscripción como candidato.

Candidatos: Participar en las consultas de un partido o movimiento político o en consultas interpartidistas y luego inscribirse por uno distinto o por un grupo significativo de ciudadanos en el mismo proceso electoral.

Así, es importante aclarar que la doble militancia no impide ejercer libremente el derecho a afiliarse a agrupaciones políticas, consagrado en el numeral 3 del artículo 40 de la Constitución Política. Lo que busca la prohibición es que los militantes contribuyan al fortalecimiento de los partidos y movimientos políticos a los que pertenecen y en especial, exige un mayor compromiso de quienes adquieren la condición de candidatos o elegidos con su aval, de modo que no se afilien con el solo interés de obtener un cargo de elección popular.

Sin embargo, en el caso concreto la participación de los representantes en elecciones posteriores como candidatos del nuevo partido que surge de la escisión mencionada en este escrito no podría implicar la concurrencia de la doble militancia, en cuanto la nueva agrupación política surge de una decisión interna del partido del cual se desprende el grupo de militantes. Para el caso concreto no aplica la exigencia a los elegidos por el Polo Democrático Alternativo, aspirar a nombre del nuevo partido político Dignidad para una próxima elección, o renunciar al cargo dentro del plazo que establece la ley.

VI. SOBRE LAS REGLAS DE LAS COALICIONES

Si bien estricto *sensu* aquí no estamos definiendo la personería jurídica de partidos políticos minoritarios que coaligados alcancen el 3% del umbral electoral, si estamos ampliando una lectura garantista del art. 108 de la Carta Política. La Corte Constitucional en Sentencia C-1081 del 24 de octubre de 2005. M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra, reconociendo la figura de las coaliciones manifestó:

> "En uno u otro terreno lo que subyace es la suma de esfuerzos, la repartición de tareas y la existencia de un propósito común, que puede llegar a ser preelectoral y poselectoral. (…) Lo propio ocurre en la doctrina constitucional, pues el Tribunal Constitucional al pronunciarse sobre la exequibilidad del Reglamento 01 de julio 25 de 2003, equiparar igualmente las coaliciones y las alianzas, al señalar por ejemplo que "…resulta obvio que la presentación de listas por parte de coaliciones o alianzas partidistas o de movimientos políticos con personería jurídica secunda el espíritu de la reforma.", y "…que las coaliciones o alianzas no desconocen el mandato superior de presentar candidatos o listas únicos".

Lo anterior se refuerza con lo expuesto por La Sección Quinta del Consejo de Estado en sentencia del 4 de agosto de 2011:

> "(…) Se evidencia que en el contexto colombiano la decisión libremente adoptada por las organizaciones políticas de juntar esfuerzos para lograr un fin común en el campo de lo político, bien puede calificarse como coalición o como alianza; de igual forma demuestra que desde el punto de vista cronológico esas formas de asociación pueden ocurrir con antelación a las elecciones, con miras a juntar fuerzas electorales para alzarse con el poder político, como así lo pone de presente el artículo 107 Superior (Mod. A.L. 01/09 Art. 1), al precisar que estos colectivos están autorizados a presentar candidatos propios o por coalición, para lo cual pueden acudir a instrumentos como las consultas populares o internas o interpartidistas. (…) Lo dicho hasta el momento permite afirmar que las coaliciones o alianzas surgen de la manifestación libre y voluntaria de las organizaciones políticas, llámense partidos o movimientos políticos, o asociaciones o grupos significativos de ciudadanos; que se pueden pactar antes de las elecciones y con el propósito de conquistar el poder político en las urnas, y que también se pueden dar esos acuerdos con fines programáticos o de gobierno, posteriores a la jornada electoral (…)"

Afín a lo anterior, el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2009, situó en el rango constitucional la escogencia de candidatos por coalición al modificar el artículo 107 de la C.P

> "ARTÍCULO 1o. El artículo 107 de la Constitución Política quedará así: Se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos, y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse. En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político con personería jurídica. Los partidos y movimientos políticos se organizarán democráticamente y tendrán como principios rectores la transparencia, objetividad, moralidad, la equidad de género, y el deber de

presentar y divulgar sus programas políticos. Para la toma de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos propios o por coalición, podrán celebrar consultas populares o internas o interpartidistas que coincidan o no con las elecciones a Corporaciones públicas "

Por otra parte, la Corte Constitucional en sentencia T-406 de 1992 indicó:

> "Es importante tener en cuenta que la eficacia de las normas constitucionales no se puede determinar en abstracto; ella varía según las circunstancias propias de los hechos: una norma de aplicación inmediata (art. 85) puede tener mayor o menor eficacia dependiendo del caso en cuestión; lo mismo un valor o un principio. El juez debe encontrar, en la relación hecho-norma la decisión más razonable, no sólo desde el punto de vista jurídico sino también desde el punto de vista táctico (...)"
>
> Por lo tanto, el artículo 85 Superior catalogó el derecho de todo ciudadano a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político como de aplicación inmediata y, que por ende no requiere de desarrollo legal para su materialización, derecho que puede hacerse efectivo, entre otras circunstancias, a través de la posibilidad de elegir y ser elegido"

Finalmente, sobre la omisión legislativa el Consejo de Estado en sentencia 11001-03-28-000-2018-00019-00, resalta: "Es claro que el inciso 5 del artículo 262 Superior, mediante la modificación introducida por el acto legislativo No 02 del 2015, insiste sobre la materia, constitucionalizado nuevamente aspectos específicos de coaliciones, ello no desvirtúa el hecho de que, sin necesidad de Ley que las definiera o instituyera, las coaliciones existen y han funcionado por sí mismas sin exigencia de desarrollo legal específico." (…) por ser principios mínimos de naturaleza constitucional, no necesitan esperar la expedición de una ley para que sea exigible su observancia. Por consiguiente, no es factible argüir la ausencia de un estatuto legal que desarrolle tales principios para desconocerlos, ya que imperan por directo ministerio de la Constitución Política".

En tales términos, la Sala del máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo concluye que las normas constitucionales, ya hacen parte del ordenamiento jurídico y de manera general, no necesitan esperar la expedición de una ley para que sea exigible su observancia, situación que impide entonces, alegar simplemente la ausencia de desarrollo legal para desconocer el sentido y mandato mismo de las normas constitucionales, ya que estas imperan por directo ministerio de la Constitución Política.

Bajo tal marco, a efectos de determinar la viabilidad de aplicar de manera directa la norma constitucional en comento, en relación con el derecho a presentar listas de coalición a elecciones de cargos de corporaciones públicas, se reitera que "las coaliciones constituyen mecanismos estratégicos que cuentan con el aval constitucional, para ser aplicados en los procesos de escogencia de candidatos (Art. 107 C.P.), como quiera que constituyen una

expresión del libre ejercicio del derecho de participación y de postulación política" y, en tal sentido, "El establecimiento de unos acuerdos básicos entre los partidos y movimientos políticos concurrentes, sobre aspectos fundamentales de la asociación estratégica establecida, constituye un desarrollo de la libertad organizativa interna de los partidos y movimientos políticos en el marco de la autonomía que les reconoce la Constitución; constituyen así mismo elementos fundamentales de los procesos democráticos, y un factor que propende por la transparencia, la objetividad y la equidad en la administración de la empresa electoral conjunta".

De dichas normas, se desprende que en el formulario de inscripción del candidato se indiquen los partidos y movimientos que integran la coalición, la filiación política del candidato, y los acuerdos previos de coalición.

A su vez el Acto Legislativo 2 de 2015 modificó el artículo 262 constitucional, en el sentido de permitir que los partidos y movimientos políticos que sumados hayan obtenido una votación de hasta el quince por ciento (15%) de los votos válidos de la respectiva circunscripción, presenten listas de candidatos en coalición para corporaciones públicas.

Sobre el particular, preciso es señalar que frente a la aplicación o no de este precepto constitucional, o de si era necesario que se expidiere una ley que regulare el procedimiento para que los partidos o movimientos políticos pudieren coaligarse para postular listas de candidatos a corporaciones públicas, la sección quinta del Consejo de Estado concluyó que ello no era necesario, pues si bien existía omisión legislativa y que el artículo 29 de la Ley 1475 de 2011 no puede aplicarse a estas coaliciones, lo cierto es que, el postulado contenido en el párrafo 5 del artículo 262 constitucional debe ser aplicado y reconocido directamente.

De manera específica se señaló:

> «3.3.1.3. Conforme con lo anterior, la Sala determina sin mayor esfuerzo, que es cierto que para la fecha de la presente providencia, se presenta la omisión legislativa acusada en la demanda, en tanto NO existe ley que regule lo dispuesto en el inciso 5o del artículo 262 de la Constitución Política, en relación con las elecciones de miembros de corporaciones públicas.(...)
>
> 3.3.2.3. Así las cosas, frente al segundo punto del primer problema jurídico, la Sala encuentra que los parámetros establecidos por el legislador en el artículo 29 de la Ley 1475 de 2011, NO, resultan aplicables a las elecciones de miembros del Senado de la República y la Cámara de Representantes, ya que dicha norma refiere y puede aplicarse de manera específica y exclusiva a los casos de cargos de elección popular uninominales.
>
> (...)

3.4.3.2.2. Significa lo anterior, que a pesar de la omisión legislativa probada en este caso, no puede desconocerse ni obviarse lo dispuesto en el inciso 5o del artículo 262 de la Constitución Política, en relación con la inscripción por coalición de listas a cargos de elección popular en corporaciones públicas, pues dicho postulado puede y debe ser aplicado y reconocido de manera directa, entre otras, por las entidades administrativas y judiciales, en atención a la consagración de un derecho que deviene, entre otras cosas, del esfuerzo del legislador, de fortalecer la democracia."

La solicitud presentada a esta Corporación y que es revisada en la resolución aprobada, en su motivación se refirió al reconocimiento de la personería jurídica de los partidos Unión Patriótica - UP, Movimiento Alternativo Indígena y Social -MAIS y Alianza Social Independiente – ASI, caso en el que las organizaciones políticas recién mencionadas se presentaron coaligadas a elecciones del Congreso de la República, coalición que obtuvo más del 3% de los votos válidos.

En ocasión del escenario referido el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Estado coincidieron en el reconocimiento de la personería jurídica a las tres organizaciones políticas a pesar de que no se cumplió con la regla constitucional establecida en el artículo 108 de la Constitución Política, esto es, la superación de citado umbral del 3% por parte de cada organización de forma individual.

La coincidencia de las altas corporaciones se da al reconocer la figura de la coalición como un esfuerzo para que las minorías no desaparezcan de los escenarios de representación popular, esto afirmado por el Consejo de Estado en los siguientes términos:

"143. Por consiguiente, resulta proporcional la resolución impugnada cuando del tenor literal del artículo 108 constitucional, extrae que la condición para conservar la personería jurídica es que las agrupaciones políticas obtengan un mínimo de apoyo ciudadano materializado en votos efectivamente depositados, circunstancia que se puede cumplir de manera individual o por coalición, en tratándose de partidos o movimientos políticos de carácter minoritario, en los términos previstos por el artículo 262 ídem."

Conforme a lo anterior, la Corporación debe tener en cuenta que los congresistas que han sido elegidos por el Partido Polo Democrático Alternativo, en pro de los principios y deberes políticos, tienen el derecho a representar a la organización política con la cual se declararen militantes, entendiendo a la nueva colectividad cómo una minoría política a la cual no puede causarse un agravio injustificado.

VII. SOBRE LA PERSONERÍA JURÍDICA AL PARTIDO DIGNIDAD

Tal lectura de las garantías constitucionales puede ser aplicada a la figura de la escisión en tanto, el abrigo legal en su existencia la ubica en coherencia con los fines y principios

constitucionales, así como con los fines de las reformas legislativas. Ahora, sobre las reformas legislativas el Consejo de Estado afirmó lo siguiente:

> "146. Así mismo, si bien los Actos Legislativos de 2003 y 2009 modificaron la forma de lograr la personería jurídica y, el Acto Legislativo de 02 de 2015 elevó a rango constitucional las coaliciones de listas, no se debe olvidar que las dos normas buscan el mismo fin, que no es otro diferente al fortalecimiento democrático, prueba de ello es la reforma introducida por el Acto Legislativo de 2015, al inciso 5 del artículo 262 Constitucional, deja claro que dicho acto estaba dirigido desde su génesis, entre otras cosas, "para abordar en forma integral un ajuste institucional cuyo propósito fundamental es el fortalecimiento de la democracia y de nuestro sistema político" y, por tanto, incluyó entre sus objetivos el de "1. Modificar disposiciones electorales dirigidas a fortalecer la democracia"

El fortalecimiento de la democracia como fin constitucional implica la integración de las minorías al sistema político, situación que es vista como un imperativo por la Corte Constitucional en sentencia C-027 de 2018.

> "En relación con el espacio para las minorías políticas como expresión y garantía del pluralismo, la sentencia C-141 de 2010 sostuvo que "no se trata de desconocer el principio mayoritario que todavía es eje central de la democracia, sino de reconocer que, siendo imposible la unanimidad, la configuración de una mayoría implica la existencia de las minorías que en un debate electoral no logran hacer triunfar sus respectivas opciones. Esas minorías, lejos de ser acalladas en aras del predominio mayoritario, tienen derecho a ofrecer sus opiniones y programas como alternativas con posibilidad real de concitar la adhesión ciudadana para transformarse en mayoría, lo que exige la previsión de reglas que encaucen la dinámica del proceso político y, claro está, el acatamiento de esas reglas, sobre todo por aquellos que encarnan el ideal mayoritario"."(Negrilla fuera del texto original)

El desconocimiento de los derechos de las minorías implica no solo la negación de las medidas afirmativas necesarias para el fortalecimiento de la democracia, sino también el fomento de un ideal mayoritario de sociedad, el cual a la luz de la jurisprudencia constitucional es lesivo de los principios constitucionales.

En coherencia con lo dicho, debe entenderse a la figura de la coalición, así como a la de la escisión como mecanismos, que teniendo como objetivo el fortalecimiento de la democracia y la concreción de la oportunidad para que las organizaciones minoritarias puedan existir sin desmedro de sus derechos, lo cual implica que la personería jurídica se ubica como una herramienta para el ejercicio de los derechos constitucionales de dichas minorías.

Ahora, de cara a la solicitud en cuestión, se tiene además que el sector escindido está encabezado por uno de los senadores más votados del país, el doctor Jorge Enrique Robledo quien obtuvo en la última elección a Senado de la República un total de 226.099 votos, razón por la cual ha de reconocerse a la organización escindida del mencionado partido su

personería jurídica, comprendiendo que deriva de una expresión representativa de la oposición y como una minoría política que tiene un importante respaldo ciudadano.

VIII. SOBRE EL DEBER DE INTERPRETACIÓN CONFORME AL ESTATUTO DE LA OPOSICIÓN

Adicionalmente, pero no menos importante es la noción de interpretación evolutiva del artículo 108 constitucional, que se identifica en esta resolución, pero que desde mi punto de vista se encuentra hoy también como una obligación que debe acatarse a favor de proteger a los partidos políticos declarados en oposición. Es así como el legislador y posteriomente la Corte Constitucional en sentencia C-018-18, concibieron el estatuto de la oposición (ley 1909 de 2018) como una garantía para el desarrollo de los principios del Estado de Derecho y de la democracia, así, y dada la intepretación que se exige, el máximo Tribunal de lo Contitucional sostuvo respecto del artículo 5 literal h) de la ley 1909 de 2018 (armonización con los convenios y tratados internacionales):

> "(…) el legislador estatutario previó que la interpretación de las garantías y los derechos asociados al ejercicio de la oposición política sea hecha de la manera más amplia posible, con el fin de, por esta vía, maximizar el contenido y el ejercicio de los derechos políticos. Dicha previsión es compatible con la maximización del principio democrático a la cual ya se ha hecho referencia en esta sentencia. De otro lado, guarda identidad con lo dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con los derechos políticos que deberán ser protegidos y concretados en la mayor medida por los Estados"

Es decir, que la interpretación adoptada en esta ocasión por parte del Consejo Nacional Electoral resulta siendo respetuosa de las obligaciones internacionales que se derivan del bloque de constitucionalidad (artículo 93 C.N.), así como del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, precisamente en un contexto que exige de los Estados Parte de dicho tratado, cumplir sus compromisos bajo el principio *pacta sunt servanda* (de buena fe) y acorde con el mandado de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

Finalmente, y comprendiendo que el estatuto de la oposición fue un avance democrático que solo se logró como consecuencia del Acuerdo de Paz del Teatro Colón[5], basta señalar que futuros actos administrativos del CNE deben integrar en sus análisis jurídicos, la importancia de adoptar un enfoque de derechos humanos y paz que irradia a las instituciones del Estado en materia de implementación y cumplimiento.

---

[5] Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Disponible en: https://www.jep.gov.co/Documents/Acuerdo%20Final/Acuerdo%20Final%20Firmado.pdf

IX. CONCLUSIONES

Los argumentos integrados en el presente aclaración de voto permiten afirmar que es pertinente el reconocimiento de la personería jurídica de los militantes escindidos del Polo Democrático Alternativo, estos autodenominados ahora como PARTIDO DIGNIDAD, en tanto:

Primero: Los fines constitucionales indican que corresponde a esta Corporación, así como a todas las entidades públicas como representantes del Estado, garantizar el ejercicio de los derechos y deberes consagrados en la Constitución, entre estos el derecho a la participación política desde el respeto al principio democrático, la autonomía partidista, la garantía de derechos a las minorías y la oposición. Tal afirmación es ratificada por fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como también es recogida por lo contenido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es deber del Consejo Nacional Electoral otorgar por consiguiente la habilitación de la personería jurídica al PARTIDO DIGNIDAD, no sin antes destacar del deber de interpretar de la manera más amplia posible los derechos políticos (Ley 1909 de 2018 artículo 5 literal h).

Segundo: La escisión es una figura que implica la reorganización de las colectividades políticas con personería jurídica, de tal manera que las expresiones políticas que sea escindidas de un partido político, podrán continuar en ejercicio de la representación política a través del ejercicio de los derechos propios en coherencia con el reconocimiento de su personería jurídica, esto en tanto, en el caso bajo examen la norma no prevé exigencia adicional a la decisión de la escisión al interior del partido político.

Tercero: La escisión en cuestión se desarrolló en coherencia con lo dispuesto en los estatutos del partido Polo Democrático Alternativo, fue democrática y consensuada.

Cuarto: No existe doble militancia por parte de los militantes escindidos del partido Polo Democrático Alternativo para la conformación del partido Dignidad, toda vez que se ha dado una división al interior del PDA, la cual tiene presunción de legalidad por haberse ejercido en gracia de derechos constitucionales y legales.

Lo dicho sumado a que el objetivo de la prohibición constitucional de la doble militancia no corresponde a la herramienta de la escisión, toda vez que la mencionada prohibición promueve el fortalecimiento de las organizaciones políticas, mientras que la escisión es un derecho de las organizaciones políticas, derechos que también buscan el fortalecimiento de los partidos políticos.

Quinto: Se tiene como antecedente el reconocimiento de la personería jurídica de la Unión Patriótica - UP, Movimiento Alternativo Indígena y Social -MAIS y Alianza Social Independiente – ASI, situación que tiene coincidencia con el caso en cuestión en tanto se promueve la defensa de los derechos de las minorías políticas, y la integración de estas.

Finalmente, reafirmo que valoro profundamente que el Consejo Nacional Electoral haya optado por una interpretación garantista de los derechos políticos con un enfoque que se deriva del principio democrático, y una visión amplia del artículo 108 constitucional. No puedo dejar de manifestar, que esta posición que hoy se aprueba por mayoría de la Sala, fue precisamente la que solicité se tuviese en cuenta en asuntos de reparación colectiva como la solicitud de otorgamiento de la personería jurídica del PARTIDO NUEVO LIBERALISMO, o la que fue negada sin consideración al Estatuto de la Oposición a la colectividad COLOMBIA HUMANA, esta última a pesar de haber obtenido más de 8 millones de votos y en consideración a que la ley estatutaria 1909 de 2018, les obligaba a hacer la declaración política y, no la podían hacer si no se les reconocía personería, además de contar con dos congresistas participando en la rama legislativa del poder público, como resultado del art. 112 constitucional y el propio Estatuto de la Oposición.

En el sentido expuesto, aclaro mi voto.



LUIS GUILLERMO PÉREZ CASAS
Magistrado

RESOLUCIÓN No. 1291 DE 2021

(21 DE ABRIL)

Por medio de la cual se **DECIDE** sobre el reconocimiento de personería jurídica solicitado por el partido político **DIGNIDAD** dentro del expediente con radicación número **11861-20.**

EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 265 de la Constitución Política, y las Leyes 130 de 1994 y 1475 de 2011 y teniendo en cuenta los siguientes:

1. HECHOS, ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTO

1.1. Mediante oficio radicado en la Corporación el 28 de octubre de 2020, el Presidente del Partido Polo Democrático Alternativo, **ÁLVARO ARGOTE MUÑOZ** y el entonces Secretario General de la misma colectividad, **GUSTAVO R. TRIANA SUAREZ** informaron que el día 24 de octubre de 2020 se celebró Congreso extraordinario del partido en el que se decidió sobre la escisión del mismo.

1.2. Por medio de escrito radicado en la Corporación el día 30 de octubre de 2020, el Senador de la República, **JORGE ENRIQUE ROBLEDO**, el Representante a la Cámara por el Departamento de Antioquia, **JORGE ALBERTO GÓMEZ**, y los ciudadanos **LEONIDAS GÓMEZ GÓMEZ, ALBA LUZ PINILLA, GUSTAVO RUBÉN TRIANA SUÁREZ** presentaron una serie de solicitudes en representación del sector escindido del Polo Democrático Alternativo tendientes al reconocimiento de personería jurídica al nuevo partido político denominado "**DIGNIDAD**", en los siguientes términos:

> *1. Reconocer personería Jurídica al nuevo partido político DIGNIDAD, surgido como consecuencia de haber ejercido el derecho a la escisión del Polo Democrático Alternativo, en el marco de la independencia y autonomía de los partidos políticos reconocida por la Constitución Nacional.*
> *2. Como consecuencia de lo anterior, además del reconocimiento de la personería jurídica para el nuevo partido político, que surge como consecuencia inmediata de la escisión del Polo Democrático Alternativo, se solicita el reconocimiento de los siguientes derechos:*
> *a. Derecho del nuevo partido a ejercer el principio de autonomía para determinar su organización y funcionamiento. (Artículo 107 de la Constitución Política de Colombia)*
> *b. Derecho fundamental de los miembros del nuevo partido creado como consecuencia de la escisión a desempeñar cargos públicos en corporaciones públicas en las que tiene representantes elegidos democráticamente en las últimas elecciones in incurrir en causal de sobre militancia, toda vez que fueron electos por el Polo Democrático Alternativo pero que dejaron de ser de dicho partido desde el 24 de octubre de 2020 (Artículo 40 de la Constitución Política de Colombia), fecha en la que se produjo la escisión.*

c. Derecho fundamental de los miembros del nuevo partido político a elegir y ser elegido en las siguientes elecciones sin incurrir en causal de doble militancia por mantener su curul obtenida por el Polo Democrático Alternativo (Artículo 40 de la Constitución Política de Colombia).
d. Derecho fundamental de los miembros del nuevo partido político a tener iniciativa en las corporaciones públicas en las que tiene representantes elegidos democráticamente en las últimas elecciones (Artículo 40 de la Constitución Política de Colombia).
e. Derecho del nuevo partido surgido como consecuencia de la escisión a inscribir candidatos a elecciones sin requisito adicional alguno. (Artículo 108 de la Constitución Política de Colombia)
f. Derecho del nuevo partido a recibir contribución financiera estatal (Artículo 109 de la Constitución Política de Colombia)
g. Derecho del nuevo partido a utilizar los medios de comunicación social del Estado en todo tiempo (Artículo 111 de la Constitución Política de Colombia)
h. Derecho del nuevo partido surgido como consecuencia de la escisión a declararse en oposición, independencia o partido de gobierno en las circunscripciones en las que tenga representación política. (Artículo 112 de la Constitución Política de Colombia, desarrollado por la Ley 1909 de 2018, Estatuto de la Oposición Política)
i. Derecho de los militantes y del nuevo partido a ser reconocido en las corporaciones públicas, a que se le reconozca su participación como bancada y a tener vocería en las mismas (Artículo 40 - 5 de la Constitución Política y Ley 974 de 2005)
j. Los demás que la ley otorgue a los partidos políticos. (Ley 130 de 1994, Ley 974 de 2015, Ley 1475 de 2011, Ley 1757 de 2015, Ley 1909 de 2018)

3. Determine un plazo prudente para que los y las militantes del Polo Democrático Alternativo que ostenten cargos de representación popular puedan informar su decisión de acogerse al partido político DIGNIDAD, constituido por el sector Político Escindido, sin perder el derecho personal de mantener su curul".

1.3. Mediante memorial radicado el día 09 de noviembre de 2020, el señor **JULIOMARIO MARTÍNEZ OSORIO** impugnó las decisiones tomadas por el Polo Democrático Alternativo en el IV Congreso Extraordinario del 24 de octubre de 2020, convocado mediante resolución 075 de 2020 en el que se aprobó, entre otras, la escisión de aquel. Así mismo solicitó a esta Corporación anular todas las decisiones tomadas en dicho Congreso. Igualmente, solicitó conminar al Comité Ejecutivo Nacional para que celebre el V Congreso Nacional del Partido, de conformidad con lo ordenado en la Resolución CNE No. 0908 de 2020.

1.4. El día 09 de noviembre de 2020, el ciudadano **MARIO VELÁSQUEZ TORRES** impugnó igualmente las decisiones del Congreso Extraordinario del Partido Polo Democrático Alternativo, celebrado el día sábado 24 de octubre de 2020, mediante el cual se aprobó "la declaratoria de escisión, con el lleno de requisitos señalados en los Estatutos del Polo Democrático" propuesta por el Senador Jorge Enrique Robledo Castillo, el representante a la Cámara Jorge Gómez Gallego, entre otras. En concreto, solicitó a esta Corporación anular todas las decisiones tomadas en el Congreso Nacional Extraordinario del partido Polo Democrático Alternativo del 24 de octubre de 2020.

1.5. Por reparto especial de negocios del 11 de noviembre de 2020, la Sala Plena de la Corporación designó al magistrado **CÉSAR AUGUSTO ABREO MÉNDEZ** para conocer de los negocios identificados con radicado número **11861-20, 12207-20** y **12236-20.**

1.6. A través de Auto del 17 de noviembre de 2020, el Magistrado sustanciador decidió **AVOCAR CONOCIMIENTO,** de las diversas solicitudes presentadas con ocasión de la escisión del **PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO**, identificado con número de Nit.: 830-124-850-8, dentro de los expedientes con radicación número **11861-20**, **12207-20** y **12236-20**. En el mismo acto administrativo se decretaron algunas pruebas y se acumularon los diferentes números de radicado al **11861-20,** de conformidad con la Resolución CNE 3345 de 2013. Igualmente se decidió:

> ***"SUSPENDER** el término contenido en el artículo 3º de la Ley 130 de 1994, hasta la fecha en que se resuelvan de manera definitiva las impugnaciones presentadas en contra de las decisiones tomadas por el Congreso Extraordinario del partido **POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO** el 24 de octubre de 2020".*

1.7. Mediante escrito radicado dentro de la oportunidad procesal pertinente, el dos de diciembre de 2020, el Partido Político **DIGNIDAD**, contestó las impugnaciones presentadas y deprecó de esta corporación negar las pretensiones de los impugnantes, y que, como medida cautelar, se diera continuidad al trámite de reconocimiento de personería jurídica del Partido Político **DIGNIDAD.**

1.8. Por medio de oficio radicado electrónicamente en la Corporación el día 11 de diciembre de 2020, el señor **EDWIN JAVIER ARIAS VALENCIA,** actuando a través de apoderado, elevó las siguientes peticiones:

> *"2.1. Se reconozca como parte al señor EDWIN JAVIER ARIAS VALENCIA.*
>
> *2.2. En el evento de que se le reconozca personería al partido DIGNIDAD, se desestime la pretensión formulada por el sector escindente, en el sentido de que se:*
>
> *Determine un plazo prudente para los y las militantes del Polo Democrático Alternativo que ostenten cargos de representación popular puedan informar su decisión de acogerse al partido político DIGNIDAD, constituido por el sector Político Escindido, sin perder el derecho personal de mantener su curul.*
>
> *2.3. En consecuencia, se declare que mi poderdante, el señor EDWIN JAVIER ARIAS VALENCIA, debe ser nombrado representante a la Cámara por la circunscripción Antioquia, en representación del PDA, en reemplazo del señor Jorge Alberto Gómez Gallego".*

En sustento de su solicitud explicó que le asiste interés para ser parte en el expediente de la referencia, por cuanto tiene la expectativa de ocupar una curul en la Cámara de Representantes con ocasión de la escisión del partido **POLO DEMOCRÁTICO**

ALTERNATIVO. Acto seguido, trajo a colación y explicó normas legales y estatutarias relacionadas con la escisión de partidos y movimientos políticos. Con fundamento en lo anterior, argumentó que a las personas que se escindieron del partido **POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO** deben serles retiradas las curules que ostentan en cargos de elección popular. Lo anterior, teniendo en cuenta que para el peticionario, las curules pertenecen al partido inscriptor y no a quienes ocupan las mismas. Precisó el señor **ARIAS VALENCIA** que:

> *''En definitiva, nada habilita a pensar que los espacios de representación en las corporaciones públicas "pertenecen" a una persona en específico; ese es un entendimiento que olvida, por decir lo menos, que esa curul que ostenta corresponde a una cifra repartidora que, en la inmensa mayoría de las ocasiones, no es alcanzada por un candidato individualmente considerado, sino por todo el partido".*

Finalmente, el peticionario explicó la razón por la cual considera que su solicitud ha sido presentada dentro de la oportunidad procedimental pertinente.

1.9. A través de la Resolución 4072 del 16 de diciembre de 2020, el Consejo Nacional Electoral **NEGÓ** las impugnaciones presentadas en contra de las decisiones adoptadas por el Congreso Nacional Extraordinario del Partido Polo Democrático Alternativo del 24 de octubre de 2020 dentro del radicado número **11861-20**, por los cargos formulados. En el mismo acto administrativo se **CONMINÓ** al Partido Político **POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO** para que celebre su V Congreso Nacional Ordinario, sin perjuicio de las sanciones que se puedan imponer por su persistencia en tal omisión y cumpla con las órdenes emitidas en las Resoluciones CNE 0724 de 2019, 0908 y 2095 de 2020.

1.10. Mediante oficio radicado electrónicamente en la Corporación el día primero de febrero de 2021, el señor **JULIOMARIO MARTÍNEZ OSORIO** interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución CNE 4072 de 2020, en el que solicitó a esta Corporación que modifique el artículo primero de dicho acto administrativo y en consecuencia se conceda la impugnación presentada en contra de las decisiones adoptadas por el Congreso Nacional del Partido Polo Democrático Alternativo del 24 de octubre de 2020 dentro del radicado acumulado número 11861 de 2020. Aunado a lo anterior, deprecó de esta Corporación declarar la nulidad de las decisiones adoptadas por los miembros del IV Congreso Nacional el día 24 de octubre de 2020 y como consecuencia de lo anterior pidió archivar la solicitud de reconocimiento de personería jurídica del partido político Dignidad.

1.11. Por medio de la Resolución 0583 del 17 de febrero de 2021 esta Colegiatura decidió **NEGAR** el recurso de reposición interpuesto por el señor **JULIOMARIO MARTÍNEZ OSORIO** y en consecuencia **CONFIRMAR** íntegramente la Resolución 4072 de 2020.

2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

2.1. COMPETENCIA

2.1.1. **Constitución Política**

> *"**ARTÍCULO 265.** El Consejo Nacional Electoral regulará, inspeccionará, vigilará y controlará toda la actividad electoral de los partidos y movimientos políticos, de los grupos significativos de ciudadanos, de sus representantes legales, directivos y candidatos, garantizando el cumplimiento de los principios y deberes que a ellos corresponden, y gozará de autonomía presupuestal y administrativa. Tendrá las siguientes atribuciones especiales:*
>
> *(…)*
>
> ***6.** Velar por el cumplimiento de las normas sobre Partidos y Movimientos Políticos y de las disposiciones sobre publicidad y encuestas de opinión política; por los derechos de la oposición y de las minorías, y por el desarrollo de los procesos electorales en condiciones de plenas garantías.*
>
> *(…)*
>
> ***9**. Reconocer y revocar la Personería Jurídica de los partidos y movimientos políticos (…)*
>
> ***14.** Las demás que le confiera la ley."*

2.1.2. **LEY 1475 DE 2011 "*Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones*"**

> ***ARTÍCULO 3o. REGISTRO ÚNICO DE PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS.** El Consejo Nacional Electoral llevará el registro de partidos, movimientos y agrupaciones políticas. Los respectivos representantes legales registrarán ante dicho órgano las actas de fundación, los estatutos y sus reformas, los documentos relacionados con la plataforma ideológica o programática, la designación y remoción de sus directivos, así como el registro de sus afiliados. Corresponde al Consejo Nacional Electoral autorizar el registro de los mencionados documentos previa verificación del cumplimiento de los principios y reglas de organización y funcionamiento consagrados en la Constitución, la ley y los correspondientes estatutos.*
>
> ***PARÁGRAFO.** Los grupos significativos de ciudadanos que postulen candidatos al Senado de la República o a la Cámara de Representantes y obtengan los votos requeridos para el reconocimiento de personería jurídica, podrán organizarse como partidos o movimientos políticos y solicitar la correspondiente personería. La solicitud deberá ir acompañada del acta de fundación, los estatutos, la plataforma ideológica y programática, la lista de afiliados y la prueba de la designación de los*

directivos, y será presentada ante el Consejo Nacional Electoral por quien haya sido designado como representante legal del partido o movimiento así constituido.

En el acto de reconocimiento de personería jurídica el Consejo Nacional Electoral ordenará su inscripción en el Registro Único a que se refiere esta disposición, a partir de lo cual dichas agrupaciones políticas tendrán los mismos derechos y obligaciones de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica y se someterán, en todo lo demás, a las mismas reglas de organización y funcionamiento.

***ARTÍCULO 4o. CONTENIDO DE LOS ESTATUTOS.** Los estatutos de los partidos y movimientos políticos contendrán cláusulas o disposiciones que los principios señalados en la ley y especialmente los consagrados en el artículo 107 de la Constitución, en todo caso, deben contener como mínimo, los siguientes asuntos:*
(…)

18. Reglas de disolución, fusión con otros partidos o movimientos políticos, o escisión y liquidación".

(…)

***ARTÍCULO 14. DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN, FUSIÓN Y ESCISIÓN DE LOS PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS.** La disolución, liquidación, fusión y escisión de los partidos y movimientos políticos se regirá por lo dispuesto en la ley y/o en sus estatutos. La disolución y liquidación de los partidos y movimientos políticos, adoptada por decisión administrativa del Consejo Nacional Electoral no tendrá recurso alguno. No podrá acordarse la disolución, liquidación, fusión y escisión voluntaria de un partido o movimiento político cuando se haya iniciado proceso sancionatorio.*
Si en los estatutos no se dispusiere nada sobre liquidador, actuará como tal quien tuviere su representación al momento de presentarse la causal de disolución, a menos que la causal le fuere atribuible como falta, caso en el cual el liquidador será designado por el Consejo Nacional Electoral. Si transcurridos tres (3) meses desde que se hubiere decretado la cancelación de personería jurídica, su revocatoria o la disolución, no se hubiere iniciado el proceso de liquidación, esta corporación designará el liquidador y adoptará las demás medidas a que hubiere lugar para impulsar la liquidación.
La liquidación se regulará por las normas previstas en la ley civil para la disolución y liquidación de las personas jurídicas sin ánimo de lucro. El remanente de los activos patrimoniales que resultare después de su liquidación será de propiedad del Fondo de Financiación de Partidos y Campañas, a menos que en los estatutos se haya previsto una destinación que en todo caso deberá corresponder a un objeto análogo al de los partidos y movimientos políticos".

2.2. SOBRE CONFORMACIÓN, ESCISIÓN Y OBLIGACIONES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

2.2.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA

***ARTICULO 40.** Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:*

1. Elegir y ser elegido.

2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática.

3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas.

4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley.

5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas.

6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley.

7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse.

Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la Administración Pública.

(…)

***ARTICULO 107.** Se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos, y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse.*

En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político con personería jurídica.

Los Partidos y Movimientos Políticos se organizarán democráticamente y tendrán como principios rectores la transparencia, objetividad, moralidad, la equidad de género, y el deber de presentar y divulgar sus programas políticos.

Para la toma de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos propios o por coalición, podrán celebrar consultas populares o internas o interpartidistas que coincidan o no con las elecciones a Corporaciones Públicas, de acuerdo con lo previsto en sus Estatutos y en la ley.

En el caso de las consultas populares se aplicarán las normas sobre financiación y publicidad de campañas y acceso a los medios de comunicación del Estado, que rigen para las elecciones ordinarias. Quien participe en las consultas de un partido o movimiento político o en consultas interpartidistas, no podrá inscribirse por otro en el mismo proceso electoral. El resultado de las consultas será obligatorio.

Los directivos de los Partidos y Movimientos Políticos deberán propiciar procesos de democratización interna y el fortalecimiento del régimen de bancadas.

Los Partidos y Movimientos Políticos deberán responder por toda violación o contravención a las normas que rigen su organización, funcionamiento o financiación, así como también por avalar candidatos elegidos en cargos o Corporaciones Públicas de elección popular, quienes hayan sido o fueren condenados durante el ejercicio del cargo al cual se avaló mediante sentencia ejecutoriada en Colombia o en el exterior por delitos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales y actividades del narcotráfico o de delitos contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad.

Los partidos o movimientos políticos también responderán por avalar a candidatos no elegidos para cargos o Corporaciones Públicas de Elección Popular, si estos hubieran sido o fueren condenados durante el período del cargo público al cual se candidatizó, mediante sentencia ejecutoriada en Colombia o en el exterior por delitos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales y actividades del narcotráfico, cometidos con anterioridad a la expedición del aval correspondiente.

Las sanciones podrán consistir en multas, devolución de los recursos públicos percibidos mediante el sistema de reposición de votos, hasta la cancelación de

la personería jurídica. Cuando se trate de estas condenas a quienes fueron electos para cargos uninominales, el partido o movimiento que avaló al condenado, no podrá presentar candidatos para las siguientes elecciones en esa Circunscripción. Si faltan menos de 18 meses para las siguientes elecciones, no podrán presentar terna, caso en el cual, el nominador podrá libremente designar el reemplazo.

Los directivos de los partidos a quienes se demuestre que no han procedido con el debido cuidado y diligencia en el ejercicio de los derechos y obligaciones que les confiere Personería Jurídica también estarán sujetos a las sanciones que determine la ley.

También se garantiza a las organizaciones sociales el derecho a manifestarse y a participar en eventos políticos.

Quien siendo miembro de una corporación pública decida presentarse a la siguiente elección, por un partido distinto, deberá renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones.

***ARTICULO 108.** <Artículo modificado por el artículo 2 del Acto Legislativo 1 de 2009. El nuevo texto es el siguiente:> El Consejo Nacional Electoral reconocerá Personería Jurídica a los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos. Estos podrán obtenerlas con votación no inferior al tres por ciento (3%) de los votos emitidos válidamente en el territorio nacional en elecciones de Cámara de Representantes o Senado. Las perderán si no consiguen ese porcentaje en las elecciones de las mismas Corporaciones Públicas. Se exceptúa el régimen excepcional que se estatuya en la ley para las circunscripciones de minorías étnicas y políticas, en las cuales bastará haber obtenido representación en el Congreso.*
También será causal de pérdida de la Personería Jurídica de los partidos y movimientos políticos si estos no celebran por lo menos durante cada dos (2) años convenciones que posibiliten a sus miembros influir en la toma de las decisiones más importantes de la organización política.
Los Partidos y Movimientos Políticos con Personería Jurídica reconocida podrán inscribir candidatos a elecciones. Dicha inscripción deberá ser avalada para los mismos efectos por el respectivo representante legal del partido o movimiento o por quien él delegue.
Los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos también podrán inscribir candidatos.
Toda inscripción de candidato incurso en causal de inhabilidad, será revocada por el Consejo Nacional Electoral con respeto al debido proceso.
Los Estatutos de los Partidos y Movimientos Políticos regularán lo atinente a su Régimen Disciplinario Interno. Los miembros de las Corporaciones Públicas elegidos por un mismo Partido o Movimiento Político o grupo significativo de ciudadanos actuarán en ellas como bancada en los términos que señale la ley y de conformidad con las decisiones adoptadas democráticamente por estas.

Los Estatutos Internos de los Partidos y Movimientos Políticos determinarán los asuntos de conciencia respecto de los cuales no se aplicará este régimen y podrán establecer sanciones por la inobservancia de sus directrices por parte de los miembros de las bancadas, las cuales se fijarán gradualmente hasta la expulsión, y podrán incluir la pérdida del derecho de voto del Congresista, Diputado, Concejal o Edil por el resto del período para el cual fue elegido.

2.2.2. **CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS – PACTO DE SAN JOSE**

Artículo 16. Libertad de Asociación

1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.

2. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.

3. Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones legales, y aun la privación del ejercicio del derecho de asociación, a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía

(…)

Artículo 23. Derechos Políticos

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:

a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;

b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y

c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal

2.2.3. **LEY 130 DE 1994**[1]

ARTICULO 1º—*Derecho a constituir partidos y movimientos. Todos los colombianos tienen derecho a constituir partidos y movimientos políticos, a organizarlos y a desarrollarlos a afiliarse y retirarse de ellos libremente y a difundir sus ideas y programas.*

Las organizaciones sociales tienen derecho a manifestarse y a participar en eventos políticos.

(…)

ARTICULO 3º—*Reconocimiento de personería jurídica. El Consejo Nacional Electoral reconocerá y otorgará personería jurídica a los partidos y movimientos políticos previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:*

1. Solicitud presentada por sus directivas.

2. Copia de los estatutos.

3. Probar su existencia con no menos de cincuenta mil firmas o con la obtención en la elección anterior, de por lo menos la misma cantidad de votos o de representación en el Congreso de la República.

4. Presentar un documento que contenga la plataforma política del partido o movimiento, expresando su filosofía y principios, así como los programas y aspiraciones que lo identifiquen.

Para efectos de este artículo no podrán sumarse los votos obtenidos en circunscripción nacional con los obtenidos en circunscripciones territoriales o especiales, ni los de éstas con los de aquéllas.

[1] Por la cual se dicta el estatuto básico de los partidos y movimientos políticos, se dictan normas sobre su financiación y la de las campañas electorales y se dictan otras disposiciones"

El Consejo Nacional Electoral no demorará más de treinta (30) días hábiles en estudiar una solicitud de obtención de personería jurídica".

2.2.4. ESTATUTOS VIGENTES PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO

"*Artículo 8.-* *Derechos. Son derechos de los afiliados y afiliadas del Partido:*

1. Intervenir directamente en la adopción de las decisiones fundamentales del Partido y en la selección de sus candidatos.
4. Elegir y ser elegido para formar parte de los organismos de dirección, gobierno, administración y control del Partido.

(…)

Artículo 19.- Organismos de dirección del partido a nivel nacional. *Los organismos de dirección del Polo a nivel nacional son los siguientes:*

1. Congreso Nacional.
2. Junta Directiva Nacional.
3. Comité Ejecutivo Nacional.

(…)

Artículo 21.- Congreso Nacional. *Plazos de realización. El máximo organismo de dirección del Polo es el Congreso Nacional, que se reunirá ordinariamente cada dos (2) años y extraordinariamente cuando sea convocado por el Comité Ejecutivo Nacional con el voto de al menos dos terceras partes de sus miembros o por un número superior al treinta por ciento (30%) de los afiliados y afiliadas del Partido o por la Junta Directiva Nacional con el voto de al menos las tres quintas partes de sus miembros.*

Artículo 22.- *Conformación del Congreso Nacional. El Congreso Nacional será integrado hasta por mil quinientos (1.500) delegados y delegadas, elegidos por votación popular de los miembros del Polo, según reglamentación expedida por el Comité Ejecutivo Nacional. No habrá delegados por derecho propio.*

Parágrafo 1º.- *Quienes ejerzan o hayan ejercido con posterioridad al primer Congreso Nacional los cargos de Presidente o Secretario General del Polo podrán asistir a los Congresos Nacionales en las mismas condiciones de los delegados elegidos por voto popular.*

(…)

Artículo 23.- Funciones. *Son funciones del Congreso Nacional:*

(…)

Disolver o escindir el Partido con la aprobación mínima de las tres quintas (60%) partes de sus delegadas y delegados elegidos".

(…)

Artículo 28.- Funciones del Comité Ejecutivo Nacional. *Son funciones del Comité Ejecutivo Nacional, las siguientes:*

(…)

2, Convocar el Congreso Nacional.
4. Reglamentar y ejecutar las decisiones adoptadas por el Congreso Nacional.

(…)

***Artículo 93.-** La decisión sobre disolución, fusión, escisión y liquidación del PDA será de competencia del Congreso Nacional".*

3. ACERVO PROBATORIO

Obran en el expediente las siguientes pruebas

3.1. Carta del sector político que solicitó al Comité Ejecutivo Nacional del Polo Democrático Alternativo la escisión del partido.

3.2. Resolución 075 de 2020 del Comité Ejecutivo Nacional del Polo Democrático Alternativo, por la cual se convocó al Congreso Nacional de la colectividad para el día 24 de octubre de 2020.

3.3. Acta del Congreso Nacional extraordinario realizado por el Polo Democrático Alternativo el 24 de octubre de 2020.

3.4. Acta de escrutinios de la votación del Congreso Nacional extraordinario realizado por el Polo Democrático Alternativo el 24 de octubre de 2020.

3.5. Cartas de personas que ocupan cargos de representación por el Polo Democrático Alternativo que manifiestan su decisión de formar parte del sector escindido y, en consecuencia, pertenecer al nuevo partido político que surge producto de la escisión.

3.6. Acta de la reunión de constitución del partido DIGNIDAD.

3.7. Listado de personas asistentes a la reunión de constitución del partido político DIGNIDAD.

3.8. Programa político del partido DIGNIDAD.

3.9. Estatutos del partido político de DIGNIDAD.

3.10. Código de ética del partido político DIGNIDAD.

3.11. Reglamento de bancadas del partido político DIGNIDAD.

3.12. Nómina del Comité Ejecutivo Nacional del partido político DIGNIDAD.

3.13. Solicitud de escisión suscrita por el Senador Jorge Enrique Robledo C y Gustavo Ruben Triana Suárez.

3.14. Nota periodística en la que se relata la aprobación de la escisión liderada por el congresista Jorge Enrique Robledo.

3.15. Resolución CNE 0908 del 20 de febrero de 2020, *"por medio de la cual se ordena la APERTURA de INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA y se FORMULAN CARGOS contra el PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO, PDA, por la presunta violación al artículo 108 de la Constitución Política, al artículo 4, numeral 4, y al artículo 10, numeral 1 y 2, de la Ley Estatutaria 1475 de 2011 y al artículo 21 del Estatuto, por la omisión del Comité Ejecutivo Nacional de celebrar el Congreso Nacional del Partido por lo menos cada dos*

años, por el presunto desconocimiento en forma reiterada, grave e injustificada por parte del Comité Ejecutivo Nacional a las solicitudes de la Veedora Nacional del Partido, y por el presunto incumplimiento a los deberes de diligencia de investigación y sanción por parte de la Comisión Nacional de Ética y Garantías y la Veeduría Nacional del Partido, y se dictan otras disposiciones, dentro del expediente No. 3201-01-18".

3.16. Resolución CNE 2238 del 27 de junio de 2020 "*por medio de la cual se SANCIONA al PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO, PDA, por la violación al artículo 108 de la Constitución Política, al artículo 4, numeral 4, y al artículo 10, numerales 1 y 2, de la Ley Estatutaria 1475 de 2011 y al artículo 21 del Estatuto1, por la omisión del Comité Ejecutivo Nacional de celebrar el Congreso Nacional del Partido por lo menos cada dos años, agravado por el desconocimiento en forma reiterada, grave e injustificada por parte del Comité Ejecutivo Nacional a las solicitudes de la Veedora Nacional del Partido, y por el incumplimiento a los deberes de diligencia de investigación y sanción por parte de la Comisión Nacional de Ética y Garantías y la Veeduría Nacional del Partido, dentro del expediente No. 3201-01-18".*

3.17. Resolución CNE 2811 del 23 de septiembre de 2020 "*por la cual se DECIDEN los recursos de reposición presentados por el Representante Legal del PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO, PDA, y el peticionario JULIO MARIO MARTÍNEZ OSORIO contra la Resolución No. 2238 del 24 de julio de 2020 "Por medio de la cual se SANCIONA al PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO, PDA, por la violación al artículo 108 de la Constitución Política, al artículo 4, numeral 4, y al artículo 10, numerales 1 y 2, de la Ley Estatutaria 1475 de 2011 y al artículo 21 del Estatuto, por la omisión del Comité Ejecutivo Nacional de celebrar el Congreso Nacional del Partido por lo menos cada dos años, agravado por el desconocimiento en forma reiterada, grave e injustificada por parte del Comité Ejecutivo Nacional a las solicitudes de la Veedora Nacional del Partido, y por el incumplimiento a los deberes de diligencia de investigación y sanción por parte de la Comisión Nacional de Ética y Garantías y la Veeduría Nacional del Partido, dentro del expediente No. 3201-01-18".*

3.18. Petición radicada ante el PDA y el CNE en la que solicitó copia del Acta del Congreso Extraordinario del Partido Polo Democrático Alternativo del pasado 24 de octubre de 2020.

3.19. Fotocopia de la C. C. del impugnante.

SOLICITADAS por los ciudadanos Juliomario Martínez Osorio y Mario Velasquez Torres, y decretadas por el Consejo Nacional Electoral:

3.20. Actas o actuaciones mediante las cuales el citado Congreso Extraordinario, aprobó la declaratoria de escisión propuesta en el Artículo segundo de la Resolución 075 del 05 de octubre de 2020.

3.21. Auto expedido por el Consejo Nacional Electoral el 16 de septiembre de 2020, por la Magistrada DORIS RUTH MÉNDEZ CUBILLOS.

4. CONSIDERACIONES

4.1. Competencia

De acuerdo con el numeral noveno del artículo 265 de la Constitución Política, esta Corporación es competente para reconocer y revocar la Personería Jurídica de los Partidos y Movimientos políticos. En consecuencia, esta Colegiatura es competente para decidir sobre el reconocimiento de personería jurídica deprecado por el partido político **DIGNIDAD.**

4.2. Problema jurídico y metodología

De conformidad con la solicitud radicada con el número 11861-20, corresponde a esta Corporación determinar si de acuerdo con la normativa vigente ¿es procedente reconocer la personería jurídica al partido político **DIGNIDAD,** como consecuencia de la escisión voluntaria del Partido **POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO**? Para absolver dicho interrogante, se explicarán por un lado (I) los requisitos originarios, para luego explicar los (II) requisitos derivativos para que un partido político obtenga personería jurídica. Acto seguido (III) se verificará si el partido político **DIGNIDAD** cumple con los requisitos originarios o derivativos, según el caso, para que le sea reconocida su personería jurídica. De ser así, (IV) se revisará su acta fundacional y estatutos para verificar su constitucionalidad y legalidad. Finalmente, (V) se decidirá si se reconoce la personería jurídica al partido político **DIGNIDAD** y si se hacen las respectivas inscripciones en el Registro único de partidos y movimientos políticos – **RUP**.

4.3. Requisitos originarios para que a un partido político le sea reconocida personería jurídica

Originalmente, el artículo 108 de la Constitución Política, establecía unos requisitos laxos para que a los Partidos o Movimientos Políticos se les reconociera personería jurídica. Tales requisitos consistían en: (i) comprobar la existencia del Partido o Movimiento con no menos de cincuenta mil firmas; o (ii) cuando en la elección anterior hayan obtenido la misma cifra de votos, o (iii) cuando en la elección anterior hayan alcanzado representación en el Congreso de la República. La personería jurídica se perdería, de no haberse obtenido cincuenta mil

votos en la elección anterior o, a lo menos, no haberse obtenido representación en el Congreso de la República.

Este artículo fue reformado por el Acto Legislativo 01 de 2003, a través del cual se redujeron las facilidades para que un Partido o Movimiento pudiera solicitar el reconocimiento de la personería jurídica. Ello, con el fin de evitar el surgimiento de múltiples partidos políticos que no representan verdaderamente una intención política colectiva. Esta norma dispuso que los Partidos o Movimientos Políticos podrían obtener personería jurídica si obtenían una votación no inferior al dos por ciento de los votos emitidos válidamente en el territorio nacional en las elecciones para Cámara de Representantes o Senado. La perderían de no obtener dicho porcentaje en las elecciones para dichas Corporaciones.

Finalmente, el artículo 108 de la Constitución, fue modificado por el Acto Legislativo 1 de 2009. En la reforma política de 2009 se estableció que los Partidos o Movimientos Políticos podrían obtener personería jurídica si obtienen una votación no inferior al tres por ciento de los votos emitidos válidamente en el territorio nacional en las elecciones para Cámara de Representantes o Senado. Los Partidos o Movimientos la perderán, si no consiguen ese porcentaje en las elecciones de las mismas Corporaciones Públicas (tres por ciento).

De esa manera, queda claro que si un Partido o Movimiento no obtiene el porcentaje mínimo para adquirir o conservar la personería jurídica (tres por ciento de los votos emitidos válidamente en el territorio nacional en las elecciones para Cámara de Representantes o Senado), por mandato constitucional deberá negársele o retirarsele la personería jurídica, según el caso. Lo anterior, salvo que se trate de circunscripciones de minorías étnicas y políticas, en las cuales bastará haber obtenido representación en el Congreso (Art. 108 C.N.)

4.4. Requisitos derivativos de obtención de personería jurídica

La Constitución Política de Colombia de 1991 únicamente hace referencia al modo originario, ya explicado, para que los partidos y movimientos políticos puedan obtener el reconocimiento de su personería jurídica. No obstante, el artículo 14 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011 introdujo al ordenamiento electoral colombiano, las figuras de la fusión y escisión de los partidos y movimientos políticos, que son modos derivados para el reconocimiento de personería jurídica.

4.4.1. Definición de fusión y escisión de partidos y movimientos políticos

A pesar de la mención de los conceptos de fusión y escisión en la Ley 1475 de 2011, la norma no los definió, por lo que debe esta Colegiatura acudir a normas análogas del derecho privado para comprender su alcance. Lo anterior, de conformidad con el artículo 8º

de la Ley 153 de 1887 que dispone que "*cuando no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que regulen casos o materias semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales de derecho".* En el mismo sentido, la jurisprudencia del máximo tribunal de lo contencioso administrativo aplicado analogía normativa entre las legislaciones electoral y comercial para resolver casos en los que aquella no define claramente sus alcances[2].

Tradicionalmente, los conceptos de fusión y escisión, se han asociado al derecho comercial de sociedades. En ese sentido, respecto de la fusión, el artículo 172 del Código de Comercio dispone que:

> ***"ARTÍCULO 172. FUSIÓN DE LA SOCIEDAD-CONCEPTO.*** *Habrá fusión cuando una o más sociedades se disuelvan, sin liquidarse, para ser absorbidas por otra o para crear una nueva.*
>
> *La absorbente o la nueva compañía adquirirá los derechos y obligaciones de la sociedad o sociedades disueltas al formalizarse el acuerdo de fusión".*

De lo anterior se colige que la fusión aplicada al derecho electoral será aquel procedimiento en el cual uno o más partidos y/o movimientos políticos se disuelven para ser absorbidos por otro existente, o para crear una nueva colectividad política.

A su turno, el artículo 3º de la Ley 222 de 1995, que modificó algunos artículos del Código de Comercio precisó respecto de la escisión que:

> ***"ARTICULO 3o. MODALIDADES.*** *Habrá escisión cuando:*
>
> *1. Una sociedad sin disolverse, transfiere en bloque una o varias partes de su patrimonio a una o más sociedades existentes o las destina a la creación de una o varias sociedades.*
>
> *2. Una sociedad se disuelve sin liquidarse, dividiendo su patrimonio en dos o más partes, que se transfieren a varias sociedades existentes o se destinan a la creación de nuevas sociedades.*
>
> *La sociedad o sociedades destinatarias de las transferencias resultantes de la escisión, se denominarán sociedades beneficiarias.*
>
> *Los socios de la sociedad escindida participarán en el capital de las Sociedades beneficiarias en la misma proporción que tengan en aquélla, salvo que por unanimidad de las acciones, cuotas sociales o partes de interés representadas en la asamblea o junta de socios de la escindente, se apruebe una participación diferente".*

De la norma transcrita se puede advertir que la escisión de partidos y/o movimientos políticos consistirá en la trasmisión de una parte del patrimonio (derechos) de una colectividad a otra u otras ya existentes o nuevas. También se entenderá como escisión el

[2] Sobre el particular consultar: Colombia. Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 12 de octubre de 2001. C.P. Reinaldo Chavarro Buriticá. Rad. 25000 23 24 000 2000 078701.

escenario en el que un partido o movimiento político se disuelve y divide su patrimonio en dos o más partes a favor de una o más colectividades políticas existentes o nuevas. De conformidad con el inciso tercero del artículo 3 de la Ley 222 de 1995, el o los partidos políticos y/o movimientos políticos destinatarios de las transferencias resultantes de la escisión se denominarían, por interpretación analógica, como partidos o movimientos beneficiarios.

Así pues, la escisión, ya sea de partidos o movimientos políticos o de sociedades, puede venir acompañada de la disolución. Así lo ha precisado la jurisprudencia del Consejo de Estado citando al Profesor Reyes Villamizar:

> *"La escisión parcial implica "el mantenimiento de la personalidad jurídica de la compañía escindente que no se disuelve, ni se extingue. Así pues, el efecto principal que produce la modificación contractual respecto de la sociedad escindente es la disminución del capital social o de otras cuentas patrimoniales, en cuantía equivalente a las partes patrimoniales transferidas en virtud de la operación"[3].*
>
> *Por el contrario, en la escisión total, la sociedad escindente se extingue, sin que sea necesario cumplir con el proceso de liquidación, porque la beneficiaria asume tanto los activos como los pasivos de aquella"[4].*

4.4.2. Requisitos para la escisión de un partido o movimiento político

El artículo 14 de la Ley 1475 de 2011 dispone que la disolución, liquidación, fusión y escisión de los partidos y movimientos políticos se regirá por lo dispuesto en la ley y/o en sus estatutos. De tal manera, el legislador ha dotado de autonomía a los partidos y movimientos políticos para que puedan a través de sus estatutos decidir los aspectos relacionados con la escisión de los mismos, ya sea permitiéndola, prohibiéndola y/o reglamentándola, sin que en ningún caso se desconozcan las normas de orden público – imperativas-, contenidas en la Ley.

Concordante con lo anterior, el numeral 18 del artículo 4º de la Ley 1475 de 2011 indicó que los Estatutos de los partidos y movimientos políticos, necesariamente deben contener reglas de disolución, fusión con otros partidos o movimientos políticos, o escisión y liquidación.

Adicionalmente, el artículo 14 de la Ley 1475 de 2011 dispuso que "*no podrá acordarse la disolución, liquidación, fusión y escisión voluntaria de un partido o movimiento político cuando se haya iniciado proceso sancionatorio".* La finalidad de esta disposición es evitar que a través de las figuras de liquidación, fusión y escisión se evite la efectividad y

---

[3] REYES, Francisco, Derecho Societario, Tomo II, Tercera Edición, Temis S.A., 2017, p. 220.

[4] Colombia. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Sentencia del 19 de octubre de 2017 Rad. No. 05001-23-31-000-2006-03352-01 (19221)

cumplimiento de las sanciones que imponga el Consejo Nacional Electoral en el marco de sus competencias por la vulneración a las normas electorales.

4.4.3. Consecuencias de la escisión de un partido o movimiento político

El último inciso del artículo 3º de la Ley 222 de 1995 dispone que: "*Los socios de la sociedad escindida participarán en el capital de las Sociedades beneficiarias en la misma proporción que tengan en aquélla, salvo que por unanimidad de las acciones, cuotas sociales o partes de interés representadas en la asamblea o junta de socios de la escindente, se apruebe una participación diferente".* En materia electoral esto significaría que los miembros y afiliados de los partidos o movimientos políticos participarían tanto en el partido escindido como en el partido beneficiario, salvo decisión unánime en contrario. No obstante, dicha previsión comercial, no tiene cabida analógica en la escisión de partidos y movimientos políticos, por cuanto el inciso segundo del artículo 107 de la Constitución Política dispone categóricamente que "*en ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político con personería jurídica",* so pena de incurrir en la conducta reprochable de la doble militancia.

En consecuencia, en el marco de la escisión de un partido o movimiento político sus militantes deberán decidir a cuál de los partidos o movimientos resultantes se afiliarán y en qué calidad, sin poder en ningún caso incurrir en doble militancia.

De otro lado, el inciso quinto del artículo quinto de la Ley 130 de 1994 establece que "*los organismos que se escindan del partido o movimiento perderán el derecho a utilizar total o parcialmente la denominación y el símbolo registrados y las sedes correspondientes".* Esta disposición normativa, se entiende referida a las escisiones parciales, en las que el partido originario no se disuelve, pues en caso contrario, es posible que una de las colectividades beneficiarias pueda usar el símbolo y sede del movimiento disuelto, concebidos como activos del patrimonio del escindente.

Así mismo, las consecuencias de la escisión del partido o movimiento político dependerán de lo que establezcan los estatutos de la colectividad política y del acuerdo de escisión al que se llegue. Entonces, la escisión podrá acarrear la disolución o no del partido escindente; podrá escindirse en uno o más partidos o movimientos beneficiarios y podrá transferirse una determinada porción del patrimonio del escindente al beneficiario. Dentro del patrimonio que se transfiere deben quedar expresamente indicados los activos y pasivos que le constituyen (Núm. 4 Art. 4 L. 222 de 1995). Dentro de los primeros se incluyen por ejemplo, los bienes muebles e inmuebles, los depósitos en cuentas de ahorro, los certificados de depósito a término, el logo y denominación del partido, el nombre y reconocimiento de sus integrantes, el derecho a la financiación estatal de partidos y campañas, el derecho a la reposición de

votos en el marco de procesos electorales, el derecho a la financiación de los partidos declarados en oposición, el derecho a acceder a medios de comunicación, el derecho a franquicia postal, entre otros. Por su parte, dentro del pasivo patrimonial de un partido podemos encontrar aquellas deudas que tenga con terceros como entidades bancarias, particulares; sanciones pecuniarias impuestas por el Consejo Nacional Electoral, etc. Todo lo anterior, cobijado bajo la personería jurídica que debe ostentar el partido escindente.

Una vez verificados los requisitos estatutarios, legales y constitucionales para el perfeccionamiento de la escisión del partido o movimiento político, nacerán a la vida jurídica uno o más partidos o movimientos políticos beneficiarios, independiente de que se mantenga) o no en vigor el partido político originario (escisión parcial o escisión total respectivamente).

Naturalmente, las colectividades políticas resultantes, serán independientes las unas de las otras; de ahí que cada una tendrá su propio patrimonio, que se conformará de acuerdo con lo estipulado en el acuerdo de escisión. Así mismo, las colectividades resultantes ostentarán la capacidad de goce y de ejercicio para realizar los diversos actos jurídicos que permite nuestro ordenamiento y de igual forma asumir las consecuencias jurídicas que se deriven de dichos actos y de la ley. Por supuesto, dichas capacidades, en ningún caso podrán ser superiores ni inferiores a las que ostentaba la colectividad originaria, pues establece el brocárdico latino que *nemo plus iuris ad alium transfere potest quem ipse habet,;* lo que significa que nadie puede transferir a otro más derechos de los que posee.

En el ordenamiento colombiano, el pleno y absoluto ejercicio de derechos de una colectividad política, viene dado por la personería jurídica que les reconoce el Consejo Nacional Electoral. Este reconocimiento, no es otra cosa que la efectiva oponibilidad que se da a los actos de la colectividad frente a la sociedad junto con la asignación de ciertos derechos exclusivos, como por ejemplo, la financiación estatal de partidos y campañas, el derecho de acceso a medios de comunicación, el derecho de franquicia postal, el derecho y deber de emitir una declaración política y el derecho a inscribir candidatos a cargos de elección popular, entre otros.

Ahora bien, la repartición de los derechos de contenido patrimonial, como el derecho a la financiación estatal o el derecho de acceso a medios de comunicación deberá quedar explícitamente determinada en el acuerdo de escisión. Lo anterior, por cuanto de lo que se trata es de dividir el partido en dos o más entidades distintas, **sin que ello suponga, en ningún caso que el Estado debe destinar recursos no previstos para la financiación directa o indirecta de nuevas colectividades políticas. De ese modo, para lograr el reconocimiento independiente de derechos patrimoniales como la financiación estatal**

en los términos del artículo 109 de la Constitución política de 1991, será necesario acreditar los requisitos constitucionales originarios, contenidos en el artículo 108 de la Constitución en las siguientes elecciones al Congreso de la República. En tal escenario pueden suceder dos cosas; o que el partido escindido logre obtener el 3 por ciento o más de los votos válidos en las elecciones de Cámara o Senado; o que saque una votación inferior. En el primer caso, el Consejo Nacional Electoral, deberá mantener el reconocimiento de personería jurídica, pero esta vez, por haber cumplido los requisitos originarios y en consecuencia el partido político se hace acreedor de los derechos que el ordenamiento jurídico consagra. En el segundo caso, el partido político ya no obtendría personería jurídica, por mandato expreso del artículo 108 constitucional. Así bien, puede afirmarse que la escisión de partidos y movimientos políticos implica la división de una colectividad política con personería jurídica en dos o más movimientos o partidos, y que dicho estatus perdura hasta que se expidan las credenciales en las siguientes elecciones al congreso de la República de Colombia, en donde el ordenamiento prevé dos situaciones: (i) o el partido mantiene la personería jurídica independiente de las demás organizaciones políticas, o (ii) la pierde.

De otro lado, la capacidad de goce y ejercicio que tienen las colectividades políticas resultantes de la escisión, materializada por ejemplo en la capacidad de celebrar contratos, contraer obligaciones, ser sujeto de responsabilidades, inscribir candidatos a cargos de elección popular o emitir una declaración política, no es objeto de reparto en la escisión, sino que es una facultad intrínseca de las nuevas colectividades que al igual que el partido originario, viene dada por el reconocimiento de su personería jurídica.

La anterior previsión es más que lógica, pues si las colectividades políticas escindidas tienen su origen, fuente o nacimiento en un partido primigenio que cuenta con personería jurídica, entendida esta última como la capacidad de goce y ejercicio, no puede concebirse que los partidos o movimientos beneficiarios carezcan de dicha capacidad, o lo que es lo mismo: de personería jurídica. Sobre el particular, enseña el brocárdico latino que *accesorium sequitur principale;* es decir que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. En este caso, el partido originario es la entidad principal, de cuya escisión nacen uno o más colectividades que pueden concebirse como accesorias en su nacimiento y luego independientes. De ahí que los partidos y movimientos beneficiarios deben gozar de la misma capacidad que su fuente: el partido que se escinde.

En derecho societario, por ejemplo, una vez acreditados lo requisitos para escindir la sociedad, e inscrita la correspondiente escritura pública en el registro mercantil, las sociedades beneficiarias se hacen oponibles a terceros y adquieren las obligaciones y derechos que les fueren trasmitidos, constituyéndose así, en personas jurídicas

independientes de la sociedad que les dio origen (Art. 112 C. de C. y 10 L. 222 de 1995). Lo mismo sucede con los partidos y movimientos políticos que nacen de una escisión; pues una vez se acredite que cumplen con los requisitos legales de la misma, y sean registrados en el Registro único de partidos y movimientos políticos, deberá serles reconocida su personería jurídica, al igual que la tenía reconocida la colectividad que les dio origen.

Resalta esta Corporación que uno de los principios hermenéuticos del derecho es el denominado “efecto útil de las normas”. De acuerdo con este, si una norma admite dos o más interpretaciones, debe preferirse aquella que asigne un efecto útil a la norma; es decir, aquella que produzca una consecuencia que no haya sido ya asignada por otra norma preexistente. Nuestro ordenamiento jurídico se concibe como un sistema coherente y armónico de disposiciones normativas, por lo que en principio, no puede pensarse que existan normas repetidas o que asignen consecuencias idénticas a determinados supuestos de hecho, so pena de que alguna de ellas carezca de efecto útil. En consecuencia, no existen normas superfluas o reiterativas, sino disposiciones que regulan específicos supuestos de hecho.

De acuerdo con lo anterior, queda claro que la escisión de un partido o movimiento político con personería jurídica, una vez cumplidos los requisitos legales y estatutarios debe derivar en la creación de dos o más colectividades igualmente con personería jurídica. Una interpretación contraria, cercenaría al artículo 14 de la Ley 1475 de 2011 su efecto útil. Es decir, si los partidos o movimientos políticos resultantes de la escisión no pudiera serles reconocida su personería jurídica, no existiría entonces diferencia alguna entre la escisión (Art. 14 L. 1475 de 2011) y el derecho de retiro y desafiliación del que constitucionalmente gozan los militantes de un partido (Art. 107 C. Pol. y Art. 1 L. 130 de 1994), así como el derecho que en todo momento asiste a las personas de crear agrupaciones políticas (Art. 1 L. 130 de 1994); ni tampoco con la sanción de expulsión de los militantes que incumplan las normas, prevista en los estatutos de diversas agrupaciones políticas.

Por supuesto, para poder acceder al reconocimiento de personería jurídica, las colectividades resultantes de la escisión deberán allegar ante el Consejo Nacional Electoral, las actas de fundación, los estatutos, la plataforma ideológica y programática, la lista de afiliados y la prueba de la designación de los directivos, tal y como lo establece el inciso primero del parágrafo del artículo 3º de la Ley 1475 de 2011.

Podría alegar algún operador jurídico que el requisito originario contenido en el artículo 108 de la Constitución Política es taxativo y que en consecuencia, no existen otras formas para que a un partido le sea reconocida su personería jurídica. Sin embargo, la interpretación restrictiva de los derechos – que sigue al aforismo *inclusio unius, exclusio alterius* está

proscrita en el ordenamiento constitucional colombiano, en tanto el artículo 94 Superior dispone que "*la enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como una negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos".*

Verbigracia, el artículo 42 de la Constitución dispone que la familia se constituye por vínculos naturales o jurídicos entre un hombre y una mujer. Una interpretación taxativa y restrictiva de esa disposición llevaría a pensar que las parejas del mismo sexo no pueden constituir familia a la luz de nuestra Constitución. No obstante, tal entendimiento es errado, pues la copiosa y pacífica jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado que la garantía contenida en el artículo 42 dirigida a las familias heterosexuales, no es una negación de los derechos que tienen las familias constituidas por homosexuales a la luz del artículo 94 Superior. En el mismo sentido, el artículo 85 de la Constitución Política establece que son de aplicación inmediata los derechos consagrados en los artículos 11 a 31 y 33, 34, 37 y 40. No obstante, ha sido clara la jurisprudencia constitucional en que además de esos derechos, existen otros que son de aplicación inmediata, así no estén contenidos en ese artículo, pues conforme con la norma de interpretación de la cláusula 94, la enunciación de ciertos derechos no implica la negación de otros. Así las cosas, abundantes ejemplos cimientan la tesis que prohíja esta Colegiatura, como, el hecho de que se reconozca el derecho al "mínimo vital"; a pesar de no estar enunciado en el texto constitucional, o el que se tutele de manera directa el derecho a la salud, a pesar de no ser un derecho en principio accionable a la luz del artículo 85 Superior.

Consecuencia de lo dicho, la consagración en el artículo 108 de la Constitución de unos requisitos originarios para el reconocimiento de personería jurídica, no puede entenderse como la negación del derecho de partidos y movimientos a obtener dicho estatus por las vías derivadas consagradas por el legislador estatutario.

Recuérdese que el Constituyente de 1991 delegó al legislador estatutario a través del artículo 152 constitucional, para que regulara lo concerniente a la "c) *Organización y régimen de los partidos y movimientos políticos; estatuto de la oposición y funciones electorales".* Así las cosas, la Ley Estatutaria 1475 de 2011, permitió y reglamentó en su artículo 14 la escisión y fusión de partidos y movimientos políticos. Sobre el particular, la Corte Constitucional mediante sentencia C 490 de 2011 indicó:

> *"La exequibilidad del primer contenido normativo no ofrece mayor resistencia, habida consideración que indicar que la ley y los estatutos de los partidos y movimientos definirán las reglas para su disolución, liquidación, fusión y escisión, se explica tanto en la cláusula general de competencia legislativa sobre la materia, como por el grado de autonomía que la Carta reconoce a las agrupaciones*

> *políticas. Este margen se expresa, por antonomasia, a través de la fijación de regulaciones estatutarias a través de mecanismos democráticos internos"*[5]*.*

En este punto, el artículo 84 de la Constitución política dispone que "*cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera general, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales".* Ello significa que la figura de la escisión de partidos y movimientos políticos, contenida en el artículo 14 de la Ley 1475 de 2011 no puede ser interpretada de manera restrictiva, exigiéndose más requisitos que los contenidos en la misma ley para permitir una escisión, con las evidentes consecuencias que de ella se derivan.

Téngase en cuenta, además, que esta Corporación, mediante Resolución 2246 de 2018, mantuvo la personería jurídica de organizaciones políticas que conjuntamente superaron el umbral del artículo 108 de la Constitución Política, a pesar de que individualmente sus votaciones hubieran sido inferiores al 3 por ciento de los votos válidos para Cámara de Representantes o Senado. Ello demuestra que el artículo 108 de la Constitución, no puede interpretarse de manera restrictiva de cara a los derechos políticos, sino por el contrario, de forma que sus disposiciones permitan garantizar la participación política de la ciudadanía en la mayor medida de lo posible. La Resolución 2246 de 2018 fue confirmada en sede jurisdiccional por el Consejo de Estado, Corporación que precisó que:

> *"la coalición de listas de candidatos de partidos y movimientos políticos con personería jurídica para la elección de corporaciones públicas, busca que quienes lograron una representatividad importante en las contiendas electorales respectivas, no desaparezcan del escenario político y así, puedan lograr en una conjunción de esfuerzos, extender su plataforma ideológica en la búsqueda de su permanencia. Por consiguiente, resulta proporcional la resolución impugnada cuando del tenor literal del artículo 108 constitucional, extrae que la condición para conservar la personería jurídica es que las agrupaciones políticas obtengan un mínimo de apoyo ciudadano materializado en votos efectivamente depositados, circunstancia que se puede cumplir de manera individual o por coalición, en tratándose de partidos o movimientos políticos de carácter minoritario, en los términos previstos por el artículo 262 ídem"*[6]

Finalmente, se itera, el reconocimiento de personería jurídica de las agrupaciones políticas beneficiarias, no es una alteración, modificación o desconocimiento de la regla para el reconocimiento de personería jurídica contenida en el artículo 108 de la Constitución política. Lo anterior por cuanto el reconocimiento de los partidos beneficiarios, parte necesariamente de que la colectividad que se escinde ha obtenido la personería jurídica, en algún punto, cumpliendo con el umbral del 108. Entonces, la escisión no implica un reconocimiento de personería jurídica originario sino que tan solo es el reconocimiento de capacidad y goce que le asisten a dos o más entidades que comparten la esencia y sustancia del escindido y

[5] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
[6] Colombia. Consejo de Estado. Sección Quinta. C.P. Rocío Araujo Oñate. Bogotá, D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-28-000-2019-00013-00

que no puede ser menor ni mayor a aquel, por lo que se trata de un reconocimiento de personería jurídica derivado.

En conclusión, tanto la fusión como la escisión de los partidos y movimientos políticos son modos derivados para que las colectividades políticas beneficiarias les sea reconocida la personería jurídica por parte del Consejo Nacional Electoral.

4.5. ¿El partido político DIGNIDAD cumple con los requisitos normativos para que le sea reconocida la personería jurídica?

En el caso concreto, el Partido político **DIGNIDAD** que ha pedido el reconocimiento de su personería jurídica, nació a la vida jurídica como producto de la escisión sin disolución del Partido Político **POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO,** identificado con el número de NIT.830.124.850-8 y con personería jurídica vigente reconocida por el Consejo Nacional Electoral de conformidad con la **Resolución CNE 2241 de 2018.**

Debe, entonces, esta Corporación establecer primeramente si se han cumplido los requisitos normativos en la escisión del partido **POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO**, toda vez que dicho procedimiento se constituye en la fuente derivativa de existencia del hoy partido político **DIGNIDAD.** De ser así, se verificará si los estatutos, plataforma ideológica y programática, lista de afiliados y prueba de la designación de directivos del partido político **DIGNIDAD**, son constitucionales y legales, tal y como lo ordena el artículo 3º de la Ley 1475 de 2011 previo al reconocimiento de personería jurídica a la colectividad.

4.5.1. Requisito de licitud de la escisión

Como quedó explicado en precedencia, el artículo 14 de la Ley 1475 de 2011 dispone que la disolución, liquidación, fusión y escisión de los partidos y movimientos políticos se regirá por lo dispuesto en la ley y/o en sus estatutos. En ese sentido, esta Colegiatura verificará si la escisión del partido **POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO** cumplió con lo dispuesto en sus estatutos.

Valga advertir, que mediante la Resolución 4072 de 2020, confirmada mediante Resolución 0583 de 2021, esta Corporación electoral negó, por infundadas, las impugnaciones presentadas en contra de la decisión de escisión del partido **POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO,** con ocasión de la alegada falta de competencia de los delegados y la consecuente indebida conformación del Congreso Nacional Extraordinario del 24 de octubre de 2020. De esa manera, al existir cosa juzgada administrativa parcial, esta Corporación se abstendrá de evaluar nuevamente la licitud de la escisión en relación con ese particular

aspecto en este acto administrativo, lo que no le restringe para evaluar los demás aspectos que derivaron en la adopción de las decisiones del 24 de octubre de 2020.

4.5.1.1. La intención de escindir el partido POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO - PDA

A través de carta suscrita el 11 de septiembre de 2020 por los señores **JORGE ENRIQUE ROBLEDO CASTILLO, GUSTAVO RUBÉN TRIANA SUÁREZ, CLARA CECILIA GIRALDO PUERTA, CARLOS EDUARDO NARANJO O, FRANCISCO JOSÉ VALDERRAMA M., JOSE FERNANDO OCAMPO T., ENRIQUE ALFREDO DAZA G., ELÍAS FONSECA CORTINA, YASMIN ROMERO EPIAYU,** y **CARLOS MARIO ACERO C.,** en calidad de miembros principales del Comité Ejecutivo nacional del partido **PDA,** así como los señores **ALBA LUZ PINILLA, AURELIO SUÁREZ MONTOYA, LAURA CATALINA NAVA FARFÁN, JAIME MORENO GARCÍA, ANGÉLICA GIOVANNA RIAÑO** y **SARA SOFÍA ABRIL GUEVARA** en calidad de miembros suplentes del Comité Ejecutivo Nacional del partido en referencia, dirigida a los demás miembros del **COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL** y al señor **ÁLVARO ARGOTE MUÑOZ,** se propuso dar "*aplicación al derecho a la escisión voluntaria del partido",* fundamentados en "*un importante número de diferencias de orden táctico y de enfoques sobre cómo abordar la compleja situación nacional, el papel del partido en las elecciones venideras y la lectura del momento político y ante la inviabilidad de poder coincidir al respecto".*

Sobre el particular, resalta esta Corporación que se trata de una comunicación contentiva de una manifestación legítima amparada por la Constitución política de 1991, que garantiza los derechos de libertad de expresión y asociación (Arts. 20 y 38), de constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse (Arts. 40 y 107).

4.5.1.2. *La convocatoria al Congreso Nacional Extraordinario del 24 de octubre de 2020*

A través de la Resolución 075 de 2020, expedida por el Comité Ejecutivo Nacional del partido Polo Democrático Alternativo, se resolvió:

> **"*ARTÍCULO PRIMERO.*** *Convocar a los delegados y delegadas elegidos al IV Congreso del Polo Democrático Alternativo, que cumplan con los requisitos estatutarios de afiliados y afiliadas del Partido a Congreso Extraordinario, que se llevará a cabo el día sábado 24 de octubre de 2020, de forma no presencial, mediante sistema de control remoto. La citación se comunicará a los correos electrónicos y a las cuentas de WhatsApp de las y los delegados habilitados.*
>
> ***ARTÍCULO SEGUNDO:*** *Este Congreso Extraordinario tratará únicamente de la aprobación de la declaratoria de escisión, con el lleno de requisito señalado en los Estatutos del Polo Democrático Alternativo en el Artículo 23 numeral 10, del sector*

> *del partido representado por el senador Jorge Enrique Robledo Castillo, el representante a la Cámara Jorge Gómez Gallego, (…).*
>
> *(…)*
>
> ***ARTÍCULO CUARTO.** La presente Resolución de convocatoria del Congreso Extraordinario tomada por unanimidad, como también en su momento, la decisión final tomada por el Congreso Extraordinario se comunicará al Consejo Nacional Electoral, para los efectos pertinentes".*

Respecto de la Resolución 075 del 5 de octubre de 2020 del **PDA,** advierte esta Corporación que fue expedida por el Comité Ejecutivo Nacional y fue suscrita por el Presidente **ÁLVARO ARGOTE MUÑOZ** y el Secretario General **GUSTAVO R. TRIANA SUAREZ** del Partido. Una vez consultado el Registro único de partidos y movimientos políticos – RUP, constató esta corporación que para el 5 de octubre de 2020, efectivamente los señores **ARGOTE MUÑOZ** y **TRIANA SUAREZ** fungían como Presidente y Secretario General respectivamente del Polo Democrático Alternativo**.**

Aunado a lo dicho, de conformidad con el artículo **CUARTO** de la misma Resolución, la decisión en ella adoptada lo fue por unanimidad de los miembros del **COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL,** por lo que se cumplió con lo dispuesto en el artículo 21 estatutario, según el cual, se requiere del voto de al menos las dos terceras partes de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional para poder convocar al Congreso Nacional. Establece la norma en cita que:

> **"*Artículo 21.** Plazos de realización. El máximo organismo de dirección del Polo es el Congreso Nacional, que se reunirá ordinariamente cada dos años y extraordinariamente cuando sea convocado por el Comité Ejecutivo Nacional con el voto de al menos dos terceras partes de sus miembros o por un número superior al treinta por ciento (30%) de los afiliados y afiliadas del Partido o Junta Directiva Nacional con el voto de al menos las tres quitas partes de sus miembros".*

4.5.1.3. Definición de aspectos procesales del Congreso extraordinario del 24 de octubre de 2020

Por medio de reunión ordinaria número 317 del Comité Ejecutivo Nacional del 19 de octubre de 2020 se definieron algunos aspectos adjetivos del Congreso extraordinario que tendría lugar el 24 de octubre de 2020. A esta reunión asistieron las siguientes personas:

ALVARO JOSE ARGOTE	**GUSTAVO R TRIANA SUAREZ**

JAIME DUSSÁN CALDERÓN	**MARTHA CECILIA CARRILLO**
FRANCISCO VALDERRAMA	**MAITE MISAS TIQUE**
CATALINA NAVA FARFÁ	**ANGÉLICA RIAÑO LOZANO**
ENRIQUE DAZA GAMBA	**LAUREANO GARCÍA PEREA**
WILSON ALFONSO BORJA	**CARLOS MARIO ACERO CASTELLANOS**
ANTONIO PEÑALOZA	**GLORIA MARTÍNEZ NIEBLES**
PATRICIA MOLINA BELTRÁN	**CONSTANZA VARGAS**
CARLOS ALBERTO BENAVIDES MORA	**GILMA GÓMEZ**
CLARA GIRALDO PUENTES	**IVÁN CEPEDA CASTRO**
ALBA LUZ PINILLA	**ALEJANDRO OCAMPO GIRALDO**
VÍCTOR CORREA	
TOTAL:	**VEINTITRES (23)**

Una vez consultado el **RUP,** se evidencia que de los sujetos arriba mencionados conformaban el Comité Ejecutivo Nacional del Partido **POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO** para el 5 de octubre de 2020, las siguientes personas:

1. **ALVARO JOSÉ ARGOTE**
2. **GUSTAVO R. TRIANA**
3. **JAIME DUSSÁN CALDERÓN**
4. **FRANCISCO VALDERRAMA**
5. **MAITE MISAS TIQUE**
6. **CATALINA NAVA FARFÁN**
7. **ANGÉLICA RIAÑO LOZANO**
8. **ENRIQUE DAZA GAMBA**
9. **LAUREANO GARCÍA PEREA**
10. **WILSON ALFONSO BORJA**
11. **ANTONIO PEÑALOZA**
12. **GLORIA MARTÍNEZ NIEBLES**
13. **PATRICIA MOLINA BELTRÁN**
14. **CARLOS ALBERTO BENAVIDES MORA**

15. GILMA GÓMEZ	**17. IVÁN CEPEDA CASTRO**
16. CLARA GIRALDO PUENTES	**18. ALBA LUZ PINILLA**

Lo anterior, de acuerdo con los registros que fueran realizados en el RUP por medio de las Resoluciones CNE 1638 de 2015 y 2667 de 2017. Ahora bien, se resalta que el señor **CARLOS ALBERTO BENAVIDES MORA** es miembro **SUPLENTE** del **COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL PDA,** renglón en el que el miembro principal es la señora **CLARA GIRALDO PUENTES,** también presente en la reunión. Ello significa que en este caso, ante la presencia del miembro principal, no es dable contabilizar el voto o presencia del miembro suplente. Corolario de lo expuesto, a la reunión del 5 de octubre de 2020 asistieron 17 miembros del **COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL,** dos suplentes y un invitado, tal y como quedó registrado en el Acta de la reunión, obrante en el expediente.

El artículo 27 de los estatutos establece que el Comité Ejecutivo podrá sesionar con la mayoría de sus miembros, por lo que la reunión del 19 de octubre de 2020 contaba con quorum para deliberar y decidir.

En desarrollo de la reunión, los asistentes aprobaron las siguientes disposiciones:

1. Metodología virtual para el desarrollo del congreso, a través de tres salas electrónicas. Los señores Mauricio Castañeda y Angie Rodríguez están encargados de la plataforma y de la organización del congreso. Se realizó un filtro de los delegados al congreso de acuerdo con el cual "*da un total aproximado de 227 personas, y tenemos 48 de Bogotá, 2 de Caldas y 66 de Cundinamarca, reportados como personas que no se han podido contactar".*

2. Formato que debe diligenciar cada uno de los votantes, identificado con el cabezote del partido, fecha del congreso, nombre, apellido, identidad y departamento y el siguiente texto:

   "*Voto para aprobar la solicitud de escisión de un sector de integrantes del Partido Polo Democrático Alternativo, de conformidad con el artículo 4 de la Ley 1475 de 2011, los artículos 23 y 93 de los Estatutos del Partido y con los criterios y nombres del sector solicitante de la escisión contenidos en la Resolución número 075 del 5 de Octubre* (sic) *de 2020 del Comité Ejecutivo Nacional, resolución que fue aprobada por unanimidad.*

   Voto sí

Voto No

Voto Blanco".

3. Se ratificó la comisión escrutadora que participó en el congreso extraordinario de 29 de agosto, conformada por los señores **GUSTAVO TRIANA, ANTONIO PEÑALOZA, SEBASTIÁN QUIROGA, CONSTANZA VARGAS, LILIANA BARÓN,** y **FRANCISCO QUIROGA.**

Las anteriores disposiciones fueron aprobadas por unanimidad.

4.5.1.4. El desarrollo del Congreso extraordinario del 24 de octubre de 2020

El día 24 de octubre de 2020, el señor **ALVARO ARGOTE** instala el Congreso extraordinario del PDA, certificando que para tal momento existen trescientas diez (310) personas conectadas entre las tres salas habilitadas. Las Salas de votación se abren a las 10:30 a.m. y a las 4:00 p.m. se cerraron, dando como resultado una votación de 422 delegados participantes en la votación.

4.5.1.5. Escrutinio de los votos emitidos en el Congreso del 24 de octubre de 2020

El día 26 de octubre de 2020 se reunió la comisión escrutadora designada el día 19 de octubre de 2020 junto con el Veedor Nacional del partido. En el acta quedaron consignados los siguientes datos relevantes del procedimiento de votación:

FECHA DE VOTACIÓN	24 DE OCTUBRE DE 2020 DE 10 A.M. A 4P.M.
MEDIOS DE VOTACIÓN:	GOOGLE MEET – WHATSAPP POR ABONADO – CORREO CERTIFICADO
OPCIONES DE VOTO:	SI- NO – EN BLANCO
CENSO ELECTORAL DEPURADO:	546 DELEGADOS HABILITADOS

Al cabo del procedimiento de escrutinio, se llegó a los siguientes resultados:

OPCIÓN DE VOTO	VOTOS	VOTOS	VOTOS	TOTAL

	SALA 1	SALA 2	SALA 3	VOTOS
A FAVOR DE LA ESCISIÓN	163	132	110	405
EN CONTRA DE LA ESCISIÓN	4	0	1	5
EN BLANCO:	0	0	0	0
VOTOS VÁLIDOS	167	132	111	410
VOTOS NO MARCADOS	0	0	0	0
TOTAL VOTOS	167	132	111	410
VOTOS NULOS				31

Advierte la Corporación que todos los aspectos procedimentales del Congreso del 24 de octubre de 2020 del partido **PDA** fueron tramitados conforme a los estatutos de la colectividad, así como con respeto a la ley y a la Constitución Política por lo que debe continuarse adelante con la verificación de los demás requisitos legales establecidos para la escisión de partidos y movimientos políticos.

4.5.2. Requisito de no existencia de procesos sancionatorios en contra del partido que se escinde

El artículo 14 de la Ley 1475 de 2011 dispuso que "*no podrá acordarse la disolución, liquidación, fusión y escisión voluntaria de un partido o movimiento político cuando se haya iniciado proceso sancionatorio".* Como quedó dicho, la finalidad de esta disposición es evitar que a través de las figuras de liquidación, fusión y escisión se evite la efectividad y cumplimiento de las sanciones que imponga el Consejo Nacional Electoral en el marco de sus competencias por la vulneración a las normas electorales.

Ahora bien, en el caso concreto, mediante la Resolución 075 de 2020, a través de la cual se convocó el Congreso Nacional del Polo Democrático para el 24 de octubre del mismo año, para que se pronunciara sobre la escisión del partido, se dispuso en el artículo tercero que:

> "***ARTÍCULO TERCERO.*** *La escisión de que trata el artículo anterior se tramita conforme a la Ley 1475 de 2011 y los Estatutos del Polo Democrático Alternativo, está referida a la escisión política y legal de dicho sector de compañeros y en tal sentido no tiene pretensiones de carácter civil, comercial, administrativo o económico que afecten la Personería Jurídica, los símbolos, patrimonios y funcionamiento del Polo Democrático Alternativo, sin detrimento de las garantías que para su ejercicio político los escindidos soliciten al Consejo Nacional Electoral".*

De lo anterior, advierte esta Corporación que la escisión del partido **POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO**, no acarrea la disolución del mismo, y más allá de ello, trajo como consecuencia que los símbolos, "patrimonios", derechos civiles, comerciales, administrativos y económicos que ostenta la colectividad de marras quedan radicados en ella.

En ese sentido, el cometido del artículo 14 de la Ley 1475 de 2011 consistente en evitar que a través de figuras como la fusión o la escisión de un partido o movimiento político se evadan las responsabilidades pecuniarias derivadas de las sanciones que impone el Consejo Nacional Electoral, no sufre afectación alguna. Lo anterior teniendo en cuenta que los derechos civiles, comerciales, administrativos y económicos y demás "patrimonios" del **POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO** siguen radicados en él, por lo que las sanciones pecuniarias ejecutoriadas impuestas por la máxima autoridad electoral en contra de dicho partido, así como las que eventualmente se lleguen a imponer como consecuencia de los procesos en curso bien pueden hacerse efectivas con cargo a su patrimonio, compuesto por bienes y recursos líquidos, los cuales, se itera, no sufren demérito con ocasión de la escisión.

Así entonces, una aplicación literal del artículo 14 de la Ley 1475 de 2011, se convertiría en un ritualismo excesivo que desconocería derechos fundamentales tales y como el que le asiste a toda persona de constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas y la libertad de afiliarse a ellos o retirarse (Núm. 3 Art. 40 y Art. 107 C. Pol.).

De esa manera, al ser nuestra Constitución norma de normas, es decir, mandato respecto del cual no puede existir disposición contraria (Art. 4 C. Pol.), debe esta Corporación dar garantía efectiva al derecho a constituir y retirarse libremente de los partidos, que en el caso concreto se materializa a través de una escisión. Lo anterior, por supuesto, sin desconocer el espíritu que informó la redacción del artículo 14 de la Ley 1475 de 2011.

En consecuencia, la escisión del partido **POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO** ha cumplido con los requisitos constitucionales, legales y estatutarios.

4.5.3. El acta de fundación del partido político DIGNIDAD

De conformidad con el parágrafo del artículo 3º de la Ley 1475 de 2011, la solicitud de reconocimiento de personería jurídica de un partido debe ir acompañada del acta de fundación del partido. En el caso concreto, advierte esta Corporación que los peticionarios adjuntaron el acta de la reunión del día 27 de octubre de 2020 que dio origen al partido político **DIGNIDAD,** suscrita por los señores **LEONIDAS GÓMEZ GÓMEZ** y **GUSTAVO RUBEN TRIANA** en sus calidades de Presidente y Secretario General, respectivamente, de la colectividad.

4.5.4. Licitud de los estatutos del partido político DIGNIDAD

El artículo 3º de la Ley 1475 de 2011 establece que la solicitud de reconocimiento de personería jurídica de un partido debe ir acompañada de los estatutos que regirán su funcionamiento. El mismo artículo dispone que le corresponde a esta Corporación autorizar el registro de los estatutos en el Registro único de Partidos y Movimientos Políticos – RUP, **previa verificación del cumplimiento de los principios y reglas de organización y funcionamiento consagrados en la Constitución y la ley.**

Así bien, el artículo 4º de la Ley 1475 de 2011 establece los contenidos mínimos que todo estatuto de un partido o movimiento político debe contener. De esa manera, esta Corporación analizará si los Estatutos del Partido **DIGNIDAD** regulan todas las temáticas ordenadas por el legislador y si dicha regulación es acorde con la Constitución política y la ley. Con tal propósito se estudiarán los estatutos del partido **DIGNIDAD** por ejes temáticos.

PRIMER EJE TEMÁTICO: DENOMINACIÓN Y SÍMBOLOS (NÚM. 1º ART. 4º L. 1475 DE 2011)

Estatutos presentados por el partido político Dignidad:

"CAPÍTULO I

Denominación, definición, y miembros

***Artículo 1.- Denominación**. La organización política se identificará como DIGNIDAD.*

***Artículo 2.- Logo - Símbolo.** Se delega en el Comité Ejecutivo Nacional la adopción del logo, símbolo y colores del Partido".*

Consideraciones del Consejo Nacional Electoral:

Artículo 1: El artículo quinto de la Ley 130 de 1994 establece que los partidos y movimientos políticos son propietarios de su nombre. Este no podrá ser usado por ningún otro partido u organización política y deberá distinguirse claramente de la de cualquier otro existente. Así mismo la norma *ejusdem* dispone que el nombre no podrá en forma alguna parecerse o tener relación gráfica o fonética con los símbolos de la patria o con emblemas estatales.

En el caso concreto, el nombre de **DIGNIDAD,** NO tiene relación gráfica ni fonética con símbolos de la patria o emblemas estatales. En el mismo sentido, una vez consultado el Registro único de partidos y movimientos políticos – RUP, se constató que no existe en la actualidad ninguna organización política con personería jurídica reconocida por esta autoridad electoral cuya denominación sea **DIGNIDAD** o similar. En consecuencia, es procedente registrar el nombre de la colectividad política **DIGNIDAD** en el **RUP.**

Artículo 2: El artículo segundo de los estatutos de **DIGNIDAD**, delegó a su Comité Ejecutivo Nacional la adopción del logo, símbolo y colores del partido. Así bien, recalca esta Corporación que de conformidad con el artículo 4 de la Ley 1475 de 2011 los estatutos de los partidos deben contener como mínimo su denominación y símbolos. En ese sentido, la denominación y símbolo de un partido se convierte necesariamente en un contenido estatutario cuya definición o modificación no puede delegarse en otros estamentos partidarios.

Mediante escrito electrónico radicado en la Corporación el 21 de marzo de 2021, el Presidente, Vicepresidenta y Secretario General del partido Dignidad remitieron el siguiente isologo de la colectividad adoptado por el Comité Ejecutivo Nacional el día 26 de enero de 2021:



El isologo contiene la palabra **DIGNIDAD** en letras mayúsculas con fuente Monserrat Black de color purpura (Medium purple U). Sobre la última letra se asoma un círculo pequeño color

anaranjado (XG Orange G). En la parte inferior derecha del isologo aparece la dirección “www.dignidad.co” en color anaranjado.

De acuerdo con el artículo 5º de la Ley 130 de 1994, los partidos y movimientos políticos son propietarios de su nombre y del símbolo que hayan registrado. Este último no podrá ser usado por ningún otro partido u organización. Así mismo, el inciso tercero del artículo 35 de la Ley 1475 de 2011 dispone que los símbolos, emblemas o logotipos que inscriban los partidos o movimientos en el Consejo Nacional Electoral no podrán incluir o reproducir los símbolos patrios, los de otros partidos o movimientos políticos, ni ser iguales o generar confusión con otros previamente registrados.

De acuerdo con lo dicho y una vez revisado el Registro único de partidos y Movimientos políticos constató esta Corporación que NO existe un isologo similar al presentado por el Partido **DIGNIDAD**. Igualmente, este isologo no incluye ni reproduce los símbolos patrios por lo que su registro es procedente.

Ahora bien, el isologo de **DIGNIDAD,** será registrado y se entenderá incorporado en el artículo segundo de los estatutos del partido, por mandato expreso del numeral primero del artículo 4º de la Ley 1475 de 2011. Ello significa que una modificación al mismo requerirá de un nuevo registro ante esta Corporación, previa modificación estatutaria.

SEGUNDO EJE TEMÁTICO: RÉGIMEN DE PERTENENCIA AL PARTIDO O MOVIMIENTO POLÍTICO EN EL QUE SE SEÑALEN REGLAS DE AFILIACIÓN Y RETIRO, ASÍ COMO LOS DERECHOS, DEBERES Y PROHIBICIONES DE SUS MIEMBROS. (NÚM. 2º ART. 4º L. 1475 DE 2011)

Estatutos presentados por el partido político Dignidad:

“CAPÍTULO IV

De los afiliados (as), sus derechos y deberes

***Artículo 7.- Miembros**. Serán miembros aquellas personas mayores de dieciséis (16) años que expresen su voluntad de pertenecer a éste, y que a través de una afiliación se inscriban ante la colectividad, se comprometan con sus principios, cumplan los Estatutos y del Programa. El sistema de afiliación y registro se llevará en la Sede Nacional, conforme a la reglamentación del Consejo Nacional Electoral.*

***Artículo 8.- Derechos**. Son derechos de los (as)afiliados (as):*

1. Intervenir en la adopción de las decisiones del Partido y en la selección de sus candidatos(as).

2. Recibir la misma protección y trato por parte de todas las autoridades del Partido y gozar de los mismos derechos, libertades y oportunidades.

3. Participar en las actividades del Partido, en el marco de las instancias previstas para la militancia.

4. Elegir y ser elegido(a), para formar parte de los organismos de dirección, gobierno, administración y control del Partido.

5. Fiscalizar la gestión de su dirigencia y las actividades del Partido.

6. Disentir y ejercer la sana crítica, la libre expresión de las ideas y presentar iniciativas y proyectos.

7. Recibir educación y formación social y política.

8. Desafiliarse libremente del Partido, bien sea mediante pronunciamiento público o mediante escrito presentado ante el respectivo organismo regional o nacional del Partido.

9. Recibir información oportuna y veraz sobre las actividades políticas, administrativas y financieras del Partido, a través de por lo menos una actividad anual de rendición de cuentas o de informe escrito socializado a través de la página web del Partido.

10. Gozar de la protección de los datos personales que hayan sido reportados al momento de la afiliación o inscripción al Partido, de acuerdo con la legislación vigente en la materia.

11. Postularse a candidaturas para cargos de elección popular a nombre del Partido y según el procedimiento previsto por la organización para ellos.

***Artículo 9.-** Deberes. Son deberes de la militancia del Partido:*

1. Acatar, cumplir y respetar la Constitución Política, la Ley, los Estatutos, el Código de Ética y Garantías y el Régimen Disciplinario y las decisiones de los órganos de dirección del Partido.

2. Asistir y participar en los organismos del Partido de los cuales haga parte.

3. Representar al Partido de conformidad con los Estatutos y el Programa.

4. Participar en los eventos, movilizaciones y actividades convocadas por el Partido.

5. Contribuir económicamente al sostenimiento del Partido.

6. Hacer buen uso de los bienes y recursos del Partido.

7. Apoyar las candidaturas del Partido escogidas de conformidad con los presentes Estatutos.

8. No pertenecer simultáneamente a otro partido o movimiento político.

9. Todo(a) afiliado (a) al Partido que participe en la administración pública, o que haya sido elegido(a) a cargos uninominales o corporaciones públicas, deberá dar ejemplo de rectitud, honradez, transparencia e idoneidad, en el marco de la Constitución Nacional, las leyes, los Estatutos y fines del Partido y deberá rendir informe anual de su gestión a la respectiva instancia de dirección territorial y a la Veeduría Nacional del Partido.

10. Respetar, acoger e impulsar las decisiones legítimamente adoptadas por el Partido, en todas sus instancias y ser leales al Partido y a su Programa.

11. Actuar en bancadas en los cuerpos colegiados.

12. Acudir a los canales democráticos del Partido para resolver sus discrepancias y disentimientos, a efectos de mantener la unidad. Es deber respetar la honra y el buen nombre de la militancia.

13. La militancia del Partido desarrollará su actividad de conformidad con las normas de comportamiento adoptadas en el Código de Ética y Garantía y el Régimen Disciplinario.

***Artículo 10.- Prohibiciones**. Los miembros del Partido tienen prohibido:*

1. Pertenecer simultáneamente a otro partido o movimiento político con o sin personería jurídica.

2. Afiliarse a otro partido o movimiento político con o sin personería jurídica, o pertenecer a un grupo significativo de personas, mientras ostenten la investidura o cargo.

3. Apoyar candidaturas distintas a las inscritas por el Partido, o a las definidas por las directivas territoriales.

4. Presentarse a la siguiente elección por un partido o movimiento político distinto, o grupo significativo de personas, o deberán renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripción de candidatos y candidatas en la respectiva circunscripción electoral.

Parágrafo 1°. - La militancia del Partido que incurra en las prohibiciones contenidas en el presente artículo, serán sancionados hasta con la separación definitiva y cancelación de la afiliación al Partido, y si ostentaren cargos de dirección, administración o control dentro del Partido, podrán ser separados(as) inmediatamente de su cargo.

Parágrafo 2°. - En el caso de los candidatos y candidatas que incurran en estas prohibiciones les será revocado el aval previo informe a la Veeduría Nacional y la Comisión de Avales; sin perjuicio de las acciones disciplinarias a que haya lugar.

Consideraciones del Consejo Nacional Electoral:

Artículo 7: El artículo 13 de la Constitución Política consagra el derecho fundamental a la igualdad, en virtud del cual todas las personas son concebidas con iguales derechos y oportunidades y se proscribe todo tipo de discriminación.

De otro lado, el ordenamiento colombiano garantiza la efectividad de los derechos de la ciudadanía juvenil; definida como la “condición de cada uno de los miembros jóvenes de la comunidad política democrática” que “implica el ejercicio de los derechos y deberes de los jóvenes en el marco de sus relaciones con otros jóvenes, la sociedad y el Estado. La exigibilidad de los derechos y el cumplimiento de los deberes estará referido a las tres dimensiones de la ciudadanía: civil, social y pública” (Núm. 7 Art. 5 L. 1622 de 2013).

A su turno, para los efectos de la ciudadanía juvenil, por joven se hace referencia a ***“t**oda persona entre 14 y 28 años cumplidos en proceso de consolidación de su autonomía*

intelectual, física, moral, económica, social y cultural que hace parte de una comunidad política y en ese sentido ejerce su ciudadanía" (Núm. 1 Art. 5 L. 1622 de 2013).

En ese sentido resalta esta Sala que en el marco de la ciudadanía juvenil, los jóvenes deben gozar plenamente de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, tanto a nivel individual como colectivo reconocidos en la constitución y en los tratados internacionales.

Así pues, de conformidad con el numeral 10 del artículo 4º de la Ley 1622 de 2013 el Estado tiene el deber de reducir las desigualdades entre los distintos puntos de partida de los jóvenes en la elaboración de su proyecto de vida.

En relación con el escenario político, el Estado tiene el deber de promover en los jóvenes el conocimiento y apropiación progresiva de las prácticas democráticas y reconocer, valorar y usar los instrumentos jurídicos para la exigibilidad de sus derechos (Núm. 19 Art. 8 L. 1622 de 2013).

Uno de los escenarios de participación política y democrática que la Ley asigna a los jóvenes es el de la elección y conformación de los Consejos de Juventud. Los jóvenes que deseen hacerse elegir popular y directamente por otros jóvenes, inscribirán su nombre ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, avalados por organizaciones independientes; por prácticas organizativas juveniles constituidas o por partidos o movimientos políticos con personería jurídica reconocida. (Arts. 41 y 48 L. 1622 de 2013).

Por lo dicho, los partidos políticos con personería jurídica reconocida se convierten en actores relevantes para permitir el ingreso de los jóvenes a la vida democrática y política de nuestro país. Por ese motivo, el artículo 11 de la Ley 1622 de 2013 ordenó al Estado y a la sociedad en general, la promoción, protección y realización de los derechos de las y los jóvenes; así como generar las condiciones necesarias para que de manera digna, autónoma, responsable y trascendente, ejerzan su ciudadanía mediante la realización de proyectos de vida individuales y colectivos. Entonces, la labor de los partidos políticos respecto de las juventudes debe ser integral y libre de toda discriminación.

En el caso concreto el artículo 7º de los estatutos del partido político **DIGNIDAD** establecen como requisito mínimo para poder ser miembro de la colectividad, la edad de dieciséis años.

Tradicionalmente, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado que la imposición de un límite mínimo de edad, no puede per se considerarse discriminatorio, en tanto que con el mero paso del tiempo la persona podrá alcanzar el estatus impuesto. No sucede lo mismo con los límites máximos de edad, que son discriminatorios en tanto una vez alcanzada

determinada edad, no puede devolverse el tiempo para cumplir con el requisito impuesto. Sobre el particular ha indicado la Corte que:

> *"Una diferenciación con fundamento en la edad, no puede ser tachada como sospechosa de discriminación cuando se establecen mínimos para el ejercicio de una actividad. En cambio, ella se torna más problemática si fija topes (máximos) a partir de los cuales no podrá ejercerse una actividad, sencillamente porque la edad se convierte ahora en rasgo permanente de la persona y del cual no podrá prescindir voluntariamente. Cuando la ley establece requisitos mínimos para realizar una labor o recibir un beneficio, esa regulación está sujeta a un juicio de igualdad dúctil, mientras que deben ser consideradas problemáticas o semi-sospechosas aquellas normas que establecen límites máximos a partir de los cuales una persona es excluida de una cierta actividad o de un determinado beneficio. Estas últimas regulaciones están entonces sujetas a un escrutinio de igualdad intermedio"*

A pesar de lo expuesto, resalta esta Sala que la adopción de un límite mínimo de edad, superior al establecido en la ley para el ejercicio de derechos políticos, para poder ser miembro de un partido político puede llegar a ser discriminatorio. Lo anterior, teniendo en cuenta que la ciudadanía juvenil es aplicable a las personas que tienen entre catorce y veintiocho años. Ello significa que la ciudadanía juvenil no se mantiene una vez se adquiere, sino que por el contrario es temporal y fenece con el paso del tiempo. En consecuencia, privar a las personas de catorce y quince años de pertenecer a una colectividad política resulta discriminatorio para el ejercicio de los derechos políticos derivados de la ciudadanía juvenil, que se itera, es un estatus transitorio.

Posiblemente, la razón por la que se haya estipulado una edad mínima de 16 años, puede responder a criterios de conocimiento, madurez o coherencia en las ideas argumentos y propuestas que pueda presentar un afiliado al partido. Sin embargo, dicha limitación por razón de la edad, no es una medida adecuada para logra dicha presunta finalidad, en tanto la edad física no es el factor decisivo ni distintivo respecto del conocimiento, madurez o desarrollo de una persona. Por ende, dicho tratamiento desigual resulta innecesario y por demás desproporcional, pues lesiona negativamente los derechos que asisten a todos los jóvenes.

En conclusión, la medida no es proporcional y por tanto, esta Corporación avalará el artículo 7º de los estatutos del partido **DIGNIDAD**, pero se abstendrá de registrar la expresión "*mayores de dieciséis(16) años"* por ser inconstitucional.

Artículos 8 a 10: En cuanto hace a los artículos 8 a 10 de los estatutos, advierte esta Corporación que desarrollan de manera clara los derechos, deberes y prohibiciones de los militantes del partido **DIGNIDAD,** en el marco de la autonomía concedida por el constituyente a las agrupaciones políticas. Por ende estas normas serán inscritas en el **RUP.**

TERCER EJE TEMÁTICO: **Autoridades, órganos de dirección, gobierno y administración, y reglas para su designación y remoción. (NÚM. 3º ART. 4º L. 1475 DE 2011)**

Convocatoria, fecha y demás aspectos relacionados con la reunión de la convención del partido o movimiento político, o de su máximo órgano de dirección, la cual deberá realizarse por lo menos cada dos (2) años, y garantizar a sus miembros influir en la toma de las decisiones más importantes de la organización política. (NÚM. 4º ART. 4º L. 1475 DE 2011)

Deberes de los directivos, entre ellos el de propiciar procesos de democratización interna y el fortalecimiento del régimen de bancadas. (NÚM. 6º ART. 4º L. 1475 DE 2011)

Estatutos presentados por el partido político Dignidad

"CAPÍTULO VI

De los organismos de dirección

Artículo 17.- Los principios de los organismos de dirección. *Las estructuras organizativas del Partido deberán garantizar la libre participación de todos sus militantes y el desarrollo de los siguientes postulados:*

1. Respeto y desarrollo de los principios democráticos de la Constitución Nacional.

2. Reconocimiento y respeto de los derechos de las mayorías y de las minorías.

3. Autonomía regional y local en sus competencias.

4. Participación activa en todos los niveles y espacios del Partido, de representación de las mujeres, las y los jóvenes, personas de grupos poblacionales y libre opción sexual.

Artículo 18.- Organismos de dirección del Partido a nivel nacional. *Los organismos de dirección del Partido a nivel nacional son los siguientes:*

1. Congreso Nacional.

2. Junta Nacional.

3. Comité Ejecutivo Nacional.

Para garantizar la elección de las mujeres, jóvenes y personas de los grupos poblaciones afrodescendientes, indígenas y de libre opción sexual, se mantendrán por lo menos las siguientes proporciones:

1. Treinta por ciento (30%) mujeres.

2. Veinte por ciento (20%) jóvenes.

3. Diez por ciento (10%) para los grupos poblacionales (afrodescendientes, indígenas, LGTBI, que se distribuirá en partes iguales para cada uno).

En el Congreso Nacional se garantizará una participación de cinco (5) militantes provenientes de los colombianos y las colombianas en el exterior. La garantía de las cuotas de discriminación positiva para mujeres, jóvenes y grupos poblacionales, se interpretará de modo que los cupos de cada grupo en las listas, se calculen por el método de redondeo aproximando al entero inferior, cuando la fracción resultante de multiplicar el número de cargos a proveer por el porcentaje correspondiente sea menos que cero cinco (0.5) y al entero superior cuando la fracción sea mayor o igual a cero cinco (0.5). Esta norma regirá, asimismo, para todos los casos de elección por listas en el Partido.

Si asignados los cupos a que tuviese derecho cada una de las listas, se observa que no se cumple con el porcentaje establecido en los presentes estatutos, se procederá a completar la cuota descendiendo a quien haya obtenido la menor votación o a quien se encuentre en el último renglón elegido de la lista, para que ascienda a completar el cupo y cumplir con la cuota, quien sigue en votación o en orden de lista.

***Artículo 19.**- La toma de decisiones en el Partido se hará por medio de la mayoría de votos de los miembros del respectivo organismo, sin perjuicio de que se busque el consenso. Sus reuniones podrán ser presenciales o mediante plataformas de internet según las circunstancias lo permitan a juicio del presidente del respectivo organismo. El Partido adoptará los mecanismos de consulta directa de la militancia en asuntos de su jurisdicción, que serán determinados por el Congreso Nacional o el Comité Ejecutivo Nacional. Estas consultas pueden ser de carácter local, municipal, distrital, departamental o nacional. Los resultados serán obligatorios. Se implementarán las herramientas técnicas para garantizar la máxima cobertura posible.*

***Artículo 20.- Congreso Nacional**. Plazos de realización. El máximo organismo de dirección del Partido es el Congreso Nacional, que se reunirá ordinariamente cada dos (2) años y extraordinariamente cuando sea convocado por el Comité Ejecutivo Nacional con el voto de la mayoría de sus integrantes principales o por un número superior al treinta por ciento (30%) de los militantes del Partido o por la mayoría de la Junta Nacional. Su reunión podrá ser presencial o mediante plataformas de internet según las circunstancias lo permitan y el Comité Ejecutivo Nacional lo apruebe.*

***Artículo 21.- Conformación del Congreso Nacional.** El Congreso Nacional será integrado hasta por quinientos (500) delegados y delegadas, elegidos por votación de la militancia debidamente inscrita en el Partido, según reglamentación expedida por el Comité Ejecutivo Nacional. Dicha elección podrá hacerse mediante voto presencial en las urnas o por voto electrónico según las circunstancias lo permitan y lo apruebe el Comité Ejecutivo Nacional.*

Los parlamentarios(as), diputados(as), concejales(as) y ediles(as) de ciudades de más de cien mil (100.000) habitantes serán delegados(as) por derecho propio.

***Parágrafo 1°**. - Quienes ejerzan o hayan ejercido los cargos de presidente(a) o secretario(a) general del partido, serán también delegados por derecho propio a los Congresos Nacionales en las mismas condiciones de los delegados(as) elegidos(as).*

***Artículo 22.-** Funciones. Son funciones del Congreso Nacional:*

1. Aprobar, reformar o modificar el Programa y los Estatutos del Partido.

2. Elegir el Comité Ejecutivo Nacional, la Comisión Nacional de Ética y Garantías, la Presidencia, la Secretaría General, la Vicepresidencia y la Veeduría Nacional.

3. Evaluar y aprobar los informes de gestión del Comité Ejecutivo Nacional, publicados un mes antes de instalarse el Congreso.

4. Definir la política electoral y de alianzas del Partido.

5. Definir la política internacional y las relaciones internacionales del Partido.

6. Expedir las reglamentaciones de su competencia.

7. Conocer el presupuesto y el estado anual de cuentas.

8. Fenecer las cuentas de gasto y los estados financieros del Partido, previo examen de una comisión especial nombrada por el Comité Ejecutivo Nacional.

9. Darse su propio reglamento de funcionamiento.

10. El Congreso podrá delegar sus funciones en el Comité Ejecutivo Nacional.

11. Elegir las candidaturas a la Presidencia y Vicepresidencia de la República.

12. Disolver o escindir el Partido con la aprobación de la mayoría.

13. Las demás que se deriven de los presentes Estatutos, la Constitución Política y la Ley.

***Artículo 23.**- **Junta Nacional.** La Junta Nacional es un órgano de dirección y consulta del Partido entre Congresos.*

***Artículo 24.- Conformación y funcionamiento de la Junta Nacional.** La Junta Nacional estará integrada por:*

1. Los integrantes principales y suplentes del Comité Ejecutivo Nacional.

2. Los presidentes de las Directivas Departamentales que estén organizadas y cuenten con la aprobación del Comité Ejecutivo Nacional.

3. Tres (3) representantes de los sectores poblacionales.

4. Un (1) representante de los y las residentes en el exterior.

***Parágrafo 1°.** La Junta Directiva Nacional realizará dos reuniones al año, por convocatoria del CEN. Estas reuniones podrán ser presenciales o mediante plataformas de internet según las circunstancias lo permitan y lo apruebe el Comité Ejecutivo Nacional.*

***Artículo 25.- Funciones**. Son funciones de la Junta Directiva Nacional:*

1. Desarrollar las políticas y programas definidos por el Congreso Nacional.

2. Orientar la acción política nacional e internacional.

3. Apoyar las actividades legislativas, nacionales, regionales y locales.

4. Desarrollar y concretar el programa político para las elecciones de cargos uninominales y corporaciones públicas.

5. Propiciar mecanismos para lograr la unidad de todos los sectores democráticos del país.

6. Apoyar las candidaturas propias y las alianzas nacionales, regionales y locales.

7. Propiciar y apoyar los procesos de fortalecimiento y representación en las organizaciones sociales y gremiales.

8. Impulsar y promover campañas de afiliación al Partido en todo el territorio nacional.

***Artículo 26.- Comité Ejecutivo Nacional**. El Comité Ejecutivo Nacional se elegirá en el Congreso Nacional y estará integrado de la siguiente manera:*

● Once (11) integrantes generales con sus respectivos suplentes.

● Tres (3) integrantes por las circunscripciones poblacionales y sus suplentes, en razón de uno por cada una de ellas.

● Un (1) miembro de los y las residentes en el exterior.

● El presidente(a).

● El secretario(a) general.

El procedimiento de votación garantizará en la circunscripción general, que en la integración del Comité Ejecutivo se cumpla con las cuotas del treinta por ciento (30%) de mujeres y el veinte por ciento (20%) de jóvenes, entre suplentes y principales conjuntamente considerados. La Presidencia y la Secretaría General del Partido, ejercerán la representación legal.

El presidente(a), el secretario(a) general, las y los integrantes de la Comisión Nacional de Ética y Garantías y el veedor(a) Nacional del Partido serán reemplazados(as) en sus faltas temporales y absolutas, por quien o quienes designe el Comité Ejecutivo Nacional.

El Comité Ejecutivo Nacional se reunirá por lo menos una (1) vez cada quince (15) días, sesionará válidamente con la presencia de la mayoría absoluta de sus integrantes y adoptará decisiones por la mitad más uno de los integrantes asistentes a la reunión.

El Comité Ejecutivo Nacional tendrá la responsabilidad de actuar como instancia de dirección política y organizativa del Partido entre sesiones del Congreso Nacional, con sujeción a las decisiones de éste y de conformidad con los Estatutos y el Programa.

Parágrafo: Los parlamentarios que no hagan parte del Comité Ejecutivo Nacional, podrán asistir a sus reuniones con voz, pero sin voto.

***Artículo 27.- Funciones del Comité Ejecutivo Nacional**. Son funciones del Comité Ejecutivo Nacional, las siguientes:*

1. Ejercer la coordinación política y organizativa del Partido, con sujeción a los Estatutos, el Programa y las decisiones del Congreso Nacional y la Junta Nacional.

2. Convocar el Congreso Nacional y la Junta Nacional.

3. Cumplir las funciones del Congreso Nacional en los períodos donde no esté reunido.

4. Reglamentar y ejecutar las decisiones adoptadas por el Congreso Nacional y la Junta Nacional.

5. Articular la acción legislativa del Partido.

6. Propiciar procesos de democratización interna y el fortalecimiento del Régimen de Bancadas en el Partido.

7. Elaborar su propio reglamento, en el que se incluirán las funciones y responsabilidades de cada uno de sus integrantes y comisiones.

8. Aprobar la celebración de todos los contratos del Partido y los gastos que sean iguales o superiores a cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales. 9. Aprobar el presupuesto del Partido. 10. Crear el Departamento de Asuntos Electorales y reglamentar sus funciones.

11. Distribuir recursos para apoyar las campañas electorales de los candidatos y candidatas del Partido, según los criterios políticos, administrativos y electorales que se establezcan para tal fin. Función que podrá delegar en la Comisión Administrativa y Financiera.

12. Rendir informes de gestión al Congreso Nacional y a la Junta Nacional, Directivas territoriales.

13. Consultar electrónicamente a las delegadas y delegados elegidos al Congreso Nacional y a la Junta Nacional, sobre decisiones atinentes a sus funciones hasta la elección de los nuevos delegados y delegadas que asistirán a su próxima reunión.

14. Estimular la democracia interna y participativa y promover la organización social de las comunidades.

15. Garantizar la creación del Instituto de Formación e Investigación Política.

16. Conocer y fallar en segunda instancia las decisiones adoptadas por la Comisión Nacional de Ética y Garantías.

17. Conocer en revisión, los asuntos fallados en segunda instancia por la Comisión Nacional de Ética y Garantías.

18. Elegir revisor(a) Fiscal del Partido.

19. Designar provisionalmente al presidente(a), secretario(a) general, veedor(a) Nacional y a los integrantes del Comité Ejecutivo nacional y la Comisión Nacional de Ética y Garantías, cuando se produzcan faltas temporales o absolutas, hasta que se reúna el Congreso Nacional y nombre en propiedad hasta la finalización del periodo o para un nuevo periodo.

20. Designar los conjueces o conjuezas de la Comisión Nacional de Ética y Garantías, en caso de recusación o impedimento de alguno de sus miembros.

21. Reglamentar la convocatoria del Congreso Nacional, así como la elección de sus delegados y delegadas.

22. Reglamentar los Estatutos del partido y expedir las reglamentaciones de su competencia.

23. Establecer los criterios y procedimientos para escoger los candidatos y candidatas de elección popular, que representarán al Partido.

24. En caso de ingreso de un nuevo sector o movimiento, el Comité Ejecutivo Nacional podrá asignarle una representación con voz y voto en el seno de este organismo.

25. Las demás que se desprendan de la Ley, los Estatutos y sus reglamentaciones y las que no hayan sido atribuidas a otro organismo de dirección.

(…)

***Artículo 28.** El Comité Ejecutivo Nacional podrá conformar Comisiones Permanentes para ocuparse de áreas y tareas específicas.*

***Artículo 29.- Comisión Administrativa y Financiera.** - El Comité Ejecutivo Nacional del Partido, elegirá de su seno tres (3) personas que junto con el presidente(a) y el secretario(a) general conformarán la Comisión Administrativa y*

Financiera, con el fin de que actúe como organismo para la toma de decisiones en materia administrativa y financiera.

***Artículo 30.- Funciones.** - La Comisión Administrativa y Financiera del Partido tendrá, entre otras, las siguientes funciones:*

1. Proyectar y atender por conducto de las áreas correspondientes la ejecución efectiva de las políticas y programas en todo cuanto se relacione con la administración de recursos humanos, físicos, tecnológicos, financieros, contrataciones, adquisición, almacenamiento y suministro de elementos, equipos y demás bienes necesarios para el eficiente funcionamiento del Partido.

2. Controlar la ejecución del programa general de compras; coordinar los trámites administrativos de licitación, contratación y mantener actualizado el registro de proveedores y contratistas del Partido.

3. Dirigir y controlar la elaboración y actualización de planes y estudios sobre los manuales de funciones, evaluación, descripción, clasificación, modificación de cargos, particularmente en relación con nomenclaturas, funciones, categorías, rangos, niveles existentes, remuneración de los empleos del Partido, necesidades en materia de capacitación y bienestar de personal de acuerdo con las leyes y normas vigentes y los Estatutos.

4. Dar el trámite que corresponda a las solicitudes, reclamos y consultas que sobre la gestión administrativa formulen las personas empleadas y contratistas del Partido, luego de no haber sido resuelta por la administración de personal.

5. Elaborar con la Dirección Administrativa y Financiera, el proyecto anual de presupuesto y el programa anual de caja; preparar los proyectos de acuerdo de gastos, así como de adiciones y traslados y adelantar los trámites correspondientes; colaborar en el acompañamiento a la ordenación del gasto, revisar la información consolidada de la presentación de los estados financieros del Partido, controlar el manejo de los recursos financieros para que estos se ejecuten de conformidad con los planes y programas establecidos y con las normas orgánicas del presupuesto y evaluar periódicamente los métodos sobre registros de pagos que por cualquier concepto se hagan por parte del tesorero nacional del Partido.

6. Emitir concepto sobre los informes de auditoría y exigir el cumplimiento de los planes de mejoramiento a las regiones y en el nivel nacional; dar concepto sobre los responsables administrativos y financieros que se deleguen para estas funciones en las organizaciones territoriales.

7. Proponer y emitir concepto sobre un Plan Nacional de Finanzas que garantice ingresos adicionales para el funcionamiento y la actividad política del Partido, así mismo garantizar que exista un Sistema Financiero, que contemple el cumplimiento de las normas legales establecidas para tal efecto e incluya seguimiento y control permanente, sistema de compras, inventario, seguridad y amparo de bienes y recursos, auditoría interna, archivo y correspondencia, sistema de información, procedimientos de gastos, planes de inversión y demás requisitos establecidos por la Ley.

8. La Comisión propondrá al CEN las necesidades de compra de bienes y servicios de acuerdo con las exigencias de la actividad política. De igual manera podrá someter a los procesos de selección por competencias y requisitos técnicos y profesionales, las hojas de vida del personal que posea perfil para ejercer los cargos administrativos del Partido según se establezca en las convocatorias para tal fin; conjuntamente con el secretario(a), general participará en las actividades de reclutamiento y selección de personal, de acuerdo con los reglamentos respectivos.

9. La Comisión podrá proponer al CEN la constitución de comisiones auxiliares en épocas electorales y de organización interna a fin de garantizar la eficiencia, eficacia y economía, como también el desarrollo de la actividad política.

10. Velar por el cumplimiento de las normas orgánicas del Partido y de las demás disposiciones que regulan los procedimientos y los trámites administrativos internos; preparar planes operativos y de desarrollo de acciones integradas y de control interno, tal como la implementación de un Sistema Nacional de Auditoría.

11. Gestionar los sistemas y métodos adoptados por la administración sobre las materias señaladas en los literales anteriores, velar por su aplicación y evaluarlos periódicamente con miras a racionalizarlos para darles cumplimiento eficaz.

(…)

CAPÍTULO VII

De los cargos de dirección partidaria

Artículo 32.- Funciones de la Presidencia. *Quien ejerza las funciones de la Presidencia del Partido, además de ejercer la representación legal del Partido judicial y extrajudicialmente, dentro y fuera del país, tendrá las siguientes funciones:*

1. Ejercer junto con la Secretaría General la representación legal.

2. Ejercer la vocería del Partido.

3. Presidir las reuniones del Comité Ejecutivo Nacional, la Junta Nacional y el Congreso Nacional.

4. Otorgar y retirar junto con la Secretaría General los avales a las candidatas y candidatos elegidos o designados(as) por el Partido, para participar en los diferentes comicios electorales.

5. Las demás establecidas por el Comité Ejecutivo Nacional, mediante reglamentación.

Artículo 33.- Funciones de la Secretaría General. *Tendrá entre otras, las siguientes funciones:*

1. Ejercer la Secretaría del Congreso Nacional, la Junta Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional.

2. Participar conjuntamente con la Comisión Administrativa y Financiera, en las actividades de selección de personal, de acuerdo con los reglamentos respectivos.

3. Ejercer las funciones de administración y jefatura de personal del Partido.

4. Coordinar la Comisión Administrativa y Financiera del Partido.

5. Llevar el registro de Actas, de militantes y de las direcciones territoriales del Partido.

6. Velar por el funcionamiento óptimo de los organismos.

7. Dirigir junto con las presidencias territoriales la ampliación de la base organizativa y el cumplimiento del Programa y de los Estatutos del Partido.

8. Atender las recomendaciones y los ajustes necesarios para velar por el cumplimiento de las políticas de auditoría en el Partido.

9. Revisar y evaluar los anteproyectos y demás estudios económicos y financieros elaborados por la Dirección Administrativa y Financiera para ser presentados a la Comisión Administrativa y Financiera.

10. Recibir junto con la Comisión Administrativa y Financiera, los informes periódicos de evaluación de personal de la Dirección Administrativa y Financiera,

para la toma de decisiones frente a la planta que por contratos laborales o de honorarios se causen.

11. Dirigir de forma conjunta con la Comisión Administrativa y Financiera, la ejecución de los planes y programas adoptados por el Partido sobre la administración de personal.

12. Estudiar en conjunto con la Comisión Administrativa Financiera, los métodos y procedimientos que deben aplicarse en materia administrativa, presentados por la Dirección Administrativa y Financiera.

13. Atender los informes que presenten la Dirección Administrativa y Financiera y la Asesoría Jurídica, relacionados con el Consejo Nacional Electoral, tanto en materia de financiamiento de partidos políticos y campañas electorales, así como de cualquier autoridad administrativa o judicial.

14. Revisar periódicamente la situación financiera de las directivas departamentales.

15. Supervisar y aprobar las labores de la Coordinación Operativa en cuanto a citaciones y organización de sesiones de la Junta Nacional, del Comité Ejecutivo Nacional, de las Secretarías y las Comisiones. Igualmente, las tareas de relatorías y elaboración de actas de las mismas.

16. Atender las consultas políticas y organizativas de las Directivas Territoriales.

17. Las demás establecidas por el Comité Ejecutivo Nacional.

***Artículo 34.- Vicepresidencia.** El Congreso Nacional elegirá de entre sus integrantes para periodos de dos (2) años, un vicepresidente(a) que se encargará de reemplazar al presidente(a) nacional en sus ausencias temporales, o en funciones que el presidente le delegue.*

***Artículo 35.- De las Secretarías**. De los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional se designarán las siguientes secretarías:*

1. Secretaría de Relaciones Internacionales.

2. Secretaría de Organizaciones Sociales.

3. Secretaría de Juventud.

4. Secretaría de Mujer.

5. Secretaría LGTBI.

6. Secretaría Afro.

7. Secretaría Indígena.

8. Secretaría de Formación Política.

9. Secretaría de Asuntos Ambientales

10. Secretaría de Comunicaciones.

***Artículo 36.- Secretaría de Relaciones Internacionales**. Tendrá, entre otras, las siguientes funciones:*

1. Coordinar la Comisión de Relaciones Internacionales.

2. Establecer relaciones con partidos y movimientos políticos, gobiernos y organizaciones democráticas de carácter internacional.

3. Asesorar a la Presidencia, a la Secretaría General y al Comité Ejecutivo Nacional del Partido en todo lo relacionado con la política internacional y su posición en los organismos internacionales de los cuales hace parte.

4. Coordinar los pronunciamientos del Partido sobre la política internacional.

5. Coordinar junto con la Comisión Internacional del Partido el funcionamiento organizativo y la actividad política de la militancia en el exterior.

***Artículo 37.- Secretaría de Organizaciones Sociales**. Tendrá, entre otras, las siguientes funciones:*

1. Coordinar la Comisión de Organizaciones Sociales.

2. Coordinar la estrecha vinculación y coordinación del Partido con las luchas y necesidades de las organizaciones sociales.

3. Asesorar a la Presidencia, a la Secretaría General y al Comité Ejecutivo Nacional en la relación con las organizaciones sociales, a través de los integrantes del Partido que las conforman.

4. Coordinar los pronunciamientos del Partido sobre las luchas y las reivindicaciones de las organizaciones sociales.

***Artículo 38.- Secretaría de la Juventud.** Tendrá, entre otras las siguientes funciones:*

1. Coordinar la estrecha vinculación y coordinación del Partido con las luchas y necesidades de las organizaciones de la juventud.

2. Asesorar a la Presidencia, a la Secretaría General y al Comité Ejecutivo Nacional sobre las políticas que se deben implementar en relación con la organización de la juventud.

3. Coordinar con la dirección de la organización juvenil del Partido la construcción de organismos del Partido en las distintas instituciones educativas, barrios y sitios de trabajo.

4. Coordinar los pronunciamientos políticos del Partido sobre los problemas y necesidades de la Juventud.

Artículo 39.- Secretaría de la Mujer. Tendrá, entre otras, las siguientes funciones:

1. Coordinar la Comisión de Mujer y Género.

2. Coordinar la estrecha vinculación y coordinación del Partido con las luchas y reivindicaciones de las organizaciones de mujeres.

3. Fortalecer los procesos organizativos de las mujeres del Partido.

4. Asesorar a la Presidencia, a la Secretaría General y al Comité Ejecutivo Nacional en las políticas relacionadas con los derechos de las mujeres.

5. Coordinar los pronunciamientos que defiendan los intereses de las mujeres en la sociedad.

***Artículo 40.- Secretaría LGBTI.** Tendrá, entre otras, las siguientes funciones:*

1. Coordinar la estrecha vinculación y coordinación del Partido con las luchas y reivindicaciones de las organizaciones LGBTI.

2. Asesorar a la Secretaría General y al Comité Ejecutivo Nacional del Partido en las decisiones políticas que defiendan los intereses y derechos LGBTI.

3. Coordinar con la Secretaría General los pronunciamientos del Partido que defiendan los intereses y derechos de los grupos LGBTI.

***Artículo 41.- Secretaría Afro**. Tendrá, entre otras, las siguientes funciones:*

1. Coordinar la Comisión de Grupos Afro.

2. Coordinar la estrecha vinculación y coordinación del partido con las luchas y reivindicaciones de las organizaciones Afro.

3. Asesorar a la Secretaría General y al Comité Ejecutivo Nacional del Partido en las decisiones políticas que defiendan los intereses y derechos de los afrodescendientes.

4. Coordinar con la Secretaría General los pronunciamientos del Partido que defiendan los intereses y derechos de los grupos Afro.

***Artículo 42.- Secretaría Indígena**. Tendrá, entre otras, las siguientes funciones:*

1. Coordinar la Comisión de Grupos Indígenas.

2. Coordinar la estrecha vinculación y coordinación del partido con las luchas y reivindicaciones de las organizaciones Indígenas.

3. Asesorar a la Secretaría General y al Comité Ejecutivo Nacional del Partido en las decisiones políticas que defiendan los intereses y derechos de los indígenas.

4. Coordinar con la Secretaría General los pronunciamientos del Partido que defiendan los intereses y derechos de los indígenas.

***Artículo 43.- Secretaría de Formación Política**. Tendrá, entre otras, las siguientes funciones:*

1. Coordinar la Comisión de Formación.

2. Establecer equipos que permitan formular un plan de formación política para educar a la militancia del Partido.

3. Coordinar con las Direcciones Territoriales el desarrollo de cursos que cumplan este propósito.

***Artículo 44.- Secretaría de Asuntos Ambientales**. Tendrá entre otras, las siguientes funciones:*

1. Coordinar la Comisión de Asuntos Ambientales.

2. Coordinar la estrecha vinculación y coordinación del partido con las luchas y reivindicaciones de las organizaciones ambientales.

3. Asesorar a la Secretaría General y al Comité Ejecutivo Nacional del Partido en las decisiones políticas que defiendan y reivindiquen los derechos de las comunidades ante conflictos ambientales.

4. Coordinar con la Secretaría General los pronunciamientos del Partido que defiendan y reivindiquen los derechos de las comunidades ante conflictos ambientales.

***Artículo 45.- Secretaría de Comunicaciones.** Tendrá, entre otras, las siguientes funciones:*

1. Coordinar con la Secretaría General una política de comunicaciones que mantenga informados a los colombianos sobre las actuaciones del partido.

2. Coordinar con la Presidencia y la Secretaria General el funcionamiento y la publicación de todos los medios de comunicación (página web, redes sociales, periódico, publicaciones).

3. Velar por la implementación de una efectiva política de comunicaciones en todas las Direcciones Territoriales".

Consideraciones del Consejo Nacional Electoral

Artículos 17 a 30 y 32 a 45: Observa esta Corporación que en los artículos 17 a 30 y 32 a 45 de los Estatutos del Partido DIGNIDAD, se desarrollan con suficiencia los contenidos obligatorios, que establecen los numerales 3, 4 y 5 del artículo 4 de la Ley 1475 de 2011.

En ese sentido, el artículo 18 establece de manera clara cuáles son los órganos de dirección del Partido a nivel nacional, en cuya conformación se garantiza la participación de mujeres, jóvenes, afrodescendientes, indígenas y de libre opción sexual; lo que favorece la inclusión y garantiza el derecho fundamental a la igualdad.

Los artículos 20 y 23 definen al Congreso Nacional del Partido y a su Junta Nacional. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política, el Congreso Nacional se reunirá cada dos años, tal y como se indica en el artículo 20 estatutario.

Aunado a lo anterior, se establece que la toma de decisiones en el partido se hará por mayoría de votos en cada uno de sus órganos.

A su turno, los artículos 21, 24 y 26 de los Estatutos establecen la forma como se eligen y conforman el Congreso Nacional del Partido, su Junta Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional. En cuanto al Congreso Nacional, los estatutos precisan que se elige por voto de los miembros del partido.

Lo anterior lleva a concluir que se cumple con lo establecido en el numeral 4º del artículo 4 de la Ley 1475 de 2011 que establece que en la convención o congreso del partido debe garantizarse a "*sus miembros influir en la toma de las decisiones más importantes de la organización política".*

Además, los artículos 22, 25 y 27 establecen las funciones del Congreso Nacional, de la Junta Nacional y del Comité Ejecutivo Nacional respectivamente. Adicionalmente, los artículos 32 y subsiguientes regulan los cargos de Presidente, Vicepresidente y Secretario

del Partido. Así mismo, se crean las siguientes secretarías, cada una con funciones específicas al interior del partido:

1. Secretaría de Relaciones Internacionales. 2. Secretaría de Organizaciones Sociales. 3. Secretaría de Juventud. 4. Secretaría de Mujer. 5. Secretaría LGTBI. 6. Secretaría Afro. 7. Secretaría Indígena. 8. Secretaría de Formación Política. 9. Secretaría de Asuntos Ambientales .10. Secretaría de Comunicaciones.

Finalmente, recalca esta Corporación, que los artículos 17 a 45 de los Estatutos del Partido DIGNIDAD, han sido desarrollados en el marco de la autonomía que la Constitución y la Ley conceden a los partidos políticos, por lo que estas normas deben ser registradas en el RUP.

CUARTO EJE TEMÁTICO: AUTORIDADES, ÓRGANOS DE CONTROL, ENTRE ESTOS EL CONSEJO DE CONTROL ÉTICO Y EL VEEDOR DE LA RESPECTIVA ORGANIZACIÓN, JUNTO CON LAS REGLAS PARA SU DESIGNACIÓN Y REMOCIÓN. (NÚM. 5º ART. 4º L. 1475 DE 2011)

Estatutos presentados por el partido político Dignidad:

"CAPÍTULO X

De los organismos de control

De las Comisiones de Ética y Garantías, Departamentales y Nacional

***Artículo 67.- Comisiones de Ética**. Corresponde a las Comisiones de Ética y Garantías vigilar, controlar, decidir e informar sobre el cumplimiento por parte de la militancia de las normas contenidas en la ley, los Estatutos del Partido, el Código de Ética y Disciplina, las decisiones y reglamentaciones de los organismos de dirección, en las que se desarrollarán los principios de moralidad y debido proceso, procedimientos para la aplicación de las sanciones por infracción al mismo, mínimos bajo los cuales deben actuar los afiliados y las afiliadas al Partido, en especial sus directivas.*

***Artículo 68.- Composición.** La Comisión Nacional de Ética y Garantías estará integrada por cinco (5) miembros principales y sus respectivos suplentes, elegidos por cociente electoral en el Congreso Nacional y uno (1) de ellos ejercerá su coordinación. En cada departamento y en el Distrito Capital, las respectivas Directivas podrán integrar Comisión de Ética y Garantías de tres (3) personas, que actuarán conforme a la reglamentación que expida la Comisión Nacional de Ética y Garantías, y tomarán decisiones con la mitad más uno (1) de los asistentes.*

***Artículo 69.- Requisitos.** Para ser postulado(a) y elegido(a) a cualquier Comisión de Ética y Garantías, se requiere ser ciudadano(a) colombiano, afiliado (a) al Partido, carecer de antecedentes penales y disciplinarios, excepto por delitos*

políticos o culposos, no formar parte de los organismos de dirección del Partido, excepto el de delegado(a) al Congreso Nacional.

***Artículo 70.- Funciones**. Son funciones de la Comisión Nacional de Ética y Garantías:*

1. Vigilar el cumplimiento de los Estatutos del Partido y de las decisiones de sus organismos de dirección e informar al Comité Ejecutivo Nacional sobre las infracciones de sus militantes, para la ejecución de la respectiva sanción.

2. Rendir informes periódicos de gestión al Comité Ejecutivo Nacional y al Congreso Nacional.

3. Conocer y decidir en primera instancia sobre las quejas que se presenten por incumplimiento de los Estatutos, reglamentaciones o decisiones de los organismos de dirección del Partido.

4. Conocer y fallar en segunda instancia las decisiones adoptadas por las Comisiones de Ética y Garantías Departamentales y Distrital.

5. Actuar de oficio cuando haya una violación de los estatutos o de las reglamentaciones o decisiones de los organismos de dirección por parte de sus militantes, o a petición del Comité Ejecutivo Nacional, la Veeduría Nacional o la Defensoría de los militantes. 6. Las demás que se desprendan de la ley, los Estatutos y la reglamentación que para el efecto expida el Comité Ejecutivo Nacional.

***Parágrafo 1°.** - Las decisiones de las Comisiones de Ética se tomarán con los votos afirmativos de la mitad más uno de los integrantes asistentes a la reunión con quórum/decisorio, respetando siempre el debido proceso y la presunción de inocencia.*

CAPÍTULO XI

De la Veeduría del Partido

***Artículo 71.- Veeduría Nacional.** Para ser postulado(a) y elegido(a) veedor(a) nacional, se requiere ser ciudadano(a) colombiano(a), afiliado(a) al Partido, carecer de antecedentes penales y disciplinarios, excepto por delitos políticos o culposos, no formar parte de los organismos de dirección del Partido ni ser delegado(a) al Congreso Nacional. El veedor(a) no podrá ser candidato(a) a cargos de elección popular, durante el periodo para el cual fue elegido(a).*

Artículo 72.- Funciones. Quien ejerza la Veeduría, además de tener como función esencial promover el cumplimiento de los deberes y obligaciones por parte de la militancia y de los elegidos(as), siendo sus informes elemento de evaluación obligatoria para la expedición de avales, tendrá las siguientes funciones:

1. Velar por el respeto del régimen de inhabilidades e incompatibilidades establecido en el Código de Ética para las y los servidores públicos y miembros del Partido.

2. Instruir las denuncias de inhabilidades e incompatibilidades de las y los funcionarios a cargos de elección popular, dignidades internas y miembros, y acusarlos ante la Comisión de Ética y Garantías.

3. Velar por la transparencia en la expedición de los avales otorgados por el Partido.

4. Absolver y resolver las consultas y derechos de petición presentados por la militancia a la Veeduría Nacional.

5. Asistir permanentemente a las reuniones del Comité Ejecutivo Nacional, a efectos de que las decisiones tomadas en su seno se ajusten a la Constitución Política, la Ley y los Estatutos del Partido. 6. Emitir conceptos jurídicos, éticos, de interpretación de los Estatutos y para la solución de controversias, cuando sean solicitados por las directivas o los militantes del Partido.

7. Servir de canal de intermediación entre los militantes, los funcionarios(as) y los órganos de dirección del Partido.

8. Revisar y presentar recomendaciones pertinentes a las reglamentaciones de los Estatutos que impartan los organismos competentes y presentar propuesta de reforma a los mismos.

9. Las demás que se desprendan de la Constitución Política, la ley y los presentes Estatutos.

***Parágrafo 1°. -** Quien sea designado en la dignidad de Veeduría Nacional, gozará de todas las garantías necesarias para el eficaz desempeño de la vigilancia y control que le establece la Ley, los Estatutos y el Código de Ética y Régimen Disciplinario del Partido.*

(…)

CAPÍTULO XIII

De la Revisoría Fiscal del Partido

***Artículo 75.- Revisoría Fiscal.** El Partido contará con una Revisoría Fiscal que tendrá a su cargo las funciones estipuladas por la Ley.*

***Artículo 76.- Designación y requisitos**. La Revisoría Fiscal del Partido será elegida por el Comité Ejecutivo Nacional con mayoría de votos y deberá reunir las calidades exigidas por la Ley, no podrá formar parte de las instancias de Dirección del Partido y podrá estar a cargo de una persona natural que deberá contar con título en contaduría pública, o de una persona jurídica que tenga dentro de su objeto social la prestación del servicio de revisoría fiscal".*

Consideraciones del Consejo Nacional Electoral

Artículos 67 a 72 y 75 a 76: Resalta la Sala Plena de esta Corporación que los artículos 67 a 72 y 75 a 76 desarrollan con suficiencia lo relacionado con los órganos de control del partido, en especial, las comisiones de ética y garantías y el marco normativo del veedor del partido. Con ello se cumple lo establecido en el numeral quinto del artículo 4º de la Ley 1475 de 2011.

Así mismo, en desarrollo de la autonomía que la Constitución y la Ley otorgan a las organizaciones políticas, los Estatutos del partido **DIGNIDAD** delimitan de manera clara las funciones y principios que rigen las actividades de las Comisiones de Ética (Arts. 67 y 70).

Igualmente determinan la forma en cómo se compone dicha comisión y los requisitos para ser miembro de esta (Arts. 68 y 69).

Por otro lado, los Estatutos del partido **DIGNIDAD**, también consagran la figura del Veedor; determinan la forma como se elige (Art. 71) y sus funciones (Art. 72).

Finalmente, en este acápite, los Estatutos del partido **DIGNIDAD** crean la figura del revisor fiscal (Art. 75) y establecen la forma de su designación (Art. 76).

En conclusión, los artículos 67 a 72 y 75 a 76 de los Estatutos del partido **DIGNIDAD** se encuentran dentro del marco constitucional y legal vigente y pretenden organizar y regular de manera clara lo relacionado con los órganos de control de la colectividad, por lo que dichas normas deberán ser registradas en el RUP.

QUINTO EJE TEMÁTICO: REGULACIÓN INTERNA DEL RÉGIMEN DE BANCADAS EN LAS CORPORACIONES DE ELECCIÓN POPULAR. (NÚM. 7º ART. 4º L. 1475 DE 2011)

Estatutos presentados por el partido político Dignidad:

"CAPÍTULO XIV

De la actuación de sus afiliados (as) como gobernantes y en las corporaciones públicas.

***Artículo 79.- Relaciones del Partido con las y los gobernantes elegidos por el Partido**. Los y las militantes del Partido, elegidos(as) a cargos uninominales (Alcaldías, Gobernaciones y Presidencia de la República), tienen la obligación de actuar conforme a los mandatos éticos y programáticos del Partido. Establecerán mecanismos de enlace con las Directivas territoriales y el Comité Ejecutivo Nacional del Partido, para el correcto acompañamiento en el desempeño de sus funciones. Estos espacios institucionales de enlace deben abordar discusiones sobre los contenidos de las políticas públicas del nivel territorial respectivo y generar acciones de apoyo y control político de los gobiernos del Partido. También verificarán el cumplimiento de la Ley 581 de 2000, conocida como ley de cuotas. Quienes sean elegidos a Alcaldías y Gobernaciones por el Partido, tienen la obligación de convocar semestralmente a las instancias correspondientes de dirección del Partido, para analizar la aplicación del plan de gobierno con el cual fueron elegidos(as).*

***Artículo 80.**- Corresponde al Comité Ejecutivo Nacional y a las Directivas Territoriales en cada caso, orientar la acción del Partido en las corporaciones públicas y prestar la colaboración requerida al efecto.*

***Artículo 81**.- Las personas del Partido elegidas para las corporaciones públicas, actuarán en bancada de conformidad con la Ley y el Reglamento de Bancada que*

hace parte integral de los presentes Estatutos. De la misma manera, desarrollarán los postulados del Partido mediante iniciativas legislativas nacionales, departamentales, municipales o locales, actuando con transparencia y eficacia en el ejercicio de sus cargos. Cuando la bancada esté integrada por un número par, el desempate o toma de decisiones estará a cargo del Comité Ejecutivo de la circunscripción territorial respectiva".

"REGLAMENTO DE BANCADA

CAPÍTULO I

De la definición, composición, principios y funciones

***Artículo 1**. **Definición de Bancada**. Los miembros de los cuerpos colegiados elegidos con el aval de DIGNIDAD NACIONAL, conformarán la Bancada del Partido en su respectiva corporación, así como en sus comisiones y demás organismos que las componen para efecto de la actividad legislativa y administrativa. Los miembros de la bancada actuarán de conformidad con lo establecido en el ordenamiento superior, la Ley y los estatutos del Partido.*

***Artículo 2. Instancias de Bancada**. Los miembros de los cuerpos colegiados elegidos actuaran como bancada en las siguientes instancias:*

a. Plenaria en el Congreso de la República.

b. Senado de la República.

c. Cámara de Representantes.

d. Comisiones Constitucionales Permanentes.

e. Comisiones Legales.

f. Comisiones Especiales.

g. Comisiones Accidentales.

1. Asambleas Departamentales. Los diputados elegidos para esta corporación, actuaran en bancada en las siguientes instancias: a. Plenaria de la Asamblea Departamental. b. Comisiones Legales y Reglamentarias.

2. Concejos Municipales y Distritales. Los concejales elegidos para esta corporación actuaran en bancada en las siguientes instancias. a. Plenaria del Concejo Municipal o Distrital. b. Comisiones Legales y Reglamentarias.

3. Juntas Administradoras Locales. Los ediles elegidos para esta Corporación, actuarán en Bancada en las Comisiones Legales y Reglamentarias.

***Parágrafo.** En los casos en que un solo miembro del Partido haga parte de una Corporación, éste se entenderá como bancada.*

***Artículo 3. De los principios de la Bancada**. Se tendrán en cuenta los siguientes principios:*

1. El respeto a la libertad de conciencia y a la libertad de expresión en el seno de la bancada

2. El cumplimiento de las decisiones adoptadas democráticamente por los órganos competentes del Partido y por la propia bancada.

3. El respeto a la unidad del Partido, la cual descansa en la aceptación y aplicación de su pensamiento fundamental, que se contiene en su Programa, su plataforma política y sus estatutos y se expresa en la disciplina de voto de los integrantes de la bancada.

***Artículo 4. Funciones.** Son funciones de la Bancada:*

1. Elegir su vocero para el período que acuerde la bancada.

2. Reunirse por lo menos una vez por semana, durante los períodos de sesiones ordinarias y extraordinarias de la respectiva corporación.

3. Tomar decisiones sobre tas iniciativas legislativas y de control político en la respectiva Corporación.

4. Adoptar decisiones sobre el comportamiento a seguir en los procesos eleccionarios de tos funcionarios de los Órganos de Control, de las Cortes y demás entidades en las que por mandato constitucional o legal deban participar, 5. Tomar decisiones sobre el comportamiento a seguir en los procesos eleccionarios de las respectivas Mesas Directivas de los Cuerpos Colegiados y sus Comisiones. 6. Definir las estrategias y tácticas políticas de la Bancada, de acuerdo a los lineamientos que trace el Partido. 7. Presentar informes de actividades ante la correspondiente instancia de dirección nacional, departamental, distrital, municipal o local del Partido.

CAPÍTULO II

De los voceros y coordinadores

***Artículo 5. De las funciones de los voceros.** En cada bancada se elegirá un vocero. Son funciones de los voceros las siguientes:*

a. Orientar y coordinar con la estructura del Partido correspondiente, la acción del Partido en la respectiva corporación.

b. Representar al Partido ante la Corporación, ante las otras bancadas y en especial ante las mesas directivas.

c. Anunciar las posiciones oficiales del Partido en torno a las funciones electorales, de trámite legislativo y de control político.

***Parágrafo 1.** La mayoría de los integrantes de cada bancada en la respectiva corporación, podrá remover su vocero por el incumplimiento reiterado de sus deberes. Dicha decisión deberá sustentarse y adoptarse en dos sesiones realizadas en diferente día.*

***Parágrafo 2.** La vocería en temas de las minorías étnicas, será ejercida por el integrante de la corporación elegido con el aval del Partido por la respectiva circunscripción electoral. Parágrafo 3. Cuando en el Congreso de la República deban sesionar conjuntamente las dos cámaras, el vocero será el de la bancada de Senado.*

***Artículo 6.** En caso de falta temporal del vocero, la bancada determinará quién lo sustituye mientras dure la ausencia. La vocería, para temas específicos, podrá ser delegada, por quien la ejerce, en otro miembro de la bancada. En caso de falta absoluta del vocero, la bancada se reunirá para elegir su reemplazo.*

***Artículo 7.** Del coordinador de UTLS. El vocero de cada bancada designará de su unidad de trabajo legislativo o normativo una persona que ejerza la respectiva coordinación. Los coordinadores designados conforme a lo previsto en el inciso anterior convocarán a los delegados de cada una de las Unidades de Trabajo Legislativo y normativo para discutir los temas de interés para la bancada.*

***Artículo 8**. Coordinadores de UTLS. Los coordinadores tendrán a su cargo el apoyo técnico y administrativo a la Bancada, prepararán documentos, llevarán las actas, organizarán la memoria institucional de la actuación del Partido en la Corporación, prepararán los informes sobre la actividad legislativa y normativa, así mismo servirán de enlace entre el vocero y los miembros de la Bancada y mesas directivas de la corporación.*

***Artículo 9**. Apoyo a la Bancada. El Partido dispondrá lo necesario para la organización y buen funcionamiento de una oficina de apoyo a la Bancada.*

CAPÍTULO III

***De Las Reuniones y Funcionamiento**.*

***Artículo 10.** El vocero de la respectiva bancada convocará y presidirá las reuniones de la misma.*

***Artículo 11. Las reuniones.** Serán de carácter ordinario y extraordinario.*

a. Ordinarias. La bancada se reunirá por lo menos una vez por semana durante los períodos de sesiones.

b. Extraordinarias. La bancada se podrá reunir extraordinariamente por convocatoria del vocero, el presidente del Partido o de la tercera parte de los miembros de la Bancada.

***Parágrafo.** En las reuniones de la bancada podrá participar un delegado de la dirección del Partido, cuando deba discutirse y decidirse sobre proyectos de ley considerados como fundamentales para la política de la organización o sobre coaliciones y procesos eleccionarios, con voz pero sin voto.*

***Artículo 12. Del quórum.** Habrá quórum deliberatorio con la tercera parte de los integrantes de la Bancada. Se constituirá Quórum decisorio con la mitad más uno de los integrantes de la Bancada.*

***Artículo 13. Orden del día.** El orden del día de las reuniones de la Bancada será elaborado por el vocero de la Bancada. A este se Incorporarán los asuntos que los miembros de la Bancada o el delegado por la Comisión de Asuntos Legislativos o de la respectiva estructura organizativa nacional, departamental, distrital, municipal o local del Partido consideren pertinentes, según sea el caso.*

***Parágrafo.** En todas las reuniones se levantará un Acta que contenga el desarrollo de la misma, la cual será suscrita por todos los asistentes y será sometida a su aprobación en la reunión siguiente.*

***Artículo 14. Toma de decisiones.** La Bancada privilegiará el método del consenso para la toma de sus decisiones. Cuando este no sea posible, se efectuará a través de votación, por medio de la cual cada uno de sus integrantes declarará su voluntad sobre un determinado tema o asunto, del cual quedará constancia en la respectiva acta. Las decisiones de la bancada se tomarán una vez constituido el quórum decisorio si no hay consenso por la mayoría de los miembros.*

***Artículo 15. Reglas.** En las votaciones al interior de la bancada se observarán las siguientes reglas:*

1. El voto deberá ser nominal.

2. El voto será personal y podrá ser expresado por medio magnético

3. Ningún miembro de la bancada se podrá abstener de votar, salvo cuando exista un conflicto de intereses o cuando esté sancionado para ejercer este derecho.

***Parágrafo 1.** A cada miembro de la Corporación le asiste el derecho, ante la Bancada, de presentar iniciativas legislativas, administrativas, de control político o propuestas de posiciones oficiales del Partido, para que aquella las estudie y decida sobre su pertinencia. Las iniciativas serán debidamente inscritas ante el vocero y esté tendrá la obligación de difundirlas y llevarlas a la consideración de la Bancada.*

***Parágrafo 2.** Cuando en la votación que realice la bancada se presente empate y este persista, cada miembro de la bancada podrá estar en libertad de votar a su arbitrio.*

***Artículo 16. Del plan estratégico.** Al comienzo de cada período los miembros de la bancada, en la respectiva corporación, trazarán un plan estratégico, de acuerdo con los temas que se consideren objeto de mayor relevancia en las diferentes materias para el accionar legislativo, normativo y de control político.*

***Artículo 17. Salvamento de voto.** Una vez tomada la decisión el miembro de la bancada que manifieste no estar de acuerdo, deberá expresarlo de forma inmediata, sustentando las razones que lo llevan a tomar tal determinación. No obstante lo anterior, el miembro de la bancada, no podrá apartarse de lo resuelto por ella, a menos que de acuerdo con los estatutos y lo dispuesto en este reglamento se haya tomado la decisión de votar siguiendo el criterio individual o que se trate de una objeción de conciencia. Parágrafo. Lo dispuesto en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de las facultades que por virtud del reglamento de la Corporación le corresponden, de manera individual, a cada uno de sus miembros.*

***Artículo 18. De la objeción de conciencia.** De acuerdo con el artículo 18 de la Constitución Política de 1991: "se garantiza libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias ni competido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia."*

***Artículo 19. Tramite de la objeción.** Una vez el miembro de la Corporación manifieste su negativa a acogerse a la decisión mayoritaria, la Bancada decidirá sí el asunto concierne a una objeción de conciencia. En el evento en que no sea admitida como tal, el miembro de la bancada tiene el derecho de apelar ante la máxima instancia de dirección de la respectiva entidad territorial o local del Partido, organismo que tomará la decisión correspondiente, en un término máximo de tres (3) días. Parágrafo. Se exceptúan del trámite de objeción los miembros de las corporaciones públicas elegidos con el aval del Partido, pertenecientes a las minorías étnicas, siempre y cuando el disenso se fundamente en razones culturales o por estar en contra de sus usos y costumbres, lo anterior en concordancia con el Acto Legislativo 001 de 2003 y la ley 794 del 2005.*

“CAPITULO I V

De la función legislativa y normativa

***Artículo 20**. La Bancada definirá, mediante los mecanismos democráticos establecidos en este estatuto, las iniciativas legislativas o normativas que se presentarán en la respectiva Corporación. Las disposiciones sobre función legislativa y normativa, por parte de la Bancada, se entenderán sin perjuicio de las facultades que, en virtud del reglamento de la Corporación, se les confiere de manera individual a los miembros de la misma.*

***Artículo 21. Procedimiento.** El miembro de la Corporación Pública radicará, ante el vocero de bancada, el proyecto legislativo o normativo que pretende sea avalado por la bancada, quien se encargará de distribuirlo a los demás miembros de la bancada y lo incluirá para la discusión en el orden del día de la siguiente reunión.*

***Artículo 22. De la iniciativa legislativa y normativa.** Además de los miembros de las Corporaciones Públicas pueden presentar ante la bancada, para la discusión de ésta, iniciativas legislativas o normativas las máximas instancias de dirección del Partido a nivel nacional, departamental, municipal, distrital o local.*

***Artículo 23.** Los voceros de bancada presentarán informes permanentes sobre los proyectos de ley o normativos que hacen tránsito en la corporación, de acuerdo con los temas que se han priorizado en el plan estratégico.*

CAPÍTULO V

De la Función de Control Político.

***Artículo 24.** La Bancada definirá, mediante los procedimientos democráticos establecidos en este estatuto, los temas que se propondrán como debates de control político. Dichos temas podrán ser propuestos por los miembros de la Bancada o la Instancia de Dirección correspondiente del Partido. La Bancada escogerá sus voceros para el respectivo debate y lo hará saber de manera oportuna a la mesa directiva de la correspondiente corporación. Las disposiciones sobre control político, por parte de la Bancada, se entenderán sin perjuicio de las facultades que, en virtud del reglamento de la Corporación, se les confiere de manera individual a los miembros de la misma.*

CAPÍTULO VI

***De la Función Electoral**.*

***Artículo 25.** La función electoral en las corporaciones públicas debe ser objeto de decisión de la Bancada. Para efectos de las elecciones de dignatarios, la instancia de dirección correspondiente del Partido, conjuntamente con la bancada, discutirá y decidirá acerca de los candidatos que recibirán el apoyo oficial del Partido.*

CAPÍTULO VII

Régimen Disciplinario.

***Artículo 26. Aplicabilidad**. Las disposiciones de este estatuto se aplicarán a los miembros de las Corporaciones Públicas elegidos con el aval el Partido, que incurran en violación del presente estatuto, la ley de bancadas, la Carta Política en lo pertinente y sus estatutos.*

***Artículo 27. Competencia.** Tiene la potestad de adelantar la investigación disciplinaria de los miembros de las Corporaciones Públicas, elegidos con el aval del PARTIDO, la Comisión de Ética del Partido, en las instancias Nacional, Departamental, Municipal, Distrital o Local, según el caso.*

Artículo 28. Faltas Disciplinarias por violación del Régimen de Bancadas. *Constituyen faltas disciplinarias por violación del régimen de bancadas, las siguientes:*

1. La Inasistencia reiterada e injustificada durante la legislatura a más de tres reuniones de la Bancada de cada corporación.

2. Votar en contra de las decisiones de la Bancada, excepto en la objeción de conciencia y el conflicto de intereses.

3. Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades propias de un miembro de Bancada.

4. Inobservancia de las directrices de la Bancada.

5. Retiro voluntario del Partido durante el período para el cual fue elegido.

Artículo 29. Graduación de las faltas y criterios para determinar la gravedad de las mismas. *Las faltas disciplinarias serán leves, graves y gravísimas. La Comisión de Ética adoptará como criterios para determinar la gravedad de la falta los contenidos en los Estatutos del Partido, así como lo establecido en la Ley de Bancadas, en especial el grado de culpabilidad, la naturaleza de la función, la modalidad, la reincidencia, las circunstancias, los motivos determinantes y los perjuicios que se deriven para el Partido y la sociedad.*

Artículo 30. Sanciones aplicables. *La Comisión de Ética podrá imponer las siguientes sanciones a los miembros de las Bancadas:*

1. Amonestación.

2. Pérdida temporal del derecho al voto, tanto en comisiones como en plenarias.

3. Pérdida definitiva del voto.

4. Expulsión.

Parágrafo 1. *Siempre que la sanción implique limitación de los derechos del miembro de la corporación, será comunicada a la Mesa Directiva de la respectiva Corporación. Parágrafo 2. La expulsión lleva consigo la pérdida del derecho al voto.*

Artículo 31. *Cuando se presente el retiro o la expulsión de un miembro de una bancada, el Partido le solicitará la renuncia a la curul. En caso de no producirse dicha renuncia, se acudirá a la justicia contenciosa administrativa para obtener sentencia que ordene el ingreso de quien deba ocupar dicha curul de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente en este tema.*

Artículo 32. Principios de la investigación disciplinaria. L*a investigación disciplinaria se adelantará conforme a los principios Constitucionales y Legales en esta materia y atendiendo por lo menos los siguientes principios: Debido proceso, derecho a la defensa, Imparcialidad del investigador, contradicción y doble instancia.*

Artículo 33. Queja. *Recibida la queja por parte de la Comisión de Ética, ésta procederá a analizar las razones que la sustentan, admitiéndola o rechazándola. En caso de rechazo, en el auto de inadmisión, deberá declararse infundada o improcedente, indicando las razones de derecho de la decisión.*

***Artículo 34. Inicio de la investigación disciplinaria**. Aceptada la queja o de oficio, la Comisión de Ética, ordenará iniciar la investigación disciplinaria, procediendo a designar un sustanciador entre sus miembros.*

***Artículo 35. De la notificación.** La investigación disciplinaria se notificará al miembro de la Corporación Pública, en forma escrita, a su domicilio registrado ante el Partido y en la oficina de la respectiva Corporación. Contra esta decisión no procede recurso alguno.*

***Articulo 36. Término de la investigación**. El término de la Investigación Disciplinaria no será superior a cuatro (4) meses, contados a partir de la notificación de la investigación disciplinaria.*

***Artículo 37. De la citación.** El sustanciador, citará al miembro de la Corporación Pública en un término improrrogable de diez (10) días para que rinda su versión verbal o escrita, en esta diligencia. El implicado o su defensor podrán aportar o solicitar pruebas.*

***Artículo 38. Termino probatorio.** Agotada la diligencia anterior, el sustanciador ordenará la práctica de pruebas que considere necesarias. Así mismo, las solicitadas por el implicado o su defensor, se aplicará en esta etapa procesal los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad de la prueba. El sustanciador dispondrá de un término máximo de treinta (30) días para practicar las pruebas. Parágrafo. Si el sustanciador decide no decretar una o varias de las pruebas solicitadas por el investigado o su defensor, contra esta decisión procederá el recurso de súplica ante los restantes miembros de la Comisión de Ética y Garantías del Partido. Este deberá ser presentado y sustentado dentro de los tres (3) días siguientes s la notificación de la decisión y será resuelto dentro de los cinco (5) días siguientes de la sustentación.*

***Artículo 39. Cierre de Investigación**. Una vez agotado el término probatorio, el sustanciador correrá traslado a las partes, por un término de cinco (5) días, para que presenten sus alegatos de conclusión.*

***Artículo 40. Término para presentar ponencia de fallo**. El sustanciador presentará proyecto motivado de fallo a los restantes miembros de la Comisión de Ética del Partido, dentro de los diez (10) días siguientes de vencido el término señalado en el artículo anterior.*

***Artículo 41. Fallo.** La Comisión de Ética del Partido, proferirá fallo dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento del término para presentar ponencia de fallo, por parte del sustanciador.*

***Artículo 42. De la segunda instancia**. Contra el fallo de la Comisión de Ética y del Partido, procederá el recurso de apelación ante el Comité Ejecutivo Nacional del Partido, o la instancia de dirección que señalen los estatutos para tal efecto.*

***Artículo 43. Trámite**. El recurso de apelación deberá interponerse por el investigado o por su apoderado, por escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación personal o a la desfijación del edicto del fallo. El recurso de apelación deberá ser resuelto dentro de los quince (15) días siguientes y contra esa decisión no procede recurso alguno.*

***Artículo 44. De la Complementariedad.** En lo previsto en el presente procedimiento se aplicarán, en cuanto sean compatibles con el mismo, las disposiciones del Código Único Disciplinario y el Código de Procedimiento Penal,"*

Consideraciones del Consejo Nacional Electoral:

Artículos 79 a 81 y REGLAMENTO DE BANCADA: A través de la Ley 974 de 2005 el Legislador reguló lo relacionado con el régimen de bancadas en las respectivas Corporaciones Públicas (Congreso, Asambleas Departamentales, Concejos y Juntas Administradoras Locales). El artículo 4º de la Ley en cita estableció los contenidos mínimos que debían contener los estatutos de partidos y movimientos políticos en relación con el régimen de bancadas así:

> *"**ARTÍCULO 4°. Estatutos**. Los partidos deberán establecer en sus estatutos las reglas especiales para el funcionamiento de sus bancadas y los mecanismos para la coordinación de sus decisiones dentro de las corporaciones públicas, en las que se establezcan obligaciones y responsabilidades distintas según se trate del cumplimiento de funciones legislativas, de control político o electorales, por parte de la respectiva corporación.*
>
> *Asimismo, determinarán lo atinente a su régimen disciplinario interno. Podrán establecer sanciones por la inobservancia de sus directrices, las cuales se fijarán gradualmente hasta la expulsión, y podrán incluir la pérdida del derecho de voto del miembro de la respectiva corporación pública, observando el debido proceso.*
>
> *En todo caso la sanción deberá ser comunicada a la Mesa Directiva de la respectiva Corporación, para que a través de ella se le dé cumplimiento, siempre que ello implique limitación de derechos congresuales.*
>
> *Los estatutos de los partidos también contemplarán sanciones estrictas por la inasistencia reiterada a reuniones de bancada, las que podrán incluir la pérdida temporal del derecho al voto.*
>
> *La inasistencia a las reuniones de las bancadas no excusará al ausente de actuar conforme a las decisiones adoptadas por las mismas, y si no lo hiciere así este quedará sujeto a las sanciones previstas por los estatutos del partido o movimiento político para la violación del régimen de bancadas.*
>
> *En caso de la imposición de una sanción por un partido o movimiento a uno de sus miembros procede el recurso de apelación en el efecto suspensivo, que se surtirá dentro del mismo partido y ante la instancia correspondiente que determine los estatutos.*
>
> *El retiro voluntario de un miembro de Corporación Pública del partido o movimiento político o ciudadano en cuyo nombre se eligió, implica el incumplimiento del deber de constituir bancada, y como tal podrá sancionarse como una violación al Régimen de Bancada en los términos de la Constitución y la ley".*

Así bien, en los Estatutos del Partido **DIGNIDAD**, se establecen las normas y principios que deben guiar la actividad de las personas avaladas por el Partido que resultaren elegidas en cargos de elección popular (Art. 79).

Igualmente establecen que los miembros del partido que se elijan en una Corporación Pública deberán actuar en bancadas de conformidad con la Ley y con el REGLAMENTO DE BANCADA del partido, el cual se entiende incorporado a sus estatutos (Art. 81).

En ese sentido, se transcribió integralmente el REGLAMENTO DE BANCADA presentado por el partido **DIGNIDAD**, que será analizado a la luz del artículo 3º de la Ley 1475 de 2011, para verificar su constitucionalidad y legalidad.

De esa manera, constata la Sala que el REGLAMENTO DE BANCADA del partido político **DIGNIDAD** define claramente el concepto de bancada (Art. 1); establece las instancias de las bancadas, dependiendo de la Corporación Pública en la que se tenga Representación (Senado de la República, Cámara de Representantes, Asamblea Departamental, Concejos Distritales o Municipales y Juntas Administradoras Locales) (Art. 2); consagra los principios de libertad de conciencia, democracia y unidad de partido en las actuaciones de la bancada (Art 3); establece las funciones de la bancada (Art. 4); regula las funciones del vocero de bancada (Art 5); el reemplazo del mismo (Art. 6); crea el cargo de coordinador de UTLS (Art. 7); delimita las funciones de este último (Art 8); y crea la oficina de apoyo a la bancada (Art. 9).

De otro lado el REGLAMENTO DE BANCADA del Partido **DIGNIDAD**, establece las normas concernientes a la reunión y funcionamiento de las bancadas, dentro de las cuales dispone que estas se reunirán una vez por semana (Arts. 10 y 11). Con ello se da cumplimiento al artículo 6º de la Ley 974 de 2005 que establece que las bancadas deberán reunirse como mínimo una vez al mes.

Adicionalmente, el REGLAMENTO DE BANCADA, establece el quorum deliberatorio y decisorio para la toma de decisiones al interior de la bancada (Art 12); regula el orden del día para el desarrollo de las reuniones (Art. 13) y establece las normas que regulan la toma de decisiones al interior de las bancadas (Arts. 14, 15 y 16) incluido en ello, la consagración de las figuras del salvamento de voto (Art. 17) y de la objeción de conciencia (Art. 18).

A su turno, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley 976 de 2005 el REGLAMENTO DE BANCADA del partido Dignidad reguló la función normativa de las bancadas en las corporaciones públicas de elección popular (Arts. 20 a 23); la función de control político (Art. 24) y la función electoral (Art. 25).

Finalmente, los artículos 26 a 44 del REGLAMENTO DE BANCADAS establecen el régimen disciplinario por el desconocimiento a las normas de bancadas. Observa esta Sala que se trata de un procedimiento que garantiza el derecho fundamental al debido proceso en tanto

que dispone de manera clara: el órgano partidario competente para adelantar las investigaciones (Art. 27); las conductas que se consideran faltas (Art. 28); los criterios para graduar la gravedad de las faltas (Art. 29); las sanciones aplicables (Arts. 30 y 31); el procedimiento sancionatorio, en el que se incluye el derecho del investigado de presentar pruebas y contradecir las existentes (Arts. 33 a 41); y la garantía de doble instancia (Arts. 42 y 43). Ahora bien, aunque la norma no lo establezca de manera expresa, el trámite del recurso de apelación debe hacerse en el efecto suspensivo por mandato del artículo 4 de la Ley 976 de 2005.

En conclusión, los artículos 79 a 81 de los Estatutos del partido **DIGNIDAD** y su REGLAMENTO DE BANCADA se encuentran dentro del marco constitucional y legal vigente por lo que tales normas deberán ser inscritas en el RUP.

SEXTO EJE TEMÁTICO: MECANISMOS DE IMPUGNACIÓN DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN, GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL, ASÍ COMO POR LAS RESPECTIVAS BANCADAS (NÚM. 8º ART. 4º L. 1475 DE 2011)

Estatutos presentados por el partido político Dignidad:

> *"**Artículo 16.- Impugnación y solución de conflictos**. La impugnación de las decisiones de las Directivas Territoriales o los conflictos que no puedan resolverse en su seno, se resolverán en la Directiva del siguiente nivel territorial al cual pertenezcan. En todo caso, el Comité Ejecutivo Nacional será la última instancia. Así mismo resolverá los conflictos de competencia que se presenten entre Directivas de diferentes niveles*
>
> *(…)*
>
> ***Artículo 27.- Funciones del Comité Ejecutivo Nacional.** Son funciones del Comité Ejecutivo Nacional, las siguientes:*
>
> *(…)*
>
> *16. Conocer y fallar en segunda instancia las decisiones adoptadas por la Comisión Nacional de Ética y Garantías.*
>
> *17. Conocer en revisión, los asuntos fallados en segunda instancia por la Comisión Nacional de Ética y Garantías*
>
> ***Artículo 31.**- Cualquier afiliado (a) al Partido podrá impugnar ante el Consejo Nacional Electoral la designación de sus directivas dentro de los quince (15) días siguientes a la inscripción, por violación grave de los estatutos del Partido.*
>
> *(…)*

> ***Artículo 70.- Funciones**. Son funciones de la Comisión Nacional de Ética y Garantías:*
>
> *4. Conocer y fallar en segunda instancia las decisiones adoptadas por las Comisiones de Ética y Garantías Departamentales y Distrital".*

Consideraciones del Consejo Nacional Electoral

Artículos 16, 27, 31 y 70: Observa esta Corporación que los artículos 16, 27, 31 y 70 de los Estatutos del Partido Dignidad, desarrollan con claridad los mecanismos de impugnación de las decisiones adoptadas por los órganos de dirección, tal y como lo ordena el numeral 8º del artículo 4º de la Ley 1475. Se establece en el artículo 16 que, en todo caso, el COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL del partido será la última instancia.

Así mismo, el artículo 31 indica que cualquier afiliado (a) al Partido podrá impugnar ante el Consejo Nacional Electoral la designación de sus directivas dentro de los quince (15) días siguientes a la inscripción. Sobre el particular, la Sala trae a colación el artículo 9 de la Ley 1475 que en lo pertinente indica que "cualquier delegado al congreso o convención del partido podrá impugnar ante el Consejo Nacional Electoral la designación de esas directivas dentro de los quince días siguientes a su inscripción". Recuérdese que este artículo subrogó el inciso segundo del artículo 7º de la Ley 130 de 1994 cuyo tenor era:

> *"Cualquier ciudadano podrá impugnar ante el Consejo Nacional Electoral la designación de esas directivas dentro de los quince (15) días siguientes a la misma, por violación grave de los estatutos del partido o movimiento. Para todos los efectos, el Consejo Nacional Electoral sólo reconocerá como autoridades de los partidos y movimientos a las personas debidamente inscritas ante él".*

En ese sentido, el legislador estatutario modificó la legitimación en la causa por activa para poder impugnar la designación de directivas ante el Consejo Nacional Electoral, restringiéndola a los delegados al Congreso o Convención del partido. En ese sentido, se trata de una norma de orden público que establece la competencia del Consejo Nacional Electoral, y por tanto, no puede ser modificada por la vía estatutaria. En ese sentido, se registrará el artículo 31 de los Estatutos de **DIGNIDAD,** siempre y cuando se entienda que es cualquier afiliado en quien concurra la condición de delegado al Congreso, quien puede impugnar una decisión de directivas ante el Consejo Nacional Electoral.

<u>SÉPTIMO EJE TEMÁTICO</u>: CÓDIGO DE ÉTICA, EN EL QUE SE DESARROLLEN LOS PRINCIPIOS DE MORALIDAD Y EL DEBIDO PROCESO, Y EN EL QUE SE FIJEN, ADEMÁS, LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES POR INFRACCIÓN AL MISMO, MÍNIMOS BAJO LOS CUALES DEBEN ACTUAR LOS AFILIADOS A LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA, EN ESPECIAL SUS DIRECTIVOS (NÚM. 9º ART. 4º L. 1475 DE 2011)

RÉGIMEN DISCIPLINARIO INTERNO, EN EL QUE SE ADOPTEN MECANISMOS PARA SANCIONAR LA DOBLE MILITANCIA, ASÍ COMO PARA SEPARAR DEL CARGO A SUS DIRECTIVOS CUANDOQUIERA QUE NO DESEMPEÑEN SUS FUNCIONES CONFORME A LA CONSTITUCIÓN, LA LEY Y LOS ESTATUTOS. (NÚM. 12º ART. 4º L. 1475 DE 2011)

Estatutos presentados por el partido político Dignidad:

*"**Artículo 11.- Sanciones y régimen de bancadas**. Los militantes, especialmente quienes hayan sido elegidos(as) a cargos uninominales o corporaciones públicas en representación del Partido, que incurran en mala conducta, en actos graves de indisciplina, faltas contra la ética pública o cualquier otra forma de violación de estos Estatutos, o que atenten contra la convivencia de los integrantes del Partido o de su estructura organizativa, serán sancionados hasta con la separación definitiva del Partido, por decisión del Comité Ejecutivo Nacional, garantizando siempre el debido proceso.*

Para el efecto, el Código de Ética y Garantías y Régimen Disciplinario aprobados por el Congreso del Partido son parte integral de los presentes Estatutos.

Para quienes representen al Partido en las Corporaciones Públicas se aplicará además el Reglamento de Bancadas, que hace parte integral de los presentes Estatutos. El Comité Ejecutivo Nacional tendrá la facultad de quitar el uso de la palabra y reemplazar en su curul a las y los elegidos a corporaciones públicas, cuando hayan incurrido en las conductas descritas en el presente artículo o cuando actúen a nombre de un partido o movimiento político diferente, sin perjuicio de las sanciones impuestas por la Comisión Nacional de Ética y Garantías. Así mismo, el Comité Ejecutivo Nacional, tendrá la facultad de suspender provisionalmente de la calidad de afiliado (a), a quien sea requerido por las autoridades judiciales mientras se profiera el fallo correspondiente.

CÓDIGO DE ÉTICA Y REGIMEN DISCIPLINARIO

TÍTULO I

***Artículo 1.- Objeto.** El presente Código tiene por objeto regular el régimen ético y disciplinario del Partido.*

***Artículo 2.- Finalidad.** La finalidad del presente Código es establecer las reglas y principios de acuerdo con las cuales la militancia deberá desarrollar sus conductas*

y actuaciones, así como ejercer sus funciones dentro y fuera del Partido o en el ejercicio de cualquier cargo público que se ejerza como militante activo.

***Artículo 3.- Campo de aplicación**. Los contenidos de este Código de Ética se aplicarán sin exclusión alguna a toda la militancia del Partido o a quienes lo hayan sido, cuando los hechos que se investiguen hubieran ocurrido en un momento en que tenían la condición de afiliados.*

***Artículo 4.- Principios generales.** Dirigen la ética del Partido los siguientes principios fundamentales, que son de obligatorio cumplimiento para la militancia:*

a. De respeto y acatamiento de la Constitución y la ley, el programa y estatutos del Partido, así como de las decisiones de los organismos de dirección en los planos nacional, regional, local y zonal.

b. De respeto y acatamiento al principio democrático, en un marco de tolerancia a la diferencia y de garantías a las minorías.

c. De cumplimiento integral de los programas a los electores y a la ciudadanía. d. De pulcritud y transparencia en la financiación de las campañas de sus candidatos y la oportuna rendición de cuentas y estados financieros al Consejo Nacional Electoral, con observancia de la normatividad vigente y el marco legal de la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación.

e. De condena y rechazo a toda actividad que atente contra la moral y patrimonio público, el interés de la ciudadanía y la soberanía de la Nación.

f. De solución pacífica de conflictos, búsqueda de la paz, respecto por los derechos humanos y defensa del interés nacional.

g. De respeto a la igualdad y unidad de los pueblos sin distingo de etnias y culturas, y la condena a todas las formas de discriminación contra la mujer, los niños y adulto mayor.

***Artículo 5.- Principios bajo los cuales se desarrollarán las actuaciones disciplinarias.** Las actuaciones disciplinarias se desarrollarán en observancia de los siguientes principios:*

a. Legalidad. El afiliado sólo podrá ser investigado y sancionado disciplinariamente por aquellas conductas previstas como faltas disciplinarias en el presente Código, los Estatutos del Partido y en las disposiciones legales vigentes que tengan relación con la actividad política o partidaria.

b. Debido proceso. La garantía constitucional del debido proceso se aplicará en todas las actuaciones previstas en este Código.

c. Presunción de inocencia. Se presumirá la inocencia del militante o ex militante sujeto a la investigación disciplinaria mientras no se declare su responsabilidad mediante fallo ejecutoriado.

d. Cosa Juzgada. El afiliado no podrá ser juzgado dos veces por un mismo comportamiento resuelto con anterioridad, aunque se le dé una denominación distinta. e. Culpabilidad. Queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva y las faltas sólo serán sancionables a título de dolo o culpa.

f. Favorabilidad. La ley permisiva o favorable se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

g. Igualdad. Las garantías y el trato de quienes ejercen la potestad disciplinaria serán iguales para todos los investigados, sin discriminación alguna.

h. Reconocimiento de la dignidad humana. Todo investigado(a) será tratado con respeto a su dignidad humana en el transcurso del proceso disciplinario.

***Artículo 6.- Potestad Disciplinaria.** Se entiende por potestad disciplinaria la capacidad del partido para investigar, juzgar y sancionar a sus militantes o ex militantes por la comisión de conductas violatorias del Programa, los Estatutos del Partido y el presente Código, y la Constitución y la Ley en relación con la actividad política o partidaria.*

***Artículo 7.- Titularidad.** El ejercicio de la potestad disciplinaria está en cabeza del Comité Ejecutivo Nacional, la Comisión Nacional de Ética y las Comisiones de Ética Departamentales, sin perjuicio de las competencias de la Veeduría Nacional.*

TÍTULO II

RÉGIMEN DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE INTERÉS

***Artículo 8.- Inhabilidades.** No podrán representar al Partido ni podrán ocupar cargos de dirección dentro del Partido:*

1. Quienes hayan sido responsables de hechos que comprometan el nombre y buen desarrollo del Partido.

2. Quienes públicamente hayan denostado y renegado de los principios y estatutos del Partido, o su actividad haya sido contraria a la obligación de cumplirlos.

3. Quienes hayan sido sancionados por la Comisión Nacional de Ética o por el Comité Ejecutivo Nacional con sanción de separación del Partido.

***Artículo 9.- Inhabilidades políticas.** De acuerdo con los principios rectores del presente Código y de los Estatutos del Partido, previo concepto del Comité Ejecutivo Nacional, se podrá rechazar la solicitud de militancia, el apoyo o la colaboración política de determinadas personas. Igualmente, el Comité Ejecutivo Nacional podrá negar el otorgamiento de aval para candidaturas a cargos uninominales o corporaciones públicas de elección popular o para respaldar la elección en representación del Partido para cargos como servidores públicos.*

***Artículo 10.- Incompatibilidades**. Son causales de incompatibilidad de los integrantes de cuerpos colegiados o funcionarios de la administración pública:*

1. Intermediar o gestionar en beneficio propio o particular, en calidad de servidor público, contratos y negocios jurídicos ante entidades del Estado, o en las cuales el Estado tenga participación económica mayorista.

2. Ser integrantes de Juntas o Consejos Directivos de establecimientos públicos, entidades de economía mixta o empresas industriales y comerciales del Estado, cuando se es miembro de las corporaciones públicas de elección popular a nombre del Partido.

3. Siendo servidor público, no se podrá ser socio directamente o por interpuesta persona, apoderado, gestor de negocios, agente comisionista, representante legal o

miembro principal o suplente de cuerpos directivos, de personas jurídicas que tengan contratos con el Estado, o empresas en las cuales éste tenga participación económica mayoritaria.

4. Ser parte del gabinete de un gobierno al cual el partido le haya declarado su oposición.

Parágrafo: Se exceptúa de este régimen el ejercicio de la cátedra y la investigación científica, universitaria, así como lo dispuesto en el artículo 283 de la ley 5 de1992.

***Artículo 11.- Conflicto de Interés.** Todo militante del Partido que aspire a ser avalado por el Partido como candidato a un cargo de elección popular o a formar parte de sus órganos de dirección, deberá hacer bajo la gravedad del juramento una declaración en la que determine los asuntos sobre los cuales tenga algún tipo de intereses. De la misma manera en el ejercicio deberá declararse impedido para actuar en un asunto cuando tenga interés particular y directo en su regulación, gestión, control o decisión, o lo tuviere su cónyuge, compañero o compañera permanente, o algunos de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho o asociados o accionistas de una misma sociedad de la cual fueren accionistas y cuyas acciones no se negocien en bolsa.*

TÍTULO III

DE LOS IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES PARA HACER PARTE DE LAS DIRECTIVAS Y DE LAS COMISIONES DE ÉTICA

***Artículo 12.- Impedimentos y recusaciones para los directivos del partido.** Es obligación del directivo, candidato o representante del Partido, que esté incurso en alguna de las causales del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, declarase impedido para aceptar el cargo dentro del Partido o en su nombre. En caso contrario, cualquier persona podrá recusarlo, para lo cual presentará las pruebas de rigor ante el Comité Ejecutivo Nacional o la Comisión Nacional de Ética o la Veeduría Nacional.*

***Artículo 13.- Impedimentos y recusaciones para los miembros de las Comisiones de Ética.** No podrán ser miembros de las Comisiones de Ética y Garantías, las siguientes personas:*

1. Los representantes a corporaciones públicas en ejercicio.

2. Las personas nombradas en cargos de dirección dentro del Partido.

3. Quienes se encuentren incursos en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades establecido por el presente Código.

4. Quienes hayan sido sancionados por la Comisión Nacional de Ética o por el Comité Ejecutivo Nacional en cualquier oportunidad.

TÍTULO IV

RÉGIMEN PARA LOS MIEMBROS ELEGIDOS A CORPORACIONES PÚBLICAS Y CARGOS UNINOMALES

***Artículo 14.- Declaración de bienes personales.** Los miembros elegidos popularmente a Corporaciones Públicas o cargos de elección uninominal deberán*

presentar ante la Comisión de Ética del Partido, en el momento de su posesión, los siguientes documentos:

a. Declaración de renta personal, cuando la hubiere.

b. Relación completa de los bienes patrimoniales del cónyuge o compañero permanente, y de sus hijos, cuando los hubiere.

***Artículo 15.- Apoyo a programas y agendas.** Los miembros del Partido postulados como candidatos a las corporaciones públicas, así como los candidatos no elegidos, deberán asumir el compromiso de acompañar y respaldar el desarrollo de los programas de los candidatos legítimos elegidos como representantes únicos del Partido a la Presidencia de la República, al Senado, a la Cámara de Representantes, a las Gobernaciones, Asambleas, Alcaldías, Concejos, Juntas Administradoras Locales y a todo cargo de elección popular; al igual que la agenda legislativa que se elabore con el propósito de poner en ejecución los contenidos programáticos, so pena de sanción por la Comisión Nacional de Ética o de la eventual separación del Partido. Los y las militantes que participen en consultas internas del Partido para cargos uninominales de elección popular y no resultaren electos, asumirán el compromiso de respaldar al candidato ganador, quien se convierte en único y legítimo candidato del Partido, so pena de ser sancionado eventualmente con la separación del partido.*

TÍTULOV

DE LAS FALTAS

***Artículo 16.- Clasificación de las faltas**. Las faltas disciplinarias de los afiliados del Partido se clasifican en leves, graves y gravísimas. a. Son faltas leves, las siguientes:*

1. El incumplimiento de los deberes del militante, siempre que no derive en falta grave o gravísima.

2. La faltas reiteradas de asistencia a las reuniones convocadas por el órgano de dirección del cual haga parte el militante, sin causa que lo justifique.

b. Son faltas graves, las siguientes:

1. El incumplimiento de los deberes especiales de los y las militantes contenidos en los Estatutos, así como de aquellos que de su incumplimiento se pudiere derivar perjuicio grave para el Partido.

2. La violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos o conflicto de interés contemplados en el la Constitución, la Ley y el presente Código.

3. Presentar con temeridad queja infundada en contra de algún afiliado del Partido.

4. No acoger los lineamientos, programas, directrices, orientaciones y decisiones emanadas de los órganos de dirección partidaria.

5. La violación de las normas estatutarias o del presente Código, siempre que la conducta no constituya falta gravísima.

6. Incurrir reiteradamente en conductas que constituyan falta leve.

c. Son faltas gravísimas, las siguientes:

1. Infringir los Estatutos y el presente Código. 2. Incurrir en las prohibiciones contenidas en el artículo 10 de los Estatutos del Partido.

3. Atentar contra el patrimonio del Partido.

4. Usar indebidamente dineros públicos o incurrir con ellos en gastos ostentosos o suntuarios.

5. Violar los topes de los montos de financiación de campañas políticas fijados por el Consejo Nacional Electoral o incumplir las obligaciones legales y estatutarias relacionadas con la financiación de las mismas, rendición de cuentas y estados financieros.

6. Desconocer los compromisos programáticos adquiridos con el Partido cuando se ha actuado con su aval para participar en actividades partidarias y electorales.

7. Desconocer el proceso de consulta interna para la selección de candidaturas únicas a cargos de elección popular y el compromiso obligatorio de respetar el resultado.

8. Inscribirse como candidato, después de abstenerse de participar en la consulta interna del Partido para la selección de candidaturas únicas.

9. Apoyar candidatos distintos a los del Partido o a los que el Partido a través de sus órganos de dirección haya decido apoyar mediante la política de alianzas, o efectuar alianzas individuales antes de que el Partido haya tomado una decisión.

10. Violar el régimen de Bancadas contenido en los Estatutos del Partido.

11. Incurrir reiteradamente en conductas que constituyan falta grave.

12. Ser condenado por la comisión de delitos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales, actividades del narcotráfico, contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad.

Parágrafo: El cambio de militancia por sí misma no constituye una falta disciplinaria, sino el ejercicio de un derecho. Con todo, los organismos titulares de la potestad disciplinaria podrán establecer la fecha a partir de la cual se configuró la pérdida de eficacia de la afiliación como militante al partido.

TÍTULO VI

DE LAS SANCIONES

***Artículo 17.- Sanciones**. De conformidad con la gravedad de las faltas, se podrán imponer las siguientes sanciones:*

a. Amonestación privada, procede para las faltas leves.

b. Amonestación pública, procede para las faltas graves y para las leves después de dos (2) amonestaciones privadas.

c. Suspensión de los derechos de afiliado del Partido en los términos establecidos en los estatutos hasta por cinco (5) años, procede para las faltas graves y gravísimas.

d. Separación definitiva del Partido y cancelación de la calidad de afiliado, procede para las faltas gravísimas.

***Parágrafo 1º.**- La suspensión de la calidad de militante impedirá la participación del sancionado en las actividades políticas y electorales del Partido, mientras permanezca vigente la sanción impuesta.*

***Parágrafo 2º.**- El Partido se abstendrá de avalar candidatura a cargos de elección popular, de la administración pública de quien haya sido sancionado, cuando la provisión se haga teniendo en cuenta la filiación política, así como a cargos de dirección partidaria.*

***Artículo 18.- Graduación de la sanción**. Para la graduación de la sanción a imponer, se evaluará en cada caso en concreto la naturaleza de la falta cometida, el grado de culpabilidad, la gravedad de la falta, la modalidad, las circunstancias, los motivos determinantes y los perjuicios que se deriven para el Estado, el interés nacional o el Partido.*

CAPÍTULO SEGUNDO

EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD, REINCORPORACIÓN Y SUSPENSIÓN TEMPORAL

***Artículo 19.- Eximentes de responsabilidad.** Son eximentes de responsabilidad, las siguientes:*

a. La fuerza mayor y el caso fortuito.

b. El cumplimiento de un deber constitucional, legal o de orden legítima impartida por autoridad competente, emitida con el lleno de los requisitos legales.

c. La insuperable coacción ajena o miedo insuperable.

d. La convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta.

***Artículo 20.- Reincorporación.** El afiliado que haya sido sancionado con la suspensión de los derechos de militante, podrá pedir a la Comisión Nacional de Ética o al Comité Ejecutivo Nacional la habilitación de sus derechos una vez cumplida la suspensión. El militante que haya sido sancionado con la separación definitiva del Partido y la cancelación de la calidad de militante, sólo podrá solicitar su reincorporación ante el Comité Ejecutivo Nacional después de transcurridos dos (2) años de la cancelación, el cual decidirá el caso. La Veeduría Nacional deberá presentar concepto para tal efecto.*

***Parágrafo.-** La reincorporación no procederá respecto de los militantes que hayan sido condenados por la comisión de delitos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales, actividades del narcotráfico, contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad.*

***Artículo 21.-. Suspensión temporal.** La suspensión temporal como medida preventiva procede cuando:*

1. El militante esté siendo investigado penalmente por delitos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales, actividades del narcotráfico, contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad o contra el patrimonio público.

2. Cuando el afiliado haya sido acusado de violar las normas del Consejo Nacional Electoral sobre extralimitación en los topes fijados para la financiación de las campañas electorales.

3. Cuando el afiliado incumpla los deberes especiales señalados en el presente Código de Ética y Régimen Disciplinario.

***Parágrafo**.- El afiliado al que se le haya impuesto la suspensión temporal como medida preventiva no podrá participar en las actividades políticas y electorales del Partido, mientras la medida permanezca vigente.*

CAPÍTULO TERCERO

INFORME Y REGISTRO DE SANCIONES

***Artículo 22.- Informe**. Las Comisiones de Ética deberán rendir informe anual de su gestión y los asuntos disciplinarios, el cual será de público conocimiento.*

***Artículo 23.- Registro de Sanciones.-** La Comisión Nacional de Ética deberá llevar un registro nacional de las sanciones impuestas.*

***Parágrafo.**- La Comisión Nacional de Ética enviará copia del registro de sanciones a la Veeduría Nacional, para lo de su competencia.*

TÍTULO VII

DE LOS ORGANISMOS QUE INTERVIENEN EN LAS ACTUACIONES DISCIPLINARIAS, COMPOSICIÓN

***Artículo 24.- Órganos que intervienen en las actuaciones disciplinarias.** Los órganos titulares que intervienen en las actuaciones disciplinarias son:*

El Comité Ejecutivo Nacional.

Las Comisiones de Ética.

La Veeduría Nacional. La Defensoría de los investigados.

***Artículo 25.- Integración, elección, calidades y funciones.** La Integración, forma de elección o designación, las calidades y las funciones de los órganos que intervienen en las actuaciones disciplinarias, excepto las de la Defensoría de los Afiliados, están definidas en los Estatutos del Partido.*

***Parágrafo.**- En todo caso el Comité Ejecutivo Nacional conocerá en segunda instancia de los recursos de apelación contra los fallos proferidos por la Comisión Nacional de Ética y de la solicitud de revisión de los fallos de segunda instancia proferidos por la Comisión Nacional de Ética.*

***Artículo 26.- Defensoría de los investigados.** El Defensor de los investigados actuará asumirá la defensa de quienes no concurran al proceso disciplinario, ni hayan designado apoderado. Será elegido por el Comité Ejecutivo Nacional en número suficiente de acuerdo a las necesidades.*

CAPÍTULO SEGUNDO

POSESIÓN, PERMANENCIA, QUÓRUM Y REUNIONES

***ARTÍCULO 27.- Posesión**. Los órganos que intervienen en las actuaciones disciplinarias tomarán posesión una vez elegidos en el Congreso Nacional, excepto quien ostente la calidad de Defensor de los Afiliados del Partido, que tomará posesión ante el Comité Ejecutivo Nacional. Artículo 28.- Reuniones y quórum. Las Comisiones de Ética sesionarán válidamente con mínimo cuatro (4) de sus integrantes y sus decisiones se tomarán con la mitad más uno (1) de los asistentes.*

***Parágrafo 1º.-** Las Comisiones de Ética señalarán los días y las horas en que se celebrarán las reuniones ordinarias y extraordinarias para el estudio de los asuntos de su competencia; en todo caso deberán reunirse al menos una (1) vez al mes.*

***Parágrafo 2º.-** A las reuniones de la Comisión Nacional de Ética y Garantías deberá convocarse a la Veeduría Nacional.*

***Parágrafo 3º**.- La inasistencia de un miembro principal a tres (3) sesiones continuas, sin justa causa, se considerará como causal de ausencia definitiva.*

***Artículo 29.- Coordinación.** Las Comisiones de Ética designarán de entre sus miembros principales un coordinador, cuyo periodo será de un (1) año y tendrá las siguientes funciones:*

1. Coordinar y dirigir las reuniones ordinarias y extraordinarias.

2. Hacer el reparto por sorteo objetivo de las quejas presentadas entre los miembros de la Comisión.

3. Servir de interlocutor entre la Comisión y los órganos de dirección partidaria, la Veeduría Nacional y la Defensoría de los Afiliados.

4. Las que le fueren encomendadas por el Comité Ejecutivo Nacional del 11 partido.

***Artículo 30.- Secretaría.** Las Comisiones de Ética designarán de entre sus miembros principales uno que ejerza las funciones de Secretaría, cuyo período será de un (1) año y tendrá las siguientes funciones:*

1. Efectuar las notificaciones de las aperturas de investigación, fallos, resoluciones y demás decisiones de la Comisión.

2. Llevar las actas de las reuniones de la Comisión.

3. Enviar las convocatorias y asistir a las reuniones que celebre la Comisión.

4. Llevar en orden consecutivo el registro de las investigaciones adelantadas por la Comisión.

5. Llevar un registro nacional de las sanciones impuestas a miembros del Partido y remitir copia del mismo a la Veeduría Nacional del Partido.

6. Llevar a cabo la investigación de los casos que le sean asignados por la Coordinación de la Comisión.

TÍTULO VIII

DEL PROCESO DISCIPLINARIO

***Artículo 31.- Iniciación.** La acción disciplinaria podrá iniciarse de oficio, por petición de parte, por petición de la Veeduría Nacional o por solicitud de cualquier ciudadano, con una narración de los hechos, las circunstancias en que presuntamente ocurrieron y las pruebas que respalden la queja ante la Comisión de Ética respectiva.*

***Artículo 32.- De la extinción de la acción disciplinaria.** La acción ético-disciplinaria se extinguirá por:*

1. Muerte del afiliado investigado.

2. Prescripción de la acción.

***Parágrafo.-** El desistimiento del quejoso no extingue la acción, ni la renuncia al Partido del militante investigado.*

***Artículo 33.- Prescripción.** La acción ético-disciplinaria prescribe en cinco (5) años, contados para las faltas instantáneas a partir de su consumación, y para las de carácter continuado desde la realización del último acto.*

***Parágrafo.-** Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un solo proceso, la prescripción de las acciones se contará separadamente para cada una de ellas.*

***Artículo 34.- Investigación Previa**. De existir duda sobre la procedencia de la apertura de investigación, podrá disponerse del término de treinta (30) días hábiles, prorrogables por treinta (30) más, para adelantar diligencias y practicar las pruebas necesarias que conduzcan a determinar si existe mérito o no para abrir investigación formal.*

***Artículo 35.- Resolución inhibitoria**. Cuando de las diligencias y pruebas practicadas se concluya que los hechos no ameritan apertura de investigación, se procederá a proferir resolución inhibitoria. Similar decisión procederá frente a la queja manifiestamente temeraria o se refiera a hechos que no tengan relevancia disciplinaria o sean narrados en forma absolutamente inconcreta o confusa, a menos que la queja se corrija a solicitud de la Comisión de Ética correspondiente. La resolución inhibitoria podrá ser revocada, de oficio o a petición de parte, cuando aparezcan nuevas pruebas que desvirtúen los presupuestos que sirvieron de para proferirla.*

***Artículo 36.- Apertura de investigación.** Se dispondrá la apertura formal de la investigación, cuando de las diligencias previas o de la queja y sus anexos, se determine la posible violación de la Constitución, la Ley, los Estatutos o el presente Código, la cual tendrá una duración máxima de treinta (30) días prorrogables hasta por treinta (30) más.*

***Artículo 37.- Declaratoria de investigado ausente.** Cuando el afiliado investigado no comparezca, a pesar de haber sido citado por lo menos en dos (2) oportunidades, la Comisión de Ética procederá a declararlo persona ausente y su defensa será asumida por el Defensor de Oficio.*

CAPÍTULO SEGUNDO

DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO

***Artículo 38.- Sujetos Procesales.** Son sujetos procesales:*

1. El militante disciplinado.

2. El apoderado del militante investigado, si lo hubiere.

3. La autoridad disciplinaria competente.

4. La Veeduría Nacional del Partido, si así lo decidiere.

5. El Defensor de Oficio.

***Parágrafo 1.-** Si la Veeduría Nacional del Partido decide participar en un determinado proceso, además de las funciones que le son atribuidas por los Estatutos, orientará su 13 participación especialmente a conseguir la transparencia,*

legalidad y, en general, la protección del interés general del Partido dentro del respectivo proceso.

***Parágrafo 2.**- El Defensor de oficio solamente será designado en aquellos casos en que el investigado militante o ex militante no concurra al proceso, ni designe apoderado de confianza.*

***Artículo 39.- Intervención de los sujetos procesales.** Los sujetos procesales podrán:*

1. Solicitar, aportar y controvertir las pruebas aportadas e intervenir en la práctica de las mismas.

2. Interponer los recursos de ley.

3. Solicitar y obtener copias de las actuaciones.

***Parágrafo.-** La intervención del quejoso se limita exclusivamente a presentar y ampliar la queja, precisando los hechos objeto de su queja y la fecha y circunstancias en que presuntamente ocurrieron, y a aportar las pruebas que tenga en su poder que sirvan de fundamento a la misma.*

***Artículo 40.- Derechos del procesado.** El procesado tiene los siguientes derechos:*

1. Acceder a la investigación.

2. Nombrar apoderado.

3. Solicitar o aportar pruebas y controvertirlas, e intervenir en su práctica.

4. Rendir descargos.

5. Impugnar las decisiones y presentar los recursos de ley.

***Artículo 41.- Utilización de medios tecnológicos.** Para la práctica de las pruebas y para el desarrollo de todas las actuaciones podrán utilizarse los medios tecnológicos, respetando los derechos y garantías constitucionales. La notificación de todas las notificaciones al investigado se efectuará al correo electrónico que figure en la inscripción al partido.*

***Artículo 42.- Reconstrucción de expedientes.** En caso de pérdida de un expediente en una investigación en curso, deberán practicarse todas las diligencias necesarias para su reconstrucción. Para ello, se allegarán las copias recogidas previamente por escrito o en medio magnético y se requerirá la colaboración de los sujetos procesales, a efectos de obtener copia de las diligencias o decisiones que se hubieren proferido. En caso de que el expediente no se pueda reconstruir, deberá reiniciarse la actuación oficiosamente.*

***Artículo 43.- Petición y decreto de pruebas.** Los sujetos procesales pueden aportar y solicitar la práctica de las pruebas que estimen conducentes y pertinentes. Serán rechazadas las pruebas inconducentes, las impertinentes y las superfluas y serán excluidas las practicadas con violación al debido proceso.*

***Artículo 44.- Prueba trasladada**. Las pruebas practicadas válidamente en una actuación judicial o administrativa, dentro o fuera del país, podrán trasladarse a la actuación disciplinaria mediante copias autorizadas.*

CAPÍTULO TERCERO

DE LA EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y FALLO

Artículo 45.- Evaluación de la investigación. *Vencido el término de la investigación o agotadas las pruebas decretadas, el competente, mediante decisión motivada, evaluará las diligencias y decretará, según corresponda el archivo definitivo de la investigación o formulación de cargos.*

Artículo 46.- Archivo definitivo*. Procederá el archivo definitivo de la actuación, cuando aparezca demostrado:*

1. Que el hecho atribuido no existió.

2. Que la conducta no está prevista como falta en el presente Código.

3. Que el afiliado no realizó la conducta atribuida.

4. Que la conducta fue amparada en una causal de exclusión de responsabilidad.

5. Que la acción disciplinaria no podía iniciarse o proseguirse.

Artículo 47.- Formulación de cargos.- *Cuando de la evaluación de las pruebas recaudadas en la etapa de investigación resulte probada la materialidad de la falta y existan serios indicios que comprometan la responsabilidad del afiliado sujeto de la investigación, procederá la formulación de cargos. La resolución que formule los cargos, deberá contener:*

1. Un resumen de los hechos investigados.

2. El carácter de la falta.

3. Las disposiciones constitucionales, legales, estatutarias o reglamentarias, presuntamente violadas.

Artículo 48.- Descargos. *El afiliado investigado dispondrá de un término de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de la formulación de cargos, para presentar sus descargos, aportar y solicitar pruebas.*

Artículo 49.- Pruebas. *Vencido el término previsto en el artículo anterior, se dispondrá de veinte (20) días hábiles para practicar las pruebas solicitadas o las que se decreten de oficio.*

Artículo 50.- Traslado para alegar. *Agotado el trámite probatorio, el afiliado investigado dispondrá de un término de diez (10) días hábiles para presentar alegatos de conclusión.*

Artículo 51.- Fallo*. Transcurrido el término previsto en el artículo anterior, el competente dispondrá de veinte (20) días hábiles para proferir el fallo, el que deberá contener:*

1. La síntesis de la queja.

2. La identidad del afiliado disciplinado.

3. La valoración de las pruebas.

4. El análisis de los descargos.

5. La calificación de los hechos.

***Parágrafo.**- Si se encontrase pendiente la resolución de un proceso penal, administrativo, disciplinario, fiscal u otros, dicho término se suspenderá hasta cuando exista un pronunciamiento en cualquiera de dichos procesos.*

***Artículo 52.- Publicación del fallo**. El fallo deberá hacerse público dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su ejecutoria, a través de la página web del Partido.*

CAPÍTULO CUARTO

CAUSALES DE NULIDAD

***Articulo 53.- Causales de nulidad.** Son causales de nulidad las siguientes:*

1. La falta de competencia para investigar y fallar.

2. La violación del debido proceso y especialmente del derecho de defensa.

3. La imprecisión de los cargos y de las normas en que se fundamenten.

4. El que se haya proferido fallo por parte de una autoridad partidaria que alguno de sus integrantes haya debido declararse impedido para conocer del respectivo asunto y su voto hubiere sido decisivo.

5. La comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso.

Podrán proponerse causales de nulidad hasta antes de proferirse el fallo definitivo. En la solicitud de nulidad procesal se deberá precisar la causal invocada y se deberán exponer las razones que la sustenten, sin que con posterioridad puedan alegarse causales de nulidad por el mismo hecho o hechos anteriores.

***Artículo 54.- Trámite de la solicitud de nulidad.** Una vez presentada la solicitud de nulidad ante la autoridad que conozca del respectivo proceso, esta correrá traslado por tres (3) días de la solicitud a los demás sujetos procesales diferentes al peticionario, si los hubiere. De no haberlos, o surtido el anterior traslado, la autoridad disciplinaria, mediante auto independiente y motivado, y siempre antes de dictar fallo de instancia, se pronunciará sobre la procedencia o no de la declaratoria de nulidad de lo actuado.*

***Artículo 55.- Efectos de la nulidad.** En cualquier etapa del proceso en que se advierta la existencia de una de las causales de nulidad antes previstas, se decretará la nulidad total o parcial de lo actuado y se ordenará reponer la actuación, con excepción de las pruebas legal recaudadas.*

CAPÍTULO QUINTO

DE LAS PROVIDENCIAS Y LAS FORMAS DE NOTIFICACIÓN

***Artículo 56.- Providencias.** En el trámite de las actuaciones se proferirán resoluciones y autos.*

***Artículo 57.- Formas de notificación.** La notificación de las decisiones se hará de las siguientes formas:*

Personal.

Por edicto.

Por conducta concluyente.

***Artículo 58.- Notificación personal.** Se notificarán personalmente los autos de apertura de indagación preliminar y de investigación disciplinaria, el pliego de cargos y el fallo. Se entenderán también como notificaciones personales las enviadas a la dirección de correo electrónico del investigado o de su defensor o vía fax. La notificación se entenderá surtida en la fecha de envío del correo electrónico o que aparezca en el reporte del fax.*

***Artículo 59.- Notificación por edicto.** Cuando no se pudiere notificar personalmente se notificará por edicto, el cual se fijará en la cartelera de la Sede y en la página web del Partido. Vencido el término de ocho (8) días a partir de la fijación del edicto, se entenderá notificado el investigado.*

***Artículo 60.- Notificación por conducta concluyente**. Cuando no se hubiere realizado la notificación personal, o si ésta fuere irregular respecto de autos o del fallo, la exigencia legal se entiende cumplida, para todos los efectos, si el procesado o su defensor no reclama y actúa en diligencias posteriores o interpone recursos contra ellos o se refiere a las mismas o a su contenido en escritos o alegatos posteriores.*

CAPÍTULO SEXTO

DE LOS RECURSOS Y LA EJECUTORIA DE LAS DECISIONES

***Artículo 61.- Clases de recursos y sus formalidades.** Contra las decisiones ético-disciplinarias proceden los recursos de reposición y apelación, los cuales deberán interponerse por escrito. Con todo, contra el fallo de primera y segunda instancia no procede el recurso de reposición.*

***Artículo 62.- Oportunidad para interponer los recursos.** Los recursos de reposición y apelación se deberán interponer y sustentar ante la Corporación que profirió la decisión dentro de los tres días siguientes al de notificación la decisión. En caso de que se interponga sin ninguna sustentación se declarará desierto.*

***Artículo 63.- Recurso de reposición**. Con excepción de los fallos de primera, segunda instancia y las decisiones del Comité Ejecutivo Nacional en sede de Revisión, las demás decisiones disciplinarias serán susceptibles del recurso de reposición. Si la decisión recurrida fue proferida por un Comisionado Ponente el recurso de reposición será resuelto por los restantes miembros de la Sala.*

***Artículo 64.- Recurso de apelación**. El recurso de apelación procede únicamente contra las siguientes decisiones:*

1. La que niega la práctica de pruebas.

2. La que decreta el archivo.

3. La que decide una nulidad.

4. El fallo de primera instancia.

Cuando el recurso de apelación sea interpuesto en subsidio del recurso reposición la autoridad disciplinaria de primera instancia en el mismo auto que deniega la reposición de la decisión recurrida deberá pronunciarse sobre la concesión del recurso de apelación y remitirá el expediente a la autoridad partidaria de segunda

instancia. Si la decisión recurrida fue proferida por un Comisionado Ponente el recurso de reposición será resuelto por los restantes miembros de la Sala.

***Artículo 65.- Prohibición de la reformatio in pejus.** El superior, en la providencia que resuelva el recurso de apelación interpuesto contra el fallo sancionatorio, no podrá agravar la sanción impuesta al afiliado sancionado.*

***Artículo 66.- De la revisión.** El Comité Ejecutivo Nacional discrecionalmente podrá seleccionar para revisión los fallos de segunda instancia proferidos por la Comisión Nacional de Ética del Partido, a petición, debidamente sustentada, de la parte interesada. Una vez adopte la decisión de selección para revisión, el Comité Ejecutivo Nacional dispondrá de un término de ocho (8) días, prorrogables por ocho (8) más, para proferir la decisión correspondiente.*

***Artículo 67.- Ejecutoria de las decisiones**. Las decisiones disciplinarias contra las que proceden recursos quedarán en firme tres (3) días después de su notificación.*

***Artículo 68.- Trámite de la segunda instancia**. La Corporación correspondiente deberá fallar en segunda instancia en el término de treinta (30) días contados a partir del día siguiente en que el expediente llegue a su despacho proveniente de la autoridad de primera instancia.*

Si lo considera necesario, decretará pruebas de oficio, en cuyo caso el término para proferir el fallo se ampliará hasta en otro tanto.

TÍTULO IX

DE LOS IMPEDIMENTOS Y LAS RECUSACIONES EN EL PROCESO SANCIONATORIO

***Artículo 69.- Causales de impedimento**. Las causales de impedimento y recusación de los integrantes de cada una de las autoridades disciplinarias son:*

1. Tener interés directo en la actuación disciplinaria.

2. Tener parentesco en el cuarto grado de consanguinidad, el segundo de afinidad o primero civil, con alguno de los sujetos procesales.

3. Haber manifestado opinión sobre el asunto materia de actuación.

4. Tener amistad íntima o enemistad grave con cualquiera de los sujetos procesales o el quejoso.

***Artículo 70.- Oportunidad para recusar y para declararse impedido.** Los integrantes de la respectiva autoridad disciplinaria deberán poner de presente a la misma autoridad, si consideraren que se encuentran incursos en cualquiera de las causales de impedimento anteriormente descritas, en el plazo de tres (3) días siguientes al auto mediante el cual se avoca el conocimiento del asunto. El mismo plazo aplicará para que los sujetos procesales recusen a los integrantes de la autoridad que conoce del asunto.*

***Artículo 71.- Auto**. Cuando se haya puesto de presente una causal de impedimento o se haya recusado a alguno de los integrantes de la respectiva Corporación disciplinaria, los restantes integrantes decidirán de plano dentro de los tres (3) días siguientes a la recusación o a la declaratoria de impedimento sobre el respectivo impedimento o recusación mediante auto que solo será objeto de recurso de apelación ante el Comité Ejecutivo Nacional, cuando se trate de autoridad diferente a esta.*

TÍTULO X

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 72.- Aplicación supletoria. *Las disposiciones contenidas en el Código Disciplinario Único (Ley 734 de 2002) se aplicarán en forma supletoria, exclusivamente en aquellos casos en que se presenten vacíos en este Código.*

Artículo 73. Entrada en vigencia. *El presente Código de Ética y Régimen Disciplinario entrará a regir a partir de su aprobación por parte del Congreso Nacional.*

Consideraciones del Consejo Nacional Electoral:

Artículo 11: El artículo 11 de los Estatutos del partido **DIGNIDAD** establecen algunas faltas y sanciones en que pueden incurrir los militantes del mismo. Así mismo, incorpora el Código de ética y Garantías y Régimen Disciplinario a los Estatutos.

Ahora bien, el último inciso del artículo 11 establece que el Comité Ejecutivo Nacional, tendrá la facultad de suspender provisionalmente de la calidad de afiliado (a), a quien sea requerido por las autoridades judiciales mientras se profiera el fallo correspondiente. Esta norma, observa la Sala, es ambigua y confusa, pues no determina qué tipo de requerimiento de autoridad judicial es necesario para que se le pueda suspender provisionalmente la calidad de afiliado a una persona.

Aunado a lo dicho, a juicio de esta Corporación, la facultad de desafiliar a una persona del partido **DIGNIDAD**, por el solo hecho de ser requerida por una autoridad judicial (ej. Pago de una cuota alimentaria, restitución de un inmueble arrendado, pago de deudas civiles, o por la presunta comisión de un delito) desconoce el derecho fundamental que le asiste a todo ciudadano de participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, que se manifiesta en la potestad de constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación; formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas (Art. 40 C. Pol.). Lo anterior por cuanto se está condicionando a un tercero, en este caso: una autoridad judicial, la posible permanencia del afiliado al Partido.

La norma cuestionada, también desconoce el principio constitucional de la presunción de inocencia en virtud del cual toda persona se presume inocente mientras no sea declarada culpable (Art. 29 C. Pol.). Dicha presunción, no tiene aplicación exclusiva en el ámbito de la actividad estatal sino que también debe informar las conductas de los particulares, pues lo que pretende evitar la presunción de inocencia es la imposición de sanciones anticipadas y sin justificación alguna, tanto en el ámbito penal, como en el disciplinario, social, político etc. Sobre el particular ha precisado la Corte Constitucional que:

> *"Ahora bien, la presunción de inocencia no sólo tiene consecuencias relativas al proceso penal como tal. Toda persona tiene derecho a "ser considerada y tratada como inocente hasta tanto no se demuestre lo contrario y sea declarada culpable mediante sentencia ejecutoriada", y ello aplica en todos los ámbitos.*
>
> *Por ejemplo, mediante sentencia C-271 de 2003 la Corte condicionó la constitucionalidad del numeral 8 del artículo 140 del Código Civil que establece que hay lugar a la declaratoria de nulidad del matrimonio civil, "cuando uno de los contrayentes ha matado o hecho matar al cónyuge con quien estaba unido en matrimonio anterior", entre otras razones, por violar la presunción de inocencia. Al respecto, se indicó que "para que sea posible declarar la nulidad del nuevo matrimonio de quien ha matado o hecho matar al cónyuge con quien estaba unido en matrimonio anterior, es un imperativo que se haya establecido la culpabilidad del conyugicida mediante la existencia previa de sentencia condenatoria ejecutoriada por el delito de homicidio agravado. La simple inculpación del delito no es suficiente para aplicar la causal ya que, acorde con el ordenamiento jurídico preestablecido, la única forma de desvirtuar el principio de la presunción de inocencia a que hace expresa referencia el artículo 29 Superior, es que la persona, en este caso el conyugicida, haya sido vencida en juicio y condenada, y dicha condena tenga carácter definitivo y se encuentre en firme"*[7]

En consecuencia, si bien la norma busca un objetivo legítimo que pudiera ser alejar del partido y de su órbita de acción a todo delincuente o transgresor de la ley y propender por la moralidad de sus afiliados, la medida que se toma no es conducente; es decir, no logra dicho propósito. Lo anterior, precisamente por cuanto con esa medida se estaría suspendiendo la calidad de afiliado de personas que se presumen inocentes y de las que no se tiene certeza sobre su participación directa en la comisión de una conducta reprochable. Aunado a lo dicho, la norma del artículo 11 le da la potestad al Comité Ejecutivo Nacional de suspender al afiliado con carácter discrecional; es decir, que ante un requerimiento de autoridad judicial es posible que el afiliado sea suspendido, pero también es posible que no. Esta discrecionalidad resta objetividad en un procedimiento que puede afectar derechos fundamentales como el de la participación política pues dependería del CEN, sin criterios especiales, determinar si suspende a una persona de su condición de afiliado al Partido. Finalmente, la falta de precisión en la definición de lo que debe entenderse por "requerimiento de autoridad judicial" hace que la norma pueda ser aplicadas en casos en que no exista una finalidad constitucionalmente legítima y en consecuencia se produzca una discriminación negativa en contra de uno de los afiliados del partido. Fruto de lo dicho, el artículo 11 de los Estatutos del Partido DIGNIDAD será inscrito en el RUP, salvo su último inciso que será eliminado por ser inconstitucional.

Código de Ética – Régimen disciplinario: En el TÍTULO I del Código de Ética y Garantías y Régimen disciplinario del Partido **DIGNIDAD**, se establecen las normas básicas para la aplicación de dicho cuerpo normativo. Entre ellas, se define la finalidad del Código, su ámbito de aplicación, los principios generales que rigen al partido, los principios aplicables

[7] Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C 282de 2012 M.P. Humberto Sierra Porto.

en los procedimientos disciplinarios, y los órganos competentes para desarrollar las investigaciones disciplinarias.

Por su parte, el TÍTULO II establece el régimen de inhabilidades e incompatibilidades y de conflictos de interés al interior del Partido **DIGNIDAD.**

Más adelante, el TITULO III establece las causales de impedimento y recusación para ser parte de las directivas del partido y de su comisión de ética. Estas normas, en criterio de la Sala desarrollan los principios de imparcialidad, moralidad y transparencia en el ejercicio de los cargos directivos del partido.

Acto seguido, el TÍTULO VI, consagra algunos deberse de conducta para los miembros del partido que hayan sido elegidos a cargos uninominales y a corporaciones públicas.

El TÍTULO V, establece con claridad las conductas que se consideran faltas, clasificándolas en leves, graves y gravísimas. Relacionado con lo anterior, el TÍTULO VI establece las sanciones que se impondrán, dependiendo de la falta que haya cometido el infractor. Igualmente se establecen los eximentes de responsabilidad y se establecen las siguientes causales por las cuales puede suspenderse de manera temporal la afiliación al partido:

> *"1. El militante esté siendo investigado penalmente por delitos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales, actividades del narcotráfico, contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad o contra el patrimonio público.*
>
> *2. Cuando el afiliado haya sido acusado de violar las normas del Consejo Nacional Electoral sobre extralimitación en los topes fijados para la financiación de las campañas electorales.*
>
> *3. Cuando el afiliado incumpla los deberes especiales señalados en el presente Código de Ética y Régimen Disciplinario".*

A diferencia de lo que establecía el último inciso del artículo 11 de los Estatutos, las causales de suspensión temporal de la afiliación al partido contenidas en el artículo 21 del CÓDIGO DE ÉTICA Y RÉGIMEN DISCIPLINARIO son específicas, concretas y proporcionales.

Respecto de la primera causal, observa la Sala que se trata de conductas graves que tienen la entidad de transgredir el orden democrático y que por ende de manera preventiva y temporal, es posible que se suspenda la calidad de afiliado que está siendo investigado. Si bien, en ningún caso debe desconocerse la presunción de inocencia que le asiste a toda persona, en el caso concreto se está protegiendo un bien constitucionalmente legítimo a través de una medida proporcional; a saber: el orden democrático y la paz social.

Verbigracia, el numeral 5º del artículo 27 de la Ley 1475 de 2011 indica que es prohibido a los partidos y movimientos políticos recibir financiación de:

> *"Las de personas naturales contra las cuales se hubiere formulado acusación o imputación en un proceso penal por delitos relacionados con la financiación, pertenencia o promoción de grupos armados ilegales, narcotráfico, delitos contra la administración pública, contra los mecanismos de participación democrática y de lesa humanidad".*

Esta norma fue declarada exequible por parte de la Corte Constitucional mediante la sentencia C- 490 de 2011, pues al igual que el caso en concreto, su finalidad no es afectar la presunción de inocencia del investigado, sino garantizar la moralidad, transparencia y licitud en la actividad del partido político. En consecuencia, la facultad de suspender temporalmente a un militante, es legítima en este caso, en tanto no se pretende imponer una sanción anticipada al investigado, sino se trata de proteger la actividad de la colectividad política de posibles conductas antidemocráticas que podrían derivar en su destrucción.

En cuanto a la segunda causal, considera igualmente esta Corporación que persigue un fin constitucionalmente legítimo; a saber la moralidad y transparencia del actuar de la colectividad política, siempre y cuando se entienda que dicha acusación se materializa a través de la apertura de investigación y formulación de cargos que profiera el Consejo Nacional Electoral.

Finalmente, la última causal, tiene una finalidad preventiva para garantizar el cumplimiento de las normas internas del partido. Sin embargo, para que sea procedente dicha suspensión, es necesario que exista prueba del incumplimiento que debe ser valorada, so pena de desconocerse el derecho fundamental al debido proceso.

Corolario de lo expuesto, las tres causales de suspensión de la calidad de afiliado del partido **DIGNIDAD,** contenidas en el TÍTULO VI del Código de ética y Garantías y Régimen Disciplinario son proporcionales, en tanto establecen supuestos de hecho concretos para su procedencia y pretenden proteger fines constitucionalmente legítimos a través de una procedimiento adecuado para tal efecto.

Por demás, encuentra la Corporación que el Código de ética y régimen disciplinario desarrolla de manera clara las facultades de los órganos partidarios que intervienen en las actuaciones disciplinarias y la forma como se componen (TÍTULO VII); las particularidades del proceso disciplinario que garantiza el derecho al debido proceso (TÍTULO VIII); las causales de impedimento y recusación de las autoridades disciplinarias (TÍTULO IX) y el carácter supletorio de la Ley 734 de 2002 al procedimiento disciplinario (TÍTULO X).

Considera entonces esta Colegiatura que se trata de normas desarrolladas en el marco de autonomía que la Constitución asigna a los Partidos y Movimientos Políticos y que por ende serán registradas en el RUP, con las modificaciones enunciadas en este acápite.

<u>OCTAVO EJE TEMÁTICO:</u> POSTULACIÓN, SELECCIÓN E INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS A CARGOS Y CORPORACIONES DE ELECCIÓN POPULAR MEDIANTE MECANISMOS DEMOCRÁTICOS TENIENDO EN CUENTA EL DEBER DE GARANTIZAR LA EQUIDAD DE GÉNERO. (NÚM. 10º ART. 4º L. 1475 DE 2011)

CONSULTAS INTERNAS, POPULARES O EL PROCESO DE CONSENSO PARA LA SELECCIÓN DE CANDIDATOS A CARGOS O CORPORACIONES DE ELECCIÓN POPULAR Y PARA LA TOMA DE DECISIONES CON RESPECTO A SU ORGANIZACIÓN O LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS. (NÚM. 11º ART. 4º L. 1475 DE 2011)

Estatutos presentados por el partido político Dignidad:

"CAPÍTULO V

De la selección de candidatos y candidatas de elección popular a cargos del Estado

Artículo 12.- Requisitos para ser candidato o candidata. *Para ser candidato o candidata del Partido a cargos de elección popular se requiere:*

1. Acreditar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales para el cargo.

2. Ser militante del Partido.

3. Pertenecer a un organismo o comité del Partido, excepto cuando exista impedimento legal.

4. Ser seleccionado como candidata o candidato por el organismo competente, según el procedimiento previsto en los presentes Estatutos.

5. Firmar la Declaración Juramentada de no encontrarse incurso en causal de inhabilidad constitucional o legal y de no haber sido condenados(as) o encontrarse investigados(as) durante el periodo para el cual resultaren elegidos(as).

6. Firmar un compromiso de cumplimiento de presentación oportuna de rendición de cuentas, conforme a los requisitos exigidos y dentro del término estipulado por el Consejo Nacional Electoral para tal fin. En caso de incumplimiento o extemporaneidad se compromete a cancelar la totalidad de la multa que a título de sanción imponga el Consejo Nacional Electoral al Partido, sin necesidad de requerimiento alguno.

7. Respetar y acatar los Estatutos y las directrices trazadas por los organismos de dirección del Partido, especialmente las relacionadas con el apoyo a las y los candidatos propios o de coalición.

8. Presentar declaración de bienes y rentas.

Artículo 13.- Procedimiento para la selección de candidatos y candidatas a cargos uninominales de la rama ejecutiva del poder público*. La decisión política sobre candidaturas del Partido a cargos uninominales, corresponde en*

primera instancia al Congreso Nacional en el caso de la Presidencia y la Vicepresidencia de la República, decisión que podrá ser tomada por el Comité Ejecutivo Nacional cuando el Congreso Nacional no se encuentre reunido. En los casos de gobernaciones y alcaldías la decisión le corresponde en primera instancia a las directivas de la respectiva circunscripción electoral. Cuando no exista directiva regional la decisión será tomada por la instancia superior. La designación de una candidatura requiere la aprobación de la mayoría simple del organismo correspondiente a la circunscripción territorial respectiva con quórum decisorio, citada para el efecto con al menos ocho (8) días hábiles de anticipación, de lo cual se informará a la Secretaría General del Partido. En caso de que ningún precandidato(a) alcance la mayoría requerida, se realizará una consulta, cuyo carácter será definido por el Comité Ejecutivo Nacional y que podrá ser en las urnas o mediante el voto electrónico y conforme a la legislación vigente.

***Artículo 14.- Coaliciones y Adhesiones**. El Partido podrá realizar coaliciones o adhesiones electorales con otros partidos y movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos por decisión de la Directiva de la circunscripción territorial respectiva. Estas coaliciones o adhesiones deberán estar dentro del marco de la política de alianzas aprobada por el Congreso Nacional o el Comité Ejecutivo Nacional y deberán contar con la aprobación del organismo inmediatamente superior. La Directiva Territorial respectiva deberá aprobar la coalición o adhesión electoral por mayoría, en una reunión citada para el efecto con al menos ocho (8) días hábiles de anticipación, citación que deberá ser informada a la Secretaría General del Partido. Dichas coaliciones pueden incluir la realización de consultas populares conjuntas con otros grupos, partidos o movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos para escoger un candidato(a) común. Las coaliciones para escoger candidatos o candidatas a la Presidencia y la Vicepresidencia de la República, requieren la aprobación del Congreso Nacional o el Comité Ejecutivo Nacional con la mayoría y el procedimiento señalado en este artículo. El Congreso Nacional podrá delegar la elaboración de la política nacional de alianzas en el Comité Ejecutivo Nacional.*

***Parágrafo 1°.-** Antes de la inscripción del candidato o candidata, la coalición deberá haber determinado los siguientes aspectos: a) mecanismo mediante el cual se efectúa la designación del candidato(a), b) el programa que va a presentar el candidato(a), c) el mecanismo mediante el cual se financiará la campaña, con los aportes de los partidos y movimientos, y cómo se distribuirá entre ellos la reposición estatal de los gastos, d) los sistemas de publicidad y auditoría interna, e) el mecanismo mediante el cual formarán la terna en los casos en que hubiere lugar a reemplazar al elegido, f) determinación de la filiación política del candidato(a), g) partido responsable de la rendición de cuentas y h) porcentajes acordados de la reposición de votos que le corresponderán a cada partido.*

***Parágrafo 2°.** - La suscripción del acuerdo de coalición tiene carácter vinculante para sus integrantes y, por tanto, para todos sus militantes, directivas, candidatos(as), parlamentarios(as), diputados(as), concejales(as), ediles(as) en ejercicio, quienes no podrán apoyar candidato(a) distinto al que fue designado(a) por la coalición. La inobservancia de este precepto, será causal de mala conducta que se sancionará como falta grave conforme a lo preceptuado en el Código de Ética y Garantías y el Régimen Disciplinario.*

***Artículo 15.- Selección de candidaturas a cuerpos colegiados de elección popular.** Para la integración de las listas a cuerpos colegiados de elección popular, la Directiva de la respectiva circunscripción y el Comité Ejecutivo Nacional en el caso del Senado de la República, recurrirá con orden prioritario a los siguientes mecanismos:*

1. Decisión unánime.

2. El acuerdo de la mayoría de la Directiva.

3. Una consulta cuyo carácter será definido por el Comité Ejecutivo Nacional que podrá ser en las urnas o por voto electrónico, conforme a la legislación vigente.

Estos mecanismos no operarán cuando se haya inscrito previamente un número inferior de candidatos o candidatas al total de cargos a proveer. La decisión se tomará en una reunión con quórum decisorio citada para el efecto con al menos ocho (8) días hábiles de anticipación, de lo cual se informará a la Secretaría General del partido. La respectiva Directiva podrá decidir con el procedimiento descrito en el anterior inciso y por mayoría, la presentación de una lista cerrada. Si no lo hiciese, la lista será ordenada por los electores mediante el sistema de voto preferente. En el proceso de selección de candidatos y candidatas al interior del Partido serán respetadas las cuotas de acción afirmativa y se garantizará que en las listas donde se elijan cinco (5) o más curules para corporaciones de elección popular o las que se sometan a consulta, exceptuando su resultado, estén conformadas por un mínimo de treinta por ciento (30%) de mujeres.

***Artículo 16.- Impugnación y solución de conflictos.** La impugnación de las decisiones de las Directivas Territoriales o los conflictos que no puedan resolverse en su seno, se resolverán en la Directiva del siguiente nivel territorial al cual pertenezcan. En todo caso, el Comité Ejecutivo Nacional será la última instancia. Así mismo resolverá los conflictos de competencia que se presenten entre Directivas de diferentes niveles".*

Consideraciones del Consejo Nacional Electoral

Artículos 12 a 16: Los artículos 12 a 16 desarrollan, a juicio de esta Sala, de manera clara y democrática la forma de selección de los candidatos, así como los requisitos mínimos para su postulación a cargos de elección popular.

En ese sentido, la selección de candidaturas a cargos uninominales queda radicada en el Congreso Nacional, o en el Comité Ejecutivo Nacional, cuando aquel no se encuentre reunido. En el caso de Corporaciones Públicas de elección popular, la lista de candidatos será seleccionada por el Comité Ejecutivo Nacional en el caso del Senado de la República y en los demás casos por la respectiva directiva territorial. Así mismo, se establece que las decisiones se tomarán: i) por consenso, ii) por mayoría o por iii) consulta.

Finalmente, en este acápite se regulan las coaliciones y adhesiones.

Concluye entonces la Sala que estas normas han sido desarrolladas en el marco de la autonomía que la Constitución y la Ley otorgan a los partidos y movimientos políticos por lo que deberán ser inscritas en el RUP.

<u>NOVENO EJE TEMÁTICO</u>: RÉGIMEN DISCIPLINARIO INTERNO, EN EL QUE SE ADOPTEN MECANISMOS PARA SANCIONAR LA DOBLE MILITANCIA, ASÍ COMO PARA SEPARAR DEL CARGO A SUS DIRECTIVOS CUANDOQUIERA QUE NO

DESEMPEÑEN SUS FUNCIONES CONFORME A LA CONSTITUCIÓN, LA LEY Y LOS ESTATUTOS. (NÚM. 12º ART. 4º L. 1475 DE 2011)

Estatutos presentados por el partido político Dignidad:

> ***"Artículo 51.- Faltas de las directivas.*** *Constituyen faltas sancionables, las siguientes acciones u omisiones imputables a los directivos del Partido:*
>
> *1. Incumplir los deberes de diligencia en la aplicación de las disposiciones constitucionales o legales que regulan la organización, funcionamiento y/o financiación de los partidos y movimientos políticos.*
>
> *2. Desconocer en forma reiterada, grave e injustificada, la solicitud de alguna instancia u organismo interno.*
>
> *3. Permitir la financiación de la organización y/o la de las campañas electorales, con fuentes de financiación prohibidas.*
>
> *4. Violar o tolerar que se violen los topes o límites de ingresos y gastos de las campañas electorales.*
>
> *5. Inscribir candidaturas a cargos o corporaciones de elección popular que no reúnan los requisitos o calidades, se encuentren incursos en causales objetivas de inhabilidad o incompatibilidad, o hayan sido condenados durante el periodo para el cual resultaren elegidos(as) por delitos.*
>
> *6. Utilizar o permitir el uso de la violencia para el ejercicio de la participación política y electoral.*
>
> *7. Incurrir en actos tipificados como delitos contra los mecanismos de participación democrática, la administración pública, la existencia y seguridad del Estado, el régimen constitucional y legal, delitos de lesa humanidad o relacionados con actividades de grupos armados ilegales o de narcotráfico.*
>
> *8. Cometer delitos contra la administración pública, actos de corrupción, mostrar connivencia con estos y/o, teniendo conocimiento de estas situaciones, no iniciar los procesos correspondientes, o no realizar las denuncias del caso.*
>
> ***Artículo 52.- Sanciones a las directivas.*** *Las directivas que hayan incurrido en cualquiera de las faltas a que se refiere el artículo anterior, y a quienes se les demuestre que no procedieron con el debido cuidado y diligencia en el ejercicio de los derechos y obligaciones que les confieren estos estatutos, estarán sujetos a las sanciones establecidas en los artículos 17 y 18 del Código de Ética del Partido".*
>
> ***Artículo 53.-*** *La destitución o separación del cargo de la directiva, será responsabilidad del Comité Ejecutivo Nacional, para lo cual deberá implementar un procedimiento preferente y sumario".*

Consideraciones del Consejo Nacional Electoral

Artículos 51 a 53: Los artículos 51 a 53 de los Estatutos del Partido **DIGNIDAD** consagran de manera precisa las conductas que se consideran faltas de sus directivas; así como las sanciones aplicables a las mismas con lo que se garantiza el principio de legalidad de las faltas y las sanciones del derecho sancionador.

Igualmente, se establece el órgano competente para imponer la sanción o destitución del cargo de la directiva infractora (Art. 53). En lo no regulado en estos artículos, como la sanción por doble militancia, deberá acudirse al CÓDIGO DE ÉTICA Y GARANTÍAS Y RÉGIMEN DISCIPLINARIO del Partido, estudiado en precedencia.

Concluye entonces la Sala que estas normas han sido desarrolladas en el marco de la autonomía que la Constitución y la Ley otorgan a los partidos y movimientos políticos por lo que deberán ser inscritas en el RUP.

<u>DÉCIMO EJE TEMÁTICO:</u> FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS O MOVIMIENTOS POLÍTICOS, DE LAS CAMPAÑAS Y, EN PARTICULAR, LA FORMA DE RECAUDO DE CONTRIBUCIONES Y DONACIONES, CONTROL AL ORIGEN Y CUANTÍA DE LAS MISMAS, DISTRIBUCIÓN DE LA FINANCIACIÓN ESTATAL, APOYO FINANCIERO A SUS CANDIDATOS, Y PUBLICIDAD DE TODO INGRESO Y GASTO. (NÚM. 13º ART. 4º L. 1475 DE 2011)

PROCEDIMIENTO DE FORMULACIÓN, APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DE SU PROGRAMA Y DE SU PRESUPUESTO (NÚM. 13º ART. 4º L. 1475 DE 2011)

Estatutos presentados por el partido político Dignidad:

CAPÍTULO IX

De las finanzas y del patrimonio del Partido

***Artículo 54.- Fuentes de financiación**. Las fuentes de financiamiento del Partido son:*

1. Las cuotas de la militancia.

2. Las contribuciones, donaciones y créditos, en dinero o en especie, de la militancia y/o de particulares.

3. Los créditos obtenidos en entidades financieras legalmente autorizadas.

4. Las donaciones voluntarias de particulares o de empresas y organizaciones legalmente constituidas.

5. Donaciones internacionales y de partidos hermanos.

6. Los ingresos originados en actos públicos, publicaciones y/o cualquier otra actividad lucrativa del Partido, los rendimientos procedentes de la gestión de su propio patrimonio y los que se obtengan de las actividades que puedan realizar en relación con sus fines específicos.

7. Las herencias o legados que reciban.

8. El valor de bienes e inmuebles y el producto de ellos.

9. La financiación estatal.

10. Un porcentaje de los recursos que por reposición de votos o de gastos de campañas electorales, perciban las candidaturas uninominales e integrantes de

listas a corporaciones públicas. Los candidatos(as) podrán adicionalmente donar al Partido más recursos de la reposición.

11. El patrimonio del Partido está integrado por los bienes muebles e inmuebles y demás activos aportados al Partido conforme a la ley y sus Estatutos.

***Parágrafo 1°.** - De la totalidad de los recursos que ingresen al Partido, se entregará el veinte por ciento (20%) a las Directivas Territoriales legalmente constituidas, salvo las donaciones con destinación específica.*

***Parágrafo 2°.** - Cada militante pagará una cuota anual de sostenimiento equivalente al 5 % del salario mínimo mensual vigente.*

***Artículo 55.-** El porcentaje de los dineros que por reposición de votos se destinará al Partido, de los recursos girados a candidaturas uninominales y listas a corporaciones públicas, es el siguiente: Treinta por ciento (30%) cuando se trate de campañas a la Presidencia de la República, Congreso de La República, Gobernaciones Departamentales, Alcaldía Mayor de Bogotá, Alcaldías de Ciudades Capitales de Departamento y Concejo de Bogotá. Veinticinco por Ciento (20%) cuando se trate de campañas a las Asambleas Departamentales, Alcaldías y Concejos Municipales del resto del país.*

***Parágrafo 1°.** - Cuando se trate de las Consultas Internas del Partido y de las que trata la Ley, realizadas por aprobación del Consejo Nacional Electoral, en cada caso el Comité Ejecutivo Nacional reglamentará la distribución de los recursos de reposición por votos.*

***Parágrafo 2°.** - Si transcurridos dos años contados a partir del día siguiente de la notificación que haga el Partido al candidato(a) para la entrega de los recursos a los que tenga derecho por concepto de reposición, no reclama el giro de los recursos, se entenderá que los entrega al Partido a título de donación.*

***Artículo 56.- Del recaudo de las contribuciones y donaciones**. El recaudo de las contribuciones y donaciones para el funcionamiento del Partido y para las campañas electorales, se hará teniendo en cuenta siempre los siguientes criterios:*

1. Toda donación recibida para funcionamiento o para una campaña electoral, por parte de una persona jurídica, debe estar soportada mediante acta, en la que deberá constar la autorización expresa de la mitad más uno de los miembros de la Junta Directiva o de la Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios, según el caso.

2. Ni las candidatas, ni los candidatos, ni las campañas electorales podrán obtener créditos ni recaudar recursos originados en fuentes de financiación privada, por más del valor total de gastos que se pueden realizar en las respectivas campañas. Tampoco podrá recaudar contribuciones y donaciones individuales superiores al 10% de dicho valor total. La financiación originada en recursos propios, del cónyuge, compañero(a) permanente o parientes en el grado que autoriza la ley, no estará sometida a los límites individuales a que se refiere esta disposición, pero en ningún caso la sumatoria de tales aportes o créditos podrá ser superior al monto total de gastos de la campaña. El valor de los créditos de cualquier origen tampoco estará sometido a límites individuales.

3. Las donaciones que reciba el Partido a nivel nacional o a través de sus coordinadoras territoriales con destino a su funcionamiento, deben provenir de fuentes lícitas. Para la verificación deberán solicitarse sin excepción los soportes que acrediten el origen de los dineros que componen la donación o contribución, los cuales deberán ser validados por el contador(a) nacional del Partido; debiendo el donante autorizar a la Dirección Administrativa del Partido para consultar las diferentes entidades de vigilancia y control. Los documentos serán recopilados por la Coordinadora Territorial beneficiada.

4. Tratándose de campañas electorales, cada candidato o candidata avalada por el Partido, tendrá la responsabilidad de verificar la legalidad de los dineros que donen a su campaña electoral. Los soportes de dichos hechos económicos deben

recopilarse en los términos establecidos por la Auditoría Interna del Partido. Así mismo, las contribuciones particulares a un candidato o candidata determinado(a) deberán ser entregadas al candidato o candidata o a quien gerencia la campaña.

5. Si la cuantía de una donación o contribución destinada bien sea al funcionamiento del Partido o a una campaña electoral, es igual o superior a los 100 S.M.L.V., debe solicitarse autorización escrita del Comité Ejecutivo Nacional, o en su defecto de la Comisión Administrativa y Financiera.

6. Cuando se reciban donaciones o contribuciones a nivel nacional o regional, destinadas específicamente a una campaña electoral, los documentos soportes de la donación o contribución deberán señalar expresamente los datos del candidato(a) beneficiado(a), la corporación o cargo al que aspira, la fecha de la elección, el periodo constitucional en el cual aspira a ser elegido y la cuantía de la misma. Documentos que deberán ir acompañados de la aprobación escrita del candidato(a).

***Parágrafo 1°. -** De conformidad con lo señalado en el artículo 11 de la Resolución No. 330 de 2007, el monto de las contribuciones y donaciones a las campañas electorales no podrá superar la cuantía de las sumas máximas a invertir en la campaña, fijadas por el Consejo Nacional Electoral. El monto máximo de gastos se fijará por cada candidato(a) a cargo uninominal o por lista de candidatos(as) a corporaciones de elección popular. En el caso de listas con voto preferente el monto máximo de gastos por cada uno de los integrantes de la lista será el resultado de dividir el monto máximo de gastos de la lista por el número de candidatos inscritos. El Consejo Nacional Electoral señalará, adicionalmente, el monto máximo que cada Partido o movimiento con personería jurídica puede invertir en la campaña electoral institucional a favor de sus candidatos(as) o listas.*

***Parágrafo 2°.** - Las cuentas bancarias institucionales del Partido a nivel nacional y regional, no estarán habilitadas para recibir consignaciones por concepto de donaciones o contribuciones, excepto que medie autorización expresa de la Comisión Administrativa y Financiera.*

***Artículo 57.- Anticipos a las campañas electorales**. El Comité Ejecutivo Nacional reglamentará los anticipos a las campañas electorales, en cada ocasión en que sean autorizados por el Consejo Nacional Electoral.*

***Artículo 58.- Responsables de la presentación de los informes.** Todos los candidatos (as) avalados (as) por el Partido a cargos uninominales y corporaciones públicas, sus gerentes de campaña y sus respectivos contadores, deberán presentar ante el Partido, dentro de los plazos y términos establecidos por el Comité Ejecutivo Nacional, los informes y las correcciones solicitadas de rendición de cuentas de sus campañas individuales, indistintamente de que hayan sido o no elegidos y que haya o no tenido gastos.*

***Artículo 59.- De las renuencias.** Frente a los candidatos que incumplan con la obligación de rendir cuentas se procederá de la siguiente manera:*

1. La Auditoría Interna del Partido presentará queja formal ante el Comisión Nacional de Ética y Garantías, por incumplimiento de sus deberes como militante en concordancia con el Artículo 9 del presente Estatuto.

2. El Comité Ejecutivo Nacional podrá negarle el aval en futuros procesos electorales.

***Artículo 60. Financiación prohibida.** Se prohíben las siguientes fuentes de financiación:*

1. Las que provengan, directa o indirectamente, de gobiernos o personas naturales o jurídicas extranjeras, excepto las que se realicen a título de cooperación técnica para el desarrollo de actividades distintas a las campañas electorales.

2. Las que se deriven de actividades ilícitas o tengan por objeto financiar fines antidemocráticos o atentatorios del orden público.

3. Las contribuciones o donaciones de personas titulares del derecho real, personal, aparente o presunto, de dominio, respecto de bienes sobre los cuales se hubiere iniciado un proceso de extinción de dominio.

4. Las contribuciones anónimas.

5. Las de personas naturales contra las cuales se hubiere formulado acusación o imputación en un proceso penal por delitos relacionados con la financiación, pertenencia o promoción de grupos armados ilegales, narcotráfico, delitos contra la administración pública, contra los mecanismos de participación democrática y de lesa humanidad.

6. Las que provengan de personas que desempeñan funciones públicas, excepto de los miembros de corporaciones públicas de elección popular, quienes podrán realizar aportes voluntarios a las organizaciones políticas a las que pertenezcan, con destino a la financiación de su funcionamiento y a las campañas electorales en las que participen, de acuerdo con los límites a la financiación privada previstos en el artículo 25 de la Ley 1475 de 2011.

7. Las que provengan de personas naturales o jurídicas cuyos ingresos en el año anterior se hayan originado en más de un cincuenta por ciento de contratos o subsidios estatales; que administren recursos públicos o parafiscales, o que tengan licencias o permisos para explotar monopolios estatales o juegos de suerte y azar.

***Artículo 61.- Destinación de los recursos.** Conforme con lo establecido en el artículo 28 de los presentes estatutos, el presupuesto del Partido será debatido y aprobado por el Comité Ejecutivo Nacional y los recursos provenientes de la financiación estatal se destinarán a financiar las actividades que realicen para el cumplimiento de sus fines y el logro de sus propósitos y, en particular, para las siguientes finalidades, de conformidad con sus planes, programas y proyectos:*

1. Para el funcionamiento de sus estructuras regionales, locales y sectoriales.

2. Para la inclusión efectiva de mujeres, jóvenes y grupos poblacionales, en el proceso político.

3. Para el funcionamiento de los centros y fundaciones de estudio, investigación y capacitación.

4. Para dar apoyo y asistencia a sus bancadas.

5. Para cursos de formación y capacitación política y electoral.

6. Para la divulgación de sus programas y propuestas políticas.

7. Para el ejercicio de mecanismos de democracia interna previstos en sus estatutos.

***Parágrafo 1°. -** En todo caso, para las actividades de sus centros de pensamiento, la realización de cursos de formación y capacitación política y electoral, y para la inclusión efectiva de jóvenes, mujeres y grupos poblaciones en el proceso político, el Partido destinará en su presupuesto anual una suma no inferior al quince por ciento (15%) de los aportes estatales que son asignados por el Consejo Nacional Electoral.*

***Artículo 62.- Rendición pública de cuentas**. Dentro de los primeros cuatro (4) meses de cada año, el Partido presentará ante el Consejo Nacional Electoral declaración de patrimonio, ingresos y gastos, utilizando para ello el formato que para tal efecto disponga esta entidad.*

***Artículo 63.- Publicidad de los Informes.** Los informes consolidados de ingresos y gastos de campaña y los informes anuales de ingresos y gastos de funcionamiento, deberán ser presentados ante el Consejo Nacional Electoral - CNE, en los términos y plazos estipulados por la ley. Adicionalmente, estos informes deberán ser publicados en un diario de amplia circulación, para lo cual se requiere que hayan sido certificados por el CNE, a efectos de publicar las cifras definitivas.*

Dicha publicación se hará dentro del año siguiente a la certificación de los informes y se podrá hacer de manera resumida y agregada.

***Artículo 64.-** El manejo de las finanzas del Partido será responsabilidad del Comité Ejecutivo Nacional, la Comisión Administrativa y Financiera, la Dirección Administrativa y Financiera, el Tesorero y de la Auditoría interna ejercida por una persona profesional en contaduría pública, sujeto a las demás exigencias legales.*

***Artículo 65.-** La Dirección Administrativa y Financiera, elaborará el proyecto de presupuesto anual para la respectiva aprobación de la Comisión Administrativa y Financiera y del Comité Ejecutivo Nacional. Para su adopción será necesaria la aprobación de la mitad más uno de los integrantes de cada organismo de dirección.*

***Artículo 66**.- En cada sesión del Congreso Nacional, la Dirección Administrativa y Financiera rendirá informe de ejecución presupuestal. Igualmente rendirá informe anual al Comité Ejecutivo Nacional, el cual será remitido a las direcciones territoriales y se incluirá en los reportes anuales de rendición de cuentas a los afiliados y afiliadas/y en la rendición pública de cuentas ante el Consejo Nacional Electoral, los primeros cuatro (4) meses de cada año.*

Consideraciones del Consejo Nacional Electoral:

Artículos 54 a 66: El capítulo IX de los Estatutos del Partido DIGNIDAD establece, con apego a lo dispuesto en las leyes 130 de 1994 y 1475 de 2011 las fuentes de financiación del partido (Art. 54); la destinación de los recursos que se obtengan en razón a la reposición por voto válido en materia electoral (Art. 55); la forma de recaudo de contribuciones y donaciones (Art. 56); el manejo de los anticipos para las campañas electorales (Art. 57); la presentación de informes de ingresos y gastos de campaña y su publicidad (Arts. 58, 59 y 63); la financiación prohibida (Art. 60); la destinación de los recursos (Art. 61); la rendición pública de cuentas (Art. 62); el manejo de las finanzas del Partido (Art. 64); la elaboración y aprobación del proyecto de presupuesto anual (Art. 65) y la rendición de informes de ejecución presupuestal (Art. 66).

Ahora bien, el inciso tercero del artículo 55 estatutario dispone que "*Veinticinco por Ciento (20%) cuando se trate de campañas a las Asambleas Departamentales, Alcaldías y Concejos Municipales del resto del país".*

Encuentra la Sala en dicha disposición una antinomia, pues se establece que el veinticinco por ciento y al mismo tiempo el veinte por ciento de los recursos recibidos por reposición de votos serán destinados al partido, sin que se sepa con claridad en que casos se aplicaría uno u otro porcentaje.

Para salvar la contradicción, la Sala considera pertinente aplicar analógicamente lo dispuesto en el artículo 623 del Código de Comercio que establece que "*si el importe del título aparece escrito a la vez en palabras y en cifras, valdrá, en caso de diferencia, la suma*

escrita en palabras". Así las cosas, el inciso tercero del artículo 55 de los Estatutos del Partido dignidad deberá leerse y aplicarse así:

> *"Veinticinco por Ciento (25%) cuando se trate de campañas a las Asambleas Departamentales, Alcaldías y Concejos Municipales del resto del país".*

Por demás, concluye entonces la Sala que estas normas han sido desarrolladas en el marco de la autonomía que la Constitución y la Ley otorgan a los partidos y movimientos políticos por lo que deberán ser inscritas en el RUP.

<u>UNDÉCIMO EJE TEMÁTICO</u>: SISTEMA DE AUDITORÍA INTERNA Y REGLAS PARA LA DESIGNACIÓN DEL AUDITOR, SEÑALANDO LOS MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL ADECUADO MANEJO DE LA FINANCIACIÓN ESTATAL DEL FUNCIONAMIENTO Y DE LAS CAMPAÑAS. (NÚM. 15º ART. 4º L. 1475 DE 2011)

Estatutos presentados por el partido político Dignidad

> ***"CAPÍTULO XII***
>
> ***De la Auditoría Interna del Partido***
>
> ***Artículo 73.- Auditoría Interna.*** *Sin perjuicio de las funciones encomendadas a la Revisoría Fiscal, el Partido contará con un sistema de Auditoría Interna que tendrá la estructura y las funciones que señale el Comité Ejecutivo Nacional y la Ley; en especial las contenidas en la Ley 130 de 1994 y las reglamentaciones expedidas por el Consejo Nacional Electoral.*
>
> ***Parágrafo 1°.*** *- La Auditoría Interna ejercerá el control y seguimiento a los ingresos y gastos de funcionamiento y/o de las campañas electorales en las que participe el Partido. Lo anterior, sin perjuicio de la vigilancia y control de la Auditoría Externa contratada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, para tal fin.*
>
> ***Artículo 74.- Designación y requisitos****. El Sistema de Auditoría Interna del Partido podrá estar a cargo de una persona natural que deberá contar con título en contaduría pública, o de una persona jurídica que tenga dentro de su objeto social la prestación del servicio de auditoría y no podrá formar parte de ninguna instancia de Dirección del Partido.*
>
> *La Comisión Administrativa y Financiera será la encargada de escoger mediante el sistema que establezca para tal fin, a cargo de quien estará el Sistema de Auditoría Interna del Partido".*

Consideraciones del Consejo Nacional Electoral:

Artículos 73 y 74: Considera esta Corporación que los artículos 73 y 74 de los Estatutos del Partido **DIGNIDAD** desarrollan de manera completa lo relacionado con su Sistema de Auditoría; al determinar su órbita de competencia y establecer las reglas para la designación del auditor.

En consecuencia, estas normas de los Estatutos se registrarán en el RUP.

<u>DECIMO SEGUNDO EJE TEMÁTICO:</u> UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS INSTITUCIONALES EN TELEVISIÓN Y EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA EFECTOS DE LA DIVULGACIÓN POLÍTICA Y LA PROPAGANDA ELECTORAL. (NÚM. 16º ART. 4º L. 1475 DE 2011)

Estatutos presentados por el partido político Dignidad:

> ***"Artículo 45.- Secretaría de Comunicaciones**. Tendrá, entre otras, las siguientes funciones:*
>
> *1. Coordinar con la Secretaría General una política de comunicaciones que mantenga informados a los colombianos sobre las actuaciones del partido.*
>
> *2. Coordinar con la Presidencia y la Secretaria General el funcionamiento y la publicación de todos los medios de comunicación (página web, redes sociales, periódico, publicaciones).*
>
> *3. Velar por la implementación de una efectiva política de comunicaciones en todas las Direcciones Territoriales".*

Consideraciones del Consejo Nacional Electoral:

Artículo 45: El artículo 45 de los Estatutos del Partido **DIGNIDAD** establece la autoridad partidaria que coordinará el funcionamiento y publicación en medios de comunicación. Con ello se cumple con lo dispuesto en el numeral 16 del artículo 4 de la Ley 1475 de 2011 por lo que estas normas serán inscritas en el RUP.

<u>DECIMO TERCER EJE TEMÁTICO:</u> REGLAS QUE DESARROLLEN LOS DEBERES A CARGO DE LOS PARTIDOS O MOVIMIENTOS POLÍTICOS (NÚM. 17º ART. 4º L. 1475 DE 2011)

Estatutos presentados por el partido político Dignidad:

> ***"CAPÍTULO II***
>
> ***De los fines del Partido***
>
> ***Artículo 4.- Fines**. Son fines de Dignidad la defensa de la soberanía, la democracia, la producción nacional, la paz y el bienestar de la población.*
>
> ***Artículo 5**.- El Programa para unir a Colombia es la base programática del Partido y sintetiza el mínimo ético y político que identifica a la totalidad de sus integrantes, y es de obligatorio cumplimiento. En Dignidad serán garantizadas las distintas expresiones, en particular las de las minorías. Las actuaciones del Partido se regirán por los principios de transparencia, moralidad, igualdad, participación, pluralismo, equidad, objetividad, responsabilidad y democracia.*

CAPÍTULO III

De los principios del Partido

***Artículo 6**.- Los principios del Partido son:*

1. Participación. Entiéndase por el derecho de todo(a) afiliado (a) a intervenir, directamente o a través de sus representantes, en la adopción de las decisiones fundamentales del Partido o movimiento, en el máximo órgano de dirección y en las demás instancias de gobierno, administración y control, así como los derechos de elegir y ser elegido(a) en todo proceso de designación o escogencia de sus directivos(as) y de sus candidatos(as) a cargos y corporaciones de elección popular.

2. Igualdad. Se entiende por igualdad la exclusión de toda discriminación o privilegio por razones ideológicas, económicas, sociales, de sexo, o de raza, en los procesos de participación en la vida del Partido. Estatutos Dignidad

3. Pluralismo. El pluralismo implica el deber de garantizar las expresiones de las minorías, razón por la que los presentes estatutos incluyen normas sobre quórum y mayorías para la toma de decisiones en materia de organización, funcionamiento y de participación de su militancia.

4. Equidad e igualdad de género. En virtud del principio de equidad e igualdad de género, los hombres, las mujeres y las demás opciones sexuales gozarán de igualdad real de derechos y oportunidades para participar en las actividades políticas, dirigir los organismos partidarios, acceder a los debates electorales y obtener representación política.

5. Transparencia. Es deber del Partido informar a la militancia sobre las actividades políticas, administrativas y financieras.

6. Moralidad. Quienes militen en el Partido desarrollarán su actividad de conformidad con las normas de comportamiento adoptadas en el Código de Ética y Garantías del Partido".

Artículos 4 a 6: Los artículo 4 a 6 de los Estatutos del Partido **DIGNIDAD,** establecen los fines del mismo (Art. 4), introducen el "Programa para unir a Colombia como la base programática del Partido"(Art. 5) y consagra los principios del Partido (Art. 6).

Las anteriores normas se desarrollan dentro del marco constitucional y legal vigente por lo que serán incorporadas en el RUP. El "Programa para unir a Colombia", será analizado con posterioridad.

<u>DECIMO CUARTO EJE TEMÁTICO:</u> REGLAS DE DISOLUCIÓN, FUSIÓN CON OTROS PARTIDOS O MOVIMIENTOS POLÍTICOS, O ESCISIÓN Y LIQUIDACIÓN. (NÚM. 18º ART. 4º L. 1475 DE 2011)

Estatutos presentados por el partido político Dignidad:

"CAPÍTULO XVII

De las reglas de disolución, fusión, escisión y liquidación

> ***Artículo 88.**- Los eventuales procesos de disolución y liquidación del Partido se regularán por las normas previstas en la ley civil para la disolución y liquidación de las personas jurídicas sin ánimo de lucro o en la resolución de reglamentación del presente artículo, la cual se entenderá parte integral de los estatutos.*
>
> ***Artículo 89**.- En caso de presentarse la liquidación del Partido, el Comité Ejecutivo Nacional procederá a nombrar el liquidador, para lo cual fijará mediante resolución las funciones que deba asumir como tal.*
>
> ***Artículo 90.-** En caso de liquidación, los remanentes de los activos patrimoniales del Partido que resulten de dicho proceso, serán destinados a un objeto análogo al del Partido, conforme a decisión adoptada para tal fin por el Comité Ejecutivo Nacional o en caso contrario pasará al Fondo de Financiación de Partidos del CNE.*
>
> ***Artículo 91.-** La decisión sobre disolución, fusión, escisión y liquidación del Partido será de competencia del Congreso Nacional".*

Consideraciones del Consejo Nacional Electoral

Artículos 88 a 91: Los artículos 88 a 91 de los Estatutos del Partido político **DIGNIDAD** desarrollan las reglas sobre disolución, fusión escisión y liquidación del partido, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 18 del artículo 4º de la Ley 1475 de 2011.

Aunque no se trata de una regulación prolija, si establece las bases mínimas sobre las cuales se llevaran estos procedimientos en los casos en los que haya lugar a ellos, por lo que dichas normas serán inscritas en el RUP.

<u>DECIMO QUINTO EJE TEMÁTICO</u>: ESTATUTO DE OPOSICIÓN – LEY 1909 DE 2018

Estatutos presentados por el Partido DIGNIDAD:

> ***Artículo 27.- Funciones del Comité Ejecutivo Nacional**. Son funciones del Comité Ejecutivo Nacional, las siguientes:*
>
> *(…)*
>
> *26. El Comité Ejecutivo Nacional del Partido será la instancia para declarar la oposición, independencia o participación en el Gobierno Nacional y mediante resolución podrá delegar a las directivas regionales para tomar la misma decisión en los departamentos, distritos y municipios. Declaración que se hará en los términos que estipula el Estatuto de la Oposición Política, ley 1909 de 2018".*

Consideraciones del Consejo Nacional Electoral:

Artículo 27: Por medio de la Ley 1909 de 2018 se establecieron las normas generales para el ejercicio y protección del derecho fundamental de oposición de las organizaciones

políticas y también se consagraron algunos derechos a favor de las organizaciones que se declaren en independencia al gobierno.

De esa manera, un derecho-deber, que tienen las organizaciones políticas, es decir, aquellas que cuentan con personería jurídica reconocida por el Consejo Nacional Electoral es el de declarar su oposición, independencia o apoyo al gobierno Nacional y territorial correspondiente (Art. 6 L. 1909 de 2018).

Ahora bien, el artículo 8º de la Ley 1909 de 2018 dispone lo relacionado con la autoridad partidaria competente para efectuar la declaración política así:

> *"Artículo 8°. Competencia para efectuar la declaración política. En el caso de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, la declaración política o su modificación se adoptará, en cada nivel territorial, de conformidad con lo establecido en sus estatutos.*
>
> *Parágrafo transitorio. Las organizaciones políticas deberán modificar sus estatutos y definir el mecanismo o autoridades competentes para realizar la declaración política antes del veinte (20) de julio de 2018".*

De lo expuesto, se colige que los Estatutos de las organizaciones políticas deben indicar con claridad cuál es la autoridad competente para realizar las declaraciones políticas al gobierno Nacional y a los gobiernos territoriales en donde tengan representación a través de los cargos de elección popular.

Relacionado con lo anterior, el artículo 10º de la Ley 1909 de 2018 establece que:

> *"Artículo 10. Representación de las organizaciones políticas para el ejercicio y protección de los derechos de oposición e independientes. Para el ejercicio de los derechos derivados de la declaración de oposición e independencia, y para activar los mecanismos de protección, se tendrán como representantes de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, a las autoridades, territoriales y nacionales que definan sus estatutos".*

Dicha norma permite inferir que en los Estatutos de las organizaciones políticas debe también establecerse cuál es la autoridad partidaria legitimada para ejercer los derechos contenidos en la Ley 1909 de 2018 y en su momento, incoar la acción de protección contenida en el artículo 28 de la misma.

En el caso concreto, se advierte que de conformidad con el artículo 27 de los Estatutos del partido DIGNIDAD, el Comité Ejecutivo Nacional es la autoridad partidaria competente para efectuar la declaración política; función que puede delegarse a las directivas territoriales cuando se trate de declaraciones en el respectivo nivel territorial.

Ahora bien, aunque no se estipule expresamente cuál es la autoridad competente para ejercer los derechos contenidos en la Ley 1909 de 2018 ni para incoar la acción de protección contenida en el artículo 28 *ejusdem*, una interpretación sistemática de los

Estatutos del Partido Dignidad, permiten concluir que es el mismo Comité Ejecutivo Nacional o a la directiva que este delegue quien tiene la legitimación por activa para los efectos del artículo 10 de la Ley 1909 de 2018. Enseña el brocárdico latino que "*qui potest plus, potest minus",* lo que implica que si el Comité Ejecutivo Nacional tiene la capacidad para realizar la declaración política a nivel nacional para constituir al partido en independencia u oposición, entonces también cuenta con la facultad para ejercer los derechos derivados de tal estatus, así como incoar la acción de protección contenida en el artículo 28 de la Ley 1909 de 2018.

En conclusión, se registrará el numeral 26 de los Estatutos del Partido Político DIGNIDAD, entendiendo que la representación de que trata el artículo 10º de la Ley 1909 de 2018 recae igualmente en el Comité Ejecutivo Nacional de la colectividad.

DÉCIMO SEXTO EJE TEMÁTICO: OTROS CONTENIDOS

Estatutos presentados por el partido político Dignidad:

> *"**Artículo 3.- Definición**. DIGNIDAD es un Partido democrático, civilista, pluralista, multicultural y pluriétnico, comprometido con la soberanía nacional, la defensa de la producción nacional, la integración latinoamericana y del Caribe, la paz, la democracia política, económica y cultural, y el bienestar de la población.*
>
> *(…)*
>
> ***CAPÍTULO VIII***
>
> ***De la organización territorial***
>
> ***Artículo 46.- De la estructura del Partido**. La estructura esencial del Partido son los Comités que se organizarán de acuerdo con el territorio, los sectores de producción o los lugares de trabajo.*
>
> ***Artículo 47.- Directivas Territoriales**. Existirán Directivas de Corregimiento, de Comuna, Localidad o Zona, de Municipio o Distrito y de Departamento. Esas Directivas serán elegidas por el voto de la militancia. Dichas directivas serán plurales y en su composición respetarán los siguientes mínimos: 30% de mujeres, 20% jóvenes y 10% de sectores poblacionales, allí donde existan. Sesionarán válidamente por lo menos con la mitad más uno de sus miembros y tomarán decisiones por mayoría simple. En temas de alto interés público, para la toma de decisiones se podrá convocar a los militantes.*
>
> *Estas Directivas Departamentales y del Distrito Capital, impulsarán la realización de asambleas municipales, zonales, de localidades, veredales y de comunas para elegir la respectiva coordinación de su territorio, para lo cual contarán con un término de cuatro (4) meses.*
>
> ***Parágrafo 1°.** - Las Directivas Territoriales contarán con un Comité Ejecutivo, Presidencia, Secretaría y Tesorería, conforme a la reglamentación que expida el Comité Ejecutivo Nacional. Las Directivas podrán organizar comisiones permanentes para su funcionamiento.*
>
> ***Parágrafo 2°. -** Los diputados(as), concejales(as) y ediles(as) harán parte de las Directivas de su respectiva circunscripción territorial.*
>
> ***Artículo 48.- Funciones de las Directivas Territoriales**. Las Directivas Territoriales tendrán, entre otras, las siguientes funciones:*

1. Orientar la actividad política en su respectiva circunscripción, conforme a las directrices trazadas por el Congreso Nacional, la Junta Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional.

2. Convocar y presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias de las Asamblea Regionales de su respectiva circunscripción territorial, de acuerdo con las reglamentaciones expedidas por el Comité Ejecutivo Nacional para tal fin.

3. Desarrollar las políticas definidas por el Congreso Nacional y su Comité Ejecutivo Nacional.

4. Rendir informe de su gestión al Comité Ejecutivo Nacional.

5. Elegir los cargos dignatarios de su respectiva directiva.

6. Coordinar el sistema de afiliación en la respectiva circunscripción territorial.

7. Elaborar las listas únicas para las corporaciones públicas de elección popular de su respectiva circunscripción, conforme con los procedimientos establecidos en los presentes estatutos o con la reglamentación expedida por el Comité Ejecutivo Nacional.

8. Aprobar la distribución de los recursos girados por el Partido conforme con las normas legales vigentes y con las disposiciones internas.

9. Darse su propio reglamento.

10. Las demás consagradas en los presentes estatutos y las establecidas por el Comité Ejecutivo Nacional.

***Parágrafo 1°. -** En caso de ingreso de un nuevo sector o movimiento al Partido, la Directiva de la respectiva circunscripción podrá asignarle una representación con voz y voto en el seno de este organismo.*

***Artículo 49.- Asambleas**. Toda la militancia, por convocatoria de la Directiva respectiva, podrá participar libremente con voz y voto en las asambleas locales o sectoriales que constituirán cuerpos políticos deliberativos y decisorios en su ámbito propio.*

El funcionamiento de dichas asambleas será reglamentado por el Comité Ejecutivo Nacional.

***Artículo 50.-** Las decisiones adoptadas por los diferentes organismos de dirección del Partido, podrán ser impugnadas ante el organismo inmediatamente superior dentro de los quince (15) días siguientes.*

(…)

CAPÍTULO XV

De la participación política de los y las jóvenes

***Artículo 82.- Juventud**. El Partido garantizará a las personas jóvenes su participación efectiva promoviendo y garantizando la presencia de esta población en las diferentes instancias y procesos del mismo, así como el reconocimiento de una Organización Nacional Juvenil del Partido, en el marco de sus Estatutos. Se consideran jóvenes las personas entre dieciséis (16) y treinta (30) años de edad.*

El Partido generará espacios atractivos para los menores de dieciséis (16) años y diseñará procesos de formación y participación para las diferentes etapas de la vida y el ejercicio político.

***Artículo 83.- Denominación**. La Organización Nacional Juvenil del Partido se denomina: DIGNIDAD JOVEN.*

***Artículo 84.- Estructura**. El Partido se dará su propia reglamentación y determinará su estructura interna en el marco del Programa y de los Estatutos del*

Partido, respetando y acatando las directrices y reglamentaciones emanadas del Comité Ejecutivo Nacional, la cual hará parte integral de estos Estatutos.

La DIGNIDAD JOVEN se reunirá en Congreso Nacional cada dos (2) años, en el marco del Congreso Nacional del Partido, previa convocatoria efectuada para tal fin por la Coordinadora Nacional Joven y el Comité Ejecutivo Nacional.

CAPÍTULO XVI

De la participación política de las personas de los sectores LGBTI

***Artículo 85.**- El Partido garantizará a las personas de los sectores LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas e intersexuales), su participación efectiva promoviendo y garantizando la presencia de estos sectores en las diferentes instancias y procesos del mismo, así como el reconocimiento de una Organización Nacional LGBTI del Partido, en el marco de sus Estatutos.*

***Artículo 86.- Denominación.** La Organización Nacional de los sectores LGBTI se denomina DIGNIDAD DIVERSA.*

***Artículo 87.- Estructura.** DIGNIDAD DIVERSA se organizará a partir de direcciones territoriales, en los departamentos donde existan condiciones de conformarse. Para su constitución, se realizarán asambleas territoriales con el acompañamiento de la respectiva directiva territorial, donde se definirá su forma de funcionamiento. Su coordinación política nacional estará a cargo de la Secretaría LGBTI, la cual estará compuesta por un (1) delegado o delegada de cada dirección territorial y las personas de los sectores LGBTI que conforman las instancias de dirección nacional.*

DIGNIDAD DIVERSA se reunirá en el Congreso Nacional cada dos (2) años, en el marco del Congreso Nacional del Partido, previa convocatoria efectuada para tal fin por la Secretaría LGBTI, en coordinación con el Comité Ejecutivo Nacional.

(…)

CAPÍTULO XVIII

Disposiciones finales

***Artículo 92.-** El Partido tendrá una duración indefinida y su domicilio principal será la ciudad de Bogotá D.C.*

***Artículo 93**.- Los presentes Estatutos entran a regir a partir de su aprobación".*

Consideraciones del Consejo Nacional Electoral

Artículos 3, 46 a 50, 82 a 87, 92 y 93: Encuentra esta Corporación que en los artículos 3, 46 a 50, 82 a 86, 92 y 93 desarrollan tópicos adicionales a los contenidos en el artículo 4 de la Ley 1475 de 2011. En ese sentido, se trata de normas que establecen la definición del partido (Art. 3), su estructura y organización territorial (Arts. 46 a 50); la participación de los jóvenes (Arts. 82 a 84); la participación de las comunidades de homosexuales, bisexuales y otras opciones sexuales (Arts. 85 y 87); la sede y duración del partido (Art. 92).

Ahora bien, respecto de la definición de JOVEN, contenida en el artículo 82, deberá estarse a lo dispuesto en las consideraciones efectuadas para el artículo 11, por lo que la

consideración de una persona como joven, de conformidad con lo establecido en la ley 1622 de 2013 se hará a partir de los 14 años y no a los 16 y hasta los 28 años.

Finalmente, considera esta Colegiatura que las anteriores normas se desarrollan dentro del marco constitucional y legal vigente por lo que serán incorporadas en el RUP.

4.5.5. Licitud de la plataforma ideológica y programática del partido político DIGNIDAD.

El parágrafo del artículo 3º de la Ley 1475 de 2011establece que la solicitud de reconocimiento de personería jurídica de un partido o movimiento político debe ir acompañada, entre otros, de su plataforma ideológica y programática. Así mismo, el inciso primero del artículo *ejusdem* dispone que la plataforma ideológica o programática deberá ser inscrita en el Registro Único de Partidos y Movimientos Político, previa verificación del cumplimiento de los principios y reglas de organización contenidos en la Constitución y la Ley. Así bien, a continuación, se transcribe la plataforma programática del partido político **DIGNIDAD:**

"PROGRAMA PARA UNIR A COLOMBIA

Colombia unida por la soberanía y la democracia

La crisis económica, social y política que impide que Colombia se desarrolle como una nación próspera debe ser resuelta a partir de un gran pacto nacional para fortalecer el trabajo y la producción colombiana.

Contenido

1. Soberanía y relaciones internacionales

2. Democracia y paz

3. Democracia económica

4. Derechos universales

Soberanía nacional y relaciones internacionales

Colombia debe ser una país soberano e independiente frente a cualquier centro de poder extranjero. Por lo que rechazamos la injerencia de cualquier país en nuestros asuntos internos, tales como la política económica y modelo de desarrollo, la forma de gobierno y los asuntos de defensa y relaciones exteriores.

Promovemos la construcción de un nuevo orden mundial, basado en la soberanía de las naciones, la protección y respeto del derecho a la autodeterminación y la solidaridad entre naciones, como consagra el primer artículo de la Carta de la ONU. Promovemos y defendemos las relaciones diplomáticas, comerciales y culturales con todos los países del mundo, en condiciones de igualdad y beneficio recíproco. Por lo anterior, rechazamos el neocolonialismo y el unilateralismo de cualquier potencia para sancionar, someter y saquear los países que no se someten a sus designios.

Exigimos la salida de las tropas estadounidenses del territorio nacional. Defendemos los derechos humanos, el Derecho Internacional Humanitario y apoyamos los pactos internacionales que los consagran. Trabajaremos por el mejoramiento económico y legal y por la unidad y la dignificación de los colombianos que viven en el exterior; porque se les facilite su debida participación en la institucionalidad colombiana y para crear las condiciones necesarias para su regreso a la Patria.

Democracia y paz

Promoveremos una verdadera democracia política y social en Colombia. Abogamos por la garantía y respeto de los derechos de las personas a ejercer y promover sus ideas políticas en el marco de un Estado democrático y pluralista. Rechazamos el uso de la violencia y el terrorismo para resolver los conflictos políticos, económicos o sociales.

Impulsaremos la concreción de una Organización Electoral democrática y transparente que proscriba las prácticas corruptas y violentas. Lucharemos contra cualquier forma de corrupción, clientelismo y saqueo de los recursos públicos. Pugnaremos por la debida financiación estatal de las campañas para garantizar condiciones de igualdad. Defendemos y respetamos los derechos de la oposición a diferir en los escenarios legislativos y públicos, a su debida y oportuna financiación y a su representación en la Organización Electoral, y en el acceso a los medios de comunicación.

Promovemos y defendemos los acuerdos de paz y conminaremos al cumplimiento de lo pactado entre las partes y con las víctimas del conflicto. Promoveremos la solución política negociada del conflicto armado. Defendemos los derechos de las víctimas para acceder a la tierra, la seguridad y el respaldo para concretar su retorno y alcanzar desarrollo económico y social. Reconocemos la diversidad y complejidad de las realidades económicas, sociales y culturales de las poblaciones en todo el territorio nacional, particularmente las de las comunidades indígenas y afro colombianas, por lo que hacemos un llamado a la unidad e integridad territorial a partir de la efectiva presencia del Estado.

Abogamos por la independencia y adecuada financiación de la administración de justicia, por el acatamiento al ordenamiento jurídico nacional y a los fallos judiciales. Promoveremos una profunda reforma a la justicia que garantice un servicio pronto, eficaz, universal y gratuito a toda la ciudadanía, especialmente dirigida a resolver los conflictos de las personas menos favorecidas. Protegeremos la acción de tutela y promoveremos su fortalecimiento en defensa de los derechos ciudadanos.

Rechazamos y combatimos cualquier forma de discriminación en razón de sexo, raza, orientación sexual, género, etnia, discapacidad o condición social y abogamos por el respeto de la diversidad. Defendemos y promovemos las libertades sindicales, el derecho de asociación y la garantía a la protesta social y pacífica. Trabajaremos para que todos los partidos, movimientos y organizaciones sociales y políticas puedan participar con plenas garantías en todos los escenarios de la vida pública.

Democracia económica

En medio de la más grave crisis económica de la historia mundial señalamos la necesidad de la intervención del Estado y el aumento del gasto público. Impulsaremos medidas que defiendan y fortalezcan el aparato productivo nacional a partír de un modelo de desarrollo de economía mixta, en el que se respete la propiedad privada y se promueva el crecimiento económico y la generación de riqueza dentro de la sostenibilidad ambiental y cultural, y dirigido a eliminar las desigualdades.

Promovemos la producción industrial, manufacturera, artesanal, agropecuaria, forestal y acuícola y la prestación de servicios por parte de los colombianos a partir de políticas de compras públicas, la sustitución de importaciones, la renegociación de los TLC cuya ejecución ha dejado un balance negativo, la promoción de exportaciones con valor agregado, un sistema tributario progresivo y facilitar créditos blandos y subsidiados. También promovemos la mejora de las condiciones en las que se prestan los servicios públicos empresariales. El Estado jugará un papel regulador y no renunciará a la propiedad y gestión directa de los servicios públicos básicos y de sectores estratégicos. Serán suspendidas las privatizaciones

Promoveremos que el sector financiero se ponga al servicio del país. Se hará una reforma financiera que garantice que el ahorro del público se transfiera realmente a la producción y que el crédito se entregue con intereses adecuados a un mayor número de colombianos Serán reconocidas las múltiples formas de producir, distribuir y consumir en Colombia, no se propiciarán prácticas monopólicas.

Llevaremos a cabo una política agraria que garantice la soberanía y la seguridad alimentaria basada en el desarrollo y complementación de la producción campesina, indígena, cooperativa y empresarial. Estimularemos el acceso democrático a las tierras productivas. Se protegerá la producción rural con la transferencia tecnológica y la asistencia técnica y la disminución de las rentas financieras e inmobiliarias. Se legislará con la finalidad de restringir el arriendo, concesión y venta de tierras a monopolios y gobiernos extranjeros.

Se recuperarán la soberanía y la autonomía en el manejo del endeudamiento público, la banca central, la hacienda pública, el control de cambios y la fijación de aranceles. Lucharemos contra los impuestos injustos que afectan el consumo y la canasta familiar y contra los privilegios tributarios de los grandes monopolios nacionales y extranjeros. Se castigará a los evasores, los contrabandistas, los especuladores y los defraudadores de los recursos y bienes del Estado.

Derechos universales

Buscaremos la universalización de los derechos políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales, en pro del bienestar para la población, dedicando los mayores esfuerzos a sentar las bases para construir una Colombia social e integralmente justa.

Se hará una reforma laboral democrática que restituya los derechos conculcados a los trabajadores, fundamentalmente mediante el restablecimiento de los contratos laborales y la eliminación de formas precarias de contratación. Aumentaremos los sueldos y los salarios, según las ganancias reales de las empresas estatales y privadas, de tal manera que se eleve la capacidad adquisitiva de la población a la vez que se protege la producción nacional. El empleo digno se convierte en un requisito para hacer de Colombia un país donde se produzca riqueza.

Trabajaremos por un modelo de salud que garantice la prevención y promoción, donde prime el derecho y no el lucro. Promoveremos una educación pública, gratuita y de alta calidad en todos los niveles, financiada y administrada por el Estado. Promoveremos la ciencia, la investigación y el desarrollo tecnológico con adecuada financiación como elementos fundamentales para el desarrollo industrial, agropecuario y cultural de nuestro país. Trabajaremos a nivel nacional e internacional por la protección del ambiente. Con alto rigor científico y técnico implementaremos medidas para la protección de los ecosistemas, la conservación de la biodiversidad, la mitigación del cambio climático y la deforestación, entre otros problemas ambientales.

Haremos una reforma integral al régimen de servicios públicos domiciliarios, de acuerdo con los principios de equidad social, redistribución del ingreso, solidaridad,

defensa y fortalecimiento del patrimonio público en el marco de la función social del Estado.

El Estado reconocerá y protegerá la diversidad natural, étnica y cultural de la nación colombiana y pondrá en marcha una ambiciosa política contra el racismo y la discriminación. Pugnaremos por la equidad de género y la garantía de las reivindicaciones democráticas de las mujeres, así como por la eliminación de todo tipo de violencias. Defenderemos también las demandas democráticas de la diversidad sexual, las etnias, la edad y las razas.

Defendemos y promovemos la cultura nacional y la reivindicación de nuestra historia, expresiones e identidad. La adecuada financiación y promoción de la formación y expresión artística debe ser una responsabilidad del gobierno nacional en articulación con los entes territoriales.

Política de drogas

Promoveremos una política nacional de lucha contra el tráfico de narcóticos. Actuaremos de común acuerdo con otros países y en los diversos organismos multilaterales, para buscar soluciones conjuntas y de fondo al problema del narcotráfico, en especial contra las drogas duras, el lavado de activos y sus delitos asociados. Concebimos el consumo como una problemática de salud pública que debe abordar la prevención, la reducción de riesgos asociados al consumo y la asistencia a la drogodependencia. No criminalizaremos el consumo, ni el cultivo de plantas usadas para la producción de narcóticos. Promoveremos la creación de alternativas de desarrollo económico sostenible para la sustitución de cultivos y la reconstrucción del tejido social en las regiones cultivadoras".

Sobre el particular, advierte la Corporación que la plataforma programática del partido **DIGNIDAD,** se ha desarrollado en el marco de la Constitución política de 1991 y está amparada en los derechos fundamentales a la libertad de pensamiento, expresión y asociación, entre otros, por lo que será inscrita en el RUP.

4.5.6. Sobre la designación de los directivos del Partido Político DIGNIDAD

El artículo 9º de la ley 1475 de 2011 dispone que los directivos de un partido político son aquellos que de acuerdo con sus estatutos están designados para dirigirlos y para integrar sus órganos de gobierno, administración y control. A su turno, corresponde al Consejo Nacional Electoral inscribir la designación y remoción de los Directivos de los partidos y movimientos políticos (Art. 3 L. 1475 de 2011), acto a partir del cual su nominación se hace oponible a terceros. En el caso concreto, en reunión del 27 de octubre de 2020, fecha de creación del partido político **DIGNIDAD**, se aprobó la designación de los siguientes directivos:

Cargo	Principal	Suplente
Presidencia	Leonídas Gómez Gomez c.c. 13.804.037	
Vicepresidencia	Alba Luz Pinilla c.c. 63.286.342	

Secretaría General	Gustavo Rubén Triana Suárez c.c. 91.010.232	
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL		
Secretaría de la Mujer	Clara Cecilia Giraldo Puerta c.c. 32.108.629	Victoria Avendaño c.c. 49.734.685
Secretaría de la Juventud	Alejandra Sánchez Zuluaga c.c. 1.032.497.685	Jonathan Smit Morera Linares c.c. 1.031.156.231
Secretaría LGBTI	Róbinson Sánchez c.c. 71.373.896	Stefanía Mancilla c.c. 1.033.765.515
Secretaría de Organizaciones sociales	Elías Fonseca Cortina c.c. 18.913.174	Jennifer Pedraza c.c. 1.010.227.070
Secretaría de Comunicaciones	Catalina Nava Farfán c.c. 1.032.443.685	Carlos Mario Acero Castellanos c.c.1.032.456.625
Secretaría de Formación	Offir Giovana Angarita Alonso c.c. 52.262.728	Francisco Valderrama Mutis c.c. 17.114.137
Secretaría de Afrocolombianos	Jhonson Torres Ortiz c.c. 10.474.315	Luis Carlos Fuentes c.c. 9.065.081
Secretaría de asuntos indígenas	Jazmin Romero Epiayu c.c. 22.647.780	Arlen Yangana c.c. 1.061.747.808
Secretaría de relaciones internacionales	Enrique Daza Gamba c.c. 19.145.744	Jaime Moreno García c.c. 17.075.052
Secretaría de Asuntos Ambientales	Michel Maya c.c. 80.226.039	Luis Alejandro Pedraza c.c. 4.111.902
Miembro del Comité Ejecutivo Nacional	Javier Criales c.c. 16.675.612	Luis Eduardo Peláez c.c.1.039.684.639
Miembro del Comité Ejecutivo Nacional	Jorge Enrique Robledo Castillo c.c. 14.204.889	Carlos Naranjo Ossa c.c. 4.506.027
Miembro del Comité Ejecutivo Nacional	Jorge Gómez Gallego c.c. 8.426.821	Felipe Arango Posada c.c. 19.202.640
Miembro del Comité Ejecutivo Nacional.	Manuel José Sarmiento Argüello c.c. 80.873.444	Sara Sofía Abril c.c.1.026.274.482
COMISIÓN DE ÉTICA		
Miembro de la Comisión de Ética	Ramón Antonio Paba Rozo c.c. 88.140.337	
Miembro de la Comisión de Ética	Sebastián Galeano Vallejo 1.032.389.700	
Miembro de la	Marlene Acero	

Comisión de Ética	Rico c.c. 51.743.786	
Miembro de la Comisión de Ética	María Camila Jiménez Cabanza c.c. 1.098.737.116	
Miembro de la Comisión de Ética	Ángela Fernanda Cruz c.c. 1.032.466.214	
Veedora Nacional		
María E. Botero c.c. 25.099.047		

De acuerdo con lo expuesto y con lo dispuesto en los artículos 32 a 34 de los Estatutos del Partido Dignidad esta Corporación inscribirá los nombramientos de los cargos de Presidente, Vicepresidente y Secretario General del Partido Dignidad.

Ahora bien, en cuanto hace al Comité Ejecutivo Nacional, el artículo 18 de los Estatutos establece lo siguiente:

> ***"Artículo 18.- Organismos de dirección del Partido a nivel nacional.*** *Los organismos de dirección del Partido a nivel nacional son los siguientes:*
>
> *1. Congreso Nacional.*
>
> *2. Junta Nacional.*
>
> *3. Comité Ejecutivo Nacional.*
>
> *Para garantizar la elección de las mujeres, jóvenes y personas de los grupos poblaciones afrodescendientes, indígenas y de libre opción sexual, se mantendrán por lo menos las siguientes proporciones:*
>
> *1. Treinta por ciento (30%) mujeres.*
>
> *2. Veinte por ciento (20%) jóvenes.*
>
> *3. Diez por ciento (10%) para los grupos poblacionales (afrodescendientes, indígenas, LGTBI, que se distribuirá en partes iguales para cada uno).*
>
> *(…)"*

Así bien, observa la Sala que en el caso concreto, se cumple lo dispuesto en los artículos 18 y 26 de los estatutos, en tanto que de treintaiún cargos que conforman el Comité Ejecutivo Nacional doce están ocupados por mujeres. Es decir, que el 39 por ciento del Comité Ejecutivo Nacional está representado por mujeres, por lo que se supera el porcentaje mínimo estatutario establecido de treinta por ciento.

Igualmente, advierte esta Corporación que se cumple con el porcentaje establecido estatutariamente para las juventudes, en tanto que seis de los treintaiún miembros del Comité Ejecutivo Nacional tienen entre 14 y 28 años, lo que significa que el diecinueve coma tres por ciento de los cargos está ocupado por jóvenes. En ese sentido, el inciso segundo del artículo 18 de los Estatutos de **DIGNIDAD** establecen que:

> *La garantía de las cuotas de discriminación positiva para mujeres, jóvenes y grupos poblacionales, se interpretará de modo que los cupos de cada grupo en las listas, se calculen por el método de redondeo aproximando al entero inferior, cuando la fracción resultante de multiplicar el número de cargos a proveer por el porcentaje correspondiente sea menos que cero cinco (0.5) y al entero superior cuando la fracción sea mayor o igual a cero cinco (0.5). Esta norma regirá, asimismo, para todos los casos de elección por listas en el Partido.*

Así las cosas, aplicando la anterior regla, se tiene que la multiplicación del número de cargos (31) por el decimal que representa el porcentaje de participación juvenil (0,2), da como resultado 6,2. En consecuencia, al ser el decimal inferior a 0,5, el número de jóvenes que deben integrar el Comité Ejecutivo Nacional es de 6.

Finalmente, se cumple con el diez por ciento establecido para los grupos poblacionales, en tanto que seis de los treintaiún cargos del Comité Ejecutivo Nacional (10%) están ocupados por un representante y su suplente de la población afrodescendiente, otro de la indígena y otro de los LGBTI.

Corolario de lo Expuesto, se inscribirán en el Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos - RUP los nombramientos efectuados en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido **DIGNIDAD.**

En relación con la conformación de la COMISIÓN DE ÉTICA del partido **DIGNIDAD**, esta Corporación advierte que se cumple lo dispuesto en el artículo 68 de los Estatutos, por lo que tales nombramientos serán inscritos en el RUP.

Respecto del nombramiento de la Veedora Nacional, esta Colegiatura evidencia que se cumple lo dispuesto en el artículo 71 de los Estatutos del partido **DIGNIDAD**, por lo que deberá ser inscrito en el RUP.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 18 de los Estatutos del partido, el Congreso Nacional, la Junta Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional son los órganos de Dirección del partido a Nivel Nacional. A su turno, siguiendo lo establecido en los artículos 73 y 75 de los Estatutos, el Auditor Interno y la Revisoría Fiscal son órganos de control del partido. Concordante con ello, el artículo 9º de la Ley 1475 de 2011 dispuso: "*entiéndase por directivos de los partidos y movimientos políticos aquellas personas que, de acuerdo con los estatutos de la organización, hayan sido inscritas ante el Consejo Nacional Electoral como designados para dirigirlos para integrar sus órganos de gobierno, administración y control".*

Entonces, esta Corporación instará al partido **DIGNIDAD** para que allegue a la Corporación, en el término de quince días hábiles la designación de los cargos de la Junta Nacional, del Congreso Nacional, del Auditor Interno y de la Revisoría Fiscal, para ser inscritos en el

REGISTRO ÚNICO DE PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS – RUP, de conformidad con el artículo 9º de la Ley 1475 de 2011.

4.5.7. Sobre la lista de afiliados al partido político DIGNIDAD

El artículo 3º de la Ley 1475 indica que en el Registro Único de Movimientos y Partidos Políticos, también deberá inscribirse el registro de afiliados a la respectiva colectividad. En ese sentido, en la solicitud de reconocimiento de personería jurídica, el partido **DIGNIDAD** aportó un listado de personas elegidas popularmente a distintos cargos en todo el país, con aval del partido **POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO**, que con ocasión de su escisión decidieron voluntariamente ser miembros del nuevo partido político **DIGNIDAD.**

Sobre el particular, el numeral 6,7 de la Resolución CNE 0266 de 2019 refiere que:

> "*6.7. **REGISTRO DE LOS AFILIADOS A LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS**. – El Consejo Nacional Electoral llevará un registro de afiliados de los partidos, movimientos y agrupaciones políticas con personería jurídica, para lo cual recibirá, verificará, consolidará y administrará la información que sobre sus afiliados reporten estas organizaciones políticas. Igualmente controlará la información y ejecutará los cruces con las bases de datos del Archivo Nacional de Identificación y del Censo Electoral y las demás que considere necesarias para garantizar la consistencia y veracidad de la información.*
>
> *Para tal efecto, los partidos, movimientos y agrupaciones políticas con personería jurídica, por una sola vez, dentro de los dos meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente resolución, reportarán al Consejo Nacional Electoral la información de los ciudadanos inscritos la cual deberá contener:*
>
> - *Nombres, apellidos y cédula del afiliado*
> - *Teléfono de contacto y dirección de correo electrónico del afiliado (opcional)*
> - *Fecha de afiliación*
> - *Fecha de desafiliación*
> - *Identificación del documento que soporte la afiliación (solicitud de afiliación escrita, electrónica, aval, constancia de inscripción a consulta, registro como directivo, o acta de constitución de la organización política según el caso)*
> - *Observaciones*
>
> ***<u>En el caso de los partidos, movimientos y agrupaciones políticas que adquieran su personería jurídica con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente resolución, deberán dar cumplimiento a lo establecido en el inciso anterior dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al reconocimiento por parte del Consejo Nacional Electoral.</u>***
>
> *PARÁGRAFO. – La información podrá remitirse al Consejo Nacional Electoral de manera electrónica, via web, poc correo electrónico o medios magnéticos (USB, Cds, Discos)".* (Negrita y subrayas añadidas)

Adicionalmente y relacionado con lo anterior, el Partido DIGNIDAD, solicitó a esta Corporación que:

> "*determine un plazo prudente para que los y las militantes del Polo Democrático Alternativo que ostenten cargos de Representación popular puedan informar su decisión de acogerse al partido político DIGNIDAD, constituido por el sector político escindido, sin perder el derecho personal de mantener su curul".*

En ese entendido, esta Corporación concederá el término de QUINCE DÍAS HÁBILES para que el partido **DIGNIDAD**, allegue a esta Corporación en formato magnético, con destino al Registro Único de Movimientos y Partidos Políticos la información de que trata el numeral 6.7 de la Resolución 0266 de 2019. En el mismo término, los miembros del partido **POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO que** fruto de su escisión hubieren decidido afiliarse al partido **DIGNIDAD** deberán manifestarlo a las precitadas colectividades, para que dicha información sea remitida al RUP, en los términos de la Resolución 0266 de 2019. Los afiliados que sean reportados por el **PARTIDO DIGNIDAD**, provenientes del partido **POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO** no incurrirán en doble militancia, por ese hecho. Por consiguiente, aquellos miembros del partido **DIGNIDAD**, que ostenten cargos de elección popular mantendrán el derecho a continuar en los mismos, en tanto así se acordó en la escisión del **POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO.**

4.6. *La declaración política del Partido DIGNIDAD*

De conformidad con la Ley 1909 de 2018, las organizaciones políticas; es decir aquellos partidos y movimientos con personería jurídica reconocida, tienen el derecho-deber de manifestar si se encuentran en oposición, independencia o alineados con el gobierno Nacional, Departamental, Distrital o Municipal. Ello con el propósito de que las personas conozcan cual es la postura de las organizaciones políticas frente a quienes encabezan la rama ejecutiva del poder público a nivel nacional y territorial. Así pues, el artículo 6º de la ley en cita dispuso que:

> *"Artículo 6°. Declaración política. Dentro del mes siguiente al inicio del Gobierno, so pena de considerarse falta al régimen contenido en la Ley 1475 de 2011 y ser sancionadas de oficio por la Autoridad Electoral, las organizaciones políticas deberán optar por:*
>
> *1. Declararse en oposición.*
>
> *2. Declararse independiente.*
>
> *3. Declararse organización de gobierno.*
>
> *Las organizaciones políticas que inscribieron al candidato electo como Presidente de la República, gobernador o alcalde se tendrán como de gobierno o en coalición de gobierno. En consecuencia, mientras dure su mandato no podrán acceder a los derechos que se le reconocen a las organizaciones políticas de oposición o independientes, en la presente ley. Parágrafo. Las organizaciones políticas podrán por una sola vez y ante la Autoridad Electoral modificar su declaración política durante el periodo de gobierno".*

En ese sentido, si bien los respectivos Gobiernos iniciaron hace más de un mes, como hasta ahora se hace oponible la existencia del partido político **DIGNIDAD,** se le concederá el término de un mes para que emita su Declaración Política a nivel nacional y en los demás niveles en los que cuente con representación política en los términos de la Ley 1909 de 2018 y del numeral 26 del artículo 27 de los Estatutos del Partido Político **DIGNIDAD.**

4.7. *Otras solicitudes elevadas por el partido político DIGNIDAD*

En la solicitud de reconocimiento de personería jurídica, el partido **DIGNIDAD**, pidió a esta Corporación se le reconociera el "d*erecho del nuevo partido a recibir contribución financiera estatal (Artículo 109 de la Constitución Política de Colombia)* [y el] d*erecho del nuevo partido a utilizar los medios de comunicación social del Estado en todo tiempo (Artículo 111 de la Constitución Política de Colombia)"*

Sobre el particular, como quedo expuesto *ut supra,* el derecho a la financiación estatal de movimientos y partidos políticos, así como el derecho a utilizar los medios de comunicación social del Estado, son derechos que tienen el carácter de activos en el patrimonio de las colectividades con personería jurídica. De esa manera, ante la eventual escisión de una colectividad, debe quedar claro cómo se divide el patrimonio del escindente a favor de las beneficiarias.

En el caso concreto, mediante la Resolución 075 de 2020, a través de la cual se convocó el Congreso Nacional del Polo Democrático para el 24 de octubre del mismo año, para que se pronunciara sobre la escisión del partido, se dispuso en el artículo tercero que:

> "***ARTÍCULO TERCERO.*** *La escisión de que trata el artículo anterior se tramita conforme a la Ley 1475 de 2011 y los Estatutos del Polo Democrático Alternativo, está referida a la escisión política y legal de dicho sector de compañeros y en tal sentido no tiene pretensiones de carácter civil, comercial, administrativo o económico que afecten la Personería Jurídica, los símbolos, patrimonios y funcionamiento del Polo Democrático Alternativo, sin detrimento de las garantías que para su ejercicio político los escindidos soliciten al Consejo Nacional Electoral".*

De lo anterior, advierte esta Corporación que la escisión del partido **POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO**, no acarrea la disolución del mismo, y más allá de ello, trajo como consecuencia que los símbolos, "patrimonios", derechos civiles, comerciales, administrativos y económicos que ostenta la colectividad de marras quedan radicados en ella. Es decir, que todos los activos patrimoniales del partido **POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO** no sufren demérito con ocasión de la escisión, salvo en lo relacionado con el "buen nombre" de las personas que decidieron escindirse y que ahora militan en el partido **DIGNIDAD.**

De ahí que el derecho a la financiación estatal, y el acceso a medios de comunicación estatal, entendidos como activos del partido **POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO**, quedan radicados en el mismo, y por ende no pueden ser asignados al partido **DIGNIDAD.** Cosa distinta hubiera sido que el acuerdo de escisión estableciera que un porcentaje de la financiación a la que tiene derecho el partido **POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO**, sería destinada al partido político beneficiario. Sin embargo, la Resolución 075 de 2020 del **POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO** fue categórica al indicar que su patrimonio constituido por derechos económicos, civiles administrativos, etc. no sufriría demerito con ocasión de la escisión.

Así las cosas, no puede esta Corporación conceder al partido político **DIGNIDAD** el derecho a la financiación estatal o el acceso a medios de comunicación, sino hasta tanto pueda acreditar los requisitos originarios para el mantenimiento de su personería jurídica. Es decir, en los términos del artículo 108 de la Constitución Política si el partido **DIGNIDAD**, en las próximas elecciones al Congreso de la República obtiene votación no inferior al tres por ciento de los votos emitidos válidamente para Cámara de Representantes o Senado, entonces, su personería jurídica será mantenida, pero ya no como derivada de una escisión o fusión de otro partido, sino como originaria por haber acreditado los requisitos constitucionales. A partir de dicho momento podrán serle reconocidos todos los derechos que se deriven de la personería jurídica con independencia absoluta de los derechos que le asisten al partido **POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO**.

4.8. *Sobre la petición elevada por el señor **EDWIN JAVIER ARIAS VALENCIA***

Actuando por medio de apoderado, el señor **EDWIN JAVIER ARIAS VALENCIA,** pidió a esta Autoridad Electoral, se le tuviera como parte en el proceso 11861-20, y solicitó de manera puntual que:

> "*en el evento de que se le reconozca personería al partido DIGNIDAD, se desestime la pretensión formulada por el sector escindente, en el sentido de que se: Determine un plazo prudente para los y las militantes del Polo Democrático Alternativo que ostenten cargos de representación popular puedan informar su decisión de acogerse al partido político DIGNIDAD, constituido por el sector Político Escindido, sin perder el derecho personal de mantener su curul.*
>
> *En consecuencia, se declare que mi poderdante, el señor EDWIN JAVIER ARIAS VALENCIA, debe ser nombrado representante a la Cámara por la circunscripción Antioquia, en representación del PDA, en reemplazo del señor Jorge Alberto Gómez Gallego".*

En sustento de su solicitud, argumentó que a las personas que se escindieron del partido **POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO** deben serles retiradas las curules que ostentan en cargos de elección popular. Lo anterior, teniendo en cuenta que para el peticionario, las

curules pertenecen al partido inscriptor y no a quienes ocupan las mismas. Precisó el apoderado del señor **ARIAS VALENCIA** que:

> *‘‘En definitiva, nada habilita a pensar que los espacios de representación en las corporaciones públicas “pertenecen” a una persona en específico; ese es un entendimiento que olvida, por decir lo menos, que esa curul que ostenta corresponde a una cifra repartidora que, en la inmensa mayoría de las ocasiones, no es alcanzada por un candidato individualmente considerado, sino por todo el partido”.*

Así las cosas, esta Corporación tendrá como parte interesada en el radicado acumulado 11861 -20 al señor **ARIAS VALENCIA**, en los términos del artículo 38 de la Ley 1437 de 2011, en tanto que lo que se resuelva en este acto administrativo puede tener relación con la situación jurídica particular del administrado.

Ahora bien, en relación con la solicitud de retirar la curul a quienes se escindieron del **POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO** y ahora militan en el partido **DIGNIDAD,** esta Colegiatura considera que quien obtiene una curul en un cargo de elección popular, no solo adquiere derechos para sí, sino también para la colectividad que le inscribió. De esa manera, el artículo 2º de la Ley 130 de 1994, establece que los partidos son “*instituciones permanentes que reflejan el pluralismo político, promueven y encauzan la participación ciudadana y contribuyen a la formación y manifestación de la voluntad popular, **con el objeto de acceder al poder, a los cargos de elección popular y de influir en las decisiones políticas y democráticas de la Nación**”***. En consonancia con lo anterior, los artículos 1º y 2º de la Ley 974 de 2005 establece que los miembros de un mismo partido elegidos en una Corporación Pública de elección popular constituyen bancada y que deben por tanto actuar en grupo y coordinadamente**.**

Lo anterior implica que en el ordenamiento jurídico colombiano, los partidos y movimientos políticos son instituciones con plataformas ideológicas definidas que pretenden influir en la toma de decisiones y que la participación en elecciones no responde al carácter subjetivo de los candidatos sino a la materialización del programa del partido. Por ese mismo motivo es que el constituyente del 91 prohibió a los miembros de corporaciones públicos presentarse a la siguiente elección, por un partido distinto, sin haber renunciado a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones (Art. 107 C. Pol.). La razón de tal prohibición, en palabras del Consejo de Estado es garantizar que la “*confianza depositada por el elector en determinado plan de acción política, no resulte frustrada por la decisión personalista del elegido de abandonar la agrupación política mediante la cual accedió a la corporación pública o cargo de elección popular”.*

El carácter NO personalista del escenario político electoral colombiano ha sido descrito por el Consejo de Estado así:

> *"De todas las normas referidas se establece que el sistema electoral vigente aplica directamente a los partidos o movimientos políticos -umbral, cuociente electoral, cifra repartidora y bancadas- disposiciones establecidas a favor del fortalecimiento de los partidos políticos en desmedro de las "microempresas electorales" como consta en los antecedentes de la reforma política de 2003. En consecuencia, no se puede predicar que esas normas sean aplicables en forma directa a los candidatos.* ***En suma, las curules obtenidas por los partidos y movimientos políticos pertenecen a éstos y no a los candidatos"***[8].(Negrita y subrayas añadidas).

En consecuencia, le asiste razón al peticionario en cuanto refiere que las curules que se obtienen en un certamen electoral no son de propiedad de la persona que las ocupa, sino que su manejo responde al ejercicio partidista y debe ceñirse a la plataforma ideológica y programática apoyada por los electores. A pesar de lo dicho, y conforme ha quedado explicado a lo largo de esta Resolución, no puede accederse a la petición de **ARIAS VALENCIA,** pues olvida este último que el partido **POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO se escindió sin disolverse;** lo que significa que todos aquellos elementos que le componían se dividieron entre aquel y el partido **DIGNIDAD**. Así las cosas, tanto derecho le asiste al partido **DIGNIDAD,** como al **POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO**, en tanto que aquel se originó de este, en relación con las curules que ostentan quienes fueran inscritos primeramente por el partido **PDA.** En consecuencia, quienes se escinden del **partido POLO DEMOCRÁTICO**, no lo hacen con la consecuencia de un simple retiro o desafiliación, si no que se llevan consigo una parte del partido que ahora se denomina **DIGNIDAD**, y por ello, de conformidad con el acuerdo de escisión- Res. 075 de 2020 del **PDA,** tienen la facultad de ocupar las curules que ostentan en la actualidad.

5. *Conclusión*

Por haber acreditado los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios, esta Corporación reconocerá personería jurídica al partido político **DIGNIDAD** y ordenará realizar las correspondientes anotaciones en el **REGISTRO ÚNICO DE PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS – RUP.**

Reunido en Sala Plena y en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: **RECONOCER** personería jurídica al partido político **DIGNIDAD.**

[8] Colombia. Consejo de Estado. Sección Quinta, Sentencia del 11 de julio de 2.011. Expediente 2010-00105. Reiterada por la misma sección en Sentencia del 17 de julio de 2014, expediente 2013-00040. Este criterio fue reiterado mediante concepto del Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Consejero ponente: WILLIAM ZAMBRANO CETINA Bogotá, D.C., diez (10) de septiembre de dos mil quince (2015) Radicado número: 11001-03-06-000-2014-00246-00(2231).

PARÁGRAFO.- CRÉESE una carpeta a nombre del **PARTIDO DIGNIDAD** en el Capítulo X del **REGISTRO ÚNICO DE PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS – RUP** e **INCORPÓRESE** en ella esta decisión.

ARTÍCULO SEGUNDO: MANTENER el reconocimiento de personería jurídica al partido político **POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO** identificado con el número de **NIT 830-124-850-8.**

PARÁGRAFO PRIMERO.- INSCRÍBASE esta decisión junto con los demás documentos obrantes en el expediente **11861-20** en el Capítulo X del **REGISTRO ÚNICO DE PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS – RUP.**

PARÁGRAFO SEGUNDO. – Todos los derechos patrimoniales (activos), como por ejemplo los bienes muebles e inmuebles, rentas liquidas, derecho a la financiación estatal, derecho de acceso a medios de comunicación que utilicen el espectro electromagnético, etc. y obligaciones (pasivos), como por ejemplo deudas, sanciones pecuniarias impuestas por el Consejo Nacional Electoral, etc. del partido **POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO** quedan radicados en él, exceptuando los que se deriven de la desafiliación de sus miembros que hayan adherido al partido **DIGNIDAD** en el marco de la escisión del partido**,** lo que incluye, entre otros, el derecho de los escindidos a mantener el cargo de elección popular que tuvieren; a usufructuar su “buen nombre” en las contiendas electorales; a constituir bancadas en las corporaciones de elección popular; a efectuar declaraciones políticas; etc.

ARTÍCULO TERCERO: INSCRIBIR en el **REGISTRO ÚNICO DE PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS – RUP** el acta de fundación, los estatutos (incluye el reglamento de bancadas y el Código de ética y Garantías y Régimen Disciplinario) y el programa político del partido político **DIGNIDAD,** con los controles de constitucionalidad y legalidad efectuados en este acto administrativo. (Anexos al final de la Resolución)

ARTÍCULO CUARTO: INSCRIBIR en el **REGISTRO ÚNICO DE PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS – RUP** el isologo del partido **DIGNIDAD:**

DIGNIDAD

www.dignidad.co

ARTÍCULO QUINTO: INSCRIBIR en el **REGISTRO ÚNICO DE PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS – RUP** en calidad de directivos del partido Dignidad, los nombramientos de los siguientes cargos:

Cargo	Principal	Suplente
Presidencia	Leonídas Gómez Gomez c.c. 13.804.037	
Vicepresidencia	Alba Luz Pinilla c.c. 63.286.342	
Secretaría General	Gustavo Rubén Triana Suárez c.c. 91.010.232	
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL		
Secretaría de la Mujer	Clara Cecilia Giraldo Puerta c.c. 32.108.629	Victoria Avendaño c.c. 49.734.685
Secretaría de la Juventud	Alejandra Sánchez Zuluaga c.c. 1.032.497.685	Jonathan Smit Morera Linares c.c. 1.031.156.231
Secretaría LGBTI	Róbinson Sánchez c.c. 71.373.896	Stefanía Mancilla c.c. 1.033.765.515
Secretaría de Organizaciones sociales	Elías Fonseca Cortina c.c. 18.913.174	Jennifer Pedraza c.c. 1.010.227.070
Secretaría de Comunicaciones	Catalina Nava Farfán c.c. 1.032.443.685	Carlos Mario Acero Castellanos c.c.1.032.456.625
Secretaría de Formación	Offir Giovana Angarita Alonso c.c. 52.262.728	Francisco Valderrama Mutis c.c. 17.114.137
Secretaría de Afrocolombianos	Jhonson Torres Ortiz c.c. 10.474.315	Luis Carlos Fuentes c.c. 9.065.081
Secretaría de asuntos indígenas	Jazmin Romero Epiayu c.c. 22.647.780	Arlen Yangana c.c. 1.061.747.808
Secretaría de relaciones internacionales	Enrique Daza Gamba c.c. 19.145.744	Jaime Moreno García c.c. 17.075.052
Secretaría de Asuntos Ambientales	Michel Maya c.c. 80.226.039	Luis Alejandro Pedraza c.c. 4.111.902
Miembro del Comité Ejecutivo Nacional	Javier Criales c.c. 16.675.612	Luis Eduardo Peláez c.c.1.039.684.639

Miembro del Comité Ejecutivo Nacional	Jorge Enrique Robledo Castillo c.c. 14.204.889	Carlos Naranjo Ossa c.c. 4.506.027
Miembro del Comité Ejecutivo Nacional	Jorge Gómez Gallego c.c. 8.426.821	Felipe Arango Posada c.c. 19.202.640
Miembro del Comité Ejecutivo Nacional.	Manuel José Sarmiento Argüello c.c. 80.873.444	Sara Sofía Abril c.c.1.026.274.482
COMISIÓN DE ÉTICA		
Miembro de la Comisión de Ética	Ramón Antonio Paba Rozo c.c. 88.140.337	
Miembro de la Comisión de Ética	Sebastián Galeano Vallejo 1.032.389.700	
Miembro de la Comisión de Ética	Marlene Acero Rico c.c. 51.743.786	
Miembro de la Comisión de Ética	María Camila Jiménez Cabanza c.c. 1.098.737.116	
Miembro de la Comisión de Ética	Ángela Fernanda Cruz c.c. 1.032.466.214	
Veedora Nacional		
María E. Botero c.c. 25.099.047		

ARTÍCULO SEXTO: CONCEDER al partido político **DIGNIDAD** el término de quince (15) días hábiles, contados a partir de la notificación de esta Resolución, para que registre ante esta Corporación los nombramientos en los cargos del **CONGRESO NACIONAL, JUNTA NACIONAL, AUDITOR INTERNO** y **REVISORÍA FISCAL** de conformidad con sus Estatutos.

ARTÍCULO SÉPTIMO: CONCEDER al partido político **DIGNIDAD** el término de quince (15) días hábiles, contados a partir de la notificación de esta Resolución para que registre ante esta Corporación y por medio magnético su plataforma de afiliados, de conformidad con el artículo 6.7 de la Resolución CNE 0266 de 2019.

ARTÍCULO OCTAVO: CONCEDER a los afiliados del partido **POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO** el término de quince (15) días hábiles, contados a partir de la publicación de este Acto Administrativo, para que en el marco de la escisión del mismo manifiesten si adhieren al partido político **DIGNIDAD.** Dicha manifestación deberá hacerse directamente a las colectividades precitadas.

PARÁGRAFO. Los afiliados al **POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO** que se acojan a lo dispuesto en este artículo, así como las personas que ya se afiliaron al partido **DIGNIDAD,** provenientes del partido **POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO,** y que sean inscritos por el partido **DIGNIDAD** en los términos del artículo anterior, no incurrirán en doble militancia y continuarán ejerciendo el cargo de elección popular que tuvieren como representantes del partido **DIGNIDAD.**

ARTÍCULO NOVENO: CONCEDER al partido político **DIGNIDAD** el término de un mes, contado a partir de la notificación de esta Resolución para que remita a esta Corporación las declaraciones políticas de que trata el artículo 6º de la Ley 1909 de 2018.

ARTÍCULO DÉCIMO: CONCEDER al partido político **DIGNIDAD** el término de quince días hábiles, contados a partir de la notificación de esta Resolución para que inicie los trámites para su inscripción en el Registro Único Tributario y allegue las constancias respectivas una vez efectuado.

ARTÍCULO UNDÉCIMO: TENER como parte interesada en el presente procedimiento al señor **EDWIN JAVIER ARIAS VALENCIA** y **NEGAR** las demás solicitudes elevadas por este.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: NOTIFICAR por intermedio de la Subsecretaría de esta Corporación, el contenido de la presente Resolución de conformidad con lo establecido por el artículo 56 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo a los correos que se encuentran autorizados para tal fin, de la siguiente manera:

a) Al señor Juliomario Martínez Osorio al correo electrónico jmo.planea@gmail.com

b) Al señor Mario Velásquez Torres al correo electrónico mario.velasquez@fuac.edu.co

c) Al **PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO** a los correos electrónicos registrados en la entidad para su respectiva notificación

d) Al Senador Jorge Enrique Robledo al correo electrónico jorge.robledo.castillo@senado.gov.co

e) Al Representante a la Cámara por el Departamento de Antioquia, Jorge Alberto Gómez al correo electrónico jorge.gomez@camara.gov.co

f) Al señor Leonidas Gómez Gómez al correo electrónico gomez.leonidas@hotmail.com

g) A la señora Alba Luz Pinilla al correo electrónico ibama3@gmail.com y,

h) Al señor Gustavo Rubén Triana Suárez al correo electrónico gustavotrianasuarez@yahoo.es

Al Ministerio Público en el correo electrónico notificaciones.cne@procuraduria.gov.co

ARTÍCULO DÉCIMOTERCERO: NOTIFÍQUESE esta Resolución de conformidad con lo establecido en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 al Doctor **SEBASTIÁN PÉREZ PELÁEZ** en la dirección: Medellín, Calle 54 No. 45-63 (Centro Caracas 1), oficina 404 - Celular: 320-645-95-93. - Correo electrónico: sebastiangpyp@gmail.com y al señor **EDWIN JAVIER ARIAS** en la dirección: Ituango (Antioquia), Calle 20 No. 21-11 - Celular: 313-631-61-56 - Correo electrónico: ejariasv@gmail.com

ARTÍCULO DÉCIMOCUARTO: COMUNÍQUESE la presente decisión a la **ASESORÍA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA** del **CONSEJO NACIONAL ELECTORAL.**

ARTÍCULO DÉCIMOQUINTO: LIBRAR por la Subsecretaría de la Corporación los oficios necesarios para el adecuado cumplimiento de lo resuelto en este Acto Administrativo.

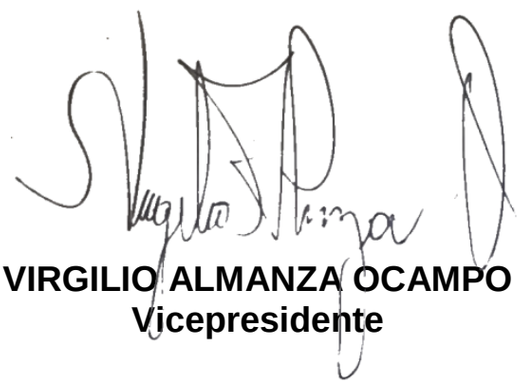
ARTÍCULO DÉCIMOSEXTO: Contra la presente resolución **PROCEDE** el recurso de reposición, que deberá interponerse ante esta Corporación dentro de los 10 días siguientes a su notificación, de acuerdo con los artículos 74 y 76 de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Bogotá D.C., a los veintiuno (21) días del mes de abril de dos mil veintiuno (2021)

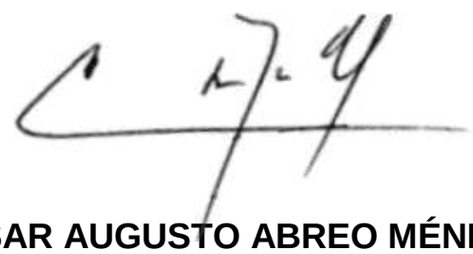
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,



DORIS RUTH MÉNDEZ CUBILLOS
Presidenta



VIRGILIO ALMANZA OCAMPO
Vicepresidente



CÉSAR AUGUSTO ABREO MÉNDEZ
Magistrado Ponente

Aprobado en Sala Plena virtual del 21 de abril de 2021
Salva voto: Magistrado Renato Rafael Contreras Ortega
Aclara voto: Magistrado Hernán Penagos Giraldo, Magistrado Virgilio Almanza Ocampo, Magistrado Luis Guillermo Pérez Casas, Magistrado Pedro Felipe Gutiérrez Sierra y Magistrada Doris Ruth Méndez Cubillos
Revisó: Rafael Antonio Vargas González, Secretario
Radicado No. 2020000011861-00
Proyectó: Juan Mora
Revisó: Alix Gómez

Anexos: 51 folios

Bogotá, octubre 30 de 2020

Honorables Magistrados
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Atn. Honorable Magistrado
HERNÁN PENAGOS GIRALDO
Presidente
Consejo Nacional Electoral

Asunto: Petición de atención prioritaria del sector político escindido del Polo Democrático Alternativo para que nos sean reconocidos derechos políticos como nuevo partido político – partido DIGNIDAD.

Cordial saludo,

I. SOLICITUD

Las personas abajo firmantes nos dirigimos ante el Consejo Nacional Electoral con el fin de que, de manera prioritaria, atienda la solicitud de:

1. **Reconocer personería jurídica al nuevo partido político DIGNIDAD,** surgido como consecuencia de haber ejercido el derecho a la escisión **del Polo Democrático Alternativo,** en el marco de la independencia y autonomía de los partidos políticos reconocida por la Constitución Nacional.

2. Como consecuencia de lo anterior, además del reconocimiento de la personería jurídica para el nuevo partido político, que surge como consecuencia inmediata de la escisión del Polo Democrático Alternativo, se solicita el reconocimiento de los siguientes derechos:

    a. Derecho del nuevo partido a ejercer el principio de autonomía para determinar su organización y funcionamiento. (Artículo 107 de la Constitución Política de Colombia)
    b. Derecho fundamental de los miembros del nuevo partido creado como consecuencia de la escisión a desempeñar cargos públicos en corporaciones públicas en las que tiene representantes elegidos democráticamente en las útlimas elecciones sin incurrir en causal de doble militancia, toda vez que fueron electos por el Polo Democrático Alternativo pero que dejaron de ser de dicho partido desde el 24 de octubre de 2020 (Artículo 40 de la Constitución Política de Colombia), fecha en la que se produjo la escisión.

c. Derecho fundamental de los miembros del nuevo partido político a elegir y ser elegido en las siguientes elecciones sin incurrir en causal de doble militancia por mantener su curul obtenida por el Polo Democrático Alternativo (Artículo 40 de la Constitución Política de Colombia).
d. Derecho fundamental de los miembros del nuevo partido político a tener iniciativa en las corporaciones públicas en las que tiene representantes elegidos democráticamente en las útlimas elecciones (Artículo 40 de la Constitución Política de Colombia).
e. Derecho del nuevo partido surgido como consecuencia de la escisión a inscribir candidatos a elecciones sin requisito adicional alguno. (Artículo 108 de la Constitución Política de Colombia)
f. Derecho del nuevo partido a recibir contribución financiera estatal (Artículo 109 de la Constitución Política de Colombia)
g. Derecho del nuevo partido a utilizar los medios de comunicación social del Estado en todo tiempo (Artículo 111 de la Constitución Política de Colombia)
h. Derecho del nuevo partido surgido como consecuencia de la escisión a declararse en oposición, independencia o partido de gobierno en las circunscripciones en las que tenga representación política. (Artículo 112 de la Constitución Política de Colombia, desarrollado por la Ley 1909 de 2018, Estatuto de la Oposición Política).
i. Derecho de los militantes y del nuevo partido a ser reconocido en las corporaciones públicas, a que se le reconozca su participación como bancada y a tener vocería en las mismas. (Artículo 40 -5 de la Constitución Política y Ley 974 de 2005).
j. Los demás que la ley le otorgue a los partidos políticos. (Ley 130 de 1994, Ley 974 de 2015, Ley 1475 de 2011, Ley 1757 de 2015, Ley 1909 de 2018)

3. Determine un plazo prudente para que los y las militantes del Polo Democrático Alternativo que ostenten cargos de representación popular puedan informar su decisión de acogerse al partido político DIGNIDAD, constituido por el sector político escindido, sin perder el derecho personal de mantener su curul.

Fundamos la presente solicitud en los siguientes:

II. HECHOS

1. El Polo Democrático Alternativo en las elecciones del Senado de la República para el periodo 2018 - 2022 obtuvo 736.367 votos, equivalentes al 4.80% del total de la votación. En consecuencia, el Polo Democrático Alternativo superó el umbral y ratificó la vigencia de su personería jurídica, gozando así de todos los derechos que el ordenamiento jurídico colombiano le otorga a los partidos políticos.

2. El 11 de septiembre de 2020 un sector del partido presentó al Comité Ejecutivo Nacional del Polo Democrático Alternativo solicitud para escindir dicho partido político. El sector solicitante indicó que estaba representado por el senador Jorge

Enrique Robledo Castillo, el representante a la cámara Jorge Gómez Gallego, el secretario general del Polo Gustavo Rubén Triana Suárez y los siguientes miembros del Comité Ejecutivo Nacional: Clara Cecilia Giraldo Puerta, Carlos Eduardo Naranjo Ossa, Francisco José Valderrama Mutis, José Fernando Ocampo Trujillo, Enrique Alfredo Daza Gamba, Elías Fonseca Cortina, Yasmin Romero Epiayu y Carlos Mario Acero Castellanos, miembros principales y Alba Luz Pinilla Pedraza, Angelica Giovanna Riaño Lozano, Sara Sofía Abril G, Laura Catalina Nava Farfan, Jaime Moreno García y Aurelio Suárez Montoya, miembros suplentes del Comité Ejecutivo Nacional.

3. Los entonces dirigentes y militantes del Polo Democrático Alternativo que hicimos esta solicitud representamos el 35% de los actuales miembros principales del Comité Ejecutivo Nacional, descontados los 98.550 votos por la lista, contribuimos con 312.383 votos de los 736.367 obtenidos por el Polo al Senado de la República en 2018, elegimos el 37% de los delegados al IV Congreso del Polo Democrático Alternativo y contribuimos con el 50% de la participación en la reciente votación para modificar los Estatutos, en el Congreso Extraordinario celebrado el 29 de agosto pasado. Igualmente representamos un número significativo de los actuales congresistas, diputados, concejales y ediles del Polo.

4. Tras ser discutida la solicitud a la que se hace referencia en el numeral anterior, el Comité Ejecutivo Nacional del Polo Democrático Alternativo, en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, adoptó por unanimidad la Resolución 075 de 2020 mediante la cual decidió:

   "ARTÍCULO PRIMERO. Convocar a los delegados y delegadas elegidos al IV Congreso del Polo Democrático Alternativo, que cumplan con los requisitos estatutarios de afiliados y afiliadas del Partido a Congreso Extraordinario, que se llevará a cabo el día sábado 24 de octubre de 2020, de forma no presencial, mediante sistema de control remoto. La citación se comunicará a los correos electrónicos y a las cuentas de WhatsApp de las y los delegados habilitados.

   ARTICULO SEGUNDO: Este Congreso Extraordinario tratará únicamente de la aprobación de la declaratoria de escisión, con el lleno del requisito señalado en los Estatutos del Polo Democrático Alternativo en el Artículo 23 numeral 10, del sector del partido representado por el senador Jorge Enrique Robledo Castillo, el representante a la cámara Jorge Gómez Gallego, el secretario general del Polo Gustavo Rubén Triana Suárez y los siguientes miembros del Comité Ejecutivo Nacional: Clara Cecilia Giraldo Puerta, Carlos Eduardo Naranjo Ossa, Francisco José Valderrama Mutis, José Fernando Ocampo Trujillo, Enrique Alfredo Daza Gamba, Elías Fonseca Cortina, Yasmin Romero Epiayu y Carlos Mario Acero Castellanos, miembros principales y Alba Luz Pinilla Pedraza, Angelica Giovanna Riaño Lozano, Sara Sofía Abril G, Laura Catalina Nava Farfan, Jaime Moreno García y Aurelio Suárez Montoya, miembros suplentes del Comité Ejecutivo Nacional.

ARTICULO TERCERO. La escisión de que trata el artículo anterior se tramita conforme a la Ley 1475/11 y los Estatutos del Polo Democrático Alternativo, está referida a la escisión política y legal de dicho sector de compañeros y en tal sentido no tiene pretensiones de carácter civil, comercial, administrativo o económico que afecten la Personería Jurídica, los símbolos, patrimonios y funcionamiento del Polo Democrático Alternativo, sin detrimento de las garantías que para su ejercicio político los escindidos soliciten al Consejo Nacional Electoral.

ARTICULO CUARTO. La presente Resolución de convocatoria del Congreso Extraordinario tomada por unanimidad, como también en su momento, la decisión final tomada por el Congreso Extraordinario se comunicará al Consejo Nacional Electoral, para los efectos pertinentes".

5. Que el artículo 4, en su numeral 18, de la Ley 1475 de 2011 indica:

"**CONTENIDO DE LOS ESTATUTOS.** Los estatutos de los partidos y movimientos políticos contendrán cláusulas o disposiciones que los principios señalados en la ley y especialmente los consagrados en el artículo 107 de la Constitución, en todo caso, deben contener como mínimo, los siguientes asuntos:
(…)

18. Reglas de disolución, fusión con otros partidos o movimientos políticos, o **escisión** y liquidación". (Énfasis propio).

6. Que el artículo 14 de la Ley 1475 de 2011 estableció:

"LIQUIDACIÓN, FUSIÓN Y **ESCISIÓN DE LOS PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS.** La disolución, liquidación, fusión y **escisión de los partidos y movimientos políticos se regirá por lo dispuesto en la ley y/o en sus estatutos**. La disolución y liquidación de los partidos y movimientos políticos, adoptada por decisión administrativa del Consejo Nacional Electoral no tendrá recurso alguno. No podrá acordarse la disolución, liquidación, fusión y escisión voluntaria de un partido o movimiento político cuando se haya iniciado proceso sancionatorio. (Énfasis propio).

7. Que el artículo 23 de los Estatutos del Polo Democrático Alternativo, en el numeral 10 determinó que son funciones del Congreso Nacional:

"Disolver o **escindir** el Partido con la aprobación mínima de tres quintas (60%) partes de sus delegadas y delegados elegidos". (Énfasis propio).

8. Que el artículo 93 de los Estatutos del Polo Democrático Alternativo indica que:

"La decisión sobre disolución, fusión, **escisión** y liquidación del PDA será de competencia del Congreso Nacional". (Énfasis propio).

9. El Congreso del Polo Democrático Alternativo convocado mediante la Resolución 075 de 2020 del Comité Ejecutivo Nacional tuvo lugar 24 de octubre de 2020. Durante el mismo los y las delegadas del Congreso pudieron elegir entre el "SÍ", el "NO" y el "VOTO EN BLANCO", "voto para decidir sobre la escisión del Partido Polo Democrático Alternativo, de conformidad con el artículo 4 de la Ley 1475 de 2011, los artículos 23 y 93 de los Estatutos del Partido y con los criterios y nombres del sector solicitante de la escisión, contenidos en la Resolución número 075 del 5 de octubre de 2020 del Comité Ejecutivo Nacional, resolución que fue aprobada por unanimidad".

10. Tal como quedó consignado en el "ACTA DE ESCRUTINIO SOBRE LOS VOTOS EMITIDOS EN EL CONGRESO EXTRAORDINARIO DEL POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO, PARA LA ESCISIÓN DE UN SECTOR DEL PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO. RESOLUCIÓN 075 DE 05 DE OCTUBRE DE 2020", los resultados de la votación realizada durante el Congreso extraordinario del Polo Democrático Alternativo del día 24 de octubre de 2020, resultados fueron los siguientes:

OPCION DE VOTO	**VOTOS SALA No. 1**	**VOTOS SALA No. 2**	**VOTOS SALA No. 3**	**TOTAL, VOTOS**
A FAVOR	163	132	110	**405**
EN CONTRA	4	0	1	**5**
EN BLANCO	0	0	0	**0**
TOTAL, VOTOS VALIDOS	167	132	111	**410**
TOTAL, VOTOS NO MARCADOS	0	0	0	**0**
TOTAL, VOTANTES	167	132	111	**410**

11. En consecuencia, los votos a favor de la escisión de un sector del Polo Democrático Alternativo representaron el **98,78%** del total de la votación registrada.

12. De conformidad con lo anterior, el Congreso Nacional del Polo Democrático Alternativo **aprobó con más de tres quintas (60%) partes de sus delegadas y delegados elegidos la solicitud de escisión** del sector del partido indicado en el hecho 2, cumpliendo así con el requisito señalado en los artículos 23 y 93 de los estatutos del Polo Democrático Alternativo. Así las cosas, del Polo Democrático Alternativo surgen dos personerías jurídicas, el PDA que ya venía y mantiene su denominación, símbolos, patrimonio, y el nuevo partido político que surge como consecuencia de la decisión autónoma de escindirse.

13. El martes 27 de octubre reunidas las personas integrantes del sector político escindido del Polo Democrático Alternativo, y como consecuencia de haber ejercido el derecho político fundamental a la escisión del PDA, dotamos de contenido al nuevo partido surgido como consecuencia de la escisión. En ejercicio de la autonomía de los partidos, lo denominamos DIGNIDAD. En esta reunión de constitución del partido político DIGNIDAD los y las fundadoras del nuevo partido surgido como consecuencia de la escisión del PDA elegimos cargos directivos de presidente, vicepresidente, Comité Ejecutivo Nacional, aprobamos estatutos, programa político, elegimos integrantes del comité de ética del partido y delegamos al Secretario General del partido realizar los trámites de registro ante el Consejo Nacional Electoral.

14. El miércoles 28 de octubre de 2020, fue radicada por el Polo Democrático Alternatico la documentación sobre el proceso de escisión de dicho partido.

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Los fundamentos de derecho que se exponen a continuación soportan la solicitud que elevamos ante el Consejo Nacional Electoral de **reconocer personería jurídica al partido político surgido como consecuencia de la escisión del Polo Democrático Alternativo.** Partido político creado como consecuencia inmediata de la escisión del Polo Democrático Alternativo y producto de que nos hemos acogido al derecho a la escisión en el marco de la autonomía e independencia de los partidos políticos.

Como pasamos a desarrollar, las solicitudes indicadas en este documento y dirigidas al Consejo Nacional Electoral se fundan en que: i) la escisión es una expresión del derecho fundamental a la participación política, artículo 40 de la Constitución Política, y del principio constitucional de autonomía e independencia de los partidos políticos; ii) la escisión es una modalidad del ejercicio del derecho fundamental a la participación política, derecho de aplicación inmediata; iii) la aplicación del principio hermenéutico de la analogía permite reconocer derechos políticos al sector escindido; iv) la aplicación del principio democrático permite reconocer derechos políticos al sector escindido y; vi) aplicación del derecho fundamental a la igualdad para el reconocimiento de personería jurídica de partidos políticos en circunstancias en las que no existe ley estatutaria que regule el ejercicio de derechos.

1. La escisión como una expresión del derecho fundamental a la participación política, artículo 40 de la Constitución Política, y del principio constitucional de autonomía e independencia de los partidos políticos

Los partidos políticos son la manifestación del ejercicio de los derechos fundamentales a la participación política, la asociación de la ciudadanía y el principio democrático que caracteriza al Estado de derecho previsto en los artículos 1 y 2 de la Constitución Política de Colombia.

El artículo 40 de la Constitución Política consagró el derecho fundamental a la participación política en los siguientes términos:

> "Artículo 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: (…)
>
> 3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna: formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas".

El anterior derecho fundamental se encuentra a su vez inescindiblemente ligado a otros postulados constitucionales. Al respecto, el artículo 107 de la Constitución Política indica que *"se garantiza a todos los nacionales el derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos,* ***y la libertad*** *de afiliarse a ellos o* ***de retirarse"***. (Énfasis propio). Así, el ejercicio de los derechos fundamentales y principios constitucionales indicados amparan incluso la decisión libre de los ciudadanos de retirarse de los partidos y movimientos políticos. Tanto así que el ordenamiento jurídico prevé la posibilidad de disolver los partidos, fusionarlos, liquidarlos o escindirlos, como expresiones válidas y legítimas de ejercer la participación y las garantías de independencia y autonomía que amparan a las organizaciones y movimientos políticos.

Como desarrollo del derecho fundamental a la participación política, el régimen constitucional y legal colombiano establece el principio de la autonomía interna de los partidos políticos y su libertad de organización y funcionamiento. Este principio se desprende del inciso segundo del artículo 108 de la Constitución Política que establece: ***"En ningún caso podrá la ley establecer exigencias en relación con la organización interna de los partidos y movimientos políticos".***

A su vez, el principio de la autonomía interna de los partidos fue plasmado, con identidad al contenido constitucional, en el artículo 1 de la Ley Estatutaria 130 de 1994, que indica:

> **"ARTÍCULO 1o. DERECHO A CONSTITUIR PARTIDOS Y MOVIMIENTOS. Todos los colombianos tienen derecho a** constituir partidos y movimientos políticos, a organizarlos y a desarrollarlos, a afiliarse y **retirarse de ellos libremente** y a difundir sus ideas y programas".

El principio fue además desarrollado por el legislador estatutario en los artículos 2, 6 y 7 de la misma Ley. El artículo 2 expresamente destaca que los movimientos políticos permiten la asociación libre de los ciudadanos para influir en la voluntad política[1], el artículo 6 ratifica

[1] **"ARTÍCULO 2o. DEFINICIÓN.** Los partidos son instituciones permanentes que reflejan el pluralismo político, promueven y encauzan la participación de los ciudadanos y contribuyen a la formación y manifestación de la voluntad popular, con el objeto de acceder al poder, a los cargos de elección popular y de influir en las decisiones políticas y democráticas de la Nación.
Los movimientos políticos son asociaciones de ciudadanos **constituidas libremente** para influir en la formación de la voluntad política o para participar en las elecciones.

el derecho de los partidos políticos y movimientos a organizarse libremente sin intervención estatal adicional al cumplimiento de la Constitución y las leyes[2]; y el artículo 7 remite a los estatutos de cada partido las normas de organización u funcionamiento de estos[3].

Como se observa, el principio de la autonomía organizativa de los partidos políticos se erige como mecanismo para garantizar el derecho fundamental a la participación política de los afiliados a estas organizaciones. Y en el marco de dicha autonomía organizativa se les permite a los partidos políticos determinar los mecanismos mediante los cuales sus militantes

---

se retiran o, eventualmente, mediante los cuales tales organizaciones se disuelven, fusionan, **escinden** y liquidan.

Con posterioridad, nuevamente el legislador estatutario, en desarrollo del principio de la autonomía de los partidos políticos mediante la Ley 1475 de 2011 "por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones" estableció en el numeral 18 del artículo 4 que los estatutos de los partidos políticos deberán contener como mínimo, entre otros, "reglas de disolución, fusión con otros partidos o movimientos políticos, o escisión y liquidación". Disposición ratificada en el artículo 14 de la misma norma. Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia C-490 de 2011 precisó:

> "La disolución y liquidación de partidos y movimientos políticos de carácter voluntario, constituye el reconocimiento a la potestad que el legislador estatutario reconoce a los partidos y movimientos políticos de decretar su disolución y liquidación, **de acuerdo con las causales que le fijen la ley y, en especial, sus estatutos internos**, lo que se explica por el grado de autonomía que la Carta reconoce a las agrupaciones políticas. **Esta opción desarrolla la dimensión negativa de la libertad de conformar agrupaciones políticas sin limitación alguna, por lo que resulta claro que si la Carta confiere ese derecho, en él se encuentra contenida la posibilidad que sus integrantes decidan disolver y liquidar el partido o movimiento político correspondiente"[4]**. (Énfasis fuera de texto original)

No quedando duda entonces que tanto el constituyente como el legislador estatutario dieron plena autonomía a los partidos políticos para fijar los mecanismos mediante los cuales sus

---

Los partidos y movimientos políticos constituidos con el lleno de todos los requisitos constitucionales y legales tendrán personería jurídica (…)".

[2] "**ARTÍCULO 6o. PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. Los partidos y movimientos políticos podrán organizarse libremente.** Sin embargo, en el desarrollo de su actividad están obligados a cumplir la Constitución y las leyes, a defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica y a propender al logro y mantenimiento de la paz, en los términos del artículo 95 de la Constitución Política".

[3] "**ARTÍCULO 7o. OBLIGATORIEDAD DE LOS ESTATUTOS.** La organización y el funcionamiento de los partidos y movimientos se regirá por lo establecido en sus propios estatutos".

[4] Corte Constitucional, sentencia C-490 de 2011. M.P Luis Ernesto Vargas Silva

militantes pueden retirarse o mediante los cuales las propias organizaciones pueden definir la disolución, fusión o escisión de los partidos políticos. Ahora bien, dado que las reglas de disolución, fusión, liquidación y escisión responden al criterio interno de los partidos, ni el constituyente ni el legislador han determinado las particularidades de los procesos de disolución, fusión, o escisión y liquidación.

Es así como en el marco del derecho a la autonomía de los partidos, y en congruencia con la Constitución Política y las Leyes citadas, el Polo Democrático Alternativo ha contemplado dentro de sus estatutos la posibilidad de la escisión de la colectividad. Por una parte, el artículo 23 en su numeral 10 indica que son funciones del Congreso Nacional del Partido "Disolver o escindir el Partido con la aprobación mínima de las tres quintas (60%) partes de sus delegados elegidos". Por su parte, el artículo 98 de los Estatutos ratifica que "La decisión sobre disolución, fusión, escisión y liquidación del PDA será de competencia del Congreso Nacional".

2. La escisión como modalidad del ejercicio del derecho fundamental a la participación política, derecho de aplicación inmediata.

Como se indicó en el apartado anterior, los mecanismos como la escisión de los partidos políticos representan la "dimensión negativa de la libertad de conformar agrupaciones políticas sin limitación alguna"[5]. En otras palabras, la escisión de los partidos es una modalidad de ejercer el derecho fundamental a la participación política en su componente de "Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna: formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas".

La Constitución Política colombiana distinguió los derechos fundamentales según su exigibilidad de aplicación. El artículo 85 de la Carta indicó que existen derechos de aplicación inmediata, es decir, *"que no requieren de previo desarrollo legislativo o de algún tipo de reglamentación legal o administrativa para su eficacia directa y que no contemplan condiciones para su ejercicio en el tiempo, de modo que son exigibles de forma directa e inmediata"*[6]. El citado artículo superior señaló una lista de derechos definidos como de aplicación inmediata, dentro de los cuales está el derecho a la participación política contenido en el artículo 40 de la Constitución.

Así las cosas, el derecho fundamental a "40. 3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna: formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas" tanto en su faceta positiva como negativa quedó consagrado en la Constitución Política como un derecho de inmediato cumplimiento. Tal conclusión permite asegurar que, a pesar de la ausencia de desarrollo legal específico de la figura de escisión, esta figura jurídica se constituye como un derecho susceptible a ser ejercido de manera

[5] Ibidem.

[6] Sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección "D", del 23 de noviembre de 2017, expediente: A.T. No. 2500023420002017-05487-00.

inmediata, directa y que goza de efectos jurídicos para los ciudadanos que se acojan a este derecho.

La anterior conclusión, además, ha sido expresada por la Sección Segunda, Subsección "D" del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en ejercicio de juez de tutela. En su momento, se reconoció que sin que existiese ley estatutaria específica que reglamentara el derecho de "los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que sumados hayan obtenido una votación de hasta el quince por ciento (15%) de los votos válidos de la respectiva circunscripción podrán presentar lista de candidatos en coalición para corporaciones públicas", prerrogativa instituida en el artículo 262 de la Constitución Política, indicando que tal derecho era de aplicación inmediata por encontrarse íntimamente ligado al derecho a la participación política y el derecho a "40.1 Elegir y ser elegido".

Dijo el Tribunal:

> "la ausencia de regulación sobre la materia dificultaría la aplicación del precepto constitucional citado, lo cierto es que dicha circunstancia no puede ser óbice para que se dé estricto cumplimiento a ese mandato constitucional.
>
> Conclusión a la que se arriba, en aplicación del criterio auxiliar que ha utilizado el máximo Tribunal Constitucional para definir qué derechos son dables de ampara por vía de la acción de tutela, **y que tiene que ver más exactamente con los derechos de aplicación inmediata de que trata el artículo 85 de la Constitución Política,**
>
> **entre los que se encuentra el artículo 40 Superior,** que consagra el derecho que tiene toda persona a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político… **sin que sea necesaria una intermediación normativa** como pretende señalar la Registraduría Nacional del Estado Civil". (Énfasis propio).

Y agregó:

> "Nótese que la parte actora con base en el artículo 262 Superior solicita a la Registraduría Nacional del Estado Civil se le expida el aludido formulario, y si bien en principio este artículo no estaría cobijado como aquellos de aplicación inmediata (artículo 85 C. Pol.), **lo cierto es que la Sala haciendo una interpretación sistemática de las normas citadas llega a la conclusión que los apartes del artículo 262 de la Constitución Política guarda una inescindible relación con el contenido esencial del artículo 40, pues allí se hace mención, entre otros asuntos, a la inscripción de candidatos y listas propias o de coalición a cargos uninominales a corporaciones públicas, lo que deriva en una expresión del derecho a la participación política mediante la posibilidad de "Elegir y ser elegido**"[7]. (Énfasis propio).

[7] Ibídem

Por tanto, siendo que el derecho de los ciudadanos a retirarse de los partidos políticos hace parte integral del derecho a la participación política, como parte de la dimensión negativa del ejercicio de la libertad de constituir partidos políticos, así como el derecho de los partidos políticos a decidir su disolución, fusión o escisión en pleno desarrollo de su autonomía e independencia, tales prerrogativas se convierten en un derecho de aplicación inmediata que no requiere de ley estatuaria específica que lo reglamente o desarrolle. Por lo mismo, carecería de sentido constitucional que la figura jurídica de la escisión, como una de las modalidades de ejercer de manera autónoma la soberanía y dirección sobre dichos partidos políticos, no acarreara efectos y derechos sobre quienes se acogen a la misma.

Siendo la escisión una prerrogativa que permite el desarrollo del derecho fundamental a la participación política, derecho reconocido como de aplicación inmediata, razón por la cual el sector político escindido del Polo Democrático Alternativo tiene el derecho al reconocimiento de todas sus prerrogativas y derechos políticos, con mayor razón cuando dicha escisión fue una decisión autónoma y soberana del partido político, conforme a las reglas que la misma organización definió.

3. Aplicación del principio democrático para reconocer derechos políticos al sector escindido.

Siguiendo los preceptos constitucionales y legales ya indicados, y aunque la reglamentación jurídica de los partidos políticos no detalle los pormenores del procedimiento para que un partido ejerza su derecho a escindir, resulta completamente admisible que se descarte toda interpretación restrictiva del mencionado derecho ante la falta de desarrollo normativo particular. Lo anterior se funda, además de lo expresado en el apartado anterior, en el carácter expansivo del principio democrático en todos los asuntos de la vida del Estado, lo que

---

significa que no pueden crearse o proponerse excusas, interpretaciones o barreras para dar aplicación a la materialización de los fines democráticos del Estado. Mediante sentencia C179 de 2002 la Corte Constitucional definió el carácter expansivo del principio democrático de la siguiente manera:

> "La democracia participativa supone una tendencia expansiva. Esta característica significa que el principio democrático debe ampliarse progresivamente a nuevos ámbitos y hacerse cada vez más vigente, lo cual exige la construcción de una nueva cultura que debe paulatinamente implementarse en la sociedad política. Se trata pues de una maximización progresiva de los mecanismos que permiten el acceso al poder político, y el ejercicio y control del mismo, así como la injerencia en la toma de decisiones. **Desde este punto de vista, la tendencia expansiva de la democracia participativa proscribe los obstáculos y trabas que impiden la efectiva realización de la democracia, y el excesivo formalismo de las normas que regulan el ejercicio de los derechos políticos**" [8]. (Énfasis fuera de texto)

---

[8] Corte Constitucional, Sentencia C-179 de 2002. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

Como consecuencia de lo anterior, la ausencia de regulación especial que determine los pormenores de la figura jurídica de la escisión de los partidos políticos no puede erigirse como una traba que limite o proscriba dicha posibilidad, mucho menos para que de la referida figuran no emanen derechos políticos para el sector político escindido. Sobre todo cuando el legislador claramente ha contemplado tal derecho en la ya citada Ley 1475 de 2011 y cuando ese mecanismo permite la materialización del derecho fundamental a la participación política y los derechos fundamentales de autonomía e independencia reconocidos a los partidos y movimientos políticos.

4. Aplicación del principio hermenéutico de la analogía para reconocer derechos políticos al sector escindido.

El principio hermenéutico, establecido en el artículo 8 de la Ley 153 de 1887, de aplicación por analogía de disposiciones normativas permite acudir a normas que regulan materias semejantes en ausencia de normas especiales. Así las cosas, aunque el mecanismo de escisión de partidos políticos consagrado en el régimen legal no encuentra en la actualidad mayor desarrollo, la figura de la escisión no es desconocida por el ordenamiento jurídico colombiano. Por el contrario, el régimen comercial, en particular la Ley 222 de 1994, y normas complementarias que la reglamentan o desarrollan, han contemplado sustanciales y procesales mediante las cuales las personas jurídicas pueden, libremente, optar por la escisión.

El artículo 3 de la Ley 222 de 1995 prevé dos mecanismos mediante los cuales puede ocurrir la escisión de una persona jurídica.

> "1. Una sociedad sin disolverse, transfiere en bloque una o varias partes de su patrimonio a una o más sociedades existentes **o las destina a la creación de una o varias sociedades.**
>
> ---
>
> 2. Una sociedad se disuelve sin liquidarse, dividiendo su patrimonio en dos o más partes, que se transfieren a varias sociedades existentes o se destinan a la creación de nuevas sociedades". (Énfasis propio)

Al respecto de la figura jurídica de la escisión, la Superintendencia de Sociedades ha indicado:

> "El artículo 3 de la ley 222 de 1995 describe las modalidades de escisión de una sociedad que **puede o no disolverse previendo como destinatarias una o varias sociedades preexistentes o no**. Sobre esa base, mediante oficio 100 73105 de noviembre 19 de 1998, este Despacho manifestó que "La escisión es una forma de reorganización empresarial que en el derecho societario vigente en Colombia está regulada como una reforma estatutaria; constituye entonces una modificación del

> contrato de colaboración y de ejecución sucesiva del cual son parte los socios, quienes en esa calidad tienen el derecho a continuar siendo parte de dicho negocio jurídico. Por decirlo de una manera gráfica, **la fragmentación** del patrimonio social **de la sociedad escindente es sucedida por <u>la aparición</u> de varios contratos sociales correspondientes <u>a diferentes sociedades</u>**, en los cuales los socios tienen vocación a participar"[9]. (Énfasis propio)

Sobre los mecanismos previstos en la ley comercial y lo indicado por la Superintendencia de Sociedades es preciso hacer dos comentarios. En primer lugar, y a modo de aclaración, por lo definido en la Resolución 075 de 2020 del Comité Ejecutivo Nacional y sometido a decisión del Congreso Nacional del Polo Democrático Alternativo, se debe descartar que la ocurrida fue una escisión con las características del numeral 2 del artículo 3 de la Ley 222 de 1995. Es decir, que la escisión aprobada el 24 de octubre de 2020 nunca pretendió disolver la persona jurídica del Polo Democrático Alternativo. En consecuencia, **se trata de una escisión semejante a la señalada en el numeral primero de la norma, en la que de una persona jurídica (partido político) no disuelta se desprende una parte de esta con el fin de crear una segunda persona jurídica**.

Por otra parte, en ambos casos previstos en la norma citada, y tal como lo precisa la Superintendencia de Sociedades, la figura de la escisión acarrea la creación de al menos una nueva persona jurídica (sociedad), que en nuestro caso concreto se tratará de un nuevo partido político. Además, la norma señala que la(s) nueva(s) sociedad(es) surge(n) a la vida jurídica con atribuciones de la sociedad originaria, que en derecho comercial son atribuciones jurídicas y patrimoniales para constituir nuevas personas jurídicas, pero que en nuestro caso son atribuciones políticas para dotar de estas a la nueva colectividad, principalmente, obtener el reconocimiento de personería jurídica, y poder ejercer derechos políticos como nuevo partido político.

Otra atribución que se debe transferir de la persona jurídica no disuelta, Polo Democrático Alternativo, a la persona jurídica creada, DIGNIDAD, como consecuencia inmediata de la escisión es la de la representación política en las corporaciones públicas. El nuevo partido debe tener derecho, por surgir de una escisión y no de una renuncia al partido, a mantener las curules de los y las representantes políticos que fueron electos en los últimos comicios para su respectiva corporación.

En todo caso, a pesar de que la normatividad electoral no precisa tales atribuciones, traemos a colación que la Superintendencia de Sociedades ha conceptuado que la figura jurídica de la

---

[9] Concepto dentro del radicado 220-3637 disponible en: https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/normatividad/normatividad_conceptos_juridicos/2476.pdf

escisión comercial, y por ende sus efectos, no sólo resulta aplicable para entes societarios. Indicó la Superintendencia:

> "No sobra recordar que la escisión solo alcanzó un desarrollo positivo hasta el año de 1995 y que con anterioridad a esa fecha la figura podía operar con base en la autonomía de la voluntad privada que se deriva de la libertad de iniciativa privada. Así las cosas, la ley 222 de 1995 sólo desarrolla la figura teniendo como punto de referencia la sociedad comercial. **Lo anterior no significa que sólo opere para entes societarios, pues su aplicación en otros supuestos permite aprovechar sus previsiones (…)".**[10] (Enfasis propio)

Tal apreciación de la Superintendencia de Sociedades ratifica la idea de que la figura jurídica de la escisión prevista en el régimen comercial colombiano se convierte en un referente interpretativo para ejercicios semejantes en organizaciones no societarias ni comerciales, como las organizaciones políticas.

Cabe destacar que la persona jurídica de la que se desprende el creado partido político mantuvo la personería jurídica por el significativo aporte al que el sector escindido realizó en el caso de las elecciones al Senado de la República. Sólo Jorge Enrique Robledo obtuvo 226.099 votos que representan el 30,7% de la votación total obtenida por el Polo Democrático Alternativo en las elecciones de 2018 al Senado. Además, es Jorge Enrique Robledo el senador que obtuvo la mayor votación preferente que permanece ejerciendo sus derechos en el actual periodo constitucional 2018-2022. Por su parte, el electo como presidente del partido creado DIGNIDAD obtuvo la segunda mayor votación de la lista del Polo Democrático al Senado, con 84.824 votos equivalentes al 11,51% de los votos del Polo. Votos que además representan el 58,16% del total de votos con los que el Polo alcanzó el umbral requerido para mantener la personería jurídica.

Lo anterior, junto con lo indicado en el numeral segundo del apartado de hechos de este documento, da cuenta de la relevancia política y electoral de los militantes escindidos del Polo Democrático Alternativo y que hemos creado el partido Dignidad.

En todo caso, nótese que la figura de la escisión no debe ser equiparable a la figura de la renuncia a un partido político o a cualquier otra figura jurídica. El legislador estatutario al indicar el concepto de escisión utilizó un concepto conocido por el ordenamiento jurídico colombiano que se distingue de la simple renuncia.

Lo anterior se corrobora, además, si se observa el trámite legislativo de la Ley Estatutaria 1475 de 2011. Trámite en el que se evidencia que el legislador estatutario quiso distinguir con toda claridad los procedimientos mediante los cuales la personería jurídica de los partidos se sometería a importantes modificaciones. A saber, la Ley Estatutaria 1475 de 2011 tuvo origen los proyectos de ley 092 de 2010 de Cámara y 190 de 2010 de Senado. Como consta

[10] 10 Ibídem.

en las gacetas del Congreso[11], durante los debates en la Cámara de Representantes el proyecto no contenía el concepto de escisión de partidos en su articulado. Sin embargo, en la gaceta 038 de 2011 se registra que en primer debate de Senado los coordinadores ponentes del proyecto de ley introdujeron una proposición para complementar el artículo 15 de la iniciática. Proposición que incluyó dos modalidades de transformación de las personerías jurídicas de los partidos políticos, además de las previamente indicadas de liquidación y disolución de partidos, para incluir los mecanismos de fusión y escisión de partidos.

5. Aplicación del derecho fundamental a la igualdad para el reconocimiento de personería jurídica de partidos políticos en circunstancias en las que no existe ley estatutaria que regule el ejercicio de derechos.

El reconocimeinto de la personería jurídica al partido político DIGNIDAD, surgido de la escisión del Polo Democrático Alternativo, debe observar el precedente fijado por la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral mediante la Resolución 2246 de 2018 en observancia al derecho fundamental a la igualdad (artículo 13 CP).

Mediante la citada Resolución, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral reconoció personería jurídica de los Partidos ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE "ASI" y UNION PATRIOTICA "UP". Ambos partidos obtuvieron reconocimiento de personería jurídica a pesar de no haber alcanzado individualmente el 3% de la votación válida depositada al Senado de la República en las elecciones para el periodo constitucional 2018-2022, pero que en virtud de la coalición que conformaron, ejerciendo el derecho fundamental a coaligarse para las elecciones de corporaciones públicas. Derecho fundamental que a pesar de no haber sido reglamentado en detalle mediante ley estatutaria, se encuentra previsto en el artículo 29 de la Ley 1475 de 2011 y fue declarado como derecho de aplicación inmediata.

En el caso referenciado, la Sala Plena identificó que a pesar de existir una omisión normativa que desarrollara el derecho fundamental a realizar coaliciones a corporaciones públicas, y en particular una omisión sobre si cada no de los movimientos coaligados tendrían reconocimiento de personería jurídica en caso de alcanzar el umbral en las elecciones, dicha omisión legislativa no podía configurarse como talanquera para el reconocimiento de la personería jurídica. Lo anterior, en el caso que la coalición llegare a superar el porcentaje de votación exigido para obtener personería jurídica. Precisó la Sala Plena del CNE sobre la coalición de los partidos ASI y UP:

> "(…) en virtud de un fallo de tutela, logró inscribir una lista de candidatos al Senado de la República que alcanzó la votación mínima prevista en el artículo 108 constitucional para obtener o conservar la personería jurídica como movimientos o

[11] Gacetas del proyecto de ley 092 de 2010 de Cámara y 190 DE 2010 de Senado disponibles en: http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/proyectos-ley/periodo-legislativo-2010-2014/20102011/article/190-por-la-cual-se-adoptan-regpartidos-ylas-de-organizacion-y-funcionamiento-de-los-partidosmovimientos-politicos-de-los-procesos-electorales-y-se-dictan-otras-disposiciones-estatutaria

> partidos políticos, razón por la cual la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral considera que **es pertinente permitir que los Partidos ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE "ASI" y UNION PATRIOTICA "UP' conserven de manera condicionada su personería jurídica hasta tanto el Congreso de la República, mediante ley estatutaria regule la materia y supla el vacío que hoy se presenta al respecto**". (Énfasis propio).

Así las cosas, la regla interpretativa reciente que fijo el CNE para los casos de derechos fundamentales no reglamentados y el reconocimiento de personería jurídica ha consistido en permitir que los partidos gocen de personería jurídica.

En lo que respecta al caso del partido DIGNIDAD, cuyo origen es la escisión del Polo Democrático Alternativo, aunque no exista ley estatutaria que reglamente el reconocimiento de la personería jurídica del partido que surge de la escisión, se debe acudir a la aplicación del criterio interpretativo indicado anteriormente para reconocer la personería jurídica al naciente partido.

La aplicación de tal criterio interpretativo garantiza además la observancia del derecho fundamental a la igualdad. Lo anterior, toda vez que ante hechos semejantes (omisión legislativa sobre los efectos de el ejercicio de un derecho con respecto al reconocimiento de personería jurídica de un partido) debe darse un tratamiento jurídico semejante (el reconocimiento de la personería jurídica a DIGNIDAD tal como se concedió personería jurídica a los partidos ASI y UP, cuyo aporte en una lista de coalición permitió alcanzar más del 3 % de los votos necesarios de la coalición en las elecciones al senado del 2018).

En todo caso, vale destacar que el Polo Democrático Alternativo obtuvo 736.367 votos a las elecciones al Senado de la República para el vigente periodo constitucional, votos correspondientes al 4.80% del total de la votación y superior al 3% requerido para el reconocimiento de la personería jurídica del partido. Una votación superior a la obtenida por la coalición conformada por los partidos ASI, UP y MAIS en las mismas elecciones.

De la votación obtenida por el Polo Democrático Alternativo, los militantes escindidos que ahora hacemos parte del partido DIGNIDAD obtuvimos 318.795 votos equivalentes al 43,29% del total de votos obtenidos por el Polo. Votación por lista preferente discriminada así: Jorge Enrique Robledo Castillo obtuvo 226.99 votos, Pedro Leonidas Gomez Gómez obtuvo 84.821 votos, Hugo Alejandro Vásquez Vargas obtuvo 6189 votos, Denis Enriqueta Casado Acosta obtuvo 479, Ana Milena Hinestroza Osorio obtuvo 411 votos, Claudia Camacho Sosa obtuvo 299 votos, Paola Andrea Torres Vargas obtuvo 274 votos, María Angélica Rodríguez Vega obtuvo 223 votos.

En ese orden de ideas, el aporte de los militantes escindidos del Polo Democrático Alternativo, ahora militantes de DIGNIDAD, a la votación con la que este partido superó el umbral y obtuvo el reconocimiento de la personería jurídica es un aporte significativo y fue determinante en la obtención de la personería jurídica del Polo Democrático Alternativo.

Asimismo, las personas que se referencian a continuación y que fueron electas por el Polo Democrático Alternativo en las últimas elecciones regionales han manifestado su voluntad inequívoca de acogerse al sector escindido del Polo Democrático Alternativo en aras de acompañar la creación del partido político DIGNIDAD.

Escindidos con DIGNIDAD					
Departamento	**Nombre**	**Corporación**	**Municipio**	**Celular**	**Correo electrónico**
Antioquia	Jorge Gómez Gallego	Cámara de Representantes	Antioquia		jorgog@une.net
	Luis Eduardo Pelaéz Jaramillo	Asamblea	Antioquia		pelaezdiputado@gmail.com
	Mario Fernando Gaviria	Concejal	Jardín Antioquia		mariogaviria12@yahoo.es
	Andrés Felipe Cadavid	Concejal	Carolina del Príncipe		afco_5@hotmail.com
	Juan Sebastián Yagari	Concejal	Valparaíso		juansebastianyagary@gmail.com
	Alejandro Arcila Jiménez	Concejal	Carmen del Viboral		alejandroarcilajimenez@gmail.com
	Manuel Monsalve	Concejal	Puerto Berrio		manuelmonsalve88@yahoo.com
	Jesús Aníbal Yepes	Concejal	Taranza		mireth16@hotmail.com

	Juan Camilo Saldarriaga Álvarez	Concejal	Remedios		juancamils@gmail.com

	Jovany Alexis Cadavid	Concejal	Segovia		gialcaza@gotmail.com
	Jorge Eliecer Isaza	Concejal	Bagre		patmen75@hotmail.com
	Luis Alfonso Borja	Concejal	Puerto Nare		luisborja973@gmail.com
	Daniel Esteban Chavarria	Concejal	Yarumal		esteban.chavarria@gmail.com
Arauca	Bolney Avemelec Parra	Concejal	Tame		bolp288@gmail.com
Bogotá	Manuel José Sarmiento Arguello	Concejal	Bogotá		concejalmanuelsarmiento@gmail.com
	Liliana Castañeda	Edil	Bogotá		lilianacastañedam@gmail.com
	Lilia Avella	Edil	Bogotá		liliaavella@gmail.com
Bolívar	Nilson Fonseca Gutiérrez	Concejal	Montecristo		nfonseca1992gutierrez@gmail.com
Caldas	Jesús Alberto Gallego Mejía	Concejal	Marmato		hontersau@hotmail.com

	María Libia Herrera	Concejal	Aguadas		dafnne11@hotmail.com
Cali	Humberto Hurtado Pedroza	Concejal	Buenaventura		hhurtadopedroza@gmail.com
	Herbert Andrés Rosero Hurtado	Edil	Buenaventura		andresrosero37@hotmail.com

Cundinamarca	Jorge Eduardo Clavijo	Edil	Corregimiento 2 del municipio de Soacha		jclavijo1056@universidadean.edu.co
Chocó	María Cecilia Olaya	Concejal	San José del palmar		diva11011@hotmail.com
	Oscar Valencia Castaño	Concejal	San José del palmar		oscarvalencia388@gmail.com
	José Abelardo Castro	Concejal	Alto de Baudó		N.Registra
	Jesús Alecis Murillo Córdoba	Concejal	Alto de Baudó		alecis89@hotmail.com
Huila	Ángel Albeiro Chilito Muñoz	Concejal	Isnos		angelalbeirochilito.2014.gmail.com
Magdalena	Neleidys Medina González	Concejal	Banco		sebasjone@hotmail.com
Meta	Jerson Jair López	Concejal	Cumaral		jersonlopcardenas@gmail.com

Nariño	Erick Adrián Velasco	Concejal	Pasto		eravelasco@gmail.com
Risaralda	Genaro Avilez Muñoz	Concejal	Quinchía		genaroavilez2016@gmail.com
	María Gloria Mejía Montoya	Edil	Corregimiento de la florida		
Santander	Luis Humberto Gómez	Concejal	Piedecuesta		humbertogomez33@hotmail.com
	Leónidas Gómez Gómez	Diputado	Santander		gomez.leonidas@hotmail.com
Tolima	Gloria Esperanza Perdomo	Edil	Corregimiento 16 Totumo		N. Registra

6. Conclusiones.

Los firmantes de este documento, actuando como representantes del nuevo partido político que surgió como consecuencia de la escisión del Polo Democrático Alternativo solicitamos al Consejo Nacional Electoral que le reconozca personería jurídica para actuar como un nuevo partido político, además de reconocer los otros derechos políticos señalados en el numeral segundo del apartado "solicitud". Solicitud que fundamos en que i) la escisión es una expresión del derecho fundamental a la participación política y que se desarrolla a partir del principio constitucional de autonomía e independencia de los partidos políticos; ii) el derecho político fundamental a la escisión de un partido político es un derecho de aplicación inmediata que no requiere de ley estatuaria específica para ser reconocido; iii) que los vacíos normativos sobre el derecho fundamental a escindir deben ser interpretados dando aplicación al principio democrático de tal forma que no se restrinja el ejercicio del derecho fundamental; iv) que el principio hermenéutico de la analogía soporta la premisa de que el ejercicio del derecho fundamental a la escisión genera consecuencias jurídicas, en particular, la de crear una nueva persona jurídica con derechos semejantes a los de otras personas jurídica; y, v) la aplicación del derecho fundamental a la igualdad para el reconocimiento de personería jurídica de partidos políticos en circunstancias en las que no existe ley estatutaria que regule

el ejercicio de derechos indica que el partido DIGNIDAD debe tener el reconocimiento de su personería jurídica.

IV. SOBRE EL NUEVO PARTIDO POLÍTICO.

Como consecuencia de la aprobación de la escisión del Polo Democrático Alternativo, se mantuvo la personería jurídica del PDA pero surgió una nueva persona jurídica, por lo que el sector político escindido se reunió el pasado martes 27 de octubre para, en ejercicio del derecho fundamental a la participación política y del derecho a actuar con autonomía e independencia, constituir el nuevo partido político. Así, reunidas las personas que se acogieron a la escisión del Polo Democrático Alternativo con otros ciudadanos y ciudadanas, se constituyó el partido político que en adelante se denominará DIGNIDAD. Igualmente, en esta reunión se aprobaron las bases programáticas del partido, los estatutos, el código de ética y se eligieron presidente, vicepresidente, secretario general y comité ejecutivo nacional.

Así las cosas, el sector escindido, está compuesto por quienes firmaron la solicitud de escisión del Polo Democrático Alternativo y por quienes han venido manifestando su voluntad libre e inequívoca de pertenecer al nuevo partido político DIGNIDAD.

Como muestra de lo anterior, se adjuntan a la presente petición: i) acta de asamblea de constitución del partido DIGNIDAD; ii) las bases programáticas del partido creado como consecuencia de la escisión; iii) los estatutos del partido; iv) el código de ética. Documentos con los que se cumplen los requisitos esenciales, que sumados al reconocimiento de la decisión soberana y autónoma de la escisión del PDA, configuran los presupuestos constitucionales y legales para que se proceda con el reconocimiento de la personaría jurídica y de los derechos políticos que le asisten al surgido partido político.

Con las actuaciones descritas, el sector escindido del Polo Democrático Alternativo ha creado un nuevo partido político, motivo por el que se solicita al Consejo Nacional Electoral proceder a reconocer la personería jurídica del partido político DIGNIDAD. Al igual que ocurre en el régimen comercial, en el régimen de partidos políticos vigente se encuentra instituida la figura de la escisión, que crea implícitamente una nueva persona jurídica. Sobre este asunto destacamos que la Superintendencia de Sociedades ha señalado que:

> "**el surgimiento de la nueva sociedad se dá para todos los efectos como un hecho implícito a la misma escisión y no, como un acto jurídico diferente a ella,** (…) como consecuencia del consentimiento expresado por los asociados de la escindente, de donde resulta que la determinación de escindir la sociedad se convierte a la vez en expresión del acto colectivo de creación de una nueva sociedad, por lo cual se exige

> que en el correspondiente proyecto aparezcan redactados sus respectivos estatutos"[12] (Énfasis propio).

Surgimiento de la nueva persona jurídica, en este caso del partido político DIGNIDAD, que pasa a ser registrado ante la autoridad electoral.

V. PETICIÓN DE ATENCIÓN PRIORITARIA

El artículo 20 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece:

> "Las autoridades darán atención prioritaria **a las peticiones de reconocimiento de un derecho fundamental cuando deban ser resueltas para evitar un perjuicio irremediable al peticionario,** quien deberá **probar sumariamente** la titularidad del derecho y el riesgo del perjuicio invocado". (Énfasis propio).

La presente solicitud se enmarca en lo establecido en el artículo citado. En primer lugar, por lo indicado en los apartados anteriores, la escisión del Polo Democrático Alternativo se realizó en ejercicio del derecho fundamental a la participación política, desarrollando la

---

dimensión negativa de la libertad de constituir partidos políticos, que contempla la posibilidad incluso de disolver, fusionar o **escindir** tales organizaciones.

La petición debe ser atendida de manera prioritaria toda vez que, de ser reconocida personería jurídica al partido político surgido de la escisión del Polo Democrático Alternativo, los militantes del nuevo partido no quedarán incursos en las causales de doble militancia, incluso sin renunciar a las curules que ostentan en la actualidad, para postularse en las próximas elecciones que se realizarán el 13 de marzo de 2022. Elecciones para las que se debe haber renunciado al Polo Democrático Alternativo, u ostentar las curules ya no del Polo Democrático Alternativo sino del nuevo partido que surge producto de la decisión partidaria de la escisión.

Finalmente, la solicitud debe ser atendida de manera prioritaria toda vez que de cara a las elecciones al Congreso de la República de 2022, es el próximo 13 de noviembre de 2020, es decir dentro de 18 días calendario, la fecha desde la que se empieza a contar el periodo en el que una persona queda incursa en causal de doble militancia de conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 1475 de 2011.

ANEXOS

---

[12] Concepto dentro del radicado 220-3637 220-017131, abril 20 de 2004 disponible en: https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/normatividad/normatividad_conceptos_juridicos/15265.pdf

1. Carta del sector político que solicitó al Comité Ejecutivo Nacional del Polo Democrático Alternativo la escisión del Partido. (Folios 23 a 25)
2. Resolución 075 de 2020 del Comité Ejecutivo Nacional del Polo Democrático Alternativo. (Folios 26 a 28)
3. Acta del Congreso Nacional extraordinario realizado por el Polo Democrático Alternativo el 24 de octubre de 2020. (Folios 29 a 32)
4. Acta de escrutinios de la votación del Congreso Nacional extraordinario realizado por el Polo Democrático Alternativo el 24 de octubre de 2020. (Folios 33 a 37)
5. Cartas de 36 personas que ocupan cargos de representación popular por el Polo Democrático Alternativo que manifiestan su decisión de formar parte del sector escindido y, en consecuencia, pertenecer al nuevo partido político que surge producto de la escisión. (Folios 38 a 74)
6. Acta de la reunión de constitución del partido DIGNIDAD. Reunión realizada el martes 27 de octubre de 2020. (Folios 75 a 81)
7. Listado de personas asistentes a la reunión de constitución del partido político DIGNIDAD. (Folios 82 a 84)
8. Programa político del partido DIGNIDAD. (Folios 85 a 88)
9. Estatutos del partido político DIGNIDAD (Folios 89 a 114)
10. Código de Ética del partido político DIGNIDAD. (Folios 115 a 134)
11. Reglamento de bancadas del partido político DIGNIDAD. (Folios 135 a 144)
12. Nómina del Comité Ejecutivo Nacional del partido político DIGNIDAD con sus respectivos suplentes. (Folios 145 a 148)

NOTIFICACIONES

Para todos los efectos pertinentes, los solicitantes seremos notificados de la decisión del Consejo Nacional Electoral en los correos electrónicos gomez.leonidas@hotmail.com , ibama3@gmail.com, gustavotrianasuarez@yahoo.es, Jorge.robledo.castillo@senado.gov.co , Jorge.gomez@camara.gov.co

De los magistrados y magistradas,

LEONIDAS GÓMEZ GÓMEZ
CC.
Presidente

ALBA LUZ PINILLA
CC.
Vicepresidenta
Partido político DIGNIDAD

Partido político DIGNIDAD

GUSTAVO RUBÉN TRIANA SUÁREZ
CC. 91.010.232
Secretario General
Partido político DIGNIDAD

JORGE ENRIQUE ROBLEDO
CC. 14.204.889
Senador
Partido político DIGNIDAD

JORGE ALBERTO GÓMEZ
CC. 8.426.821
Representante a la Cámara por Antioquia
Partido político DIGNIDAD

COMUNICADOS OFICIALES

EL CNE DEJA SIN EFECTO LAS DECISIONES POR LA COMISIÓN ÉTICA-DISCIPLINARIA NACIONAL DEL PARTIDO -FARC- HOY PARTIDO COMUNES Y POR EL CONSEJO POLÍTICO NACIONAL, EN CONTRA DEL CIUDADANO BENEDICTO DE JESÚS GONZÁLEZ MONTENEGRO.

Cortesía: Partido Comunes

El Consejo Nacional Electoral dejó sin efecto la decisión adoptada por la Comisión Ética-Disciplinaria Nacional del Partido -FARC- hoy Partido Comunes y por el Consejo Político Nacional, en cuanto al procedimiento disciplinario adelantado en contra del ciudadano Benedicto De Jesús González Montenegro, al separarlo como militante del partido por la presunta violación del artículo 13 de los estatutos y 3º del Código de Ética,

La sala plena adoptó la decisión al considerar que quien debe adelantar los procesos disciplinarios de los militantes es la Comisión Departamental y no la Comisión Ética- Disciplinaria Nacional, según lo establece el procedimiento interno de las comisiones de ética y disciplina de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común hoy Partido Comunes

De igual forma la sala plena ordena al partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC hoy Partido Comunes, remitir al órgano competente esta decisión para que determine si las conductas de los miembros de la Comisión Ética-Disciplinaria Nacional y de los miembros del Consejo Político Nacional se realizaron de forma correcta conforme a la normativa de la Organización Política.

12 Agosto 2021 Visto: 263

Twitter Facebook

HORARIOS DE ATENCIÓN

Horario para radicación de correspondencia:
Lunes a viernes de 8:00A.M. a 12:00M. y de 2:00P.M a 4:00P.M, (Por emergencia sanitaria).

Avenida Calle 26 # 51-50 Edificio Organización Electoral CAN (Bogotá - Colombia)

Conmutador: (57 1 2200 800) Ext 1816

Código Postal: 111321.

PETICIONES, QUEJAS RECLAMOS Y DENUNCIAS

atencionalciudadano@cne.gov.co

NOTIFICACIONES JUDICIALES

cnenotificaciones@cne.gov.co

SALA DE PRENSA

prensacne@cne.gov.co

(57) 1 2200 800 ext. 1951

Consejo Nacional Electoral COLOMBIA

Síguenos en:

Última actualización: 13/08/2021

Horario de atención Chat Virtual: Lunes y miércoles Inquietudes Temas fondo de campaña, martes y jueves chat General de 9:00 a.m. a 12:00 m

Políticas de privacidad y condiciones de uso

Correo Institucional

© CNE- 2021. All Rights Reserved.

Chat

FARC

RESOLUCIÓN No 002 DE 2020

"Por medio de la cual el **CONSEJO POLÍTICO NACIONAL**, confirma la recomendación de separación del partido por **FALTA GRAVE** del señor **BENEDICTO DE JESÚS GONZÁLEZ MONTENEGRO**, identificado con cédula de ciudadanía No 77.032.391 de Valledupar, del partido político, de acuerdo con la ley 1475 de 2011, la ley 130 de 1994, el Estatuto del partido de 2019; el Código de Ética-Disciplinario de 2017; la resolución No 2961 de 2017 del Consejo Nacional Electoral; el reglamento interno disciplinario del 06 de agosto de 2018, las recomendaciones de la **COMISIÓN DE ÉTICA DISCIPLINARIA NACIONAL**, del 04 de marzo de 2020 y las Actas No 069 del 15 de junio de 2020 y 070 del 03 de julio de 2020 del **CONSEJO POLÍTICO NACIONAL**".

I. ANTECEDENTES, CONSIDERACIONES FÁCTICAS Y JURÍDICAS, CALIFICACIÓN DE LA FALTA Y SANCIÓN DISCIPLINARIA

1° Que el **COMITÉ DE ÉTICA-DISCIPLINARIA** del partido, es una instancia de control del partido legal y estatutariamente conformada en cumplimiento de sus atribuciones reglamentarias por competencia, observó el debido proceso en el proceso disciplinario surtido en contra del militante y miembro del **CONSEJO NACIONAL DE LOS COMUNES,** señor **BENEDICTO DE JESÚS GONZÁLEZ MONTENEGRO**, identificado con cédula de ciudadanía No 77.032.391 de Valledupar, cumplió constitucional, legal y reglamentariamente con las reglas del debido proceso, respecto del proceso éticos y disciplinario que inicio de oficio y/o sometido a su competencia, de conformidad con la ley estatutaria de los partidos prevista en la ley 1475 de 2011; las facultades estatutarias de la resolución No 2961 de 2017 o Personería Jurídica concedida por el **CONSEJO NACIONAL ELECTORAL** al partido político **FUERZA ALTERNATIVAREVOLUCIONARIA DEL**

COMÚ; los **ESTATUTOS** del partido de 2019; el **CÓDIGO DE ÉTICA-DISCIPLINARIO** de 2017 y su **REGLAMENTO INTERNO DISCIPLINARIO** de agosto 06 de 2018; las actas 069 y 070 del **CONSEJO POLITICO NACIONAL** y todas las demás reglamentaciones vigentes del partido político **FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMÚN**.

2º Que la **COMISIÓN DE ÉTICA-DISCIPLINARIO NACIONAL,** inició investigación disciplinaria de oficio por la conducta del militante y miembro del **CONSEJO NACIONAL DE LOS COMUNES** del partido político **FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMÚN,** señor **BENEDICTO DE JESUS GONZALEZ MONTENEGRO,** por hechos notorios y públicos, mediante acto administrativo No 008 del 31 de enero de 2020, por presunta violación legal y reglamentaria a los artículos 3º y 13, de los **ESTATUTOS y del CODIGO DE ETICA DISCIPLINARIO** del partido en su orden, previa la determinación y cualificación de la persona disciplinada y la valoración amplia y suficiente del material probatorio recaudado en el proceso, como consecuencia de las actuaciones y conductas, que son necesarias de establecer frente a las reglamentaciones precitadas.

3º Que las conductas presuntamente ilegales e irregulares atribuibles al militante, señor **BENEDICTO DE JESÚS GONZÁLEZ MONTENEGRO**, están relacionadas con el rechazo público a las orientaciones de la dirección del partido político **FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMÚN**, pese a que éstas han sido acogidas por mayoría simple y de consenso y es obligación de todo militante respetarlas y cumplirlas y expresar en las instancias internas reglamentariamente establecidas manifestar su autocritica y pese a lo anterior, el militante señor **BENEDICTO DE JESÚS GONZÁLEZ MONTENEGRO**, acudió a instancias externas del partido, de manera pública, para realizar sus criticas en contra de miembros de la dirección del partido mediante conductas de división, grupismo a parte de la militancia activa del partido, con cuyo actuar culposo pero de manera preconcebida, posiblemente causar perjuicio y daño al buen nombre a que tiene el partido como persona jurídica y de manera personal a sus dirigentes en proceso de reincorporación y en ejercicio

del derecho a participar activamente en la política colombiana, de conformidad y en cumplimiento del **ACUERDO FINAL DE PAZ.**

4º Que la **COMISION DE ETICA-DISCIPLINARIA NACIONAL,** ponderó y evaluó la conducta inicialmente sujeta de investigación disciplinaria en contra del militante señor **BENEDICTO DE JESUS GONZALEZ MONTENEGRO** con la cual podría incumplir, inobservar o violar los deberes y prohibiciones, e incurrir en consecuencia en una posible conducta ética y jurídica de reproche disciplinario.

5º Que la conducta por acción del militante, señor **BENEDICTO DE JESUS GONZALEZ MONTENEGRO** fue valorada y determinada en el proceso disciplinario de competencia inicial por parte de la **COMISIÓN DE ÉTICA-DISCIPLINARIO NACIONAL**, y posteriormente fue graduada y ponderada como una posible conducta culposa por acción atribuible a una **FALTA GRAVE** prevista reglamentariamente, al no acudir a los mecanismos internos previstos y de obligatorio cumplimiento por parte de los miembros o militantes del partido político, respecto a sus declaraciones públicas en contra de las directivas del partido político **FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMÚN**, ajena a los canales o instancias internas reglamentadas y con cuyo proceder es atribuible a una conducta culposa al no prever los efectos nocivos de su conducta y pudo causar un perjuicio grave a la organización política y al buen nombre de sus directivos.

6º Que la conducta por acción desplegada por el militante, señor **BENEDICTO DE JESÚS GONZALEZ MONTENEGRO,** pudo violar ostensiblemente la reglamentación legal, reglamentaria y estatutaria vigente y en consecuencia la **COMISIÓN DE ÉTICA-DISCIPLINARIA NACIONAL,** recomendó a la **COMISIÓN POLITICA NACIONAL,** por competencia y en cumplimiento del Manual de Procedimiento y el Código Ético-Disciplinario vigentes, evaluar la conducta y graduar la posible **FALTA GRAVE** como sanción disciplinaria consistente en la **SEPARACIÓN DEL PARTIDO POLITICO FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMÚN.**

7º Que la **FALTA GRAVE**, de conformidad con el artículo 9 sobre faltas previstas en el **CODIGO DE ÉTICA-DISCIPLINARIO,** procede ante el

incumplimiento de los deberes de las y los militantes que causen perjuicio al partido o que represente la violación a las prohibiciones, a los principios de obligatorio cumplimiento y al régimen e inhabilidades, incompatibilidades, conflictos de interés y de impedimentos y recusaciones o ante la reincidencia de faltas leves.

8º Que la **COMISIÓN DE ÉTICA-DISCIPLINARIO NACIONAL**, en cumplimiento del parágrafo del artículo 10 del **CÓDIGO DE ÉTICA-DISCIPLNARIO**, ponderó, graduó y recomendó al **CONSEJO POLITICO NACIONAL**, la sanción disciplinaria de **SEPARACIÓN DEL PARTIDO**, por **FALTA GRAVE** cometida por el militante, señor **BENEDICTO DE JESÚS GONZÁLEZ MONTENEGRO**, de conformidad con la naturaleza de la falta, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, los motivos determinantes y los perjuicios causados al partido y a los directivos del mismo, ante la violación a los deberes y prohibiciones vigentes y exigidas a todos los militantes del partido y cuya reglamentación goza de presunción de legalidad.

9º Que la **COMISIÓN DE ÉTICA-DISCIPLINARIA NACIONAL**, de conformidad con las pruebas que obran en el plenario disciplinario, consistentes en material documental, videos y entrevistas a medios de comunicación, concluyó que las conductas por acción desplegadas por el señor **BENEDICTO DE JESÚS GONZÁLEZ MONTENEGRO**, no fueron autorizadas por el partido, generaron desorientación, divisionismo y caos al interior de la organización política e igualmente produjo alarma nacional por las implicaciones de riesgo a la seguridad personal de los militantes del partido en cumplimiento del Acuerdo Final de Paz y además causó perjuicio al buen nombre de las personas que desempeñan cargos directivos.

10º Que el militante, señor **BENEDICTO DE JESÚS GONZÁLEZ MONTENEGRO**, el 27 de enero de 2020, declaró textualmente al diario **EL ESPECTADOR**-redacción política
(https://www.elespectador.com/noticias/politica/por-congraciarse-con-el-establecimiento-farc-se-esta-distanciando-de-sus-bases-benedicto-gonzalez-articulo-901764/)

"El exguerrillero, quien se afianza como una de las fuerzas más críticas a la dirigencia del partido de la rosa, advierte que la colectividad reclama

un "cambio de rumbo" y señala que la crisis en la dirección, "se expresa en un descalabro político y organizativo", conducta por acción que se encuentra prohibida de manera expresa por los estatutos y por el **CÓDIGO DE ÉTICA-DISCIPLINARIO.**

11° Que de igual manera, el militante, señor BENEDICTO DE JESÚS GONZÁLEZ MONTENEGRO, acudió a pronunciamiento públicos en los cuales señaló textualmente:

"Benedicto González Montenegro, lanzó algunos cuestionamientos con respecto a la carta de Timochenko sobre Iván Márquez.

En su cuenta de Twitter, Gonzalez afirmó que en el documento se refleja la opinión personal de Rodrigo Londoño y no la del partido Farc, ni la dirección, dijo además, que está dirigida a la tribuna pública y no a la militancia.

Adicional a eso, afirmó, que ese comunicado recibió la aprobación de la derecha y la socialdemocracia, más no fue bien recibida por la izquierda y las base del partido.

https://www.cablenoticias.tv/politica/benedicto-gonzalez-lanzo-criticas-a-timochenko-por-carta-sobre-marquez/

https://www.semana.com/nacion/articulo/benedicto-gonzalez-habla-sobre-la-falta-de-autoridad-de-timochenko/616977

12° Que con el actuar culposo y grave atribuible al disciplinado precitado, la **COMISIÓN DE ÉTICA-DISCIPLINARIA NACIONAL,** concluyó que se causó un perjuicio grave al partido, mediante unas conductas por acción violatorias a los deberes y prohibiciones contemplados a todo militante del partido y en especial, a las contenidas en el literal s) del artículo 3° y el literal c) del artículo 4° del capítulo primero, del **CÓDIGO DE ÉTICA-DISCIPLINARIO NACIONAL** y 13 de los **ESTATUTOS.**

13° Que la **COMISIÓN DE ÉTICA-DISCIPLINARIO NACIONAL,** durante el proceso de investigación disciplinaria acudió a sendas notificaciones para realizar las diligencias de versión del disciplinado como garantía al debido proceso y el derecho a la contradicción, pero el señor **BENEDICTO DE JESÚS GONZÁLEZ MONTENEGRO,** nunca asistió a las citaciones debida y legalmente realizadas sin justa causa mediante la demostración de fuerza mayor o caso fortuito como eximente de responsabilidad del incumplimiento, todo en cumplimiento

FARC

del procedimiento de los **ESTATUTOS** y del **CÓDIGO DE ÉTICA-DISCIPLINARIO,** como obra en el acervo documental probatorio del proceso disciplinario.

14° Que de la misma manera, se notificó al disciplinado en condición de militante, señor **BENEDICTO DE JESUS GONZALEZ MONTENEGRO,** la apertura de pliegos de la investigación disciplinaria iniciada de oficio, para escucharlo en diligencia de descargos el día 27 de febrero de 2020 y tampoco asistió sin justa causa.

15° Que con fecha 2 de marzo de 2020, la **COMISIÓN DE ÉTICA-DISCIPLINARIO NACIONAL**, dio respuesta a un derecho de petición al mencionado disciplinado, en el cual solicitaba información sobre el proceso disciplinario de su interés, dentro del término legal de manera concreta, congruente y de fondo, con cuya prueba se demuestra por conducta concluyente que tenía conocimiento del proceso disciplinario, que se ratifica con fecha 25 de junio de 2020, cuando radica otro derecho de petición en el cual solicita información documental sobre el mencionado proceso, con lo cual se establece por conducta concluyente el conocimiento del proceso disciplinario por parte del disciplinado.

16° Que ante el incumplimiento sin justa causa a las diligencias citadas por parte del militante señor **BENEDICTO DE JESUS GONZALEZ MONTENEGRO,** la **COMISIÓN DE ETICA-DISIPLINARIO NACIONAL,** continuó con el trámite legal del proceso disciplinario en cumplimiento del Manual de Procedimiento, según la situación procesal disciplinaria a través de las actas números 10 del 8 de febrero de 2020 y 11 del 27 y 28 de febrero de 2020, omisiones que condujeron a la decisión final sobre el trámite de conocimiento, hasta su decisión de la existencia de una posible falta grave y que se formaliza, según comunicación acordada por unanimidad por sus miembros el 04 de marzo de 2020 mediante recomendación por la naturaleza de la falta grave al **CONSEJO POLITICO NACIONAL**, por razones de su competencia a través de recomendación individualizada sobre la conducta culposa por acción sujeta de la posible sanción disciplinaria de **SEPARACIÓN** del partido.

17° Que en consecuencia y de acuerdo con el procedimiento observado en el plenario disciplinario del militante señor **BENEDICTO DE JESÚS**

GONZÁLEZ MONTENEGRO, se observaron todos los principios constitucionales y las normas legales y estatutarias, como desarrollo y cumplimiento especial del artículo 29 de la Constitución Política, sobre el derecho al debido proceso, a la contradicción y a la doble instancia, en toda actuación administrativa y/o disciplinaria, vigente para los partidos políticos, que conforman el Sistema Nacional Electoral.

18° Que los procedimientos y ritualidades estatutarias del ente de control disciplinario del partido respetó y acató en su orden **COMISIÓN DE ÉTICA DISCIPLINARIO NACIONAL** y el **CONSEJO POLÍTICO NACIONAL**, el debido proceso, los principios constitucionales, la normatividad interna y legal vigente en el proceso disciplinario, en cumplimiento del literal c) del artículo 12 del **CÓDIGO DE ÉTICA-DISCIPLINARIO,** para recomendar la conducta por acción y posible sanción a título de **FALTA GRAVE** de un militante.

19° Que de conformidad con todo lo expuesto, el **CONSEJO POLITICO NACIONAL** en cumplimiento de su competencia según las exigencias de la normatividad vigente, tramitó la recomendación a su interior proveniente de la **COMISIÓN DE ÉTICA-DISCIPLINARIO NACIONAL**, para ponderar su decisión y evaluar la conducta y posible sanción en estricto rigor del principio del debido proceso, en cumplimiento de la más amplia deliberación democrática, para la adoptar su decisión sobre su militante activo en el partido político, sujeto de investigación disciplinaria, de conformidad con el Manual de Procedimiento de agosto 06 de 2018.

20° Que de acuerdo con los tramites expuestos en los considerandos que preceden, el **CONSEJO POLITICO NACIONAL**, debe motivar debidamente los actos sancionatorios de confirmación o rechazo de su competencia por faltas graves y gravísimas por acción, como rigor legal de una resolución motivada, con la cual se defina una situación particular, subjetiva y concreta, con estricto apego al principio de legalidad y al debido proceso de la doble instancia y como garantía al derecho a la defensa y a la contradicción, de conformidad con el artículo 29 de orden constitucional y la sentencia SU-146/20 de la Corte Constitucional.

21° Que en cumplimiento de lo expuesto, el **CONSEJO POLITICO NACIONAL**, en sesión del 15 de junio de 2020 a la cual asistieron 12 de sus miembros activos constituyeron el quorum de deliberación y de decisión, y en consecuencia se sometió a aprobación la recomendación individualizada y cualificada de militantes del partido sujetos de reproche disciplinario por parte de la **COMISIÓN DE ÉTICA-DISCIPLINARIO NACIONAL** en escrito del 4 de marzo de 2020 en seis (6) folios y suscrita por todos sus miembros.

22° Que la recomendación sancionatoria de que trata el anterior considerando, fue acogida por parte del **CONSEJO POLÍTICO NACIONAL**, como consta en el Acta No 069 del 15 de junio de 2020, de conformidad con la individualización de la conducta del militante disciplinado **BENEDICTO DE JESÚS GONZALEZ MONTENEGRO**, fundamentada en el procedimiento disciplinario, el cual concluyó con la recomendación de la **COMISIÓN DE ETICA-DISCIPLINARIO NACIONAL** y en consecuencia se decidió **ACOGER** la sanción de **SEPARACIÓN** del partido político **FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMÚN**, a título de **FALTA GRAVE**, de conformidad con el Manual de Procedimiento de agosto 06 de 2018.

23° Que la recomendación de la **COMISIÓN DE ÉTICA-DISCIPLINARIO NACIONAL,** fue aprobada por el acta número 069 del 15 de junio de 2020, la cual fue aprobada por votación mayoritaria simple, con explicación escrita de un consejero, por parte del **CONSEJO POLÍTICO NACIONAL**, en cumplimiento de los numerales 2 y 3 del artículo 9° y literal d) del artículo 10° del **CÓDIGO DE ETICA-DISCIPLINARIO** vigente.

24° Que el consejero del **CONSEJO POLÍTICO NACIONAL, JAIRO ESTRADA,** de manera posterior a la sesión del día 15 de junio del 2020, en la cual se confirmó la recomendación de que trata la presente resolución, allegó escrito donde argumenta la posible inexistencia de la **COMISIÓN DE ETICA-DISCIPLINARIA NACIONAL** y alude a la competencia de la **ASAMBLEA NACIONAL DE LOS COMUNES** sobre la elección de sus integrantes y a la inexistencia del debido proceso denominado "reglas del proceso" y finalmente considera que la votación al interior del **CONSEJO POLÍTICO NACIONAL**, era improcedente al

realizarse de manera general, como sucedió en la reunión del 15 de junio de 2020, es decir, sostiene que era necesaria una votación para cada caso por separado y evitar posibles impugnaciones al **CONSEJO NACIONAL ELECTORAL.**

25º Que el **CONSEJO POLITICO NACIONAL**, al decidir la votación en bloque sobre las recomendaciones de la **COMISIÓN DE ÉTICA-DISCIPLINARIO NACIONAL,** tuvo en cuenta la ponderación y graduación de la falta, por cuanto sus recomendaciones de marzo 04 de 2020, describieron de forma detallada la conducta desplegada del entonces militante, señor **BENEDICTO DE JESÚS GONZALEZ MONTENEGRO** de manera individual y concreta del disciplinado, de acuerdo con el punto 5º (Folio 3) de la recomendación escrita de fecha 04 de marzo de 2020 y así lo destacó el consejero **JULIÁN GALLO CUBILLOS,** en la sesión citada, cuando argumentó que por esa circunstancia de tramite al interior del partido, se fundamenta la legalidad del procedimiento reglamentario observado.

26º Que posteriormente el acta No 069 del 15 de junio de 2020 del **CONSEJO POLITICO NACIONAL** de que trata el numeral precitado, fue aprobada por mayoría simple en sesión del **CONSEJO POLITICO NACIONAL,** del 03 de julio de 2020, con cuyo procedimiento quedó en firme la decisión sobre las recomendaciones de la **COMISIÓN DE ÉTICA-DISCIPLINARIO NACIONAL** del 04 de marzo de 2020.

27º Que documentalmente obra prueba sobre la existencia de la **COMISIÓN DE ÉTICA-DISCIPLINARIA NACIONAL**, de conformidad con la decisión del CONSEJO POLITICO NACIONAL, mediante la cual se eligieron sus integrantes de la siguiente forma:

LUIS OSCAR USUGA, OLGA FLOREZ, GILBERTO DE JESÚS GIRALDO, EDGAR LÓPEZ Y ANGELA CASTELLANOS y en consecuencia, sobre la constitución directiva, se informó formalmente por parte del partido, al **CONSEJO NACIONAL ELECTORAL** para su registro e inscripción correspondiente, de conformidad con el artículo 3º de la ley 1475 de 2011.

28º Que en consecuencia de lo actuado, se ha observado a plenitud por parte de la **COMISIÓN DE ÉTICA Y DISCIPLINARIA NACIONAL** y del **CONSEJO POLITICO NACIONAL,** los principios constitucionales y

FARC

disposiciones legales y reglamentarias, con estricto rigor del principio del debido proceso y en cumplimiento de la más amplia deliberación democrática, para separar formalmente a un militante del partido político al no advertir causales de impugnación o de presuntas nulidades a la presente decisión disciplinaria, la cual se encuentra conforme a las competencias asignadas por la ley, los reglamentos y los principios constitucionales sobre el debido proceso.

29º Que en este sentido y de conformidad con los antecedentes, situación fáctica y jurídica, calificación de la falta y la sanción descrita en el presente acto administrativo, proceden los recursos de ley, mediante el cual se resolvió una situación individual y concreta al señor **BENEDICTO DE JESÚS GONZÁLEZ MONTENEGRO**, como militante del partido político **FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMÚN,** en cumplimiento del derecho al debido proceso y al principio de la doble instancia.

30º Que reiterada jurisprudencia del H Consejo de Estado ha considerado que el proceso disciplinario pretende preservar las normas administrativas de carácter ético y jurídico, como deberes funcionales destinado a proteger los principios rectores de la función administrativa aplicables a los militantes del partido político **FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMÚN** adscrito al Sistema Electoral Colombiano.

II. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **CONSEJO POLITICO NACIONAL** del partido político **FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMÚN,** a través de su Presidente y vocero del partido, de acuerdo con los artículos 23, 25 y 26 de la Resolución No 2961 de 2017 expedida por el **CONSEJO NACIONAL ELECTORAL,** las actas 069 del 15 de junio y 070 del 03 de julio de 2020 del **CONSEJO POLITICO NACIONAL** y demás normas reglamentarias,

FARC

III. RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER la recomendación del **COMITÉ DE ÉTICA-DISCIPLINARIO** sobre la sanción disciplinaria consistente en la **SEPARACIÓN DEL PARTIDO** del señor **BENEDICTO DE JESÚS GONZÁLEZ MONTENEGRO** identificado con cédula de ciudadanía No 77.032.391 de Valledupar, de conformidad con la Constitución, las leyes y los estatutos vigentes del partido político **FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMÚN** y en especial del literal d) y parágrafo primero del artículo 10 del **CÓDIGO DE ÉTICA-DISCIPLINARIO,** sobre sanciones, de conformidad con la conducta del disciplinado y la graduación y ponderación de la falta, descrita en el presente proveído disciplinario.

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente resolución proceden los recursos de reposición y de apelación ante el **CONSEJO NACIONAL DE LOS COMUNES,** de acuerdo con los numerales 9, 10 y 11 del artículo 7° del Manual de Procedimiento y numeral 12 del artículo 12 del **CÓDIGO DE ÉTICA-DISCIPLINARIO** y el literal c) del artículo 26 de la resolución No 2961 de 2017 y los principios y normas constitucionales sobre el debido proceso, a la contradicción, a la doble instancia y de conformidad con la jurisprudencia vigente en la materia, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de su decisión.

ARTÍCULO TERCERO: Enviar copia del proveído y sus anexos a la secretaría de la **COMISIÓN DE ETICA-DISCIPLINARIO NACIONAL** para que en su instancia, informe el contenido de la presente decisión al **CONSEJO NACIONAL DE LOS COMUNES** como organismo superior jerárquico del **CONSEJO POLÍTICO NACIONAL**, para su conocimiento y trámite disciplinario de segunda instancia de ser necesario, como garantía de los derechos del militante disciplinado y de conformidad con el literal c) del artículo 26 de la resolución No 2961 de 2017.

FARC

ARTÍCULO CUARTO: Una vez quede en firme la presente sanción disciplinaria, excluir del registro de militancia del partido político **FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMÚN** al señor **BENEDICTO DE JESÚS GONZÁLEZ MONTENEGRO,** identificado con cédula de ciudadanía No 77.032.391 de Valledupar, e informar públicamente al partido de conformidad con el numeral 8 del artículo 13 del **CÓDIGO DE ÉTICA-DISCIPLINARIO** lo decidido en la presente resolución.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente decisión por los medios legales como una actuación administrativa que se encuentra regulada de manera general por la ley 1437 de 2011, al pertenecer el partido político **FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMÚN** al Sistema Electoral Colombiano y en consecuencia a la estructura del Estado, de conformidad con la dirección electrónica del disciplinado, según la legislación transitoria por efectos de la pandemia, consagrada en el artículo 4 del decreto 491 de 2020 y en el decreto 806 de 2020 a la siguiente dirección: albertocor010101@gmail.com

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Rodrigo Londoño E.

FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMÚN
NIT. 901137286-7

21 JUL 2020

HORA 2:23 pm Nº Folios 13
EMPRESA FARC
CORRESPONDENCIA RECIBIDA ___ ENVIADA X

RODRIGO LONDOÑO ECHEVERRY

PRESIDENTE

FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMÚN

Bogotá, julio 21 de 2020

Proyectó: Of. Jurídica.

#UnaNuevaForma
#DeHacerPolítica

FARC

Ruta electrónica: gestiondocumentalfarc@gmail.com

Dependencia: COMISIÓN ÉTICO DISPLINARIA NACIONAL
Resolución: No. 006 del 24 de febrero de 2021
Implicado(s): VICTORIA SANDINO SIMANCA HERRERA
Expediente: 2021-001
Cargo y Entidad: Integrante del Consejo Nacional de los Comunes- Miembro del Consejo Político Nacional

Actuación: Auto de Notificación de Investigación Disciplinaria

Quejosos:
Militantes
Maria Helena Méndez, Cabrera Comuna Lucero Palmara
Manuel Bolívar
Carlos Eduardo Villarraga Castillo, Consejo Político Distrital
German Moreno Casallas
Diego Méndez
José Sáenz
Raimundo Raish, Consejo Político del Atlántico
Miguel Cifuentes Ardila
Tulio Murillo Avila, Consejo político de Dpto del Meta

Bogotá, D.C., Febrero 24 de 2021
En cumplimiento del Auto de fecha del día 24 de Febrero 2021,

1. Que, La Comisión de Ético–Disciplinaria Nacional de FARC en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales, reglamentarias, estatutarias y de acuerdo con las facultades conferidas por los artículos 34º y 35º, del Código de Ético- disciplinario y de acuerdo con Los ESTATUTOS DEL PARTIDO FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMÚN–FARC, aprobados por el primer Congreso Constitutivo del Partido Político–FARC, celebrado en Bogotá D. C., entre el 27 de agosto y treinta y uno (31) de agosto de 2017, que determinan la existencia de una Comisión Ético Disciplinaria Nacional, aprobada por el Congreso Constitutivo.

2. Que, en cumplimiento corresponde a la Comisión de Ética – disciplinaria Nacional de FARC, observar en todos sus procedimientos como reglamento especial establecido en el CÓDIGO ÉTICO-DISCIPLINARIO, que establece:

   ***Articulo 34. Código Ético-Disciplinario:** Las conductas de los miembros del Partido que incumplan los presentes Estatutos y, en

especial sus deberes, serán juzgados con observancia de los principios universales del debido proceso consagrados en la Constitución Política, las leyes y los reglamentos.

3. Que, en su Artículo 2º, consagra que se aplicará a todo/as lo/as militantes del Partido y, en especial, a quienes ejerzan cargos gubernamentales o en los cuerpos de elección popular en nombre del Partido, y a quienes desempeñen cargos en los órganos directivos del Partido.
4. Que, el Artículo 35º. Comisión Ético-Disciplinaria Nacional, ordena que se constituya una Comisión Ético-Disciplinaria Nacional, en los términos y funciones señaladas en el reglamento citado.
5. Por medio del Manual de Procedimiento Interno de las comisiones de ética y disciplina de la Fuerza Alternativa Revolucionaría del Común FARC, aprobado en la ciudad de Bogotá, el día lunes 6 de agosto de 2018, aprobado por el Consejo Político Nacional de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, como potestad conferida mediante Resolución 2691 de 2017 del Consejo Nacional Electoral CNE, que reconoce lo anteriormente mencionado bajo el reglamento legal establecido por la ley colombiana; otorgando así la facultad iniciar investigaciones a fin de determinar los elementos que permitan presumir que una conducta por acción u omisión, constitutiva de falta disciplinaria.

   "Articulo 34. Código Ético-Disciplinario: *Las conductas de los miembros del Partido que incumplan los presentes Estatutos y, en especial, sus deberes serán juzgados con observancia de los principios universales del debido proceso conforme, al código a Artículo 2o. El Código Ético Disciplinario se aplicará a todo/as lo/as militantes del Partido y, en especial, a quienes ejerzan cargos gubernamentales o en los cuerpos de elección popular en nombre del Partido, y a quienes desempeñen cargos en los órganos directivos del Partido.*

   Artículo 35. Comisión Ético-Disciplinaria Nacional*. Se constituirá una Comisión Nacional Ético-Disciplinaria, en los términos y con las funciones señaladas por el Código Ético-Disciplinario"*[1]

TENIENDO EN CUENTA QUE:

6. Que, la militante VICTORIA SANDINO SIMANCA HERRERA, se encuentra inscrita en el Registro Único de militantes del Partido Político, y ostenta como miembro del Consejo Nacional de los Comunes e integrante del Consejo Político Nacional, y en consecuencia ostenta la condición de directiva del Partido.

[1] Estatutos del Partido Político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Capítulo VIII. Bogotá D.C, 31 de octubre de 2017.

7. Que, los artículos 107 y 209 de la Constitución Política, la Ley 734 de 2002, el artículo 4º de la Resolución 2691 de 2917, consagran los principios a observar en el proceso disciplinario.
8. Que, existen principios sobre los cuales se basa el Partido Político, que están contemplados en los Estatutos, y estos no pueden ser sujetos a violación o transgredirse, los cuales rezan lo siguiente:

"Articulo 4º Principios de Organización y funcionamiento. El partido acoge y garantiza para su organización y funcionamiento, las reglas y principios establecidos en el articulo107 de la Constitución Política, en especial los principios de transparencia, objetividad, moralidad, equidad de genero. Para estos efectos Incorpora a los presentes estatutos los siguiente contenidos del articulo 1 de la ley 1475 de 2011."

1. ***"Participación**. Entiéndase por el derecho de todo afiliado a intervenir, directamente o a través de sus representantes, en la adopción de las decisiones fundamentales del Partido o movimiento, en el máximo órganos de dirección y en la demás instancias del gobierno, administración y control, así como los derechos de elegir y ser elegidos en todo proceso de designación o escogencia de sus directivos y de sus candidatos a cargo y corporaciones de elección popular, de acuerdo con sus Estatutos.*
2. *I**gualdad**: Se entiende la exclusión de toda discriminación o privilegio por razones ideológicas, económicas, sociales de diversidad sexual o de etnia, en los procesos de participación en la vida del partido*
3. ***Pluralismo**. El pluralismo implica para las organizaciones políticas el deber de garantizar la expresión de las tendencias existentes en su interior, en particular de las minorías, sin perjuicio de la aplicación del principio de la mayoría, razón por la que los estatutos incluirán normas sobre quórum y mayorías especiales para la toma de decisiones fundamentales en materia de organización, funcionamiento y de participación de sus afiliados en la vida del Partido o movimiento.*
4. ***Equidad e igualdad de género**: En virtud del principio de equidad e igualdad de genero, los hombres y mujeres de las diversidades sexuales gozaran de igualdad real de derechos y oportunidades para participar en las actividades políticas, dirigir las organizaciones partidistas, acceder a debates electorales y obtener representación política.*
5. ***Transparencia**: Mantener permanentemente informados a sus afiliados sobre las actividades políticas, administrativas y financieras. Para su cumplimiento, deberán analizar cada año rendición de cuentas. Se crearan los mecanismos para garantizar el manejo de los recursos, cuidado del bien colectivo del Partido.*
6. ***Moralida**d: Los principios del Partido desarrollarán su actividad de conformidad con las normas de comportamiento adoptadas en los correspondientes códigos de ética."*

Así mismo, los principios de:

7. *Centralismo democrático*
8. *Dirección colectiva responsabilidad individual.*
9. *Planeación y Control*
10. *Critica y autocrítica.*

9. Que, en las conductas presentas por la militante VICTORIA SANDINO SIMANCA HERRERA se pueden presumir acciones constitutivas de faltas disciplinarias, a la vez presuntamente violatorias al Artículo 13º de los Deberes, literales 1,6,8,17,19, y 20 de los Estatutos del Partido, y al Artículo 3º de los Deberes literales a, f, h, q, s, t del Código de Ética, que señalan lo siguiente:

*"**Artículo 13º de los Deberes**. Son deberes de los/as militantes del partido:*

1.Cumplir con todo lo establecido en el presente Estatuto y actuar en concordancia con los principios del Partido.
6. Acatar y cumplir las orientaciones, determinaciones, y tareas que emanen de la comuna y de las diferentes instancias y órganos del Partido, con espíritu de iniciativa
8. Hacer uso correcto de la crítica frente a los errores y defectos, y la correspondiente autocritica cuando sea el caso.
17. Defender la unidad orgánica e ideológica del Partido.
19.Utilizar los conductos internos para dar las discusiones sin utilizar medios externos
20. Cumplir con el reglamento interno"[2]

***Artículo 3º. Deberes**. Conforme al artículo 13º. de los Estatutos del Partido, son deberes éticos y disciplinarios de las y los militantes del Partido los siguientes:*
a) Cumplir en un todo con los establecido en el presente Estatuto y actuar en concordancia con los principios del partido.
f) Acatar y cumplir las orientaciones, determinaciones y tareas que emanen de la comuna y de las diferentes instancias y órganos de del partido, con espíritu de iniciativa.
h) Hacer uso correcto de la crítica frente a los errores y defectos y la correspondiente autocrítica cuando sea el caso.
q) Defender la unidad orgánica e ideológica del partido.
s) Utilizar los conductos internos establecidos para dar discusión a los diversos temas referentes al partido.
t) Cumplir con el reglamento interno."[3]

---

[2] Op cit, Capítulo II. Bogotá D.C, 31 de octubre de 2017.
[3] Código de ética del partido político fuerza alternativa revolucionaria del común – FARC. Capítulo i. . Bogotá D.C, 31 de octubre de 2017.

10. Que, ante la petición elevada de impugnación o revocatoria de la Resolución 001 del 8 de febrero de 2021, mediante la cual se abrió Indagación Preliminar en contra de la militante, VICTORIA SANDINO SIMANCA HERRERA, la cual fue Denegada por la Comisión Ético Disciplinaria Nacional, mediante Auto 009 del 18 de Febrero de 2021.

11. Que, existen suficientes méritos y material probatorio para dar apertura a la investigación disciplinaria, por lo tanto la Comisión Ético-Disciplinaria en uso de sus facultades, de acuerdo con la Constitución Política, las leyes, los reglamentos, en especial los Estatutos, el Manual de Procedimiento, el Código Ético Disciplinario, y con base a los hechos a continuación descritos:

HECHOS

1. Que, en desarrollo del VII Pleno del Consejo Nacional de los Comunes celebarado durante los dias 12 y 13 de diciembre de 2020, de manera semipresencial y virtual, en manifestaciòn verbal integrantes del Partido de la Regiòn de Nororirente a traves de su vocero, señor Miguel Cifientes Ardila, se solicitò a la Comisiòn de Ética, iniciar los procesos de indagaciòn e investigación disciplinaria en contra de la militante VICTORIA SANDINO SIMANCA HERRERA.

2. Que, se allegaron quejas por parte de, Maria Helena Mendez, Manuel Bolivar,German Moreno Casallas, Diego Mèndez, Jose Zaenz, Carlos Eduardo Villarraga Castillo, Militantes del Partido agrupados en Comunas que pertenecen al Consejo distrital de Bogota, además de Raimundo Raish, Consejo Polìtico del Atlantico, Tulio Murillo Avila del Consejo de los Comunes en el departamento del Meta, comunicación escrita via wasthsapp, al correo electrònico de la Comision de Ética, y escritos en fìsìco quejas en la cuales relacionan las conductas desarrolladas por la militante VICTORIA SANDINO SIMANCA HERRERA, que presuntamente se consideran violatorias a los Estatutos y el reglamento interno del Partido.

3. Que, la declaraciòn pùblica escrita por el Consejo Polìtico del Departamental del Atlantico,aprobada por la mayoria de sus representantes encabeza de Raimundo Raish, en calidad de Consejero Politico y Vocero del Departamento, señalan del desconocimiento de las afirmaciones pùblicas realizadas por parte de la militante VICTORIA SANDINO SIMANCA HERRERA en contra del Partido, que consecuencialmente prodrian afectar de manera grave la imagen pùblica de la Colectividad Politica.

4. Que, se allegò por parte de Maria Helena Mendez, militante de la Comuna Lucero Palmera, perteneciente al Consejo Distrital de Bogotà, comunicación escrita via wathsapp, al Correo Electrònico de la Comisiòn de Ética Nacional, y escritos en fisico queja en contra de la militante VICTORIA SANDINO SIMANCA HERRERA, en la cual relacionan conductas que presuntamente se consideran violatorios a los Estatutos vigentes en el Partido.
5. Que, el día 17 de Diciembre de 2020, se emitiò comunicación pùblica dirigida a la militancia del Partido, por parte de Rodrigo Londoño Echeverry en calidad de Presidente y Vocero del Consejo Politico Nacional, donde señala que se difundiò una carta por redes sociales, y medios masivos en la cual la militante VICTORIA SANDINO SIMANCA HERRERA,expresa pùblicamente diferencias con la direcciòn del Partido.

6. Que, además de los documentos allegados a la Comisiòn de Ética, se conociò a travès de redes sociales y de diversos medios de comunicaciòn, las declaraciones, y crìticas realizadas por parte de la militante, directiva del Partido, VICTORIA SANDINO SIMANCA HERRERA en escenarios e instancias pùblicas diferentes a las estatutariamente vigentes en el Partido, como se desprende de los siguientes elementos probatorios de naturaleza periodistica en medios escritos, y audiovisuales.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Nlrk6xosGbU
https://www.wradio.com.co/amp/nota.aspx?id=4104417&__twitter_impression=true

"No había garantías para asistir a esa asamblea: Victoria Sandino

La senadora habló sobre las razones por las que no asistió a la asamblea en la que se cambió el nombre del partido a Comunes.

Tras el Acuerdo de Paz firmado en 2016, la exguerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia cambió su nombre a Fuerza Alternativa Revolucionara del Común, manteniendo las iniciales Farc, convirtiéndose también en un partido político.

El domingo, la senadora Griselda Lobo, conocida también como Sandra Ramírez, informó a través de las redes sociales que el partido ***cambió su nombre a Comunes, alejándose de los recuerdos de la guerra al mantener el nombre Farc, según voceros del partido.***
*En Sigue La W habló la senadora Victoria Sandino sobre por qué no asistió a la conferencia liderada por Rodrigo Londoño. "****No asistí porque no había garantías para asistir a esa asamblea, la cual tuvo muchos tropiezos.*** *El proceso de paz se ha visto afectado por el asesinato de nuestros compañeros y porque no se ha implementado el acuerdo", manifestó.*

Varios integrantes de la dirección se expresan de una manera diferente contra los que no estamos de acuerdo con cosas del partido*", indicó.*
*Frente a la postura que tiene de Santrich e Iván Márquez señaló que "****nosotros anhelamos para que haya condiciones, no solamente para que ellos retornen, sino para que llegue todo el***

***mundo**, es decir, que los grupos armados ilegales estén en un proceso de paz y se encuentren vías de solución".*
*Además, sobre el cambio del nombre del partido dijo que "**ahora se hizo el cambio y no es problema, el problema es que se acabe la estigmatización y el genocidio de nuestra gente**, lo cual es una responsabilidad del Estado colombiano".*

https://www.elespectador.com/noticias/politica/la-division-tras-la-convencion-del-partido-farc/

La división tras la convención del Partido FARC

Política22 ene. 2021 - 9:00 p. m. Por: Juan S. Lombo – Twitter: @JuanLombo

"Más allá de los anuncios de los cambios de nombre y de fijar una política para 2022, el encuentro está ambientado en una disputa por el camino que está tomando el partido. Victoria Sandino, "Joaquín Gómez" y "Benkos Biohó" dijeron que no asistirán.

Por segunda vez desde que sus militantes dejaron las armas, el Partido FARC realizará una convención nacional. El encuentro se llevará a cabo este fin de semana y, como el resto de cumbres partidistas celebradas durante la pandemia, se tendrá que hacer de forma virtual. Aunque la función primaria de este evento es cumplir con las exigencias del Consejo Nacional Electoral, que obligan a las colectividades a celebrar por lo menos una convención cada dos años, esta convocatoria servirá para cuatro temas que marcarán el futuro del partido nacido del Acuerdo de Paz de La Habana: cambios de nombre y de representante legal, definir la plataforma política y trazar la estrategia electoral para 2022.

*En apariencia, el encuentro virtual es un mero trámite, sin embargo, la realización de esta segunda convención nacional ha desnudado unas crecientes diferencias entre los antiguos miembros del Secretariado que hoy ocupan puestos de dirección en el partido y sectores que no están de acuerdo con la línea que este ha tomado, incluyendo la formulación de los temas a discutir propuestos para este fin de semana. **Una parte de estos choques se conocieron el 18 de enero, cuando Milton de Jesús Toncel (Joaquín Gómez) y los senadores Victoria Sandino e Israel Zúñiga (Benkos Biohó) anunciaron en una carta que no serían parte de la convención, pues "va en contravía del espíritu del Acuerdo de Paz, de nuestra tradición revolucionaria y de los elementales principios democráticos consagrados en la normatividad vigente".***

Lea más: Senadores de la FARC rechazan II Asamblea Extraordinaria de los Comunes.

*"La respuesta desde lo que se podría llamar la oficialidad del partido FARC fue pedir la apertura de un proceso disciplinario en la Comisión de Ética contra los tres. Supuestamente, "la posición asumida (...) constituye una violación a la disciplina y normatividad del partido". Al cuestionar a la senadora Victoria Sandino sobre este intercambio epistolar, esta se reafirmó en que no asistirá al encuentro: "Si la citación no toca temas fundamentales, pues para qué ir. Se llamó a cuatro puntos y en ninguno se tocan los temas del genocidio del que estamos siendo objeto y la implementación de la **paz". También habló de supuestas irregularidades en la elección de los delegados para la convención, en la que se habría privilegiado a los afines a la dirección y se negó "la participación a los la participación a los fundadores del partido".***

Se llamó a cuatro puntos y en ninguno se tocan los temas del genocidio del que estamos siendo objeto y la implementación de la paz". También habló de supuestas irregularidades en la elección de los delegados para la convención, en la que se habría privilegiado a los afines a la dirección y se negó "la participación a los fundadores del partido".

El senador Zúñiga, por su parte, aseguró que hay "una necesidad de que la asamblea se convoque de manera que recoja todas las voces de los excombatientes y militantes del partido". El congresista, conocido en la guerra como Benkos Biohó -nombre del líder de la rebelión de cimarrones-, expresó que las prioridades debían estar más allá de las ambiciones de los temas políticos que serán discutidos en esta convención. "Si hablamos de consenso, hablamos de debates precisos, y no ha ocurrido. Se intentó aumentar la agenda de la asamblea, pero no dejaron", advirtió. Y agregó: "Pretendemos un campanazo de alerta a la militancia. ¿Cómo vamos a trascender al Acuerdo si no tenemos los elementos de coincidencia?".

En respuesta a dichas posturas, el senador Julián Gallo, también conocido como Carlos Lozada, explicó que si bien hay temas gruesos que se deben discutir, ello debe ser en la presencialidad, y que debido a la pandemia solo se adelantarían los cuatro temas ya señalados, que son de los más urgentes: "Aprobar la plataforma política es una vaina elemental. También se debe estudiar una convergencia para 2022 por la vida, la paz y la democracia". Y ante la ausencia de tres de sus miembros importantes por no tocar los temas de la implementación y el asesinato de reincorporados, señaló que "siete plenos se han ocupado de esos temas y eso no lo soluciona. La implementación no es decisión nuestra. Iván Duque no es del partido".

De forma parecida, Rodrigo Granda y la senadora Sandra Ramírez comentaron a este diario que fue en el séptimo pleno que se fijaron de forma democrática los temas a debatir. "Tenemos inconvenientes internos y por trabajarlos en la virtualidad no se van a solucionar de la noche a la mañana. Se hará la asamblea presencial cuando se pueda", indicó Granda. En una línea, Ramírez recalcó que "el contexto da la pauta" y así se eligieron los temas, entre los que están una plataforma política de nueve puntos, que incluye la implementación, un pacto para desterrar las armas de la política, lucha contra la corrupción y el plan electoral para 2022. "Si los compañeros no aceptaron esto y lo hacen en los medios, nosotros tenemos una comisión de ética que es la que resuelve la violación de los estatutos", enfatizó.

Más allá de la controversia por la convención y su temario, varios de los que no asistirán al encuentro, como la senadora Sandino, consideran que el choque "es un asunto de mucho tiempo atrás por la conducción del partido frente al proceso de paz". A esto el senador Zúñiga agregó: "Tenemos serios reparos en la implementación que ha hecho el Gobierno. Somos partes firmantes y las exigencias o reparos se pueden presentar". Ambos congresistas también presentaron objeciones a la forma como se está dirigiendo el partido. "Se agarran en los temas del centralismo democrático y entonces la mayoría aplasta a las minorías", comentó Sandino, quien añadió: "Ellos no se dan cuenta de que en 2026 podemos quedarnos sin personería porque nos estamos quedando sin bases".

En este mismo sentido, Zúñiga expresó: "Nosotros nos empeñamos en un proceso de transición que permitiera el paso de la verticalidad de Farc-Ep a una organización horizontal, donde todos participáramos. Pero hay un sector del ex secretariado que pretende seguir con los mismos preceptos de autoritarismo. Confunden autoridad con obediencia ciega y el disenso con intento

de fragmentar". A esto añadieron que desde el Partido FARC se estaría usando la Comisión de Ética como una amenaza para acallar a los que no están de acuerdo con los planteamientos de la dirigencia. "Todo indica que vamos para la expulsión. La comisión de ética no es independiente", concluyó Victoria Sandino.

Senadores de la FARC rechazan II Asamblea Extraordinaria de los Comunes

https://www.elespectador.com/noticias/politica/senadores-de-la-farc-rechazan-ii-asamblea-extraordinaria-de-los-comunes/

Política 18 ene. 2021 - 8:00 a. m .Por: Redacción Política
A cuatro días de la instalación de la II Asamblea Extraordinaria de los Comunes del partido FARC, los senadores Victoria Sandino y Israel Zúñiga, más conocido como Benkos Biohó, y Joaquín Gómez manifestaron su desacuerdo con esta convocatoria y anunciaron que no participarán de esta.

"Como firmantes del Acuerdo, fundadores y militantes del partido vemos que la denominada II Asamblea Extraordinaria de los Comunes, convocada por un sector del partido de la Rosa, entre el 22 y 24 de enero, va en contra vía del espíritu del Acuerdo de Paz, de nuestra tradición revolucionaria y de los elementales principios democráticos consagrados en la normatividad vigente", se lee en la carta.

Comparto este comunicado que suscribimos con Joaquín Gómez, @BenkosBiohoFarc y yo, frente a la II Asamblea de los comunes de @PartidoFARC pic.twitter.com/MOSODJomXK

— Victoria Sandino (@SandinoVictoria) January 18, 2021

En el espíritu de la misiva, hay un discurso que habla de una crisis dentro del partido, así como un "manejo autoritario y excluyente" del partido. Prueba de ello, cuestionaron que a esta asamblea solo estén invitados 230 delegados que representan a 6.000 militantes, cuando la colectividad cuenta con 1.200 delegados que cobija a 12.000 excombatientes.

"Una Asamblea que niega siquiera abrir discusiones que sus delegados proponen, es un atentado contra la reincorporación política y los derechos de los firmantes de la paz", reiteran los senadores y Joaquín Gómez.

Por eso, anunciaron que no participarán de este encuentro que, a su juicio, "estigmatiza opiniones políticas críticas", sin embargo, en esta situación adversa ven la oportunidad de unión y de ratificar los compromisos suscritos en Cuba. "Invitamos a la militancia a no renunciar ni al partido ni al Acuerdo, sino a buscar conjuntamente salidas a estas crisis".

Sandino, Zúñiga y Gómez llaman a los "excluidos y desconocidos por un sector de la actual dirección del partido a construir mancomunadamente espacios para ganar la reincorporación integral y continuar nuestra lucha por la paz y las transformaciones sociales".

Igualmente, pidieron ayuda a la II Misión de la ONU y a los garantes del proceso (Cuba y Noruega) para no desistir del seguimiento a los temas importantes tras la firma del Acuerdo, entre ellos el componente político, para garantizar de forma plena la implementación."

RESUELVE:

PRIMERO: Dar cierre a la etapa de indagaciòn preliminar, y de acuerdo con las consideraciones, la parte motiva del presente Acto Administrativo avocar de conocimiento, e Iniciar la investigación disciplinaria en contra de la militante **VICTORIA SANDINO SIMANCA HERRERA** por la presunta violaciòn al Articulo 13º de los Deberes, literales 1,6,8,17,19, y 20 de los Estatutos del Partido, y el Articulo 3º de los Deberes, literal a, f, h, q, set del Código de Ética.

SEGUNDO: Iniciar la investigaciòn disciplinaria, indicando igualmente que en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes contempladas en el Còdigo Cotencioso y de Procedimiento Administrativo, las reglamentaciones transitorias con ocasión de la Pandemia de carácter virtual, los Estatutos del Partido, el Manual de Procedimiento en el numeral 3º de la *R*esoluciòn de las faltas graves y muy graves, que reza; "*Recibida o inicia la actuaciòn y de encontrar mèrito para invesitgar la Comisiòn avocara de Conocimiento, o decidarà respecto de su archivo comunicandoselo en ambos casos a las apartes en un termino de cinco (5) dias."*
4. "La comunicación que avoca de conocimiento debene contener, nombre del solicitante, nombre del militante solicitado, o su iniciaciòn de oficio. Motivaciòn sucinta de las razones para avocar de conocimiento, informando de la notificaciòn a los involucrados"
5. " En la misma comunicaciòn se citara al militantes implicado, fijando fecha y hora para ser escuchado respecto de los hechos que se le imputan y que incumplen con los deberes, se constituyen en faltas graves y/o otras situaciones advertidas por la Comision de Ética y Garantias."

TERCERO: Notificar a las partes de la apertura de investigación disciplinaria indicando los derechos que les asisten en los tèrminos constitucionales, legales y reglamentarios, y en especial los Estatutos del Partido, el Codigo de Ética, el Manual de Procedimiento, de conformidad con la reglamentaciòn transitoria vigente por efectos de la Pandemina a la militante VICTORIA SANDINO SIMANCA HERRERA de acuerdo con el Articulo 56º sobre notificaciòn electrònica

CUARTO: Convocar a la militante VICTORIA SANDINO SIMANCA HERRERA, al tràmite de diligencia de presentaciòn de descargos, **el día 3 de marzo de 2021, Hora: 3:00 pm, en las instalaciones de la sede nacional del Partido en Bogotà, (Calle 39 No 19-29).**

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firma: Comisión Ético Disciplinaria Nacional:

Luis Oscar Usuga

Olga Flórez Cedeño

Gilberto de Jesús Giraldo

Angela Castellanos Poveda

Edgar López Gómez

Email: Comisión Ético-Disciplinaria Nacional: Email: eticanacionalfarc@gmail.com

COMUNES

Bogotá, Agosto 12 de 2021

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA: SOBRE SOLICITUD DE ESCISIÓN AL INTERIOR DE NUESTRO PARTIDO.

Con relación a la información sobre una solicitud de escisión del partido Comunes, el Consejo Político Nacional, máxima instancia de dirección del partido, desea expresar a la opinión pública lo siguiente:

1. El día 10 de agosto del 2021 fue radicada en la sede nacional de Comunes una solicitud de convocar una asamblea extraordinaria con ese propósito respaldada por 11 firmas de militantes y ex militantes del partido.

2. Extrañamente, el día de ayer conocimos un pronunciamiento del Alto Comisionado para la Estabilización y la Reconciliación, doctor Emilio Archíla, que dice: “el Gobierno nacional ha tenido conocimiento del comunicado con fecha del 10 de agosto, donde algunos dirigentes del partido político Comunes solicitan una Asamblea Extraordinaria para la escisión del partido político, el gobierno nacional es respetuoso de la autonomía constitucional de los partidos políticos. Además, entendiendo que la participación de los excombatientes FARC-EP en las distintas instancias de interlocución con el gobierno, no está sujeta a la pertenencia de un partido político, sino que se garantiza a las personas en reincorporación”.

Por lo anterior, exigimos al Gobierno Nacional, no inmiscuirse en los asuntos internos de nuestro partido y respeto por la independencia que la Constitución y la ley le otorgan a los partidos políticos en Colombia.

Entendiendo que son del interés de la opinión pública los asuntos relacionados con la vida de los partidos, queremos resaltar que las decisiones sobre la vida interna de nuestro partido, como siempre, las tomamos apegados a los estatutos que nos gobiernan y la ley que rige la materia.

COMUNES

En cumplimiento del mandato estatutario, y de la mencionada ley, los días 21, 22 y 23 de enero, del presente año, sesionó de manera extraordinaria la Segunda Asamblea Nacional Extraordinaria, que tomó importantes decisiones, entre ellas el reajuste del Consejo Político Nacional; decisiones que ya han quedado en firme por decisión reciente del Consejo Nacional Electoral, órgano encargado de ejercer el control constitucional y legal de los partidos.

Consejo Político Nacional.

PARTIDOS POLÍTICOS

Comunes no convocaría nueva asamblea pronto, pese a solicitud para división

Desde el Consejo Político afirman que, como se convocó recientemente una asamblea extraordinaria, no está previsto hacerlo de nuevo en próximos meses.



Partido Comunes no convocaría una asamblea en los próximos meses para definir solicitud de división, pese a solicitud formal / Camila Díaz (Colprensa)

Sebastián Cortés // @SC_Periodista_ | 12/08/2021 - 18:30 COT

Dos días después de que los senadores del **Partido Comunes, Victoria Sandino e Ismael Zúñiga,** y el exmiembro del **Secretariado de las Farc, Joaquín Gómez,** solicitaran la **escisión de la colectividad,** el **Consejo Político Nacional** del propio partido se pronunció sobre esta petición.

"Recientemente realizamos una asamblea nacional extraordinaria, en el mes de enero, en la cual fue modificada la composición de la dirección. Por lo tanto **no tenemos previsto en los próximos meses la realización de una asamblea",** afirmó el senador y **consejero de Educación, comisión electoral y bancada del Consejo Político,** Carlos Antonio Lozada.

Le puede interesar:

- Miembros del Partido Comunes solicitaron la escisión de la colectividad
- Comunes pide al Gobierno no entrometerse en asuntos internos del partido

Para el excombatiente, quien también criticó que **el Gobierno se pronunciara sobre esta petición,** asegurando que se está **entrometiendo y agrediendo la independencia** de los partidos, **próximamente no se convocará dicha asamblea,** en donde se deberá **votar y decidir si se aprueba tal petición,** puesto que **estatutariamente se debe realizar es cada dos años.**

La solicitud para dividir el partido surgió tras **inconformidades de representatividad de este sector de la colectividad.** "No ha habido **la garantía ni los espacios para que el debate y los análisis permitan generar consensos** a partir de la **continuidad de la paz",** declaraba, desde la **Misión de Verificación de Naciones Unidas,** el senador **Ismael Zúñiga.**

Suscríbase a las noticias de Caracol Radio en Google News

Fosas comunes · Timochenko · Fuerza Alternativa · Matanza civiles

También en la web

Smartfeed

Bogotá: Un sitio de citas para mayores de 40...
gacetanoticias.com

'Los sueños de Frida Kahlo': Una parte de...
ARTIKA | Artists' Books

Tutorial: Renovación de la licencia de...

Most Popular 1/5

Si tu deuda es de $5´000.000 o más, paga con un descuento de hasta el 50%

Read More

Coronavirus
Juegos Olímpicos

NUESTROS AUDIOS

Hable con el programa · Bogotá
El Fenómeno del Fútbol / San

ESTATUTOS DEL PARTIDO
FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMÚN - FARC

Los suscritos Presidente y Secretario del Congreso Constitutivo Partido Político FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMÚN – FARC, celebrado en Bogotá D. C entre el 27 de agosto y treinta y uno (31) de agosto de 2017, certifican que en desarrollo del mismo fueron aprobados por el Congreso constitutivo, los estatutos del mismo que a continuación se transcriben:

"ESTATUTOS DEL PARTIDO

FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMÚN - FARC

ÍNDICE

CAPÍTULO I
DE LA NATURALEZA Y LOS PRINCIPIOS
Artículo 1. Definición y denominación.
Artículo 2. Nombre, símbolos y colores.
Artículo 3 Domicilio y representación legal.
Artículo 4. Principios de organización y funcionamiento.

Artículo 5. Orientación ideológico-política.
Artículo 6. Instrumentos programáticos de política.
Artículo 7. Participación electoral.

CAPÍTULO II
DE LO/AS MILITANTES O AFILIADO/AS
Artículo 8. Militantes.
Artículo 9. Simpatizantes.
Artículo 10. Doble militancia.
Artículo 11. Renuncia al partido.
Artículo 12. Derechos.
Artículo 13. Deberes.
Artículo 14. Prohibiciones.

CAPÍTULO III
DE LA ESTRUCTURA INTERNA Y LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN

Artículo 15. Comuna
Artículo 16. Asamblea local de los Comunes
Artículo 17. Consejo local de los Comunes
Artículo 18. Asamblea Departamental de los Comunes
Artículo 19. Consejo Departamental de los Comunes
Artículo 20. Consejo Político Departamental.
Artículo 21. Asamblea Nacional de los Comunes
Artículo 22. Consejo Nacional de los Comunes
Artículo 23. Consejo Político Nacional
Artículo 24. Deberes de los órganos de instancia de dirección.

CAPÍTULO IV
DE LAS DECISIONES

Artículo 25: Decisiones.
Artículo 26. Mecanismos de impugnación de las decisiones de los órganos de dirección

CAPÍTULO V
DE LAS COMISIONES DE TRABAJO

Artículo 27. Comisiones de trabajo.

CAPÍTULO VI
DEL CENTRO DE PENSAMIENTO Y FORMACIÓN POLÍTICA

Artículo 28. Centro de Pensamiento y Formación Política
Artículo 29. Transitorio

CAPITULO VII
DE LOS ORGANOS DE CONTROL

Artículo 30. Órganos e instancias de control.
Artículo 31. Comisión de Veeduría.
Artículo 32. Revisoría Fiscal.
Artículo 33. Prohibiciones.

CAPÍTULO VIII
DEL CÓDIGO ÉTICO-DISCIPLINARIO

Artículo 34. Código Ético-Disciplinario.
Artículo 35. Comisión Etico-Disciplinaria Nacional.

CAPÍTULO IX
DE LAS RENTAS Y PATRIMONIO

Artículo 36. Rentas y patrimonio
Artículo 37. Recaudo
Artículo 38. Distribución de los recursos

CAPÍTULO X
DE LA DISOLUCIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN Y LIQUIDACIÓN.
Artículo 39. Disolución, fusión, escisión y liquidación del partido.

CAPÍTULO XI
DE OTRAS DISPOSICIONES
Artículo 40. Reforma del Estatuto
Artículo 41. Duración del partido
Artículo 42. Vigencia

CAPÍTULO I
DE LA NATURALEZA Y LOS PRINCIPIOS

Artículo 1. Definición y denominación. El partido político **Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común - FARC** es una organización constituida en desarrollo de lo establecido en el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera suscrito con el Gobierno Nacional el 24 de noviembre de 2016 y en el Acto Legislativo No. 03 del 23 de mayo de 2017, en virtud de lo cual las FARC - EP, reconocidas como organización insurgente por el Estado colombiano, formalizan su incorporación a la participación política conforme a la Constitución y a la ley.

Artículo 2. Nombre, símbolos y colores. El partido utilizará como nombre el de **Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común – FARC** y en su documentación de identificación y difusión como colores distintivos blanco, rojo y verde y como símbolo o logo la rosa roja con una estrella roja en el centro y la sigla FARC debajo.

Artículo 3 Domicilio y representación legal. El domicilio principal del partido será la ciudad de Bogotá DC; las instancias del orden territorial definirán los domicilios correspondientes en esos niveles. La Representación legal la ejercerá el Consejero Nacional de Organización.

Artículo 4. Principios de organización y funcionamiento. El Partido acoge y garantiza para su organización y funcionamiento las reglas y principios establecidos en el artículo 107 de la Constitución Política y, en especial, los principios de transparencia, objetividad, moralidad, equidad de género y el deber de presentar y divulgar sus programas políticos de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, en las leyes y en los presentes

estatutos. Para estos efectos, incorpora a los presentes estatutos, los siguientes contenidos del artículo 1º de la ley 1475 de 2011:

"1. Participación. Entiéndase por el derecho de todo afiliado a intervenir, directamente o a través de sus representantes, en la adopción de las decisiones fundamentales del partido o movimiento, en el máximo órgano de dirección y en las demás instancias de gobierno, administración y control, así como los derechos de elegir y ser elegido en todo proceso de designación o escogencia de sus directivos y de sus candidatos a cargos y corporaciones de elección popular, de acuerdo a sus estatutos.

2. Igualdad. Se entiende por igualdad la exclusión de toda discriminación o privilegio por razones ideológicas, económicas, sociales, de diversidad sexual, o de etnia, en los procesos de participación en la vida del partido.

3. Pluralismo. El pluralismo implica para las organizaciones políticas el deber de garantizar la expresión de las tendencias existentes en su interior, en particular de las minorías, sin perjuicio de la aplicación del principio de mayoría, razón por la que los estatutos incluirán normas sobre quórum y mayorías especiales para la toma de decisiones fundamentales en materia de organización, funcionamiento y de participación de sus afiliados en la vida del partido o movimiento.

4. Equidad e igualdad de género. En virtud del principio de equidad e igualdad de género, los hombres, las mujeres y las diversidades sexuales gozarán de igualdad real de derechos y oportunidades para participar en las actividades políticas, dirigir las organizaciones partidistas, acceder a los debates electorales y obtener representación política.

5. Transparencia. Mantener permanentemente informados a sus afiliados sobre sus actividades políticas, administrativas y financieras. Para su cumplimiento, deberán realizar cada año rendición de cuentas. Se crearán los mecanismos para garantizar un manejo ético y digno de las actuaciones políticas en consecuencia con nuestro carácter y principios. Igualmente, para la rendición de cuentas y transparencia en el manejo de los recursos, cuidado del bien colectivo del partido.

6. Moralidad. Los miembros del partido desarrollarán su actividad de conformidad con las normas de comportamiento adoptadas en los correspondientes códigos de ética".

Asimismo, los principos de:

7. Centralismo democrático.

8. Dirección Colectiva y responsabilidad individual.

9. Planeación y Control.

10. Crítica y autocrítica.

Parágrafo. El cumplimiento de estos principios constituye deberes esenciales de todas las instancias y órganos del partido, a los cuales también corresponde el deber de promover y poner en ejecución los documentos programáticos de política, y garantizar el cumplimiento de los presentes estatutos.

Artículo 5. Orientación ideológico-política. El partido recoge los principios y elaboraciones teórico-políticos derivados del pensamiento crítico y libertario, así como de las experiencias que a partir de ellos se han desarrollado tanto a nivel mundial como en nuestro continente americano, las formuladas por las FARC-EP desde su momento fundacional en 1964, en especial por nuestros fundadores Manuel Marulanda Vélez y Jacobo Arenas para plantear superar el orden social capitalista vigente en la sociedad colombiana, y promover y apoyar un proceso histórico que permita construir una sociedad alternativa en la que impere la justicia social, la democracia real y avanzada, la superación de toda exclusión, discriminación o segregación por razones económicas, sociales, étnicas o de género, la garantía de la vida y de la existencia digna, el reconocimiento del buen vivir del individuo y de la comunidad, la construcción de una nueva economía política que garantice la realización material de los derechos humanos, los relacionamientos no destructivos ni depredadores de la naturaleza y el ambiente, una nueva ética, y relaciones sociales de cooperación, hermandad y solidaridad.

Artículo 6. Documentos programáticos. El partido desarrollará sus funciones y actividades conforme a su Plataforma Ideológica. Adicionalmente, se considerarán documentos programáticos, entre otros, las elaboraciones del partido en materia de:

a) Plan nacional estratégico de acción política;
b) Programa estatégico;
c) Plataforma del movimiento de movimientos para una gran convergencia;
d) Programa para un gobierno de transición;
e) Las conclusiones de los Congresos.

Artículo 7. Participación electoral. El Partido podrá participar en los procesos electorales organizados por el Estado Colombiano. Sus candidatos serán definidos por las correspondientes instancias y órganos de la organización conforme a los lineamientos y criterios definidos por la Asamblea Nacional de los Comunes y a las definiciones de política electoral del partido adoptadas por el Consejo Político Nacional, previa consideración del Consejo Nacional de los Comunes. El Consejo Político Nacional será el órgano competente para el otorgamiento de avales para la participación de candidatos del Partido a

corporaciones o cargos de elección popular, observando los principios democráticos señalados por la ley.

Parágrafo: Todo lo anterior, sin perjuicio de las reglamentaciones que fuere necesario expedir por parte del Consejo Político Nacional.

Parágrafo transitorio: Lo/as congresistas que le corresponden al partido en Senado y Cámara para el período 2018-2022, conforme al Acto Legislativo No. 3 de 2017 en desarrollo del Acuerdo de paz, serán designados por la primera Asamblea Nacional de los Comunes o mediante delegación por el Consejo Político Nacional. La integración completa de las listas a presentar para tales procesos electorales será función del Consejo Político Nacional.

CAPÍTULO II
DE LO/AS MILITANTES O AFILIADOS/AS.

Artículo 8. Militantes. Para todos los efectos desarrollados en los presentes estatutos se denominará militante como sinónimo de afiliados/as. Son militantes del Partido quiénes habiendo sido integrantes de las FARC-EP o de sus estructuras de trabajo al transitar a la vida política legal, decidan hacer parte de él. Asimismo, quienes decidan aceptar y acoger como suyos la plataforma ideológica, el presente estatuto y los diferentes documentos programáticos. Para ser miembro del Partido se deberá presentar una manifestación escrita de voluntad de ingreso, la cual será aprobada por las instancias de la estructura partidaria que defina el Consejo Político Nacional. El Partido organizará un registro único de personas militantes, con observancia de las reglas legales relativas a la protección y privacidad de datos.

Parágrafo 1º. : Lo/as delegado/as al Congreso fundacional se consideran militantes, sin requerimiento adicional alguno.

Parágrafo 2º. : Todo militante debe hacer parte de una estructura de base deniminada Comuna.

Artículo 9. Simpatizantes. Además de sus militantes, el partido tendrá simpatizantes, es decir personas que, sin tener el carácter de militantes, expresen su respaldo a los principios y documentos programáticos y, en consecuencia, participen en las actividades políticas y electorales del partido.

Artículo 10. Doble militancia. En los términos establecidos en la Constitución y en la ley y, en especial, por el artículo 2º de la ley 1475 de 2011 o las disposiciones que lo modifiquen o reformen, está prohibida la doble militancia de los militantes del partido.

Artículo 11. Renuncia al partido. Todo militante podrá presentar renuncia al partido en ejercicio de sus derechos constitucionales y legales pertinentes. Una vez presentada la

renuncia, el militante o afiliado/a perderá todos los derechos que le corresponden y, por consiguiente, perderá la curul que desempeñe en corporaciones de elección popular o el cargo de elección para el cual haya sido elegido, así como todo derecho a participar en las instancias y órganos del partido.

Artículo 12. Derechos. Son derechos de los/as militantes del partido:

a) Hacer parte de la vida orgánica del partido; aportar a la formulación y el desarrollo de su línea política y contribuir al análisis y discusión de los problemas y tareas que las instancias y órganos correspondientes sometan a su consideración;
b) Ser designado para la realización de diversas tareas del partido;
c) Expresar libremente la opinión y ejercer crítica constructiva dentro del partido y sus diferentes instancias y órganos de dirección;
d) Elegir y ser elegido para los cargos de dirección del partido;
e) Elegir y ser elegido para cargos de representación popular o de cualquier instancia u órgano de representación política o social;
f) Recurrir a las instancias y órganos de dirección del Partido, cuando considere que sus derechos son vulnerados;
g) No ser objeto de discriminación por su edad, etnia, género, procedencia territorial o diversidad sexual;
h) Recibir periódicamente y oportunamente información política sobre las orientaciones y acciones del partido;
i) Tener acceso en igualdad de condiciones y previa solicitud a la información pública del partido;
j) Ejercer control político sobre los cargos de dirección del partido y sobre los cargos de elección popular que ostenten miembros del partido;
k) Recibir los estímulos políticos o morales del partido como reconocimiento a la abnegación, la solidaridad, el compañerismo y la lucha;
l) Recibir la solidaridad y requerirla para quien en su concepto la necesite por calamidades y otras situaciones que a juicio del partido lo ameriten;
m) Exigir la participación personal cuando se trate de tomar decisiones sobre su propia actuación y conducta;
n) Recibir formación política y participar en las distintas instancias que con este propósito organice el partido.

Artículo 13. Deberes. Son deberes de los/as militantes del partido:

a. Cumplir en un todo con los establecido en el presente Estatuto y actuar en concordancia con los principios del partido;
b. Asistir a las reuniones; hacer parte de la vida cotidiana del partido; aportar a la formulación y el desarrollo de su línea política y contribuir al análisis y discusión de los problemas y tareas que las instancias y órganos correspondientes sometan a su consideración;

c. Ser honesto, leal y veraz con el partido, abnegado en la lucha y ejemplar en su comportamiento, particularmente en el trabajo con las organizaciones sociales y populares;
d. Esforzarse por forjar y promover valores y principios de fraternidad, solidaridad y cooperación, así´ como, relaciones de igualdad entre hombres y mujeres;
e. Contribuir a la unidad y fortalecimiento del partido y del movimiento real de los desposeídos y explotados, asumiendo con firmeza posiciones en defensa de los intereses populares;
f. Acatar y cumplir las orientaciones, determinaciones y tareas que emanen de la comuna y de las diferentes instancias y órganos de del partido, con espíritu de iniciativa;
g. Vincularse directamente a la actividad en las comunidades y los lugares de trabajo, siendo ejemplar y consecuente en sus luchas por el mejoramiento de sus condiciones de vida y por la elevación de la conciencia y la organización política;
h. Hacer uso correcto de la crítica frente a los errores y defectos y la correspondiente autocrítica cuando sea el caso;
i. Mantener una lucha decidida por la superación de las relaciones patriarcales y de discriminación dentro del partido, si a ello hubiere lugar, y en el conjunto de la sociedad;
j. Aportar a la política de finanzas del partido conforme a las reglas que definan las instancias y órganos del partido;
k. Hacer esfuerzos permanentes por la superación personal y del colectivo en los campos ideológico, político y cultural;
l. Mantener en alto el buen nombre del partido y denunciar prácticas de corrupción o atentatorias contra la unidad interna del partido.
m. Propender por la defensa de la paz, la convivencia y los derechos humanos;
n. Denunciar prácticas y situaciones que vulneren los derechos o atenten contra la dignidad de cualquier militante o afiliado/a;
o. Observar, cumplir y defender la totalidad de lo establecido en el Acuerdo Final de paz suscrito por las FARC - EP con el Gobierno Nacional;
p. Denunciar las prácticas de corrupción, grupismo y divisionismo o cualquier situación que deteriore el funcionamiento del partido;
q. Defender la unidad orgánica e ideológica del partido;
r. Cumplir con las tareas políticas encomendadas;
s. Utilizar los conductos internos para dar las discusiones sin utilizar medios externos;
t. Cumplir con el reglamento interno.

Artículo 14. Prohibiciones. Está prohibido a todo militante o afiliado/a:

a) Apoyar candidatos distintos a los postulados oficialmente por el partido;
b) Pertenecer a otro movimiento o partido político quebrantando la regla de la doble militancia.

CAPÍTULO III
DE LA ESTRUCTURA INTERNA Y LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN

Artículo 15. Comuna: La comuna será la unidad básica de organización del Partido; estará conformada por cinco (5) militantes como mínimo. Las comunas se organizarán teniendo en cuenta criterios geográficos o de actividad económica y social. Cada comuna tendrá un Consejo de Comuna, integrado por tres consejero/as así: político/a, de organización y de finanzas. Cuando el tamaño de la comuna lo permita y las necesidades del trabajo político lo demanden podrá haber consejero/as de educación, de comunicación y de trabajo con el movimiento social, entre otros. En todo caso, en cada comuna se desarrollarán las funciones que definan los órganos y autoridades competentes del partido.

Artículo 16. Asamblea local de los Comunes: Es la máxima instancia de dirección del Partido en el nivel local. Estará conformada por todo/as los militantes del Partido que hagan parte de las respectivas comunas y por los consejero/as locales en ejercicio. Cuando en el nivel local haya diez (10) o más comunas, la asamblea se conformará como mínimo por tres delegado/as de cada comuna. En todo caso, el número de delegado/as dependerá del número de militantes de cada comuna, garantizando siempre la participación de las mujeres, diversidades sexuales y de los pueblos étnicos. La Asamblea se reunirá anualmente, pudiéndose convocar de manera extraordinaria cuando las circunstancias lo ameriten solicitado por la mitad más uno de los militantes, La convocatoria a la Asamblea local será realizada por el Consejo Local que esté en ejercicio.

Parágrafo transitorio: Durante los dos (2) meses siguientes a la realización del congreso constitutivo se deberán realizar las asambleas locales de las comunas para conformar los respectivos órganos de dirección.

Parágrafo 1. Funciones. Son funciones de la Asamblea local:

a) Discutir, formular y aprobar la línea política del Partido en el nivel de su jurisdicción, considerando las orientaciones de política general del Partido;
b) Discutir, formular y aprobar los lineamientos del Plan local de acción política (PLAP) para el período siguiente;
c) Formular propuestas para la acción política en las diferentes instancias de dirección;
d) Elegir por un período de un año lo/as integrantes del Consejo Local, garantizando la representación de las mujeres y las diversidades sexuales, y de los pueblos étnicos.
e) Elegir al Consejero Político local;
f) Elegir los delegado/as a la Asamblea Nacional de los Comunes, según las reglas establecidas por el Consejo Nacional de los Comunes.

Parágrafo 2. Para garantizar las acciones articuladas en los municipios, habrá coordinaciones municipales.

Artículo 17. Consejo local de los Comunes. El Consejo local es el órgano de dirección partidaria durante el período comprendido entre la celebración de cada Asamblea local.

Estará conformado por un número de entre siete (7) y nueve (9) consejero/as como máximo. Cada Consejo local tendrá un consejero/a político/a, de organización, de finanzas, de educación, de trabajo con el movimiento social, de comunicaciones y de solidaridad, elegido/as por la Asamblea local. Según las condiciones del trabajo y la acción política, se definirán las responsabilidades adicionales que sean necesarias. Será función principal del Consejo local desarrollar la política aprobada por la Asamblea local, así como ejecutar el Plan Local de Acción Política.

Artículo 18. Asamblea Departamental de los Comunes. Es la máxima instancia de dirección en el nivel Departamental. Estará conformada por al menos un delegado/a delegadas de cada una de las comunas del respectivo territorio, y por los consejero/as territoriales en ejercicio. En todo caso, el número de delegado/as dependerá del número de comunas, garantizando la representación de las mujeres y las diversidades sexuales y de los pueblos étnicos. La Asamblea Departamental se reunirá cada año, pudiéndose convocar de manera extraordinaria cuando las circunstancias lo ameriten. Solicitado por la mitad más uno de los militantes o afiliados, La convocatoria a la Asamblea Departamental será realizada por el Consejo Departamental que esté en ejercicio.

Parágrafo 1. En los territorios donde haya lugar se establecerá una territorialidad que corresponda a la región y corresponderá a la misma categoría de asamblea departamental.

Parágrafo 2. Para garantizar las acciones articuladas en las regiones, abran coordinaciones territoriales inter-departamentales teniendo en cuenta la unidad sociocultural.

Parágrado 3. Funciones. Son funciones de la Asamblea Departamental:

a) Discutir, formular y aprobar la línea política del Partido en el nivel de su jurisdicción, considerando las orientaciones de política general del Partido;
b) Discutir, formular y aprobar los lineamientos del Plan Territorial de Acción Política (PTAP) para el período siguiente;
c) Formular propuestas para la acción política en las diferentes instancias de dirección;
d) Discutir y aprobar los estados financieros del Partido en el nivel territorial;
e) Elegir por un período de un (1) año lo/as integrantes del Consejo Departamental de los Comunes, garantizando la representación de las mujeres, y de los pueblos étnico cuando haya lugar;
f) Elegir al Consejero político Departamental;
a) Elegir por un período de un (1) año el Consejo Departamental de Ética, Garantías, integrado por tres (3) miembros.

Artículo 19. Consejo Departamental de los Comunes. El Consejo Departamental de los Comunes es el órgano de dirección partidaria durante el período comprendido entre cada Asamblea Departamental. El número de consejero/as será definido por el Consejo Político

Nacional según el tamaño y número de militantes de la respectiva organización Departamental. Será función principal del Consejo Departamental desarrollar la política aprobada por la Asamblea Departamental y garantizar la ejecución del Plan Departamental de Acción Política (PDAP); y elegir de su seno al menos cinco (5) delegados a la Asamblea Nacional de los Comunes.

Artículo 20. Consejo Político Departamental. El Consejo Político Departamental es el órgano de dirección ejecutiva del Consejo Departamental, conformada de su propio seno, en número no superior a once (11) integrantes. Cada Consejo Departamental tendrá un consejero/a político/a, de organización, de finanzas, de educación, de trabajo con el movimiento social, de comunicaciones y de solidaridad. Según las condiciones del trabajo y la acción política, se definirán las demás responsabilidades que sean necesarias. El Consejero Político será elegido por la Asamblea Departamental de los Comunes.

Parágrafo. Funciones. Además de las propias de su carácter de dirección ejecutiva, serán funciones del Consejo Político Departamental:

a) Organizar todas las comisiones o equipos de trabajo que considere necesarios para la ejecución del mandato de la Asamblea Departamental y, en particular, del Plan Departamental de acción política (PDAP).
b) Organizar todas Asambleas Departamental Especializadas que considere necesarias para la discusión y definición de las líneas de trabajo en los diferentes campos del trabajo partidario, a fin de garantizar la ejecución de los mandatos de la Asamblea Nacional y, en particular, del Plan nacional de acción política (PDAP).
c) Garantizar/promover la participación de las mujeres, diversidades sexuales, la juventud, pueblos étnicos, en todos los escenarios e instancias del Partido en condiciones equilibradas.

Artículo 21. Asamblea Nacional de los Comunes. Es la máxima instancia de dirección del Partido. Estará conformada por los delegado/as elegido/as por los Consejos locales, por al menos cinco (5) representantes de cada uno de los Consejos Territoriales, y por lo/as consejero/as nacionales en ejercicio, garantizando la representación de las mujeres y de los pueblos étnicos. La Asamblea Nacional se reunirá cada dos (2) años, pudiéndose convocar de manera extraordinaria cuando las circunstancias lo ameriten. La convocatoria a la Asamblea Nacional será realizada por el Consejo Nacional de los Comunes que esté en ejercicio.

Parágrafo. Funciones. Son funciones de la Asamblea Nacional de los Comunes

b) Discutir, formular y aprobar la línea política del Partido;
c) Discutir, formular y aprobar los lineamientos del Plan Estratégico (PE) y de Plan nacional de acción política (PNAP) para el período siguiente.

d) Discutir y aprobar los Estatutos, la Plataforma ideológica y demás documentos programáticos, así como sus reformas.
e) Discutir y aprobar los lineamientos y criterios de política electoral del Partido y del trabajo con el movimiento real del pueblo;
f) Elegir por un período de dos (2) años lo/as integrantes del Consejo Nacional de los Comunes, garantizando la representación de las mujeres, diversidades sexuales y de los pueblos étnicos;
g) Elegir al Presidente del Partido, quién presidirá el Consejo Político Nacional;
h) Elegir por un período de dos (2) años la Comisión Nacional Ético-Disciplinaria y la Comisión de Veeduría, integradas hasta por cinco (5) miembros, resectivamente;
i) Discutir y aprobar los estados financieros del Partido;
j) Elegir al Revisor Fiscal;
k) La Asamblea podrá delegar en el Consejo Político Nacional, la elección de las dignidades de que tratan los literales g, h y j.

Artículo 22. Consejo Nacional de los Comunes. El Consejo Nacional es el órgano de dirección partidaria durante el período comprendido entre la celebración de cada Asamblea Nacional; estará integrado por ciento once (111) miembros, garantizando la representación de las mujeres, género y diversidades sexuales, de los pueblos étnicos y de al menos un representante de cada uno de los Consejos Departamentales. Será función principal del Consejo Nacional desarrollar la política aprobada por la Asamblea Nacional y garantizar la ejecución del Plan Nacional de Acción Política (PNAP).

Artículo 23. Consejo Político Nacional: El Consejo Político Nacional es el órgano de dirección ejecutiva del Consejo Nacional de los Comunes, conformado de su propio seno, en número no superior a quince (15) integrantes. El Consejo Político Nacional estará conformado por el/la Presidente/a; el consejero/a político/a nacional; los consejero/as nacionales de organización, finanzas, educación y cultura, comunicación, del movimiento social, relaciones internacionales, solidaridad, género, pueblos étnicos, jóvenes y demás responsables que se consideren necesarios, según las condiciones del trabajo y la acción política. El/la Presidente/a o el/la consejero/a político nacional que asuma temporalmente sus funciones, cuando haya lugar, será el vocero político del Partido. El/La Consejero/a nacional de organización hará las veces de director administrativo y representante legal.

Parágrafo. Funciones. Además de las propias de su carácter de dirección ejecutiva, serán funciones del Consejo Político Nacional:

a) Organizar todas las comisiones o equipos de trabajo que considere necesarios para la ejecución de los mandatos de la Asamblea Nacional y, en particular, del Plan nacional de acción política (PNAP);
b) Organizar todas Asambleas Nacionales Especializadas que considere necesarias para la discusión y definición de las líneas de trabajo en los diferentes campos del

trabajo partidario, a fin de garantizar la ejecución de los mandatos de la Asamblea Nacional y, en particular, del Plan nacional de acción política (PNAP);

c) Previa consideración del Consejo Nacional de los Comunes, el Consejo Político Nacional podrá disponer la creación de formas especializadas de organización, considerando dinámicas sectoriales o de grupos poblacionales específicos;
d) Elaborar los reglamentos de funcionamiento de las diferentes instancias y órganos de la estructura partidaria.
e) Realizar las definiciones de política electoral del partido, conforme a los lineamientos y criterios aprobados por la Asamblea Nacional de los Comunes, previa consideración del Consejo Nacional de los Comunes.
f) Reglamentar el régimen de bancadas en las Corporaciones de elección popular.
g) Reglamentar los procesos de postulación, selección e inscripción de candidatos a cargos de elección popular mediante mecanismos democráticos, teniendo en cuenta el deber de garantizar la equidad de género.
h) Reglamentar las consultas internas, populares o el proceso de consenso para la selección de candidatos a cargos de elección popular y para la toma de decisiones con respecto a la organización del partido o a la reforma de sus estatutos.
i) Reglamentar el régimen de otorgamiento de avales;
j) Establecer un reglamento interno para los miembros de corporaciones públicas Reglamentar y establecer los aportes de donación para el sostenimiento del partido.
k) Adoptar normas para los fines de la utilización de los espacios institucionales en televisión y en los medios de comunicación para efectos de divulgación política y propagada electoral.
l) Expedir normas sobre régimen disciplinario interno, para sancionar la doble militancia y para separar a los directivos cuando quiera que no desempeñen sus funciones conforme a la Constitución, la Ley y los presentes estatutos.

Artículo 24. Deberes de los órganos e instancias de dirección. El Consjeo Político Nacional expedirá un reglamento que precise los deberes de cada uno de los órganos e instancias de dirección del partido y, en especial, regule los procesos de democratización interna y el fortalecimiento del régimen de bancadas.

CAPÍTULO IV
DE LAS DECISIONES

Artículo 25: Decisiones: Todas las decisiones del partido en sus diferentes órganos y niveles de dirección será tomadas por consenso o por mayoría simple. Para la toma de decisiones se garantizará la más amplia deliberación democrática; a la que seguirá la votación correspondiente, cuando no hubiere consenso. Realizada la votación, es deber de quienes se encuentren en minoría acogerse a la decisión mayoritoria. Por su parte, quienes estén en posición mayoritaria deberan respetar los derechos de la minoría.

Parágrafo 1º. Quórum deliberatorio. El quórum deliberatorio estará constituido por la mayoría simple de los integrantes del respetivo órgano o nivel de dirección. Para efectos de la toma de decisiones, la regla de mayoría simple aplica sobre el quórum deliberatorio.

Parágrafo 2º. Se faculta al Consejo Político Nacional reglamentar los casos en los que deban aplicar reglas específicas de mayoría.

Artículo 26. Mecanismos de impugnación de las decisiones de los órganos de dirección. Las decisiones adoptadas por los órganos de dirección podrán ser impugnadas así:

a) En primera instancia ante el mismo organismo que la adoptó.
b) En única instancia cuando el organismo no tenga superior jerárquico.
c)En segunda instancia o apelación cuando exista organismo superior jerárquico.

En todos los casos, la impugnación procederá dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al momento de su adopción. Las decisiones de la Asamblea Nacional de los Comunes y del Consejo Nacional de los Comunes no podrán ser impugnadas.

CAPÍTULO V
DE LAS COMISIONES DE TRABAJO

Artículo 27. Comisiones de trabajo. El Consejo Político Nacional organizará y reglamentará con funciones de gestión y ejecución del programa estratégico y de la línea política del partido, las siguientes comisiones de trabajo, sin perjuicio de otras que se consideren necesarias:

a) Plan nacional estratégico;

b) Política;
c) Organización;
d) Finanzas;
e) Investigación;
f) Educación;
g) Comunicación;
h) Relaciones Internacionales;
i) Solidaridad y derechos humanos;
j) Reincorporación.

Parágrafo. La comisión de finanzas tendrá como funciones la coordinación y gestión financiero y la ejecución del presupuesto, conforme a las reglas que establezca el Consejo Político Nacional.

CAPÍTULO VI
DEL CENTRO DE PENSAMIENTO Y FORMACIÓN POLÍTICA

Artículo 28. Centro de Pensamiento y Formación Política. El Partido tendrá un Centro de Pensamiento y Formación Política, que para efectos legales contará con personería jurídica propia; estará vinculado a una comisión en cabeza de un miembro del Consejo Político Nacional.

Parágrafo. Funciones. Son funciones del Centro:

a) Organizar y desarrollar la actividad investigativa, de educación y formación política, de formación para el gobierno, de historia y recuperación y preservación de la memoria, de asistencia y asesoría a la labor parlamentaria;
b) Realizar la preparación editorial de las publicaciones derivadas de su trabajo.
c) Preparar documentos y discusiones en torno a las luchas de las mujeres, pueblos étnicos, de la juventud y luchas diferenciales y particulares que retroalimenten los documentos programáticos y la línea política del partido.

Artículo 29. Transitorio: Se encarga al Centro de Pensamiento y Formación Política del Partido la redacción definitiva de los documentos programáticos de la primera Asamblea Nacional de los Comunes (Plataforma ideológica, Programa estratégico, Plataforma de movimiento de movimientos para la gran convergencia, Programa de Gobierno de transición y demás documentos), los cuales deberán ser puestos a consideración y aprobados por el Consejo Político Nacional.

CAPITULO VII
DE LOS ÓRGANOS E INSTANCIAS DE CONTROL

Artículo 30. Órganos e instancias de control. Son órganos de control del partido: La Comisión Etico-Disciplinaria Nacional; la Comisión de Veeduría y la Revisoría Fiscal. Le corresponde al Consejo Político Nacional constituir y organizar el trabajo de éstos organos e instancias; designar al Revisor Fiscal; establecer las causales de remoción de los integrantes de estas comisiones e instancias; y adoptar las decisiones de remoción cuando a ello haya lugar.

Artículo 31. Comisión de Veeduría. Es función de la Comisión de Veeduría velar por la transparencia y fidelidad de las actuaciones del partido, incluida la administración de sus recursos y patrimonio, y las demás que le señale el Consejo Político Nacional, el cual definirá además su número de sus integrantes. Para ser miembro de ella es necesario ser militante o afiliado/o y pertenecer a un Consejo Político Departamental.

Parágrafo: En todo caso serán funciones de la Comisión:

a) Vigilar el régimen de inhabilidades e incompatibilidades en que pudieren incurrir los militantes y lo/as candidato/as a cargos de elección popular;
b) Vigilar el procedimiento de otorgamiento de avales para los procesos electorales;
c) Velar por el respeto de los derechos de lo/as militantes;
d) Servir como instancia consultiva sobre asuntos relativos a la aplicación de los estatutos.

Artículo 32. Revisoría Fiscal. El/la Revisora Fiscal deberá ser contador público o una persona jurídica cuyo objeto sea la prestación del servicio de revisoría fiscal. Ejercerá las funciones que determine el Consejo Político Nacional en concordancia con lo estipulado por la ley en esa materia.

Artículo 33. Prohibiciones. Se prohíbe a los militantes que hagan parte de las instancias de control interno postularse para ejercer cargos de elección popular durante el tiempo que desempeñe dichas funciones y hasta seis meses después de su retiro.

CAPÍTULO VIII
DEL CÓDIGO ÉTICO-DISCIPLINARIO

Artículo 34. Código Ético-Disciplinario. Las conductas de los miembros del partido que incumplan los presentes estatutos y, en especial, sus deberes, serán juzgadas con observancia de los principios universales del debido proceso, conforme al código adoptado por la primera Asamblea Nacional de Comunes.

Parágrafo 1º.. En todo caso, las sanciones aplicables a los militantes del Partido son: a) amonestación; b) separación del cargo; c) suspensión temporal de derechos; d) separación de las filas del partido; d) expulsión.

Parágrafo 2º.. Se establecerá un reglamento diferencial para los/as militantes que hagan parte de las corporaciones públicas o cargos públicos.

Artículo 35. Comisión Ético-Disciplinaria Nacional. Se constituirá una Comisión Nacional Etico-Disciplinaria, en los términos y con las funciones señaladas por el Código Ético-Disciplinario.

CAPÍTULO IX
DE LAS RENTAS Y PATRIMONIO

Artículo 36. Rentas y patrimonio: Las rentas y patrimonio del partido estarán conformadas por las siguientes fuentes:

a) Las sumas que conforme a la Constitución y a la ley le correspondan como partido político y, en especial, las previstas en el Acto Legislativo 03 de 2017;
b) Los bienes y recursos que reciba a cualquier título de cualquier persona natural o jurídica, conforme a las reglas establecidas por la Constitución y la Ley;
c) Los aportes que hagan al partido sus militantes o simpatizantes;
d) Los créditos obtenidos con entidades del sector financiero legalmente constituidas y reconocidas.

Artículo 37. Recaudo. El recaudo de recursos para las actividades del partido se realizará con estricta sujeción a la normatividad vigente.

Artículo 38. Distribución de los recursos. Los recursos con que cuente el partido serán repartidos atendiendo los criterios de necesidad, para el funcionamiento interno y para atender los requerimientos de los procesos electorales en los distintos niveles. Para este efecto, la Comisión Nacional de Finanzas elaborará planes de ejecución y uso de los recursos, que serán aprobados por el Consejo Político Nacional.

CAPÍTULO X
DE LA DISOLUCIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN Y LIQUIDACIÓN.

Artículo 39. Disolución, fusión, escisión y liquidación. Las decisiones sobre disolución, fusión, escisión y liquidación del partido serán adoptadas por las Asamblea Nacional de los Comunes, la cual decidirá igualmente la entidad análoga o similar al Partido que recibirá los bienes y recursos remanentes que arroje la liquidación.

CAPÍTULO XI
DE OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 40. Reforma del Estatuto. Toda reforma a los presentes estatutos deberá ser adoptada por la Asamblea Nacional de los Comunes.

Parágrafo transitorio: Se faculta al Consejo Político Nacional por cuenta de dos (2) de sus integrantes designados por éste, para atender todos los cambios y ajustes que fueren

necesarios a los presentes Estatutos, por recomendación o requerimiento del Consejo Nacional Electoral.

Artículo 41. Duración del partido. El partido tendrá duración indefinida, pero estará sometido a las reglas de existencia definidas por la Constitución y la ley.

Artículo 42. Vigencia. Los presentes estatutos rigen a partir de su aprobación por la primera Asamblea Nacional de los Comunes.

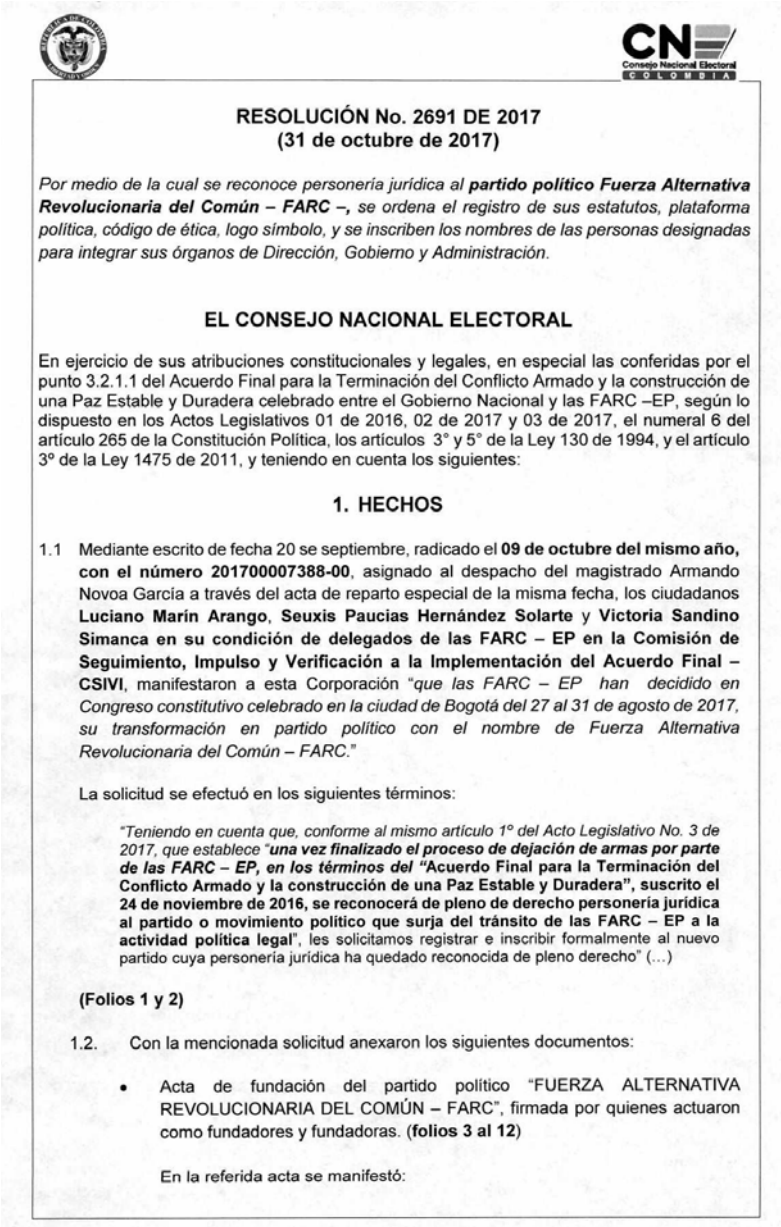
Dada en Bogotá, D. C. a los cuatro (4) días de mes de septiembre de dos mil diecisiete (2017).

Luciano Marín Arango
Presidente
cc.19.304.877

Criselda Lobo Silva
Secretaria
c.c. 63.303.703

Resolución 2691 por medio de la cual se reconoce personería jurídica al partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común – FARC

31 de octubre de 2017



RESOLUCIÓN No. 2691 DE 2017
(31 de octubre de 2017)

Por medio de la cual se reconoce personería jurídica al ***partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común – FARC –,*** *se ordena el registro de sus estatutos, plataforma política, código de ética, logo símbolo, y se inscriben los nombres de las personas designadas para integrar sus órganos de Dirección, Gobierno y Administración.*

EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por el punto 3.2.1.1 del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto Armado y la construcción de una Paz Estable y Duradera celebrado entre el Gobierno Nacional y las FARC –EP, según lo dispuesto en los Actos Legislativos 01 de 2016, 02 de 2017 y 03 de 2017, el numeral 6 del artículo 265 de la Constitución Política, los artículos 3° y 5° de la Ley 130 de 1994, y el artículo 3º de la Ley 1475 de 2011, y teniendo en cuenta los siguientes:

1. HECHOS

1.1 Mediante escrito de fecha 20 se septiembre, radicado el **09 de octubre del mismo año, con el número 201700007388-00**, asignado al despacho del magistrado Armando Novoa García a través del acta de reparto especial de la misma fecha, los ciudadanos **Luciano Marín Arango**, **Seuxis Paucias Hernández Solarte** y **Victoria Sandino Simanca en su condición de delegados de las FARC – EP en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final – CSIVI**, manifestaron a esta Corporación *"que las FARC – EP han decidido en Congreso constitutivo celebrado en la ciudad de Bogotá del 27 al 31 de agosto de 2017, su transformación en partido político con el nombre de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común – FARC."*

La solicitud se efectuó en los siguientes términos:

> *"Teniendo en cuenta que, conforme al mismo artículo 1º del Acto Legislativo No. 3 de 2017, que establece "**una vez finalizado el proceso de dejación de armas por parte de las FARC – EP, en los términos del "Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto Armado y la construcción de una Paz Estable y Duradera", suscrito el 24 de noviembre de 2016, se reconocerá de pleno de derecho personería jurídica al partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC – EP a la actividad política legal**", les solicitamos registrar e inscribir formalmente al nuevo partido cuya personería jurídica ha quedado reconocida de pleno derecho" (…)*

(Folios 1 y 2)

1.2. Con la mencionada solicitud anexaron los siguientes documentos:

- Acta de fundación del partido político "FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMÚN – FARC", firmada por quienes actuaron como fundadores y fundadoras. (**folios 3 al 12**)

  En la referida acta se manifestó:

* Facsímil

"Con base a la reglamentación anteriormente citada, damos fe de que hemos adoptado los Estatutos, la plataforma Ideológica y el Código Ético – disciplinario que se anexan a la presente acta de fundación.

Adicionalmente, y atendiendo a lo consignado en el artículo 23 de nuestros Estatutos, hemos decidido por unanimidad en nuestro Congreso Constitutivo elegir al Consejo Político Nacional, que está conformado ***por quince (15) integrantes*** *de la siguiente manera:*

CONSEJO POLÍTICO NACIONAL

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C
RODRIGO LONDOÑO ECHEVERRI - Presidente	79.149.126
LUCIANO MARIN ARANGO -Consejero Político Nacional	19.304.877
PABLO CATATUMBO TORRES VICTORIA- Consejero Nacional Organización	14.990.220
JULIAN GALLO CUBILLOS	16.266.146
MILTON DE JESÚS TONCEL REDONDO	15.237.742
PASTOR LISANDRO ALAPE LASCARRO	71.180.715
RODRIGO GRANDA ESCOBAR	19.104.578
JAIME ALBERTO PARRA RODRIGUEZ	1.214.464.706
JUAN HERMILO CABRERA DIAZ	5.977.013
CRISELDA LOBO SILVA	63.303.703
VICTORIA SANDINO SIMANCA HERRERA	26.212.730
FANCY MARIA ORREGO MEDINA	39.409.946
ELOISA RIVERA ROJAS	52.382.470
ISRAEL ALBERTO ZUÑIGA IRIARTE	72.152.361
JAIRO HERNANDO ESTRADA ALVAREZ	79.330.803

(Folio 2)

- Se adjuntó con la solicitud, la declaración de aceptación del cargo de las siguientes personas:

Nombre	Cédula	Cargo	Folios
RODRIGO LONDOÑO ECHEVERRI	79.149.126	Presidente del partido y miembro del Consejo Político Nacional	13
LUCIANO MARIN ARANGO	19.304.877	Consejero Político Nacional y miembro del Consejo Político Nacional	14
PASTOR LISANDRO ALAPE LASCARRO	71.180.715	Miembro del Consejo Político Nacional	15 y 16; 19 y 20
JULIAN GALLO CUBILLOS	16.266.146	Miembro del Consejo Político Nacional	17 y 18
JAIME ALBERTO PARRA RODRIGUEZ	1.214.464.706	Miembro del Consejo Político Nacional	21 y 22
PABLO CATATUMBO TORRES VICTORIA	14.990.220	Consejero Nacional de Organización y miembro del Consejo Político Nacional	23 y 24
CRISELDA LOBO SILVA	63.303.703	Miembro del Consejo Político Nacional	25 y 26
ELOISA RIVERA ROJAS	52.382.470	Miembro del Consejo Político Nacional	27 y 28
JAIRO HERNANDO ESTRADA ALVAREZ	79.330.803	Miembro del Consejo Político Nacional	29
VICTORIA SANDINO SIMANCA HERRERA	26.212.730	Miembro del Consejo Político Nacional	30 y 31

RODRIGO GRANDA ESCOBAR	19.104.578	Miembro del Consejo Político Nacional	32
FANCY MARIA ORREGO MEDINA	39.409.946	Miembro del Consejo Político Nacional	33 y 34
MILTON DE JESÚS TONCEL REDONDO	15.237.742	Miembro del Consejo Político Nacional	82

Se advierte que no se allegó la constancia de la aceptación del cargo de los señores JUAN HERMILO CABRERA DIAZ identificado con cédula de ciudadanía 5.977.013 e ISRAEL ALBERTO ZUÑIGA IRIARTE identificado con cédula de ciudadanía 72.152.361.

- Certificación de constitución del partido político "FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMÚN – FARC" suscrita por los señores Luciano Marín Arango y Criselda Lobo Silva (**folios 35**).

- Estatutos del partido "FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMÚN – FARC" (**folios 36 a 53**)

- Código Ético – Disciplinario del partido político "FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMÚN – FARC" (**folios 54 a 58**)

- Plataforma Ideológica del partido político "FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMÚN – FARC" (**folios 59 a 65**)

- Certificación de dejación de armas suscrita el 22 de septiembre del año en curso por el señor Jean Arnault, en su calidad de Representante Especial del Secretario General y Jefe de la Misión de las Naciones Unidas en Colombia,(UNMC-2017-022) dirigida al señor Presidente de la República Juan Manuel Santos Calderón, en la que manifiesta:

  "*En mi calidad de Representante Especial del Secretario de las Naciones Unidas en Colombia y Jefe de la Misión de la ONU en Colombia,* ***me permito informarle sobre la finalización y los resultados del proceso de dejación de armas de las Fuerzas Armaas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC- EP) verificado por la Misión, de conformidad con el Acuerdo Final de Paz y las resoluciones 2166 (2016) y 2307 (2016) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas***.

  En este sentido, certifico que la Misión extrajo exitosamente de las zonas veredales y puntos transitorios de normalización la totalidad de las armas ingresadas por las FARC – EP a sus campamentos. Además, certifico que las FARC – EP entregaron información sobre la ubicación de 1.027 caletas, de las cuales la Misión verificó la extracción de 750 caletas por medio de 182 operaciones a lo largo de todo el territorio de Colombia. (…) **(folios 66 – 67)** – se resalta -

- Posteriormente, mediante radicado 7576 del 13 de octubre del corriente año, el señor Luciano Marín Arango allegó un CD con el logo símbolo del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común – FARC –, que contiene la siguiente imagen:

FARC

Adjunto al mismo documento se encuentra también la declaración de aceptación del señor MILTON DE JESUS TONCEL REDONDO, con Cédula de Ciudadanía N° 15'237.742 de Maicao, como integrante de Consejo Político Nacional del nuevo partido político (folio 82).

- Mediante oficio radicado bajo el número 7668 – 00 del 18 de octubre de 2017, se allegó certificación emitida por **Rodrigo Rivera Salazar**, Alto Comisionado para la Paz donde consta que los señores **Luciano Marín Arango**, **Seuxis Paucias Hernández Solarte** y **Victoria Sandino Simanca han sido los tres delegados de las FARC – EP** en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final, tal como lo establece el artículo 2 del Decreto 1995 de 2016, en los siguientes términos:

> *"Como parte del cumplimiento del Acuerdo Final del Teatro Colón y específicamente del Acto Legislativo 03 de 2017, con el fin de garantizar el tránsito de las FARC – EP a la actividad política legal, posterior a la dejación total de las armas, me permito certificar que Luciano Marín Arango identificado con cédula de ciudadanía número 19.304.877, Seuxis Paucias Hernández Solarte identificado con cédula de ciudadanía número 92.275.786 y Victoria Sandino Simanca Herrera identificada con cédula de ciudadanía número 26.212.730 han sido los tres delegados por parte de las FARC como los integrantes de esta organización en la Comiisón de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final – CSIVI, tal y como se establece en el artículo 2 del Decreto 1995 de 2016.*
>
> *Estaré atento a cualquier solicitud de su parte."* (Folio 84)

2. CONSIDERACIONES

Previo a abordar el asunto en concreto, la Sala estima pertinente examinar los siguientes aspectos: (i) el marco jurídico y los requisitos para el reconocimiento de la personería jurídica; (ii) el momento para dicho reconocimiento y (iii) la solicitud en concreto. Por lo tanto, el presente acto administrativo tendrá la siguiente estructura:

2.1. Exposición del marco jurídico y de los requisitos para el reconocimiento de la personería del partido político "Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común – FARC"

2.1.1. El acuerdo final para la terminación del conflicto, suscrito entre las FARC – EP y el Gobierno Nacional, el 24 de noviembre de 2016

2.1.2. El Acto Legislativo 03 de 2017

2.2. Momento para el reconocimiento de la personería jurídica del partido político que surja del Acuerdo Final entre el gobierno nacional y las FARC-EP

2.2.1. El Acto Legislativo 01 de 2016
2.2.2. Decreto Ley 121 de 2017
2.2.3. Resolución No. 003 del 11 de enero de 2017 y la inscripción transitoria de "Voces de Paz y Reconciliación

2.3. De la solicitud de reconocimiento de personería del partido político "Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común – FARC

2.3.1. El alcance del reconocimiento de pleno derecho de la personería jurídica en los términos del Acto Legislativo 03 de 2017.

2.3.2. La dejación de armas

2.3.3. La legitimación de los solicitantes.

2.3.4 El contenido de los estatutos a la luz de lo establecido en el acto legislativo y de la normatividad vigente, en especial, su compromiso con la equidad de género conforme a los criterios constitucionales de paridad, alternancia y universalidad en el funcionamiento y organización interna.

2.3.5. La procedencia del registro del logo símbolo presentado, y

2.3.6 La procedencia del registro de los miembros de los órganos de dirección y administración.

2.1. Del marco jurídico y los requisitos para el reconocimiento de la personería del partido político "Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común – FARC"

Para decidir sobre el asunto bajo examen del Consejo Nacional Electoral, corresponde examinar los siguientes antecedentes normativos y jurisprudencias:

2.1.1 El acuerdo final para la terminación del conflicto, suscrito entre las FARC – EP y el Gobierno Nacional, el 24 de noviembre de 2016

Con la firma del acuerdo final para la terminación del conflicto, suscrito entre las FARC – EP y el Gobierno Nacional el 24 de noviembre de 2016, se dispuso poner fin al conflicto armado interno existente con esa organización en armas e iniciar la transición hacia la construcción de una paz estable y duradera.

El acuerdo se fundó en seis pilares: **i)** reforma rural integral, **ii) participación política, iii)** reglas para el fin del conflicto, **iv)** solución al problema de las drogas ilícitas, y **v)** acuerdo sobre las víctimas del conflicto, e **vi)** Implementación, verificación y refrendación

Con base en lo anterior, el Congreso de la República ha expedido varios actos legislativos relacionados con esta materia[1].

- A partir de lo dispuesto en el **artículo 5° del acto legislativo N° 01 de 2016**[2], se procedió a la refrendación del Acuerdo Final suscrito el 24 de noviembre de 2016, los días 29 y 30 de noviembre de 2016[3].

  Esta refrendación del acuerdo, vía Congreso, adquiere **carácter vinculante,** como lo determinó la Corte Constitucional al estudiar la exequibilidad del Acto Legislativo 01 de 2016:

  "Si bien el orden jurídico no da una definición expresa y cerrada de lo que debe entenderse por refrendación popular, tras una interpretación fundada en todos los elementos constitucionales relevantes, la Corporación concluyó que la refrendación popular debe ser definida dentro del siguiente marco conceptual:

  La refrendación popular que ponga en vigencia el Acto Legislativo 1 de 2016 debe ser ***(i) un proceso (ii) en el cual haya participación ciudadana directa, (iii) cuyos resultados deben ser respetados, interpretados y desarrollados de buena fe, en un escenario de búsqueda de mayores consensos, (iv) proceso que puede concluir en virtud de la decisión libre y deliberativa de un órgano revestido de autoridad democrática, (v) sin perjuicio de ulteriores espacios posibles de intervención ciudadana que garanticen una paz "estable y duradera".***

  Según lo anterior, puede haber refrendación popular con participación ciudadana previa, caso en el cual se le reconoce poder al pueblo para ordenar la readecuación de lo específicamente sometido a su consideración, ***aunque tras la expresión ciudadana es legítimo que el proceso continúe y concluya en virtud de las competencias de una o más autoridades instituidas que le pongan fin.***

  Cuando una ***autoridad de esta naturaleza (que puede ser el Congreso de la República) decida conforme a los anteriores principios que el acuerdo final surtió un proceso de refrendación popular, el Acto Legislativo 1 de 2016 entrará en vigencia,*** *sin perjuicio del* ***control constitucional posterior*** *que tendrá lugar cuando los actos especiales respectivos surtan su revisión ante la Corte. El hecho de que esta decisión fije los principios para interpretar la entrada en vigencia del Acto Legislativo, pero no establezca si se verifican o no, se debe a que para asumir competencias de control sobre el citado acto reformatorio basta con que haya sido promulgado y tenga vocación de entrar en vigor, mas no que además se encuentre vigente".*[4]

- En similar sentido, la **Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado** señaló que:

  "El ***Congreso de la República puede efectuar la refrendación del nuevo 'Acuerdo Final*** *para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, suscrito*

[1] Actos Legislativos 1, 2 y 3 de 2017. El primero establece el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición; el segundo adiciona un artículo transitorio a la Constitución y deroga el artículo 4° transitorio del acto legislativo 1 de 2016, el tercero, se refiere a la reincorporación política.

[2] "Por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y duradera (...) ARTICULO. 5°. VIGENCIA. El presente acto legislativo rige a partir de la refrendación popular el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera". En el Acuerdo sobre "Refrendación" se lee lo siguiente: "El nuevo Acuerdo Final para la Terminación del conflicto y la Construcción de una Paz Estanle y Duradera deberá ser objeto de refrendación, de acuerdo con el Punto 6 de la Agenda del Acuerdo General. Dicha refrendación podrá efectuarse mediante sistemas de participación ciudadana como son el plebiscito, la iniciativa legislativa, la consulta, el cabildo abierto y otros, o por corporaciones públicas elegidas mediante sufragio sobre cuyos miembros recaiga representación con mandato tales como el Congreso de la República, las asableas departamentales y concejos municipales. El Gobierno Nacional y las FARC-EP acordarán el mecanismo de refrendación que habrá de hacerse como las normas pertinentes o sentencias le indiquen".

[3] Gaceta del Congreso No. 1083 del 2 de diciembre de 2016 y Proposición No. 83 aprobada por el Senado de la República el 29 de noviembre de 2016.

[4] Sentencia C-699 de 2016 del 13 de diciembre de 2016.

por el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas y Revolucionarias de Colombia –Ejército del Pueblo' ***del 24 de noviembre de 2016, en virtud del mandato representativo y las amplias funciones de control político*** *que le reconoce la Constitución Política*"[5].

- También debe mencionarse el **Acto Legislativo 02 de 2017**, que **derogó lo establecido en el artículo 4° del Acto Legislativo 1 de 2016**[6] , que dice lo siguiente:

Artículo 1. *La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio así:*

Artículo transitorio xx. En desarrollo del derecho a la paz, los contenidos del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado el día 24 de noviembre de 2016, que correspondan a normas de derecho internacional humanitario o derechos fundamentales definidos en la Constitución Política y aquellos conexos con los anteriores, ***serán obligatoriamente parámetros de interpretación y referente de desarrollo y validez de las normas y las leyes de implementación y desarrollo del Acuerdo Final****, con sujeción a las disposiciones constitucionales. Las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final. En consecuencia,* ***las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del Acuerdo Final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final.***

Artículo 2. *El presente Acto Legislativo* ***deroga el artículo 4 del Acto Legislativo número 01 de 2016*** *y rige a partir de su promulgación hasta la finalización de los tres periodos presidenciales completos posteriores a la firma del Acuerdo Final.*

- Este último acto legislativo fue declarado exequible por la Corte Constitucional, mediante **sentencia C-630 de 2017**[7].

De acuerdo con lo reseñado, resulta palmario que el **Acuerdo Final, suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, el 24 de noviembre de 2016, fue objeto de la refrendación política correspondiente por el Congreso de la República, y como tal, adquiere validez y tiene carácter vinculante para las autoridades públicas**, tal como lo mencionó esta corporación en ocasión anterior.[8]

---

[5] Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Rad. 2323, de fecha 28 de noviembre de 2016.

[6] El artículo 4° del Acto Legislativo 1 de 2016, disponía: "En desarrollo del derecho a la paz, el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera constituye un Acuerdo Especial en los términos del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949. Con el fin de ofrecer garantías de cumplimiento del Acuerdo Final, una vez éste haya sido firmado y entrado en vigor ingresará en estricto sentido al bloque de constitucionalidad para ser tenido en cuenta durante el periodo de implementación del mismo como parámetro de interpretación y referente de desarrollo y validez de las Normas y las Leyes de Implementación y Desarrollo del Acuerdo Final. En desarrollo del Derecho a la paz, el Procedimiento Legislativo Especial para la aprobación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, incluirá un "procedimiento de ley aprobatoria del Acuerdo Especial" con los siguientes criterios procedimentales especiales: envío al Congreso para su incorporación al derecho interno por medio de una ley; tramitación como ley ordinaria: radicación del proyecto ante la secretaria del Senado y publicación, debate en comisiones constitucionales conjuntas del Senado y Cámara, votación, debate en plenario del Senado; y debate en plenario de la Cámara. El tránsito del proyecto entre comisión y plenaria será de 8 días, las votaciones serán únicamente de aprobación o improbación de todo el texto; control de constitucionalidad de la ley aprobatoria del Acuerdo Especial; sanción presidencial y publicación en diario oficial; el Gobierno se obligará a presentar esta ley aprobatoria inmediatamente sea firmado y aprobado el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, y entrado en vigor el presente Acto Legislativo. El procedimiento legislativo de aprobación de leyes o actos legislativos para la implementación o desarrollo del Acuerdo Final, será el Procedimiento legislativo especial para la paz establecido en el artículo primero de este Acto Legislativo, y estará en vigencia para la aprobación de normas de implementación y desarrollo del Acuerdo Final durante el tiempo establecido en el mismo artículo. El control constitucional relacionado con la aprobación de la ley aprobatoria del I Acuerdo Especial, será único y automático. El control constitucional relacionado con la implementación del Acuerdo Final mediante Leyes ordinarias o leyes estatutarias, será único y automático".

[7] Comunicado N° 51 del 11 de octubre de 2017, Corte Constitucional.

[8] Resolución N° 0003 de 2017. En el aparte correspondiente se señala: "No cabe duda de la reafirmada validez y vigencia de los contenidos del Acuerdo Final, en el ámbito nacional, según las sentencias de las Altas Cortes de nuestro país".

- Ahora bien, para el caso que nos ocupa, **la reincorporación política** del partido que surja de la desmovilización del mencionado grupo guerrillero, quedó establecida en el numeral **3.2.1.1** del Acuerdo Final así[9]:

"***3.2.1.1. Garantías para el nuevo partido o movimiento político***

• ***Personería jurídica.***

A la firma del Acuerdo Final ***el Consejo Nacional Electoral*** *dará* ***trámite a la solicitud de registro*** *que le presente la agrupación política de ciudadanos en ejercicio que tenga por objeto promover la creación del futuro partido o movimiento político que surja de la transición de las FARC-EP a la vida política legal.* ***Finalizado el proceso de dejación de las armas, los plenipotenciarios de las FARC-EP en la Mesa de Conversaciones manifestarán y registrarán formalmente ante el Consejo Nacional Electoral la decisión de su transformación en partido o movimiento político, el acta de constitución, sus estatutos, el código de ética, la plataforma ideológica y la designación de sus directivos. En virtud de este acto formal, el partido o movimiento político, con la denominación que adopte, será reconocido para todos los efectos y en igualdad de condiciones como un partido o movimiento político con personería jurídica, para lo cual el Gobierno Nacional tramitará previamente las reformas normativas a que hubiere lugar.*** *El partido o movimiento político así reconocido deberá cumplir los requisitos de conservación de la personería jurídica y estará sujeto a las causales de pérdida de la misma previstas para los demás partidos y movimientos políticos de conformidad con la Constitución y la ley, salvo la acreditación de un determinado número de afiliados, la presentación a certámenes electorales y la obtención de un umbral de votación, durante el tiempo comprendido entre la fecha del registro y el 19 de julio de 2026. – se resalta -*

• ***Financiación y asistencia técnica***

• ***Funcionamiento*** *Como una medida para facilitar el tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, el partido o movimiento político que constituyan recibirá anualmente, entre la fecha del registro y el 19 de julio de 2026, una suma equivalente al promedio que recibieron los partidos o movimientos políticos con personería jurídica para su funcionamiento en las elecciones previas a la firma del Acuerdo Final. El uso de estos recursos se hará acorde con las reglas que aplican a todos los partidos y movimientos políticos. Por otra parte, con el fin de contribuir a la financiación del Centro de pensamiento y formación política (3.2.2.2), así como a la difusión y divulgación de su plataforma ideológica y programática, se le asignará una suma equivalente al 7% anual de la apropiación presupuestal para el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos entre la fecha del registro y el 19 de julio de 2022. Las anteriores sumas no afectarán el monto a distribuir por parte del Fondo para los demás partidos y movimientos políticos con personería jurídica. El Gobierno promoverá que la cooperación internacional apoye, con las debidas garantías de transparencia, el desarrollo de la infraestructura necesaria para la constitución y el funcionamiento inicial del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal así como para la formación de sus dirigentes. Los recursos de cooperación no podrán utilizarse para campañas electorales.*

• ***Campañas electorales.*** *Las campañas de los candidatos a la Presidencia y al Senado de la República inscritos por el partido o movimiento político que surja de la transición de las FARC-EP a la actividad política legal para participar en las elecciones de 2018 y 2022, tendrán financiación preponderantemente estatal de conformidad con las siguientes reglas: i) En el caso de las campañas presidenciales*

[9] Tomado de http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf

se les reconocerá la financiación estatal que corresponda a los candidatos que reúnan los requisitos de ley, de conformidad con las disposiciones aplicables a dichas campañas; ii) En el caso de las campañas al Senado, recibirán financiación estatal anticipada equivalente al 10% del límite de gastos fijados por la autoridad electoral; iii) la financiación estatal previa no estará sujeta a devolución, siempre y cuando los recursos asignados hayan sido destinados a las finalidades establecidas en la ley.

*• **Acceso a medios.** El partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal tendrá acceso a espacios en los medios de comunicación en las mismas condiciones que los demás partidos y movimientos políticos con personería jurídica, de acuerdo con la aplicación de las normas vigentes.*

*• **Seguridad.** El nuevo movimiento político, sus dirigentes y militantes, tendrán garantías especiales de seguridad en el marco del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política acordado en el punto 2.1.2.1., así como las acordadas en el punto 3.4".*

Esta parte del Acuerdo se encuentra recogida en el **Acto Legislativo 3 de 2017.**

2.1.2. Del Acto Legislativo 03 de 2017

En desarrollo del marco establecido por el Acto Legislativo 01 de 2016, y para el asunto que ocupa la atención de la Sala, el 23 de mayo de 2017, el Congreso de la República expidió el Acto Legislativo 03 de 2017, que fija las reglas para la reincorporación política y, en particular para la obtención de la personería jurídica del nuevo partido o movimiento político de la siguiente forma:

*"**Artículo 1°.** La Constitución Política tendrá los siguientes nuevos artículos transitorios:*

***Artículo Transitorio 1.** Una vez finalizado el proceso de dejación de las armas por parte de las FARC-EP, en los términos del "Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, suscrito el 24 de noviembre de 2016, se reconocerá de pleno derecho personería jurídica al partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal.*

Para esos efectos, finalizado el proceso de dejación de las armas, los delegados de las FARC – EP en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del acuerdo Final, manifestarán y registrarán formalmente ante el Consejo Nacional Electoral o quien haga sus veces la decisión de su transformación en partido o movimiento político, el acta de constitución, sus estatutos, el código de ética, la plataforma ideológica y la designación de sus directivos, así como su compromiso con la equidad de género conforme a los criterios constitucionales de paridad, alternancia y universalidad en el funcionamiento y organización interna. En virtud de este acto formal, el partido o movimiento político, con la denominación que adopte, será inscrito para todos los efectos y en igualdad de condiciones como un partido o movimiento político con personería jurídica.

El partido o movimiento político reconocido deberá cumplir los requisitos de conservación de la personería jurídica, y estará sujeto a las causales de pérdida de la misma previstas para los demás partidos y movimientos políticos de conformidad con la Constitución y la ley, salvo la acreditación de un determinado número de afiliados, la presentación a certámenes electorales y la obtención de un umbral de votación, durante el tiempo comprendido entre la fecha de su inscripción en el registro único de partidos y movimientos políticos y el 19 de julio de 2026. Después de esta fecha se le aplicarán las reglas establecidas para todos los partidos o movimientos políticos. El reconocimiento de la personería jurídica atribuirá al nuevo partido o movimiento político los mismos derechos de los demás partidos o movimientos políticos con personería jurídica. (…)"

Sobre la vigencia de los Actos Legislativos derivados del Procedimiento Legislativo Especial para la Paz, la Corte Suprema de Justicia ha manifestado que los mismos hacen parte del ordenamiento jurídico colombiano, y por tanto, no es posible desconcer su obligatoriedad.

- Concretamente, sobre la vigencia jurídica del Acto Legislativo 01 de 2017, a través de Auto AP3393 – 2017[10], del 31 de mayo del corriente año, al estudiar la situación de uno de los miembros de la guerrilla FARC – EP, el Alto Tribunal expresó:

> *"Dada la reconocida condición de JULIO ENRIQUE LEMOS MORENO como miembro de las FARC – EP, acreditada también mediante certificación expedida por el Alto Comisionado para la Paz, la Sala no puede sustraerse de las normas que se han ocupado de desarrollar el "Acuerdo final para la Terminación del Conflicto y la duración de una paz Estable y Duradera" suscrito el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón de Bogotá por el Presidente de la República y el Comandante del Estado Mayor de las FACR – EP, vigente a partir del 1 de diciembre de ese año (…)*
>
> *Aunque la captura con fines de extradicón se libró el 30 de marzo de 2009, es decir, mucho antes de que se integrará al ordenamiento jurídico nacional el Acto legislativo 01 del 04 de abril de 2017, es claro que a partir de esta nueva normatividad "tomar medidas de aseguramiento con fines de extradición" respecto de miembros de las FARC- EP por delitos cometidos en el marco del conflicto armado interno o con ocasión de este, con anterioridad a la forma del Acuerdo Final de Paz, resulta contrario a la Constitución Política por inconstitucionalidad sobreviniente, la cual tiene lugar cuando una nueva Constitución o como en este caso, la reforma de su texto, determina que una norma legal anteriormente exequible, ahora resulte inconstitucional por no ser compatible con el contenido del nuevo texto superior, caso en el cual es aplicable el principio establecido en el artículo 9 de la Ley 153 de 1887 que señala:*
>
> *La Constitución es ley reformatoria y derogatoria de la legislación preexistente. Toda disposición legal anterior a la Constitución y que sea claramente contraria a su letra o a su espíritu, se desechará como insubistente. (…)"*

- En un auto posterior[11], la Corte Suprema de Justicia reiteró que lo establecido por los Actos Legislativos y Decretos Ley derivados del Procedimiento Legislativo Especial para la Paz, tiene vigencia y aplicación inmediata:

> *"En efecto, para comenzar debe resaltarse que en el msmo Acuerdo Final para la paz se declara que sus contenidos "serán obligatoriamente parámetros de interpretación y referente de desarrollo y validez de las normas y las leyes de implementación y desarrollo" de lo acordado y que por ello " las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del Acuerdo Final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final."*
>
> *Con base en lo dispuesto en el artículo 2 del Acto Legislativo 01 de 2017, el Presidente de la República expidió el Decreto 277 de 2017 con el propósito de regular el procedimiento para la efectiva implementación de la Ley 180 de 2016 que, a su vez, estableció la amnistía e indulto por delitos políticos y conexos, los tratamientos penales especiales diferenciados para agentes del Estado y el régimen de libertades aplicable a los destinatarios de la Jurisdicción Especial para la Paz (…)"*

[10] Auto AP3393 – 2017, radicación 50220, Aprobado Acta No. 176 del 31 de mayo de 2017.
[11] Auto AP5069 -2017, Radicación 50655 del 9 de agosto de 2017

De lo anterior se colige de manera diáfana que las normas contenidas en los Actos Legislativos y Decretos Ley expedidos en virtud del Procedimiento Legislativo Especial para la Paz, esto es, el Acto Legislativo 01 de 2016 se encuentran vigentes y son de aplicación inmediata y obligatoria para las autoridades públicas.

2.2. Momento para el reconocimiento de la personería jurídica del partido político que surja del Acuerdo Final entre el gobierno nacional y las FARC-EP

Antes de establecer si la solicitud presentada por los peticionarios cumple con los requisitos contenidos en el Acto Legislativo N° 03 de 2017, debe examinarse si el reconocimiento de la personería jurídica es procedente antes de que la H. Corte Constitucional se pronuncie sobre la constitucionalidad de esa enmienda a la carta fundamental[12].

La respuesta a esta inquietud es que no existe ningún impedimento constitucional o normativo que limite esta decisión, por las razones que a continuación se exponen.

2.2.1. El Acto Legislativo 01 de 2016

El 7 de julio de 2016, el Congreso expidió el Acto Legislativo 01 por medio del cual se establecieron instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

Allí se dispuso un procedimiento legislativo especial para la paz de carácter excepcional, preferencial y transitorio, con el propósito de agilizar y garantizar la implementación del acuerdo final.

Este procedimiento se concreta, en lo pertinente, en las siguientes reglas[13]:

a) Los proyectos de ley y de acto legislativo tramitados mediante el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz **tendrán control automático y único de constitucionalidad, posterior a su entrada en vigencia**.

b) Las **Leyes Estatuarias, en cambio, tendrán control previo**, de conformidad con lo previsto en el artículo 153 de la Constitución.

c) El control de constitucionalidad de los actos legislativos se hará solo por **vicios de procedimiento en su formación**. Los términos de esta revisión para leyes y actos legislativos se reducirán a la tercera parte del procedimiento ordinario y no podrán ser prorrogados.

Cabe advertir que la Corte Constitucional declaró inexequibles los literales h) y j) del artículo 1° de este acto legislativo en cuanto impedían las modificaciones de los proyectos de ley y de acto legislativo o los cambios no avalados por el Gobierno nacional relacionados con los desarrollos del Acuerdo Final[14].

[12] A la fecha en que se expide este acto administrativo aún no se conoe decisión de la H. Corte Constitucional sobre la exequilibidad del acto legislativo.
[13] Artículo primero del Acto Legislativo 01 de 2016
[14] Corte Constitucional, sentencia C-332 de 2017.

Lo anterior, debe entenderse en consonancia con lo dispuesto por el artículo 5 del mismo acto legislativo, esto es, que la refrendación "popular" es un proceso complejo que cuenta con la participación de instituciones revestidas de autoridad democrática y, en especial, del Congreso de la República[15]:

> *La refrendación popular que ponga en vigencia el Acto Legislativo 1 de 2016 debe ser* ***(i) un proceso (ii) en el cual haya participación ciudadana directa, (iii) cuyos resultados deben ser respetados, interpretados y desarrollados de buena fe, en un escenario de búsqueda de mayores consensos, (iv) proceso que puede concluir en virtud de la decisión libre y deliberativa de un órgano revestido de autoridad democrática, (v) sin perjuicio de ulteriores espacios posibles de intervención ciudadana que garanticen una paz "estable y duradera".***
>
> *Según lo anterior, puede haber refrendación popular con participación ciudadana previa, caso en el cual se le reconoce poder al pueblo para ordenar la readecuación de lo especificamente sometido a su consideración,* ***aunque tras la expresión ciudadana es legítimo que el proceso continúe y concluya en virtud de las competencias de una o más autoridades instituidas que le pongan fin.***
>
> *Cuando una* ***autoridad de esta naturaleza (que puede ser el Congreso de la República) decida conforme a los anteriores principios que el acuerdo final surtió un proceso de refrendación popular, el Acto Legislativo 1 de 2016 entrará en vigencia,*** *sin perjuicio del* ***control constitucional posterior*** *que tendrá lugar cuando los actos especiales respectivos surtan su revisión ante la Corte.*

Se extraen de lo anterior, dos conclusiones:

a) Que **el acto legislativo 1 de 2016 rige en la actualidad** y las normas que lo integran se encuentran vigentes, salvo los literales **h) y j) del artículo 1** declarados inexequibles mediante la sentencia C – 332 de 2017 y el artículo 4 transitorio que fue derogado por el Acto Legislativo 02 de 2017.

b) Que según lo dispuesto en su artículo 1°, literal k), los actos legislativos que se expidan a través del Procedimiento Legislativo Especial para la Paz, deben ser objeto de "un **control automático y único de constitucionalidad, posterior a su entrada en vigencia**", situación diferente de las leyes estatutarias que se expidan a través de este mecanismo las cuales deben ser objeto de un "**control previo**, de conformidad con lo previsto en el artículo 153 de la Constitución".

Por tanto, los actos legislativos que se expidan en desarrollo del "Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera", **se encuentran vigentes a partir de su promulgación, esto es, desde la fecha de su inserción en el Diario Oficial, salvo que en ella s ehubiera establecido una regla diferente.**[16]

2.2.2. Decreto Ley 121 de 2017

Por otra parte, y en consonancia con lo anterior, en virtud de las facultades establecidas en el literal k) del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2016, el Gobierno Nacional, expidió el Decreto Ley 121 de 2017 que adicionó un capítulo transitorio al Decreto 2067 de 1991[17], con

[15] Sentencia C-699 de 2016 del 13 de diciembre de 2016.
[16] Este acto legislativo fue publicado en el Diario Oficial N° 50.242 del 23 de mayo de 2017.
[17] "Por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional".

el fin de **reglamentar el procedimiento para el control constitucionalidad de las leyes y los actos legislativos aprobados en virtud del Procedimiento Legislativo para la Paz**[18].

La Corte Constitucional a través de sentencia C – 174 de 2017 declaró constitucional el Decreto Ley 121 de 2017 y concluyó que, el procedimiento especial para ejercer el control de constitucionalidad de las leyes, actos legislativos y decretos leyes expedidos para la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera se ajusta a la Constitución, salvo en lo concerniente al término del que dispone la Sala Plena de la Corporación para decidir sobre la constitucionalidad de estas normas.

Así lo expresó en esa sentencia:

> *"El control automático se ejerce, por ejemplo, respecto de las leyes que convocan a un referendo o a asamblea constituyente, de decretos legislativos que declaran, desarrollan, prorrogan o levantan un estado de excepción, de los proyectos de ley estatutaria y de las leyes aprobatorias de tratados expedidas con posterioridad a la Constitución de 1991 (CP art 241 nums 2, 7, 8 y 10).* ***También es automática la revisión de constitucionalidad de los actos legislativos, las leyes, los proyectos de ley estatutaria y los decretos leyes expedidos en el marco de las previsiones del Acto Legislativo 1 de 2016*** *(AL 1 de 2016 arts. 1 y 2).*
>
> *El control constitucional que ejerce la Corte puede ser posterior o previo a un momento jurídicamente relevante. Usualmente, el control es previo o posterior, según si se efectúa antes o después de ser promulgado el acto sujeto a revisión, sin considerar su momento de entrada en vigencia. En este sentido, sería posterior el control de los actos reformatorios de la Constitución, las leyes, los decretos con fuerza de ley y los decretos legislativos (CP arts. 241 -nums 1, 4, 5 y 7- y 379), y previo el de los proyectos de ley estatutaria y de los proyectos objetados por el Gobierno Nacional. No obstante, en ciertos contextos el momento jurídicamente relevante puede no ser la promulgación, sino la entrada en vigor del respectivo acto.* ***En el Acto Legislativo 1 de 2016, por ejemplo, es claro que el control de actos legislativos, leyes y decretos leyes es posterior, no a la promulgación, sino a su entrada en vigencia (arts. 1 y 2),*** *mientras el de las "leyes estatutarias" tiene carácter "previo", y puede presumirse que ha de ser previo al menos a su entrada en vigencia.* ***No es igual, debe recabarse, que el control sea posterior a la promulgación de un acto, a que sea posterior a su entrada en vigencia, toda vez que "promulgada" y "vigente" son dos propiedades que pueden no coincidir cronológicamente. Mientras que la promulgación es un acto de divulgación pública del documento o texto normativo, que no implica por sí misma fuerza normativa para lo promulgado, la vigencia sí tiene implicaciones normativas para el acto jurídico****. De ordinario, las*

[18] Dicho procedimiento establece lo siguiente:
"Artículo 1", Control de constitucionalidad de leyes y actos legislativos aprobados en virtud del Procedimiento Legislativo Especial para la Paz*. Para efectos del cumplimiento de lo previsto en el literal k) del artículo 1 Acto Legislativo 01 de 2016, la revisión de constitucionalidad de las leyes y actos legislativos tramitados mediante el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz se sujetará a las normas del Decreto 2067 de 1991, y, en particular, a las siguientes reglas:*
"1. *El magistrado sustanciador asumirá conocimiento del proceso dentro de los tres (3) días siguientes al reparto del respectivo expediente. En el auto que asuma conocimiento, el magistrado sustanciador dispondrá la práctica de las pruebas que considere necesarias, las comunicaciones e invitaciones correspondientes, la fijación en lista del proceso para la intervención ciudadana y el traslado del expediente al Procurador General de la Nación.* ***2.*** *El término probatorio no podrá exceder de tres (3) días, contados a partir del día siguiente a la comunicación del auto que asuma conocimiento.* ***3.*** *Vencido el periodo probatorio, el magistrado sustanciador tendrá dos (2) días para revisar y valorar el material probatorio.* ***4.*** *Hecha la revisión y valoración del material probatorio, el magistrado sustanciador ordenará dar cumplimiento a las comunicaciones, traslados y fijaciones previstas en el auto que asuma conocimiento.* ***5.*** *El Procurador General de la Nación contará con un plazo de diez (10) días para rendir el concepto de rigor. El término de intervención ciudadana correrá simultáneamente al del Procurador General de la Nación y hasta por el mismo plazo.* ***6.*** *El magistrado sustanciador tendrá un plazo de diez (10) días para registrar el proyecto de fallo, contados a partir del día siguiente al vencimiento del término establecido para que el Procurador General rinda concepto.* ***7.*** *La Sala Plena de la Corte Constitucional tendrá un plazo de veinte (20) días para decidir, los cuales se contarán a partir del día siguiente al vencimiento del término establecido para que el magistrado sustanciador registre proyecto de fallo."*

leyes y decretos entran en vigencia con su promulgación, pero naturalmente está dentro de las facultades del autor de la norma sujetar la entrada en vigor de sus actos a plazo o condición, susceptibles de cumplirse después de la promulgación, caso en el cual la norma podría estar promulgada pero carecer de vigencia.[19]"

Por tanto, la posibilidad de que el Consejo Nacional Electoral decida sobre la solicitud de reconocimiento de la personería jurídica del partido o movimiento político que surja de la dejación de armas por parte del grupo armado de que trata esta actuación, no se encuentra sujeto a que, previamente, la Corte Constitucional se pronuncie alrededor de la exequibilidad del acto legislativo 03, que como se dijo atrás, fija las reglas para tal reconocimiento.

2.2.3. Resolución No. 003 del 11 de enero de 2017 y la inscripción transitoria de "Voces de Paz y Reconciliación"

Conviene también señalar que a través de esta resolución, el Consejo Nacional Electoral creó un registro especial de agrupaciones políticas, con el fin de atender a lo establecido en el punto 3.2.1.1 del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto Armado y la construcción de una Paz Estable y Duradera celebrado entre el Gobierno Nacional y las FARC –EP, e inscribió al grupo de ciudadanos denominado "Voces de Paz y Reconciliación" como agrupación política, advirtiendo que de dicho registro no se derivan los derechos de la personería jurídica consagrados en el artículo 108 de la Constitución Política.

En la parte considerativa, dicho acto expresó:

"(…) No cabe duda de la reafirmada validez y vigencia de los contenidos del Acuerdo Final, en el ámbito nacional, según las sentencias de las Altas Cortes de nuestro país. En este orden de ideas, el Consejo Nacional Electoral, como máximo órgano de inspección, vigilancia y control electoral, dentro del ámbito de sus competencias constitucionales y en atención a lo establecido por Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto Armado y la construcción de una Paz Estable y Duradera suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC –EP, en el punto 3.2.1.1 Garantías para el Nuevo partido o movimiento político, establece que a la firma del Acuerdo Final entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC, debe tramitar la solicitud de registro de la Agrupación Política de ciudadanos que tenga por objeto promover la creación del partido o ovimiento político, fruto del tránsito de las FARC – EP de organización alzada en armas a la vida política legal del país.

El registro como agrupación política del grupo de ciudadanos denominado VOCES DE PAZ Y RECONCILIACION, es procedente para el Consejo Nacional Electoral, teniendo en cuenta que es un trámite establecido dentro del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto Armado y la construcción de una Paz Estable y Duradera suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC –EP, (Punto 3.2.1.1 Garantías para el Nuevo partido o movimiento político), el cual fue refrendado popularmente por el Congreso de la República, el pasado mes de noviembre del corriente (…) "

De acuerdo con lo anterior y dado que al momento de la expedición del presente acto administrativo no existe pronunciamiento de la Corte Constitucional que impida la aplicación **inmediata** de lo dispuesto en el Acto Legislativo 03 de 2017, procede la Sala a evaluar si la solicitud allegada por los miembros de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común – FARC cumple con los requisitos establecidos constitucionalmente.

[19] Corte Constitucional, sentencia C – 174 de 2017

2.3. De la solicitud de reconocimiento de personería del partido político "Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común – FARC

El acto legislativo 03 de 2017 estableció que una vez finalizado el proceso de dejación de armas en los términos previstos por el Acuerdo Final **se reconocerá de pleno derecho** la personería jurídica al partido político que surgiera del transito de las FARC – EP a la actividad política legal.

Para ello, los delegados de las FARC – EP ante la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) tenían la obligación de manifestar y registrar formalmente ante esta Corporación (o la que haga sus veces) la decisión de su transformación en partido o movimiento político junto con los siguientes documentos:

a. El acta de constitución
b. Sus estatutos
c. El código de ética
d. La plataforma ideológica
e. La designación de sus directivos
f. Su compromiso con la equidad de género conforme a los criterios constitucionales de paridad, alternancia y universalidad en el funcionamiento y organización interna.

Además, el acto legislativo establece que el partido o movimiento político con la denominación que adopte será inscrito para todos los efectos y en igualdad de condiciones como un partido o movimiento con personería jurídica.

Con el propósito de estudiar si la solicitud de reconocimiento de personería jurídica de los miembros de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común – FARC- cumple con el presupuesto establecido en el Acto Legislativo 03 de 2017, se analizará en primer lugar el alcance del reconocimiento de **pleno derecho** de la personería jurídica en los términos del Acto Legislativo 03 de 2017;

2.3.1. El alcance del reconocimiento de pleno derecho de la personería jurídica de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común – FARC-

El reconocimiento de pleno derecho o ***ipso jure*** implica que los efectos jurídicos de una situación jurídica operan **sin necesidad de una declaración judicial posterior, o sin necesidad de hecho o acto específico,** al estar contemplados previamente en el orden legal y constitucional. Así lo ha expresado la Corte Constitucional en varios pronunciamientos. [20]

De manera concreta, frente al **efecto *ipso iure* de normas de contenido electoral**, la Corte Constitucional señala:

> "***La rehabilitación de los derechos políticos opera ipso iure dice la ley electoral.*** *Dicha norma, si bien es anterior a la Constitución Política de 1991, obtiene pleno respaldo en el artículo 98 de este nuevo estatuto fundamental. El condenado que ha cumplido con la pena que le ha sido impuesta tiene un derecho a recuperar el ejercicio pleno de su ciudadanía y las autoridades públicas deben hacer lo necesario para que*

[20] Corte Constitucional, sentencia C – 247 – 17, C – 395 de 2002

tal derecho se haga efectivo. Las circunstancias propias del caso hacen aún más perentoria y exigente la actuación del Estado. En efecto, el hecho de que el petente haya sido condenado hace treinta años y que su petición estuviese encaminada a lograr un objetivo próximo y directo como era el de poder votar en las elecciones de finales del mayo de 1994, debía convertirse en una razón adicional para que los funcionarios públicos hubiesen agilizado un trámite, por lo demás sencillo y célere, que permitía la reincorporación plena de una persona a la vida ciudadana activa.

En el caso sub judice el petente afirma que lleva 29 años tratando de obtener la rehabilitación de sus derechos. Si bien es cierto que no existe prueba alguna de diligencias anteriores llevadas a cabo por el peticionario en este sentido, su afirmación no deja de ser preocupante, máxime cuando se juzga la actuación de una administración de justicia que, en su intervención más reciente, no obró con la diligencia debida. Más aún, los hechos parecen indicar que la rehabilitación de los derechos del peticionario probablemente no habría sido posible de no haberse presentado la acción de tutela"[21].

En la misma línea, en sentencia T – 218 de 1994, la Corte reiteró:

"Pero en el caso concreto de que el término de la interdicción de derechos y funciones públicas haya transcurrido, esto es, que la pena se haya cumplido, existe una norma específica ya no de carácter penal, sino electoral: Es el artículo 205 de la Ley 28 de 1979, Código Electoral, que claramente determina:

La rehabilitación en la interdicción de derechos y funciones públicas operará ipso jure** al cumplirse el término por el cual se impuso su pérdida como pena. Para ello bastará que el interesado formule la solicitud pertinente, acompañada de los respectivos documentos ante el registrador municipal de su domicilio, **el cual le dará inmediatamente tramitación.

Esto es, que en este caso concreto donde ya ha transcurrido el término de la interdicción de derechos y funciones públicas, el legislador no estima menester la intervención de la autoridad jurisdiccional, sino por tratarse de un aspecto cronológico fácilmente detectable, lo pasa a las autoridades administrativas y más concretamente, a las electorales por su obvia correlación.

***En este caso no es dable exigir requisitos adicionales, tales como buena conducta, ocupación lícita, etc., pues la medida opera ipso jure**.*

Así las cosas, la Sala estima que habiendo transcurrido el término impuesto en la sentencia para la interdicción de derechos y funciones públicas al excontralor (...,) el conocimiento de esta solicitud corresponde a la autoridad determinada por el artículo 205 de la Ley 28 de 1979, Código Electoral".

De todo lo expuesto y descendiendo al caso que ocupa la atención de la Sala, es posible afirmar que el reconocimiento ***ipso iure* o de pleno derecho de la personería jurídica** al partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, establecido en el artículo 1 del **Acto Legislativo 03 de 2017,** otorga una competencia **especial y concreta** al Consejo Nacional Electoral para reconocer dicha personería, **una vez finalizado el proceso de dejación de armas,** requisito que se examina a continuación[22].

[21] Corte Constitucional T -466 – 94.

[22] El mencionado artículo dispone: *"**Artículo 1°.** La Constitución Política tendrá los siguientes nuevos artículos transitorios:*

***Artículo Transitorio 1. Una vez finalizado el proceso de dejación de las armas por parte de las FARC-EP**, en los términos del "Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, suscrito el 24 de noviembre de 2016, **se reconocerá de pleno derecho personería jurídica al partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal**.*

Ahora, corresponde evaluar de manera concreta si la solicitud allegada cumple con los demás requisitos para el reconocimiento de la personería jurídica en el siguiente orden: (i) dejación de armas (ii) legitimidad de los solicitantes (iii) contenido de los estatutos a la luz de lo establecido en el acto legislativo y de la normatividad vigente, (iv) procedencia del registro del logosímbolo y (v) procedencia registro de directivos[23].

2.3.2. Dejación de armas

- **Lo establecido en el Acuerdo Final**

El acuerdo final para la terminación del conflicto estableció en su numeral 3.2.1.1 lo siguiente[24]:

> ***"3.2.1.1. Garantías para el nuevo partido o movimiento político***
>
> *• Personería jurídica*
>
> *A la firma del Acuerdo Final el Consejo Nacional Electoral dará trámite a la solicitud de registro que le presente la agrupación política de ciudadanos en ejercicio que tenga por objeto promover la creación del futuro partido o movimiento político que surja de la transición de las FARC-EP a la vida política legal.*
>
> ***Finalizado el proceso de dejación de las armas**, los plenipotenciarios de las FARC-EP en la Mesa de Conversaciones manifestarán y registrarán formalmente ante el Consejo Nacional Electoral la decisión de su transformación en partido o movimiento político, el acta de constitución, sus estatutos, el código de ética, la plataforma ideológica y la designación de sus directivos. En virtud de este acto formal, el partido o movimiento político, con la denominación que adopte, será reconocido para todos los efectos y en igualdad de condiciones como un partido o movimiento político con personería jurídica, para lo cual el Gobierno Nacional tramitará previamente las reformas normativas a que hubiere lugar.*
>
> *El partido o movimiento político así reconocido deberá cumplir los requisitos de conservación de la personería jurídica y estará sujeto a las causales de pérdida de la misma previstas para los demás partidos y movimientos políticos de conformidad con la Constitución y la ley, salvo la acreditación de un determinado número de afiliados, la presentación a certámenes electorales y la obtención de un umbral de votación, durante el tiempo comprendido entre la fecha del registro y el 19 de julio de 2026". – se destaca-*

Por su parte, el numeral 3.1.7 del mencionado acuerdo dispuso:

Para esos efectos, finalizado el proceso de dejación de las armas, los delegados de las FARC – EP en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del acuerdo Final, manifestarán y registrarán formalmente ante el Consejo Nacional Electoral o quien haga sus veces la decisión de su transformación en partido o movimiento político, el acta de constitución, sus estatutos, el código de ética, la plataforma ideológica y la designación de sus directivos, así como su compromiso con la equidad de género conforme a los criterios constitucionales de paridad, alternancia y universalidad en el funcionamiento y organización interna. En virtud de este acto formal, el partido o movimiento político, con la denominación que adopte. será inscrito para todos los efectos y en igualdad de condiciones como un partido o movimiento político con personería jurídica.

[23] Este entendimiento se ajusta a antecedentes similares de registro de entidades u organismos que surjan del Acuerdo de Paz. Al respecto, la sentencia C-569 de 2017, relacionada con los requisitos que debía cumplir la organización especial de economía solidaria denominada ECOMUN, en la cual se señaló que el procedimiento para su reconocimiento no debe afectar el "control de legalidad" a cargo de la Superintendencia Nacional de Economía Solidaria y la Cámara de Comercio de Bogotá.
[24] http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf

*"**3.1.7. Dejación de las Armas (DA):** Consiste en un procedimiento técnico, trazable y verificable mediante el cual la ONU recibe la totalidad del armamento de las FARC-EP para destinarlo a la construcción de 3 monumentos, acordados entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP.*

La DA por parte de las FARC-EP implica un proceso organizado, trazable y verificable que se desarrolla en dos tiempos, denominados Control de Armamento y Dejación de las Armas, que integran los siguientes procedimientos técnicos: registro, identificación, monitoreo y verificación de la tenencia, recolección, almacenamiento, extracción y disposición final.

• Registro: consiste en el procedimiento técnico de consignar la cantidad y tipo de armas recibidas a las FARC-EP por parte del CI-MM&V.

• Identificación: corresponde al procedimiento técnico que permite caracterizar las armas de las FARC-EP por parte del CI-MM&V. Este procedimiento se hace únicamente con las armas individuales que porten los integrantes de las FARC-EP dentro de los campamentos.

• Monitoreo y verificación de la tenencia: cada uno de los integrantes de las FARC-EP que permanecen en las Zonas porta un arma individual dentro del campamento. El CI-MM&V realiza el monitoreo y verificación de la tenencia de este armamento con base en el registro e identificación realizado por el CI-MM&V. Dentro de los campamentos hay de manera permanente representantes del CI-MM&V.

• Recolección: es entendida como el procedimiento técnico mediante el cual el CI-MM&V recibe todas las armas de las FARC-EP, conforme al procedimiento consignado en este Acuerdo.

• Almacenamiento del armamento: en cada Zona, dentro de uno de los campamentos, hay un punto para el almacenamiento del armamento recibido por el CI-MM&V, en contenedores dispuestos para tal fin. A este lugar sólo puede ingresar el CI-MM&V quien efectúa monitoreo y verificación permanente.

• Extracción del armamento: este procedimiento técnico, a cargo de la ONU, consiste en la salida física del armamento de las Zonas. La ubicación de este armamento será determinada entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP con la ONU, el cual será destinado para la construcción de 3 monumentos.

• Disposición final del armamento: Se entiende como el procedimiento técnico mediante el cual las armas de las FARC-EP se destinan para la construcción de 3 monumentos, así: uno en la sede de las Naciones Unidas, otro en la República de Cuba y otro en territorio colombiano en el lugar que determine la organización política surgida de la transformación de las FARC-EP, en acuerdo con el Gobierno Nacional.

***3.1.7.1. Procedimiento Con la Firma del Acuerdo Final inicia el proceso de Dejación de las Armas de las FARC-EP, de la siguiente manera**: Para la planeación y el alistamiento de la logística para la DA, las FARC-EP, a partir del día D+5 suministra al CI-MM&V la información que el CI-MM&V considere necesaria, para el transporte, registro, identificación, monitoreo y verificación de la tenencia, recolección, almacenamiento, extracción y disposición final.*

Las FARC-EP contribuye por diferentes medios, incluyendo el suministro de información, con la limpieza y descontaminación de los territorios afectados por minas antipersonal (MAP), artefactos explosivos improvisados (AEI), y municiones sin explotar (MUSE) o restos explosivos de guerra (REG) en general, teniendo en cuenta lo acordado en los puntos 4 y 5 y lo que se acuerde en el punto de Reincorporación a la vida civil en cuanto a la participación de las FARC-EP en la acción contra minas.

El día D+5 se inicia el desplazamiento a las ZVTN de las unidades de las FARC-EP y el transporte del armamento individual. El MM&V monitorea y verifica este procedimiento.

Del día D+7 al día D+30 se realiza el transporte de las armas de acompañamiento, del armamento de las milicias, las granadas y municiones, por parte de los integrantes de las FARC-EP hacia las ZVTN, bajo la observancia del protocolo de seguridad para el transporte del armamento. El MM&V monitorea y verifica este procedimiento.

Con la llegada de los (as) integrantes de las FARC-EP a las Zonas el CI-MM&V inicia el procedimiento de: registro y almacenamiento en los contenedores determinados para este fin de las armas individuales de los (as) integrantes de las FARC-EP que salen al cumplimiento de tareas del proceso de paz y de los (as) integrantes de las FARC-EP asignados al MM&V.

Así mismo el CI-MM&V inicia el monitoreo y control de la tenencia de las armas individuales de los (as) integrantes de las FARC-EP que quedan dentro de los campamentos, con base en el registro e identificación de esas armas.

El armamento de acompañamiento, granadas y municiones que ingresen a los campamentos, incluyendo las armas de las milicias, permanece en armerillos temporales bajo responsabilidad de las FARC-EP, hasta el día D+60 cuando serán almacenados en los contenedores dispuestos para este fin. Este procedimiento es monitoreado y verificado por el CI-MM&V.

Para garantizar el control efectivo del armamento en cada Zona se determina un solo punto de almacenamiento, dentro de uno de los campamentos, en donde están ubicados los contenedores bajo el monitoreo y verificación permanente del CI-MM&V, de acuerdo con los protocolos concertados entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP.

Del día D+10 al día D+60 se realiza la destrucción del armamento inestable guardado en depósitos (caletas) previamente geo-referenciados, bajo el cumplimiento de los protocolos de seguridad definidos para este fin. El CI-MM&V verifica la ejecución de este procedimiento.

La recolección y almacenamiento en contenedores del armamento individual que permanece en poder de los (as) integrantes de las FARC-EP dentro de los campamentos en las Zonas se hace de manera secuencial y en tres fases así: 1 Fase: D+90, el 30%; 2 Fase: D+120, el 30%; y 3 Fase: D+150, 40% restante, según la hoja de ruta (cronograma de eventos) acordada por el Gobierno Nacional y las FARC-EP que guía el proceso del Fin del Conflicto luego de la firma del Acuerdo Final.

Recibido el armamento el día D+150, a más tardar el día D+180 finaliza el proceso de extracción de las armas por parte de Naciones Unidas, conforme a los procedimientos acordados para esta materia y certifica el cumplimiento de este proceso procediendo a comunicarlo al Gobierno Nacional y a la opinión pública. El día D+180 se da por terminado el funcionamiento de estas Zonas y el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo. El MM&V certifica y comunica cada una de las fases del procedimiento de dejación de armas antes descrito".

- **Resoluciones emitidas por Naciones Unidas**

Mediante la **Resolución 2261 del 25 de enero de 2016**, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas decidió establecer una misión política como componente internacional y

coordinadora del Mecanismo de Monitoreo y Verificación del proceso de Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejación de Armas (CFHBD – DA)[25].

Luego, mediante **la Resolución 2307 del 13 de septiembre de 2016,** el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas acogió el informe del Secretario General (S/2016/729), aprobó las recomendaciones que figuran en él y las contribuciones de observadores no armados ya presentadas por los Estados Miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y otros Estados Miembros[26].

Posteriormente, a través de **Resolución 2366 del 10 de julio de 2017**, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dispuso[27]:

> *"Acogiendo con beneplácito el "Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera" (el Acuerdo Final) (S/2017/272) entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo (FARC-EP), firmado en Bogotá (Colombia) el 24 de noviembre de 2016, y su aprobación por el Congreso de la República de Colombia el 30 de noviembre de 2016,*
>
> ***Acogiendo con beneplácito la conclusión de la dejación de las armas individuales por las FARC-EP el 27 de junio de 2017, proceso que verificó la Misión de las Naciones Unidas en Colombia establecida en virtud de la resolución 2261 (2016)**,*
>
> *Tomando nota de la carta de fecha 7 de junio de 2017 enviada por el Presidente de Colombia en nombre del Gobierno de Colombia y la FARC-EP (S/2017/481) en la que se solicita el establecimiento de una segunda misión política especial por un período de tres años, renovable si fuera necesario, de conformidad con lo dispuesto en el punto 6.3.3 del Acuerdo Final,*
>
> *Subrayando la importancia de la implementación del Acuerdo Final por el Gobierno de Colombia y las FARC-EP, y reconociendo la contribución que puede hacer en ese sentido una misión de verificación de las Naciones Unidas de conformidad con lo dispuesto en el punto 6.3.3 del Acuerdo Final,*
>
> *Reafirmando los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, y reafirmando también la soberanía, la integridad territorial, la independencia política y la unidad de Colombia,*
>
> *Reconociendo la responsabilidad de Colombia en la implementación del Acuerdo Final,*
>
> *1. Decide establecer una misión política en Colombia, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia (la Misión de Verificación), por un período inicial de 12 meses, bajo la dirección de un Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas; S/RES/2366 (2017) 2/2 17-11536*
>
> *2. Decide también que la Misión de Verificación se encargará de verificar la implementación por el Gobierno de Colombia y las FARC-EP de los puntos 3.2 y 3.4 del Acuerdo Final, de conformidad con lo dispuesto en el punto 6.3.3 del Acuerdo Final, en particular la reincorporación política, económica y social de las FARC-EP y la implementación de garantías de seguridad personal y colectiva y*

[25] http://nacionesunidas.org.co/blog/2016/08/03/la-mision-de-naciones-unidas-en-colombia-juez-imparcial-del-cese-al-fuego-y-la-dejacion-de-armas/

[26] http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2307(2016)

[27] https://colombia.unmissions.org/sites/default/files/resolucion_2366_consejo_seguridad_naciones_unidas_segunda_mision_en_colombia.pdf

de programas integrales de seguridad y protección para las comunidades y organizaciones en los territorios, y deberá incluir la verificación necesaria a nivel regional y local;

3. Decide además que la Misión de Verificación comenzará todas las actividades de verificación el 26 de septiembre de 2017, inmediatamente después de que termine el mandato de la Misión de las Naciones Unidas en Colombia establecida en virtud de la resolución 2261 (2016), y que en esa fecha comenzará el período inicial de 12 meses previsto en el párrafo 1;

4. Decide que la Misión de Verificación trabajará también en estrecha colaboración con los órganos de verificación pertinentes establecidos en el Acuerdo Final, en particular la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final, el Consejo Nacional de Reincorporación y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad;

5. Solicita a la Misión de Verificación que trabaje en coordinación con los miembros del equipo de las Naciones Unidas en Colombia, de conformidad con sus respectivos mandatos;

6. Solicita al Secretario General que inicie los preparativos de inmediato, incluso sobre el terreno, y que en el plazo de 45 días a partir de la aprobación de esta resolución presente recomendaciones detalladas al Consejo de Seguridad, para su examen y aprobación, en relación con el tamaño y los aspectos operacionales y el mandato de la Misión de Verificación, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Final;

7. Solicita también a la Misión de las Naciones Unidas en Colombia establecida en virtud de la resolución 2261 (2016) que inicie la labor provisional que, con arreglo al párrafo 2 de la presente resolución, se encomendará a la Misión de Verificación, de conformidad con lo establecido en el informe de l Secretario General de 23 de junio de 2017 y en el marco de su configuración y capacidad actuales, hasta que concluya su mandato el 25 de septiembre de 2017;

8. Solicita además al Secretario General que, sobre la base de la información comunicada por el Representante Especial, informe al Consejo de Seguridad sobre la ejecución del mandato de la Misión de Verificación cada 90 días a partir del comienzo de sus actividades de verificación;

9. Expresa su disposición a colaborar con el Gobierno de Colombia para prorrogar el mandato de la Misión de Verificación sobre la base del acuerdo entre las partes". – se resalta -

- **De lo establecido por el Acto Legislatico 03 de 2017**

Por su parte, el acto legislativo 03 de 2017 señaló:

"Articulo 1. *La Constitución Política tendrá los siguientes nuevos artículos transitorios:*

Artículo Transitorio 1. ***Una vez finalizado el proceso de dejación de las armas por parte de las FARC-EP****, en los términos del "Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, suscrito el 24 de noviembre de 2016,* ***se reconocerá de pleno derecho personería jurídica al partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal****.*

Para esos efectos, finalizado el proceso de dejación de las armas, los delegados de las FARC – EP en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Venficación de la Implementación del Acuerdo Final, manifestarán y registrarán formalmente ante el Consejo Nacional Electoral o quien haga sus veces la decisión de su

transformación en partido o movimiento político, el acta de constitución. sus estatutos, el código de ética, la plataforma ideológica y la designación de sus directivos, así como su compromiso con la equidad de género conforme a los criterios constitucionales de paridad. alternancia y universalidad en el funcionamiento y organización interna. En virtud de este acto formal, el partido o movimiento político, con la denominación que adopte será inscrito para todos los efectos y en igualdad de condiciones como un partido o movimiento político con personería jurídica".

- **De la reglamentación emitida por el Gobierno Nacional**

A través del **Decreto 1716 del 20 de octubre de 2017**[28], el Gobierno Nacional ordenó dar continuidad al procedimiento para la ubicación, recolección, verificación, registro,

[28] El mencionado Decreto estableció:

"**ARTICULO 1°. Objeto**. En cumplimiento e implementación de los numerales 3.1.5 y 3.1.7 del Acuerdo Final, dar continuidad al procedimiento para la ubicación, recolección, verificación, registro, extracción, transporte, destrucción, inhabilitación y disposición final del armamento, municiones y explosivos que se encuentren en los depósitos (caletas) de las extintas FARC-EP, que hayan sido puestos a disposición del componente internacional del Mecanismo de Monitoreo y Verificación (ONU) y que aun no se hayan inhabilitado.

Páragrafo 1. Estos procedimientos se realizarán de acuerdo con la información que en su momento fue entregada por parte de las FARC-EP a la ONU, quien a su vez la remitió a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Páragrafo 2. Los procedimientos de ubicación, recolección. verificación, registro, extracción, transporte, destrucción e inhabilitación del armamento, municiones y explosivos que se encuentren en los depósitos (caletas) de las extintas FARC-EP estarán a cargo del Gobierno Nacional, liderado por la Fuerza Pública y se llevarán a cabo con la participación y colaboración de las entidades del Gobierno Nacional, conforme al artículo 113 constitucional y el Acto Legislativo No. 02 de 2017.

Páragrafo 3. Entiéndase por "disposición final" el procedimiento técnico en cabeza del Ministerio de Cultura mediante el cual el armamento y municiones que se encuentren en los depósitos (caletas) de las extintas FARC-EP se destinan para la construcción de 3 monumentos, según lo dispuesto en el punto 3.1.7 del Acuerdo Final.

Para el efecto de este parágrafo el Ministerio de Defensa en coordinación con la Fuerza Pública, deberán poner a disposición del Ministerio de Cultura el material inhabilitado.

ARTÍCULO 2°. Duración. El procedimiento de ubicación, recolección, verificación, registro, extracción, transporte, destrucción e inhabilitación de armamento, municiones y explosivos que se encuentren en los depósitos (caletas) de las extintas FARC-EP, se llevará a cabo por un término de seis (6) meses contados a partir de la expedición del presente Decreto.

Parágrafo. La extracción de las caletas que no hayan sido encontradas al término de los seis (6) meses señalados en el presente artículo, se deberá llevar a cabo según los procedimientos ordinarios. No obstante, su posterior extracción en ningún caso podrá dar lugar al pago de recompensas, en atención a que su referenciación fue establecida en el marco del cumplimiento del Acuerdo Final y según la información aportada por las FARC-EP y por la ONU respectivamente.

ARTICULO 3°. Compromisos especiales de los ex integrantes de las FARC-EP. Los delegados de las extintas FARC-EP, en cumplimiento de los puntos 3.1.5 y 3.1.7 del Acuerdo Final, así como del compromiso adquirido mediante el comunicado conjunto No. 19 de la CSIVI del 29 de mayo de 2017, presentarán ante un delegado de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz toda la información necesaria para culminar el proceso de delimitación y ubicación de las caletas con armamento, municiones y explosivos que no fueron inhabilitados por la Misión de la ONU y que se encuentran en los depósitos (caletas).

Asimismo, realizarán el acompañamiento, colaborarán con la información necesaria para adoptar las medidas de seguridad y orientarán en el terreno a los miembros de la Fuerza Pública.

Parágrafo. La coordinación e interlocución con el personal ex integrante de las FARC-EP durante la etapa de ubicación de las caletas estará a cargo de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que se encargará de garantizar la entrega de la información sobre la ubicación o delimitación de las caletas a los delegados de la Fuerza Pública.

ARTICULO 4°. Tratamiento de hallazgos distintos a armamento y municiones. En el evento en el que se encuentren elementos diferentes a armas, municiones o explosivos dentro de las caletas éstos serán puestos a disposición de las autoridades competentes.

ARTICULO 5°. Acompañamiento. Con la vigencia del presente decreto, el Ministerio de Defensa Nacional solicitará a la Procuraduría General de la Nación que, en cumplimiento de la facultad de vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, prevista en los artículos 118 y 277 de la Constitución Política y de las funciones asignadas a la Procuraduría Delegada para la Paz y la Protección de los Derechos de las Víctimas mediante Resolución 99 de marzo de 2017, acompañe y verifique el desarrollo de las acciones que se surtirán en cumplimiento del presente decreto. En particular, las actividades que desarrolle la Fuerza Pública para el registro, extracción, destrucción e inhabilitación del armamento-municiones y explosivos, porán estar acompañadas por un representante de la Procuraduría General de la Nación.

ARTICULO 6°. Instrucciones y lineamientos. El Ministerio de Defensa Nacional emitirá las instrucciones y lineamientos necesarios a la Fuerza Pública para el desarrollo del procedimiento de ubicación, recolección, verificación, registro, extracción, transporte, destrucción e inhabilitación del armamento, municiones y explosivos que se encuentren en los depósitos (caletas).

ARTICULO 7°. Financiación. El Gobierno Nacional, a través del Fondo de Programas Especiales (FONDOPAZ) con cargo a los recursos asignados por el presupuesto general de la nación en las vigencias 2017-2018 y el Ministerio de Defensa Nacional, dispondrá de los recursos yel apoyo logístico para la ejecución del procedimiento aquí contemplado. ARTICULO

extracción, transporte, destrucción, inhabilitación y disposición final del armamento, municipiones y explosivos que se encuentren en los depósitos (caletas) de las extintas FARC – EP, que hayan sido puestos a disposición del componente internacional del Mecanismo de Monitoreo y Verificación (ONU) y que aún no se hayan inhabilitado.

- **De la solicitud**

Respecto de este presupuesto, se advierte a **folios 66 y 67** que junto con la solicitud de reconocimiento de personería, se allegó **una certificación de dejación de armas** suscrita el 22 de septiembre del año en curso por el señor Jean Arnault, en su calidad de Representante Especial del Secretario General y Jefe de la Misión de las Naciones Unidas en Colombia, dirigida al señor Presidente de la República Juan Manuel Santos Calderón, en la que manifiesta:

> "*En mi calidad de Representante Especial del Secretario de las Naciones Unidas en Colombia y Jefe de la Misión de la ONU en Colombia,* ***me permito informarle sobre la finalización y los resultados del proceso de dejación de armas de las Fuerzas Armaas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC- EP) verificado por la Misión,*** *de conformidad con el Acuerdo Final de Paz y las resoluciones 2166 (2016) y 2307 (2016) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.*
>
> *En este sentido, certifico que la Misión extrajo exitosamente de las zonas veredales y puntos transitorios de normalización la totalidad de las armas ingresadas por las FARC – EP a sus campamentos. Además, certifico que las FARC – EP entregaron información sobre la ubicación de 1.027 caletas, de las cuales la Misión verificó la extracción de 750 caletas por medio de 182 operaciones a lo largo de todo el territorio de Colombia. (…)*

Del contenido del documento relacionado se concluye que la dejación definitiva de las armas por parte de las FARC – EP se encuentra surtida. Así lo expresó el señor Jean Arnault, en su calidad de Representante Especial del Secretario General y Jefe de la Misión de las Naciones Unidas en Colombia en el acto protocolario de dejación de armas el 27 de junio del año en curso[29].

8°. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición."

[29] https://www.elespectador.com/noticias/politica/colombia-es-un-ejemplo-para-la-comunidad-internacional-jefe-de-mision-de-la-onu-en-colombia-articulo-700253. El señor Jean Arnault expresó "En ocasión de este acto de celebración de la conclusión de la dejación de armas individuales, tengo el privilegio de compartir el avance final de la verificación realizada por la Misión de la ONU en Colombia desde el 26 de septiembre de 2016, en cumplimiento con el mandato del Consejo de Seguridad.

El cese al fuego bilateral del 29 de agosto de 2016, ha sido respetado por ambas partes y ha contribuido a la disminución de los indicadores de violencia. Las reglas del cese al fuego han sido cumplidas con pocas excepciones. Es importante decir que ninguno de los incumplimientos refleja un patrón de violaciones deliberadas o de decisiones de alto nivel. Recalcamos que las obligaciones del Gobierno y de las Farc-EP y el respeto a la población civil durante la fase de preagrupación, han sido observadas.

Finalmente, y es de especial importancia para Naciones Unidas, que el Mecanismo Tripartito de Monitoreo y Verificación ha cumplido su papel, acompañando los movimientos de las Farc-EP; identificando incidentes, tomando medidas correctivas y prestando ayuda humanitaria en caso de emergencia. Hoy, con pleno conocimiento de la eficacia del Mecanismo Tripartito de Monitoreo y Verificación, podemos recomendar a Naciones Unidas que recoja las enseñanzas de las experiencias en Colombia para aplicarlas en otras partes del mundo.

Concluimos que hoy en día, cuando culmina la dejación de armas individuales, el cese al fuego bilateral está consolidado. Pero, al mismo tiempo, los esfuerzos de cooperación de los últimos nueve meses no deben disminuir. Se recomienda que el mecanismo tripartito opere durante los próximos meses para atender cualquier acontecimiento que vulnere la confianza en la paz.

En torno al compromiso de la dejación de armas adquirido por las Farc-EP, este ha sido honrado de conformidad con la hoja de ruta aprobada el 29 de mayo. En febrero, se verificó la llegada de 6.803 guerrilleros a las zonas veredales. En marzo, la misión identificó 7.132 armas personales y colectivas que fueron ingresadas a los campamentos y de acuerdo con el procedimiento del punto 3.1.7, y de conformidad con la hoja de ruta aprobada el 29 de mayo, la Misión de la ONU recibió el 30 % de esas armas a partir del 7 de junio y el otro 30 % a partir del 14. La tercera fase empezó el 21 de junio.

Al día de hoy, la misión ha recibido en sus contenedores el conjunto de las armas registradas de los guerrilleros. De estas, 700 armas serán puesta a disposición para dar seguridad a los 26 campamentos de las Farc-EP, hasta que finalicen las Zonas Veredales Transitorias de Normalización el 1 de agosto.

La misión constata que las armas registradas son de alta calidad y operativa y que se han entregado más armas por combatiente que en otros procesos verificados internacionalmente. Para el 1 de agosto, la Misión habrá extraído los contenedores de las zonas veredales, permitiendo así la certificación definitiva de la dejación de armas. En cuanto a la extracción de caletas, realizada por las Farc-EP con apoyo de la Fuerza Pública, informamos que 77 caletas han sido extraídas y contamos con una aceleración del proceso con miras de cumplir esta tarea antes del 1 de septiembre.

Así las cosas, dado que se verificó dentro del proceso que el requisito de dejación de armas, para efectos del reconocimiento de la personería jurídica, se encuentra surtido de acuerdo con lo establecido tanto en el acuerdo final y los actos legislativos, como en las Resoluciones expedidas por Naciones Unidas, se pasará al examen de legitimidad por parte de los solicitantes.

2.3.3. Legitimidad de los solicitantes

Para el efecto, esta Corporación debe verificar que las personas que realicen la solicitud de registro de la decisión de convertirse en partido estén legitimadas, esto es, que hayan sido **miembros de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI)**.

Al respecto se observa que la solicitud de registro fue realizada por los señores **Luciano Marín Arango**, **Seuxis Paucias Hernández Solarte** y **Victoria Sandino Simanca** quienes de acuerdo con el certificado que obra a folio 83 figuran como miembros de la mencionada comisión.

La Sala advierte que este requisito se encuentra debidamente satisfecho.

2.3.4. El contenido de los estatutos a la luz de lo establecido en el acto legislativo y de la normatividad vigente

De conformidad con el artículo 3º de la Ley 1475 de 2011, el Consejo Nacional Electoral es el responsable del **registro único de partidos y movimientos políticos,** en el que se inscribirán, previa verificación del cumplimiento de los principios y reglas de organización y funcionamiento consagrados en la Constitución, la ley y los estatutos, las actas de fundación, los estatutos y sus reformas, los documentos relacionados con la plataforma ideológica o programática, la designación y remoción de sus directivos y sus afiliados:

> "***ARTÍCULO 3o. REGISTRO ÚNICO DE PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS. El Consejo Nacional Electoral llevará el registro de partidos, movimientos y agrupaciones políticas***. *Los respectivos representantes legales registrarán ante dicho órgano las actas de fundación, los estatutos y sus reformas, los documentos relacionados con la plataforma ideológica o programática, la designación y remoción de sus directivos, así como el registro de sus afiliados.* ***Corresponde al Consejo Nacional Electoral autorizar el registro de los mencionados documentos*** *previa verificación del* ***cumplimiento de los principios y reglas de organización y funcionamiento consagrados en la Constitución, la ley y los correspondientes estatutos.***
>
> ***PARÁGRAFO. Los grupos significativos de ciudadanos que postulen candidatos al Senado de la República o a la Cámara de Representantes y obtengan los votos requeridos para el reconocimiento de personería jurídica, podrán organizarse como partidos o movimientos políticos y solicitar la correspondiente personería. La solicitud deberá ir acompañada del acta de fundación, los estatutos, la plataforma ideológica y programática, la lista de afiliados y la prueba de la designación de los directivos, y será presentada ante el Consejo Nacional Electoral por quien haya sido designado como representante legal del partido o movimiento así constituido.***

Señor Presidente, señor Timoleón Jiménez, con el paso adelante surgen nuevas oportunidades y nuevas necesidades. Tras su visita a Colombia, el Consejo de Seguridad expresó que además de la dejación de armas, la implementación sostenida del acuerdo de paz, incluyendo todas las medidas para la reincorporación y reconciliación serán vitales para garantizar una paz estable y duradera.

El secretario general de la ONU invita a las partes para que el cese al fuego y la dejación de armas se traduzca en mayor seguridad para todos, en verdad, justicia y reparación para las víctimas y en beneficios sociales y económicos para las zonas rurales más afectadas por el conflicto. El éxito del proceso de paz es el éxito de la sociedad colombiana para preservar a las generaciones futuras del flagelo de la guerra. Pero, además, en un mundo convulsionado por conflictos cuyos protagonistas parecen irreconciliables, por movimientos sin precedente de desplazados, el proceso de paz en Colombia es motivo de esperanza y de ejemplo para la comunidad internacional. Reitero el reconocimiento del secretario general de la ONU a Colombia por emprender el camino de la resolución pacífica de su conflicto

> *En el acto de reconocimiento de personería jurídica el Consejo Nacional Electoral ordenará su inscripción en el Registro Único a que se refiere esta disposición, a partir de lo cual dichas agrupaciones políticas tendrán los mismos derechos y obligaciones de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica y se someterán, en todo lo demás, a las mismas reglas de organización y funcionamiento"* (Negrillas adicionales).

De acuerdo con la Corte Constitucional[30], ese registro es un instrumento técnico que sirve para que el Estado cuente con una información mínima que facilite a la autoridad electoral el cumplimiento de sus competencias constitucionales, además de garantizar la publicidad y transparencia de la actividad de las organizaciones políticas.

Así mismo, la norma referida advierte que, en el acto de reconocimiento de la personería jurídica, **el Consejo Nacional Electoral ordenará su inscripción en el Registro Único, actuación que determina los derechos y obligaciones de dicho atributo**.

En cuanto a **los principios que deben observar los estatutos, estos se encuentran establecidos en el artículo 1° de la Ley 1475 de los cuales fueron objeto de examen y concresión por la sentencia C-490 de 2011 de la Corte Constitucional** (participación, igualdad, pluralismo, equidad e igualdad de género, transparencia y moralidad).

- **Concreción de los principios de paridad, alternancia y universalidad en las disposiciones estatutarias y en el funcionamiento y organización interna del partido**

Es preciso advertir que a través del **acto legislativo 02 del 2015** que modificó el artículo 262 de la Carta Política, se incorporaron los principios de "*paridad, alternancia y universalidad*", en lo relacionado a la conformación de las listas y se delegó a la ley su reglamentación:

> ***"ARTÍCULO 262.*** *(…).*
>
> *La selección de los candidatos de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica se hará mediante mecanismos de democracia interna, de conformidad con la ley y los estatutos.* ***En la conformación de las listas se observarán en forma progresiva, entre otros, los principios de paridad, alternancia y universalidad, según lo determine la ley".*** *(…)*

Esta corporación advierte que a la fecha no se ha expedido la normatividad correspondiente, lo que dificulta el ejercicio de dicho control por parte de esta Corporación que, en principio, no podría ir más allá del marco general que actualmente establece la ley 1475 de 2011.

Sin embargo, para el caso en concreto, el artículo **1 del Acto Legislativo 03 de 2017** dispuso, de manera especial, que además de allegar el acta de constitución, los estatutos el código de ética, la plataforma ideológica y la designación de sus directivos, el partido o movimiento que surgiera del acuerdo final debía señalar **su compromiso con la equidad de género**[31]

---

[30] Corte Constitucional, sentencia C-490 de 2011.

[31] Frente a la equidad de género en la sentencia C-490 de 2011, la Corte expresó: *"El proyecto de ley estatutaria contempla una cuota de representación política, cuyo propósito es garantizar una composición más equilibrada de las listas para proveer cargos de elección popular, estableciendo que un porcentaje mínimo correspondiente a un 30% debe estar conformado por un grupo considerado tradicionalmente como discriminado, lo que se traduce en una acción afirmativa que corrige el déficit tradicional de participación política y de acceso de las mujeres a la institución parlamentaria. Para la Corte, la medida promueve así el cumplimiento de varios mandatos constitucionales y normas internacionales de derechos humanos que consagran y desarrollan la igualdad entre hombres y mujeres, pues promueve la igualdad real y efectiva, contribuye a incrementar los niveles de participación de la mujer en los niveles decisorios de la administración, a la vez que propende por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, en el ámbito específico de la participación política y desarrolla los principios democrático y de equidad de género, como ejes rectores de la organización de los partidos y movimientos políticos."*

conforme a los criterios constitucionales de paridad, alternancia y universalidad en el funcionamiento y organización interna[32].

Esta disposición adiciona una novedad a lo estipulado por el artículo 262 de la Carta Política y a las reglas generales consagradas en la ley 130 de 1994 y 1475 de 2011, pues extiende la aplicación de los criterios constitucionales de paridad, alternancia y universalidad no sólo a la conformación de las listas, sino también al funcionamiento y organización interna del partido.

En consecuencia, esta Corporación **exhorta** al partido político **Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común – FARC** – a concretar estos principios de manera **sustancial y progresiva**, en armonía con lo dispuesto por las disposiciones constitucionales y legislativas, tanto en el contenido de sus estatutos como en su funcionamiento y organización interna. Principalmente, el partido deberá adecuar sus órganos de dirección y control a nivel nacional y territorial para que de manera gradual alcancen una representación **paritaria** de las **mujeres** y de las **diferentes minorías étnicas y sexuales**.

---

[32] Al respecto, en la sentencia **C – 490 de 2011**, la Corte Constitucional retomó los antecedentes internacionales existentes en América Latina y el Caribe, de las reformas a los sistemas políticos que obligaron a los partidos a incorporar mujeres en listas de candidaturas o en listas de resultados electorales.

En esa oportunidad el alto tribunal expresó que estas medidas han sido adoptadas progresivamente por la mayoría de los países. El primero en hacerlo fue Argentina en 1991, luego Costa Rica siendo el único caso en que la norma es del 40%.

Por su parte, en Ecuador, la ley indica que el porcentaje aumentará progresivamente en cada elección hasta llegar a la paridad absoluta. El siguiente cuadro comparativo ofrece el avance de la normatividad a la fecha[32]:

País	Año de la reforma	Porcentaje de participación
Argentina	1991	30%
Bolivia	1997	25%
Brasil	1997	30%
Costa Rica	2000	40%
Ecuador	1997	20% y progresivo hasta el 50%
México	1996	30%
Panamá	1997	30%
Paraguay	1996	20%
Perú	1997	25%
República Dominicana	1997	25%
Chile	NO	0%
Cuba	NO	0%
El Salvador	NO	0%
Guatemala	NO	0%
Haití	NO	0%
Honduras	NO	0%
Nicaragua	NO	0%
Venezuela	NO	0%
COLOMBIA	2011	30%

De otro lado, afirma el alto tribunal en el mismo pronunciamiento que en Europa se ha presentado un debate sobre la implementación de la democracia paritaria y algunos países han tenido que realizar reformas para adoptarlas.

- **Contenidos mínimos estatutarios**

Ahora bien, pasando a la regulación vigente, el artículo 4 de la Ley 1475 de 2011, establece los requisitos mínimos que deben contener los estatutos de los partidos o movimientos políticos así:

> **Artículo 4°. *Contenido de los estatutos.*** Los estatutos de los partidos y *movimientos políticos contendrán cláusulas o disposiciones que los principios señalados en la ley y especialmente los consagrados en el artículo 107 de la Constitución, en todo caso,* ***deben contener como mínimo, los siguientes asuntos***:
>
> *1. Denominación y símbolos.*
>
> *2. Régimen de pertenencia al partido o movimiento políticos en el que se señalen reglas de afiliación y retiro, así como los derechos, deberes y prohibiciones de sus miembros.*
>
> *3. Autoridades, órganos de dirección, gobierno y administración, y reglas para su designación y remoción.*
>
> *4. Convocatoria, fecha y demás aspectos relacionados con la reunión de la convención del partido o movimiento político, o de su máximo órgano de dirección, la cual deberá realizarse por lo menos cada dos (2) años, y garantizar a sus miembros influir en la toma de las decisiones más importantes de la organización política.*
>
> *5. Autoridades, órganos de control, entre estos el Consejo de Control Ético y el Veedor de la respectiva organización, junto con las reglas para su designación y remoción.*
>
> *6. Deberes de los directivos, entre ellos el de propiciar procesos de democratización interna y el fortalecimiento del régimen de bancadas.*
>
> *7. Regulación interna del régimen de bancadas en las corporaciones de elección popular.*
>
> *8. Mecanismos de impugnación de las decisiones adoptadas por los órganos de dirección, gobierno, administración y control, así como por las respectivas bancadas.*
>
> *9. Código de Ética, en el que se desarrollen los principios de moralidad y el debido proceso, y en el que se fijen, además, los procedimientos para la aplicación de las sanciones por infracción al mismo, mínimos bajo los cuales deben actuar los afiliados a la organización política, en especial sus directivos.*
>
> *10. Postulación, selección e inscripción de candidatos a cargos y corporaciones de elección popular mediante mecanismos democráticos teniendo en cuenta el deber de garantizar la equidad de género.*
>
> *11. Consultas internas, populares o el proceso de consenso para la selección de candidatos a cargos o corporaciones de elección popular y para la toma de decisiones con respecto a su organización o la reforma de los estatutos.*
>
> *12. Régimen disciplinario interno, en el que se adopten mecanismos para sancionar la doble militancia, así como para separar del cargo a sus directivos cuandoquiera que no desempeñen sus funciones conforme a la Constitución, la ley y los estatutos.*

13. Financiación de los partidos o movimientos políticos, de las campañas y, en particular, la forma de recaudo de contribuciones y donaciones, control al origen y cuantía de las mismas, distribución de la financiación estatal, apoyo financiero a sus candidatos, y publicidad de todo ingreso y gasto.

14. Procedimiento de formulación, aprobación y ejecución de su programa y de su presupuesto.

15. Sistema de auditoría interna y reglas para la designación del auditor, señalando los mecanismos y procedimientos para el adecuado manejo de la financiación estatal del funcionamiento y de las campañas.

16. Utilización de los espacios institucionales en televisión y en los medios de comunicación para efectos de la divulgación política y la propaganda electoral.

17. Reglas que desarrollen los deberes a cargo de los partidos o movimientos políticos, y

18. Reglas de disolución, fusión con otros partidos o movimientos políticos, o escisión y liquidación.

***Parágrafo**. Los partidos o movimientos políticos adecuarán sus estatutos a lo dispuesto en la presente ley en la siguiente reunión del órgano que tenga la competencia para reformarlos".*

Se examinará entonces el **contenido de los estatutos** adoptados por el partido político FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMÚN- FARC y su concordancia con los criterios constitucionales y legales señalados, así:

- **Contenido de los estatutos presentados por la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común – FARC –**

Artículos	Observación
CAPITULO I: DE LA NATURALEZA Y LOS PRINCIPIOS	El artículo se encuentra ajustado a lo dispuesto en los Actos Legislativos 02 y 03 de 2017. En especial el **numeral 1 del artículo 4 de la Ley 1475** de 2011 referido a **denominación y símbolos.**
Artículo 1. Definición y denominación. El partido político **Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común - FARC** es una organización constituida en desarrollo de lo establecido en el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera suscrito con el Gobierno Nacional el 24 de noviembre de 2016 y en el Acto Legislativo No. 03 del 23 de mayo de 2017, en virtud de lo cual las FARC - EP, reconocidas como organización insurgente por el Estado colombiano, formalizan su incorporación a la participación política conforme a la Constitución y a la ley.	
Artículo 2. Nombre, símbolos y colores. El partido utilizará como nombre el de **Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común – FARC** y en su documentación de identificación y difusión como colores distintivos blanco, rojo y verde y como símbolo o logo la rosa roja con una estrella roja en el centro y la sigla FARC debajo.	El artículo se encuentra ajustado a lo dispuesto en los Actos Legislativos 02 y 03 de 2017 y a las normas establecidas. En especial el **numeral 1 del artículo 4 de la Ley 1475** de 2011 referido a **denominación y símbolos.** Al respecto, la Corte Constitucional señala que "las denominaciones políticas...no podrán ser expresivas de antagonismos frente a naciones extranjeras, personas o

	entidades, ni asimilarse fonética o gráficamente a los símboles estatales" (Sentencia C-089/94). Aunque el nuevo partido mantiene las siglas de la agrupación de origen (FARC), no existe objeción alguna a esta decisión pues el contenido de la sigla es totalmente distinto al anterior y se encuentra en consonancia con lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley 130 de 1994. Además, adviértase que de la sigla desaparecen las letras EP que en la nomenclatura del grupo en armas significaba "Ejército del Pueblo". En cuanto al logo símbolo esta corporación encuentra que no se encuentra en contradicción con las restricciones que establece la Ley 130 de 1994.
Artículo 3 Domicilio y representación legal. El domicilio principal del partido será la ciudad de Bogotá DC; las instancias del orden territorial definirán los domicilios correspondientes en esos niveles. La Representación legal la ejercerá el Consejero Nacional de Organización.	Se encuentra en armonía con el artículo 4° de la Ley 1475 de 2011 en cuanto establece que es potestativo de los partidos y movimientos políticos establecer la responsabilidad de su representación legal
Artículo 4. Principios de organización y funcionamiento. El Partido acoge y garantiza para su organización y funcionamiento las reglas y principios establecidos en el artículo 107 de la Constitución Política y, en especial, los principios de transparencia, objetividad, moralidad, equidad de género y el deber de presentar y divulgar sus programas políticos de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, en las leyes y en los presentes estatutos. Para estos efectos, incorpora a los presentes estatutos, los siguientes contenidos del artículo 1º de la ley 1475 de 2011: "1. **Participación.** Entiéndase por el derecho de todo afiliado a intervenir, directamente o a través de sus representantes, en la adopción de las decisiones fundamentales del partido o movimiento, en el máximo órgano de dirección y en las demás instancias de gobierno, administración y control, así como los derechos de elegir y ser elegido en todo proceso de designación o escogencia de sus directivos y de sus candidatos a cargos y corporaciones de elección popular, de acuerdo a sus estatutos. 2. **Igualdad.** Se entiende por igualdad la exclusión de toda discriminación o privilegio por razones ideológicas, económicas, sociales, de diversidad sexual, o de etnia, en los procesos de participación en la vida del partido. 3. **Pluralismo.** El pluralismo implica para las organizaciones políticas el deber de garantizar la expresión de las tendencias existentes en su interior, en particular de las minorías, sin perjuicio de la aplicación del principio de mayoría, razón por la que los estatutos incluirán normas sobre quórum y mayorías especiales para la toma de decisiones fundamentales en materia de organización, funcionamiento y de participación de sus afiliados en la vida del partido o movimiento.	El artículo señala que la agrupación política observará los principios establecidos en el artículo 107 superior y reproduce los principios contenidos en el artículo 1° de la Ley 1475 de 2011. No se concreta el contenido de los principios 7 a 10. Sin embargo, los principios guardan relación con lo previsto en el artículo 1 de la Ley 1475 de 2011 y no se observa que los mismos desconozcan los que establece la ley.

4. **Equidad e igualdad de género.** En virtud del principio de equidad e igualdad de género, los hombres, las mujeres y las diversidades sexuales gozarán de igualdad real de derechos y oportunidades para participar en las actividades políticas, dirigir las organizaciones partidistas, acceder a los debates electorales y obtener representación política. 5. **Transparencia.** Mantener permanentemente informados a sus afiliados sobre sus actividades políticas, administrativas y financieras. Para su cumplimiento, deberán realizar cada año rendición de cuentas. Se crearán los mecanismos para garantizar un manejo ético y digno de las actuaciones políticas en consecuencia con nuestro carácter y principios. Igualmente, para la rendición de cuentas y transparencia en el manejo de los recursos, cuidado del bien colectivo del partido. 6. **Moralidad.** Los miembros del partido desarrollarán su actividad de conformidad con las normas de comportamiento adoptadas en los correspondientes códigos de ética". Asimismo, los principos de: 7. **Centralismo democrático**. 8. **Dirección Colectiva y responsabilidad individual.** **9. Planeación y Control.** 10. **Crítica y autocrítica.** **Parágrafo.** El cumplimiento de estos principios constituye deberes esenciales de todas las instancias y órganos del partido, a los cuales también corresponde el deber de promover y poner en ejecución los documentos programáticos de política, y garantizar el cumplimiento de los presentes estatutos.	
Artículo 5. Orientación ideológico-política. El partido recoge los principios y elaboraciones teórico-políticos derivados del pensamiento crítico y libertario, así como de las experiencias que a partir de ellos se han desarrollado tanto a nivel mundial como en nuestro continente americano, las formuladas por las FARC-EP desde su momento fundacional en 1964, en especial por nuestros fundadores Manuel Marulanda Vélez y Jacobo Arenas para plantear superar el orden social capitalista vigente en la sociedad colombiana, y promover y apoyar un proceso histórico que permita construir una sociedad alternativa en la que impere la justicia social, la democracia real y avanzada, la superación de toda exclusión, discriminación o segregación por razones económicas, sociales, étnicas o de género, la garantía de la vida y de la existencia digna, el reconocimiento del buen vivir del individuo y de la comunidad, la construcción de una nueva economía política que garantice la realización material de los derechos humanos, los relacionamientos no destructivos ni depredadores de la naturaleza y el ambiente, una nueva ética, y relaciones sociales de cooperación, hermandad y solidaridad.	Los principios que se mencionan en este artículo hacen parte del principio de autonomía organizativa y política que consagran los artículos 38, 40-3 y 107 de la Constitución y no son contrarios a ninguno de los que establece el artículo 1° de la Ley 1475 de 2011. Al efecto, debe tenerse en cuenta lo dicho por la Corte Constitucional en relación con la ideología de los parridos: "*En el caso de la ideología de los partidos, el constituyente no sólo no impuso la exigencia democrática sino que* ***estableció expresamente la libertad****. Esta opción debe ser justificada en beneficio del pluralismo*". (Sentencia C-089 de 1994 Lo anterior en el entendido que no existen derechos absolutos y que estos deben ser compatibles con el principio democrático.

Artículo 6. Documentos programáticos. El partido desarrollará sus funciones y actividades conforme a su Plataforma Ideológica. Adicionalmente, se considerarán documentos programáticos, entre otros, las elaboraciones del partido en materia de: a) Plan nacional estratégico de acción política; b) Programa estatégico; c) Plataforma del movimiento de movimientos para una gran convergencia; d) Programa para un gobierno de transición; e) Las conclusiones de los Congresos.	Este artículo es compatible con los artículos 107 de la Constitución y 3° de la Ley 130 de 1994
Artículo 7. Participación electoral. El Partido podrá participar en los procesos electorales organizados por el Estado Colombiano. Sus candidatos serán definidos por las correspondientes instancias y órganos de la organización conforme a los lineamientos y criterios definidos por la Asamblea Nacional de los Comunes y a las definiciones de política electoral del partido adoptadas por el Consejo Político Nacional, previa consideración del Consejo Nacional de los Comunes. El Consejo Político Nacional será el órgano competente para el otorgamiento de avales para la participación de candidatos del Partido a corporaciones o cargos de elección popular, observando los principios democráticos señalados por la ley. **Parágrafo:** Todo lo anterior, sin perjuicio de las reglamentaciones que fuere necesario expedir por parte del Consejo Político Nacional. **Parágrafo transitorio:** Lo/as congresistas que le corresponden al partido en Senado y Cámara para el período 2018-2022, conforme al Acto Legislativo No. 3 de 2017 en desarrollo del Acuerdo de paz, serán designados por la primera Asamblea Nacional de los Comunes o mediante delegación por el Consejo Político Nacional. La integración completa de las listas a presentar para tales procesos electorales será función del Consejo Político Nacional	No existe objeción alguna a este artículo en cuanto observa el principio democrático y señala al Consejo Político Nacional como el órgano encargado de otorgar avales a sus candidatos. Para el caso de los congresistas para el período 2018-2022, se entiende que esta designación se encuentra en concordancia con lo dispuesto en el artículo transitorio 2 del acto legislativo 3 de 2017, esto es, que la designación se refiere a la conformación de las listas a Senado de la República y Cámara de Representantes.
CAPÍTULO II **DE LO/AS MILITANTES O AFILIADOS/AS.**	Este capítulo se encuentra ajustado a lo dispuesto en los Actos Legislativos 02 y 03 de 2017 y a las normas establecidas. En especial el **numeral 2 del artículo 4 de la Ley 1475** de 2011 referido **al régimen de pertenencia al partido** o movimiento políticos en el que se deben señalar **reglas de afiliación y retiro**, así como los **derechos, deberes y prohibiciones de sus miembros**.
Artículo 8. Militantes. Para todos los efectos desarrollados en los presentes estatutos se denominará militante como sinónimo de afiliados/as. Son militantes del Partido quiénes habiendo sido integrantes de las FARC-EP o de sus estructuras de trabajo al transitar a la vida política legal, decidan hacer parte de él. Asimismo, quienes decidan aceptar y acoger como suyos la plataforma ideológica, el presente estatuto y los diferentes documentos programáticos. Para ser miembro del Partido se deberá presentar una manifestación escrita de voluntad de ingreso, la cual será aprobada por las instancias de la estructura partidaria que defina el Consejo Político Nacional. El Partido organizará un registro único de personas militantes, con observancia de las reglas legales relativas a la protección y privacidad de datos. **Parágrafo 1º:** Lo/as delegado/as al Congreso fundacional se consideran militantes, sin requerimiento adicional alguno. **Parágrafo 2 :** Todo militante debe hacer parte de una estructura de base deniminada Comuna.	Este artículo se encuentra ajustado a lo dispuesto en los Actos Legislativos 02 y 03 de 2017 y a las normas establecidas. En especial el **numeral 2 del artículo 4 de la Ley 1475** de 2011 referido **al régimen de pertenencia al partido** o movimiento políticos en el que se deben señalar **reglas de afiliación y retiro.**

Artículo 9. Simpatizantes. Además de sus militantes, el partido tendrá simpatizantes, es decir personas que, sin tener el carácter de militantes, expresen su respaldo a los principios y documentos programáticos y, en consecuencia, participen en las actividades políticas y electorales del partido.	Este artículo se encuentra ajustado a lo dispuesto en los Actos Legislativos 02 y 03 de 2017 y a las normas establecidas. En especial el **numeral 2 del artículo 4 de la Ley 1475** de 2011 referido al régimen de pertenencia al partido o movimiento políticos en el que se deben señalar **reglas de afiliación y retiro.**
Artículo 10. Doble militancia. En los términos establecidos en la Constitución y en la ley y, en especial, por el artículo 2º de la ley 1475 de 2011 o las disposiciones que lo modifiquen o reformen, está prohibida la doble militancia de los militantes del partido	Este artículo se encuentra ajustado a lo dispuesto en los Actos Legislativos 02 y 03 de 2017 y a las normas establecidas. En especial el artículo 2 y el **numeral 2 del artículo 4 de la Ley 1475** de 2011 referido al régimen de pertenencia al partido o movimiento políticos en el que se deben señalar reglas de afiliación y retiro.
Artículo 11. Renuncia al partido. Todo militante podrá presentar renuncia al partido en ejercicio de sus derechos constitucionales y legales pertinentes. Una vez presentada la renuncia, el militante o afiliado/a perderá todos los derechos que le corresponden y, por consiguiente, perderá la curul que desempeñe en corporaciones de elección popular o el cargo de elección para el cual haya sido elegido, así como todo derecho a participar en las instancias y órganos del partido.	Este artículo se encuentra ajustado a lo dispuesto en los Actos Legislativos 02 y 03 de 2017 y a las normas establecidas. En especial el numeral 2 del artículo 4 de la Ley 1475 de 2011 referido al régimen de pertenencia al partido o movimiento políticos en el que se deben señalar reglas de afiliación y retiro. Se advierte que no es procedente lo establecido en el presente artículo en relación con la sanción de la pérdida de la curul, por cuanto la imposición de la misma corresponde de manera exclusiva a la órbita de la jurisdicción contencioso administrativa, y sólo por las causales legales (Artículo 55 Ley 136 de 1994, 48 Ley 617 de 2000) y constitucionales vigentes (Artículos 110 y 183).
Artículo 12. Derechos. Son derechos de los/as militantes del partido: a) Hacer parte de la vida orgánica del partido; aportar a la formulación y el desarrollo de su línea política y contribuir al análisis y discusión de los problemas y tareas que las instancias y órganos correspondientes sometan a su consideración; b) Ser designado para la realización de diversas tareas del partido; c) Expresar libremente la opinión y ejercer crítica constructiva dentro del partido y sus diferentes instancias y órganos de dirección; d) Elegir y ser elegido para los cargos de dirección del partido;	Este artículo se encuentra ajustado a lo dispuesto en los Actos Legislativos 02 y 03 de 2017 y a las normas establecidas. En especial el **numeral 2 del artículo 4 de la Ley 1475** de 2011 referido a los **derechos** de sus miembros.

e) Elegir y ser elegido para cargos de representación popular o de cualquier instancia u órgano de representación política o social; f) Recurrir a las instancias y órganos de dirección del Partido, cuando considere que sus derechos son vulnerados; g) No ser objeto de discriminación por su edad, etnia, género, procedencia territorial o diversidad sexual; h) Recibir periódicamente y oportunamente información política sobre las orientaciones y acciones del partido; i) Tener acceso en igualdad de condiciones y previa solicitud a la información pública del partido; j) Ejercer control político sobre los cargos de dirección del partido y sobre los cargos de elección popular que ostenten miembros del partido; k) Recibir los estímulos políticos o morales del partido como reconocimiento a la abnegación, la solidaridad, el compañerismo y la lucha; l) Recibir la solidaridad y requerirla para quien en su concepto la necesite por calamidades y otras situaciones que a juicio del partido lo ameriten; m) Exigir la participación personal cuando se trate de tomar decisiones sobre su propia actuación y conducta; n) Recibir formación política y participar en las distintas instancias que con este propósito organice el partido	
Artículo 13. Deberes. Son deberes de los/as militantes del partido: a. Cumplir en un todo con los establecido en el presente Estatuto y actuar en concordancia con los principios del partido; b. Asistir a las reuniones; hacer parte de la vida cotidiana del partido; aportar a la formulación y el desarrollo de su línea política y contribuir al análisis y discusión de los problemas y tareas que las instancias y órganos correspondientes sometan a su consideración; c. Ser honesto, leal y veraz con el partido, abnegado en la lucha y ejemplar en su comportamiento, particularmente en el trabajo con las organizaciones sociales y populares; d. Esforzarse por forjar y promover valores y principios de fraternidad, solidaridad y cooperación, así como, relaciones de igualdad entre hombres y mujeres; e. Contribuir a la unidad y fortalecimiento del partido y del movimiento real de los desposeídos y explotados, asumiendo con firmeza posiciones en defensa de los intereses populares; f. Acatar y cumplir las orientaciones, determinaciones y tareas que emanen de la comuna y de las diferentes instancias y órganos de del partido, con espíritu de iniciativa; g. Vincularse directamente a la actividad en las comunidades y los lugares de trabajo, siendo ejemplar y consecuente en sus luchas por el mejoramiento de sus condiciones de vida y por la elevación de la conciencia y la organización política; h. Hacer uso correcto de la crítica frente a los errores y defectos y la correspondiente autocrítica cuando sea el caso; i. Mantener una lucha decidida por la superación de las relaciones patriarcales y de discriminación dentro del partido, si a ello hubiere lugar, y en el conjunto de la sociedad; j. Aportar a la política de finanzas del partido conforme a las reglas que definan las instancias y órganos del partido; k. Hacer esfuerzos permanentes por la superación personal y del colectivo en los campos ideológico, político y cultural; l. Mantener en alto el buen nombre del partido y denunciar prácticas de corrupción o atentatorias contra la unidad interna del partido. m. Propender por la defensa de la paz, la convivencia y los derechos humanos; n. Denunciar prácticas y situaciones que vulneren los derechos o atenten contra la dignidad de cualquier militante o afiliado/a; o. Observar, cumplir y defender la totalidad de lo establecido en el Acuerdo Final de paz suscrito por las FARC - EP con el Gobierno Nacional; p. Denunciar las prácticas de corrupción, grupismo y divisionismo o cualquier situación que deteriore el funcionamiento del partido; q. Defender la unidad orgánica e ideológica del partido; r. Cumplir con las tareas políticas encomendadas; s. Utilizar los conductos internos para dar las discusiones sin utilizar medios externos;	Este artículo se encuentra ajustado a lo dispuesto en los Actos Legislativos 02 y 03 de 2017 y a las normas establecidas. En especial el **numeral 2 del artículo 4 de la Ley 1475** de 2011 referido a los **deberes** de sus miembros. .

t. Cumplir con el reglamento interno.	
Artículo 14. Prohibiciones. Está prohibido a todo militante o afiliado/a: a) Apoyar candidatos distintos a los postulados oficialmente por el partido; b) Pertenecer a otro movimiento o partido político quebrantando la regla de la doble militancia	Este artículo se encuentra ajustado a lo dispuesto en los Actos Legislativos 02 y 03 de 2017 y a las normas establecidas. En especial el **numeral 2 del artículo 4 de la Ley 1475** de 2011 referido a las **prohibiciones** de sus miembros.
CAPÍTULO III **DE LA ESTRUCTURA INTERNA Y LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN**	Este capítulo se encuentra ajustado a lo dispuesto en los Actos Legislativos 02 y 03 de 2017 y a las normas establecidas. En especial el **numeral 3** del artículo 4 de la Ley 1475 de 2011 referido **al régimen de autoridades, órganos de dirección, gobierno y administración, y reglas para su designación y remoción.**
Artículo 15. Comuna: La comuna será la unidad básica de organización del Partido; estará conformada por cinco (5) militantes como mínimo. Las comunas se organizarán teniendo en cuenta criterios geográficos o de actividad económica y social. Cada comuna tendrá un Consejo de Comuna, integrado por tres consejero/as así: político/a, de organización y de finanzas. Cuando el tamaño de la comuna lo permita y las necesidades del trabajo político lo demanden podrá haber consejero/as de educación, de comunicación y de trabajo con el movimiento social, entre otros. En todo caso, en cada comuna se desarrollarán las funciones que definan los órganos y autoridades competentes del partido.	La norma observa el principio democrático
Artículo 16. Asamblea local de los Comunes: Es la máxima instancia de dirección del Partido en el nivel local. Estará conformada por todo/as los militantes del Partido que hagan parte de las respectivas comunas y por los consejero/as locales en ejercicio. Cuando en el nivel local haya diez (10) o más comunas, la asamblea se conformará como mínimo por tres delegado/as de cada comuna. **En todo caso, el número de delegado/as dependerá del número de militantes de cada comuna, garantizando siempre la participación de las mujeres, diversidades sexuales y de los pueblos étnicos.** La Asamblea se reunirá anualmente, pudiéndose convocar de manera extraordinaria cuando las circunstancias lo ameriten solicitado por la mitad más uno de los militantes, La convocatoria a la Asamblea local será realizada por el Consejo Local que esté en ejercicio. **Parágrafo transitorio:** Durante los dos (2) meses siguientes a la realización del congreso constitutivo se deberán realizar las asambleas locales de las comunas para conformar los respectivos órganos de dirección. – se resalta – **Parágrafo 1. Funciones**. Son funciones de la Asamblea local: a) Discutir, formular y aprobar la línea política del Partido en el nivel de su jurisdicción, considerando las orientaciones de política general del Partido; b) Discutir, formular y aprobar los lineamientos del Plan local de acción política (PLAP) para el período siguiente; c) Formular propuestas para la acción política en las diferentes instancias de dirección; d) Elegir por un período de un año lo/as integrantes del Consejo Local, garantizando la representación de las mujeres y las diversidades sexuales, y de los pueblos étnicos. e) Elegir al Consejero Político local;	Este artículo se encuentra ajustado a lo dispuesto en los Actos Legislativos 02 y 03 de 2017 y a las normas establecidas. En especial el **numeral 3** del artículo 4 de la Ley 1475 de 2011 referido al régimen de autoridades, órganos de dirección, gobierno y administración, y reglas para su designación y remoción y al numeral 4 del artículo 1 de la referida ley que consagra el el principio de **equidad e igualdad de género**.

f) Elegir los delegado/as a la Asamblea Nacional de los Comunes, según las reglas establecidas por el Consejo Nacional de los Comunes. **Parágrafo 2.** Para garantizar las acciones articuladas en los municipios, habrá coordinaciones municipales.	
Artículo 17. Consejo local de los Comunes. El Consejo local es el órgano de dirección partidaria durante el período comprendido entre la celebración de cada Asamblea local. Estará conformado por un número de entre siete (7) y nueve (9) consejero/as como máximo. Cada Consejo local tendrá un consejero/a político/a, de organización, de finanzas, de educación, de trabajo con el movimiento social, de comunicaciones y de solidaridad, elegido/as por la Asamblea local. Según las condiciones del trabajo y la acción política, se definirán las responsabilidades adicionales que sean necesarias. Será función principal del Consejo local desarrollar la política aprobada por la Asamblea local, así como ejecutar el Plan Local de Acción Política.	Esta disposición observa los principios democráticos de organización contenidos en la Ley 1475 de 2011.
Artículo 18. Asamblea Departamental de los Comunes. Es la máxima instancia de dirección en el nivel Departamental. Estará conformada por al menos un delegado/a delegadas de cada una de las comunas del respectivo territorio, y por los consejero/as territoriales en ejercicio. En todo caso, el número de delegado/as dependerá del número de comunas, **garantizando la representación de las mujeres y las diversidades sexuales y de los pueblos étnicos**. La Asamblea Departamental se reunirá cada año, pudiéndose convocar de manera extraordinaria cuando las circunstancias lo ameriten. Solicitado por la mitad más uno de los militantes o afiliados, La convocatoria a la Asamblea Departamental será realizada por el Consejo Departamental que esté en ejercicio. **Parágrafo 1.** En los territorios donde haya lugar se establecerá una territorialidad que corresponda a la región y corresponderá a la misma categoría de asamblea departamental. **Parágrafo 2.** Para garantizar las acciones articuladas en las regiones, abran coordinaciones territoriales inter-departamentales teniendo en cuenta la unidad sociocultural. **Parágrado 3. Funciones.** Son funciones de la Asamblea Departamental: a) Discutir, formular y aprobar la línea política del Partido en el nivel de su jurisdicción, considerando las orientaciones de política general del Partido; b) Discutir, formular y aprobar los lineamientos del Plan Territorial de Acción Política (PTAP) para el período siguiente; c) Formular propuestas para la acción política en las diferentes instancias de dirección; d) Discutir y aprobar los estados financieros del Partido en el nivel territorial; e) Elegir por un período de un (1) año lo/as integrantes del Consejo Departamental de los Comunes, garantizando la representación de las mujeres, y de los pueblos étnico cuando haya lugar; f) Elegir al Consejero político Departamental; a) Elegir por un período de un (1) año el Consejo Departamental de Ética, Garantías, integrado por tres (3) miembros.	Este artículo se encuentra ajustado a lo dispuesto en los Actos Legislativos 02 y 03 de 2017 y a las normas establecidas. En especial el **numeral 3** del artículo 4 de la Ley 1475 de 2011 referido al régimen de autoridades, órganos de dirección, gobierno y administración, y reglas para su designación y remoción y al numeral 4 del artículo 1 de la referida ley que consagra el el principio de **equidad e igualdad de género**.
Artículo 19. Consejo Departamental de los Comunes. El Consejo Departamental de los Comunes es el órgano de dirección partidaria durante el período comprendido entre cada Asamblea Departamental. El número de consejero/as será definido por el Consejo Político Nacional según el tamaño y número de militantes de la respectiva organización Departamental. Será función principal del Consejo Departamental desarrollar la política aprobada por la Asamblea Departamental y garantizar la ejecución del Plan Departamental de Acción Política (PDAP); y elegir de su seno al menos cinco (5) delegados a la Asamblea Nacional de los Comunes.	
Artículo 20. Consejo Político Departamental. El Consejo Político Departamental es el órgano de dirección ejecutiva del Consejo Departamental, conformada de su propio seno, en número no superior a once (11) integrantes. Cada Consejo Departamental tendrá un consejero/a político/a, de organización, de finanzas, de educación, de trabajo con el movimiento social, de	Este artículo se encuentra ajustado a lo dispuesto en los Actos Legislativos 02 y

comunicaciones y de solidaridad. Según las condiciones del trabajo y la acción política, se definirán las demás responsabilidades que sean necesarias. El Consejero Político será elegido por la Asamblea Departamental de los Comunes. **Parágrafo. Funciones.** Además de las propias de su carácter de dirección ejecutiva, serán funciones del Consejo Político Departamental: a) Organizar todas las comisiones o equipos de trabajo que considere necesarios para la ejecución del mandato de la Asamblea Departamental y, en particular, del Plan Departamental de acción política (PDAP). b) Organizar todas Asambleas Departamental Especializadas que considere necesarias para la discusión y definición de las líneas de trabajo en los diferentes campos del trabajo partidario, a fin de garantizar la ejecución de los mandatos de la Asamblea Nacional y, en particular, del Plan nacional de acción política (PDAP). c) **Garantizar/promover la participación de las mujeres, diversidades sexuales, la juventud, pueblos étnicos, en todos los escenarios e instancias del Partido en condiciones equilibradas**.	03 de 2017 y a las normas establecidas. En especial el **numeral 3** del artículo 4 de la Ley 1475 de 2011 referido al régimen de autoridades, órganos de dirección, gobierno y administración, y reglas para su designación y remoción y al numeral 4 del artículo 1 de la referida ley que consagra el el principio de **equidad e igualdad de género**.
Artículo 21. Asamblea Nacional de los Comunes. Es la máxima instancia de dirección del Partido. Estará conformada por los delegado/as elegido/as por los Consejos locales, **por al menos cinco (5) representantes de cada uno de los Consejos Territoriales, y por lo/as consejero/as nacionales en ejercicio, garantizando la representación de las mujeres y de los pueblos étnicos. La Asamblea Nacional se reunirá cada dos (2) años, pudiéndose convocar de manera extraordinaria cuando las circunstancias lo ameriten**. La convocatoria a la Asamblea Nacional será realizada por el Consejo Nacional de los Comunes que esté en ejercicio. Parágrafo. Funciones. Son funciones de la Asamblea Nacional de los Comunes a) Discutir, formular y aprobar la línea política del Partido; b) Discutir, formular y aprobar los lineamientos del Plan Estratégico (PE) y de Plan nacional de acción política (PNAP) para el período siguiente. c) Discutir y aprobar los Estatutos, la Plataforma ideológica y demás documentos programáticos, así como sus reformas. d) Discutir y aprobar los lineamientos y criterios de política electoral del Partido y del trabajo con el movimiento real del pueblo; e) Elegir por un período de dos (2) años lo/as integrantes del Consejo Nacional de los Comunes, garantizando la representación de las mujeres, diversidades sexuales y de los pueblos étnicos; f) Elegir al Presidente del Partido, quién presidirá el Consejo Político Nacional; g) Elegir por un período de dos (2) años la Comisión Nacional Ético-Disciplinaria y la Comisión de Veeduría, integradas hasta por cinco (5) miembros, resectivamente; h) Discutir y aprobar los estados financieros del Partido; i) Elegir al Revisor Fiscal; j) La Asamblea podrá delegar en el Consejo Político Nacional, la elección de las dignidades de que tratan los literales g, h y j.	Este artículo se encuentra ajustado a lo dispuesto en los Actos Legislativos 02 y 03 de 2017 y a las normas establecidas. En especial el **numeral 4 del artículo 4 de la Ley 1475** de 2011 referido a la convocatoria, fecha y demás aspectos relacionados con la reunión de la convención del partido o movimiento político, **o de su máximo órgano de dirección**, la cual deberá realizarse por lo menos cada dos (2) años, y garantizar la sus miembros influir en la toma de las decisiones más importantes de la organización política.
Artículo 22. Consejo Nacional de los Comunes. El Consejo Nacional es el órgano de dirección partidaria durante el período comprendido entre la celebración de cada Asamblea Nacional; **estará integrado por ciento once (111) miembros, garantizando la representación de las mujeres, género y diversidades sexuales, de los pueblos étnicos y de al menos un representante de cada uno de los Consejos Departamentales**. Será función principal del Consejo Nacional desarrollar la política aprobada por la Asamblea Nacional y garantizar la ejecución del Plan Nacional de Acción Política (PNAP).	Este artículo se encuentra ajustado a lo dispuesto en los Actos Legislativos 02 y 03 de 2017 y a las normas establecidas. En especial el **numeral 3** del artículo 4 de la Ley 1475 de 2011 referido al régimen de autoridades, órganos de dirección, gobierno y administración, y reglas para su designación y remoción y al numeral 4 del artículo 1 de la referida ley que consagra el el principio de **equidad e igualdad de género**.

Artículo 23. Consejo Político Nacional: El Consejo Político Nacional es el órgano de dirección ejecutiva del Consejo Nacional de los Comunes, conformado de su propio seno, en número no superior a quince (15) integrantes. El Consejo Político Nacional estará conformado por el/la Presidente/a; el consejero/a político/a nacional; **los consejero/as nacionales de organización, finanzas, educación y cultura, comunicación, del movimiento social, relaciones internacionales, solidaridad, género, pueblos étnicos, jóvenes y demás responsables que se consideren necesarios,** según las condiciones del trabajo y la acción política. El/la Presidente/a o el/la consejero/a político nacional que asuma temporalmente sus funciones, cuando haya lugar, será el vocero político del Partido. El/La Consejero/a nacional de organización hará las veces de director administrativo y representante legal. **Parágrafo. Funciones.** Además de las propias de su carácter de dirección ejecutiva, serán funciones del Consejo Político Nacional: a) Organizar todas las comisiones o equipos de trabajo que considere necesarios para la ejecución de los mandatos de la Asamblea Nacional y, en particular, del Plan nacional de acción política (PNAP); b) Organizar todas Asambleas Nacionales Especializadas que considere necesarias para la discusión y definición de las líneas de trabajo en los diferentes campos del trabajo partidario, a fin de garantizar la ejecución de los mandatos de la Asamblea Nacional y, en particular, del Plan nacional de acción política (PNAP); c) Previa consideración del Consejo Nacional de los Comunes, el Consejo Político Nacional podrá disponer la creación de formas especializadas de organización, considerando dinámicas sectoriales o de grupos poblacionales específicos; d) Elaborar los reglamentos de funcionamiento de las diferentes instancias y órganos de la estructura partidaria. e) Realizar las definiciones de política electoral del partido, conforme a los lineamientos y criterios aprobados por la Asamblea Nacional de los Comunes, previa consideración del Consejo Nacional de los Comunes. f) Reglamentar el régimen de bancadas en las Corporaciones de elección popular. g) Reglamentar los procesos de postulación, selección e inscripción de candidatos a cargos de elección popular mediante mecanismos democráticos, teniendo en cuenta el deber de garantizar la equidad de género. h) Reglamentar las consultas internas, populares o el proceso de consenso para la selección de candidatos a cargos de elección popular y para la toma de decisiones con respecto a la organización del partido o a la reforma de sus estatutos. i) Reglamentar el régimen de otorgamiento de avales; j) Establecer un reglamento interno para los miembros de corporaciones públicas Reglamentar y establecer los aportes de donación para el sostenimiento del partido. k) Adoptar normas para los fines de la utilización de los espacios institucionales en televisión y en los medios de comunicación para efectos de divulgación política y propagada electoral. l) Expedir normas sobre régimen disciplinario interno, para sancionar la doble militancia y para separar a los directivos cuando quiera que no desempeñen sus funciones conforme a la Constitución, la Ley y los presentes estatutos.	Este artículo se encuentra ajustado a lo dispuesto en los Actos Legislativos 02 y 03 de 2017 y a las normas establecidas. En especial el **numeral 3** del artículo 4 de la Ley 1475 de 2011 referido al régimen de autoridades, órganos de dirección, gobierno y administración, y reglas para su designación y remoción y al numeral 4 del artículo 1 de la referida ley que consagra el el principio de **equidad e igualdad de género**.
Artículo 24. Deberes de los órganos e instancias de dirección. El Consejo Político Nacional expedirá un reglamento que precise los deberes de cada uno de los órganos e instancias de dirección del partido **y, en especial, regule los procesos de democratización interna y el fortalecimiento del régimen de bancadas.**	Este artículo se encuentra ajustado a lo dispuesto en los Actos Legislativos 02 y 03 de 2017 y a las normas establecidas. En especial el **numeral 6** del artículo 4 de la Ley 1475 de 2011 referido a **los deberes de los directivos**, entre ellos **el de propiciar**

	procesos de democratización interna y el fortalecimiento del régimen de bancadas.
CAPÍTULO IV: DE LAS DECISIONES	
Artículo 25: Decisiones: Todas las decisiones del partido en sus diferentes órganos y niveles de dirección será tomadas por consenso o por mayoría simple. Para la toma de decisiones se garantizará la más amplia deliberación democrática; a la que seguirá la votación correspondiente, cuando no hubiere consenso. Realizada la votación, es deber de quienes se encuentren en minoría acogerse a la decisión mayoritoria. Por su parte, quienes estén en posición mayoritaria deberan respetar los derechos de la minoría. **Parágrafo 1º. Quórum deliberatorio.** El quórum deliberatorio estará constituido por la mayoría simple de los integrantes del respetivo órgano o nivel de dirección. Para efectos de la toma de decisiones, la regla de mayoría simple aplica sobre el quórum deliberatorio. **Parágrafo 2º**. Se faculta al Consejo Político Nacional reglamentar los casos en los que deban aplicar reglas especificas de mayoría.	Este artículo observa el artículo 1° de la Ley 1475 de 2011.
Artículo 26. Mecanismos de impugnación de las decisiones de los órganos de dirección. Las decisiones adoptadas por los órganos de dirección podrán ser impugnadas así: a) En primera instancia ante el mismo organismo que la adoptó. b) En única instancia cuando el organismo no tenga superior jerárquico. c) En segunda instancia o apelación cuando exista organismo superior jerárquico. En todos los casos, la impugnación procederá dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al momento de su adopción. Las decisiones de la Asamblea Nacional de los Comunes y del Consejo Nacional de los Comunes no podrán ser impugnadas.	Este artículo se encuentra ajustado a lo dispuesto en los Actos Legislativos 02 y 03 de 2017 y a las normas establecidas. Garantiza el principio del debido proceso y el derecho de defensa de sus militantes. En especial el **numeral 8** del artículo 4 de la Ley 1475 de 2011 referido a los **mecanismos de impugnación** de las decisiones adoptadas por los órganos de dirección, gobierno, administración y control, así como por las respectivas bancadas.
CAPÍTULO V: DE LAS COMISIONES DE TRABAJO	
Artículo 27. Comisiones de trabajo. El Consejo Político Nacional organizará y reglamentará con funciones de gestión y ejecución del programa estratégico y de la línea política del partido, las siguientes comisiones de trabajo, sin perjuicio de otras que se consideren necesarias: a) Plan nacional estratégico; b) Política; c) Organización; d) Finanzas; e) Investigación; f) Educación; g) Comunicación; h) Relaciones Internacionales; i) Solidaridad y derechos humanos; j) Reincorporación.	Esta disposición observa los principios democráticos de organización contenidos en la Ley 1475 de 2011

Parágrafo. La comisión de finanzas tendrá como funciones la coordinación y gestión financiero y la ejecución del presupuesto, conforme a las reglas que establezca el Consejo Político Nacional.	
CAPÍTULO VI **DEL CENTRO DE PENSAMIENTO Y FORMACIÓN POLÍTICA**	
Parágrafo. Funciones. Son funciones del Centro: a) Organizar y desarrollar la actividad investigativa, de educación y formación política, de formación para el gobierno, de historia y recuperación y preservación de la memoria, de asistencia y asesoría a la labor parlamentaria; b) Realizar la preparación editorial de las publicaciones derivadas de su trabajo. Preparar documentos y discusiones en torno a las luchas de las mujeres, pueblos étnicos, de la juventud y luchas diferenciales y particulares que retroalimenten los documentos programáticos y la línea política del partido.	Esta disposición se encuentra en consonancia con el numeral 2 del artículo transitorio 1 del acto legislativo 3 de 2017.
Artículo 29. Transitorio: Se encarga al Centro de Pensamiento y Formación Política del Partido la redacción definitiva de los documentos programáticos de la primera Asamblea Nacional de los Comunes (Plataforma ideológica, Programa estratégico, Plataforma de movimiento de movimientos para la gran convergencia, Programa de Gobierno de transición y demás documentos), los cuales deberán ser puestos a consideración y aprobados por el Consejo Político Nacional.	La disposición no contradice ninguna norma constitucional o legal
CAPITULO VII **DE LOS ÓRGANOS E INSTANCIAS DE CONTROL**	Este capítulo se encuentra ajustado a lo dispuesto en los **Actos Legislativos 02 y 03 de 2017** y a las normas establecidas. En especial el **numeral 5** del **artículo 4 de la Ley 1475 de 2011** referido al régimen de autoridades, órganos de control, entre estos el Consejo de Control Ético y el Veedor de la respectiva organización, junto con las reglas para su designación y remoción.
Artículo 30. Órganos e instancias de control. Son órganos de control del partido: La Comisión Etico-Disciplinaria Nacional; la Comisión de Veeduría y la Revisoría Fiscal. Le corresponde al Consejo Político Nacional constituir y organizar el trabajo de éstos organos e instancias; designar al Revisor Fiscal; establecer las causales de remoción de los integrantes de estas comisiones e instancias; y adoptar las decisiones de remoción cuando a ello haya lugar.	La disposición se encuentra en concordancia con el artículo 6 de la Ley 130 de 1994 y 4 de la Ley 1475 de 2011
Artículo 31. Comisión de Veeduría. Es función de la Comisión de Veeduría velar por la transparencia y fidelidad de las actuaciones del partido, incluida la administración de sus recursos y patrimonio, y las demás que le señale el Consejo Político Nacional, el cual definirá además su número de sus integrantes. Para ser miembro de ella es necesario ser militante o afiliado/o y pertenecer a un Consejo Político Departamental. **Parágrafo:** En todo caso serán funciones de la Comisión: a) Vigilar el régimen de inhabilidades e incompatibilidades en que pudieren incurrir los militantes y lo/as candidato/as a cargos de elección popular; b) Vigilar el procedimiento de otorgamiento de avales para los procesos electorales; c) Velar por el respeto de los derechos de lo/as militantes;	La disposición se encuentra en concordancia con el artículo 6 de la Ley 130 de 1994 y 4 de la Ley 1475 de 2011

d) Servir como instancia consultiva sobre asuntos relativos a la aplicación de los estatutos.	
Artículo 32. Revisoría Fiscal. El/la Revisora Fiscal deberá ser contador público o una persona jurídica cuyo objeto sea la prestación del servicio de revisoría fiscal. Ejercerá las funciones que determine el Consejo Político Nacional en concordancia con lo estipulado por la ley en esa materia.	Este artículo se encuentra ajustado a lo dispuesto en los **Actos Legislativos 02 y 03 de 2017** y a las normas establecidas. En especial **el numeral 15** del **artículo 4 de la Ley 1475 de 2011** referido **al Sistema de auditoria interna** y reglas para la designación del auditor, señalando los mecanismos y procedimientos para el adecuado manejo de la financiación estatal del funcionamiento y de las campañas.
Artículo 33. Prohibiciones. Se prohíbe a los militantes que hagan parte de las instancias de control interno postularse para ejercer cargos de elección popular durante el tiempo que desempeñe dichas funciones y hasta seis meses después de su retiro	Este artículo está en armonía con el artículo 4-3 de la Ley 1475 de 2011
CAPÍTULO VIII **DEL CÓDIGO ÉTICO-DISCIPLINARIO**	Este capítulo se encuentra ajustado a lo dispuesto en los **Actos Legislativos 02 y 03 de 2017** y a las normas establecidas. En especial el **numeral 5** del **artículo 4 de la Ley 1475 de 2011** referido al **régimen de autoridades, órganos de control, entre estos el Consejo de Control Ético y el Veedor de la respectiva organización**, junto con las reglas para su designación y remoción, y **el numeral 9** referido al **Código de Ética**, en el que se desarrollen los principios de moralidad y el debido proceso, y en el que se fijen, además, los procedimientos para la aplicación de las sanciones por infracción al mismo, mínimos bajo los cuales deben actuar los afiliados a la organización política, en especial sus directivos.
Artículo 34. Código Ético-Disciplinario. Las conductas de los miembros del partido que incumplan los presentes estatutos y, en especial, sus deberes, serán juzgadas con observancia de los principios universales del debido proceso, conforme al código adoptado por la primera Asamblea Nacional de Comunes. **Parágrafo 1º.** En todo caso, las sanciones aplicables a los militantes del Partido son: a) amonestación; b) separación del cargo; c) suspensión temporal de derechos; d) separación de las filas del partido; d) expulsión.	Este artículo se encuentra ajustado a lo dispuesto en los **Actos Legislativos 02 y 03 de 2017** y a las normas establecidas. En especial **el numeral 12** del **artículo 4 de la Ley 1475 de 2011** referido al

Parágrafo 2º.. Se establecerá un reglamento diferencial para los/as militantes que hagan parte de las corporaciones públicas o cargos públicos.	**régimen disciplinario interno**, en el que se adopten mecanismos para sancionar la doble militancia, así como para separar del cargo a sus directivos cuandoquiera que no desempeñen sus funciones conforme a la Constitución, la ley y los estatutos.
Artículo 35. Comisión Ético-Disciplinaria Nacional. Se constituirá una Comisión Nacional Etico-Disciplinaria, en los términos y con las funciones señaladas por el Código Ético-Disciplinario.	
CAPÍTULO IX **DE LAS RENTAS Y PATRIMONIO**	Este capítulo se encuentra ajustado a lo dispuesto en los **Actos Legislativos 02 y 03 de 2017** y a las normas establecidas. En especial **los numerales 13 y 14 del artículo 4 de la Ley 1475 de 2011** referidos a la **financiación de los partidos** o movimientos políticos, de las campañas y, en particular, la forma de recaudo de contribuciones y donaciones, control al origen y cuantía de las mismas, distribución de la financiación estatal, apoyo financiero a sus candidatos, y publicidad de todo ingreso y gasto y al procedimiento de formulación, aprobación y ejecución de su programa y de su presupuesto.
Artículo 36. Rentas y patrimonio: Las rentas y patrimonio del partido estarán conformadas por las siguientes fuentes: a) Las sumas que conforme a la Constitución y a la ley le correspondan como partido político y, en especial, las previstas en el Acto Legislativo 03 de 2017; b) Los bienes y recursos que reciba a cualquier título de cualquier persona natural o jurídica, conforme a las reglas establecidas por la Constitución y la Ley; c) Los aportes que hagan al partido sus militantes o simpatizantes; Los créditos obtenidos con entidades del sector financiero legalmente constituidas y reconocidas.	El artículo se encuentra en correspondencia con lo dispuesto por los artículos 109 de la Constitución y 16 y 17 de la Ley 1475 de 2011.
Artículo 37. Recaudo. El recaudo de recursos para las actividades del partido se realizará con estricta sujeción a la normatividad vigente.	La norma remitea las restricciones que establece la ley para efecto del recaudo de recursos.
Artículo 38. Distribución de los recursos. Los recursos con que cuente el partido serán repartidos atendiendo los criterios de necesidad, para el funcionamiento interno y para atender los requerimientos de los procesos electorales en los distintos niveles. Para este efecto, la Comisión Nacional de Finanzas elaborará planes de ejecución y uso de los recursos, que serán aprobados por el Consejo Político Nacional	Esta disposición observa lo establecido en el artículo 18 de la Ley 1475 de 2011.
CAPÍTULO X **DE LA DISOLUCIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN Y LIQUIDACIÓN**	

Artículo 39. Disolución, fusión, escisión y liquidación. Las decisiones sobre disolución, fusión, escisión y liquidación del partido serán adoptadas por las Asamblea Nacional de los Comunes, la cual decidirá igualmente la entidad análoga o similar al Partido que recibirá los bienes y recursos remanentes que arroje la liquidación.	Este artículo se encuentra ajustado a lo dispuesto en los **Actos Legislativos 02 y 03 de 2017** y a las normas establecidas. En especial **el numeral 18 del artículo 4 de la Ley 1475 de 2011** referido a las **reglas de disolución, fusión con otros partidos o movimientos políticos, o escisión y liquidación**.
CAPÍTULO XI **DE OTRAS DISPOSICIONES**	
Artículo 40. Reforma del Estatuto. Toda reforma a los presentes estatutos deberá ser adoptada por la Asamblea Nacional de los Comunes. **Parágrafo transitorio:** Se faculta al Consejo Político Nacional por cuenta de dos (2) de sus integrantes designados por éste, para atender todos los cambios y ajustes que fueren necesarios a los presentes Estatutos, por recomendación o requerimiento del Consejo Nacional Electoral.	La disposición observa el principio democrático en cuanto para las reformas estatutarias remite a su máxima autoridad, esto es, a la Asamblea Nacional de los Comunes.
Artículo 41. Duración del partido. El partido tendrá duración indefinida, pero estará sometido a las reglas de existencia definidas por la Constitución y la ley. **Artículo 42. Vigencia.** Los presentes estatutos rigen a partir de su aprobación por la primera Asamblea Nacional de los Comunes.	

Del análisis realizado se concluye que el contenido de los estatutos cumple con las disposiciones establecidas en la Constitución, en los Actos Legislativos 02 y 03 de 2017, los artículos 3 y 5 de la Ley 130 de 1994 y, en particular, en los artículos 1, 2 y 4 de la Ley 1475 de 2011.

Por lo tanto, esta Corporación procederá a su registro, **salvo el aparte del artículo 11 que establece** "*Una vez presentada la renuncia, el militante o afiliado/a perderá todos los derechos que le corresponden y, por consiguiente, perderá la curul que desempeñe en corporaciones de elección popular o el cargo de elección para el cual haya sido elegido*", por las razones expuestas e[33]n la parte motiva del presente acto administrativo.

Así mismo, precisa la Sala que en lo no regulado de manera especial, el partido **Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común – FARC** estará sujeto a los derechos y deberes contemplados en la Ley 130 de 1994 y 1475 de 2011, especialmente, a los deberes de diligencia en la aplicación de las disposiciones constitucionales o legales que regulan la organización, funcionamiento y/o financiación de dicho partido conforme los artículos 10, 11 y 12 de esta última ley estaturaria.

Ahora, se pasará al examen del logo símbolo presentado por la mencionada organización política para evaluar si es procedente su registro.

2.3.5. Del logo símbolo presentado por Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común – FARC

La Ley 130 de 1994, establece en su artículo 5 lo siguiente:

> ***"ARTICULO 5. Denominación símbolos.*** *Los partidos y los movimientos políticos son propietarios de su nombre y del símbolo que hayan registrado en el Consejo Nacional Electoral.*
>
> *Estos no podrán ser usados por ningún otro partido u organización política reconocida o no. La denominación de un partido o movimiento deberá distinguirse claramente de la de cualquier otro ya existente.*
>
> *El nombre del partido o movimiento no podrá en forma alguna parecerse o tener relación gráfica o fonética con los símbolos de la patria o con emblemas estatales.*
>
> *En las campañas electorales y en las demás actividades del partido o movimiento sólo se podrá usar la denominación estatutaria o su abreviatura o sigla, las denominaciones suplementarias deberán ser autorizadas por el órgano del mismo que señalen los estatutos.*
>
> *Los organismos que se escindan del partido o movimiento perderán el derecho a utilizar total o parcialmente la denominación y el símbolo registradas y las sedes correspondientes".*

Así, el artículo atribuye a los partidos y movimientos políticos la propiedad sobre el nombre y el símbolo que haya sido registrado ante el Consejo Nacional Electoral, los cuales deberán diferenciarse claramente de otros ya existentes y en forma alguna parecerse o tener relación gráfica o fonética con los símbolos de la patria o emblemas estatales, prohibiendo el uso de los mismos por otro partido u organización política reconocida

La Corte Constitucional precisó el alcance de la anterior disposición, así:

> *"El artículo 5 del proyecto reconoce un tipo especial de propiedad de los partidos y movimientos sobre su nombre, color y el símbolo que registren en el Consejo Nacional Electoral que no podrán ser usados por ninguna otra organización. Las denominaciones políticas, de acuerdo con la disposición, no podrán ser expresivas de antagonismos frente a naciones extranjeras, personas o entidades, ni asimilarse fonética o gráficamente a los símbolos estatales. Finalmente, se dispone que los organismos que se escindan del partido o movimiento no podrán utilizar su denominación, su símbolo y sus sedes.*
>
> *El ejercicio de la actividad política y la acción proselitista hacen necesario que las organizaciones se identifiquen no sólo ideológicamente sino también asociando su presencia a ciertos símbolos, denominaciones, formas y emblemas que contribuyen a proyectar su imagen".*

Por su parte, la Ley 1475 de 2011, dispone en su artículo 35:

> ***"Artículo 35. Propaganda electoral.*** *Entiéndase por propaganda electoral toda forma de publicidad realizada con el fin de obtener el voto de los ciudadanos a favor de partidos o movimientos políticos, listas o candidatos a cargos o corporaciones públicas de elección popular, del voto en blanco, o de una opción en los mecanismos de participación ciudadana.*
>
> *La propaganda a través de los medios de comunicación social y del espacio público, únicamente podrá realizarse dentro de los sesenta (60) días anteriores a la fecha de la respectiva votación, y la que se realice empleando el espacio público podrá realizarse dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de la respectiva votación.*

En la propaganda electoral sólo podrán utilizarse los símbolos, emblemas o logotipos previamente registrados ante el Consejo Nacional Electoral por los partidos, movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos, coaliciones o comités de promotores, los cuales no podrán incluir o reproducir los símbolos patrios, los de otros partidos o movimientos políticos, ni ser iguales o generar confusión con otros previamente registrados". (Se subraya).

De esta manera, la ley regula el uso de los símbolos, emblemas o logotipos por parte de los partidos, movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos, coaliciones o comités promotores en procesos electorales, y reitera los parámetros que deberán tenerse en cuenta al momento de su diseño.

Ahora bien, aunque las normas mencionadas no definen el término de símbolo, emblema o logotipo, es válido acudir al Diccionario de la Real Academia Española, que entre sus acepciones entiende por los mismos lo siguiente:

***"Símbolo:** Representación sensorialmente perceptible de una realidad, en virtud de rasgos que se asocian con esta por una convención socialmente aceptada".*

***"Logotipo:** Distintivo formado por letras, abreviaturas".*

***"Emblema:** Jeroglífico, símbolo o empresa en que se representa alguna figura, al pie de la cual se escribe algún verso o lema que declara el concepto o moralidad que encierra - Cosa que es representación simbólica de otra".*

A partir de esos conceptos es válido concluir que el símbolo, logotipo o emblema es para el partido o movimiento político, grupo significativo de ciudadanos o coalición, la herramienta de representación gráfica a través de la cual buscan generar relación con sus ideales, programas o plataforma política y la forma en que esperan que los electores los identifiquen y diferencien de otros.

Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia C-490 de 2011, advirtió lo siguiente:

"En efecto, como lo ha sostenido la jurisprudencia de esta Corte, para preservar la equidad entre los competidores, se ha establecido derechos sobre ciertos elementos de los partidos como los logos o símbolos, en otras palabras, "se reconoce un tipo de propiedad especial a los partidos y movimientos políticos sobre su nombre y símbolo, prohibiendo su uso a las demás organizaciones políticas, con el fin de que se pueda identificar plenamente a cada partido y movimiento, y el Estado pueda controlar las conductas de los partidos que lleven a la confusión del electorado"

No obstante, este precepto introduce también una limitación consistente en la prohibición de incluir o reproducir los símbolos patrios en la propaganda electoral. La jurisprudencia de esta Corte ha considerado que una medida de esta naturaleza resulta legítima, comoquiera que se orienta a proteger los valores que ellos representan, particularmente como emblemas de la unidad nacional y factores aglutinantes del sentimiento general de pertenencia a la Nación.

Se pretende con ello evitar usos indebidos de estos símbolos, como la exaltación de los valores patrios, que son comunes a todos los nacionales en cuanto representan un sentido general de pertenencia, en favor de una determinada opción política, generando confusión en el electorado".

Establecidos los elementos y requisitos de orden constitucional, legal y jurisprudencial para registrar el símbolo, logotipo o emblema que identifique a un partido político, procede la Corporación a verificar si la presente solicitud de registro se ajusta a los mandatos de la Ley.

El logo-símbolo que presenta el partido **Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común – FARC** se describe e identifica con la siguiente imagen:



Se observa que el logo-símbolo sometido a registro por parte del partido **Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común – FARC** es una flor roja con una estrella en el centro y con la palabra FARC en verde en la parte inferior.

Revisado el anterior logo-símbolo de cara a la normatividad aplicable, y verificado de oficio por parte del Despacho del Magistrado Ponente en los archivos de la Subsecretaría de ésta Corporación, los logo-símbolos registrados a la fecha, se encuentra que no existe registro en cabeza de otro partido, movimiento político, grupo significativo de ciudadanos, coaliciones o comités promotores en procesos electorales; que el mismo se distingue claramente de los registrados hasta ahora. Que no se parece, ni tiene relación gráfica, ni fonética con los símbolos de la patria o emblemas estatales y no expresa antagonismos frente a naciones extranjeras, personas o entidades.

En cuanto se refiere al nombre y a la sigla que se utiliza, esta corporación considera que no existe ninguna limitación para que se registre el nombre "Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común" con la sigla –FARC-, por cuanto ésta corresponde a una denominación diferente a aquella de la que era portadora la agrupación armada con la cual se suscribió el Acuerdo Definitivo.

En efecto, mientras ésta se denominaba Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército Del Pueblo (FARC-EP), aquella se denomina **Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común – FARC -**, y suprime el aparte relativo a la organización armada que existía anteriormente. Así, aunque la sigla FARC es una expresión acrónima de la anterior, tiene un significado completamente diferente de aquella que dejó de existir con la consolidación del Acuerdo Final del 24 de noviembre de 2016.

En cuanto a este aspecto, vale la pena recordar que en el caso colombiano la ex guerrilla del M – 19 pasó a llamarse Alianza Democrática M- 19; el Ejército Popular de Liberación (EPL) pasó a llamarse Movimiento Esperanza, Paz y Libertad.

De otro lado, en el plano internacional, en el Salvador la ex guerrilla de las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Marti (FPL) se convirtieron posteriormente en el movimiento político Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Además, La Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG-MAIZ) fue el resultado

de la desmovilización de cuatro grupos guerrilleros, a saber: Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), la Organización del Pueblo en Armas (ORPA), las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), y el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) y conservó.

Por lo anterior, considera ésta Corporación que no existe impedimento o reparo alguno para el registro y posterior uso del nombre **Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común – FARC -**, ya que el mismo cumple con los requisitos exigidos en el artículo 5 de la Ley 130 de 1994 y artículo 35 de la Ley 1475 de 2011.

2.3.6 Registro de Directivos

En el acta de fundación que obra a folios 3 y 4 se observa que se estableció lo siguiente:

"Adicionalmente, y atendiendo a lo consignado en el artículo 23 de nuestros Estatutos, hemos decidido por unanimidad en nuestro Congreso Constitutivo elegir al Consejo Político Nacional, que está conformado por quince (15) integrantes de la siguiente manera:

CONSEJO POLÍTICO NACIONAL

NOMBRES Y APELLIDOS	***IDENTIFICACIÓN C.C***
RODRIGO LONDOÑO ECHEVERRI Presidente	*79.149.126*
LUCIANO MARIN ARANGO Consejero Político Nacional	*19.304.877*
PABLO CATATUMBO TORRES VICTORIA Consejero Nacional Organización	*14.990.220*
JULIAN GALLO CUBILLOS	*16.266.146*
MILTON DE JESÚS TONCEL REDONDO	*15.237.742*
PASTOR LISANDRO ALAPE LASCARRO	*71.180.715*
RODRIGO GRANDA ESCOBAR	*19.104.578*
JAIME ALBERTO PARRA RODRIGUEZ	*1.214.464.706*
JUAN HERMILO CABRERA DIAZ	*5.977.013*
CRISELDA LOBO SILVA	*63.303.703*
VICTORIA SANDINO SIMANCA HERRERA	*26.212.730*
FANCY MARIA ORREGO MEDINA	*39.409.946*
ELOISA RIVERA ROJAS	*52.382.470*
ISRAEL ALBERTO ZUÑIGA IRIARTE	*72.152.361*
JAIRO HERNANDO ESTRADA ALVAREZ	*79.330.803*

(Folio 2)

Se advierte que obran en el expediente las declaraciones de aceptación de todos y cada uno de los siguientes miembros integrantes del Consejo Político Nacional:

Nombre	Cédula	Cargo	Folios
RODRIGO LONDOÑO ECHEVERRI	79.149.126	Presidente del partido y miembro del Consejo Político Nacional	13
LUCIANO MARIN ARANGO	19.304.877	Consejero Político Nacional y miembro del Consejo Político Nacional	14
PASTOR LISANDRO ALAPE LASCARRO	71.180.715	Miembro del Consejo Político Nacional	15 y 16; 19 y 20
JULIAN GALLO CUBILLOS	16.266.146	Miembro del Consejo Político Nacional	17 y 18

JAIME ALBERTO PARRA RODRIGUEZ	1.214.464.706	Miembro del Consejo Político Nacional	21 y 22
PABLO CATATUMBO TORRES VICTORIA	14.990.220	Consejero Nacional de Organización y miembro del Consejo Político Nacional	23 y 24
CRISELDA LOBO SILVA	63.303.703	Miembro del Consejo Político Nacional	25 y 26
ELOISA RIVERA ROJAS	52.382.470	Miembro del Consejo Político Nacional	27 y 28
JAIRO HERNANDO ESTRADA ALVAREZ	79.330.803	Miembro del Consejo Político Nacional	29
VICTORIA SANDINO SIMANCA HERRERA	26.212.730	Miembro del Consejo Político Nacional	30 y 31
RODRIGO GRANDA ESCOBAR	19.104.578	Miembro del Consejo Político Nacional	32
FANCY MARIA ORREGO MEDINA	39.409.946	Miembro del Consejo Político Nacional	33 y 34
MILTON DE JESÚS TONCEL REDONDO	15.237.742	Miembro del Consejo Político Nacional	82

Por lo tanto, se procederá a inscribir a los miembros y cargos que aparecen descritos en la relación mencionada. No obstante, la Sala se abstendrá de inscribir como miembros del Consejo Político Nacional a los señores JUAN HERMILO CABRERA DIAZ identificado con cédula de ciudadanía 5.977.013 e ISRAEL ALBERTO ZUÑIGA IRIARTE identificado con cédula de ciudadanía 72.152.361, dado que no fueron allegadas al expediente las constancias de aceptación del cargo.

En suma, y luego de verificar los requisitos previstos en la Constitución, especialmente lo establecido en el Acto Legislativo 03 de 2017 y en la normatividad vigente, la Sala concluye que la solicitud reúne todos los presupuestos exigidos para el reconocimiento de la personería jurídica con las consecuencias establecidas en el mencionado acto legislativo.

Es preciso advertir que el presente reconocimiento de la personería jurídica y su conservación, se encuentran dentro de los parámetros establecidos en el artículo 1 del acto legislativo 03 de 2017. En particular, los incisos tercero y cuarto que establecen:

> *"(…) El partido o movimiento político reconocido deberá cumplir los requisitos de conservación de la personería jurídica, y estará sujeto a las causales de pérdida de la misma previstas para los demás partidos y movimientos políticos de conformidad con la Constitución y la ley, salvo la acreditación de un determinado número de afiliados, la presentación a certámenes electorales y la obtención de un umbral de votación, durante el tiempo comprendido entre la fecha de su inscripción en el registro único de partidos y movimientos políticos y el 19 de julio de 2026.*
>
> *Después de esta fecha se le aplicarán las reglas establecidas para todos los partidos o movimientos políticos. El reconocimiento de la personería jurídica atribuirá al nuevo partido o movimiento político los mismos derechos de los demás partidos o movimientos políticos con personería jurídica".*

Por lo anteriormente expuesto, el Consejo Nacional Electoral,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER personería jurídica al partido político **Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común – FARC –,** de conformidad con la parte motiva de este acto administrativo.

Parágrafo. La conservación de la personería jurídica estará sujeta a lo dispuesto en el artículo 1 del acto legislativo 03 de 2017.

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el registro del acta de constitución, su plataforma ideológica, y Código de Ética y Disciplina del partido político **Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común – FARC –** de conformidad con la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO. ORDENAR el registro de los estatutos del partido político **Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común – FARC –, salvo el aparte del artículo 11 que establece** "*Una vez presentada la renuncia, el militante o afiliado/a perderá todos los derechos que le corresponden y, por consiguiente, perderá la curul que desempeñe en corporaciones de elección popular o el cargo de elección para el cual haya sido elegido*", por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTICULO CUARTO: ORDENAR el registro del logo símbolo del partido político **Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común – FARC –**, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de este acto administrativo, y el cual quedará así:



ARTICULO QUINTO: INSCRIBIR los nombres de los siguientes ciudadanos, quienes fueron elegidos para dirigir e integrar sus órganos de gobierno así:

Nombre	Cédula	Cargo	Folios
RODRIGO LONDOÑO ECHEVERRI	79.149.126	Presidente del partido y miembro del Consejo Político Nacional	13
LUCIANO MARIN ARANGO	19.304.877	Consejero Político Nacional y miembro del Consejo Político Nacional	14
PASTOR LISANDRO ALAPE LASCARRO	71.180.715	Miembro del Consejo Político Nacional	15 y 16; 19 y 20
JULIAN GALLO CUBILLOS	16.266.146	Miembro del Consejo Político Nacional	17 y 18

JAIME ALBERTO PARRA RODRIGUEZ	1.214.464.706	Miembro del Consejo Político Nacional	21 y 22
PABLO CATATUMBO TORRES VICTORIA	14.990.220	Consejero Nacional de Organización y miembro del Consejo Político Nacional	23 y 24
CRISELDA LOBO SILVA	63.303.703	Miembro del Consejo Político Nacional	25 y 26
ELOISA RIVERA ROJAS	52.382.470	Miembro del Consejo Político Nacional	27 y 28
JAIRO HERNANDO ESTRADA ALVAREZ	79.330.803	Miembro del Consejo Político Nacional	29
VICTORIA SANDINO SIMANCA HERRERA	26.212.730	Miembro del Consejo Político Nacional	30 y 31
RODRIGO GRANDA ESCOBAR	19.104.578	Miembro del Consejo Político Nacional	32
FANCY MARIA ORREGO MEDINA	39.409.946	Miembro del Consejo Político Nacional	33 y 34
MILTON DE JESÚS TONCEL REDONDO	15.237.742	Miembro del Consejo Político Nacional	82

Parágrafo. La Sala se **abstendrá** de inscribir como miembros del Consejo Político Nacional a los señores **JUAN HERMILO CABRERA DIAZ** identificado con cédula de ciudadanía 5.977.013 e **ISRAEL ALBERTO ZUÑIGA IRIARTE** identificado con cédula de ciudadanía 72.152.361, de acuerdo con la parte motiva de este acto administrativo.

ARTICULO SEXTO. Reconocer al señor **PABLO CATATUMBO TORRES VICTORIA** identificado con cédula de ciudadanía 14.990.220, como miembro del Consejo Nacional de Organización, miembro del Consejo Político Nacional y **representante legal** del partido político **Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común – FARC,** de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de los estatutos, y en consecuencia, **NOTIFICARLE** personalmente, por intermedio de la Subsecretaría de esta Corporación, el contenido del presente acto administrativo, conforme a los artículos 67 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO SÉPTIMO. REMITIR a la Subsecretaría de la Corporación copia de la solicitud de reconocimiento de personería jurídica del partido político **Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común – FARC, con sus respectivos anexos,** asi como copia del presente acto administrativo, para lo de su competencia.

ARTICULO OCTAVO. Notificar personalmente por intermedio de la Subsecretaría de esta Corporación al **Ministerio Público** conforme a los artículos 67 y subsiguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO NOVENO. Notificar personalmente por intermedio de la Subsecretaría de esta Corporación al doctor **Rodrigo Rivera Salazar**, Alto Comisionado para la Paz, o a quién haga sus veces, conforme a los artículos 67 y subsiguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO DÉCIMO. Notificar personalmente por intermedio de la Subsecretaría de esta Corporación al Ministro del Interior **Guillermo Rivera Florez**, o a quién haga sus veces,

conforme a los artículos 67 y subsiguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

ARTICULO DECIMO PRIMERO. Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de acuerdo al artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C, el treinta y uno (31) de octubre de dos mil diecisiete (2017)

CARLOS CAMARGO ASSIS
Presidente Reglamentario

Aclaraciones a los artículos primero, segundo, tercero, cuarto, sexto y séptimo: Magistrados Ángela Hernández, Carlos Camargo Assis, Emiliano Rivera, y Yolima Carrillo.

Salvamento a los artículos primero, segundo, tercero, cuarto, sexto y séptimo. Magistrados Ángela Hernández y Felipe García.

Aclaraciones artículo quinto: Magistrados Ángela Hernández, Emiliano Rivera y Carlos Camargo Assis.

Salvamento artículo quinto: Magistrados Ángela Hernández, Yolima Carrillo y Felipe García.

ANG
Revisó: ANG
Proyectó: MB
Rad. 7388 - 17

Señores,
JUZGADOS PENALES MUNICIPALES DE BOGOTÁ (REPARTO)
E. S. D.

Referencia: **ACCIÓN DE TUTELA**

Accionantes: **ISRAEL ALBERTO ZUÑIGA IRIARTE**
Senador de la República.
VICTORIA SANDINO SIMANCA HERRERA
Senadora de la República.

Accionados: **PARTIDO COMUNES - CONSEJO NACIONAL DE LOS COMUNES -CNC-**

CADA UNO DE LOS 111 MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE LOS COMUNES -CNC- DEL PARTIDO COMUNES.

Terceros Interesados: **CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**
MILTON DE JESUS TONCEL REDONDO
Ex integrante del Secretariado del Estado Mayor Central Farc.
BENEDICTO DE JESÚS GONZÁLEZ MONTENEGRO, Integrante Consejo Nacional de los Comunes.
UBALDO ZUÑIGA IRIARTE, Presidente ECOMÚN - Integrante Consejo Nacional de los Comunes.
WILFRAN MARTÍNEZ, Integrante Consejo Nacional de los Comunes.
LIDA ROSA ORTIZ, Integrante Consejo Nacional de los Comunes.
MARCOS MARTÍNEZ, Integrante Consejo Nacional de los Comunes.
JOSÉ MARBEL ZAMORA, Firmante del Acuerdo de Paz
MARINELLY HERNÁNDEZ OROZCO, Integrante Consejo Nacional de los Comunes.
FRANCISCO JAVIER TOLOZA, Integrante Voces de Paz.

Los suscritos, **ISRAEL ALBERTO ZUÑIGA IRIARTE** y **VICTORIA SANDINO SIMANCA HERRERA**, Senadores de la República, identificados como aparece al pie de nuestras correspondientes firmas, con domicilio y residencia en la ciudad de Bogotá; de manera respetuosa acudimos a su Despacho en ejercicio del derecho constitucional de tutela consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 1386 del 2000, con el objeto de interponer **ACCIÓN DE TUTELA** en contra del **PARTIDO COMUNES - CONSEJO NACIONAL DE LOS COMUNES -CNC-** y de cada uno de los **111 MIEMBROS**, individualmente considerados, del Consejo Nacional de los Comunes, como órgano de dirección partidaria durante el período de celebración de cada Asamblea Nacional**,** con domicilio en la ciudad de Bogotá, con el fin de obtener el cese de la vulneración al *derecho fundamental al Derecho de Petición* de información, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1437 de 2011, subrogado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, reglamentado por el Decreto 491 de 2020; *participación Política*, dispuesto en el artículo 40 de la Constitución Política; *Dignidad Humana,* artículo 1 de la Constitución Política; *Debido Proceso*, artículo 29 de la Constitución Política; *Igualdad*, artículo 13 de la Constitución Política; y a la *Paz*, artículo 22 de la Constitución Política; con fundamento en lo siguiente:

La presente acción de tutela se desarrollará según el siguiente esquema: (I) Las partes y terceros interesados; (II) Hechos; (III) Peticiones; (IV) Procedencia de la acción de tutela; (V) Derechos fundamentales vulnerados y amenazados; (VI) Competencia; (VII) Juramento; (VIII) Pruebas; (IX) anexos; y (X) Notificaciones.

I. DE LAS PARTES Y TERCEROS CON INTERÉS LEGÍTIMO.

Accionantes.

ISRAEL ALBERTO ZUÑIGA IRIARTE, identificado con cédula de ciudadanía No. 72.152.361 de Barranquilla, y **VICTORIA SANDINO SIMANCA HERRERA**, identificada con cédula de ciudadanía No. 26.212.730, Senadores de la República, con domicilio y residencia en la ciudad de Bogotá.

Accionados.

El **PARTIDO COMUNES - CONSEJO NACIONAL DE LOS COMUNES -CNC-** y los **111 MIEMBROS**, individualmente considerados, que integran el Consejo Nacional como órgano de dirección partidaria durante el período de celebración de la Asamblea Nacional**,** de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de los Estatutos del partido.

Terceros con interés legítimo.

El **CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**, organismo autónomo e independiente que hace parte de la Organización Electoral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de la Constitución Política, tiene interés legítimo en las resultas del proceso por las siguientes razones:

a. En el año 2017 el Consejo Nacional Electoral reconoció personería jurídica al partido político que surgió de la transición de las Farc a la vida política legal, atendiendo a lo preceptuado en el artículo 3 de la Ley 130 de 1994.
b. Las facultades que, legal y reglamentariamente, le han sido otorgadas para ejercer la suprema inspección, vigilancia y control de la organización electoral y, en general, de la actividad electoral de los partidos y movimientos políticos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 265 de la Constitución Política.
c. El artículo 3 de la Ley 1475 de 2011 dispone que el Consejo Nacional Electora llevará el Registro Único de partidos y movimientos políticos, y uno de los documentos que los representantes legales de los partidos deben registrar ante ese órgano son los estatutos y sus reformas, previa verificación del cumplimiento de los principios y reglas de organización y funcionamiento consagrados en la Constitución Política y los Estatutos.
d. El artículo 4 de la Ley 1475 de 2011 regula la figura de la escisión de los partidos y movimientos políticos, y el numeral 18 ibídem dispone que los estatutos de los partidos políticos deben contener "*reglas de disolución, fusión con otros partidos o movimientos políticos, o escisión y liquidación".* Esta norma fue acogida por el artículo 39 de los Estatutos del partido Fuerza Alternativa del Común–FARC, que dispone que las decisiones sobre la *escisión* del partido serán adoptadas por las Asamblea Nacional de los Comunes; en consecuencia, le corresponde al Consejo Nacional Electoral vigilar el cumplimiento del ejercicio del derecho a la participación política y que, en ese contexto de participación, los miembros de un partido puedan discutir y obtener la escisión.

De igual manera, tienen un interés legítimo en el resultado del proceso los señores **MILTON DE JESUS TONCEL REDONDO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 15.287.742, Ex integrante del Secretariado del Estado Mayor Central Farc; **BENEDICTO DE JESÚS GONZÁLEZ MONTENEGRO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 77.032.391, Integrante Consejo Nacional de los Comunes; **UBALDO ZUÑIGA IRIARTE**, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.716.909, Presidente ECOMÚN - Integrante Consejo Nacional de los Comunes; **WILFRAN MARTÍNEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 11.514.720.003, Integrante Consejo Nacional de los Comunes; **LIDA ROSA ORTIZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 63.517.725, Integrante Consejo Nacional de los Comunes; **MARCOS MARTÍNEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 77.039.813, Integrante Consejo Nacional de los Comunes; **JOSÉ MARBEL ZAMORA,** identificado con cédula de ciudadanía No. 79.207.378; **MARINELLY HERNÁNDEZ OROZCO,** identificado con cédula de ciudadanía No. 4.315.431, Integrante Consejo Nacional de los Comunes; y **FRANCISCO JAVIER TOLOZA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 88.234.955 de Cúcuta, Integrante Voces de Paz; quienes también fungieron como solicitantes de la información ante la accionada, pero que en el presente trámite judicial no intervienen como accionantes.

II. HECHOS

1. Somos firmantes del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (en adelante “el Acuerdo Final”), suscrito el 24 de noviembre de 2016 en la ciudad de Bogotá D.C. En consecuencia, nos encontramos en proceso de reincorporación política, económica y social, de conformidad con el punto 3 y los subpuntos 3.2. y 3.2.1. del Acuerdo Final.

2. El Acuerdo Final fue elevado a norma constitucional mediante Actos Legislativos 01 de 2016 y 02 de 2017, otorgándosele la categoría de acuerdo especial de derecho internacional en lo atinente a Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y sus conexos. Los AL fueron declarados exequibles por la Corte Constitucional mediante las sentencias C-332/2017 y C-630/2017, respectivamente.

3. Finalizado el proceso de dejación de armas que previó el punto 3.2.1.1 del Acuerdo Final, en septiembre de 2017 el Consejo Nacional Electoral reconoció personería jurídica al partido político que surgió de la transición de las Farc a la vida política legal.

4. Mediante Acto Legislativo 03 de 2017, declarado constitucional con sentencia C-027 de 2018, se implementó el reconocimiento de personería jurídica al partido y se reguló parcialmente el componente de reincorporación política.

5. En virtud de este acto formal, empezamos a ser reconocidos para todos los efectos y en igualdad de condiciones como partido político con la denominación Partido Fuerza Alternativa del Común–FARC-, dando cumplimiento al subpunto 3.2.1.1 del Acuerdo Final.

6. Como parte integrante de las Farc y de sus estructuras de trabajo al transitar a la vida política legal, hoy tenemos la oportunidad de continuar con la promoción de la plataforma ideológica y fungir como militantes del Partido Fuerza Alternativa del Común –FARC-, con representación política en el Congreso de la República durante dos (2) períodos constitucionales contados a partir del 20 de julio de 2018, atendiendo a lo dispuesto en el subpunto 3.2.1.2 del Acuerdo Final.

7. Para ejercer el derecho de participación Política el Acuerdo Final permitió inscribir listas únicas de candidatos propios o en coalición con otros partidos políticos con personería jurídica para la circunscripción del Senado de la República y para cada una de las circunscripciones territoriales en que se elige la Cámara de Representantes. En el Senado se garantizó un mínimo de cinco (5) curules, y para la Cámara de Representantes un mínimo de cinco (5) curules.

8. En cumplimiento a las previsiones del Acuerdo Final fuimos elegidos en el congreso fundacional para ocupar las curules que establece el Acuerdo, ratificado la elección del partido con nuestra participación en las elecciones populares que se llevaron a cabo en el año 2018, tal y como lo estableció el Acto Legislativo 03 de 2017.

9. El partido político en el congreso fundacional aprobó los estatutos, mediante artículo 4 numeral 3 garantizando el pluralismo conforme a lo estipulado en el artículo 1 de la Ley 1475 de 2011, y con ello, el deber de garantizar la expresión de las tendencias existentes en su interior, en particular de la minorías, como nosotros que somos expresión de afrodescendientes, mujeres, excombatientes de base, militantes no excombatientes y territorios.

10. El derecho a la reincorporación y sus garantías políticas aplica para todos los firmantes del Acuerdo Final, 13.589 personas, y no solo para quienes son reconocidos como militantes por Consejo Político Nacional y la “oficialidad” del partido que hoy solo cuenta con menos de la mitad de los reincorporados. Conforme el censo establecido por la actual dirección en la última Asamblea Extraordinaria, apenas 6700 militantes hacen parte del partido.

11. La voz de los firmantes en las diferentes instancias del Acuerdo Final hoy se encuentra privatizada por la "oficialidad" de las instancias de la estructura partidaria que define el Consejo Político Nacional del partido. Esto solo significa que las instancias partidarias no nos están ofreciendo garantías en términos democráticos y son controladas por una sola tendencia política de los reincorporados y militantes.

12. Nuestro compromiso, más que pertenecer a un partido político, garantizar la paz, velar por la reincorporación de nuestros compañeros excombatientes, representar a los pueblos étnicos, a las mujeres y a las diversidades, y a las nuevas generaciones que tengan la intención de participar en una instancia política sin sentirse excluidos.

13. Con el objetivo de encontrar una solución pactada a las diferencias que actualmente se suscitan al interior del partido, el 10 de agosto de 2021 radicamos petición formal en las instalaciones del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común -FARC, recibido con No. 1345, solicitando lo siguiente:

    "1- Convocar para el presente año a la Asamblea General Extraordinaria para que se discuta y apruebe la escisión del partido político, conforme al artículo 39 de los Estatutos del partido y las reglas establecidas en el mismo estatuto, es decir, convocando a los fundadores del partido de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 21".

14. Transcurridos 15 días hábiles, desde la fecha de radicación del derecho de petición hasta la fecha de presentación de la acción de tutela, ha transcurrido más de un (1) mes y el **Partido Comunes** a través del **Consejo Nacional de Los Comunes -CNC-** no han dado respuesta, ni informado impedimento para contestar ni fecha estimada de contestación, desconociendo por completo lo dispuesto en los artículos 14 y 32 de la Ley 1437 de 2011, subrogado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.

15. Sin que se desvirtúe el objeto único de esta tutela "la protección simple del derecho de petición", resulta conducente informar al Despacho que la resolución del derecho de petición que pretendemos vincula en forma mediata varios derechos fundamentales de arraigo constitucional, entre ellos el derecho a la efectiva Participación Política de los miembros del Partido Político *Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común* -FARC-, Dignidad Humana, Debido proceso e Igualdad, en forma oportuna.

III. PETICIÓN

Con fundamento en los hechos, prueba documental, referentes jurisprudenciales, las reflexiones realizadas a lo largo de la presente acción de tutela y de la importancia política de la situación acaecida, solicitamos a Ustedes Honorables Magistrados, que en salvaguarda Constitucional:

Primero. Se amparen los Derechos Fundamentales de Petición, efectiva Participación Política de los miembros del Partido Político *Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común* -FARC-, Dignidad Humana, Debido proceso e Igualdad, ordenando al **Partido Comunes** a través del **Consejo Nacional de Los Comunes -CNC-** dar respuesta inmediata, de fondo y sin dilaciones al derecho de petición radicado de forma física el 10 de agosto de 2021, con radicado No. 1345, en las instalaciones del partido, que contiene la siguiente solicitud:

> *"Convocar para el presente año a la Asamblea General Extraordinaria para que se discuta y apruebe la escisión del partido político, conforme al artículo 39 de los Estatutos del partido y las reglas establecidas en el mismo estatuto, es decir, convocando a los fundadores del partido de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 21".*

Segundo. A fin de garantizar la protección del derecho fundamental de petición, se ordene que la respuesta al derecho de petición debe suministrarse por parte del **Partido Comunes** a través del **Consejo Nacional de Los Comunes -CNC-,** como órgano colegiado, y de forma individual por cada uno de sus 111 miembros.

Como consecuencia de las facultades *extra* y *ultra petita*[1] del juez constitucional, subsidiariamente, solicitamos se ordene el amparo de los siguientes derechos para hacer cesar su vulneración y amenaza, y evitar un perjuicio irremediable:

Tercero. A fin de garantizar la protección de los derechos fundamentales a la participación política de los miembros del partido político en el marco del Acuerdo Final, dignidad humana, debido proceso, igualdad y a la paz en relación con la reincorporación política, se ordene al **Partido Comunes** a través del **Consejo Nacional de Los Comunes -CNC-** convocar para el presente año a una Asamblea General Extraordinaria para que se discuta y apruebe la escisión del partido político Fuerza Alternativa del Común–FARC, de conformidad con lo establecido en el artículo 39 de los Estatutos del partido y las demás reglas establecidas en el mismo estatuto.

Cuarto. Que en el marco de la celebración de la Asamblea General Extraordinaria se ordene al **Partido Comunes** a través del **Consejo Nacional de Los Comunes -CNC-** apruebe la escisión del partido político Fuerza Alternativa del Común–FARC, de conformidad con lo establecido en el artículo 39 de los Estatutos del partido y las demás reglas establecidas en el mismo estatuto.

Quinto. Que en cumplimiento de la orden y previo a celebrarse la Asamblea General Extraordinaria, se convoque a los fundadores del Partido Fuerza Alternativa del Común–FARC, quienes se integran por los militantes; a la Asamblea Nacional de los Comunes, como máxima dirección del partido; y a los 111 miembros, individualmente considerados, del Consejo Nacional como órgano de dirección partidaria durante el período de celebración de cada Asamblea Nacional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8, 21 y 22 de los Estatutos del partido. De dicho trámite informar al juez constitucional para el respectivo seguimiento.

Sexto. Que como prueba del acatamiento de la orden del Honorable juez constitucional, se ordene al **Partido Comunes** a través del **Consejo Nacional de Los Comunes -CNC-** informar la fecha y hora en la que se llevará a cabo la Asamblea General Extraordinaria para discutir y aprobar la escisión del partido político Fuerza Alternativa del Común–FARC, y el resultado de la misma para el respectivo seguimiento.

IV. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA

El artículo 86 de la Constitución Política establece que:

> *Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión.*

En armonía con la norma constitucional, los artículos 1, 5 y 42 del Decreto 2591 de 1991 establecen lo siguiente:

> **Articulo 1**. objeto. ***Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión*** *de cualquier autoridad pública o* ***de los particulares en las casos que señale este Decreto****. Todos los días y horas son hábiles para interponer la acción de tutela.* (Subrayado y negrilla fuera del texto)
>
> **Artículo 5.** Procedencia de la acción de tutela. *La* ***acción de tutela*** *procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2 de esta ley. También* ***procede contra acciones u omisiones de particulares, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III de este Decreto****. La*

[1] Sentencia T-368 de 2017. "5.2. (…) *el juez de tutela cuenta con amplias facultades oficiosas que debe asumir de forma activa, con el fin de procurar una adecuada protección de los derechos fundamentales de las personas*".

procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que la acción de la autoridad o del particular se haya manifestado en un acto jurídico escrito. (Subrayado y negrilla fuera del texto)

Articulo 6. Causales de improcedencia de la tutela. ***La acción de tutela no procederá****:*

1. ***Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales****, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante (…).* (Subrayado y negrilla fuera del texto)

Articulo 42. Procedencia de tutela contra particulares. *La acción de tutela procederá contra acciones u omisiones de particulares en los siguientes casos:*

1. Cuando contra quien se hubiere hecho la solicitud este encargado de la prestación del servicio público de educación.

2. Cuando contra quien se hubiere hecho la solicitud este encargado de la prestación del servicio público de salud para proteger los derechos a la vida, a la intimidad, a la igualdad y a la autonomía.

3. Cuando aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud este encargado de la prestación de servicios públicos.

4. ***Cuando la solicitud fuere dirigida contra una organización privada, contra quien la controle efectivamente o fuere el beneficiario real de la situación que motivo la acción, siempre y cuando el solicitante tenga una relación de subordinación o indefensión con tal organización.***

5. Cuando contra quien se hubiere hecho la solicitud viole o amenace el artículo 17 de la Constitución.

6. Cuando la entidad privada sea aquella contra quien se hubiere hecho la solicitud en ejercicio del hábeas corpus, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Constitución.

7. Cuando se solicite rectificación de informaciones inexactas o erróneas. En este caso se deberá anexar la transcripción de la información o la copia de la publicación y de la rectificación solicitada que no fue publicada en condiciones que aseguren la eficacia de la misma.

8. Cuando el particular actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas, en cuyo caso se aplicará el mismo régimen que a las autoridades públicas.

9. Cuando la solicitud sea para tutelar la vida o la integridad de quien se encuentre en situación de subordinación o indefensión respecto del particular contra el cual se interpuso la acción. Se presume la indefensión del menor que solicite la tutela. (Subrayado y negrilla fuera del texto)

De las normas transcritas se advierte que la acción de tutela supone, como ocurre en este caso, que:

1. Se verifique la violación de uno o varios derechos fundamentales.

2. Que no existan otros medios procesales para la protección de la vulneración al derecho fundamental.

Ahora bien, comoquiera que la vulneración de los derechos fundamentales por la acción u omisión de los particulares, cuyo amparo se persigue con la presente acción de tutela, deriva del desconocimiento de los presupuestos contenidos en el artículo 1, 13, 22, 23, 29 de la Constitución Política, es menester estudiar los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contenidos en el Decreto 2691 de 1991, los cuales se satisfacen en el presente asunto:

i. *Principio de subsidiariedad*. No existen otros recursos o medios de defensa judicial para el amparo de los derechos fundamentales vulnerados.

ii. *Principio de inmediatez*. La acción de tutela se interpone dentro de un término razonable y proporcionado.

iii. *Legitimación por activa*. Las personas accionantes nos encontramos legitimados para interponerla.

iv. *Legitimación por pasiva.* El accionado está legitimado para ser demandado, quien es el responsable de la violación y amenaza de derechos fundamentales que se alegan.

v. Se identifiquen los derechos vulnerados.

Procedamos a verificar el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, así:

i. Que se cumpla el requisito de subsidiariedad.

La existencia de otro medio de defensa ha sido reiteradamente explicado por la Corte Constitucional, en el sentido de que no siempre que se presentan varios mecanismos de defensa, la tutela resulta improcedente. Es necesario además una ponderación de eficacia de los mismos a partir de la cual se concluya que alguno de los otros medios existentes es tan eficaz para la protección del derecho fundamental como la acción de tutela misma.

En tal sentido, la Sentencia T-526 del 18 de septiembre de 1992 Sala Primera de Revisión, manifestó:

> *(…) Es claro entonces que el otro medio de defensa judicial a que alude el artículo 86 debe poseer necesariamente, cuando menos, la misma eficacia en materia de protección inmediata de derechos constitucionales fundamentales que, por naturaleza, tiene la acción de tutela. De no ser así, se estaría haciendo simplemente una burda y mecánica exégesis de la norma, en abierta contratación con los principios vigentes en materia de efectividad de los derechos y con desconocimiento absoluto del querer expreso del constituyente.*

De igual manera, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional *"ha establecido en virtud del artículo 86 de la Carta Política, que la acción de tutela es un medio judicial con carácter residual y subsidiario, que puede utilizarse frente a la vulneración o amenaza de derechos fundamentales cuando no exista otro medio idóneo de defensa de lo invocado, o existiéndolo, no resulte oportuno o se requiera acudir al amparo como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable".*

En el presente asunto, fijémonos en lo siguiente. Por un lado, más allá de la normatividad constitucional (artículo 23) y legal (Ley 1755 de 2015 que sustituyó el Título II, Capítulo I, Capítulo II y Capítulo III, artículos 13 a 33, de la Parte Primera de la Ley 1437 de 2011) sobre las formalidades para presentar un derecho de petición y el término que tienen las autoridades públicas y los particulares para dar contestación a las distintas modalidades de peticiones, más allá de la acción de tutela no existe otra vía de tipo administrativo o judicial para exigir el cumplimento cuando no responden dentro de la oportunidad legal.

Si bien el Título III, Capítulo VII de la Ley 1437 de 2011 regula el silencio administrativo negativo cuando no se emite pronunciamiento alguno de una solicitud presentada y que el mismo consiste en una ficción para que, vencido el plazo establecido por el ordenamiento jurídico sin una respuesta por parte [de la administración], se genere un acto ficto por medio del cual se niega la solicitud elevada, acto que el peticionario puede recurrir; se observa que dicho procedimiento administrativo está reservado para las autoridades públicas, sin posibilidad que sea exigible para las peticiones que se radican ante particulares y respecto de las cuales estos guardan silencio.

Lo que significa que ante la negativa de las organizaciones privadas de dar respuesta a las peticiones dentro de los plazos definidos en la ley, no queda otro camino que acudir

a la acción de tutela para amparar el derecho fundamental de petición y los demás derechos que se derivan de este o tienen una conexidad relevante.

Por otro lado, dada la especialidad de este asunto, si bien el propósito del derecho de petición que radicamos es que se convoque a una Asamblea General Extraordinaria para que se discuta y apruebe la escisión del partido, realmente lo que nos interesa es que sea pueda resolver de fondo y a favor dicha solicitud en lo que tiene que ver con la "escisión" del partido, tema frente al cual no existe mayor regulación normativa ni desarrollo jurisprudencial en Colombia.

Sobre las normas primigenias que se relacionan con la "escisión" solamente existen los artículos 107 y 108 de la Constitución Política, que hacen referencia a la garantía de fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos, y a que estos pueden obtener el reconocimiento de su personería jurídica, respectivamente. Por su parte, el artículo 14 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011 introdujo la figura de la escisión de los partidos y movimientos políticos, para lo cual señaló que la *"(…) escisión de los partidos y movimientos políticos se regirá por lo dispuesto en la ley y/o en sus estatutos*", pero no la definió ni concretó el procedimiento para su aprobación. El artículo 4 ibídem, numeral 18, dispuso que los estatutos de los partidos y movimientos políticos deben contener cláusulas sobre las disposiciones señaladas en la ley y en el artículo 107 de la Constitución Política, como es la atinente a las [18] "*reglas de disolución, fusión con otros partidos o movimientos políticos, o escisión y liquidación*".

Como se observa, las normas mencionadas no definen la figura de la escisión, ni establecen el procedimiento a seguir para que un partido político se pueda escindir, y al revisar el artículo 39 de los Estatutos del partido Fuerza Alternativa del Común–FARC únicamente se señala que las decisiones sobre disolución, fusión, **escisión** y liquidación **del partido serán adoptadas por las Asamblea Nacional de los Comunes**, lo que deja a la libre voluntad y discrecionalidad de los 111 miembros del Consejo Nacional de Los Comunes como órgano de dirección partidaria durante el período de celebración de cada Asamblea Nacional, la decisión de aprobar o no la escisión.

Por lo tanto, para nosotros es preocupante que aún cuando el **Consejo Nacional de Los Comunes -CNC- del Partido Comunes** llegase a dar respuesta a la petición por orden del juez constitucional o por iniciativa propia, se corre el riesgo que la misma sea negativa en el sentido de no convocar a una Asamblea General Extraordinaria y aprobar la escisión del partido, como consideramos que va a suceder por las razones que se exponen más adelante. En este caso, se superaría la violación al derecho fundamental de petición, pero no casaría la violación de los derechos a la participación Política, dignidad humana, debido proceso, igualdad, y el derecho a la Paz, los cuales también invocamos por vía de esta acción de tutela para obtener su amparo ante la ausencia de otros mecanismos de defensa para su protección. Como se desprende, son inexistentes los mecanismos judiciales para solicitar la escisión del partido, en caso de que la respuesta del **Consejo Nacional de Los Comunes -CNC- del Partido Comunes** sea negativa, salvo la competencia que tiene el Consejo Nacional Electoral para reconocerle personería jurídica a los nuevos partidos y movimientos políticos.

La protección del conjunto de estos derechos, incluidos el de petición y el de obtener la escisión de la colectividad, revisten de especial protección constitucional, dada la especial circunstancia de la personería jurídica del partido que surgió del Acuerdo Final, donde se consagró nuestra participación política con apertura democrática para construir la paz, garantizándonos por parte del Gobierno Colombiano el acceso efectivo a la vida política del país.

Visto lo anterior, al no existir otra vía jurídica acudimos a la acción de tutela para que haga valer nuestros derechos fundamentales de petición, participación y los demás que resulten violados, para que en el marco de una Asamblea General Extraordinaria, como actuales militantes del partido, se adopten decisiones frente al futuro del mismo y de sus miembros y, de esta manera, garantizar nuestra activa y efectiva participación política y consolidación en la democracia, en calidad de firmantes del acuerdo de paz e integrantes de la bancada de oposición parlamentaria.

Igualmente, resulta procedente la acción de tutela incoada, como quiera que el caso objeto de estudio es **cierto e inminente**. De continuar la situación de vulneración, se obstaculiza la posibilidad de escindir la colectividad y, en consecuencia, continuar bajo

el sometimiento de instancias partidarias que no ofrecen garantías y son controladas por una sola tendencia política.

Es **grave** pues la vulneración descrita impide la realización de derechos fundamentales que nos asisten de manera individual y colectiva en el marco de la participación democrática, en particular en lo relacionado con los derechos de los electores y elegidos en las listas de la oposición política parlamentaria declarada conforme al Estatuto de la Oposición Vigente.

Aunado a lo anterior, la resolución de este litigio es **urgente**, en la medida que es necesaria e inaplazable el proteger el derecho de forma inmediata. No existe más jurisdicción a la cual acudir en pro de salvaguardar el carácter fundamental de los derechos que en ella se amparan.

La urgencia se manifiesta, además, porque nos encontramos a seis meses de las próximas elecciones legislativas en las que participaremos por segunda vez, por lo que es necesario definir la escisión del partido y la participación electoral que dispone el artículo 7 de los Estatutos del partido. En la actualidad, los estatutos establecen que el partido puede participar en los procesos electorales, y los candidatos son definidos por los órganos de la organización con previsión de los lineamientos y criterios definidos por la Asamblea Nacional de los Comunes y de las definiciones de política electoral del partido adoptadas por el Consejo Político Nacional, previa consideración del Consejo Nacional de los Comunes. En estos casos, el Consejo Político Nacional es el órgano competente para el otorgamiento de los avales para la participación de candidatos en cargos de elección popular.

Al encontrarnos los acá accionantes excluidos del partido por diferencias irreconciliables, es indispensable tener claridad sobre la continuidad en la colectividad o la escisión de la misma para determinar cómo se integraran las listas a presentar para el proceso electoral.

Sobre este último aspecto, el artículo 85 de Constitución Política distinguió los derechos fundamentales según su exigibilidad de aplicación e indicó que existen derechos de aplicación inmediata, es decir, “que no requieren de previo desarrollo legislativo o de algún tipo de reglamentación legal o administrativa para su eficacia directa y que no contemplan condiciones para su ejercicio en el tiempo, de modo que son exigibles de forma directa e inmediata”.

En este orden de ideas, no contamos con vía judicial distinta a la tutela, mecanismo este expedito para proteger derechos fundamentales como los planteados para su protección temporal, hasta tanto se decida la suerte del partido de manera definitiva.

ii. Que se cumpla el requisito de inmediatez.

La jurisprudencia se ha encargado de delinear los contornos del requisito de inmediatez, según el cual la acción de tutela debe interponerse dentro de un término razonable una vez ocurrida la vulneración o amenaza del derecho, es decir, inmediatez no equivale a inmediatamente después, sino a “dentro de un término razonable”.

Al respecto, tenemos la posición de la Corte Constitucional:

> *Si bien se debe acudir a la acción de tutela en un término razonable desde la ocurrencia del hecho que vulnera o amenaza vulnerar los derechos fundamentales, esa razonabilidad en el término no conlleva necesariamente la inmediatez en el ejercicio de la acción debiéndose interponer enseguida o sin tardanza alguna la tutela so pena de que ésta no prospere encontrándose aún vulnerado o en peligro de vulneración el derecho fundamental. Entender la característica de la inmediatez de la tutela de otra manera, sería establecer una caducidad a la acción que a todas luces contraría la Constitución.*

Volviendo a los hechos de la acción de tutela, observamos que el derecho de petición se radicó el 10 de agosto de 2021 en las instalaciones física del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común -FARC, recibido con No. 1345, lo que significa que a la fecha de interposición de la presente acción apenas se completa un (1) mes, lo cual es más que razonable para el presente asunto.

iii. Que se cumpla con el requisito de legitimación en la causa por activa.

Si bien la tutela es una herramienta procesal preferente, informal y sumaria, cuya finalidad es la defensa de derechos fundamentales, que toda persona puede instaurar *"por sí misma o por quien actúe a su nombre"*, no es necesario que otra lo represente.

El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 regula la legitimidad e interés en la acción de tutela y señala que: *"la acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante".*

En consecuencia, los suscritos integrantes del Partido Político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común -FARC-, haciendo parte de la dirección nacional, que desarrollamos responsabilidades respecto a la reincorporación política, económica y social, dos de nosotros en calidad de parlamentarios activos, nos encontramos legitimados para actuar en nombre propio para interponer la presente acción pública de amparo.

iv. Que se cumpla con el requisito de legitimación en la causa por pasiva.

En virtud del artículo 1 y 5 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede contra acciones u omisiones de particulares, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III de ese Decreto, que atenten contra los derechos fundamentales de las personas.

En este asunto, la vulneración de los derechos proviene del Consejo Nacional de los Comunes -CNC- del Partido Fuerza Alternativa del Común–FARC-, y de los 111 miembros, individualmente considerados, del Consejo Nacional como órgano de dirección partidaria durante el período de celebración de cada Asamblea Nacional

v. Que se identifiquen los derechos vulnerados.

La conducta desplegada por el **Partido Comunes** a través del **Consejo Nacional de Los Comunes -CNC-,** es violatoria de los siguientes derechos fundamentales, al interior de los cuales también se expondrá el eventual perjuicio que se causaría de no ampararse, veamos:

V. DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS Y AMENAZADOS CUYA PROTECCIÓN SE INVOCA.

Conforme a los hechos detallados en la presente acción, los accionantes identificamos que se están vulnerando nuestros derechos fundamentales y constitucionales de Petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política; Participación Política, previsto en el artículo 23 de la Constitución Política; Dignidad Humana, dispuesto en el artículo 1 de la Constitución Política; Debido Proceso, que señala el artículo 29 de la Constitución Política; Igualdad, consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política; y a la Paz, que prevé el artículo 22 de la Constitución Política.

De igual manera, el Bloque de Constitucionalidad (artículos 53, 93, 94, 102.2 y 214), este último relacionado con las garantías previstas en el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 39 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Carta Democrática Interamericana y Acuerdo Final; por tal motivo nos referiremos a cada derechos invocados a continuación:

5.1. Derecho de Petición.

El **derecho de petición** es un derecho humano y fundamental protegido por los Sistemas Regional y Universal de Derechos Humanos, y definido así:

5.1.1. Convención Americana sobre Derechos Humanos – CADH.

a. Artículo 44. Competencia.

> *Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización, puede presentar a la Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de esta Convención por un Estado parte.*

Al respecto, el Juez Cançado Trindade, en el voto concurrente a la sentencia de *Castillo Petruzzi c. Perú*, se refirió al derecho de petición individual, en relación con el artículo 44 de la CADH, de esta manera:

> *(...) En mi entendimiento, no se puede analizar el artículo 44 como si fuera una disposición como cualquier otra de la Convención, como si no estuviera relacionada con la obligación de los Estados Partes de no crear obstáculos o dificultades para el libre y pleno ejercicio del derecho de petición individual, o como si fuera de igual jerarquía que otras disposiciones procedimentales. El derecho de petición individual constituye, en suma, la piedra angular del acceso de los individuos a todo el mecanismo de protección de la Convención Americana. (Subrayas fuera de texto)*

Esta disposición debe leerse a la luz de la obligación de respetar los derechos humanos y el reconocimiento de la personalidad jurídica, establecidos en la CADH:

b. Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos.

> *1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.*
>
> *2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.*

5.1.2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

a. Artículo 2

> *(...) 3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que:*
>
> *a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales;*
> *b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso judicial;*
> *c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.* (subrayado propio)

5.1.3. Constitución Política de Colombia.

a. Artículo 23. Derecho de petición.

> *Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.*

Con la omisión de actuar por parte del Consejo Nacional de Los Comunes -CNC- del Partido Comunes, consideramos que se está violando nuestro derecho fundamental de petición.

El derecho fundamental que le asiste a toda persona para presentar peticiones respetuosas a las autoridades y particulares, por motivos de interés o general particular,

y obtener pronta respuesta, para el caso presente, la expedición pronta, rápida y oportuna de la información solicitada y, en consecuencia las acciones por parte del Consejo Nacional de Los Comunes -CNC- del Partido Comunes, y a la luz del artículo 1 de la Ley 1755 2015, norma que regula el término que regula el término para resolver las distintas modalidades de peticiones, ordena:

> *Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción.*

El derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Carta, es un derecho público subjetivo de la persona para acudir ante las autoridades con miras a obtener pronta contestación a una solicitud o queja. A diferencia de los términos y procedimientos jurisdiccionales, el derecho de petición es una vía expedita de acceso directo a las autoridades y particulares y la posibilidad de estas de no contestar las reclamaciones o solicitudes que conlleva la configuración del fenómeno del silencio administrativo, no debe entenderse como vía expedita para el desconocimiento del núcleo esencial del derecho fundamental de petición.

La teoría del núcleo o contenido esencial de los derechos fundamentales es una garantía constitucional contra su vulneración. El núcleo esencial de un derecho fundamental puede definirse como el ámbito intangible del derecho cuyo respeto se impone a las autoridades y a los particulares.

A su vez la Honorable Corte Constitucional ha sostenido sobre el Derecho fundamental de petición que:

> *(…) ha dejado de ser expresión formal de la facultad ciudadana de elevar solicitudes a las autoridades para pasar a garantizar, en consonancia con el principio de democracia participativa (C.P. Art. 1°), la pronta resolución de las peticiones. La tutela administrativa de los derechos fundamentales es un derecho contenido en el núcleo esencial del derecho de petición, que no sólo exige una respuesta cualquiera de la autoridad, sino la pronta resolución de la petición, bien sea en sentido positivo o negativo*. (ST-219 del 4 de mayo de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).

En el asunto que convoca nuestra atención, está absolutamente evidenciado que el **Consejo Nacional de Los Comunes -CNC- del Partido Comunes** cuenta con todos los elementos para proferir respuesta de fondo al derecho de petición elevado y que su renuencia vulnera no sólo el derecho fundamental consignado en el artículo 23 Constitucional, sino los demás relacionados en la presente acción de tutela.

La conducta del **Consejo Nacional de Los Comunes -CNC- del Partido Comunes** constituye un acto de arbitrariedad, en la medida que adoptó un comportamiento que afecta nuestros intereses que consiste en la negativa de dar respuesta a la petición formal radicada el 10 de agosto de 2021.

Este derecho guarda relación con las **facultades *extra y ultra petita* del juez constitucional**, por las siguientes razones:

La Corte Constitucional en sentencia T-015 de 2019, consideró:

> *23.* ***Dado el carácter informal de la acción de tutela y como quiera que su objetivo es la materialización efectiva de los derechos fundamentales que estime comprometidos el juez al valorar la situación que se le puso en conocimiento, y a través de ella guarda la integridad y la supremacía de la Constitución****, la Corte ha admitido que este resuelva los asuntos sin ceñirse estricta y forzosamente (i) a las situaciones de hecho relatadas en la demanda; (ii) a las pretensiones del actor; ni (iii) a los derechos invocados por este, como si tendría que hacerlo en otro tipo de causas judiciales.*
>
> ***Es el juez quien debe (i) establecer los hechos relevantes y, en caso de no tenerlos claros, indagar por ellos; (ii) adoptar las medidas que estime convenientes y efectivas para el restablecimiento del ejercicio de las garantías ius fundamentales; y (iii) precisar y resguardar todos los derechos que advierta comprometidos en determinada situación. Al hacerlo***

> ***e ir más allá de lo expuesto y lo pretendido en el escrito de tutela, el juez emplea facultades ultra y extra petita****, que son de aquellas "****facultades oficiosas que debe asumir de forma activa, con el fin de procurar una adecuada protección de los derechos fundamentales de las personas****".*
>
> *El uso de tales facultades, no solo implica una posibilidad para el juez de tutela, pues está obligado a desplegarlas cuando el asunto en cuestión lo amerita.* (Negrilla fuera del texto)

Para la Corte Constitucional el derecho de petición es una garantía *ius fundamental* que consagra la Constitución Política, que está relacionado con el ejercicio de otros derechos fundamentales y cuya respuesta debe tener las siguientes características para considerar satisfecho el derecho de petición (reiterando la sentencia C-007 de 2017):

> *(i) Prontitud. Que se traduce en la obligación de la persona a quien se dirige la comunicación de darle contestación en el menor tiempo posible, sin que exceda los términos fijados por la Ley 1755 de 2015. En aras de fortalecer esta garantía el Legislador previó que la ausencia de respuesta puede dar lugar a "falta para el servidor público y (…) a las sanciones correspondientes de acuerdo con el régimen disciplinario."*
>
> *(ii) Resolver de fondo la solicitud. Ello implica que es necesario que sea clara, es decir, inteligible y de fácil comprensión ciudadana; precisa de modo que atienda lo solicitado y excluya información impertinente, para evitar respuestas evasivas o elusivas; congruente, o que se encuentre conforme a lo solicitado de modo que lo atienda en su totalidad; y consecuente con el trámite que la origina, cuando es el caso en que se enmarca en un proceso administrativo o una actuación en curso, caso en cual no puede concebirse como una petición aislada.*
>
> *(iii) Notificación. No basta con la emisión de la respuesta sino que la misma debe ser puesta en conocimiento del interesado y, ante el juez de tutela. Ello debe ser acreditado.*

Aunque para esa Corporación "26. (…) *la satisfacción del derecho de petición no depende, en ninguna circunstancia, de la respuesta favorable a lo solicitado. De modo tal que se considera que hay contestación, incluso si la respuesta es en sentido negativo y se explican los motivos que conducen a ello. Así las cosas se ha distinguido y diferenciado el derecho de petición del «derecho a lo pedido», que se emplea con el fin de destacar que «el ámbito de protección constitucional de la petición se circunscribe al derecho a la solicitud y a tener una contestación para la misma, en ningún caso implica otorgar la materia de la solicitud como tal»*", atiende a la importancia de que la respuesta que se suministre debe ser congruente.

Para la Corte, en sentencia T-587 de 2006, la característica de la congruencia significa que debe existir "*coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la solución verse sobre lo pedido y no sobre un tema semejante, sin que se excluya la posibilidad de suministrar información adicional que se encuentre relacionada con la petición propuesta*".

Teniendo en cuenta lo que ha considerado la Corte constitucional, el **Consejo Nacional de Los Comunes -CNC- del Partido Comunes** y sus 111 miembros tienen dos opciones: a) contestar favorablemente el derecho de petición; o b) que la respuesta sea negativa. En tal caso, deben responder de fondo la petición y poner de presente todos y cada de los argumentos jurídicos congruentes que sustenten su respuesta y permitan entender las razones de su negativa.

Si no se cumple con estas características, el juez debe acudir a las facultades oficiosas que debe asumir de forma activa para garantizar nuestros derechos fundamentales.

Ahora bien, esas facultades excepciones que tiene el juez de tutela no sólo se circunscriben a la garantía de una respuesta de fondo y congruente que nos deben suministrar. También debe considerarse que si bien el propósito del derecho de petición que radicamos es que se convoque a una Asamblea General Extraordinaria para que se apruebe la escisión del partido, realmente la pretensión gira en torno a que se resuelva a favor la convocatoria a una Asamblea General Extraordinaria para discutir y aprobar la

"escisión" del partido, tema frente al cual no existe mayor regulación normativa ni desarrollo jurisprudencial en Colombia.

Como se expuso en el requisito de subsidiariedad, de las normas primigenias que se relacionan con la "escisión" solamente existen los artículos 107 y 108 de la Constitución Política, que hacen referencia a la garantía de fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos, y a que estos pueden obtener el reconocimiento de su personería jurídica, respectivamente.

Por su parte, el artículo 14 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011 introdujo la figura de la escisión de los partidos y movimientos políticos, para lo cual señaló que la *"(…) escisión de los partidos y movimientos políticos se regirá por lo dispuesto en la ley y/o en sus estatutos*", pero no la definió ni concretó el procedimiento para su aprobación.

Fue el artículo 4 ibídem, numeral 18, el que dispuso que los estatutos de los partidos y movimientos políticos deben contener cláusulas sobre las disposiciones señaladas en la ley y en el artículo 107 de la Constitución Política, como es la atinente a las [18] "*reglas de disolución, fusión con otros partidos o movimientos políticos, o escisión y liquidación*", aunque tampoco ofreció mayores garantías para adelantar dicho procedimiento, dejándolo al criterio de cada partido político.

Estas normas no definen la figura de la escisión, ni establecen el procedimiento para que un partido político se pueda escindir, y al revisar el artículo 39 de los Estatutos del partido únicamente se señala que las decisiones sobre disolución, fusión, **escisión** y liquidación **del partido serán adoptadas por las Asamblea Nacional de los Comunes**, lo que deja a discreción de los 111 miembros del Consejo Nacional de Los Comunes como órgano de dirección partidaria durante el período de celebración de cada Asamblea Nacional, la decisión de aprobar o no la escisión.

Por lo tanto, aún cuando el **Consejo Nacional de Los Comunes -CNC- del Partido Comunes** llegase a dar respuesta a la petición por orden del juez constitucional o por iniciativa propia, se corre el riesgo que la misma sea negativa en el sentido de no convocar a una Asamblea General Extraordinaria y aprobar la escisión del partido, como consideramos que va a suceder, por las siguientes razones: a) no contestaron la solicitud dentro del término legal ni previo a la fecha presentación de esta tutela; y b) dos días después de haber presentado la solicitud de escisión de la colectividad, esto es, el 12 de agosto de 2021, el Consejo Político Nacional del partido, a través del senador y consejero de Educación, Comisión Electoral y Bancada del Consejo Político, Carlos Antonio Lozada, se pronunció ante la opinión pública sobre esta petición, indicando que no tienen previsto en los próximos meses realizar una Asamblea Nacional Extraordinaria, porque recientemente, en el mes de enero de 2021, realizaron una asamblea.

De suceder lo anterior, cesaría la afectación al derecho fundamental de petición, pero no de los derechos a la participación Política, dignidad humana, debido proceso, igualdad, y el derecho a la Paz, los cuales también invocamos por vía de esta acción de tutela para obtener su amparo ante la ausencia de otros mecanismos de defensa para su protección. En la actualidad son inexistentes los mecanismos judiciales para solicitar la escisión del partido en caso de que la respuesta del **Consejo Nacional de Los Comunes -CNC- del Partido Comunes** sea negativa.

En razón a lo anterior, el juez constitucional, en uso de las facultades *extra* y *ultra petita,* a fin de garantizar los derechos fundamentales infringidos con la negativa del accionado de dar respuesta al derecho de petición y que, una vez contesten, se advierta también su negativa de convocar a una Asamblea General Extraordinaria, debe oficiar al **Consejo Nacional de Los Comunes -CNC- del Partido Comunes** para que dé respuesta pronta y oportuna a lo peticionado y, de manera simultánea, se le imparta la orden de convocar a una Asamblea General Extraordinaria para que se discuta y apruebe la escisión del partido político Fuerza Alternativa del Común–FARC.

5.2. Participación Política.

Los **derechos políticos** también tienen protección especial por los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, siendo definidos así:

5.2.1. Convención Americana sobre Derechos Humanos – CADH.

a. Artículo 16. Libertad de Asociación.

1. ***Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos****, religiosos,* ***políticos****, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.*

2. ***El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.***

3. Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones legales, y aun la privación del ejercicio del derecho de asociación, a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía. (Negrilla fuera del texto)

b. Artículo 23. Derechos Políticos.

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:

a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;
b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y
c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha referido a los alcances del artículo 23 de la CADH y las obligaciones del Estado para respetarlos y garantizarlos en condiciones de igualdad, desarrollando una amplia jurisprudencia sobre el rol de estos derechos en una sociedad democrática, como se precisa en la decisiones de fondo de los Casos Yatama Vs Nicaragua, Castañeda Guzmán Vs México, San Miguel Sosa Vs. Venezuela, López Lone y otros Vs. Honduras, Tribunal Constitucional Vs. Perú, Tribunal Constitucional Vs. Ecuador, Argüelles y otros y Vs. Argentina, Cepeda Vargas Vs. Colombia, entre otros.

5.2.2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

a. Artículo 25. Derechos y oportunidades.

Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de la distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;
b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores;
c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

Existe un "marco democrático participativo" previsto en la Carta Política de 1991, conformado por el Preámbulo y los artículos 1, 2, 40, 103, 104, 105, 106, 155, 171, 176, 190, 202, 264, 299, 303 y 312, y de la inscripción del derecho de participación política dentro del derecho internacional, regulado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 23), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 25),

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial (Artículo 50), Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (artículo 42), Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la mujer (artículo 7), Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer (artículos 1, 11, 111), y Convenio sobre Pueblos indígenas y Tribales (articulo 6).

5.2.3. Constitución Política de Colombia.

a. Artículo 40. participar en la conformación, ejercicio y control del poder político.

Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:

1. Elegir y ser elegido.
2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática.
3. ***Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas.***
4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley.
5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas.
6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley.
7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse.

Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la Administración Pública. (resaltado fuera del texto)

Siendo específico e importante el artículo 40 de la Carta Política que suministra la garantía constitucional a todos los colombianos a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, lo que incluye la posibilidad de acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, con algunas excepciones; el literal c del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el literal c del artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que consagran el derecho a todos los ciudadanos del goce del derecho y oportunidad a acceder, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.

La Corte Constitucional ha definido los derechos políticos como instrumentos ciudadanos para incidir en la estructura y el proceso político facilitando la consolidación de una democracia participativa. De esta manera, el ciudadano tiene derecho no solo a conformar el poder (democracia representativa), sino también a ejercerlo y controlarlo, esto es, está llamado a hacer parte de la toma de decisiones en asuntos públicos (democracia participativa), indispensable para la efectividad de la democracia constitucional.

Debido a la importancia de los derechos políticos para la democracia, la Corte Constitucional se ha referido a esta, reconociendo su carácter fundamental en una democracia representativa.

Así mismo, en sentencia C-329 de 2003, reiteró la *ius fundamentalidad* de los derechos políticos de participación exponiendo que:

"La ***participación se establece en el ordenamiento constitucional colombiano como principio y fin del Estado, recalca igualmente que resultaría contrario al principio de democracia participativa que el legislador o las autoridades administrativas impongan cargas desproporcionadas u obstáculos irrazonables, que de otra manera hagan nugatorio el ejercicio de sus derechos políticos****" .* (Negrilla fuera del texto)

b. Artículo 107, modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2009.

Se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos, y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse*.*

En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político con personería jurídica.

Los Partidos y Movimientos Políticos se organizarán democráticamente y tendrán como principios rectores la transparencia, objetividad, moralidad, la equidad de género, y el deber de presentar y divulgar sus programas políticos.

Para la toma de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos propios o por coalición, podrán celebrar consultas populares o internas o interpartidistas que coincidan o no con las elecciones a Corporaciones Públicas, de acuerdo con lo previsto en sus Estatutos y en la ley.

En el caso de las consultas populares se aplicarán las normas sobre financiación y publicidad de campañas y acceso a los medios de comunicación del Estado, que rigen para las elecciones ordinarias. Quien participe en las consultas de un partido o movimiento político o en consultas interpartidistas, no podrá inscribirse por otro en el mismo proceso electoral. El resultado de las consultas será obligatorio.

Los directivos de los Partidos y Movimientos Políticos deberán propiciar procesos de democratización interna y el fortalecimiento del régimen de bancadas.

Los Partidos y Movimientos Políticos deberán responder por toda violación o contravención a las normas que rigen su organización, funcionamiento o financiación, así como también por avalar candidatos elegidos en cargos o Corporaciones Públicas de elección popular, quienes hayan sido o fueren condenados durante el ejercicio del cargo al cual se avaló mediante sentencia ejecutoriada en Colombia o en el exterior por delitos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales y actividades del narcotráfico o de delitos contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad.

Los partidos o movimientos políticos también responderán por avalar a candidatos no elegidos para cargos o Corporaciones Públicas de Elección Popular, si estos hubieran sido o fueren condenados durante el período del cargo público al cual se candidatizó, mediante sentencia ejecutoriada en Colombia o en el exterior por delitos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales y actividades del narcotráfico, cometidos con anterioridad a la expedición del aval correspondiente.

Las sanciones podrán consistir en multas, devolución de los recursos públicos percibidos mediante el sistema de reposición de votos, hasta la cancelación de la personería jurídica. Cuando se trate de estas condenas a quienes fueron electos para cargos uninominales, el partido o movimiento que avaló al condenado, no podrá presentar candidatos para las siguientes elecciones en esa Circunscripción. Si faltan menos de 18 meses para las siguientes elecciones, no podrán presentar terna, caso en el cual, el nominador podrá libremente designar el reemplazo.

Los directivos de los partidos a quienes se demuestre que no han procedido con el debido cuidado y diligencia en el ejercicio de los derechos y obligaciones que les confiere Personería Jurídica también estarán sujetos a las sanciones que determine la ley.

También se garantiza a las organizaciones sociales el derecho a manifestarse y a participar en eventos políticos.

Quien siendo miembro de una corporación pública decida presentarse a la siguiente elección, por un partido distinto, deberá renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones. (Negrilla fuera de texto)

c. Artículo 108, modificado por el artículo 2 del Acto Legislativo 1 de 2009.

El Consejo Nacional Electoral reconocerá Personería Jurídica a los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos. Estos podrán obtenerlas con votación no inferior al tres por ciento (3%) de los votos emitidos válidamente en el territorio nacional en elecciones de Cámara de Representantes o Senado. Las perderán si no consiguen ese porcentaje en las elecciones de las mismas Corporaciones Públicas. Se exceptúa el régimen excepcional que se estatuya en la ley para las circunscripciones de minorías étnicas y políticas, en las cuales bastará haber obtenido representación en el Congreso.

También será causal de pérdida de la Personería Jurídica de los partidos y movimientos políticos si estos no celebran por lo menos durante cada dos (2) años convenciones que posibiliten a sus miembros influir en la toma de las decisiones más importantes de la organización política.

Los Partidos y Movimientos Políticos con Personería Jurídica reconocida podrán inscribir candidatos a elecciones. Dicha inscripción deberá ser avalada para los mismos efectos por el respectivo representante legal del partido o movimiento o por quien él delegue.

Los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos también podrán inscribir candidatos.

Toda inscripción de candidato incurso en causal de inhabilidad, será revocada por el Consejo Nacional Electoral con respeto al debido proceso.

Los Estatutos de los Partidos y Movimientos Políticos regularán lo atinente a su Régimen Disciplinario Interno. Los miembros de las Corporaciones Públicas elegidos por un mismo Partido o Movimiento Político o grupo significativo de ciudadanos actuarán en ellas como bancada en los términos que señale la ley y de conformidad con las decisiones adoptadas democráticamente por estas.

Los Estatutos Internos de los Partidos y Movimientos Políticos determinarán los asuntos de conciencia respecto de los cuales no se aplicará este régimen y podrán establecer sanciones por la inobservancia de sus directrices por parte de los miembros de las bancadas, las cuales se fijarán gradualmente hasta la expulsión, y podrán incluir la pérdida del derecho de voto del Congresista, Diputado, Concejal o Edil por el resto del período para el cual fue elegido.

d. Artículo 112, modificado por el artículo 5 del Acto Legislativo 1 de 2003.

Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que se declaren en oposición al Gobierno, podrán ejercer libremente la función crítica frente a este, y plantear y desarrollar alternativas políticas. Para estos efectos, se les garantizarán los siguientes derechos: el acceso a la información y a la documentación oficial, con las restricciones constitucionales y legales; el uso de los medios de comunicación social del Estado o en aquellos que hagan uso del espectro electromagnético de acuerdo con la representación obtenida en las elecciones para Congreso inmediatamente anteriores; la réplica en los mismos medios de comunicación. (…)

5.2.4. Ley 130 de 1994.

a. Artículo 1. Derecho a constituir partidos y movimientos.

Todos los colombianos tienen derecho a constituir partidos y movimientos políticos, a organizarlos y a desarrollarlos a afiliarse y retirarse de ellos libremente y a difundir sus ideas y programas*.*

Las organizaciones sociales tienen derecho a manifestarse y a participar en eventos políticos. (...) (Negrilla fuera del texto)

b. Artículo 3. Reconocimiento de personería jurídica.

El Consejo Nacional Electoral reconocerá y otorgará personería jurídica a los partidos y movimientos políticos previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Solicitud presentada por sus directivas.
2. Copia de los estatutos.
3. Probar su existencia con no menos de cincuenta mil firmas o con la obtención en la elección anterior, de por lo menos la misma cantidad de votos o de representación en el Congreso de la República.
4. Presentar un documento que contenga la plataforma política del partido o movimiento, expresando su filosofía y principios, así como los programas y aspiraciones que lo identifiquen.

Para efectos de este artículo no podrán sumarse los votos obtenidos en circunscripción nacional con los obtenidos en circunscripciones territoriales o especiales, ni los de éstas con los de aquéllas.

El Consejo Nacional Electoral no demorará más de treinta (30) días hábiles en estudiar una solicitud de obtención de personería jurídica.

5.2.5. Ley Estatutaria 1475 de 2011.

a. Artículo 4. Contenido de los estatutos.

*Los **estatutos de los partidos y movimientos políticos contendrán cláusulas o disposiciones que los principios señalados en la ley y especialmente los consagrados en el artículo 107 de la Constitución**, en todo caso, deben contener como mínimo, los siguientes asuntos:*

*(…) 18. **Reglas de** disolución, fusión con otros partidos o movimientos políticos, o **escisión** y liquidación.* (Negrilla fuera del texto)

5.2.6. Ley Estatutaria 1909 de 2018.

a. Artículo 3. Derecho fundamental a la oposición política.

De conformidad con los artículos 40 y 112 de la Constitución Política, la oposición es un derecho fundamental autónomo que goza de especial protección por el Estado y las autoridades públicas.

b. Artículo 4. Finalidades.

La oposición política permite proponer alternativas políticas, disentir, criticar, fiscalizar y ejercer libremente el control político a la gestión de gobierno, mediante los instrumentos señalados en el presente Estatuto, sin perjuicio de los derechos consagrados en otras leyes.

5.2.7. Estatutos vigentes del partido Fuerza Alternativa del Común–FARC.

a. Artículo 7. Participación electoral.

El Partido podrá participar en los procesos electorales organizados por el Estado Colombiano. Sus candidatos serán definidos por las correspondientes instancias y órganos de la organización conforme a los lineamientos y criterios definidos por la Asamblea Nacional de los Comunes y a las definiciones de política electoral del partido adoptadas por el Consejo Político Nacional, previa consideración del Consejo Nacional de los Comunes. El Consejo Político Nacional será el órgano competente para el otorgamiento de avales para la participación de candidatos del Partido a corporaciones o cargos de elección popular, observando los principios democráticos señalados por la ley.

Parágrafo: Todo lo anterior, sin perjuicio de las reglamentaciones que fuere necesario expedir por parte del Consejo Político Nacional.

Parágrafo transitorio: Lo/as congresistas que le corresponden al partido en Senado y Cámara para el período 2018-2022, conforme al Acto Legislativo No. 3 de 2017 en desarrollo del Acuerdo de paz, serán designados por la primera Asamblea Nacional de los Comunes o mediante delegación por el Consejo Político Nacional. La integración completa de las listas a presentar para tales procesos electorales será función del Consejo Político Nacional.

b. Artículo 16. Asamblea Nacional de los Comunes.

Es la máxima instancia de dirección del Partido. Estará conformada por los delegado/as elegido/as por los Consejos locales, por al menos cinco (5) representantes de cada uno de los Consejos Territoriales, y por lo/as consejero/as nacionales en ejercicio, garantizando la representación de las mujeres y de los pueblos étnicos. La Asamblea Nacional se reunirá cada dos (2) años, pudiéndose convocar de manera extraordinaria cuando las circunstancias lo ameriten. La convocatoria a la Asamblea Nacional será realizada por el Consejo Nacional de los Comunes que esté en ejercicio. (…)

c. Artículo 22. Consejo Nacional de los Comunes.

El Consejo Nacional es el órgano de dirección partidaria durante el período comprendido entre la celebración de cada Asamblea Nacional; estará integrado por ciento once (111) miembros, garantizando la representación de las mujeres, género y diversidades sexuales, de los pueblos étnicos y de al menos un representante de cada uno de los Consejos Departamentales. Será función principal del Consejo Nacional desarrollar la política aprobada por la Asamblea Nacional y garantizar la ejecución del Plan Nacional de Acción Política (PNAP).

d. Artículo 39. Disolución, fusión, escisión y liquidación.

*Las **decisiones sobre** disolución, fusión, **escisión** y liquidación **del partido serán adoptadas por las Asamblea Nacional de los Comunes**, la cual decidirá igualmente la entidad análoga o similar al Partido que recibirá los bienes y recursos remanentes que arroje la liquidación.* (Negrilla fuera de texto)

El Derecho a la Participación Política para los firmantes de la paz se materializa no solo en la posibilidad de pertenecer a un partido político; sino también en la garantía de involucrarse en la política de forma directa, del derecho a la reincorporación como desarrollo del derecho fundamental a la participación política sin distinción de etnia, género o antecedentes, para participar en una instancia política y sin sentirse excluido; y que cuando existan intereses divergentes en el seno de la colectividad, se permita la escisión con ánimo de crear una nueva personería jurídica.

En el caso *sub lite*, finalizado el proceso de dejación de armas que previó el punto 3.2.1.1 del Acuerdo Final, en octubre de 2017 el Consejo Nacional Electoral reconoció personería jurídica al partido político que surgió de la transición de las Farc a la vida política legal, y mediante Acto Legislativo 03 de 2017 se implementó el reconocimiento de personería jurídica al partido.

El Acto Legislativo 03 de 2017 abrió un espacio de participación en la vida política del país de quienes hacen parte del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común -FARC- que surgió de la necesidad de diseñar y garantizar espacios de participación política para quienes se encuentran en tránsito hacia la legalidad, en virtud-de un acuerdo de paz-.

Además, buscó la consolidación de la paz como derecho y deber de obligatorio cumplimiento, fortaleciendo el Estado Social de Derecho, las libertades políticas y la ampliación democrática, que es producto del acuerdo firmado entre las Farc y el Gobierno Nacional. Al tener como espíritu la ampliación democrática que permita la participación de todas las visiones en el escenario político, se evita la violencia como método de acción política. Se trata de un acto legislativo que se ajusta a los tratados internacionales ratificados por Colombia y al ordenamiento interno, máxime cuando en un ambiente de fin del conflicto armado es obligación del Estado establecer las garantías

posibles para participar de la vida política del país, que desde luego incluye a los miembros de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

Bajo esta directriz la participación política de los antiguos integrantes de las Farc constituye un elemento esencial en el Acuerdo de Paz, razón por lo cual fue indispensable su consagración en el Acto Legislativo 03 de 2017. Esta reforma constitucional permitió al nuevo partido político "inscribir candidatos y listas a cargos y Corporaciones de elección popular", teniendo como única exigencia para el ejercicio de derechos activos y pasivos de participación, para aquellos que puedan estar vinculados por delitos no amnistiables, "expresar formalmente su voluntad de acogerse a los mecanismos y medidas establecidas en el Sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación (SIVJRNR)".

De ese modo, para garantizar el derecho de participación Política se nos permitió inscribir listas únicas de candidatos propios o en coalición con otros partidos políticos con personería jurídica para la circunscripción del Senado de la República y para cada una de las circunscripciones territoriales en que se elige la Cámara de Representantes. En el Senado se garantizó un mínimo de cinco (5) curules, y para la Cámara de Representantes un mínimo de cinco (5) curules.

En cumplimiento de estas previsiones contenidas en el Acuerdo Final y en el Acto Legislativo 03 de 2017, fuimos elegidos en la cumbre del Congreso fundacional para ocupar las curules que estableció el Acuerdo Final, garantizando la representación política en el Congreso de la República. La designación de los candidatos se ratificó con la participación en las elecciones populares que se llevaron a cabo en el año 2018.

El partido político en su Congreso fundacional también aprobó los estatutos, garantizando el pluralismo que dispone el artículo 1 de la Ley 1475 de 2011, y con ello, la expresión de las tendencias existentes en su interior, en particular de las minorías, como nosotros que somos expresión de afrodescendientes, mujeres, excombatientes de base, militantes no excombatientes y territorios.

Ese derecho a la participación política de las tendencias existentes, que incluye el derecho a la reincorporación y sus garantías políticas, aplicó para todos los firmantes del Acuerdo Final, esto es, cerca de 13.589 personas, y no solo para quienes son reconocidos como militantes por Consejo Político Nacional y la “oficialidad” del partido que hoy solo cuenta con menos de la mitad de los reincorporados. Conforme el censo establecido por la actual dirección en la última Asamblea Extraordinaria, apenas 6700 militantes hacen parte del partido.

Cuando se hace referencia al derecho la participación política el énfasis se debe hacer no solo respecto del ejercicio de los derechos y garantías por parte de los partidos tradicionales, sino también de los nuevos partidos y movimientos políticos que surgen después de la firma del un acuerdo de paz, en este caso el partido que surgió de la transición de las Farc a la vida política legal y que se denominó Fuerza Alternativa del Común–FARC. Dicho derecho comprende la inclusión en escenarios de la democracia.

Sin embargo, la voz de los firmantes en las diferentes instancias del Acuerdo Final hoy se encuentra privatizada por la “oficialidad” de las instancias de la estructura partidaria que define el Consejo Político Nacional del partido, dificultando que los antiguos compañeros y las nuevas generaciones lleguen a esa instancia política, situación que ha impactado negativamente en las personas que militamos con el partido. Además de la falta de garantías por no encontrar espacios democráticos, también es evidente la falta de representatividad al interior de la colectividad, y de espacios para que el debate y los análisis permitan generar consensos, todo lo cual nos ha hecho sentir excluidos políticamente.

Ante la inconformidad generada por las diferencias internas, junto con otros nueve integrantes del partido decidimos solicitar la división de la colectividad para que en Asamblea General Extraordinaria se resuelva la escisión, pero no ha sido posible que nos resuelvan la petición que radicamos el 10 de agosto de 2021.

El propósito de la escisión es garantizar la personería jurídica y las curules en el Congreso, pero lo más importante es mantener nuestro compromiso con la reincorporación política de los exguerrilleros y aunar todos los esfuerzos políticos y

jurídicos para que se garantice, sin ningún tipo de exclusiones, lo pactado en el Acuerdo Final.

Al encontramos a seis meses de las próximas elecciones legislativas y presidenciales en las que participaremos por segunda vez, resulta necesario definir la escisión del partido y la participación electoral que dispone el artículo 7 de los Estatutos del partido. En la actualidad, los estatutos establecen que el partido puede participar en los procesos electorales, y los candidatos son definidos por los órganos de la organización con previsión de los lineamientos y criterios definidos por la Asamblea Nacional de los Comunes y de las definiciones de política electoral del partido adoptadas por el Consejo Político Nacional, previa consideración del Consejo Nacional de los Comunes.

En estos casos, el Consejo Político Nacional es el órgano competente para el otorgamiento de los avales para la participación de candidatos en cargos de elección popular.

Por lo tanto, previo a los comicios es indispensable tener claridad sobre la continuidad en la colectividad o la escisión de la misma para determinar cómo se integraran las listas a presentar para el proceso electoral.

De lo contrario, nos vemos expuestos a la incertidumbre por no saber el rumbo político que tomaremos las personas que no encontramos garantías dentro de la organización ni compromiso con reincorporación política de los exguerrilleros.

Adicionalmente, para el caso particular, **el derecho a la participación política guarda estrecha relación con el derecho a la oposición política**.

Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia C-089 de 1994, señaló que:

> ***El derecho a constituir partidos y movimientos políticos, formar parte de ellos y difundir sus ideas y programas tiene la naturaleza de un derecho fundamental de origen constitucional, atribuido a todo ciudadano colombiano, con miras a que pueda participar en la conformación, ejercicio y control del poder político****. Este derecho es una manifestación activa del status de ciudadano, el cual comprende un conjunto de derechos y deberes que, en su conjunto, dan cuerpo y califican la relación de los nacionales con el poder político y describen una faceta de las personas como partícipes actuales o potenciales de la organización del Estado. La limitación del derecho analizado que se descubre en el artículo, se deriva, pues, de la relatividad de los derechos políticos que la misma Constitución establece.* (resaltado fuera del texto)

En el fallo de tutela proferido por el Consejo de Estado el 10 de marzo de 2020 a favor de la Representante a la Cámara Ángela María Robledo, amparando el derecho fundamental autónomo a la oposición política, se señaló lo siguiente:

> *Dentro de la clasificación de los derechos humanos que se acaba de enunciar, el «derecho autónomo a la oposición» puede ubicarse esencialmente en aquellos denominados de primera generación, porque está compuesto por manifestaciones de los derechos a la libertad de expresión, libre desarrollo de la personalidad, libertad de conciencia, participación en la conformación, ejercicio y control del poder político, entre otros. En todo caso, independientemente de lo anterior, el criterio de «fundamentalidad» que se le dio a ese derecho, tiene mayor relevancia" en este análisis, a fortiori, si las normas jurídicas han elevado el derecho al rango de fundamental y autónomo (…)*
>
> *La categoría de «derecho fundamental autónomo de la oposición» al que ha sido encumbrado el ejercicio efectivo del disenso, responde a la necesidad de garantizar en el ordenamiento jurídico colombiano un amplio marco de la democracia política, el cual facilita el despliegue de antagonismos, no como enemigos, sino como contradictores políticos, con la posibilidad constitucional de que los actores políticos puedan utilizar los nuevos escenarios para desplegar estrategias publicas y con reglas de juego que garantizan la solución pacifica de las grandes discrepancias nacionales e intereses contrapuestos (…)*

Este marco autoriza al juez de tutela para analizar el caso con los parámetros antes indicados puesto que se trata de un derecho fundamental autónomo que «goza de especial protección por el Estado y las autoridades publicas».

De igual manera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resalta la obligación que tienen los estados de permitir y garantizar la organización de todos los partidos políticos y otras asociaciones, en términos de que el libre ejercicio del derecho de participación requiere la plena vigencia de la libertad de expresión, asociación y reunión, y que los limites a este derecho por causas distintas a las establecidas en los acuerdos resultaría violatoria de las obligaciones internacionales del Estado.

En el caso de Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia, la Corte IDH enfatizó en que *"las voces de oposición resultan imprescindibles para una sociedad democrática, sin las cuales no es posible el logro de acuerdos que atiendan a las diferentes visiones que prevalecen en una sociedad.* ***Por ello, la participación efectiva de personas, grupos y organizaciones y partidos políticos de oposición en una sociedad democrática debe ser garantizada por los Estados, mediante normativas y practicas adecuadas que posibiliten su acceso real y efectivo*** *a los diferentes espacios deliberativos en términos igualitarios, pero también mediante la adopción de medidas necesarias para garantizar su pleno ejercicio, atendiendo la situación de vulnerabilidad en que se encuentran los integrantes de ciertos sectores o grupos sociales"* (negrilla propia)

La Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que el ejercicio efectivo de los derechos políticos constituye un fin en sí mismo y, a la vez, un medio fundamental que las sociedades democráticas tienen para garantizar los demás derechos humanos previstos en la Convención.

En el mismo sentido, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos identifican al ciudadano como sujeto de tres aspectos que revisten los derechos políticos, a saber: (i) la participación en la gestión de los asuntos públicos, (ii) la participación en elecciones-votos y candidatura, (iii)y el acceso a funciones publicas, como lo indica en su articulo 23.

Finalmente, el derecho de participación política se relaciona con el **derecho a constituir partidos y movimientos políticos**. Este derecho forma parte de un derecho fundamental de origen constitucional, atribuido a todo ciudadano con miras a que pueda participar en la conformación, ejercicio y control del poder político.

En nuestro caso, dando aplicación al derecho a la oposición política y al derecho a constituir partidos políticos, no cabe duda que esta condición reviste de amplio valor y protección legal y constitucional en cuanto el Partido Farc se declaró en oposición al actual Gobierno Nacional, acorde a la reglamentación contenida en este estatuto, y la escisión solicitada pretende la creación de otro partido de oposición política con las mismas garantías que estableció el Acuerdo Final, para garantizar nuestros derechos a la participación política.

Así las cosas, en ejercicio de dichos derechos, una vez aprobada la escisión las personas que nos encontramos en proceso de reincorporación podemos continuar participando en la conformación, ejercicio y control del poder político, así como hacer uso de nuestra ideología de oposición como un derecho que no se circunscribe a nosotros sino que se extiende a toda la sociedad civil.

Lo anterior, teniendo en cuenta que somos una agrupación política que se declaró en oposición al gobierno nacional, acorde a la reglamentación contenida en el Estatuto de Oposición, pero que en ningún momento nos encontramos limitados para obtener la escisión del partido al cual pertenecemos y crear otros partidos políticos en ejercicio de nuestros derecho políticos.

5.3. Dignidad humana en relación con la garantía de derechos priorizados en el Acuerdo Final de Paz.

Solicitamos sea amparado el derecho fundamental a la vida digna[2] de las personas referenciadas, este concepto que es sinónimo de decoro, buen vivir[3], honorabilidad, bienestar, prosperidad, felicidad, vida íntegra. Condición que se le atribuye a la persona humana y a los seres vivos bajo un tratamiento especial, es una actitud ética; a su vez es un derecho transversal de nuestro estado social de derecho, así lo establece el artículo 1 de la Constitución Política:

> *Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista,* ***fundada en el respeto de la dignidad humana,*** *en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. (*negrilla fuera de texto).

La dignidad es a su vez principio, valor y derecho, se cohesiona con las tesis de la inescindibilidad o de la unidad de los derechos, y de la conexidad de todos los derechos con todos, que es diferente a la formulación y aplicación histórica o generacional, que es la tesis predominante en la teoría jurídica nacional.

Este derecho, tiene una relación con el derecho a la intimidad y a la honra, en el entendido de que las humillaciones humanas son todos los actos que ofendan, denigren, postrar, arrastrar por el suelo, en privado o públicamente y en todas las formas de relacionamiento humano, con conclusión vuelve objeto al sujeto, que es la indignidad en su máxima expresión. Esta interpretación la ratifica la Sentencia T-695/17:

> *7.8 Al respecto, se debe precisar que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado la dignidad humana desde tres dimensiones: (i) el derecho a vivir como se quiera, que consiste en la posibilidad de desarrollar un plan de vida de acuerdo a la propia voluntad del individuo; (ii) el derecho a vivir bien, que comprende el contar con unas condiciones mínimas de existencia; y (iii)* ***el derecho a vivir sin humillaciones, que se identifica con las limitaciones del poder de los demás****; así, las afectaciones al buen nombre, a la intimidad y a la honra de las personas, a su vez transgreden el derecho a la dignidad humana, desde el ámbito del derecho a vivir sin humillaciones o ataques a la integridad del individuo*. (Negritas propias).

Para el caso concreto se configura la indignidad por cuanto las actuaciones de los accionados se empeñan en obstaculizar el ejercicio pleno de derechos constitucionales generales como los propios surgidos del acuerdo de paz para los firmantes en proceso de reincorporación a la vida civil en materia política, económica y social.

Resulta una afrenta a la dignidad no sólo de nosotros como accionantes, sino del colectivo de la sociedad colombiana, que tras las firma de un acuerdo final, en el cual se comprometió el Estado a brindar garantías de participación política a cambio del desarme de la fuerza armada irregular, entre otros compromisos, para la terminación del conflicto y la consolidación de una paz estable y duradera, no se unifiquen esfuerzos para el cumplimiento sin obstáculos de lo acordado, viendo los firmantes del acuerdo la promesa de la reincorporación digna en medio de un país reconciliado como simple burla o simulación. Sobre esto se manifestó el ya citado Tribunal Administrativo de Cundinamarca en sentencia del 10 de diciembre de 2018 dentro del radicado 201800370-1:

> *Esto, con mayor razón, si se tiene en cuenta que las previsiones de los actos legislativos Nos. 1 y 3 de 2017 apuntan en dos direcciones. La primera de ellas, que la participación política del partido FARC constituye uno de los compromisos de los acuerdos de paz suscritos con dicha ex-guerrilla. La segunda, que* ***las acciones de los distintos órganos del Estado deben desplegarse, en***

[2] Sentencia SU-062 de 1999: "2. El derecho fundamental a la vida en condiciones dignas. (...) La dignidad, como es sabido, equivale al merecimiento de un trato especial que tiene toda persona por el hecho de ser tal. Equivale, sin más, la facultad que tiene toda persona de exigir de los demás un trato acorde con su condición humana. De esta manera, la dignidad se erige como un derecho fundamental, de eficacia directa, cuyo reconocimiento general compromete el fundamento político del Estado colombiano".

[3] Álvaro García Linera Gabriela Rivadeneira Burbano Emir Sader Ramón Torres Galarza. Democracias En Revolución y Revolución en Democracias. Centro de Investigaciones Sociales (CIS). La Paz - Bolivia. Mayo 2015. Pág. 70. Esto alude fundamentalmente a la ética individual y pública, a los principios del no robar, no mentir y no ser ociosos: ama suwa, ama llulla, ama quilla. En ellos tal vez se encuentra la mejor síntesis de una simple complejidad del buen gobierno, de las democracias para el Buen Vivir.

***relación con dicha organización, en la línea de procurar garantías suficientes para que los compromisos de participación de la ex-guerrilla en la vida institucional sean efectivamente cumplidos**.*

Esta circunstancia no implica, sin perjuicio de lo que otros órganos del Estado conceptúen o resuelvan sobre el particular, que la participación del partido político FARC deba hacerse con desmedro de las demás normas que son aplicables a la generalidad de los congresistas, porque la suscripción de los acuerdos de paz y la incorporación de los miembros de la ex-guerrilla a la vida institucional -pese a la existencia de normas especiales- implica su cobijo por la totalidad del ordenamiento jurídico aplicable a los demás sujetos de derecho.

No obstante esta situación que corresponde a los miembros de la ex-guerrilla en el sentido de que combinan para su participación política normas especiales con otras de general aplicación. (Subrayado y negrita propia)

La corte constitucional, en sentencia T-291-16 MP Alberto Rojas Ríos, define la dignidad humana como principio y como Derecho Fundamental así:

La Corporación ha identificado tres lineamientos claros y diferenciables: (i) la dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características; (ii) la dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia; y (iii) la dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral o, en otras palabras, que los ciudadanos puedan vivir sin ser sometidos a cualquier forma de humillación o tortura. Frente a la funcionalidad de la norma, este Tribunal ha puntualizado tres expresiones de la dignidad humana entendida como: (i) principio fundante del ordenamiento jurídico y por tanto del Estado, y en este sentido la dignidad como valor; (ii) principio constitucional; y (iii) derecho fundamental autónomo.

[...] Los artículos 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), establecen que los Estados parte, entre ellos el colombiano, se obligan a garantizar a todas las personas el pleno ejercicio de los derechos consagrados en dichos instrumentos sin realizar discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

[...] Cualquier restricción discriminatoria del goce de los derechos humanos consagrados en los instrumentos internacionales y regionales aplicables y en la jurisprudencia de las cortes internacionales y regionales de derechos humanos, en especial los aplicables a las minorías o grupos en condiciones de vulnerabilidad y sujetos a discriminación.

En el marco de los hechos que rodean la presente acción de protección de derechos fundamentales, y en general de todas las actuaciones que vinculen excombatientes firmantes del acuerdo de paz, se debe garantizar de la mejor manera la aplicación del fin que se propusieron los acuerdos de paz con la ex-guerrilla y que subyace al sentido de la formas de participación política, civil y social que se garantizan en los actos legislativos Nos. 1, 2 y 3 de 2017.

Lo que se convino con el Acuerdo Final fue que una vez finalizado el proceso de dejación de armas por parte de las FARC-EP, se constituiría el partido político y el Congreso de la República, como máximo órgano de la representación popular, sería el que sirviera de escenario para la promoción de su plataforma ideológica y de un legal ejercicio de la oposición con todas las garantías que se requieran. Pero parece que no hay respeto por las opiniones políticas, lo que ha generado una estigmatización, persecución política por nuestras opiniones críticas y exclusión del proceso de reincorporación a los firmantes del Acuerdo Final.

Es prueba de lo anterior, que desde el año 2020 una Comisión Nacional de Ética no registrada ante las autoridades electorales hayan iniciado múltiples procesos de

investigación y sanción contra diversos militantes de dirección nacional, por dar a conocer a la opinión pública nuestros puntos de vista y posturas políticas. Entre los casos que vinculaban incluso al exintegrante del Secretariado del Estado Mayor Central, Bertulfo Álvarez (q.e.p.d.), brilló la ausencia de garantías que ha obligado a varios a los procesados a acudir a autoridades judiciales y electorales.

En febrero de 2021 tuvimos conocimiento de los procesos disciplinarios que inició la Comisión Nacional Ética Disciplinaria del Partido- FARC en contra de los senadores Simanca y Zúñiga, presuntamente por rendir declaraciones públicas que perjudican a la colectividad. Únicamente por mostrar la divergencia respecto de las decisiones adoptadas por el partido de citar a Asamblea desconociendo los estatutos y siendo que, lo refrendamos a través de acción de Revocación Directa interpuesta el 18 de enero de 2021 contra la decisión adoptada en el VII Pleno de la colectividad. Además, que desatendiendo el estatuto se excluyó a un gran sector de copartidarios que corresponde a los fundadores del partido quienes asistían con derecho propio.

Frente a esas investigaciones disciplinarias, específicamente, frente a la expulsión del partido de Benedicto De Jesús González Montenegro en hechos ocurridos el 12 de diciembre del 2020, impidiéndosele ese día ingresar al séptimo pleno del Consejo Nacional de los Comunes, el Consejo Nacional Electoral dejó sin efecto la decisión adoptada por la Comisión Nacional Ética Disciplinaria del Partido-FARC- y por el Consejo Político Nacional, en cuanto al procedimiento disciplinario adelantado en contra de Benedicto De Jesús González Montenegro, al separarlo como militante del partido por la presunta violación del artículo 13 de los Estatutos y 3 del Código de Ética. Para el CNE el competente para adelantar los procesos disciplinarios de los militantes es la Comisión Departamental y no la Comisión Nacional Ética Disciplinaria, de conformidad con el procedimiento interno de las comisiones de ética y disciplina del Partido Fuerza Alternativa del Común –FARC.

Así mismo, en su decisión el Consejo Nacional Electoral ordenó “al partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC hoy Partido Comunes, remitir al órgano competente esta decisión para que determine si las conductas de los miembros de la Comisión Ética-Disciplinaria Nacional y de los miembros del Consejo Político Nacional se realizaron de forma correcta conforme a la normativa de la Organización Política”.

Pero Benedicto De Jesús González Montenegro no ha sido el único expulsado del partido, también se ha excluido a un gran sector de copartidarios que corresponden a los fundadores del partido y quienes asistían por derecho propio.

Dicha situación redunda en la violación de la dignidad humana de quienes formamos parte de la firma e implementación del Acuerdo Final, lo que hace necesario acotar que la implementación del Acuerdo Final no se puede traducir en el ejercicio del derecho en detrimento de los derechos de los excombatientes en proceso de reincorporación, sino que su adopción debe asegurar el goce efectivo e inmediato del derecho a la vida en condiciones de dignidad.

En atención a los hechos acaecidos, era necesario considerar apartarnos del partido a fin de garantizar y salvaguarda nuestra vida y seguridad personal. De ahí que presentáramos la solicitud de escisión del partido, esperando que la misma sea aprobada.

5.4. Debido Proceso.

El derecho al debido proceso es un derecho humano y fundamental definido por el sistema regional y universal de derechos humanos así:

5.4.1. Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

a. Artículo 8. Garantías Judiciales.

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y

obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. (negrilla fuera de texto).

b. Artículo 25. Protección Judicial

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

2. Los Estados partes se comprometen:
a. a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;
b. a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y
c. a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

5.4.2. Declaración Universal de Derechos Humanos.

a. Artículo 8.

Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.

b. Artículo 10.

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.

5.4.3. Constitución Política de Colombia.

a. Artículo 29. Debido proceso.

El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. (negrilla fuera de texto)

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.

La actitud renuente del partido de no convocar a una Asamblea General Extraordinaria para discutir la escisión del partido, tal y como lo ha hecho saber a la opinión pública, ha suscitado una serie de circunstancias anómalas, claramente violatorias del debido proceso, entre ellas, no dar respuesta al derecho de petición formulado el 10 de agosto de 2021 para informar de la intención del partido de no convocar a una Asamblea especificando de manera clara y precisa las razones de su negativa.

Esta irregularidad repercute negativamente en nuestro derecho al debido proceso, por un lado, porque las decisiones que adopte el partido antes de darlas a conocer a la

opinión pública, deben hacerlas saber a las personas interesadas, máxime cuando la información se solicita por escrito haciendo uso del derecho de petición que consagra la Constitución Política.

Por otro lado, si con estas declaraciones públicas el partido pretende anticiparse a una posible decisión de no escindir el partido y para ello se escuda en el hecho de que no convocarán a una Asamblea porque recientemente celebraron una, es la oportunidad para precisarle que antes de adoptar una decisión se debe agotar el trámite señalado en los Estatutos del partido, a fin de garantizar nuestro derecho al debido proceso.

Así, al revisar detenidamente el procedimiento que establece los Estatutos podemos encontrar que el artículo 39 señala que "***las decisiones sobre*** *disolución, fusión,* ***escisión*** *y liquidación d****el partido serán adoptadas por las Asamblea Nacional de los Comunes***", (negrilla fuera del texto). Luego, entonces, tratándose la petición sobre la escisión del partido de que trata la norma transcrita, necesariamente se debe convocar a una Asamblea Nacional Extraordinaria, tal como lo que prevé el artículo 21 ibídem, norma que permite que, aunque la "*Asamblea Nacional se reunirá cada dos (2) años, [se puede]* ***convocar de manera extraordinaria cuando las circunstancias lo ameriten*****"** (negrilla fuera del texto), cuya "***convocatoria a la Asamblea Nacional será realizada por el Consejo Nacional de los Comunes*** *que esté en ejercicio"* (negrilla fuera del texto).

El artículo 22 ibídem, dispone que "*el* ***Consejo Nacional es el órgano*** *de dirección partidaria durante el período comprendido entre la celebración de cada Asamblea Nacional;* ***estará integrado por ciento once (111) miembros****"* (negrilla fuera del texto).

En este caso, como las circunstancias ameritan la celebración de una Asamblea Nacional Extraordinaria, por tratarse nada más y nada menos de la escisión del partido, es deber del el Consejo Nacional de los Comunes convocar a una asamblea y hacer presencia con sus 111 miembros para debatir y aprobar la división que se pretende.

Agotando el trámite anterior, puede cesar la afectación al derecho fundamental el debido proceso.

5.5. Igualdad.

El derecho a la igual es otro derecho humano que demandamos, concebido por los instrumentos internacionales así:

5.5.1. Convención Americana sobre Derechos Humanos.

a. Artículo 24. Igualdad ante la Ley

Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.

5.5.2. Declaración Universal de Derechos Humanos

a. Preámbulo

(...) Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad;

b. Artículo 10

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.

5.5.3. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

a. Artículo 3.

Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto.

5.5.4. Constitución Política.

a. artículo 13. Igualdad.

Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, ***recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación*** *por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan*. (negrilla fuera del texto)

La Corte Constitucional en Sentencia C-178 de 2014 desarrolla el principio de Igualdad en los siguientes términos:

La Sala recuerda que este principio es un mandato complejo en un Estado Social de Derecho. De acuerdo con el artículo 13 Superior, comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley, relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las personas; (ii) ***la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de distinciones irrazonables****; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad ante circunstancias fácticas desiguales.*

[...] *El principio de igualdad posee un carácter relacional, lo que significa que deben establecerse dos grupos o situaciones de hecho susceptibles de ser contrastadas, antes de iniciar un examen de adecuación entre las normas legales y ese principio. Además, debe determinarse si esos grupos o situaciones se encuentran en situación de igualdad o desigualdad desde un punto de vista fáctico, para esclarecer si el Legislador debía aplicar idénticas consecuencias normativas, o si se hallaba facultado para dar un trato distinto a ambos grupos; en tercer término, debe definirse un criterio de comparación que permita analizar esas diferencias o similitudes fácticas a la luz del sistema normativo vigente; y, finalmente, debe constatarse si (i) un tratamiento distinto entre iguales o (ii) un tratamiento igual entre desiguales es razonable. Es decir, si persigue un fin constitucionalmente legítimo y no restringe en exceso los derechos de uno de los grupos en comparación.* (negrilla fuera del texto)

5.5.5. Ley Estatutaria 1475 de 2011.

a. Artículo 1. Principios de organización y funcionamiento

Los partidos y movimientos políticos se ajustarán en su organización y funcionamiento a los principios de transparencia, objetividad, moralidad, equidad de género y el deber de presentar y divulgar sus programas políticos de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, en las leyes y en sus estatutos.

(…) 2. Igualdad. Se entiende por igualdad la exclusión de toda discriminación o privilegio por razones ideológicas, económicas, sociales, de sexo, o de raza, en los procesos de participación en la vida del partido o movimiento.

Consideramos que en el caso en cuestión se ha vulnerado el derecho fundamental a la igualdad, ya que se tienen antecedentes con elementos fácticos similares, pero que tuvieron resolución distinta por parte de otro partido.

Mediante Resolución No. 1291 del 21 de abril de 2021 el Consejo Nacional Electoral decidió sobre el reconocimiento de personería jurídica solicitado por el partido DIGNIDAD dentro del expediente con radicado No. 11861-20.

Los argumentos que consideró el Consejo Nacional Electoral para adoptar la decisión de reconocer personería jurídica al nuevo partido DIGNIDAD se fundamentaron en que el 24 de octubre de 2020 se celebró Congreso Nacional Extraordinario del partido Polo Democrático Alternativo al interior del cual se aprobó "la declaratoria de escisión, con el lleno de requisitos señalados en los Estatutos del Polo Democrático". La solicitud de escisión la propusieron Jorge Enrique Robledo Castillo, el Senador; Jorge Gómez Gallego, representante a la Cámara; entre otras personas.

Con base en la decisión adoptada por el Congreso, Jorge Enrique Robledo, Representante a la Cámara por el Departamento de Antioquia, Jorge Alberto Gómez, y los ciudadanos Leonidas Gómez Gómez, Alba Luz Pinilla, Gustavo Rubén Triana Suárez, en representación del sector escindido del Polo Democrático Alternativo, presentaron ante el CNE la solicitud de reconocimiento de personería jurídica al nuevo partido político que denominaron DIGNIDAD y de los derechos que trae consigo dicho reconocimiento.

Obsérvese cómo la colectividad escindida del partido Polo Democrático por acuerdo del partido obtuvieron la división de este y, posteriormente, el reconocimiento de personería jurídica del nuevo partido político DIGNIDAD por parte del Consejo Nacional Electoral.

Si en el marco de la independencia y autonomía de los partidos políticos reconocida por la Constitución Político el Congreso Nacional Extraordinario del partido Polo Democrático le aprobó la escisión solicitada por sus militantes, ¿por qué el Consejo Nacional de Los Comunes -CNC- del Partido Comunes no procede en los mismos términos frente a la solicitud de escisión que presentaron sus miembros?, ¿Cuáles son las razones para no convocar a una Asamblea General Extraordinaria para que se discuta y apruebe la escisión del partido político Fuerza Alternativa del Común–FARC?, máxime cuando se cumple el presupuesto que establece el numeral 18 del artículo 4 de la Ley 1475 de 2011 en relación con la indicación en los Estatutos de los partidos políticos de las reglas de disolución, fusión con otros partidos o movimientos políticos, o escisión y liquidación. El artículo 39 de los Estatutos de los Comunes establece que "***las decisiones sobre*** *disolución, fusión,* ***escisión*** *y liquidación* ***del partido serán adoptadas por las Asamblea Nacional de los Comunes****, la cual decidirá igualmente la entidad análoga o similar al Partido que recibirá los bienes y recursos remanentes que arroje la liquidación*". (Negrilla fuera del texto)

Esta situación no refleja nada diferente a una violación al derecho a la igualdad por parte del partido político Fuerza Alternativa del Común–FARC, quienes le están dando un trato desigual y discriminatorio a sus militantes por razones ideológicas, sociales, sexo y raza, no solo en los procesos de participación en la vida del partido, sino que también en la posibilidad de retirarse del partido para conformar otro. El partido no está permitiendo el goce pleno de los derechos en el escenario político de los militantes, tanto a nivel individual como colectivo, reconocidos en la Constitución Política, leyes y en los tratados internacionales.

Al respecto, es posible mencionar tanto las normas de derecho interno como las contenidas en instrumentos internacionales en materia del derecho de igualdad y no discriminación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Ricardo Canese Vs. Paraguay señaló que las restricciones de las que trata el inciso 2 del articulo 23 de la convención, no deben ser discriminatorias, deben basarse en criterios razonables, atender a un propósito útil y oportuno que se torne necesario para satisfacer un interés publico imperativo, y ser proporcional a ese objetivo. Cuando hay varias opciones para alcanzar ese fin, debe escogerse la que restrinja menos el derecho protegido, y que, además, guarde mayor proporcionalidad con el propósito que se persigue.

Ese principio de no discriminación, podemos decir que es un requisito importante para la realización de cualquier proceso de participación política, a fin de evitar que determinados sectores de la sociedad sean excluidos. Los Estados tienen la obligación de no introducir en su ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias, eliminar las regulaciones de carácter discriminatorio, combatir las practicas de este carácter y establecer normas y otras medidas que reconozcan y aseguren la efectiva igualdad ante la ley de todas las personas. *Para la Corte solo se asegura el derecho a la participación política sin discriminación cuando el Estado genere las condiciones y mecanismos óptimos los dichos derechos políticos puedan ser ejercidos de forma efectiva, respetando el principio de igualdad y no discriminación. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Yatama. Sentencia del 23 de junio del 2005, párrafo 195.*

Así las cosas, en aras de garantizar la participación política en igualdad de condiciones de los pueblos étnicos, las mujeres y las diversidades, las personas en reincorporación y, en general, a las nuevas generaciones que tengan la intención de participar en una instancia política sin sentirse excluidos, se hace necesario que se igualen las condiciones para nosotros y que el partido acceda a celebrar la Asamblea General extraordinaria para discutir y aprobar la escisión solicitada.

5.6. Derecho a la Paz en relación con la Reincorporación Política.

El derecho a la paz se encuentra reconocido como un derecho humano internacionalmente, de esta manera:

5.6.1. Declaración Universal de los Derechos Humanos.

a. Preámbulo

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana;

b. Artículo 28

Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos.

5.6.2. Resolución 5 (XXXII) de la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, proferida el 27 de febrero de 1976

(...) Toda nación y todo ser humano, sin importar su raza, conciencia, lenguaje o sexo, tiene el derecho inherente a vivir en paz. El respeto a ese derecho, así como a los otros derechos humanos, es el interés común de toda la humanidad y una condición indispensable para el avance de todas las naciones, grandes y pequeñas, en todos los campos (...)

5.6.3. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

a. Preámbulo

Los Estados Partes en el presente Pacto,
Considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables,

5.6.4. Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz.

La Asamblea General,
Reafirmando que el propósito principal de las Naciones Unidas es el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales,
Teniendo presentes los principios fundamentales del derecho internacional establecidos en la Carta de las Naciones Unidas,

Expresando la voluntad y las aspiraciones de todos los pueblos de eliminar la guerra de la vida de la humanidad y, especialmente, de prevenir una catástrofe nuclear mundial, Convencida de que una vida sin guerras constituye en el plano internacional el requisito previo primordial para el bienestar material, el florecimiento y el progreso de los países y la realización total de los derechos y las libertades fundamentales del hombre proclamados por las Naciones Unidas, Consciente de que en la era nuclear el establecimiento de una paz duradera en la Tierra constituye la condición primordial para preservar la civilización humana y su existencia, Reconociendo que garantizar que los pueblos vivan en paz es el deber sagrado de todos los Estados,

1. Proclama solemnemente que los pueblos de nuestro planeta tienen el derecho sagrado a la paz;

2. Declara solemnemente que proteger el derecho de los pueblos a la paz y fomentar su realización es una obligación fundamental de todo Estado;

3. Subraya que para asegurar el ejercicio del derecho de los pueblos a la paz se requiere que la política de los Estados esté orientada hacia la eliminación de la amenaza de la guerra, especialmente de la guerra nuclear, a la renuncia del uso de la fuerza en las relaciones internacionales y al arreglo de las controversias internacionales por medios pacíficos de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas;

4. Hace un llamamiento a todos los Estados y a todas las organizaciones internacionales para que contribuyan por todos los medios a asegurar el ejercicio del derecho de los pueblos a la paz mediante la adopción de medidas pertinentes en los planos nacional e internacional.

5.6.5. Constitución Política de Colombia.

a. Artículo 22.

La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.

El artículo 22 de la Constitución Política de Colombia consagra que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Como derecho tiene una dimensión colectiva que le asiste a toda la población colombiana y a la fuerza política que, creyendo en la institucionalidad colombiana, dejó las armas para someterse a las reglas de la democracia. También establece que las autoridades tienen la obligación de garantizar y los ciudadanos el deber de promoverla.

Visto así, la paz tiene diferentes connotaciones de la carta política en su conjunto, al ser (i) valor fundante y sustento de los derechos fundamentales, (ii) fin esencial del ordenamiento jurídico, (iii) principio que orienta las actuaciones de las autoridades públicas, (iv) derecho y deber de todos los habitantes y las autoridades del Estado, como lo dispone la Sentencia C-048 de 2011 (M.P. Eduardo Montealgre Lynett).

Por su parte, la jurisprudencia en materia constitucional, ha señalado que la paz adquiere unas obligaciones particulares para el Estado, que deben ejecutar en “al menos tres aspectos definidos: (i) un deber estatal de diseño e implementación de acciones, normativas y, en general, el logro de la convivencia pacífica; (ii) un deber social de preferir a la solución pacífica como mecanismo exclusivo y constitucionalmente admisible de resolución de las controversias; y (iii) el logro progresivo de la plena vigencia de los derechos fundamentales, lo cual es un presupuesto tanto para la paz como para la vigencia del orden democrático, concebido desde una perspectiva material (Sentencia C-379 de 2016. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).

Si se toman en consideración los anteriores aspectos, encontramos que la paz, sin lugar a dudas, es un precepto por cuya culminación real y efectiva deben propender decididamente tanto el Estado, en su conjunto de instituciones, como el conjunto de la ciudadanía. La jurisprudencia constitucional ha señalado de manera unívoca que, dentro de un marco de justicia transicional, es constitucionalmente válido adoptar las medidas necesarias para poner fin al conflicto (Sentencia C-408 de 2016. MP. Gloria Estella Ortiz

Delgado), lo cual explica la relevancia de la garantía del acceso al derecho a la reincorporación política en función de evitar nuevos conflictos.

Cuando existen barreras para el acceso al ejercicio de los derechos de participación y reincorporación política, se vulnera el Acuerdo Final y genera desconfianza e inseguridad política que pueden provocar el abandono del compromiso de paz por parte de las personas en proceso de reincorporación y las nuevas generaciones.

No se puede perder de vista que la reincorporación desarrolla el derecho fundamental a la participación política de los firmantes de la paz. Ese proceso de reincorporación se considera integral en su dimensión político, económico, social y de seguridad, lo cual requiere de medidas que garanticen la participación de los excombatientes en todos los escenarios de la sociedad civil y la política, en el marco de la legalidad. La creación de esas condiciones estructurales que hagan posible el cumplimiento de los fines del Acuerdo Final, tanto de su componente de reincorporación como de seguridad, es lo que permite brindar protección a los excombatientes.

Fue el mismo Acuerdo Final que en el Punto 3.4.7.4, dentro del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, dispuso de la implementación de un programa de protección integral que tiene como objetivo proteger a las y los integrantes del nuevo partido o movimiento político que surgió del tránsito de las Farc a la actividad legal, así como a los antiguos integrantes que se reincorporen a la vida civil y a sus familias de acuerdo con el nivel de riesgo.

Para la ejecución del programa de protección integral se requirió de la implementación de medidas materiales de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección y la Policía Nacional, las cuales fueron desarrolladas por el Decreto 299 de 2017. La misma norma creó el Programa Especial de Protección de la Unidad Nacional de Protección y le otorgó representación en su Mesa Técnica de Seguridad y Protección a cinco (5) representantes del partido Farc.

Un sinnúmero de excombatientes han ingresado a la Unidad Nacional de Protección con el propósito de resguardar a los miembros del partido Fuerza Alternativa del Común–FARC. No obstante, continúan las amenazas de seguridad en contra de los compañeros excombatientes y, en general, no encontramos garantías para la protección de los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal, a la seguridad y a la paz, de quienes estamos en proceso de reincorporación a la vida civil política, derechos estos que afrontan una grave crisis humanitaria porque se han visto amenazados ante la situación de riesgo para los excombatientes en proceso de reincorporación y la ausencia de medidas efectivas de protección y reincorporación.

Si no cesa la violencia contra los líderes sociales y los excombatientes, Colombia no logrará plenamente la paz estable y duradera que desarrolla el Acuerdo Final.

Inclusive, ante el incumplimiento del Acuerdo Final en materia de seguridad, en la Corte Constitucional está en trámite acción de tutela con acumulación de los expedientes No. T-7.987.084, T-7.987.142, T-8.009.306 y T-8.143.584 AC, de conocimiento de la M.P. Cristina Pardo Schlesinger, al interior de los cuales se pretende que la Corte declare el Estado de Cosas Inconstitucionales en el marco de la garantía colectiva del derecho a la paz sostenible y duradera. Los accionantes acudieron a esta herramienta de origen jurisprudencial en aras de proteger los derechos fundamentales de los excombatientes en proceso de reincorporación ante la ausencia de garantías para el ejercicio de sus derechos y la precaria implementación del componente de seguridad que pone en riesgo la vida e integridad personal de la población firmante del Acuerdo Final.

En garantía de sus derechos solicitan a la Corte que inste a las entidades accionadas para que, en dentro de la órbita de sus competencias y en cumplimiento de sus deberes que guardan relación directa con la implementación efectiva de los compromisos adquiridos con el Acuerdo Final, verifiquen la gravedad de la situación y diseñen planes de acción para superarla, priorizando a las personas amenazadas y/o en riesgo sobre su vida e integridad personal.

Durante el período probatorio, en sede de revisión, la Corte indagó a las autoridades vinculadas. Revisadas las respuestas recibidas la Corporación consideró que era

necesario profundizar algunos aspectos técnicos necesarios para la decisión final, en razón a la complejidad, el interés nacional y la trascendencia que reviste.

Fue así que mediante Auto 584 de 2021 programó una sesión técnica virtual para el día 13 de septiembre de 2021 a partir de las 8:00 a.m., en la que escuchó a cada parte convocada para que respondiera las preguntas que le fueron formuladas previamente dentro de cada eje temático.

De igual manera, el 15 de septiembre de 2021 a partir de las 2:00 p.m., en las instalaciones de la Cámara de Representantes se llevó a cabo debate de control político entre la Bancada de los Comunes y el Gobierno Nacional, ante el incumplimiento del Acuerdo Final y la posible configuración del Estado de Cosas Inconstitucionales.

Puesta de presente la anterior situación, obsérvemos que en el marco de la garantía colectiva del derecho a la paz, en relación con la implementación efectiva de los compromisos adquiridos en el Acuerdo Final, la formalización de la escisión del partido con reconocimiento en el ordenamiento jurídico colombiano, permitirá mantener nuestro compromiso con la paz y la reincorporación política de los excombatientes, entre los que se encuentran: adoptar medidas para combatir y prevenir la estigmatización de la que somos víctimas y que genera un peligro para nuestra vida e integridad, cuando nuestra labor se orienta a ejercer la defensa de los derechos humanos como signatarios del Acuerdo Final; agilizar y garantizar el proceso de reincorporación política; y junto con el Gobierno Nacional adoptar medidas de seguridad con un enfoque jurídico y económico, de lucha contra la estructuras paramilitares y disidencias de las Farc, y de participación política de los reincorporados, para la protección de nuestros derechos fundamentales a a la seguridad e integridad personal y a la paz.

Estos aspectos actualmente no son del interés de las instancias partidarias, quienes no están ofreciendo garantías para contrarrestar estas situaciones que afectan nuestros derechos como reincorporados, por lo que de permitirse su continuidad se agudizará más la reactivación del conflicto en muchas zonas del país aumentando el riesgo no solo para nosotros, sino también para los líderes sociales y la comunidad.

Así las cosas, atendiendo a lo pactado en el Acuerdo Final y al desarrollo normativo y jurisprudencial en materia de paz, continuar obstruyendo el acceso a la reincorporación política e integral con afectación de otros derechos fundamentales, por vía de la negativa del partido para convocar a una Asamblea Nacional Extraordinaria y resolver la escisión, constituye una vulneración al derecho fundamental y colectivo a la Paz pactada entre el Estado Colombiano y los miembros de las Farc, en concordancia con el bloque de constitucionalidad establecido en los artículos 53, 93, 94, 102.2 y 214 de la Constitución Política de Colombia y los Actos Legislativos 2 y 3 de 2017.

VI. COMPETENCIA

Es usted señor Juez Penal Municipal competente para conocer del asunto por la naturaleza de los hechos, por tener jurisdicción en el domicilio de la entidad accionada y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021, que en su artículo 1 dispone: ” *1. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden departamental, distrital o municipal y* ***contra particulares serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces Municipales***”.

VII. JURAMENTO

Manifiesto, bajo la gravedad del juramento, que no hemos interpuesto otra acción de tutela por los mismos hechos y derechos aquí relacionados, ni contra la misma autoridad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 y 38 del Decreto 2591 de 1991.

VIII. PRUEBAS

Con el fin de establecer la vulneración de nuestros derechos fundamentales, solicitamos se tengan en cuenta las siguientes pruebas:

1. Copia del derecho de petición radicado el 10 de agosto de 2021 en las instalaciones de la sede del Partido Fuerza Alternativa del Común –FARC-.

IX. ANEXOS

Anexo 1. Copia de la Resolución del 31 de octubre de 2017, mediante la cual el Consejo Nacional Electoral le reconoció la personería jurídica al partido.
Anexo 2. Copia de los Estatutos del partido.
Anexo 3. Copia de reporte de prensa Caracol Radio del 12 de agosto de 2021, mediante el cual el Consejo Político Nacional del partido Fuerza Alternativa del Común–FARC informa que no tienen previsto en los próximos meses realizar una Asamblea Nacional Extraordinaria, porque en el mes de enero de 2021 realizaron una asamblea.
Anexo 4. Copia de las diferentes investigaciones disciplinarias iniciadas por el partido en contra de los militantes, entre ellos, los senadores Victoria Sandino Simanca Herrera e Israel Alberto Zuñiga Iriarte.
Anexo 5. Copia de la decisión del partido de expulsar a Benedicto De Jesús González Montenegro el 12 de diciembre del 2020, impidiéndole ese día ingresar al séptimo pleno del Consejo Nacional de los Comunes.
Anexo 6. Copia del Comunicado Oficial mediante la cual el Consejo Nacional Electoral informa que existe resolución donde resolvió la impugnación y dejó sin efectos la decisión del partido de separar como militante del partido a Benedicto De Jesús González Montenegro.
Anexo 7. Copia de la solicitud presentada el 30 de octubre de 2020 por el partido Dignidad ante el Consejo Nacional Electoral para el reconocimiento de personería jurídica como nuevo partido político – partido DIGNIDAD.
Anexo 8. Copia de la Resolución No. 1291 del 21 de abril de 2021, “Por medio de la cual se DECIDE sobre el reconocimiento de personería jurídica solicitado por el partido político DIGNIDAD dentro del expediente con radicación número 11861-20”.
Anexo 9. Copia de la Aclaración de voto del Magistrado Luis Guillermo Pérez Casas, frente a la Resolución No. 1291 del 21 de abril de 2021.
Anexo 10. Auto 584 del 25 de agosto de 2021 mediante el cual la Corte Constitucional programó sesión técnica virtual para el día 13 de septiembre de 2021 a partir de las 8:00 a.m., para escuchar a cada parte convocada para que respondiera las preguntas que le fueron formuladas previamente dentro de cada eje temático.

X. NOTIFICACIONES

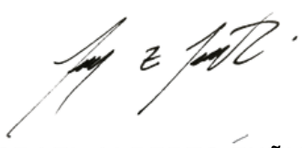
Accionantes

Para efectos de notificaciones, las recibiremos en los correos electrónicos israel.zuniga@senado.gov.co y victoriasandino.paz@gmail.com.

Atentamente,



VICTORIA SANDINO SIMANCA HERRERA
C.C. No. 26.212.730
Senadora de la República.



ISRAEL ALBERTO ZUÑIGA IRIARTE
C.C. No. 72.152.361 de Barranquilla
Senador de la República.

Accionado

El **Partido Comunes - Consejo Nacional de los Comunes** y los **111 miembros** que integran el Consejo Nacional, recibirán notificaciones en gestiondocumentalfarc@gmail.com.

Terceros con interés legítimo

El **CONSEJO NACIONAL ELECTORAL** recibirá notificaciones en la Avenida Calle 26 No. 51-50 Edificio Organización Electoral CAN de la ciudad de Bogotá. Tel. (601) 2200800 Ext. 1816. E-mail: cnenotificaciones@cne.gov.co.

Los señores **MILTON DE JESÚS TONCEL REDONDO, BENEDICTO DE JESÚS GONZÁLEZ MONTENEGRO, UBALDO ZUÑIGA IRIARTE, WILFRÁN MARTÍNEZ; LIDA ROSA ORTIZ, MARCOS MARTÍNEZ, JOSÉ MARBEL ZAMORA, MARINELLY HERNÁNDEZ OROZCO, Y FRANCISCO JAVIER TOLOZA**, recibirán notificaciones en todoporlapaz2017@gmail.com, josemzamorap0509@gmail.com albertocor010101@gmail.com y utlfarcatlantico@gmail.com.

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS JURISDICCIONALES
PARA LOS JUZGADOS CIVILES Y DE FAMILIA

Fecha : 15/Sept./2021

ACTA INDIVIDUAL DE REPARTO

Página 1

118 GRUPO ACCIONES DE TUTELA 57745

SECUENCIA: 57745 FECHA DE REPARTO: 15/09/2021 9:58:27a. m.

REPARTIDO AL DESPACHO:

JUZGADO 014 PEQ CAUSAS Y COMP MULT BOGOTA (118)

IDENTIFICACION:	NOMBRES:	APELLIDOS:	PARTE:
26212730	VICTORIA SANDINO SIMANCA HERRERA		01
TUT514643	TUT514643		01

OBSERVACIONES: CONTRA: PARTIDO FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMUN

CONTRAT4 FUNCIONARIO DE REPARTO **lpuentec** CONTRAT4

λπυεντεχ

v. 2.0 **ΜΦΤΣ**